

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento



TESIS DOCTORAL

**Diseño de un programa educativo y terapéutico de ocio y tiempo libre
para menores infractores**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

María Benita Moya Villaseñor

Directores

José Luis Graña Gómez, Natalia Redondo Rodríguez

Madrid, 2016

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

**DISEÑO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO Y
TERAPÉUTICO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA
MENORES INFRACTORES**



TESIS DOCTORAL

Autora:

María Benita Moya Villaseñor

Directores:

José Luis Graña Gómez

Natalia Redondo Rodríguez

Madrid, 2015

AGRADECIMIENTOS

A mis directores de tesis, por un lado, José Luis Graña, por haberme guiado, no sólo desde la elaboración del presente trabajo, sino desde que mi camino formativo y profesional tuvo que ver con la Psicología, habiendo sembrado en mí el interés y pasión por las ciencias forenses, gracias por tu amabilidad, generosidad a la hora de enseñar, buen carácter, apoyo, comprensión, y sobre todo, por haber confiado en mí.

Y por otro lado, agradecer al otro pilar de este trabajo, Natalia Redondo Rodríguez, por la implicación demostrada en la elaboración del mismo, por estar disponible siempre que te he necesitado, por tu paciencia, por haberme animado en la recta final de esta tesis y por haberme dedicado tanto de tu tiempo, sin duda, estoy en deuda contigo.

Por supuesto agradecer, a todos los menores y jóvenes infractores que han participado y colaborado en este trabajo, aunque manteniendo sus nombres en la sombra, ellos, aún sin quererlo, han hecho posible que parte de las ideas se hayan podido formalizar en un ámbito de intervención tan característico como es el ocio y tiempo libre.

Dentro de los C.E.M.J. se acumulan gran parte de mis agradecimientos, así como mi trayectoria profesional y personal de los últimos años. En primer lugar, dar las gracias a Juana Mateo, que puso en mis manos la oportunidad de emprender algo tan importante para mí, y como no, a todos los demás directores y subdirectores, Juan Nebreda, Alejandro Muñoz, Alejandro Reina, María Migallón y Sabina Palomo, por todo lo que me habéis enseñado, por haber confiado en mí desde el inicio, por vuestras continuas enseñanzas tanto profesionales, como personales y sobre todo por vuestro apoyo en momentos duros. A Mercedes, José y Susana, gracias por todo, por vuestro esfuerzo personal y profesional en el estudio, por acompañarme y, por vuestro apoyo y amistad. A todos mis compañeros de trabajo, en especial a Luis, Elena y Lorena que de alguna manera han colaborado en el proyecto, gracias por vuestra paciencia y comprensión.

Por supuesto, mi más profundo agradecimiento a mi familia, hermanas, sobrinos y en especial, a la memoria de mi padre, el cual me inculcó su humildad y respeto por los demás, y a mi madre, por su fuerza, por motivarme a crecer, por su cuidado y, por todo. Espero poder y saber compensaros. A mis amigos, porque a pesar de mis ausencias continúan estando ahí.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PARTE TEÓRICA

Capítulo I: Desarrollo histórico del concepto de menor infractor y sistema

penal.....39

1.1. Introducción41

1.2. Criterio de discernimiento.....41

1.3. La reforma correccional.....44

1.4. Modelo garantista48

1.5. Evolución del concepto penal de menor infractor en el derecho español.....50

1.6. Resumen.....63

Capítulo II: El enjuiciamiento de menores y jóvenes infractores.....67

2.1. Introducción69

2.2. La Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.....72

2.2.1. Exposición de Motivos de la LORPM.....72

2.2.2. Principales normas reguladoras de la intervención penal respecto a menores y jóvenes infractores.....74

2.2.2.1. Límites de edad para la responsabilidad penal y el enjuiciamiento según la LORPM. Consideraciones forenses75

2.2.2.2. Proceso penal de menores en España. Principios y singularidades de la LORPM.82

2.2.2.2.1. El interés superior del menor82

2.2.2.2.2. Un modelo mixto: Naturaleza formalmente penal, pero materialmente sancionadora educativa83

2.2.2.2.3. Reconocimiento expreso de todas las garantías judiciales85

2.2.2.2.4. Diferenciación de diversos tramos a efectos procesales y sancionadores. La instrucción como competencia del Ministerio Fiscal87

2.2.2.2.5. Principio de flexibilidad: en cuanto a adopción ejecución de las medidas aconsejadas por las circunstancias del caso concreto	88
2.2.2.2.6. Principio de oportunidad.....	89
2.2.2.2.7. Principio de proporcionalidad	89
2.2.2.2.8. Principio de intervención mínima	90
2.2.2.2.9. Participación de la víctima.....	90
2.2.3. Procedimiento para determinar la responsabilidad penal de los menores en España, de acuerdo con la LORPM.....	91
2.2.3.1. Esquema abreviado sobre el proceso de enjuiciamiento penal a menores	94
2.2.3.2. Evaluación psicosocial del menor	95
2.2.4. Medidas judiciales aplicables según a LORPM	96
2.2.4.1. Programa/ Modelo individualizado de ejecución de medida judicial	97
2.2.4.2. Medidas aplicables según la LORPM.....	99
2.2.4.3. Duración de las medidas	103
2.3. Derecho Comparado Europeo en materia de enjuiciamiento de menores y jóvenes infractores	106
2.3.1. Alemania.....	106
2.3.2. Austria.....	108
2.3.3. Bélgica	109
2.3.4. Dinamarca	111
2.3.5. Escocia	112
2.3.6. Francia.....	114
2.3.7. Inglaterra.....	116
2.3.8. Italia.....	120
2.4. Resumen	121

Capítulo III: Análisis conceptual y epidemiológico en materia de menores

infractores	125
3.1. Delimitación y características del concepto de menor infractor	127
3.2. Indicadores sobre justicia de menores infractores en España	130
3.2.1. Introducción.....	130
3.2.2. Prevalencia.	134
3.2.2.1. Datos publicados por la Fiscalía General del Estado en la Memoria de 2013.....	135
3.2.2.1.1. Diligencias Preliminares.....	135
3.2.2.1.2. Conciliación, reparación y actividad educativa extrajudicial.	136
3.2.2.1.3. Faltas.....	137
3.2.2.1.4. Medidas judiciales no privativas de libertad.....	137
3.2.2.1.5. Medidas judiciales privativas de libertad.....	139
3.2.2.1.6. Modificación de medidas por quebrantamiento.....	140
3.2.2.2. Datos del Instituto Nacional de Estadística.....	141
3.2.2.2.1. Menores condenados según sexo, edad y nacionalidad	141
3.2.2.2.2. Menores condenados por lugar de condena	142
3.2.2.2.3. Infracciones penales y su tipología	143
3.2.2.2.4. Medidas judiciales adoptadas.....	144
3.2.2.3. Datos de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducción y Reinserción del menor infractor	144
3.2.2.3.1. Reparaciones extrajudiciales y medidas judiciales ejecutadas	145
3.2.2.3.2. Distribución por género	146
3.2.2.3.3. Distribución por edad	147
3.2.2.3.4. Distribución por procedencia geográfica	148
3.2.2.4. Tipología de infracciones más frecuentes de los menores/jóvenes.....	150
3.2.2.4.1. Infracciones contra la propiedad	150

3.2.2.4.2. Infracciones relacionadas con las drogas.....	154
3.2.2.4.3. Infracciones de carácter violento.....	157
3.2.2.4.4. Infracciones de carácter sexual	161
3.2.3. Incidencia y estabilidad.....	164
3.3. Estadística Internacional de Menores Infractores.....	166
3.3.1. Inglaterra y Gales.....	166
3.4. Resumen.....	167
Capítulo IV: Evaluación del riesgo de reincidencia	171
4.1. Introducción	173
4.2. Teorías sobre la Conducta Delictiva.....	174
4.2.1. La Corriente Sociológica	175
4.2.2. Los Modelos derivados de la Psicopatología	176
4.2.3. Las Teorías del Aprendizaje Social	176
4.2.3.1. El Modelo del Desarrollo Social	177
4.2.3.2. El Modelo General Psicológico, Social y de Personalidad de la Conducta Criminal.....	181
4.3. Análisis de las trayectorias delictivas de los menores infractores.....	185
4.4. Predicción del riesgo de reincidencia	195
4.4.1. Evaluación del Riesgo realizada mediante Juicio Profesional o Clínico.....	196
4.4.2. Escalas de Riesgo Estáticas.....	196
4.4.3. Evaluación: Escalas de Riesgo/Necesidad	198
4.4.4. Integración de Gestión del caso con Evaluación del Riesgo.....	201
4.5. Capacidad predictiva de los Instrumentos para la valoración del Riesgo de Reincidencia.....	206
4.5.1. Inventario para la Gestión e Intervención con Jóvenes IGI-J	206
4.5.2. La Escala de Conducta Antisocial (PCL-YV).....	215
4.5.3. La escala de desarrollo antisocial. APSD	224

4.5.4. Análisis conjunto de las correlaciones entre las tres pruebas: IGI-J, PCL-YV y ASPD	227
4.6. Resumen.....	230
Capítulo V: El ocio y el tiempo libre como factor de riesgo.....	235
5.1. Introducción	237
5.2. Influencia de la adolescencia y ocio en la desviación social	239
5.3. Principales enfoques teóricos que se relacionan con variables relativas al ocio y la conducta delictiva	245
5.3.1. Las Teorías de la socialización.....	246
5.3.1.1. Las Teoría de la Asociación diferencial	246
5.3.1.2. Las Teoría del Aprendizaje Social	246
5.3.1.3. Las Teoría del Control Social	247
5.3.2. Las teorías de las Ocasiones u Oportunidades	248
5.3.3. La teoría de la Acción Situacional.....	249
5.4. Factores de riesgo asociados a la delincuencia	250
5.4.1. Factores de riesgo individuales	253
5.4.1.1. Impulsividad.....	253
5.4.1.2. Empatía	256
5.4.1.3. Autoestima y autoconcepto.....	257
5.4.1.4. Ansiedad y estados emocionales de valencia negativa.....	258
5.4.1.5. Agresividad	259
5.4.1.6. Búsqueda de sensaciones	260
5.4.1.7. Distorsiones cognitivas	261
5.4.1.8. Escasos recursos personales y pobre desarrollo moral.....	262
5.4.1.9. Consumo de sustancias tóxicas	264
5.4.2. Factores de riesgo relacionados con la socialización.....	269
5.4.2.1. Ámbito familiar desadaptativo	269

5.4.2.2. Pobre adherencia al contexto formativo reglado	272
5.4.2.3. Influencia del grupo de pares	273
5.4.2.3.1. Revisión teórica acerca de la relación entre el grupo de pares y conductas delictivas en el ocio	275
5.4.2.3.2. Grupo de iguales como modelo de comportamientos desadaptativos.....	277
5.4.2.3.3. Influencia del grupo de iguales en el consumo de drogas	278
5.4.2.3.4. Influencia del grupo de iguales en la comisión de conductas delictivas y/o violentas	279
5.4.2.4. Pertenencia a bandas urbanas de carácter violento	281
5.5. Desarrollo del ocio como factor de riesgo	284
5.6. Resumen.....	288
Capítulo VI: Programas y Modelos de tratamiento de tratamiento de Ocio y Tiempo Libre	291
6.1. Introducción	293
6.2. Teorías sobre el Tratamiento del comportamiento delictivo.....	294
6.2.1. Aprendizaje social y facetas del comportamiento delictivo.....	296
6.2.2. Modelo de Tratamiento: Riesgo-Necesidades-Responsividad.....	299
6.2.3. Modelo de Tratamiento: Vidas Satisfactorias (Ward, 2002)	303
6.2.4. Debate teórico y avales empíricos	305
6.3. Modelos de intervenciones educativas y terapéuticas en el ocio	306
6.3.1. Modelos de habilidad de ocio de Peterson y Gunn, 1984.....	306
6.3.2. Modelos de intervención educativa de Cuenca, 2004.....	309
6.4. Programas de tratamiento de ocio y tiempo libre.....	312
6.4.1. Programas de ocio alternativo en Estados Unidos.....	316
6.4.2. Programas de ocio alternativo en España	328
6.5. Programas educativos y terapéuticos para menores infractores.....	330
6.6. Programas de tratamiento en la Comunidad de Madrid	332

6.7. Resumen.....	335
CONCLUSIONES TEÓRICAS	339

PARTE EMPÍRICA

Capítulo VII: Objetivos e Hipótesis.....	349
---	------------

7.1. Objetivos	351
7.2. Hipótesis.....	352

Capítulo VIII: Método.....	353
-----------------------------------	------------

8.1. Diseño	355
8.2. Participantes	362
8.3. Instrumento de evaluación	363
8.4. Procedimiento.....	367
8.5. Evaluadores	367
8.6. Análisis estadístico	368

Capítulo IX: Resultados	369
--------------------------------------	------------

9.1. Análisis descriptivo de las características de la muestra en función de los datos obtenidos en el HCS-J.	371
9.1.1. Descripción de las características socio-demográficas	372
9.1.2. Descripción de las carreras delictivas.....	376
9.1.3. Descripción de las características familiares, escolares y del entorno.	382
9.1.4. Descripción del grupo de relación, ocio y tiempo libre	389
9.1.5. Descripción de las conductas de consumo de alcohol y drogas.....	394
9.1.6. Descripción de aspectos relacionados con la personalidad, conducta y creencias.....	396
9.2. Análisis de la reincidencia delictiva	398
9.2.1. Análisis de los diferentes tipos de reincidencia delictiva	400

9.2.2. Relación entre la reincidencia delictiva y variables sociodemográficas y delictivas	401
9.2.3. Relación entre el tipo de reincidencia delictiva y otras variables del HCS-J	404
9.2.4. Reincidencia delictiva general.....	408
9.2.5. Reincidencia delictiva violenta.....	415
9.3. Análisis de la reincidencia general y violencia en función del IGI-J	422
9.4. Análisis de regresión: predicción del ocio de riesgo en los menores infractores	426
9.4.1. Predicción del ocio de riesgo (Factor VI: Ocio/Diversión del IGI-J) en función de los factores de riesgo medidos con el IGI-J	426
9.4.2. Análisis de regresión: predicción del ocio de riesgo en función de los ítems que valoran el ocio en el HCS-J	428
9.4.3. Análisis de regresión: predicción del ocio de riesgo en función de los ítems que valoran Datos familiares y socioeconómicos en el HCS-J	432
9.4.4. Análisis de regresión: predicción del ocio de riesgo en función de los ítems que valoran Datos escolares y formativos en el HCS-J	435
9.4.5. Análisis de regresión: predicción del ocio de riesgo en función de los ítems que valoran Datos laborales en el HCS-J	438
9.4.6. Análisis de regresión: predicción del ocio de riesgo en función de los ítems que valoran Conductas adictivas en el HCS-J	439
9.4.7. Análisis de regresión: predicción del ocio de riesgo en función de los ítems que valoran Personalidad y conducta en el HCS-J	440
Capítulo X. Discusión	443
10.1 Introducción.....	445
10.2. Características sociodemográficas, delictivas y clínicas de los menores infractores	445

10.3. Análisis de la relación entre las variables sociodemográficas, delictivas y clínicas en la reincidencia delictiva general, reincidencia delictiva, reincidencia violenta y no reincidencia	458
10.3.1. Análisis de la relación entre variables sociodemográficas, delictivas y clínica en la reincidencia delictiva general, reincidencia delictiva y no reincidencia	458
10.3.2. Análisis de la relación entre variables sociodemográficas, delictivas y clínica en la reincidencia violenta	463
10.3.3. Análisis de la reincidencia delictiva general y violenta en función del IGI-J	467
10.4. Variables sociodemográficas, delictivas y clínicas predictoras del ocio de riesgo	469
10.5. Limitaciones del estudio y líneas futuras de investigación.....	476
Capítulo XI. Conclusiones.....	479
Referencias bibliográficas	493
Anexos.....	555

ÍNDICE DE TABLAS

Capítulo II: El enjuiciamiento de menores y jóvenes en España

Tabla 2.1. Resumen de la jurisdicción, mayoría de edad y medidas aplicadas de los menores infractores y medidas aplicadas.....	78
--	----

Tabla 2.2. Reglas especiales para la aplicación de las medidas a menores infractores	104
--	-----

Capítulo III: Análisis conceptual y epidemiológico en materia de menores infractores

Tabla 3.1. Menores condenados por CCAA según datos del INE (2014)	142
---	-----

Tabla 3.2. Infracciones penales cometidas por CCAA	143
--	-----

Tabla 3.3. Evolución sobre el número de menores con medidas judiciales (2007-2013) según la ARRMi	145
---	-----

Tabla 3.4. Evolución sobre el número medidas judiciales (2007-2013) según la ARRMi	145
--	-----

Tabla 3.5. Resumen datos 2013 de las medidas ejecutadas por la ARRMi	146
--	-----

Tabla 3.6. Distribución altas Medio Abierto + Internamiento por género según la ARRMi	147
---	-----

Tabla 3.7. Distribución altas Medio Abierto + Internamiento por edad según ARRMi	147
--	-----

Tabla 3.8. Distribución por edades en relación con el tipo de medida en el período 2009-2013	148
--	-----

Tabla 3.9. Distribución altas Medio Abierto + Internamiento por procedencia geográfica según la ARRMi	148
---	-----

Tabla 3.10. Evolución de la distribución del tipo de medida y procedencia geográfica	149
--	-----

Tabla 3.11. Jóvenes detenidos en España por robo con violencia e intimidación (2002-2006).....	150
--	-----

Tabla 3.12. Prevalencia de delitos contra la propiedad	151
--	-----

Tabla 3.13. Evolución de la tipología delictiva según ARRM en el período (2007-2013).....	163
---	-----

Capítulo IV: Evaluación del Riesgo de Reincidencia

Tabla 4.1. Estudios españoles de reincidencia juvenil y correlatos principales asociados a la reincidencia	187
Tabla 4.2. Porcentajes de menores con relación puntual con la justicia	192
Tabla 4.3. Meta-análisis de las evaluaciones clínicas y actuariales del riesgo de reincidencia en diferentes tipologías delictivas	198
Tabla 4.4. Ítems valorados por el SAVRY	200
Tabla 4.5. Áreas de Riesgo del IGI-J	209
Tabla 4.6. Los factores de la PCL:YV	216
Tabla 4.7. Escala de Desarrollo Antisocial (APSD)	224

Capítulo VI: Programas y modelos de tratamiento de Ocio y Tiempo Libre

Tabla 6.1. Principales perspectivas teóricas en las que se sustentan los tratamientos con menores infractores	295
---	-----

Capítulo VIII: Método

Tabla 8.1. Variable dependiente.....	355
Tabla 8.2. Variables empleadas en el análisis descriptivo.....	356
Tabla 8.3. Variables predictoras.....	360
Tabla 8.4. Características sociodemográficas de la muestra (N=428)	363
Tabla 8.5. Fiabilidad del IGI-J	367

Capítulo IX: Resultados

Tabla 9.1. C.E.M.J. y número de jóvenes evaluados en la muestra total	371
Tabla 9.2. Tipo de medida judicial en la actualidad.....	372
Tabla 9.3. Género de los participantes	373
Tabla 9.4. Edad de los participantes.....	373
Tabla 9.5. Procedencia geográfica de los menores	374

Tabla 9.6. Escolarización y situación laboral antes del inicio de la medida judicial	375
Tabla 9.7. Fecha en la que empieza a cumplir la medida judicial	376
Tabla 9.8. Duración del internamiento de las medidas impuestas al menor.....	377
Tabla 9.9. Composición familiar	383
Tabla 9.10. Tipo de familia.....	383
Tabla 9.11. Tipo específico de problemática familiar disfuncional.....	384
Tabla 9.12. Escolarización de los menores.....	385
Tabla 9.13. Nivel formativo de los menores.....	386
Tabla 9.14. Absentismo escolar	387
Tabla 9.15. Abandono escolar.....	387
Tabla 9.16. Repetición de curso.....	388
Tabla 9.17. Rendimiento escolar.....	389
Tabla 9.18. Características del grupo de iguales.....	390
Tabla 9.19. Papel del menor en su relación con los iguales	390
Tabla 9.20. Uso del ocio y tiempo libre.....	392
Tabla 9.21. Consumo de drogas alguna vez en la vida.....	394
Tabla 9.22. Consumo de drogas o alcohol durante los últimos 12 meses	395
Tabla 9.23. Evidencias de que el menor continúa consumiendo drogas.....	395
Tabla 9.24. Tratamiento previo al cumplimiento de la medida por consumo	396
Tabla 9.25. Presencia de conductas violentas en el último año	396
Tabla 9.26. Empleo de violencia en los hechos expedientados	397
Tabla 9.27. Características de personalidad auto-informadas	398
Tabla 9.28. Reincidencia y reiteración delictiva entre los grupos I+LV y LV	400
Tabla 9.29. Reincidencia delictiva y género.....	402
Tabla 9.30. Reincidencia delictiva y edad	402
Tabla 9.31. Reincidencia delictiva y tipos de medidas	403
Tabla 9.32. Reincidencia delictiva y tipo de familia.....	405

Tabla 9.33. Reincidencia delictiva y nivel socioeconómico.....	405
Tabla 9.34. Reincidencia delictiva y nivel cultural.....	406
Tabla 9.35. Reincidencia delictiva y consumo de alcohol y/o drogas alguna vez en la vida	407
Tabla 9.36. Reincidencia delictiva y consumo de alcohol y/o drogas durante los últimos 12 meses.....	407
Tabla 9.37. Reincidencia delictiva y grupos de referencia	408
Tabla 9.38. Reincidencia delictiva general y género.....	409
Tabla 9.39. Reincidencia delictiva general y grupos de edad	409
Tabla 9.40. Reincidencia delictiva general y tipos de medidas judiciales.....	410
Tabla 9.41. Reincidencia delictiva general y duración de las medidas	411
Tabla 9.42. Reincidencia delictiva general y tipo de familia.....	412
Tabla 9.43. Reincidencia delictiva general y nivel socioeconómico	412
Tabla 9.44. Reincidencia delictiva general y nivel cultural.....	413
Tabla 9.45. Reincidencia delictiva general y consumo de drogas /alcohol alguna vez en la vida	413
Tabla 9.46. Reincidencia delictiva general y consumo de drogas/alcohol en los últimos 12 meses	414
Tabla 9.47. Reincidencia delictiva general y grupos de referencia.....	414
Tabla 9.48. Reincidencia delictiva violenta y género.....	416
Tabla 9.49. Reincidencia delictiva violenta y grupos de edad.....	416
Tabla 9.50. Reincidencia delictiva violenta y tipo de medidas actuales	417
Tabla 9.51. Reincidencia delictiva violenta y tipo familia	418
Tabla 9.52. Reincidencia delictiva violenta y nivel socioeconómico	419
Tabla 9.53. Reincidencia delictiva violenta y nivel cultural.....	419
Tabla 9.54. Reincidencia delictiva violenta y consumo de alcohol/drogas alguna vez en la vida	420

Tabla 9.55. Reincidencia delictiva violenta y consumo de alcohol y drogas en los últimos meses	420
Tabla 9.56. Reincidencia delictiva violenta y grupos de referencia.....	421
Tabla 9.57. Correlaciones entre el IGI-J y la reincidencia general (n=218).....	422
Tabla 9.58. Diferencias entre reincidentes delictivos generales (n=218) y no reincidentes delictivos (n=210) en los factores del IGI-J.....	423
Tabla 9.59. Correlaciones entre cada factor del IGI-J y la reincidencia violenta	424
Tabla 9.60. Diferencias entre reincidentes delictivos violentos (n=52) y no reincidentes (n=210) en los factores del IGI-J.....	425
Tabla 9.61. Predicción del ocio de riesgo en función del resgo de Factores de riesgo medidos por el IGI-J	427
Tabla 9.62. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con el número de amigos y relaciones con amigos y familiares, del área Grupo de relación, ocio y tiempo libre del HCS-J	428
Tabla 9.63. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con las características del grupo de referencia, del área de Grupo de relación, ocio y tiempo libre del HCS-J.....	429
Tabla 9.64. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con el uso del ocio y tiempo libre anterior al cumplimiento de la medida judicial del área Grupo de relación, ocio y tiempo libre del HCS-J.....	430
Tabla 9.65. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con el uso del ocio y tiempo libre del área Grupo de relación, ocio y tiempo libre del HCS-J.....	432
Tabla 9.66. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con el tipo de composición familiar, del área Datos familiares y socio-económicos del HCS-J.....	433
Tabla 9.67. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con el tipo de familia disfuncional, del área Datos familiares y socioeconómicos del HCS-J.....	434

Tabla 9.68. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con el estilo educativo y el nivel cultural y socioeconómico, del área Datos familiares y socioeconómicos del HCS-J	435
Tabla 9.69. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con la escolarización del menor, del área Datos escolares/formativos del HCS-J	436
Tabla 9.70. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con el tipo de comportamientos disruptivos del menor en el contexto escolar, del área Datos escolares /formativos del HCS-J	437
Tabla 9.71. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con la situación laboral del menor, del área Datos laborales del HCS-J	438
Tabla 9.72. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con conductas adictivas del menor, del área Conductas adictivas y consumo de drogas/alcohol del HCS-J	439
Tabla 9.73. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con la personalidad y la conducta del menor, del área Personalidad/conducta del HCS-J.....	441

Capítulo X: Discusión

Tabla 10.1. Resumen de los análisis de relación entre las variables sociodemográficas, delictivas y clínica en la reincidencia delictiva general, y reincidencia delictiva y reincidencia violenta	466
Tabla 10.2. Resumen de los factores de riesgo para llevar a cabo un ocio de riesgo.....	470

Capítulo XI: Conclusiones

Tabla 11.1. Propuesta de un Programa Educativo y Terapéutico de Ocio y Tiempo Libre para menores infractores	489
--	-----

ÍNDICE DE FIGURAS

Capítulo IV: Evaluación del Riesgo de Reincidencia

Figura 4.1. Modelo de Desarrollo Social, adaptado de Catalano y Hawkins (1996)	179
Figura 4.2. Modelo General, Social y de Personalidad de la Conducta Criminal, adaptado de Andrews y Bonta (2006).....	184
Figura 4.3. Modelo de Andrews y Bonta	207

Capítulo VI: Programas y modelos de ocio y tiempo libre

Figura 6.1. Posibilidad y límites de tratamiento en la reducción del riesgo de reincidencia: factores estáticos, dinámicos y parcialmente modificables	303
--	-----

Capítulo IX: Resultados

Figura 9.1. Grupos resultantes de la combinación entre reincidencia delictiva y reiteración delictiva.....	399
--	-----

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 3.1. Evolución de Expedientes Incoados según F.G.E.	136
Gráfico 3.2. Evolución de diligencias registradas como faltas según F.G.E. (2014)	137
Gráfico 3.3. Evolución de las Medidas judiciales no privativas de libertad entre el período (2007-2013) según la F.G.E.....	138
Gráfico 3.4. Evolución de las Medidas judiciales privativas de libertad entre el período (2007-2013) según F.G.E.....	140
Gráfico 3.5. Evolución de los menores condenados (2007-2013)	141
Gráfico 3.6. Evolución de los delitos contra el patrimonio realizados por menores según F.G.E. (2008-2013).....	152
Gráfico 3.7. Evolución de los delitos contra el patrimonio según ARRM (2014)	154
Gráfico 3.8. Evolución de los delitos contra la salud pública según F.G.E. (2007-2013)	156

Capítulo IX: Resultados

Gráfico 9.1. Delitos cometidos en la actualidad en el grupo I+LV	378
Gráfico 9.2. Delitos cometidos en la actualidad en el grupo LV	378
Gráfico 9.3. Delitos cometidos en el pasado en el grupo I+LV	379
Gráfico 9.4. Delitos cometidos en la actualidad en el grupo I+LV	379
Gráfico 9.5. Distribución de las medidas en la actualidad en el grupo LV	380
Gráfico 9.6. Distribución de todas las medidas que se cumplen en la actualidad en el grupo LV	381
Gráfico 9.7. Distribución de las medidas en el pasado en el grupo I+LV	381
Gráfico 9.8. Distribución de las medidas en el pasado en el grupo LV	382
Gráfico 9.9. Diferencias en el IGI-J para los reincidentes delictivos generales	424
Gráfico 9.10. Diferencias en el IGI-J para los reincidentes violentos.....	426

SYNOPSIS

The aim of this doctoral thesis is to make a descriptive analysis of the main defining characteristics of juveniles involved in criminal acts, analyzing sociodemographic, criminal and clinical variables to determine the extent to which these variables are related to general recidivism (composed of relapse and recurrence, no relapse and recurrence, relapse and no recurrence and no relapse and no recurrence), recidivism (characterized by relapse and recurrence, no relapse and recurrence and relapse and no recurrence), no relapse and recidivism violent. For the avoidance mode, recidivism as the presence of one or more crimes for which a minor is serving as at present, and legal action pending criminal acts that have occurred either simultaneously or after the beginning of the defined as court meets at the time of evaluation. On the other hand, the repetition relates to the previous criminal record of the child, established on the basis of past commission of one or more offenses for which the child has already served a judicial measure. Furthermore, this doctoral thesis provides a risk model based on the predictive value of each of the variables considered in the leisure risk of the child, to establish the lines of action of a program of Leisure and Recreation that fits to the reality of young offenders.

To do this, first, the present study has contextualized the legal framework, performing a historical journey from the first Criminal Code of 1922, the Criminal Codes of 1948 and 1970, and the Organic Law of the Judiciary of 1985, where the Guardianship Courts became juvenile Courts, until it was approved the Organic Law regulating the jurisdiction and procedure of the juvenile courts in 1992. Thus, successive reforms of this Organic Law are analyzed, leading to the known Law of Criminal Responsibility of Minors of 5/2000, and its fundamental principle act in the best interests of the child, deriving from a mixed model, formally criminal nature, but materially sanctioning educational, returning to be reformed by Organic Law 8/2006, which involved hardening penal treatment of minors.

Then the leisure time is analyzed as a risk factor for criminal behavior, stating the main personal risk factors and socialization. Also, in order for intervention in leisure time, different models and intervention programs with minors present. Although his speech is primary prevention and although the high risk population in which they have applied, doesn't belong to the juvenile justice system, there are no studies to support their effectiveness.

The sample of this study consists of 428 minors/young people who have served both a judicial provisional placement, as a firm in different centers enforcement of measures of Madrid; Renasco, strawberry, Altamira, El Pinar, El Pinar II, The Laurel, Puerta Bonita, Los Robles and Mother Teresa and measures in an open environment in the various resources ARRFMI during 2010 and 2011. It has been a descriptive analysis of the main characteristics sociodemographic, criminal and clinical, and the same relationship with recidivism, as well as present risk model based on the predictive value of the variables considered in risk leisure the child, because the aim is establish the lines of an educational intervention and treatment program of leisure and recreation for young offenders. Analyses in the empirical part of this work have been performed according to two groups, on one hand, a group has been characterized by the measures of internment (Interment & Probation, onwards, I&P), and on the other, measures in an open environment Probation. So, in terms of socio-demographic, criminal and clinical features include first that 82% of children were fulfilling firm sentence. In relation to gender, 83.3% of the sample were male, compared with 11.7% of women. Participants have an average age of 16.8 years, with 54.4% of Spanish nationality, followed by Latin America accounting for 29% of the sample.

Considering the educational level, 47.9% of children were not in school at the beginning of the judicial measure, being the majority of children in the first stage of compulsory secondary education, more than half of the sample had frequent truancy a school performance between low and very low, 63.3% have repeated course and school drop of 47.4% in the total sample, and 63.3% of those over 16 years, also had entering the workforce.

As criminal variables, the most common duration thereof is 0 to 6 months. Heeding to the crimes of both groups is more frequent involvement in these crimes heritage, with and without violence. On the other hand, the judicial measures imposed on minors (I&P) It was the semi-open regime, with 43.8%, followed by Probation with 21.9% and closed system with 18.5%. Thus, Probation juveniles serving the predominant measure was the same Probation 92% and Services on behalf of the Community 4.3%.

Most of the participants come from nuclear and single-parent families, and dysfunctional family type character, the most common global problems, relationship problems, economic factors, rising violence, substance abuse and crime. Regarding the peer group, most maintains a dissociable relationship group. As for leisure time, all the minor uses

being on the street, parks and squares or be in street drinking or smoking. Thus, in relation to substance, virtually the entire sample reports alcohol and drugs at least once in your life and in terms of frequency and continuity of consumption group consumed internment during the past 12 months 26.1%, compared to 6.5% of Probation. Similarly, almost the entire sample claims to have issued violent behavior. On the other hand, referring to the personality characteristics, it highlights global insensitivity, followed by frequent manipulation of others, emotional simulation and difficulty in getting over the other.

Then recidivism was studied, considering the general criminal recidivism, recidivism and non-recidivism and violent recidivism: the results indicate that there are statistically significant differences in the following variables: gender, age, type of measure, family socioeconomic status, frequent consumption of drugs in the last 12 months and antisocial peer group of reference.

In the analysis of general recidivism, the highest correlations between factors were among: Criminal History ($r=.45$; $p<0.001$), peer group ($r=.30$; $p<0.001$), Substance ($r=.25$; $p<0.001$) and attitudes / beliefs ($r=.24$; $p<.01$). Also, when analyzing violent recidivism it is obtained that the highest correlations were criminal history ($r=.39$; $p<0.001$), peer group ($r=.25$; $p<0.001$) and drug use ($r=.22$; $p<0.001$), coinciding with other empirical studies (Andrews & Bonta, 2006; Graña, et al, 2007, Flores, et al, 2004). Thus, in the Factor Entertainment / Fun in the analysis of general and violent recidivism, a correlation ($r=.20$, $p<0.001$) and ($r=.11$; $p<0.001$), respectively, coinciding with other research, Crow, Andrew, Gorriz, Villanueva, Carrion and Busquets (2009).

Finally, regarding the regression analyzes performed in order to detect the best predictors Leisure risk, the results indicate that the risk factors listed in the IGI-J that best predict that leisure are: educational guidelines, consumption substances formal education / employment, peer group and attitudes / beliefs, explaining the model 44% of the variability risk leisure.

Furthermore, the predictive model that refers to the social sphere, is characterized by the "poor relationship with parents" variable explaining 2% of the variability risk leisure. While in the predictive model referred to the characteristics of the peer group reference is made by the "peer group is little standardized", "groups of Conduct relationship," "violent

groups", "groups older "and" social isolation ", reaching 24% of the variability risk leisure. In the area of the use of leisure time, "being in the street, square or park drinking alcohol or smoking dope" was the only variable included in the predictive model. In contrast to its "current leisure match the pre-judicial measure" and that "drug use is accompanied by his group relationship," obtain a predictive value of 10% of the variability risk leisure.

Considering the family, a 'limited presence in the shortest of his nuclear family "is the only variable that formed the model related to the area of family composition, with a predictive capacity of 1% of the variability risk leisure. On the other hand, the predictive model referred to the family dysfunction is composed of the following variables: "dysfunctional family by economic factors", "criminal dysfunctional" "dysfunctional by rising violence," "dysfunctional physical abuse from parents to children", explaining together 10% of the variability risk leisure. While an "educational style of inadequate mother" and a "low family socioeconomic status," obtain a predictive value of 11% leisure risk.

Regarding the educational level, the presence of truancy and poor school performance, have proved to be important predictors of overall risk leisure, explaining the variability of the same at 26%. Similarly, the fact that the minor trends to leave a job voluntarily, get a predictive value of 15% of the variability of the entertainment.

As for drug use, the predictive model was formed by prior treatment for substance abuse. While the predictive model that refers to the disruptive behavior of the child, is characterized by fights with peers and lack of respect for authority figures, accounting for 9% of the variability risk leisure. Also, in terms of personality and maladaptive behavior, the model was formed by use of violent behavior in the offenses, the presence of manipulation of others and insensitivity, with a predictive value of 16% of the variability risk leisure.

Programme Leisure and Recreation for juvenile offenders, has been developed taking into account the results presented in this doctoral thesis on the descriptive characteristics of minors, the variables mostly related to the different types of recidivism and the variables which have proved to have greater predictability of risk leisure, having conducted a pilot study of the same from 2011 to the present in young offenders of both sexes, with measures of internment in semi closed, closed and therapeutic regimen for

consumption substance, at the Centers for enforcement of measures Lavadero and Laurel, being of utmost importance for future research to analyze the performance and effectiveness.

RESUMEN

El objetivo de la presente tesis doctoral consiste en realizar un análisis descriptivo de las principales características definitorias de los menores implicados en actos delictivos, analizando variables sociodemográficas, delictivas y clínicas, para determinar el grado en que dichas variables están relacionadas con la reincidencia delictiva general (compuesta por reincidencia y reiteración, no reincidencia y reiteración, reincidencia y no reiteración y no reincidencia y no reiteración), la reincidencia delictiva (caracterizada por reincidencia y reiteración, no reincidencia y reiteración y reincidencia y no reiteración), no reincidencia y la reincidencia violenta. A modo aclaratorio, se define la reincidencia como la presencia de uno o más delitos por lo que un menor está cumpliendo medida en la actualidad, así como medidas judiciales pendientes por hechos delictivos que han ocurrido o bien de forma simultánea o posteriormente al inicio de la medida judicial que cumple al momento de la evaluación. Por otro lado, la reiteración se refiere al historial delictivo previo del menor, estableciéndose en función de la comisión pasada de uno o más delitos por los que el menor ya ha cumplido alguna medida judicial. Además, con la presente tesis doctoral se presenta un modelo de riesgo en función del valor predictivo de cada una de las variables contempladas en el ocio de riesgo del menor, para establecer las líneas de intervención de un Programa de Ocio y Tiempo Libre que se ajuste a la realidad de los menores infractores.

Para ello, en primer lugar, en el presente estudio se ha contextualizado el marco legal, realizándose un recorrido histórico desde el primer Código Penal de 1922, los Códigos Penales de 1948 y 1970, así como la Ley Orgánica de Poder Judicial de 1985 por la que los Tribunales Tutelares pasaron a ser Juzgados de Menores, hasta que fue aprobada la Ley Orgánica Reguladora de la competencia y el Procedimiento de los Juzgados de menores en 1992. Así, se analizan las sucesivas reformas de dicha Ley Orgánica, llegando a la conocida L.O.R.P.M. de 5/2000, siendo su principio fundamental actuar por el superior interés del menor, derivándose de un modelo mixto, de naturaleza formalmente penal, pero materialmente sancionadora educativa, volviendo a ser reformada por la Ley Orgánica 8/2006, que implicó el endurecimiento del tratamiento penal de menores.

A continuación, se analiza el ocio y tiempo libre como factor de riesgo de la conducta delictiva, exponiendo los principales factores de riesgo personales y de socialización. Así mismo, de cara a la intervención en ocio y tiempo libre, se presentan distintos modelos y programas de intervención con menores. Aunque su intervención es una prevención primaria

y la población en la que se han aplicado, aunque es de alto riesgo, no pertenece al sistema de justicia juvenil, no existiendo estudios que avalen su eficacia.

La muestra del presente estudio está compuesta por 428 menores/jóvenes que han cumplido una medida judicial de internamiento tanto cautelar, como firme en los diferentes Centros de Ejecución de Medidas Judiciales de Madrid; Renasco, el Madroño, Altamira, El Pinar, El Pinar II, El Laurel, Puerta Bonita, Los Robles y Teresa de Calcuta, así como medidas en medio abierto en los diversos recursos del ARRMJ durante los años 2010 y 2011. Se ha realizado un análisis descriptivo de las principales características sociodemográficas, delictivas y clínicas, y la relación de las mismas con la reincidencia, así como presentar un modelo de riesgo en función del valor predictivo de cada una de las variables contempladas en el ocio de riesgo del menor, debido a que el objetivo de la presente tesis doctoral es establecer las líneas de intervención de un programa educativo y terapéutico de ocio y tiempo libre. Así, los análisis efectuados en la parte empírica del presente trabajo, se han realizado atendiendo a dos grupos, por un lado, un grupo se ha caracterizado por las medidas de internamiento (I+L.V.), y por otro, las medidas en medio abierto (L.V.). Así, en cuanto a las características sociodemográficas, delictivas y clínicas cabe destacar en primer lugar que el 82% de los menores estaban cumpliendo sentencia firme. En relación al género, el 83,3% de la muestra eran varones, frente al 11,7% de mujeres. Los participantes tienen una edad media de 16,8 años, siendo el 54,4% de nacionalidad española, seguida de la latinoamericana que representa el 29% de la muestra.

Atendiendo al ámbito formativo, el 47,9% de los menores no estaban escolarizados al inicio de la medida judicial, encontrándose la mayoría de los menores en la primera etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, más de la mitad de la muestra presentaba absentismo escolar frecuente, un rendimiento escolar entre bajo y muy bajo, un 63,3% ha repetido curso y un abandono escolar del 47,4% en el total de la muestra, y un 63,3% de los mayores de 16 años, tampoco se había incorporado al mundo laboral.

En cuanto a las variables delictivas, la duración más frecuente de las mismas es de 0 a 6 meses. Atendiendo a los delitos de ambos grupos, es más frecuente en ellos delitos de afectación del patrimonio, con y sin violencia. Por otro lado, las medidas judiciales impuestas a los menores de I+L.V. era el régimen semiabierto, con un 43,8% seguido de los de L.V. con un 21,9% y régimen cerrado con un 18,5%. Así, en los menores que cumplían L.V., la medida

predominante era la misma L.V. en un 92% y Prestaciones en Beneficio de la Comunidad con un 4,3%.

La mayor parte de los participantes provienen de familias nucleares y monoparentales, y el tipo de familia de carácter disfuncional, siendo la problemática más frecuente a nivel global, los problemas relacionales, factores económicos, violencia ascendente, consumo de sustancias y delincuencia. En lo que respecta al grupo de iguales, la mayoría mantiene un grupo disocial. En cuanto al ocio y tiempo libre, el conjunto de los menores lo usa estando en la calle, plazas o parques y estar en calle bebiendo o fumando. De esta manera, en relación al consumo de sustancias, prácticamente la totalidad de la muestra afirma haber consumido alcohol y drogas alguna vez en su vida y en cuanto a la frecuencia y continuidad del consumo, el grupo de internamiento ha consumido durante los últimos 12 meses en un 26,1%, frente al 6,5% de los de L.V. De igual manera, casi la totalidad de la muestra afirma haber emitido conductas violentas. Por otro lado, haciendo alusión a las características de personalidad, destaca a nivel global la insensibilidad, seguida de manipulación frecuente de los otros, simulación emocional y dificultad en ponerse en lugar del otro.

A continuación, se estudió la reincidencia, atendiendo a la reincidencia delictiva general, reincidencia delictiva y no reincidencia, así como la reincidencia violenta: los resultados indican que existen diferencias estadísticamente significativas en las siguientes variables: el género, la edad, el tipo de medida, nivel socioeconómico familiar, consumo de drogas frecuente en los últimos 12 meses y grupo de iguales de referencia disocial.

En el análisis de la reincidencia delictiva general, las correlaciones más elevadas entre los factores se dieron entre: Historial Delictivo ($r=.45$; $p<0,001$), Grupo de iguales ($r=.30$; $p<0,001$), Consumo de sustancias ($r=.25$; $p<0,001$) y Actitudes/Creencias ($r=.24$; $p<01$). Así mismo, al analizar la reincidencia violenta se obtiene que las correlaciones más elevadas fueron Historial Delictivo ($r=.39$; $p<0,001$), Grupo de iguales ($r=.25$; $p<0,001$) y Consumo de drogas ($r=.22$; $p<0,001$), coincidiendo con otros trabajos empíricos (Andrews y Bonta, 2006; Graña, et. al., 2007, Flores, et. al., 2004). Así, en el Factor Ocio/Diversión, en el análisis de la reincidencia delictiva general y violenta, una correlación ($r=.20$, $p<0,001$) y ($r=.11$; $p<0,001$), respectivamente, coincidiendo también con otras investigaciones, Cuervo, Andrés, Gorriz, Villanueva, Carrión y Busquets (2009).

Por último, en cuanto a los análisis de regresión efectuados con el objetivo de detectar los mejores pronosticadores del ocio de riesgo, los resultados señalan que los factores de

riesgo contemplados en el IGI-J que mejor predicen dicho ocio son: pautas educativas, consumo de sustancias, educación formal/empleo, grupo de iguales y actitudes/creencias, explicando el modelo un 44% de la variabilidad del ocio de riesgo.

Por otro lado, el modelo predictivo que hace referencia al ámbito social, se caracteriza por la “mala relación con los padres”, variable que explica el 2% de la variabilidad del ocio de riesgo. Si bien, en cuanto al modelo predictivo que hace referencia a las características del grupo de iguales de referencia, está conformado por que el “grupo de iguales sea poco normalizado”, “grupos de relación disocial”, “grupos violentos”, “grupos de mayor edad” y “el aislamiento social”, alcanzando un 24% de la variabilidad del ocio de riesgo. En cuanto al área del uso del ocio y tiempo libre, “estar en la calle, plaza o parque haciendo botellón o fumando porros”, fue la única variable incluida en el modelo predictivo. En cambio que su “ocio actual coincida con el anterior a la medida judicial”, así como que “el consumo de drogas sea acompañado de su grupo de relación”, obtienen un valor predictivo del 10% de la variabilidad del ocio de riesgo.

Atendiendo al ámbito familiar, una “escasa presencia en el menor de su familia nuclear”, es la única variable que conformó el modelo referente al área de composición familiar, con una capacidad predictiva del 1% de la variabilidad del ocio de riesgo. Por otro lado, el modelo predictivo que hace referencia a la disfuncionalidad familiar se compuso de las siguientes variables: “familia disfuncional por factores económicos”, “disfuncional delincuencia”, “disfuncional por violencia ascendente”, “disfuncional por maltrato físico de los padres a los hijos”, explicando en conjunto un 10% de la variabilidad del ocio de riesgo. Si bien, un “estilo educativo de la madre inadecuado” y un “nivel socioeconómico familiar bajo”, obtienen un valor predictivo del 11% del ocio de riesgo.

En relación al ámbito formativo, la presencia de absentismo escolar y un rendimiento escolar bajo, han resultado ser en conjunto importantes predictores del ocio de riesgo, explicando la variabilidad del mismo en un 26%. Del mismo modo, que el menor presente tendencia a abandonar voluntariamente un trabajo, obtiene un valor predictivo del 15% de la variabilidad de dicho ocio.

En cuanto al consumo de drogas, el modelo predictivo se conformó por la existencia de tratamiento previo por consumo de sustancias tóxicas. Mientras que el modelo predictivo que hace referencia a los comportamientos disruptivos del menor, está caracterizado por peleas con los iguales y faltas de respeto a las figuras de autoridad, explicando el 9% de la

variabilidad del ocio de riesgo. Así mismo, en cuanto a la personalidad y conducta desadaptada, el modelo quedó conformado por empleo de conducta violenta en los delitos, presencia de manipulación de los otros e insensibilidad, con un valor predictivo del 16% de la variabilidad del ocio de riesgo.

El Programa de Ocio y Tiempo Libre para menores infractores, se ha elaborado teniendo en cuenta los resultados que se exponen en la presente tesis doctoral sobre las características descriptivas de los menores, las variables mayormente relacionadas con los diferentes tipos de reincidencia, así como las variables que han resultado tener una mayor capacidad de predicción del ocio de riesgo, habiéndose llevado a cabo un estudio piloto del mismo desde el año 2011 hasta la actualidad en menores infractores de ambos sexos, con medidas de internamiento en régimen semiabierto, cerrado y terapéutico por consumo de sustancias, en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales El Lavadero y El Laurel, siendo de máxima relevancia de cara a futuras investigaciones poder analizar el funcionamiento y la eficacia del mismo.

PARTE TEÓRICA

Capítulo I:

Desarrollo histórico del

concepto de menor

infractor y sistema penal

1.1. Introducción

Realizando un recorrido por la historia acerca del concepto jurídico del menor, en especial, por lo que hace a su conducta infractora, se destacan tres momentos, más o menos generales de especial importancia: a) la valoración de la responsabilidad del menor y la atenuación de la pena, según la idea del *discernimiento*; b) la reforma correccional, con la separación del menor del derecho penal según el modelo tutelar y; c) el auge del modelo garantista, como respuesta a las inconsistencias jurídicas y arbitrariedades cometidas por instituciones tutelares, el cual pretende, sin regresar al menor a la jurisdicción penal, recuperarle ciertos derechos que le habían sido denegados (Cruz, 2010).

Si bien, cada uno de los modelos han mostrado deficiencias en su aplicación práctica; ya que en justicia especializada para menores, se ha perseguido crear un esquema que permitiera un trato más humanitario, justo o simplemente más adecuado para los menores; como reflejo de la misma humanización que se exige del Derecho de adultos. Como señala Martínez (1989), la historia ha puesto de manifiesto que siempre bajo o junto a los esfuerzos por humanizar la justicia del menor, se encuentra un intento de racionalizar la sociedad de los adultos y, por ello, se exige una acción correspondiente para con los menores.

1.2. Criterio de discernimiento

Si el menor distinguía lo justo de lo injusto, sufría una pena correccional, atenuada; la prisión no excedería de 20 años; en caso negativo, eran devueltos a sus padres o tutores, o destinados a casas de corrección. No obstante, se ha señalado el retroceso de no haber establecido una edad mínima de inimputabilidad absoluta (Viñas, 1983).

Así, la inimputabilidad absoluta en la infancia, donde se considera al menor carente de toda maldad, nace de las ideas de la escuela llamada clásica. De este modo, las medidas adoptadas eran de carácter preventivo-correctivo, asumiendo gran relevancia la figura del discernimiento. Si este faltaba, se absolvía; estando presente, se atenuaban las penas. El fundamento de tales absoluciones o atenuaciones en razón del discernimiento, se basaba en un principio de la ciencia moral; se responde en la medida que se distinga el bien y del mal, pero también en otro principio de ciencia biológica: el entendimiento sólo llega de manera gradual con el desarrollo del menor (Viñas, 1983).

De este modo, la escuela clásica, elaboró una doctrina penal con base en los principios del libre albedrío y de la imputabilidad moral del hombre, mencionaba a la edad como la primera causa que perturba la inteligencia e influye sobre la imputación. Como criterio exclusivamente jurídico, la divide en cuatro períodos para efectos penales, a saber: 1) período de irresponsabilidad absoluta; 2) de responsabilidad condicional; 3) de responsabilidad plena; 4) de responsabilidad modificable en sus resultados (Cruz, 2010).

El primer período comprende la infancia, desde el nacimiento hasta los siete años; y la impubertad próxima a la infancia, que va de los siete a los doce años. En esta etapa, se presume *juris et de jure* que el sujeto carece de discernimiento, y por tanto, es inimputable (Cruz, 2010).

El segundo período, que corresponde a la responsabilidad condicional o menos plena, comprende dos fases: de los doce a los catorce años o la impubertad próxima a la minoridad; y la minoridad propiamente, de los catorce a los dieciocho años cumplidos. En este período, la capacidad se presume *juris tantum*, por lo que el agente es sometido a juicio, para determinar si obró con discernimiento o sin él. Si no se acredita el discernimiento, se le absuelve; en caso positivo, se le condena, aunque con menor intensidad que al adulto (Cruz, 2010).

Esta doctrina basa todo el problema de la delincuencia juvenil en el análisis del discernimiento. Si éste falta, por presunción irrefragable de la ley (primer período) o por haberse demostrado así en el juicio (segundo período), el agente queda al margen del Derecho penal, no sólo en el sentido de que se lo exime de pena, sino en cuanto el poder público se desentiende de él, porque excluida la pretensión punitiva cesa la función del juez a su respecto. Probado, correlativamente, el discernimiento, se aplica una pena, aunque de menor intensidad o grado (Fontán, 1980).

En importantes discusiones doctrinales, trató de dilucidarse el significado del discernimiento, concepto que se aborda sólo por interés histórico, en función de haber sido superado actualmente. Al respecto, Solís (1986), apunta que la Escuela Clásica tomó como base de sus criterios punitivos la existencia del libre albedrío y de la responsabilidad moral, siempre de origen teológico, tomando como meollo de la conducta el sentido, que consideraba universal e innato en la especie humana, de lo que es justo, bueno, honesto y lícito. A veces tomaba como producto intelectual y a veces como producto del sentimiento el discernimiento, que suponía existía en todo ser humano adulto, y que podía ser alcanzado por los menores como lo demuestra la investigación que se hacía de él en ciertas edades infantiles o juveniles.

Se afirmaba, pues, que existía el discernimiento y que, como consecuencia natural, el individuo estaba obligado a hacer el bien, a dirigir su conducta indefectiblemente a lo lícito. Si en cualquier caso, obrar ilícitamente, con mala intención o dolo, demostraba que había actuado así voluntariamente, por su propia decisión, y por tanto, debía ser castigado.

No puede considerarse que hayan existido uniformidad de criterios respecto al discernimiento; en el aspecto del derecho positivo, numerosos países equipararon al menor con el adulto, siendo severos con él; en contraparte, otros Estados prefirieron distinguir al menor con base en argumentos lógicos o en razones piadosas, eximiéndolo de la pena o aplicándola atenuada (Cruz, 2010).

Con mayor concreción, a principios del S.XX, existía cierta controversia en la literatura especializada en relación al criterio de discernimiento. Si bien, existían dos corrientes que hacían alusión con distinto enfoque a dicho criterio, por un lado, el discernimiento era la inteligencia del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto; mientras que por otro lado, era la facultad de comprender la ilegalidad del hecho. De esta manera, la concepción del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, se declararía como superficial, pues es producto de factores en proceso de formación tales como la inteligencia, a la que faltan todavía el juicio, la reflexión; y la educación, a la que faltan, después de cada error, los reproches familiares, la actitud de la policía y los magistrados, y que hay necesidad de conocer el medio en que el niño ha ido creciendo (Solís, 1986).

El criterio se va orientando más a lo jurídico que a lo moral. Así, sobre esta diversidad de conceptualizaciones del discernimiento, Solís (1986), afirma que es impresionante ver cómo, en un asunto de tal seriedad, como es la imposición de penas que afectarán la vida entera de los menores de edad y de su familia, los autores han discrepado tanto en lo que pueda entenderse por discernimiento, base estimada como esencial y previa para definir su aplicación. Y agrega el carácter positivo de haber abandonado el criterio del discernimiento, en virtud que debe considerarse que, si para los jueces en especial, y los adultos en general, es difícil discernir si un acto en determinadas circunstancias reales es lícito o conveniente, no se tiene el derecho de imponer al niño o al adolescente la “simple” obligación de haber discernido, antes de obrar, sobre la bondad del acto ejecutado, cuando está todavía en etapas de desarrollo incompleto y bajo la acción de la inmadurez, posiblemente recibiendo múltiples influencias inconvenientes, patológicas o anómalas, que impresionan fuertemente su psiquismo.

En respuesta a la escuela clásica, las ideas positivistas, apelan a otra manera de estudiar y atender la cuestión de los menores que infringen leyes penales. Más concretamente, si a la sociedad le interesa evitar que los delincuentes la sigan perjudicando, deben investigarse las causas de la mala conducta (entre las cuales las hay endógenas y exógenas de gran importancia, privando en cada sujeto una diferente constelación causal) y combatirlas eficazmente (Solís, 1986).

1.3. La reforma correccional

Desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, opera una honda transformación en las instituciones jurídicas relativas a la minoridad en general y, en particular, el Derecho penal que se aplicaría a los menores debía perder “casi en absoluto su sentido represivo”, para convertirse en un conjunto de medidas encaminadas a la educación moral, intelectual y física del menor. Durante este nuevo período, caracterizado por el auge de ideas progresistas en todos los ámbitos, se gesta un importante movimiento que proclama la plena autonomía del Derecho Penal de Menores, siendo necesaria no sólo una distinta denominación, sino también otra estructura normativa. La tendencia es substraer o cuando menos aspirar a substraer totalmente, al niño y al adolescente del área del derecho penal, para someterlo a medidas puramente tutelares y educativas (Viñas, 1983).

Así, durante este período desaparece el Derecho Penal con respecto a los niños y a los jóvenes delincuentes y se ha convertido en obra benéfica y humanitaria, en un capítulo si se quiere de la pedagogía, de la psiquiatría y del arte del buen gobierno, conjuntamente; se aspira a remplazar totalmente la idea de represión, expiación o responsabilidad moral, por la instauración de un sistema psico-pedagógico, tutelar y proteccionista, que pueda extenderse no sólo a los hechos ilícitos de los menores, sino asimismo a situaciones de abandono de menores, de peligro material y moral. Empieza a gestarse el modelo conocido posteriormente como tutelar; donde serían convocadas la pedagogía, la psicología, la psiquiatría y sociología especializadas, hoy genéricamente comprendidas en la disciplina Criminología juvenil (aunque con discrepancias entre escuelas) y todas, se refuerzan en alcanzar la meta de reformar, rehabilitar, reeducar y reinsertar socialmente al menor que pudo delinquir (Viñas, 1983).

Como antecedentes de las instituciones correccionales, creadas según las nuevas doctrinas aceptadas por los legisladores (que pugnaban por la corrección en lugar del castigo penal), podemos citar numerosos esfuerzos de carácter meramente caritativo, atendidas generalmente por grupos religiosos. Las antiguas Casas de Corrección de Amsterdam, que datan del siglo XVI, son claro ejemplo del valor asignado al trabajo riguroso, como redentor, y a la reeducación moral. La primera institución correccional para jóvenes fue el Hospicio de San Michele, fundado en Roma por el Papa Clemente XI en 1703. En Alemania, hubo institutos modelos desde 1833 en Horn y 1837 en Waldorf y posteriormente en Wittlich (Renania), ya en 1912. En este último, se aisló completamente a los menores, respecto a los delincuentes adultos, sometiéndolos a medidas de reeducación muy similares a los modelos norteamericanos de Reformatorios de Elmira, Massachusetts y Concord (Viñas, 1983).

Por lo que hace a los aspectos jurídicos, el movimiento de reforma pugna la elevación de los topes legales de la inimputabilidad absoluta, a los 14, 16, 18 o 21 años, según las distintas legislaciones. La implantación del sistema de reformatorios en los Estados Unidos, hacia mediados del siglo XIX, atendía a la idea de que los delincuentes eran susceptibles de ser convertidos en ciudadanos respetuosos de las leyes; que los individuos anormales y querellosos podían ser “entrenados” para ser útiles y productivos. Mientras que las autoridades estatales se encargaran del control de los niños menores de catorce años no debidamente atendidos ni custodiados; su supervisión debía delegarse, en ciudadanos privados y organizaciones de caridad, que deberían estar subsidiados por el Estado, con tal que observaran ciertas normas mínimas (Platt, 1988).

En el segundo Congreso Penitenciario Internacional, celebrado en Estocolmo en 1878, se resolvió que: “los niños delincuentes no debían ser castigados, sino educados para permitirles ganarse honestamente la vida y ser útiles, no perjudiciales para la sociedad”. En los reformatorios debería enseñárseles a los niños moral, religión y trabajo en forma semejante a la enseñanza que hubieran recibido en una familia honesta” (Platt, 1988).

En el Quinto Congreso Internacional de Prisiones, efectuado en 1895 en París, se determinó que los reformatorios eran capaces de borrar lacras hereditarias y ambientales. Se estipuló que los menores de doce años siempre fueran enviados a instituciones de preservación (Platt, 1988).

En resumen, se señalan como principios fundamentales de los reformatorios, entre otros, los siguientes: 1) Los delincuentes jóvenes tenían que ser separados de las influencias corruptoras de los criminales adultos. 2) Los delincuentes tenían que ser apartados de su medio y encerrados por su propio bien y protección. Los reformatorios deberían ser santuarios custodiados, donde se combinarían amor y orientación con firmeza y restricciones. 3) Los delincuentes deberían ser enviados al reformatorio sin proceso y con requisitos legales mínimos. No era necesario un proceso penal en regla, puesto que los reformatorios debían reformar y no castigar. 4) Las sentencias serían indeterminadas, para que los reclusos fueran alentados a cooperar en su propia reforma y los delincuentes recalcitrantes no pudieran reanudar su infame carrera. 5) No debería confundirse reforma con sentimentalismo. Sólo se requería el castigo mientras fuera conveniente para la persona castigada y después de haberse agotado todos los demás métodos. 6) Los reclusos tenían que estar protegidos de la pereza, la indulgencia y el lujo, mediante el ejercicio militar y físico y una vigilancia constante. 7) Los reformatorios deberían estar contruidos en el campo y designados de acuerdo con el “plan de cabañas”. 8) El trabajo, la enseñanza y la religión constituyen la esencia del programa de reformatorios (Platt, 1988).

Haciendo referencia a la Children Act. de 1908, comenta las medidas protectoras que, de acuerdo a ella, podrían adoptarse para los menores, a saber: a) Absolverlos pura y simplemente; b) Absolverlos bajo promesa de buena conducta en el porvenir; c) Absolverlos, colocándolos bajo la vigilancia de un oficial de prueba (*Probation officer*); d) Confiarles al cuidado de algún pariente o persona de garantía; e) Enviarlos a una escuela industrial; f) Enviarlos a una escuela de reforma; g) Hacerlos azotar; h) Condenarles al pago de una multa, al pago de los daños y perjuicios y de las costas judiciales; i) Condenar a sus padres, a las personas encargadas de su guarda, al pago de una multa, al pago de los daños y perjuicios o de las costas judiciales; j) Condenar a los padres o encargados de la guarda del menor a dar una caución de buena conducta; k) Colocarles en custodia, en algún lugar previsto por la ley; l) Condenarle a una pena de prisión, si tiene más de 14 años; m) Disponer de él, de algún mozo autorizado por la ley (Viñas, 1983).

De especial relevancia fue la creación de los Tribunales de Menores, con jueces especiales para atender los asuntos relativos a los mismos. De este modo, se dotó de una singularísima importancia conocer bien la personalidad del menor, cuáles puedan ser sus deficiencias biopsíquicas, las condiciones familiares y medioambientales, escolares y

profesionales en que se ha ido desarrollando, se preconiza que todo Tribunal de Menores está dotado de un médico especializado y también de asistentes sociales o cooperadores benévolos, para el relevamiento de datos o encuestas. Así, la morigeración del régimen penal de menores se hace carne en los juriconsultos y a insistencia de filántropos, médicos, psicólogos y pedagogos, reclaman también una adecuada respuesta humanitaria a las causas generadoras del aumento de la criminalidad juvenil, y que había que necesariamente buscar en las taras hereditarias, factores biopsíquicos, el abandono, el vicio, la corrupción y la explotación de los menores (Viñas, 1983).

De este modo, el positivismo influye en la búsqueda de explicaciones científicas de la delincuencia juvenil; en la etiología de este fenómeno, se hace presente la influencia del punto de vista del evolucionismo científico causal-explicativo que impulsara el positivismo en el ámbito del Derecho Penal General con algunas exageraciones ya sea sobre el rol biológico de las herencias morbosas en el delito del joven, así como a la excesiva influencia de secreciones endocrinas, y en lo social, a las situaciones marginales de pobreza, miseria, hacinamientos, áreas de delincuencia y, más tarde, a la gestación de las llamadas subculturas delictuales y enfermedades patológico-sociales. Al sacar al menor del Derecho Penal, se pretende extender este cambio a la misma terminología que a él hace referencia. La nueva pedagogía correctiva pugna por desterrar expresiones como delito y delincuencia tratándose de menores, para sustituirlas por otras con menor contenido de valor negativo como “niño o joven problema” o “niño o joven inadaptado” en lugar de delincuente y “conducta anormal, irregular o situación irregular” en vez de “delincuencia infantil o juvenil”. Por tal razón, se despliega una muy intensa labor sobre los centros de estudios e investigaciones jurídicas, institutos de derecho penal y criminología, proyectos de leyes, etc., para instaurar en toda esta materia la idea central de una ayuda y de una pedagogía correctiva. Estos esfuerzos se concretan, en la labor legislativa, creando un cuerpo legal que compile todos los problemas que atañen al menor, desde el abandono hasta la delincuencia activa. Ejemplo de la aplicación de este sistema es la *Children Act* inglesa de 1908, la cual sirvió de base para muchos proyectos de códigos y publicaciones en otras naciones tanto europeas como americanas (Viñas, 1983).

Puede considerarse que los nuevos Tribunales para menores eran una corte especial creada estatutariamente para determinar la categoría jurídica de los niños “problema”, su fundamento era la noción de *parens patrie*, por el cual estaban facultados para usar amplia discreción al resolver los problemas de sus ciudadanos menores menos afortunados. De este

modo, la administración de la justicia para los menores difería en muchos aspectos importantes del proceso en una corte criminal. No se acusaba a un niño de un delito sino se le ofrecía ayuda y guía; se entendía que la intervención en su vida no le pondría el estigma de un antecedente penal; los expedientes judiciales no solían ponerse a la disposición de la prensa ni del público; y las audiencias se celebraban en un ambiente relativamente privado; los procedimientos eran informales y la salvaguardas del proceso debido no eran aplicables a la jurisdicción civil del tribunal. Los estatutos originales del tribunal para menores permitían a las cortes investigar una gran variedad de necesidades y de mal comportamiento de los menores (Platt, 1988).

El movimiento reformista propugnaba por eliminar las distinciones entre el niño delincuente y el desadaptado o desatendido. Se integraron definiciones estatutarias de “delincuencia”: 1) los actos que serían delincuencia si fueran cometidos por adultos, 2) los actos transgresores de las ordenanzas condales, ciudadanas o municipales y 3) las transgresiones de conceptos generales vagamente definidos, como “comportamiento vicioso o inmoral”, “incoregibilidad”, “holgazanería”, “lenguaje blasfemo o indecente”, “ser vago”, “vivir con una persona viciosa o de mala fama” etc. , lo que indicaba la posibilidad de una conducta peor en el futuro si no se le ponía coto (Platt, 1988).

1.4. Modelo garantista

Algunos aspectos cuestionables desde el punto de vista jurídico, como la supresión del debido proceso legal, la indeterminación de la sentencia, entre otros; motivaron con posterioridad severas críticas que generaron una nueva revolución de las ideas en esta materia.

A principios del siglo pasado, las principales corrientes doctrinarias que abordaron el tema de la delincuencia juvenil adoptaron la perspectiva de la denominada *doctrina de la situación irregular o de la tutela pública*. Esto es, se pensaba que los niños y adolescentes que se encontraban en una situación de abandono podían ser sujetos de la intervención tutelar del estado para impedir que tal situación se convirtiera potencialmente en daño social. En la Declaración de Ginebra de 1928, se estableció que no debía hacerse distinción alguna entre los jóvenes que habían cometido una infracción penal y aquellos que se encontraban en

circunstancias que exigían medidas de protección o programas de reeducación, por presentar problemas de conducta (Cruz, 2010).

Con la emisión de la Declaración de los Derechos del Niño; se conforma la doctrina de la protección integral del niño y de la niña, la cual “asume como eje sistemático de construcción para la interpretación y creación de normas penales dirigidas a menores el principio axiológico fundamental del interés superior del menor”. Los nuevos principios impulsados, en los cuales se asienta el nuevo derecho para menores infractores, se desprenden del contenido de los artículos 37, 40 y 41 de la Convención sobre los derechos del niño; los cuales pueden agruparse en cuatro grupos: a) principios generales, b) principios de derechos penal sustantivo, c) principios procesal estructurales, y d) principios de debido proceso legal. A continuación, se exponen brevemente en qué consisten dichos principios (Ríos, 1998):

- a) Entre los principios generales se comprenden “el principio de vulnerabilidad social; el mandato de establecer leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para menores; el deber de trato humanitario y digno a los niños y niñas acorde con su condición de inmadurez y desarrollo; el principio que ordena la determinación exacta de una edad mínima y otra máxima de imputabilidad penal limitada; la prohibición de prisión perpetua y pena de muerte; el de asistencia de niños y niñas no imputables; y el mandato de garantizar la comunicación del menor con sus familiares.
- b) Entre los principios de derecho penal sustantivo se incluyen: “la reserva de ley; el principio de culpabilidad; el principio de proporcionalidad entre la infracción y la medida; el principio de subsidiariedad en la regulación y aplicación del tratamiento; y el principio de aplicación oficiosa de la norma más favorables.
- c) Por lo que hace a los principios procesal-estructurales, entre ellos podemos mencionar: “el principio de jurisdicción; el principio de impugnación; el de protección contra actos de tortura y tratos crueles; el de respeto a la privacidad del menor en todas las fases del procedimiento; el de legalidad en cuanto a actos de molestia con motivo de la intervención punitiva; el de excepcionalidad de la detención durante el proceso; el de acceso a la jurisdicción de protección de garantías constitucionales.

- d) Dentro de los principios del debido proceso legal, se incluyen: “el principio de presunción de inocencia, el de no autoincriminación, el de defensa, de intérprete y de pronta asistencia jurídica y social.

1.5. Evolución del concepto penal de menor infractor en el derecho español

Por lo que hace al ámbito de la historia jurídica española, no se presenta un tratamiento penal específico destinado a los menores infractores, sino hasta mediados del s. XVIII. Previamente, en el contexto de un Derecho penal retribucionista y expiatorio, el menor infractor ha quedado sometido –desde edades muy tempranas- a las mismas normas que regulaban la responsabilidad criminal de los adultos; en el mejor de los casos, simplemente se suavizaba el rigor de las sanciones (Landrove, 2007).

Si bien, la aplicación de un criterio específico para menores infractores como es el de *discernimiento*, no se sistematiza sino hasta el proceso de codificación de mediados del s. XIX. Anteriormente, destaca la presencia de instituciones como el llamado Padre de Huérfanos de Valencia establecido en el siglo XIV; figura con tintes religiosos y filantrópicos, encargada no sólo de la asistencia de menores en situación de abandono, sino también del castigo a jóvenes infractores. Al respecto, Pérez (2006) apunta que: “en nuestro país, es un hito muy importante en la historia del menor inadaptado la figura del Padre de Huérfanos de Valencia instituida en 1337. Tenía jurisdicción propia con una doble función: una de tipo asistencial y otra de carácter represivo, conociendo y juzgando las situaciones de menores vagabundos y delincuentes. Esta institución, que subsistió hasta el siglo XVII, se extendió a diversas ciudades de Castilla y Navarra.

Con el proceso de codificación, se fijan en el ordenamiento penal los postulados del criterio del discernimiento, estableciéndose, como veíamos anteriormente, varias etapas para determinar la minoría de edad penal. En el caso de la legislación española, el primer Código Penal, de 1822, establecía sólo dos períodos: se fija el límite inferior de total irresponsabilidad penal en los siete años; y entre los siete y los diecisiete años, se prevé la evaluación de si el menor había obrado con o sin discernimiento, para entregarlo a sus padres o a una casa de corrección; o imponer una pena atenuada, cuando se mostrase que había actuado con discernimiento y aún con malicia (Sánchez, 1998).

Los Códigos penales de 1848 y 1870, establecen la irresponsabilidad plena para los menores de nueve años; un nivel de responsabilidad condicionada a la evaluación del discernimiento para los menores de entre nueve y quince años; y un período de responsabilidad penal atenuada, de los quince a los dieciocho años. El Código Penal de 1870 –de la misma forma que el anterior, de 1848, declaraba exento de responsabilidad criminal al menor de nueve años y al mayor de dicha edad, pero menor de quince, a no ser que se hubiere obrado con discernimiento. Para los mayores de quince años pero menores de dieciocho estaba prevista la imposición de la pena inmediatamente inferior a la legalmente establecida para los adultos (Landrove, 2007).

Posteriormente, tal y como se señala en el epígrafe anterior, desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, opera una honda transformación en las instituciones jurídicas relativas a la minoridad; guiadas por la tendencia de sacar al menor del Derecho penal; sometiéndolo a un amplio espectro de medidas de carácter *correccional*, destinadas a mejorar la educación moral, intelectual y física del menor; movimiento que ha culminado en el establecimiento de Tribunales de justicia para menores (Cruz, 2010).

Entre los antecedentes a medias entre las tendencias tutelar-correccionalistas y la protección a los infantes abandonados desde una perspectiva de mera beneficencia; se encuentran la ley de 6 de febrero de 1822, junto con otros decretos reales relativos a la construcción de asilos e instituciones de amparo a los menores en situación de abandono; así como la creación del consejo superior de protección a la infancia y represión de la mendicidad. Más adelante, además de los múltiples esfuerzos de carácter privado, por medio de establecimientos con tintes caritativos atendidos generalmente por grupos religiosos; fue creado en 1888 el internado de Alcalá de Henares, al cual se enviaban los jóvenes varones con menos de veinte años, que hubiesen sido condenados por los tribunales. Esta institución, se transformó a comienzos del siglo XX en Escuela de reforma y corrección, creada específicamente para evitar el contacto entre los jóvenes y adultos, en base a un régimen de disciplina, trabajo e instrucción (Pérez, 2006).

Los principales teóricos del movimiento correccionalista, impulsaban la llamada Pedagogía correccional, donde se pugnaba por la supresión definitiva de las penas, reemplazándolas por medidas para tratar, educar y corregir; el tratamiento, no debía tener una duración determinada, sino que debía medirse con base en los resultados alcanzados. A su vez, se consideraba que el paso hacia el sistema tutelar y educativo tenía dos aspectos: el

primero, sentimental y humanitario que imponía el deber de cuidar a los menores que no habían podido escoger unas circunstancias favorables y que, por tanto, los hacía irresponsables de sus actos. El segundo, un aspecto utilitario, ya que el dinero invertido en redimir a un menor en peligro moral y delincuente ahorraría mayores sumas en el porvenir (Pérez, 2006).

Con el fin de analizar la reforma penitenciaria llevada a cabo en Norteamérica, se realizaron dos Congresos Penitenciarios nacionales en 1909 y 1914; las posiciones expresadas en éstos, junto con las opiniones de los juristas, extendieron el debate a las esferas legislativas. Un primer proyecto de iniciativa fue redactado en 1912; en la exposición de motivos del documento, se afirmaba que: “España no podía constituir una dolorosa excepción en el empeño tan honroso como el que significaba la especialización de las jurisdicciones para con los niños delincuentes”. Tras otros proyectos presentados en 1915 y 1917, se concretó finalmente el 2 de agosto de 1918 el primer ordenamiento español basado en el paradigma tutelar, conocido como Ley de Bases, desarrollada por el Real Decreto de 25 de noviembre de 1918 y complementada con el Reglamento de 16 de julio de 1919 (Pérez, 2006).

Con esta legislación, se inicia un nuevo período en el tratamiento del menor delincuente, en cuanto constituyen el primer paso para substraerlos del Derecho Penal de adultos mediante la creación de una jurisdicción especial que aplica también medidas especialmente adaptadas a ellos e inspiradas, en términos generales, en finalidades no retributivas o intimidatorias, sino preferentemente educativas y protectoras (Sánchez, 1998).

Asimismo, el movimiento de los *salvadores del niño*, además de pretender cambiar el mero *castigo* por la *corrección* dada preferentemente a través del trabajo y la educación para los menores que ya hubieran cometido infracciones; buscaba prevenir que otros menores en situación de riesgo, llegasen a incurrir en conductas antisociales (Cruz, 2010).

El modelo de Tribunales especiales para niños impulsado por esa ley, que seguía en buena medida a la legislación belga de 1912; pretendía el establecimiento de Tribunales en todas las capitales de provincia y en las cabezas de partido en que ya existían establecimientos específicamente dedicados a la educación de la infancia abandonada y delincuente. Principalmente, el Tribunal se integraría por un Juez de primera instancia; y por dos vocales, quienes debían tener experiencia pedagógica o conocimientos profesionales que fuesen idóneos para el desempeño de la función tuitiva. La competencia del Tribunal se extendería no sólo al conocimiento de todos los delitos y faltas cometidos por menores de quince años

(facultad reformadora), sino también a la protección de los mismos cuando se encontraren abandonados o en peligro (facultad protectora) (Landrove, 2007).

Justificándose en esta función *protectora*, el Tribunal gozaba de amplias facultades discrecionales, pudiendo intervenir incluso en el caso de menores de nueve años, que considerase se encontraban en situación de abandono o riesgo. Esta falta de seguridad jurídica, es una de las principales críticas que con el curso de los años surgieron en relación al modelo tutelar.

Para la década de los veinte, se impulsaron reformas al sistema; el Real Decreto-ley de 15 de julio de 1925, sobre organización y atribuciones de los Tribunales tutelares para niños, trató fundamentalmente de subrayar la dimensión educativa de la institución, extendiendo su competencia, por razón de la edad, hasta los dieciséis años del infractor. Cuatro años más tarde, el Real Decreto-ley de 3 de febrero de 1929, sobre organización y atribuciones de los Tribunales tutelares de menores, supuso una armonización de este ámbito con las previsiones del Código penal de 1928; estipulando además una ampliación de la competencia correctora de la institución (Landrove, 2007).

En el nuevo ordenamiento punitivo de 1928, se elimina el criterio del discernimiento, como factor a evaluar para determinar el grado de responsabilidad del menor; y se adopta el modelo vigente en la actualidad, de establecer un límite para la minoría de edad penal, por debajo del cual se afirma la total irresponsabilidad, o bien, la inimputabilidad. Este límite, en el caso del Código de 1928, eran los dieciséis años. Todo menor por debajo de esa edad, quedaba sometido a la jurisdicción de los Tribunales Tutelares de menores (Sánchez, 1998).

Dada su amplia jurisdicción, los Tribunales intervenían no sólo con medidas educativo-correctivas para los menores que hubiesen realizado conductas propiamente ilícitas; sino también, por medio de medidas protectivo-tutelares para los infantes que se considerasen en situación de riesgo o abandono, o aún con posibilidades de llegar a delinquir; pudiendo inclusive, intervenir en el ámbito familiar, asumiendo la guarda y custodia de los hijos cuyos padres se juzgasen negligentes (Cruz, 2010).

Así, a su jurisdicción, se sometían los siguientes hechos: a) las acciones y omisiones atribuidas a los menores antes de cumplir los dieciséis años que el Código penal o las leyes especiales calificaren como delitos o faltas; b) los casos de menores que se entregaren a la prostitución o a la vida licenciosa, o se dedicasen a vagabundear, siempre que a juicio del

tribunal requieren el ejercicio de la facultad reformadora; c) ciertas faltas cometidas por mayores de dieciséis años contenidas en el Código penal o en la legislación especial relativa a los ejercicios peligrosos de los menores o a su utilización para la mendicidad; y d) los casos en los cuales, poseían facultades para suspender los derechos de padres o tutores a la guarda y educación del menor de dieciséis años en los casos de malos tratos, órdenes, consejos o ejemplos corruptores (Landrove, 2007).

El modelo de los tutelares de menores se enfrentó inicialmente, en la práctica, a diversas dificultades; algunas de carácter presupuestario, que no permitieron la creación de establecimientos en cada provincia; otras, en cuanto a recursos humanos, pues dado que los cargos no eran retribuidos económicamente, resultaba difícil encontrar los perfiles personales necesarios, de auténticos pedagogos comprometidos con la infancia, que postulaba el sistema en teoría; y en tercer punto, respecto a la poca respuesta social al sistema, pues resultó difícil lograr el reacomodo de los infantes; era hasta cierto punto previsible, que pocas familias aceptaran recibir menores provenientes de familias problemas con tendencias antisociales (Cruz, 2010).

Una de las dificultades con las que se topó la práctica de la ley fue el hecho de encontrar delegados del juez que ejercieran acertadamente su misión, dadas las cualidades físicas y morales que reclaman y de los peligros que les amenazan. Además, se necesitaba un gran número de ellos y la ley establecía que el cargo no sería retribuido. Otro de los escollos fue el poder entregar al menor a otra persona extraña para su cuidado, puesto que se encontraran pocas familias que solicitaran tal admisión (Pérez, 2006). Tampoco las sociedades tutelares eran numerosas, ni las escuelas de reforma ni los reformatorios (Landrove, 2007).

La ley de 1918 fue reformada en 1948, por el Decreto de 11 de junio, que aprobó el Texto refundido por la Ley de Tribunales de menores. El texto, en esencia, se mantuvo sin alteraciones; siguiendo los postulados de los planteamientos positivistas y correccionalistas dominantes a principios del siglo XX.

Los Tribunales tutelares, continuarían trabajando en torno a su doble facultad; protectora, para los menores en riesgo; y jurisdiccional, con miras a la corrección y la reforma de los menores delincuentes. Triple función, protectora de los menores de dieciséis años contra el indigno ejercicio del derecho a la guarda y protección, en los casos de malos tratos y consejos o ejemplos corruptores; de enjuiciamiento de mayores de dieciséis años por

determinadas faltas perpetradas contra menores; reformadora, para educar y tutelar a todos los menores de dieciséis años –sin límite mínimo de edad- que hubieren realizado conductas calificadas como delitos o faltas en la legislación penal o constituyeren infracciones contempladas en las leyes provinciales y municipales, y conocer de los casos en que se tratara de menores prostituidos, licenciosos, vagos o vagabundos (Landrove, 2007).

Como sucedió en otras naciones, en España se alzaron las voces en contra del sistema de Tribunales de menores; las críticas fueron similares a las que ya se han mencionado con anterioridad, el que con intención de llevar a cabo una función educativa y de protección, ajena totalmente al derecho penal, se dejara al menor en manos del ejercicio discrecional de facultades de parte de los jueces del Tribunal de menores; la ausencia de garantías mínimas de proceso, la falta de precisión en cuanto a la duración y términos de las medidas, entre otras irregularidades que descubrían al modelo impulsado a principios del siglo XX por los salvadores del niño, tras varias décadas de funcionamiento; como un esquema arbitrario que en la mayoría de los casos, confinaba al menor a instituciones reformadoras o correccionales para cumplir medidas con objetivos poco claros, estigmatizándolo como probable o futuro delincuente (Cruz, 2010). Asimismo, como afirma Cantarero (1988), el hecho de que a muchos menores no delincuentes se les trate como si lo fueran constituye un eslabón capital en el conjunto de un mecanismo de control social.

Lo anterior, sin olvidar que el modelo tutelar, en un principio, había obedecido al noble propósito humanitario de sacar a los niños y jóvenes de las cárceles de los adultos, con el fin de reformarlos o corregirlos, por medio de instituciones con base esencialmente pedagógica. Las intenciones eran loables, el uso abusivo vino de parte de las autoridades facultadas, que olvidaron el afán educativo, dando importancia únicamente al aspecto confinatorio y aislacionista de la institución. Respecto al reformatorio, éste se convirtió en un establecimiento que provocaba exclusión y que a menudo transformaba al menor en aquello que había justificado su creación, un adulto delincuente (Sánchez, 1998). Las instituciones para menores fueron instancias que, en el caso español, reformaron los principios de unas minorías sobre el conjunto de una población privada de los derechos más elementales. Así, culminó un proceso de adquisición de un estatuto diferenciado de los adultos respecto a la infancia y la juventud (Pérez, 2006).

En la misma línea de crítica respecto al modelo tutelar, atendiendo a la falta de garantías jurídicas mínimas para el menor, Sánchez (1998) describe el esquema tutelar

especificando que éste se caracteriza por sustraer al menor que delinque del Derecho Penal general y someterlo tanto a Tribunales, como procedimientos especiales. Ahora bien, ni el Tribunal lo es propiamente, pues no tenía que formar parte de él necesariamente un juez, ni el proceso respeta las garantías judiciales mínimas. Por lo que la competencia sobre los menores es amplia, alcanza no sólo a los autores de un delito, sino a todos aquellos de conducta desviada. El menor es sometido a un tratamiento reeducador y corrector, siempre separado de los adultos y de su medio habitual. La medida fundamental es la de internamiento en un centro reformativo por tiempo indeterminado. Quiebra también, pues, el principio de legalidad en lo que se refiere a la determinación de la sanción. Y concluye la autora, afirmando que la ideología protectora y reeducativa ha servido desde sus comienzos como coartada ideológica para dejar al margen de la jurisdicción de menores todo el complejo sistema garantista que rige en las demás jurisdicciones. De este modo, la Ley de 1948 no admite el derecho de publicidad como garantía frente a los abusos judiciales (art. 15º LTTM) y, sostiene, que no es necesario ni el Abogado defensor, ni el Ministerio Fiscal (art. 29º LTTM) dando lugar a un proceso inquisitivo y no contradictorio (Coy y Torrente, 1997).

Según el artículo 17º de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948, el Tribunal podía adoptar en sus acuerdos las siguientes medidas en el ejercicio de su facultad reformadora:

- Amonestación o breve internamiento.
- Libertad Vigilada.
- Colocación bajo la custodia de otra persona.
- Ingreso en establecimiento oficial o privado, de observación, de educación, de reforma o de tipo correctivo o de semilibertad.
- Ingreso en un establecimiento especial para menores anormales.

El modelo tutelar resultó incompatible con la nueva Constitución promulgada en el año de 1978, en relación a los aspectos *organizativo, competencial y del procedimiento*. Ello, atendiendo principalmente a la estructuración, los aspectos procesales y el amplio ámbito competencial que caracterizaba a los Tribunales de menores. La existencia de los Tribunales de Menores iba en contra de los diversos principios del nuevo orden constitucional; en el aspecto estructural, el principio de unidad jurisdiccional, como base de la organización y funcionamiento de los tribunales, según el cual, los jueces y magistrados constituyen un cuerpo único y monopolizan la administración de justicia, debiendo ejercitarse la acción penal

por el Ministerio Fiscal. No siendo así en el caso de los Tribunales de Menores, que funcionaban como órganos *sui géneris*, independientes del resto del sistema judicial y con un monopolio competencial respecto a las causas de menores infractores (Landrove, 2007).

Asimismo, en el ámbito procesal, la nueva Constitución consagra al *habeas corpus*, así como los derechos a una defensa y asistencia letrada; a ser informado sobre los motivos de la detención; a un proceso público; a la presunción de inocencia; al carácter público del procedimiento; estableciendo además la exigencia de motivación para las sentencias. Garantías y derechos que no eran respetadas por los Tribunales dentro de sus procedimientos. (Landrove, 2007).

Así, el modelo tutelar, atendiendo a sus intenciones educativas, había convertido la categoría de menor infractor, de una construcción jurídica, a una idea con tintes psicológicos y sociológicos. En aras de ese ideal de sacar al menor del Derecho Penal, se le había sustraído en la práctica no sólo del ámbito punitivo, sino de todo derecho; limitándose el ordenamiento a disponer que la atención del menor –no sólo del infractor- recayese en la aplicación discrecional de medidas y tratamientos por parte de especialistas en pedagogía y psicología, que no siempre lo eran, olvidando la necesaria determinación que se exige dentro del marco jurídico cuando se trata de imponer medidas que restringen la libertad y otros derechos de la persona, como lo eran el internamiento en las instituciones reformativas.

Haciendo referencia a la Declaración de los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1959, y uno de sus principios, según el cual “*el niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración y estos derechos –los derechos del Niño- serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones públicas, origen nacional, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición*”.

Desde este principio, al tiempo que fin irrenunciable, es la igualdad de todos los niños, y además los Estados añaden en esta declaración, en lo que se refiere al modelo de justicia penal juvenil, el reconocimiento a ser tratado, desde esta Declaración, de manera acorde con el fomento de su sentido de dignidad y el valor que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en las que se tenga en cuenta la edad del niño, así como promover la reintegración y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad (Cerón, 2013).

La ley refundida en 1948, a pesar de contravenir en esencia la nueva Constitución, se mantuvo vigente y con eficacia durante varios años, al desatenderse demasiado tiempo la necesidad de adaptar la normativa reguladora de los Tribunales tutelares de menores al Texto constitucional de 1978, se siguió aplicando una regulación inconstitucional –al menos en parte- y por unos órganos de dudosa legitimidad.

La ley Orgánica de Poder Judicial de 1985, inició el retrasado proceso de reforma. Los Tribunales tutelares pasaron a ser Juzgados de Menores, integrándose a la organización judicial, bajo un nuevo sistema de jurisdicciones territoriales. Respecto a la competencia, se esclareció que les correspondía atender todos aquellos casos de menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como delitos o faltas; pero se mantuvo el error de extender discrecionalmente su ámbito de competencia, al mantenerles como facultados para todas otras aquellas situaciones relacionadas con los menores que les atribuyeran las leyes; ratificando con ello las funciones asistenciales y de protección que habían venido desempeñando ampliamente. No obstante, se logró separar ambas funciones, atribuyendo las intervenciones asistenciales a otras instituciones. Se desgajó la función de reforma de la de protección. Esta última se atribuyó a las entidades públicas que, en el respectivo territorio, tuvieren encomendada la tutela de los menores que se encontraren en situación de desamparo (Serrano, 2007).

Con las modificaciones de 1985, el modelo tutelar revisado siguió vigente algunos años más. Es con la Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de febrero de 1991, por la cual se declara inconstitucional el artículo 15 de la Ley de 1948, por excluir la aplicación de reglas procesales; explícitamente, las garantías del artículo 24 constitucional. Con este dictamen, se urge a iniciar un proceso legislativo que de origen a un nuevo instrumento legal para la materia (Cruz, 2010).

A la luz del modelo garantista que va imponiéndose en otras naciones, la legislación española busca ahora reconvertir al menor infractor, ante todo en un sujeto jurídico, que si bien, por las características que se basan en un límite de edad, está exento de ser sometido a un proceso de naturaleza penal; es ante todo titular de derechos y garantías, que deben establecerse adecuadamente en la norma, y prefijar toda aquella intervención pública a que se vea sujeto por haber incurrido en la conducta que se considera infractora (Cruz, 2010).

Es evidente, que el menor, por encontrarse apenas en desarrollo psíquico, no puede someterse a las mismas leyes que los adultos. Durante la minoría de edad, la libertad es

meramente potencial, porque, naturalmente, se ve reducida al ámbito de los principios y, de hecho, se encuentra sustituida por la afectividad. Las coordenadas en que se desenvuelve la vida de los menores son radicalmente diferentes a las que existen para los mayores. De ahí que no sean coincidentes sus respectivos mundos, ni sea posible transportar las normas que rigen en el mundo adulto al ámbito de los menores (Mendizábal, 1977). Ello no implica, no obstante, llegar al extremo cometido por el modelo tutelar, de sacar al menor no sólo del ámbito de aplicación de la norma penal, sino carente también de todo el sistema de garantías jurídicas cuyo respeto se exige para cualquier actuación de un ente público.

Así, se pugna la creación de un sistema de garantías adecuadas a la pretensión procesal, asegurando que la imposición de la sanción se efectuará tras vencer la presunción de inocencia (Rodríguez, 2005).

Con miras a enmendar el vacío legal que había dejado la declaración de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, se emitió el 5 de junio de 1992 la Ley Orgánica sobre Reforma de la Ley reguladora de la competencia y el procedimiento de Juzgados de menores, reformando de nueva cuenta la Ley de 1948. El ordenamiento, que obedecía a una situación de auténtica emergencia legal, abría el camino para que se diese una auténtica renovación legislativa de la materia; pues abiertamente se consideraba como provisional. Además de atender las cuestiones procesales y de reconocimiento de garantías al menor que habían sido ignoradas, incorporó el criterio del interés del menor, como base para la aplicación de la medida, estableciendo asimismo límites temporales a ésta, que como habíamos señalado, en el modelo tutelar, podía imponerse por tiempo indeterminado (Cruz, 2010).

La Ley orgánica 4/92 es fruto del movimiento reformador que es ese período había llevado a Occidente a impulsar nuevas formas legislativas y nuevos modos de intervención psicosocial en todo lo referente al tratamiento jurídico del menor (Sancha, 1994).

Esta evolución en la forma de intervención tuvo lugar tras la aparición de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores de 1986, también denominadas Reglas Beijing, que propugnan la promoción integral del menor, recomendando la pluralidad de medidas resolutorias, estableciendo de forma prioritaria los sistemas intermedios y reservando como último recurso el internamiento en centro cerrado (Coy y Torrente, 1997).

Así mismo, otros marcos e instancias que influyeron en su evolución de esta Ley, como la Convención de los Derechos del Niño de 1989 o el Comité de Ministros del Consejo de Europa de 1987, que en su recomendación n°R(87)20 habla de las reacciones sociales a la delincuencia juvenil contemplando las siguientes medidas:

- Aquellas que implican vigilancia y asistencia probatoria.
- El tratamiento intermediario.
- La reparación del daño.
- Trabajo en beneficio de la Comunidad.

Al ser imputados menores de edad penal, las sanciones de las que son objeto se denominan medidas, diferenciándose de las penas, propias de un derecho penal.

Las medias aplicables por el Juez pueden ser las siguientes (artº 17 LTTM):

- Amonestación o internamiento por tiempo de uno a tres fines de semana.
- Libertad Vigilada.
- Acogimiento por otra persona o núcleo familiar.
- Privación del derecho a conducir ciclomotores o vehículos a motor.
- Acogimiento por otra persona o núcleo familiar.
- Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
- Tratamiento ambulatorio o ingreso en un centro de carácter terapéutico.
- Ingreso en un centro en régimen abierto, semiabierto o cerrado.

A pesar de ello, según la literatura específica, esta ley fue calificada en su conjunto de insuficiente e insatisfactoria. Así, se califica de *insuficiente*, porque supuso seguir ignorando la urgente necesidad de una reforma global de la normativa de menores; *insatisfactoria*, porque contenía innumerables y graves defectos, fruto de la improvisación. La opción de reformar, simplemente, la legislación anterior en vez de proceder a la promulgación de una ley de nueva planta generó disfunciones y discordancias, sobre todo porque la filosofía subyacente en la reforma resultaba antagónica, en muchas ocasiones, de la que había inspirado la normativa de 1948 (Landrove, 2005).

La edad penal, continuaba fija, según el Código Penal vigente, en los dieciséis años. Por debajo de ella, hasta el tope inferior de doce años, tenían competencia los Juzgados de menores.

Con todo y el ya referido carácter provisional de la norma, pasarían ocho años para que se emitiera la ley hoy vigente. Previamente, el Anteproyecto de Ley Orgánica Penal Juvenil y del Menor, presentado en 1995, destaca por establecer una diferencia entre *menor* y *joven*. Hay irresponsabilidad plena por debajo de los doce años; se es menor de los doce a los dieciséis; y joven, de los dieciséis a los dieciocho años. Para tasar la responsabilidad de menores y jóvenes, se atiende a un sistema mixto biológico-psicológico; el cual, se entiende, además de considerar la edad del infractor, toma en cuenta su capacidad para comprender la ilicitud del hecho y actuar de acuerdo a esa comprensión. Inclusive, es viable que la competencia de las instituciones de menores se extienda a un intervalo excepcional, entre los dieciocho y los veintiún años, atendiendo al grado de madurez del autor (Sánchez, 1998).

Ésta última categoría, que es conocida en la doctrina como la de los jóvenes adultos; fue incluida en el texto original de la ley vigente actualmente. Ley Orgánica de 12 de enero de 2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores; previéndose en el artículo cuarto de la misma, la posibilidad de que el régimen de responsabilidad previsto por la ley pudiera aplicarse a las personas mayores de dieciocho años y menores de veintiuno, atendiendo al grado de madurez del infractor, tratándose de casos no graves y de no reincidentes.

Este régimen novedoso abría la posibilidad de considerar como menores, según su grado de madurez, a jóvenes de hasta 21 años, siguiendo con ellos los postulados psicológicos modernos que señalan que el ser humano no alcanza un desarrollo en su psique completo sino hasta más allá de los veinte años. Puesto que el Derecho Penal de menores es sensiblemente superior en su función preventivo-especial al Derecho Penal de adultos, no existen mayores reparos en ampliar los límites de equiparación de los mayores de 18 años de edad, para conseguir una mejor respuesta al tratamiento jurídico-penal aplicables a los mismos en ejecución de sentencia firme en el orden jurisdiccional criminal. De otro lado, las carencias protectoras civiles de menores de 14 años implicados en conflictos típicos puede asimismo aconsejar la expansión tuitiva de los intereses del menor y del sometimiento del mismo a tratamientos educativos especializados. Desde esta perspectiva, no habría inconvenientes político-criminales en configurar un nuevo marco de vigencia de la legislación penal del menor, de modo que ésta pudiera abarcar a menores y jóvenes comprendidos entre 12 y 22 años de edad, con garantía de estricta proporcionalidad en la asignación y graduación de aquellas medidas que, por su naturaleza, provean la mejor asistencia técnica institucionalmente disponible para menores y jóvenes, individualizada a través de programas educativos especializados de socialización personal y prevención criminal (Polaino, 1985).

Esta posibilidad, fue suprimida definitivamente por la Ley Orgánica de reforma 8/2006, de 4 diciembre de ese año; atendiendo a un criterio de alarma social ante el incremento de la delincuencia de menores. Los criterios de esta nueva reforma de la Ley, consideran el Derecho de menores infractores como un auténtico Derecho de orden punitivo. Así, el Derecho Penal de menores se configura con el mismo marco sustantivo que el de los adultos, esto es Código Penal y leyes penales especiales. Por su parte, debe quedar claro que el proceso penal de menores es un verdadero proceso penal. Así, la especialidad de la justicia juvenil radica en el aspecto procesal, integrado por la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM), su Reglamento y demás normas, especialmente de orden internacional, aplicables (Urbano y De la Rosa, 2007).

Tras haber analizado la concepción penal de menor infractor dado a lo largo de la evolución legislativa española; cabe señalar que el criterio jurídico vigente que define al menor infractor es el puramente biológico; ya que se atiende estrictamente al criterio de edad del sujeto. Otros ámbitos susceptibles de valoración, como es la madurez psicológica y la capacidad para comprender el acto, no se tienen en cuenta a la hora de fijar la minoría de edad penal, sino para valorar y graduar la responsabilidad del menor, y por consiguiente la medida, así como el régimen que ha de imponerse, teniendo en consideración a su vez la especificidad delictiva que determinará en que Centro de Ejecución de Medidas Judiciales ingresa para dar cumplimiento a la medida judicial. Por último, citando a Bandura (1982) que afirmaba que: “el castigo no varía la tendencia social de éstos delincuentes ni su empleo de medios ilegítimos para obtener recursos gratificantes”.

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, supuso la primera regulación completa del ámbito penal del menor. En esta Ley se establecen los principios de legalidad, tipicidad, acusatorio, de proporcionalidad, de contradicción, de oportunidad, de doble instancia, y se reconocen a los menores los derechos al juez ordinario predeterminado por la ley de defensa, a ser informado de la acusación, a ser oído, a no ser declarado culpable y a la presunción de inocencia. Se eleva la edad mínima de los 12 a los 14 años de edad y se fija en los 18 años el límite máximo de intervención de esa jurisdicción. Dicha Ley sufrió una importante modificación en virtud a la Ley Orgánica de 8/2006, de 4 de diciembre, que implicó el endurecimiento del tratamiento penal de los menores, atendiendo a un criterio de alarma social ante el incremento de la delincuencia entre menores de edad (Cerón, 2013).

1.6. Resumen

A modo de resumen, en el desarrollo del concepto jurídico del menor infractor a lo largo de la historia, se pueden establecer 3 momentos de especial importancia:

- 1) Criterio de discernimiento. Se apoya en la escuela llamada clásica, cuyos principios fundamentales eran el libre albedrío y la imputabilidad moral del hombre, siendo la edad determinante en la imputabilidad, ya que era la primera causa que perturba la inteligencia, de ahí su relevante influencia. No existía una edad mínima de inimputabilidad absoluta, sino que se daba gran relevancia a la figura del discernimiento, por lo que si éste faltaba se absolvía, mientras que si se consideraba estaba presente, se atenuaban las penas.

Se daban cuatro períodos con efectos penales:

1) *período de irresponsabilidad absoluta*; se presume *juris et de jure*, que el sujeto carece de discernimiento, y por tanto es inimputable, comprende el primer período de la infancia, que va de los siete a los doce años.

2) *responsabilidad condicional*; la capacidad de discernir, se presume *juris tantum*, por lo que el sujeto es sometido a juicio, para determinar si obro con o sin discernimiento. Si no se acredita el discernimiento, se le absuelve; en caso contrario, se le condena, aunque con atenuación de la pena. Este período comprende dos fases: de los doce a los catorce años o la impubertad próxima a la minoridad; y la minoridad propiamente, de los catorce a los dieciocho años cumplidos.

3) responsabilidad plena; el discernimiento se suponía existía, como consecuencia natural, en todo ser humano adulto.

4) de responsabilidad modificable en los resultados.

En el campo doctrinal, fue notoria la ambigüedad del concepto de discernimiento, sin que existiera un acuerdo entre los juristas al respecto.

- 2) La reforma correccional. El Derecho Penal que se aplicaría a los menores debía perder casi con totalidad su sentido represivo, para convertirse en un conjunto de medidas encaminadas a la educación moral, intelectual y física del menor. La tendencia sería sustraer o intentar sustraer al menor del área del Derecho Penal, para someterlo a medidas puramente tutelares y educativas. Este momento se apoya en la filosofía del Modelo Tutelar, siendo convocadas la pedagogía, la psicología, la psiquiatría y sociología especializadas, ya que dicho Modelo considera al menor como enfermo al

que es necesario curar. Por tanto, su objetivo es la intervención que tiene como fin último la imposición de medidas de tratamiento para la corrección del menor; en ningún caso considera oportuno declararlo culpable de la comisión del delito, antes bien se le considera inmerso en un grave peligro físico y moral. De este modo, en estos Tribunales Tutelares donde, bajo una actitud paternalista, el Juez adquiere toda la responsabilidad en las decisiones sobre los menores. Así, asume funciones de defensor, juzgador e incluso acusador, quedando de este modo violadas todas las garantías jurídicas. Además, no sólo se limita a juzgar hechos objetivos cometidos por el menor, sino que tiene capacidad para valorar actitudes y modos de ser del mismo.

- 3) Modelo garantista. Este momento nace a raíz de la emisión de la Declaración de los Derechos de los Niños, Así, los nuevos principios impulsados, en los cuales se asienta el nuevo derecho para los menores infractores, se desprenden del contenido de los artículos 37, 40 y 41 de la convención sobre los Derechos del Niño; los cuales pueden agruparse en cuatro grupos: a) principios generales, b) principios de derechos penal sustantivo; c) principios procesal estructurales; y d) principios de debido proceso legal.

En el caso de la legislación española, el primer Código Penal, de 1822, establecía dos períodos: se fija el límite inferior de total irresponsabilidad penal en los siete años; y entre los siete y los diecisiete años, se prevé la evaluación de si el menor había obrado con o sin discernimiento, para entregarlo a sus padres o una casa de corrección; o imponer una pena atenuada, cuando se mostrase que había obrado con discernimiento y aún con malicia.

Los Códigos Penales de 1848 y 1870, establecen la irresponsabilidad plena para los menores de nueve años; un nivel de responsabilidad condicionada a la evaluación del discernimiento para los menores de entre nueve y quince años; y un período de responsabilidad atenuada, de los quince a los dieciocho años. El Código Penal de 1870 también declara exento de responsabilidad criminal al menor de nueve años y al mayor de dicha edad, pero menor de quince, a no ser que hubiere obrado con discernimiento. Para los mayores de quince años, pero menores de dieciocho estaba prevista la imposición de la pena inmediatamente inferior a la legalmente establecida para los adultos.

En la función protectora, el Tribunal podía intervenir incluso en el caso de menores de nueve años, que se considerase en situación de abandono o riesgo, manteniendo así una doble

facultad; protectora, para los menores en riesgo; y jurisdiccional, con miras a la corrección y reforma de los menores infractores.

Así, el modelo Tutelar resultó incompatible con la nueva Constitución promulgada en el año de 1978, en relación a los aspectos organizativo, competencial y del procedimiento.

La Ley Orgánica de Poder Judicial de 1985, inició el retrasado proceso de reforma. Los Tribunales tutelares pasaron a ser Juzgados de Menores, integrándose a la organización judicial, bajo un nuevo sistema de jurisdicciones territoriales. Respecto a la competencia, se esclareció que les correspondía atender todos aquellos casos de menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como delitos o faltas, separándose ambas funciones, atribuyendo las intervenciones asistenciales a otras instituciones. Por tanto, se desgajó la función de reforma de la de protección.

Pero a pesar de esta serie de códigos, es la Ley de Tribunales de Menores de 1948, hija del pensamiento correccional y positivista de la época, propio de un Modelo Tutelar, la que ha perdurado hasta que fue aprobada la Ley Orgánica Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores de 1992, reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores, que significó un cambio radical en la concepción del procedimiento penal de los menores al atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal. Se dispuso la asistencia de letrado con carácter obligatorio, se estableció un catálogo de medidas, límite máximo de duración de las medidas, así como la posibilidad de que todas las resoluciones fueran recurribles. Aun así, esta Ley fue considerada como insuficiente e insatisfactoria.

Capítulo II:

El enjuiciamiento de menores y jóvenes infractores

2.1. Introducción

La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, 5/2000, LORPM, introdujo en España un nuevo sistema de intervención sobre los menores de edad infractores, regulando todos sus aspectos relevantes, incluido el proceso penal de menores, articulando sobre el modelo del proceso abreviado de adultos, pero con importantes diferencias. Así, se abrió un marco y posibilidades de intervención mucho más amplio que en el proceso de adultos que se ve estrictamente sometido al principio de legalidad e impulso de oficio de las actuaciones.

Los nuevos postulados teóricos, así como los propios Tribunales se vieron abocados a reinterpretar los límites de la minoridad, considerando ya no solamente el dato de la edad cronológica como marco de actuación en materia del enjuiciamiento del menor infractor, sino “que la verdadera causa de la atenuación de la responsabilidad reside en la madurez del sujeto, trastocando de alguna forma el fundamento atenuante de la menor edad, ya que ello no supone tratar al mayor de dieciocho años como si fuese un deficiente, que no lo es en absoluto, sino como a un individuo que no ha alcanzado la madurez necesaria para abarcar la comprensión de sus actos (Nogueira, 2003).

La distinción del tratamiento de los menores y mayores de 12 años que vino a introducir la L.O. 4/1992 fue plausible. Sin embargo, sólo en parte nos aproximaba a la situación existente en otros países, que desde hacía tiempo preveían una fase intermedia entre la minoría de edad penal y la mayoría plena, fase durante la cual es aplicable un Derecho penal juvenil –penal ya, pero distinto en sus consecuencias al de los mayores-. Así, en Alemania un tal Derecho Penal juvenil es el aplicable a los menores entre los 14 y los 18 años, salvo que no se pueda probar su plena imputabilidad, y a los mayores de 18 años pero menores de 21 (jóvenes adultos) en ciertos casos (Mir, 2006).

Otro hecho considerado relevante en la promulgación del Código Penal de 1995, es el que establece la minoría de edad penal en los dieciocho años. Ello no significa la inimputabilidad absoluta para los menores de dicha edad, sino que, sin establecer un límite de edad inferior, se les remite a una Ley que regule la responsabilidad penal del menor (Nogueira, 2003). Por lo que con la entrada en vigor del actual Código penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre), se establece una importante modificación en la determinación de la responsabilidad penal del menor. Su artículo 19, que no entraría en vigor hasta la aprobación y puesta en marcha de la Ley Penal del Menor, establecía la equiparación entre la

minoría de edad penal y la civil, promulgada por la Constitución española de 1978 (Martínez, 1983).

Así pues, el Código Penal de 1995 estableció la minoría de edad penal en los dieciocho años, respondiendo así a una vieja demanda doctrinal que abogaba por equiparar la mayoría de edad penal a la civil y a la constitucional (Alonso, 2005). No obstante, tal equiparación no sería absoluta, ya que, como el mismo Código disponía, el menor sería responsable conforme a lo dispuesto en la ley que regulara la responsabilidad penal del menor, es decir, la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, en adelante LORPM. Se distingue, de esta forma, el concepto de mayoría de edad penal (dieciocho años), del concepto de responsabilidad penal (establecido en catorce años por la LORPM).

A modo de síntesis, la LORPM vino a establecer el límite de los catorce años para exigir responsabilidad penal a los menores y se diferencian, en el ámbito de aplicación de la Ley y de la graduación de las consecuencias por los hechos cometidos, dos tramos: de catorce hasta dieciséis y de dieciséis a dieciocho, por presentar uno y otro grupo diferencias características, que requieren, desde un punto de vista científico y jurídico, un tratamiento diferenciado, constituyendo una agravación específica en el tramo de los dieciséis años, la comisión de delitos que se caracterizan por la violencia, intimidación o peligro para las personas (Alonso, 2005).

Además de estas consideraciones penales, para los mayores de dieciocho años, plenamente responsables según el Código Penal de 1995, se establece un tratamiento penitenciario especial, acorde a las circunstancias personales de los penales con base en su juventud, hasta los veintiún años (y, excepcionalmente hasta los veinticinco) (Martín, 1995).

Si bien, conviene definir con los nuevos criterios las franjas temporales y conceptos que la ley distingue en función de la edad (Sánchez, 1999):

- a) *Niño*: se considera niño al antiguo infante, es decir, al irresponsable absoluto en término penales. En nuestra actual legislación, tras la entrada en vigor de la LORPM, se integran en esta terminología aquellos sujetos de menos de catorce años.
- b) *Menor*: aunque el término empleado es genérico, ya que puede englobar coloquialmente a todos aquellos que aún no han alcanzado la mayoría de edad, en el lenguaje jurídico-penal, menor es todo aquel que entra en el ámbito de aplicación de la LORPM. Se considera así menor ante la legislación penal todo a aquel individuo con

catorce años cumplidos y hasta los dieciocho, sometidos por ello mismo a una jurisdicción especial. Dentro de los menores, habrán de distinguirse a su vez dos franjas de edad. En aquella horquilla más cercana a la edad adulta (post-adolescencia), esto es, de los diecisiete a los dieciocho años, se entiende que su responsabilidad es mayor, en relación con los más cercanos a la niñez (adolescentes).

- c) *Joven o joven adulto*: dentro de las competencias de la LORPM, el joven es aquel que ha cumplido los dieciocho años hasta el cumplimiento de los veintiún años. En la redacción primitiva de la LORPM, se disponía la opción de aplicar a los jóvenes el régimen contenido para los menores; no obstante, la LO 8/2006, de 4 de diciembre, ha venido a suprimir tal posibilidad, estableciendo, además, una serie de modificaciones al artículo 10 de la LORPM sobre la aplicación y duración de las medidas, que distingue de manera más acusada entre los catorce o quince años y los dieciséis o diecisiete años de edad. Desde un punto de vista jurídico-penal, tal modificación podría hacer replantearnos la actual terminología, pues a los efectos de la responsabilidad penal, los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno serán tratados como adultos plenamente imputables, sólo distinguiéndose un régimen especial en el ámbito penitenciario como única diferencia. En este sentido, la franja de edad que va desde los dieciséis años hasta los dieciocho pasaría a tener una consideración más aproximada al término anteriormente aplicado de joven.

La Comunidad de Madrid, entendiendo que el éxito o el fracaso del sistema de responsabilidad penal juvenil radica en ser capaces de ejecutar adecuadamente y de la manera más idónea para los intereses del menor, la medida que se ha impuesto, separó claramente el ámbito de la protección de los menores residenciándolo en el Instituto del Menor y de la Familia, y el ámbito de la reforma de menores, de la exigencia y ejecución de las medidas, a través de la Agencia para la Reinserción y Reeducción del Menor Infractor, en adelante ARRFMI (Cerón, 2013).

De este modo, la ARRFMI se creó a partir de la publicación de la Ley 3/2004, 10 de diciembre, por la que “se procede a la creación de la Agencia de la Comunidad de Madrid, para la reinserción y reeducación del menor infractor, encargada de la ejecución de las medidas adoptadas por los organismos judiciales en la aplicación de la legislación sobre responsabilidad penal de los menores”. En este sentido, a la ARRFMI le corresponde la ejecución de las medidas adoptadas por los órganos judiciales en aplicación de la legislación

sobre responsabilidad penal de los menores, siendo su objetivo básico, según se recoge en el artículo 2) de la ley de creación de la misma, el “concentrar, desarrollar y ejecutar programas y actuaciones que contribuyan a los fines de reinserción y educación derivados de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores y demás normas vigentes” (Cerón, 2013).

Si bien, las diferentes reformas habidas desde la entrada en vigor de la L.O. 5/2000 han venido a acentuar los aspectos represivos del sistema. A continuación se exponen los principales normas y principios reguladores de la intervención penal respecto de menores y jóvenes estableciendo como marco la L.O. 5/2000, así como sus sucesivas reformas.

2.2. La Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores

2.2.1. Exposición de Motivos de la LORPM

La L.O. de responsabilidad penal del menor (LORPM) tiene una extensa Exposición de Motivos que contiene los principios en que se inspira y un completo resumen del contenido normativo, un Título Preliminar (donde se delimita la edad de aplicación y se garantizan los derechos fundamentales) Título I (se hace una primera indicación de las competencias del juez y fiscal, el régimen de los menores de catorce años, y se explicitan los derechos más trascendentes de las víctimas), Título II (tipos de medidas, principio acusatorio, reglas sobre la aplicación y duración de las medidas, así como su modificación, prescripción, concurso), Título III (trata de la instrucción del procedimiento partiendo desde la detención, desistimiento, sobreseimiento medidas extrajudiciales, actuación instructora del ministerio fiscal, del equipo técnico, medidas cautelares), Título IV (regula la audiencia, pruebas, agentes intervinientes, conformidades) Título V (sentencia, suspensión de la ejecución), Título VI (régimen de recursos) Título VII (la ejecución de las medidas, competencias, reglas de la ejecución, refundición, expediente del menor, quebrantamiento, sustitución de medidas, reglas especiales para las medidas privativas de libertad), Título VIII (la responsabilidad civil), seis Disposiciones Adicionales, una Disposición Transitoria y siete Disposiciones Finales.

Tanto por el contenido, como por el ámbito y las disciplinas que abarca, se puede afirmar que es desde el punto de vista jurídico, la LORPM es una ley penal, una ley procesal y una ley administrativa. Asimismo, se puede considerar a su vez una ley social, preventiva de la reincidencia (aunque no puede actuar si no existe un hecho ilícito) y educativa, ya que desde el punto de vista de los instrumentos que contiene dicha Ley, delimita la responsabilidad penal, instruye, procesa, y fundamentalmente por el contenido de las medidas y el objetivo que persigue (Blanco, 2008).

La L.O. 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, insta un sistema absolutamente nuevo de enjuiciamiento de las causas en las que los imputados son menores; establece un régimen normativo para todos aquellos menores presuntamente culpables de un delito, pero exentos de responsabilidad criminal según lo planteado en los Códigos Penales.

Respecto a las características de la ley, según la UNICEF (2008), en síntesis, son cuatro los principios básicos de esta legislación: “sistema garantista, naturaleza sancionadora de contenido educativo, fines de la intervención iguales con el Derecho penal general e interés del menor como un principio de ponderación de intereses en conflicto (Etxebarria, 2003).

La LORPM a su vez supuso la primera regulación completa del ámbito penal del menor donde se establecen los principios de legalidad, tipicidad, acusatorio, de proporcionalidad, de contradicción, de oportunidad, de doble instancia, y se reconocen a los menores los derechos al juez ordinario predeterminado por la ley de defensa, a ser informado de la acusación, a ser oído, a no ser declarado culpable y a la presunción de inocencia.

Dicha ley sufrió una importante modificación en virtud a la Ley Orgánica de 8/2006, de 4 de diciembre, que implicó el endurecimiento del tratamiento penal de los menores. Se señala en la exposición de motivos como razón para este endurecimiento el considerable aumento de los delitos cometidos por personas menores de edad. Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, entre los años 2001 y 2005, inmediatamente anteriores a la modificación, este número de delitos no sólo no aumentó sino que disminuyó ligeramente. La verdadera causa del endurecimiento pudiera estar en la percepción social de impunidad respecto de los menores; percepción de impunidad derivada de diversos factores, entre ellos el largo tiempo de respuesta de los órganos judiciales de menores que en el año 2005 fue de 8,5 meses frente a los 4,7 meses de respuesta media de los juzgados ordinarios de lo penal. Y la falta de medios para la puesta en práctica

de la ley por parte de numerosas comunidades autónomas. Esta falta de medios determinó que un gran número de medidas de internamiento impuestas en sentencias firmes (precisamente las conductas delictivas más graves y generadoras de mayor alarma social), no pudieran ejecutarse a tiempo por la escasez de plazas en los centros de menores, con lo que el propio menor tenía una percepción de falta de respuesta social a su actuación delictiva. Dicho endurecimiento se pone de manifiesto entre otras medidas, en el aumento de dos a tres años en el límite para el internamiento que se establece con carácter obligatorio para el juez, si los hechos revisten extrema gravedad y el menor tenía entre 16 y 18 años, y con la posibilidad en estas circunstancias de llegar hasta los seis años (Cerón, 2013).

Las Leyes políticas, civiles y penales no siempre coinciden en la determinación de la mayoría de edad para poder ejercitar determinados derechos y para ser responsable de determinados deberes. Es frecuente que los Estados reconozcan a una edad más tardía la mayoría de edad política y civil que la de responsabilidad penal. Así, en España la mayoría de edad política y civil, se reconoce a partir de los 18 años, mientras que la penal comienza a partir de los 14 años.

2.2.2. Principales normas reguladoras de la intervención penal respecto a menores y jóvenes infractores

Como se ha expuesto con anterioridad, la doctrina española ha criticado a lo largo de su historia el modelo legal llevado a cabo a la hora de intervenir con los menores/jóvenes que llevaban a cabo conductas de origen antisocial. Por lo que con arreglo a la Ley de Protección Jurídica del Menor, la protección de menores quedó en manos de los Servicios Sociales (en particular, de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas) y de los jueces civiles.

La L.O. 5/2000 tiene un contenido predominantemente procesal; sólo algunas de las disposiciones son estrictamente de carácter sustantivo. Así mismo, dicha Ley regula todos los aspectos sustantivos, procesales y de ejecución de la intervención sobre menores y jóvenes infractores, estableciendo un sistema integrado en el sistema penal ordinario (Boldova, 2002; Giménez-Salinas, 2000). Constituye, por tanto, una legislación especial, no incorporada al Código Penal ni a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aun cuando se prevea la aplicación subsidiaria de ambos textos con el fin de completar sus disposiciones o para rellenar posibles lagunas (De la Cuesta y Blanco, 2006).

2.2.2.1. Límites de edad para la responsabilidad penal y el enjuiciamiento según la LORPM. Consideraciones forenses

El ordenamiento 5/2000 presenta una inconsistencia esencial en cuanto a la manera en que aborda la cuestión de los menores infractores. La evolución de la concepción del menor infractor, ha culminado en los últimos tiempos señalando que éste es inimputable; entiéndase por ello, no que el menor pueda equipararse al enfermo mental, sino que no puede sujetarse a un régimen de responsabilidad penal similar al que es exigible a los adultos.

De este modo, el Código Penal de 1995 (LO 10/1995); armoniza la mayoría de edad penal plena con la mayoría de edad política, marcada por la Constitución y la mayoría de edad civil, prevista en el Código Civil. El art. 19 del C.P establece que: “Los menores de 18 años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código. Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule la responsabilidad penal del menor”. Por tanto, según el C.P. los menores de 18 años son inimputables a sus efectos y quedan exentos de las penas previstas en el mismo. Esto no impide que a estos menores se les apliquen las medidas previstas en la L.O. 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (LORRPM), modificada por L.O. 7/2000, y L.O. 8/2006.

La LORPM recoge una normativa especial que se aplica a los menores con edades comprendidas entre 14 y 18 años, de forma que estos sí deberán responder de los delitos y faltas cometidos por ellos, si bien de forma diferente a como lo harían los adultos. Lo anterior pone de manifiesto una contradicción ya señalada por la doctrina, puesto que a pesar de ser inimputables según el Código Penal, los menores comprendidos entre esas edades podrán ser declarados responsables penalmente según la LORPM (Serrano, 2007). A lo anterior habría que añadir la dificultad que supone que los menores de 18 años no sean imputables penalmente según el artículo 19 del Código Penal (en adelante C.P.), y sin embargo, se les haga responsables de los delitos y faltas cometidos, aunque sea a través de una legislación especial para menores como es la LORPM. La responsabilidad, por muy menor que sea, es penal y por lo tanto se le debe considerar imputable desde esta edad para poder aplicarles dicha legislación (Serrano, 2007).

La consideración de un límite en la minoría de edad para ser imputable penalmente implica la presunción de que el sujeto tiene una personalidad con una madurez intelectual y psicológica suficiente para ser motivado por la norma penal. La imposición de la sanción justa

no debe hacerse de forma objetiva basándose únicamente en el daño producido, sino que también debe ser proporcional a la culpabilidad del autor. El grado de culpabilidad, componente subjetivo, tiene relevancia penal. Para determinar este grado de culpabilidad es necesario determinar el grado de madurez cognitiva y de decisión, lo que puede variar considerablemente según el individuo. Dependiendo del grado de madurez del menor, será capaz de discernir el bien del mal, lo moral y lo inmoral, lo legal y lo ilegal. Está claro que a una edad muy temprana, aproximadamente hasta los 9 años, el niño es incapaz de discernimiento. (Cerón, 2013).

En la doctrina no existe un acuerdo en el criterio a la hora de determinar el límite de edad en relación a la responsabilidad penal, por tanto, se debate entre si se debe tener en cuenta la edad biológica, o la razón debe ser la edad psicológica, ya que se presume que la edad biológica no otorga a todos los individuos la misma madurez psicológica

Las legislaciones de nuestro entorno cultural han optado por un *criterio biológico*, puramente *cronológico*, que ni siquiera es el mismo en todos los países. El criterio biológico facilita el automatismo en la aplicación de la ley penal del menor, pues únicamente hay que controlar la fecha y hora de nacimiento del infractor, según tramos de edad, al margen de que se compruebe la inimputabilidad o no de determinados menores. La inimputabilidad de los menores, se daría cuando faltan capacidades cognitiva, volitiva o de juicio moral según los estándares de normalidad. Cuando falta la documentación que certifica la edad del menor, se tiene que recurrir a pruebas médicas para determinarla con el más alto grado de fiabilidad (las pruebas osiométricas de la muñeca deben tener en cuenta los parámetros de la morfología de la etnia del menor) (Rodríguez, 2013).

En general, la mayoría de edad penal, se estipula entre los 15 y los 18 años, pero existen numerosas excepciones. Así, en Japón se fija a los 20 años, Bélgica a los 18, en la India a los 16 para los varones y a los 18 para las mujeres, y en la mayoría de los E.E.U.U. a los 18 años, pero algunos lo establecen a los 17 y otros a los 16, Irlanda a los 12, Gales a los 10, Escocia a los 8 o Suiza a los 7 (Ver tabla 1). Según el informe de 1998 realizado por la ONU (E/CN.15/1998/8/Add.1), entre los países que respondieron al cuestionario, la edad mínima de responsabilidad penal iría desde los 7 años (Australia, Tasmania, Egipto, India, Kuwait, Suiza y Trinidad y Tobago), hasta los 19 años (Colombia y Luxemburgo) (Rodríguez, 2013).

La *fórmula psicológica* pura, que seguramente implicaría una mayor justicia a la hora de determinar el grado de culpabilidad del menor, requiere de procesos más complicados que la determinación de la edad biológica. Entraña un estudio individualizado de las capacidades intelectual, volitiva y de juicio moral del hecho, esto es, la comprobación de si el menor sabía y comprendía lo que hacía y era dueño de su voluntad al actuar (Vázquez, 2008). En casos de inimputabilidad debida a anomalía mental u otra de las circunstancias contempladas por el artículo 20.1-2 y 3 del C.P., pueden aplicarse al menor las medidas cautelares previstas por el Código Civil. Con todo, prosigue la investigación y sigue abierta la posibilidad de aplicación de una medida terapéutica adecuada al interés del menor por vía de sentencia (art. 29).

En la LORPM la edad biológica determina el marco normativo aplicable y los tramos de edad son tenidos en cuenta para delimitar los márgenes relativamente amplios y flexibles de las medidas a imponer según la capacidad de discernir y las necesidades socioeducativas del menor. Como se ha especificado anteriormente, en España ese límite de edad se ha marcado en los 14 años, edad que coincide con la adolescencia, etapa en la que se inicia la maduración física e intelectual del menor. Por debajo de esta edad difícilmente puede el niño comprender el alcance real de sus actos y su propia responsabilidad. Desde el punto de vista de la política criminal, dado que los menores de 14 años cometen, en general, una delincuencia de menor gravedad y siendo su volumen mínimo, no merece la pena poner en movimiento toda la maquinaria judicial por lo que estos casos derivan a los servicios sociales que tienen recursos de intervención suficientes para abordar el problema. Hasta la edad de 13 años se aplica a los menores infractores la L.O. 1/1996, de 15 de enero, de *Protección Jurídica del menor*, así como lo establecido en el Código Civil (Cerón, 2013).

Cabe especificar qué ocurre con los menores de 14 años que cometen infracciones penales. Debido a que no pueden ser declarados responsables penalmente, han de ser tratados con arreglo a las disposiciones y procedimientos establecidos en materia de protección de menores que rige el Código Civil y la L.O. 1/1996 de Protección del Menor. En coherencia, el artículo 3 de la L.O. 5/2000 ordena al Fiscal (tan pronto como verifique la concurrencia de esta circunstancia de edad) remitir toda la información relevante a la entidad pública competente en materia de protección de menores, de modo que ésta pueda promover la adopción de las medidas de protección adecuadas a las circunstancias del menor (Lorca, 2001). Las entidades públicas competentes en materia de protección de menores están obligadas a intervenir directamente, con inmediatez y eficacia ante toda situación de riesgo o peligro para el bienestar del menor y a adoptar todas las medidas necesarias y convenientes de

contenido educativo e interdisciplinar (art. 14 L.O. 1/1996). En caso de riesgo importante para el desarrollo personal o social del menor, puede ordenarse la separación de su familia con objeto de eliminar los factores de riesgo provenientes de la estructura familiar; si el incumplimiento de los deberes de protección por parte de los progenitores o de la familia priva al menor de la necesaria asistencia material y moral, la entidad pública asume de manera directa y automática la tutela del menor y ha de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su guarda y protección (art. 172.1 Código Civil) (De la Cuesta y Blanco, 2006).

En cualquier caso, la intervención debe comunicarse siempre a los representantes legales del menor y aplicarse en coordinación con todas las autoridades competentes y bajo el control del Fiscal y del Juez Civil. El Fiscal debe recibir información sobre cualquier medida administrativa aplicada; tiene que controlar cada seis meses la situación del menor y promover la adopción por el Juez Civil de las medidas preventivas (art. 158 Código Civil) y, en su caso, para resolver recursos presentados contra cualquier decisión administrativa (De la Cuesta y Blanco, 2006).

Tabla 2.1 Resumen de la jurisdicción, mayoría de edad y medidas aplicadas a los menores infractores de ley por países.

PAÍS/ JURISDICCIÓN	IRRESPONSA- BILIDAD PENAL	MAYORÍA DE EDAD PENAL	DISPENSA POR MINORÍA	MEDIDAS ESPECIALES
Inglaterra y Gales Youth Courts	Irresponsabilidad plena hasta los 10 años	Mayoría a los 18 años. Asuntos en los que están implicados menores y mayores juzgados por los tribunales ordinarios	Tratamiento más indulgente para los niños hasta 14 años. Las medidas educativas son primordiales.	Posibilidad de una vía rápida de tratamiento para los delincuentes primerizos que reconocen los hechos, se priorizan las medidas educativas.
Alemania Juez de jóvenes y Tribuna de jóvenes	Irresponsabilidad absoluta de los niños menores de 14 años.	Mayoría a los 18 años, con ciertas condiciones (gravedad de los hechos, antecedentes judiciales, jurisdicciones especiales de jóvenes) son competentes para los de 18 a 21 años.	Excusados por minoría entre los 14 y 18 años, en función de la madurez en el momento de los hechos.	Procedimiento simplificado y rápido cuando el Tribunal decide no imponer más que medidas educativas.

PAÍS/ JURISDICCIÓN	IRRESPONSA- BILIDAD PENAL	MAYORÍA DE EDAD PENAL	DISPENSA POR MINORÍA	MEDIDAS ESPECIALES
Bélgica Tribunal de la Juventud	Irresponsabilidad penal hasta los 18 años, antes de los 16 años imposibilidad de aplicar una pena distinta a la educativa. Posibilidad de responsabilidad penal entre los 16 y los 18 años.	Mayoría a los 18 años, salvo infracciones relativas a la circulación con vehículo de motor. Después de los 16 años, el Tribunal de Juventud puede enviar al menor ante el Tribunal Correccional si considera que posee suficiente discernimiento.	El Tribunal de la Juventud sólo puede pronunciar medidas de guarda, protección y educación. No existe causa por minoría si el joven es enviado ante el Tribunal Correccional.	Investigación social y examen médico y psicológico obligatorio para la derivación ante el Tribunal Correccional. Asistencia jurídica de abogado obligatoria.
Escocia Children,s hearing) non professionals	No existe una edad establecida, pero hasta los 18 años predomina el aspecto educativo.	No existe sanción penal prevista, pero es posible el internamiento por razones educativas.	Tratamiento más indulgente para los niños hasta los 14 años. Las medidas educativas son primordiales.	Abogado obligatorio desde un fallo en la Corte Europea de Derechos del Hombre.
España Juez de Menores	Irresponsabilidad absoluta antes de los 14 años.	Mayoría a los 18 años; proyecto de ley para extender las condiciones de los menores a los jóvenes hasta los 21 años.	Irresponsabilidad penal para los menores de 14 años. De 14 a 18 años, escala de medidas penales reducida en relación a la escala de penas de mayores, así como endurecimiento de las medidas en la franja de edad 16 a 17 años.	Máxima relevancia al papel del Equipo Técnico en la fase de instrucción, dispone de un amplio margen para valorar la oportunidad de proseguirlo. El procedimiento de juicio rápido es inapelable. Existe obligación de abogado. Asistencia psicológica si el menor lo solicita.

PAÍS/ JURISDICCIÓN	IRRESPONSA- BILIDAD PENAL	MAYORÍA DE EDAD PENAL	DISPENSA POR MINORÍA	MEDIDAS ESPECIALES
Grecia Juez de Menores y Tribunal de Menores	Irresponsabilidad penal hasta los 7 años; entre los 7 y los 12 años, únicamente medidas educativas.	Mayoría a los 17 años cumplidos.	Detención en centros correccionales y no en prisiones. Duración máxima 5 ó 10 años, si la pena en la que incurre un adulto es superior a 10 años; pena mínima 6 meses.	Asistencia obligatoria de un abogado solamente en los casos criminales. No existe obligación de abogado para los menores.
Italia Tribunal para niños, jueces profesionales y no profesionales	Irresponsabilidad antes de los 14 años.	Mayoría a los 18 años.	No existen penas a perpetuidad, máximo 24 años. Entre los 14 y 18 años, es necesario demostrar la capacidad del menor, para comprender, para imponerle una sanción.	Posibilidad de dispensa de la pena por falta de reincidencia y si la pena impuesta es menor a 2 años. Audiencia en las 36 horas siguientes al arresto, puesta en práctica de las medidas educativas.
Luxemburgo Tribunal y Juez de la Juventud.	Ninguna responsabilidad penal antes de los 16 años. Debe ser establecida entre los 16 y los 18 años.	Mayoría a los 18 años. Para los menores de más de 16 años, posibilidad de derivación a una jurisdicción ordinaria si las medidas educativas resultan inadaptadas.	El Tribunal de la Juventud sólo puede ordenar medidas de “guarda”, prevención y educación.	No es inscrito en el registro judicial ordinario, sino en uno especial: asistencia de un abogado a puerta cerrada e investigación social, son los procedimientos utilizados.
Países bajos. Holanda Juez de Menores	Irresponsabilidad absoluta antes de los 12 años.	Mayoría a los 18 años; puede ser bajada en función de la gravedad de la infracción y de la personalidad del menor (sea o no reincidente).	Sanciones más suaves para los menores, prisión inferior a 2 años para los jóvenes entre 16 y 18 años. Aplicables al joven de 21 años, teniendo en cuenta el carácter y las circunstancias de la infracción.	Posibilidad de participar en un “proyecto” civil, no inscripción en el registro judicial. Cualquier menor debe comparecer en un plazo de 100 días después de su interpelación.

PAÍS/ JURISDICCIÓN	IRRESPONSA- BILIDAD PENAL	MAYORÍA DE EDAD PENAL	DISPENSA POR MINORÍA	MEDIDAS ESPECIALES
Portugal Jueces para niños o salas especializadas	Antes de los 12 años irresponsabilidad penal, tratamiento por parte de una comisión administrativa de “protección”.	Mayoría penal a los 16 años; los jueces para niños sólo pueden aplicar medidas educativas.	El juez correccional debe reducir la pena de prisión de un menor entre 16 y 18 años, si piensa que es favorable para la reinserción del joven.	No más de tres meses de retención antes del juicio de los menores. Asistencia psicológica si el menor lo solicita.
Suecia El Juez está asistido por dos asesores especializados en la juventud	Irresponsabilidad total antes de los 12 años.	Mayoría penal a los 15 años.	Una consideración especial debe serle concedida al joven hasta los 21 años en razón de su edad y le debe ser impuesta una pena más suave.	No existe prisión a perpetuidad antes de los 21 años.
Suiza Los cantones, están dotados de magistrados especializados en jóvenes	Irresponsabilidad total antes de los 15 años, ninguna persecución, y sólo medidas educativas.	Mayoría penal a los 18 años.	Máximo de 1 año de pena en prisión entre los 15 y 16 años. Máximo de 2 años entre los 16 y 18 años. Para los jóvenes mayores hasta 25 años, posibilidad de asistencia educativa.	La detención provisional antes del juicio está limitada.

Fuente: Tabla tomada de Cerón (2013)

2.2.2.2. Proceso penal de menores en España. Principios y singularidades de la LORPM.

La Exposición de Motivos de la LORPM enumera los principios generales que inspiran el texto: Naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora educativa, Reconocimiento expreso de todas las garantías que se derivan del respeto de los derechos constitucionales y de las especiales exigencias del interés del menor, diferenciación de diversos tramos a efectos procesales y sancionadores en la categoría de infractores menores de edad, flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas aconsejadas por las circunstancias del caso concreto, competencia de las entidades autonómicas relacionadas con la reforma y la protección de menores para la ejecución de las medidas impuestas en la sentencia y control judicial de esta ejecución. A continuación, se van a analizar éstos y otros principios que la doctrina y la jurisprudencia coinciden en que impregnan toda la normativa de menores infractores:

2.2.2.2.1. El interés superior del menor

Si hay un principio singular que gravita entorno a toda la normativa penal de los menores infractores, sin duda ese es el “superior interés del menor”. Siguiendo el tenor literal de la Convención de Derechos del Niño, La L.O. 5/2000 se refiere con frecuencia al “superior interés del menor”, que se considera postulado cardinal de toda intervención sobre menores (Juan y López, 2001). Asimismo, basta echar un vistazo a la Exposición de Motivos para comprender que el interés del menor impregna la filosofía de la Ley, encontrando su objetivo en el ámbito de las ciencias no jurídicas y basado en criterios técnicos y no formalistas, por equipos de profesionales especializados en ciencias distintas a las jurídicas. La prioridad no es sancionar, sino conseguir la recuperación del menor, la prioridad es “reeducar y reinsertar”, que tiene una doble vertiente: el propio individuo (y las personas de su entorno), procurando que se arbitren los mecanismos psicológicos y socioeducativos que permitan modificar las carencias o excesos que le han llevado a conductas antisociales y, por otra parte, actuar según el interés del menor supone igualmente hacerlo en favor de la sociedad en la que vive, si se recupera para una vida alejada de la delincuencia también se ve favorecida la población en la que vive al perder un elemento perturbador de la convivencia pacífica. El interés del menor es también el interés del bien común.

De hecho, todas las decisiones que se adopten en el marco del proceso y de la ejecución de las medidas habrán de estar sometidas a este principio. Del mismo modo, todos

los participantes en el proceso deben respetar este principio, considerado el criterio principal a seguir a la hora de la adopción de cualquier decisión y, muy en particular, en la elección de las medidas aplicables al caso (art. 7.3). De acuerdo con el interés superior del menor, la Ley deja abiertas interesantes posibilidades para el ejercicio de la oportunidad “reglada” (Alastuey, 2002b): el Fiscal queda así autorizado en algunos casos a desistir de la persecución de los hechos (art. 18 y 19), frente a lo que sucede en el sistema penal de adultos, donde rige el principio de legalidad y el Fiscal queda obligado a perseguir los hechos siempre que se comete una infracción penal.

Ello no significa que, por ejemplo, una reducción del tiempo de internamiento o de la libertad vigilada necesariamente irá en interés del menor. Este razonamiento propio de la lógica inercia de los letrados penalistas de adultos, cuyo éxito en buena medida reside en conseguir la pena de menor duración o la libre absolución de su cliente, se encuentra de frente con la orientación educadora de las medidas que la LORPM contempla; dado que, en el estudio de cada medida, durante la ejecución de las medidas los menores encuentran un exhaustivo contenido socioeducativo, sin duda el interés del menor en la mayoría de los casos será cumplir íntegramente o lo más aproximado posible, el tiempo establecido en la sentencia, es decir, cumplir con el programa individualizado que se ha aprobado expresamente en su beneficio y para su bien. El interés del menor también determinará el tipo de medida que más le puede beneficiar para garantizar su reinserción y su recuperación psicosocial y cómo no, el contenido de las medidas y su flexibilización durante la ejecución (fundamentalmente en el cambio de medidas) (Blanco, 2008).

La definición del interés superior del menor es tarea del Juez, que se ve asistido para ello por el Equipo Técnico y ha de actuar en estrecha coordinación con el Fiscal (Funes, 1998).

2.2.2.2.2. Un modelo mixto. Naturaleza formalmente penal, pero materialmente sancionadora educativa.

El derecho penal del menor es, en primer término derecho punitivo y por tanto el conjunto de normas que determinan la responsabilidad criminal de los menores de dieciocho y mayores de catorce años entendido como la respuesta sancionadora del estado ante conductas que están tipificadas como delito o falta. Sin embargo, en la línea abierta en 1992, el nuevo modelo no es un modelo punitivo, sino mixto; uniendo responsabilidad penal y reeducación, plenamente respetuoso con la Convención de Derechos del Niño.

La declaración de responsabilidad penal constituye sólo un primer paso en una intervención que debe encaminarse a la reeducación y resocialización del menor. Las principales diferencias con el sistema de adultos, vienen, por ello, después, en el campo de las consecuencias: a las responsabilidad penal formalmente declarada no le sigue una intervención punitiva sino una respuesta que se quiere pragmática (Cuello, 2001) y, a la postre, predominantemente no punitiva, materialmente educativa (González y Cuerda, 2002). Y por esta vía se permiten importantes distancias respecto de principios claves del derecho penal y procesal de adultos: la naturaleza especialmente educativa de la intervención determina diferencias procesales de importancia y la intervención del equipo técnico, así como la exigencia de especialización para todos los profesionales que participan en el proceso (Disposición Final 4ª).

Pero la verdadera revolución de la justicia juvenil de nuestro entorno en general (con las Reglas de Beijing) y del sistema español en particular, consiste en haber iniciado el camino hacia un ius puniendi del estado encaminado no sólo a castigar al autor sino también y fundamentalmente, a recuperar al individuo con un doble fin (Blanco, 2008):

A) Endógeno: dirigido a tratar de solucionar los problemas y dificultades que han llevado al menor a delinquir. Una característica bastante frecuente de los menores infractores es la escasa percepción que presentan a la hora de calificar sus acciones como injustas o antisociales, otorgándoles cierto carácter de adaptabilidad. Es decir, por ejemplo, menores inmersos en ambientes familiares donde prevalece una interacción violenta entre sus miembros, tenderán a otorgar normalidad a modos de relación agresivos, percibiéndolo como algo adaptativo. Esto no quiere decir que tales percepciones puedan ser justificación a sus conductas, por ello, la necesidad de intervención psico-socio-educativa individualizada en cada caso concreto es tan esencial a la hora de prevenir la reincidencia. Por tanto, las carencias educativas, la escasa o nula educación en valores, las elevadas dificultades en la aceptación de normas, así como de figuras de autoridad, unido a problemas psicológicos, sociológicos o coyunturales que padecen algunos menores que delinquen, hacen que necesariamente requieran de una intervención individual, especializada y multidisciplinar que haga posible evitar la reincidencia.

B) Social: desde una perspectiva social, el que las medidas judiciales contengan un marcado carácter educativo y resocializador, no responde sólo a una finalidad altruista basada en los intereses humanistas del legislador (que también) sino por el interés común que supone

que cada delincuente juvenil recuperado es un elemento perturbador menos de todos y cada uno de nuestros particulares bienes jurídicos a proteger. Un menor internado en un centro durante dos años sin más objetivo que su castigo es sin duda alguna un delincuente esperando salir; en cambio, aprovechar este tiempo para tratar de darle las herramientas que carece, desconoce, o no ha sabido aprovechar, es una oportunidad que los poderes públicos no deben dejar pasar. Las medidas educativas son tremendamente costosas y no todo el mundo acepta este gasto sólo con la finalidad primera, pero el argumento de que cada menor que se “reconduce” es un motivo menos de preocupación para la seguridad pública y un paso más hacia una población menos violenta y más respetosa con su entorno, facilita su aceptación. Ambos son compatibles y necesarios, ambos son una demanda que no puede quedar sin actuación pública.

2.2.2.2.3. Reconocimiento expreso de todas las garantías judiciales

Además de los derechos inherentes a todas las personas y los derechos del niño en particular, este reconocimiento expreso se refiere a cuatro principios elementales:

A) *El principio acusatorio*: el art. 8 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, LORPM alude al impedimento al juez de menores a imponer una medida más grave que la solicitada por el Fiscal o por la acusación particular, comparación que puede ser difícil en sanciones no homogéneas (Cervelló y Colas, 2002). Así, en el Tribunal Constitucional: la STC 17/1988 establece que “el principio acusatorio trasciende al derecho contenido en el art. 24 de la Constitución y comprende un haz de garantías adicionales, entre las cuales se encuentra la de que el pronunciamiento del órgano judicial se efectúe precisamente sobre los términos del debate tal y como se han planteado en las pretensiones de la acusación y la defensa, lo que implica que el juzgador penal está vinculado por la pretensión penal acusatoria compuesta, tanto por los hechos considerados punibles como por su calificación jurídica, de modo que el órgano judicial no puede pronunciarse sobre hechos no aportados al proceso –ni objeto, por lo tanto, de acusación– ni puede calificar estos hechos de forma que integren un delito de mayor gravedad que el definido por la acusación”.

Asimismo, este principio también comprende el derecho de todo detenido a ser informado en un lenguaje claro, comprensible y de forma inmediata de los hechos que se le imputan, las razones de su detención y los derechos que le asisten (art. 17). El principio acusatorio lo ostenta la fiscalía de menores; el art 8 de la LORPM establece que: “El Juez de Menores no podrá imponer una medida que suponga una mayor restricción de derechos ni por

un tiempo superior a la medida solicitada por el Ministerio Fiscal o por el acusador particular; si considera que las medidas solicitadas no son suficientes debe proceder conforme a lo dispuesto por el artículo 37.1 (Abel, 2004).

B) El derecho a la defensa: todo menor detenido tiene derecho en primer lugar a que se notifique inmediatamente el hecho de la detención y el lugar de la custodia a sus representantes legales, además, su declaración se llevará a cabo en presencia de quien ejerza la patria potestad; si no fuera posible o recomendable, se hará cargo otro fiscal distinto al instructor (art. 1.2). Partiendo de esta peculiaridad por razones obvias de edad y carecer de plena capacidad de obrar, todo detenido, tiene derecho a la asistencia letrada en todas las instancias policiales y procesales así como la defensa en juicio (derecho a un letrado de oficio y, en su caso, que es casi siempre por su habitual insolvencia, derecho a la asistencia jurídica gratuita en los términos de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita.

C) La presunción de inocencia: se trata de uno de los pilares de Estado de Derecho, nadie puede ser condenado mientras no se demuestre su culpabilidad. Se presume la inocencia hasta tanto en virtud de un proceso justo con todas las garantías basado en el principio contradictorio (el peso de la prueba la tiene la acusación, es decir el ministerio fiscal y en su caso, la acusación particular) se demuestre la responsabilidad penal secundum allegata et probata y se contemple en la sentencia condenatoria que, una vez sea firme, supondrá la culpabilidad del imputado.

D) Derecho a un juez imparcial: El art. 2 de la LORPM establece que Los Jueces de Menores serán competentes para conocer de los hechos cometidos por las personas mencionadas en el artículo 1 de esta Ley, así como para hacer ejecutar sus sentencias, sin perjuicio de las facultades atribuidas por esta Ley a las Comunidades Autónomas respecto a la protección y reforma de los menores. Los jueces de Menores serán asimismo competentes para resolver sobre las responsabilidades civiles derivadas de los hechos cometidos por las personas a las que resulta aplicable la presente Ley. Por tanto, el ejercicio de la potestad jurisdiccional se encomienda a un órgano jurisdiccional concreto y diferenciado del resto de procesos penales para los adultos, si bien se trata de un juez ordinario, con la categoría de magistrado y debiendo ser especializado en menores.

2.2.2.2.4. Diferenciación de diversos tramos a efectos procesales y sancionadores.

La instrucción como competencia del Ministerio Fiscal.

Probablemente de todas las peculiaridades de la normativa de responsabilidad penal de los menores, la competencia en materia de instrucción por parte del Ministerio Fiscal es la más singular desde un punto de vista procesal; mientras que en el proceso de adultos la labor instructora le compete a un juez de instrucción (con participación necesaria por parte de la fiscalía por supuesto, pero sin dirigir las actuaciones), en el caso de los menores, el fiscal adquiere un protagonismo determinante al tener encomendada (Blanco, 2008):

1. Como competencia propia de toda la fiscalía: defensa de los derechos que a los menores reconocen las leyes y vigilancia de las actuaciones que deban efectuarse en su interés y la observancia de las garantías del procedimiento.

2. Principio acusatorio: como ya se ha mencionado con anterioridad, de acuerdo con el art 8 de la LORPM le corresponde esta potestad a la fiscalía de menores.

a. El fiscal de menores dirigirá personalmente la investigación de los hechos y ordenará que la policía judicial practique las actuaciones necesarias para la comprobación de aquéllos y de la participación del menor en los mismos, impulsando el procedimiento. (art. 6 LORPM).

b. Dictará el acuerdo de incoación una vez efectuadas las diligencias pertinentes (comprobación de la edad del autor de los hechos y que éstos sean, presuntamente, de carácter delictivo), tomará declaración al menor y solicitará al juez, en su caso, las medidas cautelares que considere sean oportunas (internamiento, libertad vigilada, convivencia con grupo educativo o alejamiento de la víctima, familiares o lugares). Los hechos cometidos por menores de naturaleza presuntamente delictiva serán inmediatamente puestos en conocimiento de la fiscalía de menores quien decidirá si admite a trámite o no la denuncia. Practicará todas las diligencias que estime oportunas para la comprobación de los hechos y participación del menor o menores implicados, dando cuenta al juez de menores de la incoación del expediente de reforma a fin de iniciar a pieza de responsabilidad civil. Las únicas limitaciones que encuentra el Ministerio Público en esta fase instructora son la adopción de medidas cautelares, que se solicitan al juez (art. 28, y las diligencias de investigación que supongan restricción de derechos fundamentales que deberán ser autorizadas por el juez (art. 23.3)

c. Corresponde al Ministerio Fiscal redactar el escrito de alegaciones y proponer la medida que considere más adecuada a las circunstancias del menor y al delito o falta cometido. Para ello cuenta con el apoyo del informe del equipo técnico que se constituye como una pieza clave en todo el proceso: La decisión judicial en España sobre responsabilidad penal de menores está precedida siempre de un informe multidisciplinar llevado a cabo por el equipo técnico de la fiscalía en el que se hace una completa disección tanto de la personalidad del menor como de las circunstancias de su entorno, de tal forma que tanto la fiscalía de menores durante la instrucción como el juez durante el proceso, tienen información que facilita aplicar la norma adaptándola al propio menor y determinar su grado de implicación en los hechos y la medida más adecuada.

d. El ministerio fiscal puede desistir del procedimiento o solicitar el sobreseimiento por conciliación reparación, que también lo llevan a cabo los equipos de fiscalía.

2.2.2.2.5. Principio de flexibilidad en cuanto a la adopción y ejecución de las medidas aconsejadas por las circunstancias del caso concreto.

En este principio se introduce un factor muy determinante de la normativa sobre justicia juvenil: el cual, permite al juez, con todas las garantías y previa petición u oídas todos los agentes que intervienen en el proceso, aplicar ad hoc la normativa en muchos supuestos y modificar las medidas impuestas. La flexibilidad permite en primer lugar poder aplicar la ley y sus consecuencias a cada menor en atención a su estado psicosocial y situación personal y familiar y, lógicamente, a las circunstancias concurrentes en la comisión del delito (en la legislación española, fundamentalmente a tenor de la concurrencia de las circunstancias previstas en los números 1º, 2º, 3º del artículo 20 del Código Penal) y, en segundo lugar poder modificar posteriormente la medida impuesta en la propia sentencia, cuando según la evolución del menor y su comportamiento, así lo aconsejen (previos informes de la entidad pública que se encarga de la ejecución de la medida, del equipo técnico de la fiscalía y, por supuesto, del propio ministerio fiscal y letrado); esta posibilidad de cambiar la medida (in peius si el comportamiento es negativo o hacia una medida menos restrictiva si es muy positivo o extraordinario) se ha mostrado como la mejor herramienta motivadora de los menores durante la ejecución de la medida, pudiendo cumplir tanto la función de apercibimiento de consecuencias negativas a una escasa implicación o involución en el cumplimiento de los objetivos propuestos en su programa, como por tratarse de un acicate en su evolución hacia la verdadera reinserción social.

La LORPM lo tiene presente en muchos artículos, pudiendo destacarse el 7.3 : “ Para la elección de la medida o medidas adecuadas, tanto por el Ministerio Fiscal y el letrado del menor en sus postulaciones como por el Juez en la sentencia, se deberá atender de modo flexible, no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor”.

2.2.2.2.6. Principio de oportunidad

Gimeno (1988), lo define como: “ la facultad que al titular de la acción penal asiste para disponer, bajo determinadas condiciones, de su ejercicio, con independencia de que se haya acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor determinado” sin duda muy enlazado con el principio del superior interés del menor, el principio de oportunidad se manifiesta partiendo del carácter episódico de los hechos denunciados y atendiendo a la escasa gravedad del ilícito, la carencia de antecedentes, edad mental del menor y otras circunstancias, que, finalmente se ha plasmado en un instrumento, entiendo, de gran trascendencia jurídico-procesal en manos de la fiscalía (tanto que no existe la posibilidad de ser recurrido) como es el desistimiento del expediente contemplado en el artículo 18 de la LORPM: “El Ministerio Fiscal podrá desistir de la incoación del expediente cuando los hechos denunciados constituyan delitos menos graves sin violencia o intimidación en las personas, o faltas, tipificados en el Código Penal o en las leyes penales especiales. En tal caso, el Ministerio Fiscal dará traslado de lo actuado a la entidad pública de protección de menores para la aplicación de lo establecido en el artículo 3 de la presente Ley. Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de la tramitación de la correspondiente pieza de responsabilidad civil.” Esta excepción sobre la pieza de responsabilidad civil obedece en primer lugar a que no se desista de aquel posible daño patrimonial sufrido (de la pieza conoce el juez de menores la fiscalía no tiene competencias para archivar) y además a la parte de responsabilidad que deben asumir los padres que son quienes suelen asumir en último término los gastos ocasionados por el daño patrimonial (aunque cada vez más se está procurando por los técnicos de referencia de la ejecución de cada medida que los menores que tienen ingresos colaboren con sus padres o asuman en su integridad el montante de la responsabilidad civil) (Blanco, 2008).

2.2.2.2.7. Principio de proporcionalidad

Al hablar de las Reglas de Beijng, comentábamos con la regla quinta que viene a recomendar la utilización del denominado principio de proporcionalidad, es decir, aplicar el derecho penal como una respuesta proporcional a la edad del delincuente infractor, no sólo a

la clásica utilización del principio según el cual se busca imponer un castigo proporcional al daño causado (que también, pero adaptado a las circunstancias del menor, su edad, entorno social y psicológico). Para su ejercicio nada mejor que la enorme versatilidad de las medidas contempladas en el art. 7 y sus múltiples combinaciones para adecuar convenientemente esa proporcionalidad entre el mal producido y la respuesta más adecuada desde el derecho penal juvenil (Blanco, 2008).

2.2.2.2.8. Principio de intervención mínima

En derecho penal es un principio general basado en la necesidad de que el derecho penal debe ser la última ratio a la que acudir para solucionar los conflictos, evitar la excesiva judicialización de la vida cotidiana (sólo para los casos extremos en que ha de intervenir el estado con el peso de la Ley, que para eso está, pero actualmente se acude a la fiscalía de menores en demasiadas ocasiones para mediar en asuntos que a veces no merecen más que una reprimenda o una adecuada respuesta educativa en el ámbito familiar). Partiendo de esa idea, la LORPM contiene una eficaz y vanguardista herramienta (una vez más en manos de la fiscalía de menores) que, por el momento, está negada a la jurisdicción de adultos, como es la mediación entre las partes, la solución extrajudicial mediante la conciliación o perdón a la víctima o su reparación. Así el art. 19 establece: También podrá el Ministerio Fiscal desistir de la continuación del expediente, atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, de modo particular a la falta de violencia o intimidación graves en la comisión de los hechos, y a la circunstancia de que además el menor se haya conciliado con la víctima o haya asumido el compromiso de reparar el daño causado a la víctima o al perjudicado por el delito, o se haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico en su informe. Producido el acuerdo su contenido, la fiscalía da por concluida la instrucción, en su caso, y da traslado al juez solicitando el sobreseimiento (Blanco, 2008).

2.2.2.2.9. La participación de la víctima

El régimen de participación de la víctima en el proceso penal de menores fue modificado con el fin de ampliar la restrictiva regulación anterior. De acuerdo con el artículo 25 de la L.O. 5/2000, las víctimas no podían intervenir como actores en el proceso. Ciertamente, podían denunciar, pero la acusación era tarea del Fiscal. Durante el proceso, sólo en ciertas circunstancias era posible la intervención de la víctima, y de un modo limitado (Planchadell, 2002); también podía intervenir en la pieza separada abierta para decidir sobre

la responsabilidad civil, presentando su demanda ante el Juez (art. 61-64) (De la Cuesta, 2001b). El artículo 25 fue reformado por la L.O. 15/2003. Esta reforma atendió a las críticas suscitadas en determinados sectores por la decisión inicial de exclusión de la víctima del proceso penal de menores (Abel, 2003), que fue calificada de hasta inconstitucional (Saez, 2001). De este modo, se abrió vía a la intervención de la víctima como parte actora (acusación particular) en el proceso penal, con los siguientes derechos: ejercitar la acusación particular durante el procedimiento; instar la imposición de las medidas a las que se refiere esta Ley; tener vista de lo actuado, siendo notificado de las diligencias que se soliciten y acuerden; proponer pruebas que versen sobre el hecho delictivo y las circunstancias de su comisión, salvo en lo referente a la situación psicológica, educativa, familiar y social del menor; participar en la práctica de las pruebas, ya sea en fase de instrucción, ya sea en fase de audiencia; a estos efectos, el órgano actuante podrá denegar la práctica de la prueba de careo, si ésta fuera solicitada, cuando no resulte fundamental para la averiguación de los hechos o la participación del menor en los mismos; ser oída en todos los incidentes que se tramiten durante el procedimiento; ser oída en caso de modificación o de sustitución de medidas impuestas al menor; participar en las vistas o audiencias que se celebren; formular los recursos procedentes de acuerdo con esta Ley.

Además, el nuevo dictado del artículo 4, introducido por la L.O. 8/2006 se dedica a la declaración y reconocimiento de los principales derechos de las víctimas: medidas de asistencia, participar en el expediente con nombramiento, en su caso, de abogado de oficio, mantenerse informadas (incluso si no se han personado) de las incidencias y principales decisiones adoptadas respecto del menor, así como ejercitar las acciones civiles que les asisten (Blanco, 2008).

2.2.3. Procedimiento para determinar la responsabilidad penal de los menores en España, de acuerdo con la LORPM

El proceso se caracteriza también por el principio de celeridad y por la división entre la fase de imposición de la medida y de establecimiento y medición de la responsabilidad civil (Cuello, 2000). Si bien, el proceso declarativo se divide en dos fases: investigación (instrucción) y enjuiciamiento (audiencia). Investigación y enjuiciamiento son, por tanto, dos procesos separados y entre los dos está la fase intermedia: presentación ante el Juez. Con el fin de garantizar el principio de independencia judicial, la investigación se desarrolla bajo la

dirección del Ministerio Fiscal (Díaz, 2003). Este -y no el Juez- es la instancia competente para incoar las actuaciones (art. 16) y para cerrarlas una vez concluida la investigación (art. 30.1) (Gómez, 2002). El Fiscal lleva la investigación, dirige la acción de la policía judicial y decide sobre la práctica de todo tipo de actividades de investigación solicitadas por el abogado del menor o por la parte personada. Debe dar acceso al expediente al abogado del menor (y, en su caso, a quien “ejercitado la acción penal”) cuando lo solicite (art. 23.2), excepto si se ha declarado secreto por parte del Juez; en tal caso, el abogado del menor recibirá el expediente al final con objeto de preparar la defensa. Con todo, en esta fase, como en cualquier otra, sólo el Juez (resolviendo de forma motivada) (art. 23.3 y 26.3) es el competente para adoptar cualquier tipo de decisión restrictiva de los derechos fundamentales del menor.

Tan pronto como finaliza la fase de investigación se remite el expediente al Juez de Menores. Este, tras oír al abogado del menor (y a los de los responsables civiles), y si no hay conformidad entre las diferentes partes (art. 32), decide dar paso a la audiencia o no (art. 33). El juez de Menores dirige la audiencia con mayor ámbito de libertad que en el proceso penal de adultos. Otras diferencias respecto de éste son: no hay togas, ni hay una mayor restricción a la publicidad. La audiencia se desarrolla en presencia del Fiscal (y de las demás partes en el proceso), del abogado del menor, de un representante del Equipo Técnico y del menor, que puede estar acompañado por su representante legal, excepto decisión judicial al contrario. La entidad pública responsable de la protección o reforma de menores, así como los posibles responsables civiles pueden también tomar parte de la vista (art. 35). El contenido principal de esta fase es la práctica de la prueba y la presentación de las propuestas de las partes y del Equipo Técnico, así como oír al menor. Concluida la audiencia, el Juez tiene cinco días para hacer pública la sentencia (art. 38), estableciendo la medida, su contenido, duración y objetivos de manera clara y con explicaciones apropiadas para la edad del menor (art. 39.2). La sentencia puede ser objeto de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial (en casos de terrorismo, ante la Audiencia Nacional) en un plazo de cinco días. También se prevé un recurso ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina (art. 42).

Los procesos no pueden ser acumulares y las medidas impuestas han de ejecutarse con carácter preferente a cualquier otra medida. El proceso de ejecución está regulado por los artículos 43-60 (De la Cuesta, 2001c). El nuevo sistema se coordina con los servicios sociales competentes en protección de menores de las Comunidades Autónomas; éstas son competentes para apoyar al sistema judicial y para la aplicación de las medidas judicialmente

impuestas. La L.O. 5/2000 remite la competencia en materia de ejecución a la Comunidad Autónoma sede del Juez de Menores sentenciador (art. 45.1), la cual puede conveniar o aprobar acuerdos para la ejecución de las medidas con entidades públicas o privadas no lucrativas (art. 45.3). Esto en ningún caso supone una delegación de responsabilidad: la ejecución es llevada a cabo bajo el control del Juez de Menores (art. 44) y con pleno respeto del principio de legalidad. Se prevén disposiciones especiales para la ejecución de medidas consistentes en privación de libertad (art. 54-60). Por Real Decreto 1774/2004 se aprobó el Reglamento de ejecución de las medidas en desarrollo de la L.O. 5/2000.

La L.O. 7/2000, aprobada con anterioridad a la entrada en vigor de la L.O. 5/2000, introdujo, con todo, ciertas restricciones a los principios generales del juez natural en lo relativo a los delitos de terrorismo (Ríos, 2001), que se han visto confirmadas por la L.O. 8/2006. Al lado del importante incremento de la duración de las medidas de privación de libertad, con arreglo al nuevo texto del artículo 10, los procesos por terrorismo son de la competencia del Juez Central de Menores (en la Audiencia Nacional, Madrid) (art. 2.4).

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la jurisdicción de menores extiende su competencia respecto de los menores entre 14 y 18 años, pero establece una importante diferenciación por edad: los menores entre 16 y 18 años pueden ser sometidos a una intervención penal de mayor intensidad que los menores de 14 a 16 años de edad, particularmente en los casos de gravedad (art. 10). En ocasiones, la determinación de la edad de una persona puede ser tarea difícil: si la policía judicial tiene dudas en cuanto a la edad y o dispone de elementos para determinarla, el Juez ordinario adoptará la decisión en aplicación de las reglas establecidas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 2.9 Real Decreto 1774/2004).

El hecho de alcanzar la mayoría de edad no pone fin a la ejecución de la medida impuesta. La ejecución de la medida continúa hasta que se alcanzan sus fines o el límite temporal impuesto por el Juez. De este modo, cuando el menor a quien se le hubiere impuesto una medida de las establecidas en esta Ley alcanzase la mayoría de edad, continuará el cumplimiento de la medida hasta alcanzar los objetivos propuestos en la sentencia en que se le impuso, pudiendo el Juez, en cualquier momento dejar sin efecto la medida impuesta, reducir su duración o sustituirla por otra, bien a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, previa audiencia de éstos e informe del equipo técnico y, en su caso, de la entidad pública de protección o reforma de menores, siempre que la modificación redunde en el

interés del menor y se exprese suficientemente a éste el reproche merecido por su conducta (art. 14). No obstante, cuando las medidas de internamiento sean impuestas a quien haya cumplido veintitrés años de edad o, habiendo sido impuestas, no haya finalizado su cumplimiento al alcanzar el joven dicha edad, el Juez de Menores, oído el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 51 de la presente Ley, ordenará su cumplimiento en centro penitenciario conforme al régimen ordinario previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria (art. 15).

Por otro lado, si durante la ejecución de las medidas el mayor de 18 años recibe una pena impuesta en aplicación del C.P. y la ejecución simultánea la pena y la medida no es posible, se otorga prioridad a la ejecución de la pena. Cuando el joven cumpla medidas previstas por esta Ley y sea condenado a medidas o penas del Código Penal, el Juez o Tribunal ordenará el cumplimiento simultáneo de las mismas, si ello fuera posible. En caso contrario, la pena de prisión se cumplirá a continuación de la medida de internamiento que se esté ejecutando, salvo que el Juez o Tribunal sentenciador, tratándose de una condena por delitos graves y atendidas las circunstancias del joven, ordene la inmediata ejecución de la pena de prisión impuesta (art. 47.7).

2.2.3.1. Esquema abreviado sobre el proceso de enjuiciamiento penal a menores

De acuerdo con todos los principios que se han expuesto en apartados anteriores, a continuación se presenta de manera resumida el esquema del procedimiento para determinar la responsabilidad penal de los menores en España (Blanco, 2008):

1.- Denuncia: por un particular o las fuerzas de orden público (detención: art. 3 Reglamento)

2.- La denuncia o la detención de menor se pone inmediatamente en conocimiento de la fiscalía de menores que tiene en ese momento las siguientes opciones:

2.1.- Desistir (por edad (art. 3) o por considerar hechos de escasa importancia) (art. 18), o archivar (hechos no constitutivos de delito, art. 16)

2.2.- Incoar expediente de reforma (art. 16): instrucción por Mº Fiscal:

2.2.1.- Someterlo a solución extrajudicial por el equipo técnico y, en su caso, solicitar sobreseimiento al juez cumplida la reparación (art. 19).

2.2.2: Citar al menor para toma de declaración

2.3.- Solicitar al juez la adopción de medidas cautelares (internamiento, libertad vigilada, convivencia con grupo educativo o prohibición de aproximación) art. 28

3.- Diligencias de investigación (policía judicial, periciales, forenses, declaraciones) (las diligencias que afecten a derechos fundamentales se solicitarán al juez) (art. 23,3). Muy importante en esta fase la declaración del menor y de la víctima.

4.- Informe del equipo técnico (informe psicosocial de carácter multidisciplinar). Art. 27.

5.- Conclusión de la instrucción:

5.1 Petición de sobreseimiento al juez (art. 30).

5.2 Escrito de alegaciones (fiscalía y en su caso, acusación particular). Remisión al juez junto con las piezas de convicción.

6.- Fase de audiencia (art. 31 y ss): Agentes que Intervienen: -Juez -Fiscal -Secretario - Imputado -Letrado -Acusación particular -Representante del equipo técnico de fiscalía - Representante de la Entidad Pública (en nuestro caso, de la Junta de Andalucía, Consejería de Justicia y Administración Pública).

7.- Sentencia: absolutoria, condenatoria, suspensión del fallo (art. 40)

8.- Recursos: apelación ante la Audiencia Provincial (contra ésta, para unificación de doctrina, Tribunal Supremo).

9.- Inicio de la ejecución: la administración autonómica (art. 45.2)

2.2.3.2. Evaluación psicosocial del menor

Una de las novedades más importantes del sistema introducido por la L.O. 4/1992 fue la creación del equipo técnico, integrado por un psicólogo, un pedagogo y un trabajador social, con una tarea fundamental: asesorar al Fiscal y al Juez sobre los aspectos psicológicos, pedagógicos y la situación familiar del menor y su entorno, elementos decisivos de cara a la definición del superior interés del menor y la adopción de cualquier decisión relativa a la educación y resocialización del menor. Así, en la L.O. 5/2000 la posición del equipo técnico continúa siendo esencial (Dolz, 2001). Es el responsable no sólo de investigar e informar sobre la situación del menor, sino también de explorar las posibilidades de conciliación o reparación (mediando eventualmente entre el menor y la víctima) y de proponer la no

incoación del expediente, si así lo aconseja el interés superior del menor y el “reproche social” generado por los hechos ya se ha manifestado suficientemente, o si la persecución de los hechos se considera inadecuada debido al tiempo transcurrido desde su comisión (art. 27).

El informe que efectúa el equipo técnico se necesita también para adoptar muchas decisiones fundamentales, en particular, las que tienen que ver con medidas cautelares o firmes, su orden de aplicación, modificación, sustitución o suspensión, así como mediación.

El Real Decreto 1774/2004 desarrolla la regulación de la intervención del equipo técnico. Su artículo 4.1 establece que los equipos técnicos estarán integrados por psicólogos, educadores sociales y trabajadores sociales (eventualmente, otros profesionales si se considera necesario pueden sumarse al equipo técnico de forma temporal o permanente) seleccionados para asistir técnicamente, con arreglo a su especialización, al Fiscal y al Juez de Menores. También es competente para ofrecer asistencia profesional al menor detenido y para mediar entre el menor y la víctima. El procedimiento de mediación se desarrolla en el artículo 5 del Real Decreto 1774/2004. Con arreglo a esta regulación, el procedimiento se inicia bien por iniciativa del equipo técnico, o a solicitud del Fiscal, teniendo éste en cuenta las circunstancias concurrentes, la solicitud del abogado del menor o la iniciativa del equipo técnico, pudiendo así el Fiscal considerar más adecuado no continuar con las actuaciones; en tal caso solicita al equipo técnico su parecer acerca de la conveniencia de una solución extrajudicial adecuada a los intereses del menor y de la víctima (y la modalidad a seguir para llevarla a cabo).

2.2.4. Medidas judiciales aplicables según la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor

Cada medida judicial impuesta a un menor es singular y adaptada a sus circunstancias, cuenta con unos objetivos propuestos tanto en la sentencia, como por los técnicos responsables de cada centro. No obstante, el contenido, fines, objetivos y actividades que se han de llevar a cabo para conseguirlos, se contemplan en el PIEM (programa individualizado de ejecución de medida), el cual se debe elaborar en el plazo de 20 días (calculados según el tipo de medida, la libertad vigilada y el internamiento será desde el inicio de la medida, en el resto desde la designación del técnico, art. 10 del reglamento) y se envía al juez para su aprobación.

El estudio y análisis de las reglas para la ejecución de las medidas las regula la LORPM en el Título VI de la Ley (art. 43 a 60) y los artículos 6 a 85 del Reglamento (su práctica totalidad).

2.2.4.1. El Programa/Modelo Individualizado de Ejecución de la Medida Judicial.

La documentación de la ejecución de la medida judicial se contempla en el expediente único del menor (en el que se incluyen todas las medidas, en su caso, interpuestas por cualesquiera juzgados de menores), el PIEM y los informes de seguimiento (uno por cada medida cada tres meses en el que se informa al juez y fiscalía la evolución del menor en relación con los objetivos impuestos en el PIEM), informes de incidencias (cualquier alteración grave del cumplimiento de su medida, si es muy grave o se acumulan varios, se podrá solicitar al juez, con los informes favorables de la fiscalía y equipo técnico, oído su letrado, el cambio por otra medida más restrictiva o adecuada) e informe final, constituyen los instrumentos administrativos más importantes con que cuenta la entidad pública para la ejecución de las medidas, por cuanto constituyen el expediente administrativo del menor y el modo de comunicar al juez y, en su caso, fiscalía, todo lo relacionado con la ejecución de la sentencia.

El PIEM se sustituirá por el Modelo Individualizado de Intervención para los menores con medida cautelar. El PIEM se define como el documento de planificación de las actividades socioeducativas a desarrollar con el menor, mediante la observación, evaluación y diagnóstico del mismo, con el fin de conseguir los objetivos que regirán la intervención dentro de la ejecución de la medida, con motivo de lograr su reeducación y reinserción social. Por tanto el PIEM sistematiza y organiza la intervención a desarrollar con un menor/joven durante el período de internamiento, por lo que debe tener en cuenta el factor tiempo en su elaboración y programación, así mismo establece los objetivos a alcanzar en las actividades a desarrollar. De tal manera, marcará las líneas de actuación tanto del Equipo Técnico, como del Equipo Educativo.

La estructura del PIEM es amplia y consta de las siguientes áreas:

1. Datos judiciales del menor/joven.
2. Datos de filiación del menor/joven.
3. Metodología y fuentes de información.
4. Descripción del caso. Se recogen los aspectos fundamentales que presenta el menor/joven: genograma, historia sociofamiliar o grupo de convivencia, la

trayectoria escolar, las intervenciones institucionales previas (si las hay), las dificultades de desarrollo y socialización, los posibles tratamientos y sus efectos, procesos de regulación cuando corresponda, y otra información adicional si se considera relevante.

5. Valoración. Este apartado se realiza cuando el menor/joven haya cumplido una medida previa de internamiento cautelar. Aquí se recoge un compendio o valoración genérica de todas las áreas, asimismo debe recoger la evolución en cuanto a la disminución o no de las necesidades criminógenas detectadas, indicando, si procede, las intervenciones realizadas en relación a la conducta infractora y el perfil delictivo que presenta el menor y sus efectos, así como, si corresponde, el pronóstico de su evolución.
6. Programación. Se reflejan los objetivos, los cuales deben ser concretos y evaluables, debiendo incidir en lo esencial del caso y ser desarrollados a través de actividades que puedan ser llevadas a cabo en el tiempo previsto.

En la fase previa al juicio, el Juez de Menores puede imponer medidas cautelares (Aparicio, 2000): internamiento, libertad vigilada, prohibición de aproximarse o de comunicar con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez, custodia por una persona, familia o grupo educativo. La decisión debe fundarse en el riesgo de elusión de la justicia, así como de agresión de bienes jurídicos de la víctima por parte del menor (art. 28), y exige la solicitud del Fiscal (o, eventualmente, de quien haya “ejercitado la acción penal”) y dar audiencia a la defensa del menor y al equipo técnico. El objetivo de las medidas cautelares –que puede mantenerse hasta la audiencia o durante la resolución del recurso- es garantizar la custodia y defensa del menor. Obviamente, el tiempo transcurrido en ejecución de la medida cautelar se cuenta como tiempo de cumplimiento de la sanción, si finalmente se impone una medida.

La medida cautelar de internamiento puede ser adoptada a la vista de la gravedad y repercusión de los hechos y la alarma social originada. También deben tomarse en consideración las circunstancias sociales y personales del menor, así como el riesgo de evasión o la comisión de previos delitos graves por el menor. Con carácter general, el internamiento cautelar tenía prevista una duración máxima de tres meses, pero la reforma, L.O. 8/2006, lo elevó hasta los seis meses; pudiendo el Juez decidir su prórroga otros seis más de forma motivada y a solicitud del Fiscal (art. 28.3). El internamiento se ejecuta en un centro

designado por la entidad pública competente y conforme al régimen establecido por el Juez. El artículo 29 del Real Decreto 1774/2004, con el fin de salvaguardar y respetar la presunción de inocencia, sustituye el programa individualizado de ejecución por un modelo de intervención normalizado, comprensivo igualmente de un plan de objetivos y actividades generales y específicas adecuado a las características del menor y sus circunstancias personales, al tiempo que compatible con el régimen de internamiento y situación procesal del menor.

2.2.4.2. Medidas aplicables según la LORPM

El art. 7 de la LORPM establece un elenco de medidas realmente variado y de extraordinario valor socioeducativo de difícil superación en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. A continuación se analizarán brevemente cada una de ellas, distinguiendo tres bloques de medidas: medidas de internamiento, medidas de medio abierto y medidas de ejecución directa por el juez.

Como ya se ha mencionado con anterioridad, para la elección de la medida o medidas adecuadas se atenderá, no sólo a la prueba y valoración de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor.

A) Medidas de Internamiento

El internamiento es una medida de privación de libertad durante el tiempo que determine la sentencia a realizar en un centro adecuado y homologado por la administración, custodiado por personal de seguridad. La medida se lleva a cabo en centros específicos para menores (nunca en centros con adultos, como antes del año 2000), la ley prevé tres tipos de internamiento (Blanco, 2008):

- Internamiento en régimen cerrado: sólo se aplica esta medida para menores que han cometido delitos graves por la violencia, intimidación o peligro para las personas. El menor sometido a esta medida residirá en el centro y llevará a cabo sus actividades contempladas en el PIEM y las propias del centro. La Administración procurará facilitar al centro los medios necesarios para asegurar a los menores en edad escolar obligatoria tengan acceso a la formación reglada que les corresponda, sí como a los mayores de 16 que deseen continuar con su formación durante el tiempo de permanencia en el centro.

- Internamiento en régimen semiabierto. Los menores sometidos a esta medida residirán en el centro, pero podrán realizar fuera del mismo algunas actividades formativas, educativas, laborales y de ocio. Siempre estará condicionado a la evolución y comportamiento del menor, pudiéndose restringir o incluso anular temporalmente por el juez o mediante expediente disciplinario.
- Internamiento en régimen abierto. Las personas sometidas a esta medida llevarán a cabo todas las actividades del PIEM en medio abierto (los centros formativos, formación prelaboral, así como el desarrollo de itinerarios laborales), pero debiendo regresar al centro a pernoctar.
- Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto. Serán centros con equipos técnicos formados específicamente y contando con personal médico y psicológico clínico supervisando y actuando en todos los equipos directivos e intervención. Se realiza una atención educativa especializada o un tratamiento específico dirigido a personas que padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de sustancias psicoactivas, o alteraciones en la percepción que supongan una alteración grave. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.

La restricción y privación de libertad ocupa un importante lugar en el sistema de medidas que se imponen a los menores infractores, siendo éstas, formalmente sanciones penales, pero materialmente contienen una naturaleza sancionadora-educativa.

La ejecución del internamiento se divide en dos períodos: internamiento efectivo y libertad vigilada (art. 7.2). El internamiento efectivo debe ejecutarse en centros específicos, organizados por la Comunidad Autónoma competente directamente o mediante acuerdos con otras entidades públicas o privadas (no lucrativas). Los centros de internamiento de menores se distinguen de los establecimientos penitenciarios regulados por la legislación penitenciaria de adultos y no forman parte de la organización penitenciaria (art. 54). Ahora bien, las medidas impuestas por terrorismo han de ser ejecutadas bajo el control de personal

especializado y en centros de la Audiencia Nacional creados por el Gobierno directamente o por acuerdo con las Comunidades Autónomas (art. 54.1).

B) Medidas de medio abierto: El Juez podrá imponer al menor una o varias medidas de las previstas en la Ley con independencia de que se trate de uno o más hechos. Es muy frecuente, sobre todo en el caso de medidas de medio abierto (también en algunas de internamiento semiabierto), que se impongan varias por la comisión de un mismo hecho: se compatibilizan muy bien las de convivencia con grupo educativo con asistencia a centro de día, o tratamiento de deshabituación o ambulatorio psicológico. También se suelen acompañar a las libertades vigiladas medidas de tratamiento ambulatorio. En estos casos, cumple una labor fundamental de coordinación la administración pública, tanto para conseguir una organización de actividades, como encontrar coherencia en la intervención de todos los educadores que participan (Blanco, 2008).

- Tratamiento ambulatorio: Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida. Al tratarse de medio abierto, lógicamente es una medida adaptada a delitos menos graves que las del bloque anterior o a faltas.
 - o Psicológico: los menores sometidos a esta medida habrán de asistir al centro o lugar designado y con la periodicidad que se haya acordado por el equipo técnico o el psicólogo del equipo de medio abierto, así como cumplir las indicaciones y el tratamiento de la anomalía o alteración psíquica, o alteraciones en la percepción que padezcan.
 - o Deshabituación de adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.
- Asistencia a un centro de día: los menores sometidos a esta medida residirán en su domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la comunidad (suelen ser menores con un perfil delictivo bajo, donde el principal objetivo es conseguir la participación óptima en un estilo de vida prosocial), a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio.

- **Permanencia de fin de semana:** Las personas sometidas a esta medida permanecerán en su domicilio o en un centro hasta un máximo de treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepción del tiempo que deban dedicar a las tareas socio-educativas asignadas por el Juez. La permanencia en un centro es en realidad una medida de internamiento de corta duración. La de domicilio tiene la dificultad de que la falta de colaboración de los padres (como en tantas medidas) dificulta su cumplimiento.
- **Libertad vigilada:** esta es la medida más frecuente en toda España, es la más utilizada por todos los juzgados y la más propuesta por todas las fiscalías. En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad del menor y de su asistencia al centro formativo, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando ayudar a aquélla a superar los factores que determinaron la infracción cometida. Asimismo, esta medida obliga a seguir las pautas socio-educativas señaladas por la entidad pública o profesional encargado de su seguimiento. El menor sometido a esta medida también queda obligado a mantener con dicho profesional las entrevistas establecidas y a cumplir las reglas de conducta impuestas por el Juez, tales como: obligación de cumplir los horarios, someterse a los programas terapéuticos o de educación en valores que se le indiquen, prohibición de frecuentar ciertos lugares o personas etc.
- **Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo:** es la medida más compleja y difícil de gestionar y dirigir por las entidades y la administración. La persona sometida a esta medida debe convivir, durante el período de tiempo establecido por el Juez, con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a aquélla en su proceso de socialización.
- **Prestaciones en beneficio de la comunidad:** esta medida no podrá imponerse sin el consentimiento del menor, el cual ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad. Aunque ya no lo dice expresamente la Ley, se sigue buscando relacionar la naturaleza de dichas actividades con la naturaleza del bien jurídico lesionado por los hechos cometidos por el menor.

C) Medidas de ejecución directa por el juez.

- La prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez. El control lo llevan a cabo las fuerzas de orden público.

- Amonestación: Esta medida consiste en la reprensión del menor por el Juez de Menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, instándole a no volver a cometer tales hechos en el futuro.

- Privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas.

- Inhabilitación absoluta: medida incluida por el legislador dirigida a menores con delitos o faltas relacionadas con el vandalismo callejero de intencionalidad política- micro terrorista. Esta medida produce la privación de todos los honores, empleos y cargos públicos sobre el que recayere, así como la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la medida.

2.2.4.3. Duración de las medidas impuestas por la LORPM.

Inicialmente la legislación de menores española concibió la medida de internamiento en régimen cerrado exclusivamente para aquellos supuestos en los que en la descripción y calificación jurídica de los hechos se hubiera establecido que en su comisión se hubiera empleado violencia o intimidación en las personas o se hubiera actuado con grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas. Sin embargo, y fruto de la imagen de benevolencia e ineficiencia que se generó sobre la LO 5/2000 desde su publicación, el legislador español ha ido modificando algunos de sus preceptos, especialmente, aquellos que regulan las consecuencias al denominado núcleo duro de la delincuencia juvenil (Bernuz, 2005).

Las modificaciones han ido encaminadas a ampliar los supuestos en los que se puede aplicar la medida de internamiento en régimen cerrado, a ampliar el período de duración de esta y otras medidas y a restringir el ámbito de discrecionalidad que tiene el juez de menores a la hora de modificar, suspender o sustituir las medidas (Fernández, 2008). Tras la última reforma de la legislación que desarrolló la LO 8/2006, el Juez tiene un margen de maniobra

menor y en determinadas ocasiones dada la naturaleza de los hechos pueda adoptar una duración mayor de la respuesta, e incluso, obliga a que ésta sea internamiento en régimen cerrado, tal y como muestra la siguiente tabla (Fernández, 2012).

Tabla 2.2. Reglas especiales para la aplicación de medidas a menores infractores

Hecho/Edad	14-15 años	16-17 años
Delitos graves	Las medidas pueden alcanzar hasta 3 años. Si fuera una P.S.B.C. podrá alcanzar las 150 hs y hasta 12 fines de semana en la medida de permanencia de fines de semana	Las medidas pueden alcanzar hasta 6 años. Si fuera una P.S.B.C. podrá alcanzar las 200 hs y hasta 16 fines de semana en la medida de permanencia de fines de semana*
Delitos menos graves, pero que en su ejecución se haya empleado violencia o intimidación en las personas o se haya generado grave riesgo para la vida o la integridad física	Las medidas pueden alcanzar hasta 3 años. Si fuera una P.S.B.C. podrá alcanzar las 150 hs y hasta 12 fines de semana en la medida de permanencia de fines de semana	Las medidas pueden alcanzar hasta 6 años. Si fuera una P.S.B.C. podrá alcanzar las 200 hs y hasta 16 fines de semana en la medida de permanencia de fines de semana*
Delitos que se cometan en grupo o el menor pertenezca o actúe al servicio de una banda, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedican a la realización de tales actividades	Las medidas pueden alcanzar hasta 3 años. Si fuera una P.S.B.C. podrá alcanzar las 150 hs y hasta 12 fines de semana en la medida de permanencia de fines de semana	Las medidas pueden alcanzar hasta 6 años. Si fuera una P.S.B.C. podrá alcanzar las 200 hs y hasta 16 fines de semana en la medida de permanencia de fines de semana*
Asesinato, Homicidio, Violación, Terrorismo y delitos que en el Código penal de adultos lleve aparejada más de 15 años de prisión**	De 1 a 4 años en un centro cerrado de internamiento + 3 años de libertad vigilada (la medida no puede ser modificada hasta que no haya transcurrido la mitad de la duración de la medida de internamiento impuesta)	De 1 a 8 años en un centro cerrado de internamiento + 5 años de libertad vigilada (la medida no puede ser modificada hasta que no haya transcurrido la mitad de la duración de la medida de internamiento impuesta)
* En estos supuestos cuando el caso revistiera extrema gravedad el Juez deberá imponer una medida de internamiento en régimen cerrado de 1 a 6 años y hasta 5 años de libertad vigilada (la medida no podrá ser modificada hasta que no haya transcurrido el primer año de internamiento)		
** Cuando se trate de delitos conexos o continuados y al menos uno de ellos sea de alguno de los incluidos en esta cláusula el Juez podrá ampliar la duración del internamiento hasta los 5 años en el caso de los menores de 14 y 15 años y a 10 cuando el infractor tenga 16 o 17 años.		

Fuente: Tabla tomada de Fernández (2012)

Así, tal y como establece el artículo 10, si los hechos delictivos son delitos graves; o son menos graves pero en su ejecución se ha empleado violencia o intimidación en las

personas o se ha generado grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas; o se trata de delitos que se han cometido en grupo o se ha constado que el menor pertenece o actúa al servicio de una banda, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, el Juez puede extender la duración de la medida hasta tres años en el caso de los menores de 14 y 15 años de edad y a 6 años si el infractor es un menor de 16 y 17 años. Además, en el caso de estos últimos, si el hecho revistiera especial gravedad el Juez deberá imponer una medida de internamiento en régimen cerrado de 1 a 6 años complementada con hasta 5 años de libertad vigilada, sin que la medida pueda ser modificada ni sustituida hasta que no haya transcurrido el primer año de internamiento.

Es necesario precisar que el legislador considera especial gravedad aquellos supuestos en los que se apreciara reincidencia. Así mismo, si el menor hubiera cometido cualquiera de los delitos previstos en la cláusula del artículo 10.2, esto es, delitos tipificados en los artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del Código Penal, o de cualquier otro delito que tenga señalada en dicho Código o en las leyes penales especiales pena de prisión igual o superior a quince años, el Juez deberá imponer un internamiento en régimen cerrado de 1 a 5 años de duración, complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada de hasta 3 años si el infractor es un menor de 14 o 15 años y de 1 a 8 años más 5 años de libertad vigilada si tiene 16 o 17. En este caso, el legislador precisa que la medida no podrá ser modificada, suspendida o sustituida hasta que no haya transcurrido al menos, la mitad de la duración de la medida impuesta. Hay que insistir que en ambos supuestos (delincuentes que cometan delitos graves, menos graves violentos o en banda y que además sean reincidentes y delincuentes que cometan hechos delictivos de especial intensidad) no es que se amplíe el ámbito de discrecionalidad para que el Juez pueda, si lo desea, proporcionar una respuesta más severa, sino que le obliga a acudir al internamiento en régimen cerrado sin que pueda modificarse hasta que haya transcurrido un año en el primer supuesto o la mitad de la duración de la medida en el segundo (Fernández, 2012).

Finalmente, si se tratara de infracciones conexas o continuadas y alguna de las infracciones perteneciera a esa cláusula de delitos recogida en el artículo 10.2. la medida puede extenderse hasta los 6 años para los menores de 14 y 15 más 3 de libertad vigilada y hasta 10 más 5 de libertad vigilada para los de 16 y 17 años. Además de la ampliación de los supuestos en los que se puede adoptar la medida de internamiento en régimen cerrado, el legislador en la última reforma de 2006 también ha endurecido el régimen de cumplimiento de la medida de internamiento en régimen semiabierto, al modificar lo previsto inicialmente

respecto a cuáles son las actividades que el menor puede hacer dentro y fuera del centro una vez está sometido a dicho régimen. Así, inicialmente las personas sometidas a la medida de internamiento en régimen semiabierto estaban obligadas a residir en el centro, pero el resto de actividades formativas, educativas, laborales y de ocio se realizaban fuera del mismo. Con la nueva regulación esto no ocurrirá siempre ya que la realización de actividades fuera del centro queda condicionada a la evolución de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas, pudiendo el Juez de Menores suspenderlas por tiempo determinado, acordando que todas las actividades se lleven a cabo dentro del centro (Fernández, 2012).

2.3. Derecho Comparado Europeo en materia de enjuiciamiento de menores y jóvenes infractores

La internalización de los Derechos del Niño y su protección en el ámbito de las Naciones Unidas es un hito relativamente reciente. Sin embargo, a pesar de la juventud de estos valores “universales”, el entorno internacional ha sido uno de los espacios jurídicos que más han influido en la conformación y evolución de los sistemas de justicia juvenil en los diferentes Estados. De este modo, el problema de la delincuencia juvenil sobrepasa el marco nacional para constituir un problema a escala internacional (Barrenechea, 1972).

El estudio comparado de la legislación de los países europeos puede arrojar nuevas perspectivas de entender los modelos de intervención, y mostrar algunas de las principales diferencias entre los sistemas de justicia penal juvenil de los Estados miembros y las normativas emanadas en el seno de Unión Europea (Vité, 2008), tales como: la edad de responsabilidad penal, la duración de las medidas, los modelos de instituciones de internamiento de menores, etc.

2.3.1. Alemania

Durante la primera mitad del siglo XIX, el sistema de justicia juvenil en Alemania estaba basado en un límite de responsabilidad absoluta (desde los ocho a los catorce años, dependiendo de la región) y una segunda horquilla de edad, con responsabilidad penal atenuada, basada en el criterio de discernimiento (*Untercheidungsvermögen*) de los catorce a los dieciocho años (Sánchez, 1998).

La Ley de Tribunales Juveniles de 1974, estableció la distinción entre tres conjuntos de edades respecto a la responsabilidad penal de los menores (Sánchez, 1998):

- 1) Niños: menores de catorce años, por debajo de esta edad el menor infractor es considerado inimputable y tan solo caben medidas de carácter protector o educativo, impuestas por el Tribunal Tutelar.
- 2) Jóvenes: menores de catorce a los dieciocho años. Se aplica un criterio, sustitutivo del de discernimiento para establecer la responsabilidad penal del infractor, en base a su madurez moral y mental. La diferencia entre ambos criterios se basa en la concepción exclusiva del primero en la capacidad del joven para comprender – discernimiento-, mientras el segundo utiliza factores de formación de la voluntad y madurez mental y psicológica del menor. Durante estas edades, los menores infractores están sometidos a la autoridad del juez tutelar, que podrá adoptar medidas de naturaleza educativa, en el caso de que se constate la irresponsabilidad del joven. Para aquellos casos en los que la responsabilidad penal del joven quede probada por su madurez, se prevén en el sistema alemán tres tipos de medidas (Samaniego, 1996): las medidas educativas, las medidas correctivas (entre las que destaca el arresto juvenil, de cumplimiento en establecimientos especiales o locales para el arresto de tiempo libre) y, por último, la pena juvenil.
- 3) Jóvenes adultos: de los dieciocho a los veintiún años. Plenamente responsables a efectos penales, pero con ciertas especialidades contempladas en el *Código penal alemán*. Estas singularidades, que atenúan las penas impuestas para los adultos, son aplicadas cuando el joven adulto infractor resulte, por sus circunstancias mentales y de madurez, equiparable a un joven, o cuando el delito cometido sea de menor gravedad (Cervelló y Colas, 2002).

La *Ley de Tribunales Juveniles* ha sido modificada en varias ocasiones desde entonces; la última de ellas en 1990 (Samaniego, 1996), con la Primera Ley de Reforma de la Ley penal juvenil, de 30 de agosto, la cual se encuadra dentro del denominado “derecho moderno de bienestar social, bajo el concepto de Estado de bienestar (Dünkel, 2006).

Finalmente, el texto normativo recoge tres tipos de sanciones (Higuera, 2003):

1. Medidas educativas: reglas de conducta y ayudas a la educación. Según la doctrina alemana, las medidas educativas no se consideran penas o sanciones, pues serían la respuesta del Derecho ante las carencias educativas del menor infractor (Pérez, 2007).

2. Medidas correctivas: la amonestación, la imposición de condiciones y el arresto juvenil. No llegan a alcanzar el estatus de pena y se inspiran en la culpabilidad del autor (Samaniego, 1996).
3. Pena juvenil: pena privativa de libertad (Kaufmann, 1983).

Las penas privativas de libertad deben ser cumplidas en un establecimiento juvenil, y son consideradas la última opción cuando las medidas de corrección y educación no han funcionado previamente (Zalkind y Simon, 2004). Actualmente, no existe una ley de régimen penitenciario para los menores infractores en Alemania, por lo que su regulación se realiza por normas federales de carácter administrativo. El cumplimiento de la pena juvenil de internamiento se realizará en centros penitenciarios de menores hasta la edad de veinticuatro años, a partir de la cual deberá terminar de cumplir su pena en un centro penitenciario de adultos (Rössner, 1999).

En los últimos años, Alemania está experimentando un endurecimiento de la responsabilidad penal de menores, debido a la alarma social que se ha creado en torno a la supuesta proliferación de la delincuencia de menores (Pozuelo, 2009). Este endurecimiento ha llevado a algunos sectores de la política de los Estados federados a demandar una rebaja en la edad de responsabilidad penal a los doce años, de la misma forma que ocurre en nuestro España (Dünkel, 2006). Por otra parte, el aumento del uso del internamiento en régimen cerrado ha causado en otros sectores políticos contrarios, un movimiento para el cierre de algunos de los establecimientos de asistencia al menor en los que se cumplían estas medidas (Rösner, 1999).

2.3.2. Austria

Al igual que ocurre con Alemania, Austria tiene un sistema de justicia juvenil especial, diferente de la regulación de adultos. Son las *Leyes de los Tribunales juveniles*, publicadas en 1988 y el *Acta de Bienestar del joven* de 1989, las que regulan en exclusiva la materia penal de menores, sin que exista referencia alguna en el Código penal de Austria (Sánchez, 1998).

Según la normativa de 1989, la edad relevante para la ley administrativa penal se encuentra entre los catorce y los dieciocho años; no obstante, el *Derecho penal juvenil* propiamente dicho, es aplicado sólo en casos excepcionales, incluyendo medidas penales

atenuadas para aquellos menores de dieciocho años,, pero no para los llamados jóvenes adultos de diecinueve a veintiún años (Pérez, 2007).

Las sanciones susceptibles de imponerse a los menores infractores son básicamente las mismas que para los adultos, pero basadas en una primacía de la prevención especial y una amplia discrecionalidad de la administración de justicia (Vázquez, 2006).

Las penas privativas de libertad son cumplidas en los centros penitenciarios de adultos (ya que no existe ninguna otra institución cerrada, reformatorio o internado), con algunas particularidades, que se señalan a continuación (Jesionek, 1999):

1. La duración máxima de la pena se reduce a la mitad en todos los casos.
2. En el caso de las penas cuyo cómputo se encuentre entre los diez y veinte años, aparece en su lugar una horquilla legal de seis meses a diez años para menores infractores.
3. Cuando, para el caso de los delincuentes adultos, se debiese aplicar la pena de cadena perpetua, para aquellos que tuvieron la edad de dieciséis años en el momento de la comisión del acto delictivo, la pena se computara de uno a quince años. Para los menores de dieciséis años en el momento de la comisión de los hechos, la pena de cadena perpetua se reduce a un intervalo de uno a diez años.

2.3.3. Bélgica

La *Ley de 8 de abril de 1956 de Protección de la Juventud*, reformada en 1990, y posteriormente en 1994, en términos de Martín (2001), constituye un ejemplo de modelo de intervención tutelar o protector. En el año 2006 se produjo una reforma a la *Ley de 1965*, de la mano de 3 disposiciones legislativas (Vázquez, 2006): la *Ley de 13 de junio de 2006*, la *Ley de 15 de mayo de 2006* y, finalmente, la *Ley de 27 de diciembre de 2006*. Esta reforma sacudió los cimientos asistencialistas de la normativa belga, encaminándola hacia un modelo de justicia juvenil de responsabilidad.

Cada distrito judicial en Bélgica tiene una División de Jóvenes especializada, competente para conocer de los casos en los que un menor se encuentra implicado. Esta institución tiene potestad para derivar al menor a los Servicios Especiales para Jóvenes o, en caso de que lo considere necesario, al Juez de menores. El Juez de menores, en ningún caso

puede establecer castigos o sanciones a los menores infractores; su tarea, según el Acta de Protección de Jóvenes de 1956, es la de imponer medidas educativas (Van, Dumortier y Eliaerts, 2006).

Estas medidas pueden establecerse como provisionales durante la etapa previa al juicio del menor o, tras la sentencia, como sentencias judiciales. En referencia a los internamientos en centros especializados, pueden distinguirse varias posibilidades (Van, Dumortier y Eliaerts, 2006):

1. Internamiento en una institución privada.
2. Confinamiento en el domicilio privado.
3. Internamiento en una institución para jóvenes comunitaria: en todos los centros cerrados federales, las secciones para menores estarán separadas de la de los adultos, lo mismo que las secciones para jóvenes sujetos al sistema de protección, por una parte, y las secciones para jóvenes a los que se aplica el derecho penal de adultos, por otra parte; se hará también una distinción entre la detención preventiva y la ejecución definitiva de la pena. Dentro de la aplicación de esta medida privativa de libertad pueden distinguirse tres grados de ejecución:
 - a. Internamiento en régimen abierto o semiabierto: para los menores a partir de los doce años de edad que hayan cometido un delito considerado como moderadamente grave (tres o más años de prisión si hubieran sido cometidos por un adulto (Christiaens, Dumortier y Nuijens, 2010).
 - b. Internamiento en régimen cerrado: solamente en aquellos casos en los que el menor ha cumplido los catorce años de edad, y excepcionalmente para menores de doce años si la gravedad del hecho cometido aconseja la necesidad de custodia, para aquellos delitos considerados graves (cinco años o más de prisión) si su comisión hubiera sido perpetrada por un adulto (Christiaens, Dumortier y Nuijens, 2010).
 - c. Internamiento en una institución psiquiátrica, para aquellos menores que sufran algún tipo de necesidades terapéuticas derivadas de algún trastorno psicológico o adicción a algún tipo de sustancias estupefacientes.
4. Internamiento en el Centro Federal de *Everberg*: como único centro donde la titularidad y gestión es ejercida por el gobierno federal, Everberg recibe a menores delincuentes que hayan alcanzado la edad de catorce años y hayan sido acusados de un delito de cierta entidad (cinco años de prisión en adultos). Se trata de una

institución de carácter preventivo, que cumple esencialmente una función de custodia prejuicio (Christiaens et al., 2010). Durante la estancia en el centro el menor deberá someterse a un programa educativo.

En los casos de comisión por parte del menor de delitos especialmente graves, existe la posibilidad de transferirlo a la Corte de adultos y ser juzgado por los receptos del Código Penal. Según el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, algunos problemas continúan presentes en la regulación de los centros de menores tras las reformas de 2006, entre ellos caben destacar: la posibilidad de que los menores entre dieciséis y dieciocho años cumplan penas en prisiones de adultos sin que se haya establecido un centro o módulo especializado para su reclusión; aumento considerable de la capacidad de los centros cerrados de internamiento, como resultado de una política de detención más severa; problemática de la segregación del medio familiar y social del menor internado en instituciones de régimen cerrado, al existir una gran distancia entre las mismas y los núcleos urbanos principales (Cámara, 2011).

2.3.4. Dinamarca

En Dinamarca no existen tribunales específicos para menores infractores (Martín, 2001), y en general, carece de un sistema de justicia juvenil especializado. Considerado uno de los países de Europa que mantiene el modelo de rehabilitación o educador, la competencia para ocuparse de estas cuestiones la ostentan las *Autoridades Locales de Asistencia Social*, que también se encargan de aquellos jóvenes en situación de desamparo, ancianos, discapacitados, etc. Dicho órgano se ocupa de aquellos menores que hayan cometido infracciones penales hasta la edad de quince años, siendo los mayores de esta edad enviados ante el juez ordinario (Cámara, 2011).

De este modo, los menores de quince años no pueden ser penados, los que se encuentran entre los quince y los dieciocho años, serán remitidos desde los servicios de asistencia social a los tribunales, siguiendo un proceso especial, donde los servicios administrativos trabajan conjuntamente con la policía y el Fiscal para encontrar la “menor solución para el menor” (Martín, 2001).

En 1973 se modificó el Código Penal y las prisiones juveniles fueron abolidas, ocupando su lugar las llamadas “casas comunitarias estatales”, que más tarde (1976, con la

entrada en vigor de la *Social Security Act*), debido a su ineficacia, fueron sustituidas por cuatro departamentos de seguridad y aislamiento para niños y jóvenes que habían cometido delitos graves o se encontraban en situación de custodia (Martín, 2001). No existiendo una legislación específica sobre justicia de menores, las normas generales del procedimiento penal, descritas en el volumen IV de la Ley de administración de justicia, se aplican –salvo excepciones especiales– a los menores de edades comprendidas entre quince y diecisiete años.

Las medidas de internamiento en Dinamarca, se usan únicamente como caso excepcional, para aquellos jóvenes de más de dieciocho años, salvo en casos de reincidencia o grave criminalidad de un menor, pero nunca por debajo de los quince años. En este supuesto, la prisión es descartada y sustituida por un centro de internamiento cerrado con posibilidades de formación educativa (Martín, 2001). La colocación en prisión de los jóvenes de quince a diecisiete años tiene que llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la sección 78 de la *Ley de cumplimiento de penas*, a menos que ello no sea posible por razones de orden público. Como regla general, siguiendo lo expuesto en dicha legislación de cumplimiento de penas, los menores serán internados en centros de tipo abierto. Para los delitos especialmente graves, se pueden establecer penas de prisión de hasta seis años para menores de dieciocho años, aunque los casos son muy escasos (Cámara, 2011).

Como política más progresista, en la legislación danesa se indica que el joven infractor debe ser ayudado en su ámbito familiar, con el apoyo de los centros locales donde se le ofrecerá tratamiento y ayuda. Las sentencias de prisión a menudo son sustituidas por las de trabajos al servicio de la comunidad y, en algunos casos, por sistemas de vigilancia electrónica por los Departamentos de Corrección (Storgaard, 2010).

Con las modificaciones introducidas por la Ley N° 1561, de 20 de diciembre de 2006 para modificar la Ley de la Administración de Justicia, la custodia en régimen de aislamiento ha quedado reducida a un máximo de cuatro semanas de tiempo continuado para internos menores de dieciocho años (Cámara, 2011).

2.3.5. Escocia

La jurisdicción escocesa, en materia de Derecho penal de menores, mantiene un sistema de justicia juvenil basado en el núcleo de las ideas del modelo de intervención y de bienestar propuesto por el *Comité de Kilbrandon* en 1964 (Parsloe, 1978).

Estas ideas condujeron al nacimiento del *Children's Hearing System*; este sistema se aplica a los delincuentes menores de dieciocho años, salvo que la naturaleza de su delito sea muy grave. En lugar de comparecer ante un tribunal penal, deben asistir a una audiencia en condiciones que son menos formales y adversas que un establecimiento del tribunal. Allí, un grupo de especialistas formados en cuestiones legales referentes a menores infractores, decide, después de discutirlo con la familia, trabajadores sociales, maestros y el menor en cuestión, sobre la medida a tomar basándose en el bienestar del menor (Cámara, 2011).

Así, el *Children's Hearing System* reemplazó las antiguas cortes juveniles escocesas para implementar un Sistema más informal y multidisciplinario, al que se le encomendó la tarea de tomar decisiones sobre la educación y procurar el bienestar del menor infractor (Burman, Bradshaw, Hutton, McNeil y Munro, 2006). Este sistema supone un antecedente, basado en los principios del *Welfare State*, de las nuevas tendencias europeas en materia de justicia de menores infractores, como el *Child-Friendly System*; sus principios fundamentales, respecto del tratamiento procesal del menor, se formulan de un modo similar: una mayor participación del menor; atención multidisciplinar; mayor implicación de los padres o guardadores legales; mayor elenco de profesionales para ayudar al menor (trabajadores sociales, psicólogos, expertos en Derechos del Niño). Más tarde, con la promulgación del *Acta (Ley) de Niños de Escocia (Children's Scotland Act)*, en 1995, este sistema trasladó la responsabilidad de las autoridades locales, gestionadas por un único órgano denominado *Scottish Children's Reporter Administration* (Cámara, 2011).

El citado modelo, que aún continúa en la actualidad, se ocupa de la protección y cuidado de aquellos menores, a partir de los ocho años, que hayan cometido alguna infracción, hasta la edad de dieciséis años. Los menores por encima de dieciséis años, y hasta los diecisiete, pueden ser oídos por este órgano, pero normalmente serán juzgados por las Cortes penales de adultos (Burman et al., 2006).

Las medidas de internamiento, como es común en los países que siguen el sistema de protección, se ven como una medida excepcional y se reservan para los casos más graves. Los menores infractores por debajo de la edad de dieciséis años que hayan perpetrado un acto delictivo grave pueden ser internados en instituciones locales de dos tipos (Burman et al., 2006):

1. Local authority secure accommodation (Institución de Seguridad de la autoridad local).

2. Local authority social work departments (Departamentos de trabajo social de la autoridad local).

Una tercera posibilidad es la localización telemática de los menores por debajo de los dieciséis años, como alternativa a la medida de custodia en estos centros.

Para los infractores mayores de dieciséis años hasta los diecisiete años, se estableció en 2003 una corte especial para Jóvenes (Youth Court), pudiendo ésta imponer diferentes sanciones, entre las que destacan (Burman, et al., 2006):

1. Prisión (en centros penitenciarios de adultos).
2. Servicios a la Comunidad.
3. Restricciones de libertad.
4. Asistencia supervisada.

2.3.6. Francia

Las primeras normativas francesas, posteriores al *Código penal de 1791*, fijan la mayoría de edad penal en los dieciséis años, y establecen el criterio de discernimiento del menor para valorar su responsabilidad de cara a las leyes penales (Burman, et al., 2006).

El Decreto legislativo de 2 de febrero de 1945, sobre delincuencia juvenil, supone la reforma más importante en cuanto al sistema de justicia para menores en Francia, comenzando así el Derecho moderno de menores en Francia (Deschamps, 1999).

La edad de responsabilidad penal se encuentra reglada en las leyes francesas en los trece años de edad, existiendo, en algunos casos excepcionales o especialmente graves, la posibilidad de custodia policial de menores de edades desde los diez años. Aunque el texto de 1945 cuenta ya con cierta antigüedad, ha sido modificado en numerosas ocasiones para adaptarse a las nuevas exigencias de la política criminal francesa. La última de ellas en 2002 (9 de septiembre), cuando, por primera vez, aparece en su articulado el término sanción referido a las medidas educativas (Wyvekns, 2006).

Estas sanciones educativas podrán ser impuestas a menores infractores de edades desde los diez a los dieciocho años, estableciéndose la posibilidad de imponer penas a partir de los trece años de edad. Tal y como determina Pérez (2007): “según la doctrina francesa dominante, el Derecho Penal de menores prescinde del criterio de discernimiento,

configurando un Derecho Penal de menores basado fundamentalmente en el criterio biológico puro, a partir del cual, una vez cumplida una determinada edad, se procede a la aplicación de una medida educativa”.

El internamiento puede ser ordenado por el Juez juvenil en distintos grados de régimen de vida (semiabierto, cerrado, etc.) en centros penales específicos, aunque existe también la posibilidad de encarcelamiento en centros penitenciarios que dispongan de una sección o departamento especial para jóvenes (Deschamps, 1999). En caso de llevarse a cabo el internamiento, los menores se encuentran sometidos a un régimen de tratamiento especial, diferente al de los adultos. Así, el Juez juvenil, para cualquier menor por debajo de los dieciséis años, no podrá imponer una sentencia de duración mayor a la mitad de lo que supondría para un adulto que hubiera cometido el mismo delito (príncipe de l'atténuation de la peine pour mineurs) (Wyvekens, 2006).

En adición a los centros penales propiamente dichos, para aquellas medidas alternativas al encarcelamiento, existen algunas instituciones dedicadas al desarrollo de acciones educativas, o sometidos a un régimen especial (Wyvekens, 2006):

1. *Centres d'action éducative en milieu ouvert* (Centros de acción educativa en medio abierto).
2. *Centres éducatifs renforcés* (Centros de refuerzo educativo).
3. *Centres de placement immédiat* (Centros de internamiento inmediato).
4. *Centres éducatifs fermés* (Centros educativos cerrados).

Desde el año 2002, Francia ha comenzado un programa de delincuencia juvenil que se ha identificado con una política de endurecimiento sancionador (Cervelló y Colás, 2002). Mediante este programa se han creado nuevos centros de internamiento en régimen cerrado, que han acogido a menores a partir de los trece años. En realidad, aunque esta medida pueda suponer un giro hacia un sistema más represivo, la apuesta del gobierno francés se fundamenta en la eficaz separación de los presos menores y adultos y una mayor especialización de las infraestructuras de ejecución penal de los primeros. El gobierno francés declara así que “en pleno respeto de las normas internacionales y europeas, la creación de estos establecimientos autónomos permitirá mantener a los menores separados de los adultos, aunque, en casos excepcionales y en beneficio del interesado, un recluso que alcance la mayoría de edad pueda permanecer algún tiempo en este tipo de establecimiento. La *Ley de 9*

de septiembre de 2002 va dirigida a proporcionar atención individualizada a los menores para orientarlos hacia un proyecto de salida, proyecto que se elaborará mediante la intervención constante de los servicios de protección judicial para la juventud privada de libertad (Cámara, 2011).

Si bien, los *Decretos n° 2007/748 y 2007/749*, de 9 de mayo de 2007 (vigentes a partir del 1 de junio de 2007), relativos a la privación de libertad de los menores, y el *Decreto n° 2007-841*, de 11 de mayo de 2007, relativo al régimen de disciplinas de los menores reclusos, han modificado el régimen de reclusión de los menores infractores. El régimen de reclusión del menor ha quedado así establecido para los dos tipos de instituciones penitenciarias que acogen a menores: las *secciones de menores de las penitenciarías*, y los *establecimientos penitenciarios de menores*. Este régimen “reafirma el requisito del aislamiento nocturno, salvo por motivos médicos o de personalidad. Se apoya básicamente en un enfoque multidisciplinario y educativo del internamiento. El derecho a la educación y la formación, incluso después de la escolaridad obligatoria, ha sido reforzado y una entidad central se ocupa del seguimiento del menor: esa entidad debe ser consultada sobre las decisiones importantes que afecten a su reclusión (Cámara, 2011).

2.3.7. Inglaterra

Durante la primera mitad del siglo XX, Inglaterra plasmaba una tendencia claramente proteccionista en su sistema penal juvenil, llegando incluso a considerarse de índole *paternalista* su regulación, ocupándose no sólo de los menores infractores, sino también de aquellos en situación de desamparo (Martín, 2001).

El concepto de bienestar (*Welfare*), vino a modificar en 1930 la normativa inglesa, estableciéndose así un sistema en el que se atiende al interés del menor, que sin dejar del todo su lado más proteccionista, se orientaba a la toma de medidas adecuadas para su educación y formación. Las medidas de internamiento se contemplan para los delitos más graves, y existe un elenco de medidas alternativas, tales como la pena de multa, prestación de servicios a la comunidad, libertad vigilada del tiempo libre, etc. (Martín, 2001).

Así, en 1933 se codifica en el país anglosajón la *Ley (Act) de personas jóvenes y niños (Children and Young Persons Act)*, que más tarde sería modificada en 1963, 1969 y, finalmente, en 1989 (Sánchez, 1998). En esta normativa se diferencian dos etapas de responsabilidad del menor:

1. La de niño (Child) o menor de catorce años. A su vez, durante esta etapa de la vida del menor pueden distinguirse dos fases: la primera, en la que el niño es incapaz de actuar con dolo (Garwood-Gowers y Wheat, 2005), por lo que no se le puede considerar culpable ni imputable, cuyo límite se encontraría en los diez años; y la segunda, desde los diez a los catorce años, en la que el menor sólo será imputable con base a la existencia de discernimiento del menor y su capacidad de distinguir entre el bien y el mal (Sánchez, 1998). *La Orden de Seguridad del Niño (Child Safety Order)* de 1998, supone una inserción normativa del modelo tutelar dentro de la legislación británica. Esta orden puede ser invocada cuando un menor por debajo de la edad de responsabilidad penal, esto es, los diez años, comete un acto que hubiera sido considerado infracción de la ley de haber tenido la edad de responsabilidad penal cumplida. Esta orden, habilita al órgano conocido como *Corte de procesos de Familia (Family Proceedings Court)* a ocuparse del menor, y asegurarse de protegerlo del “riesgo de entrar en el crimen y asegurar su cuidado y control (Graham y Moore, 2006), por un plazo de tres meses, ampliable a un año en circunstancias excepcionales. A partir de la entrada en vigor de la *Crime and Disorder Act*, la presunción de no culpabilidad de los menores de diez años fue tajantemente abolida (Vázquez, 2006).
2. La de joven (*Young*), que iría desde los catorce años hasta los dieciocho. Desde los catorce años se presume la responsabilidad del joven (Sánchez, 1998), teniendo en cuenta que el sistema penal se encuentra en manos de órganos especializados, como es la *Corte Juvenil (Juvenile Court)*. El proceso penal en tal organismo judicial se estructura de manera más abreviada y simple que en las Cortes de adultos. (Graham y Moore, 2006).

Dentro de las sanciones previstas en el sistema de justicia juvenil inglés, nos encontramos con un amplio margen de discrecionalidad, atendiendo a la gravedad de los actos cometidos por el menor. Así, encontramos órdenes de supervisión del comportamiento del menor de hasta tres años de duración (*Supervision Order*) (Vázquez, 2006); libertad condicionada (*discharge o conditional discharge*); planes de acción educativos, multas (*fines*); reparación del daño; orden de acudir a un centro de asistencia para menores; servicios a la comunidad; rehabilitación dentro de la comunidad; orden de localización permanente por un período de dos a doce horas al día y por un máximo de tres meses para menores de

dieciséis años y de seis meses para los que se encuentren por encima de esta edad, tratamiento contra la drogadicción, etc. (Vázquez, 2006).

Hasta 1994, el uso de la custodia como medida a imponer para los jóvenes infractores, estaba restringida, excepto en los casos más graves, para aquellos cuya edad estaba comprendida entre los quince y los diecisiete años.

A partir del *Acta de Justicia Criminal y Orden Público (Criminal Justice and Public Order Act, 1994)* se introdujeron las *órdenes de Seguridad y Educación (Secure Training Orders)*, propuestas para menores infractores de doce a catorce años, que hubiesen cumplido al menos tres actos considerados delitos con pena privativa de libertad, constatándose para ellos ineficaz la supervisión por parte de la comunidad como medida alternativa (Graham y Moore, 2006). Estas medidas de custodia, de seis meses a dos años, tienen una doble naturaleza locativa; se trata de medidas de internamiento propiamente dicho, en las que durante la mitad de la duración de la misma el menor se encontrará en custodia, y la otra mitad, bajo la supervisión de la comunidad (Graham y Moore, 2006).

Existe, no obstante, una modalidad de ingreso en centros que no conlleva la privación de libertad. Se trata de la entrada del menor en los llamados *Centros de Atención (Attendance Center)*, que vendrían a ser los equivalentes a los centros de protección y asistencia al menor en España. En estos centros se intenta inculcar algún tipo de tarea o formación al menor para limitar su utilización del tiempo libre, con el fin de encaminarlo a fines no delictivos (Vázquez, 2006).

En 1998 entra en vigor el *Acta (Ley de Crimen y Desorden (Crime and Disorder Act)* que establece la nueva *Orden de Detención y Educación (Detention and Training Order)*, según la cual, cualquier joven infractor entre la edad de doce y diecisiete años, es ubicado en tres formas de custodia de seguridad (Graham y Moore, 2006):

1. Institución para jóvenes infractores (*Young Offender Institute*).
2. Hogar de Seguridad para niños de la Autoridad Local (*Authority Local Secure Children's Home*).
3. Las anteriores *Órdenes de Seguridad y Educación* de cumplimiento de custodia y vigilancia por parte de la comunidad.
4. Los Centros de Seguridad de Formación (*Secure Training Centres*).

La permanencia en estas instalaciones de custodia tiene un período máximo de cumplimiento de veinticuatro meses y un período mínimo de cuatro meses. La mitad de la medida se cumplirá bajo la vigilancia de la comunidad, estableciéndose así el contacto del menor con el medio social. A pesar de las reformas establecidas por el gobierno inglés para evitar los internamientos prolongados en instituciones de menores, la Juna de Justicia de Menores ha constatado un aumento en el número de penas de privación de libertad impuestas a jóvenes en el período correspondiente al año 2007-2008 (a finales de enero de 2007 había 2853 menores de dieciocho años en establecimientos seguros (2364 Instituciones para jóvenes delincuentes, 269 en centros seguros de capacitación y 220 en hogares seguros para menores. Había 2643 hombres y 210 mujeres detenidos) (Documento del Comité de los Derechos del Niño, 2008). El aumento de los internamientos, que no necesariamente tiene que corresponderse con un aumento de la criminalidad infantil y juvenil, indica para el Comité de los Derechos del Niño que la privación de libertad para menores infractores no es usada por el gobierno inglés como una medida de último recurso (Cervelló y Colás, 2002).

El gobierno de Gran Bretaña puso en funcionamiento el Programa de Supervisión y vigilancia Intensivo (*The Intensive Supervision and Surveillance Programme*) en el año 2001. La intención de la reforma era centrar el objetivo en el porcentaje de población juvenil responsable del mayor número (25%) de infracciones respecto del total de las mismas (Graham y Moore, 2006). Con este programa el cumplimiento de custodia para estos menores tenía una duración de seis meses, y durante los tres primeros meses el menor debe realizar al menos veinticinco horas de actividad educativa o a favor de la Comunidad para la reparación del daño causado.

El régimen para aquellos menores que cometen asesinato o delitos considerados graves es, no obstante, diferente. Éstos reciben el mandato judicial de detención por un largo período (*long-term detention*), cuya custodia habrá de durar lo mismo que duraría el período de prisión para un adulto que cometiera el mismo acto (Graham y Moore, 2006).

Si observamos el anterior régimen previo a la entrada en vigor de la *Crime and Disorder Act* de 1998, puede observarse cierta *involución* del sistema de internamiento de menores en Inglaterra. Esta involución no sólo podría determinarse atendiendo al establecimiento de medidas más duras, sino también a la propia naturaleza jurídica del internamiento, que retrocede con la imposición de sentencias de internamiento indeterminadas, a los principios tutelares anteriores a la Convención de 1989 (Cámara, 2011).

2.3.8. Italia

El actual Código penal italiano de 1930, diferencia entre dos períodos de responsabilidad penal del menor (Sánchez, 1998):

1. Irresponsabilidad absoluta: menores de catorce años. Aunque se les considera irresponsable penalmente hablando, en el derecho italiano cabe el establecimiento de medidas de seguridad, en supuestos de peligrosidad del menor, basadas en sanciones penales (Vaello, 2006).
2. Imputabilidad penal fundada en la capacidad de entender y de querer (*capacità di intendere e di volere*), es decir, basado en un concepto de madurez (*maturità*), que sustituye al clásico concepto de discernimiento (Sánchez, 1998).

Entre las medidas de seguridad aplicables a los menores de catorce años, el juez puede aplicar las medidas de reformatorio judicial (*reformatorio giudiziario*), es decir, el internamiento en comunidad como medida de seguridad, o la libertad vigilada (Vaello, 2006).

Las sanciones privativas de libertad en el derecho italiano son principalmente tres tipos:

1. Permanencia en casa: medida que encuentra grandes paralelismos con el antiguo arresto domiciliario español o con la actual pena de localización permanente. Se trata de un confinamiento en la propia casa del menor infractor, con posibilidad de alejarse del lugar de cumplimiento en caso de actividades relacionadas con su educación (Vaello, 2006).
2. Internamiento en la comunidad (reformatorio judicial): los antiguos *Reformatorios* que acogían a los menores en conflicto con la ley dejaron de existir en 1977 en Italia. Este procedimiento fue modificado por el *Decreto del Presidente de la República N° 448* de 1988 (Higuera, 2003), y los delincuentes juveniles se colocan ahora en un ambiente comunitario. En la actualidad, el internamiento en reformatorios judiciales es una medida de régimen abierto, aplicable solamente cuando se considera al menor individuo “socialmente peligroso” (Gatti, 1999). Consiste en el ingreso del menor en una “Comunidad pública o autorizada”, que colabore con la Administración de Justicia. Debido al escaso número de estas “comunidades” y el número limitado de plazas, el internamiento en este medio suele ser menos frecuente de lo que debiera (Vaello, 2006).

3. Custodia cautelar: cumplimiento de una medida privativa de libertad en un centro penitenciario para menores (*Istituti penali minorili*), o en los llamados centros de acogida (*Centri di prima accoglienza*). Estos centros se configuran como pequeños apartamentos, diferentes a los centros penitenciarios de adultos, que garantizan la seguridad del menor en un ambiente menos opresivo (Gatti, 1999).

La condena penal normalmente se ve reducida a un tercio de lo que un adulto podría llegar a cumplir (Gatti, 1999), y está sometida a una serie de restricciones para evitar su uso excesivo (Vaello, 2006):

- a) Situaciones de concreto peligro para la adquisición o la legitimidad de la prueba.
- b) Peligro de fuga.
- c) Peligrosidad del individuo o su pertenencia a delincuencia organizada.

2.4. Resumen

A modo de resumen, cabe destacar la promulgación del Código Penal español de 1995, en el que se establece la minoría de edad penal en los dieciocho años. Ello no significa la inimputabilidad absoluta de los menores de dicha edad, sino que, sin establecer un límite de edad inferior, se les remite a una Ley que regule la responsabilidad penal del menor. Si bien, el Código Penal establece la minoría de edad penal igual que la minoría de edad civil y constitucional; los dieciocho años. Por tanto, hay que diferenciar los conceptos de mayoría de edad penal en los dieciocho años, de responsabilidad penal en los catorce años, establecido así por la Ley Orgánica de la Responsabilidad Penal del Menor, LORPM.

Así, la LORPM establece los catorce años para exigir responsabilidad penal. Ahora bien, a su vez establece dos tramos de edades en los cuales se gradúan las consecuencias de los hechos cometidos. Dichas franjas etarias van desde los 14-15 años, y de los 16-17 años. Si bien, en esta última, desde un punto de vista científico y jurídico se adoptará un tratamiento diferenciado, constituyéndose una agravación específica de las consecuencias a nivel judicial que desembocarán delitos que se caractericen por violencia, intimidación o peligro para las personas.

Por otro lado, mencionar diferencias en el lenguaje jurídico-penal, así, niño se considera aquel que posee menos de catorce años, menor en la franja etaria de catorce a dieciocho años y joven a aquel que tiene los dieciocho años en adelante.

Según la LORPM, aquellos menores de catorce años que cometan infracciones penales, no pueden ser declarados penalmente, por lo que serán tratados con arreglo a las disposiciones y procedimientos establecidos en materia de protección de menores que rige el Código Civil y la L.O. 1/1996 de Protección del Menor. Si bien, el artículo 3 de la LORPM, ordena al Fiscal que en cuanto sea conocedor de esta circunstancia, remita la información a la entidad pública competente en materia de protección de menores. Por lo que serán éstas las que intervengan directamente, adoptando las medidas necesarias y convenientes ante cualquier situación de riesgo para el bienestar del menor, dando un contenido educativo e interdisciplinar.

Así, la Comunidad de Madrid, separó claramente el ámbito de la protección de los menores, residenciándolo en el Instituto del Menor y la Familia, y el ámbito de reforma de menores, de la exigencia y ejecución de las medidas, a través de la Agencia para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI). De este modo, la ARRMi se creó a partir de la publicación de la Ley 3/2004, de 10 de diciembre, por la que la Agencia será la encargada de la ejecución de las medidas adoptadas por los organismos judiciales en la aplicación de la legislación sobre responsabilidad penal de los menores. En este sentido, y según recoge el artículo 2 de la 3/2004, el objetivo básico es también el concentrar, desarrollar y ejecutar programas y actuaciones que contribuyan a los fines de reinserción y educación derivados de la LORPM.

La LORPM tanto por el contenido, como por el ámbito y las disciplinas que abarca, se puede afirmar que desde el punto de vista jurídico, es una ley penal, una ley procesal y una ley administrativa. De este modo, se puede considerar a su vez una ley social, preventiva de la reincidencia (aunque no puede actuar si no existe un hecho delictivo) y educativa, ya que desde los instrumentos que contiene dicha Ley, delimita la responsabilidad penal, instruye, procesa, y fundamentalmente por el contenido de las medidas y el objetivo que persigue. Si bien, si hay un principio singular que gravita en torno a toda la normativa penal de los menores infractores, éste el “superior interés del menor”, el cual se considera postulado cardinal de toda la intervención sobre menores. Asimismo, ya en su Exposición de Motivos comprende que el interés superior del menor impregna la filosofía de esta Ley, encontrando

su objetivo en el ámbito de las ciencias no jurídicas y basado en criterios técnicos y no formalistas, apoyándose en profesionales especializados en ciencias distintas a las jurídicas.

De este modo, constituye un modelo mixto; de naturaleza formalmente penal, pero materialmente sancionadora-educativa. La prioridad no es sancionar, sino conseguir la recuperación del menor, la prioridad es “reeducar y reinserir”. Aunque la Ley ha contemplado principios judiciales que le otorgan una regulación completa del ámbito penal del menor, en síntesis son cuatro los principios básicos de esta legislación: sistema garantista, naturaleza sancionadora-educativa, sistema procesal penal, pero adaptado, y el interés superior del menor como un principio de ponderación de intereses en conflicto.

En la LORPM la edad biológica determina el marco normativo aplicable y los tramos de edad son tenidos en cuenta para delimitar los márgenes relativamente amplios y flexibles de las medidas a imponer según la capacidad de discernir y las necesidades socioeducativas del menor. En casos de inimputabilidad debida a anomalía mental u otra de las circunstancias contempladas por el artículo 20.1-2 y 3 del CP, pueden aplicarse al menor las medidas cautelares previstas por el Código Civil.

Dicha Ley sufrió una impactante modificación en virtud de la Ley Orgánica 8/2006, que implicó el endurecimiento del tratamiento penal de menores, debido a la percepción de aumento de delitos perpetrados por menores, aunque las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial apuntan en esas fechas, desde el 2001 hasta el 2005, una ligera disminución. Por lo que dicha consideración de aumento, podría estar en la percepción social de impunidad derivada, por un lado, de la demora de los órganos judiciales en dar respuesta a las infracciones, y por otro, la falta de medios para la puesta en práctica de la ley por parte de numerosas Comunidades Autónomas. El mencionado endurecimiento se pone de manifiesto entre otras medidas en el aumento del tiempo de internamiento si los hechos revisten de mayor gravedad, siendo el internamiento de carácter cerrado, y de un endurecimiento de las medidas en la franja de edad de dieciséis a dieciocho años.

En la LORPM la posición del Equipo Técnico (ya introducido por la LO 4/1992) es esencial, ya que es responsable no sólo de investigar e informar sobre la situación del menor, sino también de explorar las posibilidades de conciliación o reparación (mediando entre el menor y la víctima) y de proponer la no incoación del expediente, si así lo aconseja el interés superior del menor y el reproche social generado por los hechos se considera suficiente, o si la

persecución de los hechos se considera inadecuada debido al tiempo transcurrido desde su comisión.

Si bien, cada medida judicial impuesta a un menor es singular y adaptada a sus circunstancias, cuenta con unos objetivos propuestos. No obstante, el contenido, fines, objetivos y actividades que se han de llevar a cabo para conseguirlos, se contemplan en el Programa Individualizado de Ejecución de la Medida Judicial (PIEM), el cual se define como el documento de planificación de las actividades socioeducativas a desarrollar con el menor, sobre la base de la observación, evaluación y diagnóstico del mismo y de su entorno, con el fin de conseguir los objetivos que regirán la intervención dentro de la ejecución de la medida, con motivo de lograr su reeducación y reinserción social.

La LORPM posee un elenco variado de medias socioeducativas, en las que para su elección se atenderá, no sólo a la prueba y valoración de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, a personalidad y el interés del menor. El conjunto de las medidas aplicables incluye las siguientes: medidas de internamiento; cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico en las tres modalidades. Recoge medidas en medio abierto; tratamiento ambulatorio, bien psicológico o por deshabituación de sustancias psicoactivas, asistencia a un Centro de Día, permanencia de fin de semana, libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo y prestaciones en beneficio de la comunidad. Y por último, recoge medidas de ejecución directa por el juez; prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, amonestación, privación del derecho de conducir ciclomotores o vehículos a motor, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas e inhabilitación absoluta para lo cual puede establecer privación de honorarios, empleos y cargos públicos.

Capítulo III:

**Análisis conceptual y
epidemiológico en materia de
menores infractores**

3.1. Delimitación y características del concepto de menor infractor

La O.M.S. (1973) definió al delincuente como: “Cualquier sujeto cuyo comportamiento perjudica a otro individuo o a un grupo, rebasando los límites tolerados por los grupos sociales que presentan las normas y los valores de una sociedad en un momento de su desarrollo (Krug, Dahlber, Mercy y Zwi, 2002). La delincuencia de menores es uno de los fenómenos que produce más alarma social en las sociedades europeas aunque las cifras de delitos cometidos por menores tanto en España como en otros países de Europa no son tan elevadas como suele considerarse por la opinión pública (Columbu, Martínez y Redondo, 2012; Redondo, Martínez y Andrés, 2011). En una sociedad desarrollada como la española –y en conjunto las europeas- el volumen total de delincuencia y violencia es relativamente bajo y estable como consecuencia del aceptable funcionamiento de los mecanismos globales de integración social (Giménez-Salinas, 1998; Killias y Aebi, 2000; Kury, Obergfell-Fuchs y Würger, 1994; Redondo, 2001; Stangeland, 1995a, 1995b, 1996c).

La conducta antisocial es un problema que presenta serias consecuencias para niños y adolescentes. Los menores que manifiestan conductas antisociales se caracterizan, en general, por presentar conductas agresivas repetitivas, y, en particular, un quebrantamiento continuado de las normas tanto dentro, como fuera del hogar. Estos actos constituyen con frecuencia problemas de referencia para el tratamiento psicológico, jurídico y psiquiátrico. Aparte de las elevadas consecuencias inmediatas de las conductas antisociales, tanto para los propios infractores, como para otras personas con quienes interactúan, los resultados a largo plazo, a menudo, también son desoladores (Peña, 2005). Cuando los niños se convierten en adolescentes y adultos, sus problemas suelen continuar en forma de conducta criminal, consumo de sustancias tóxicas, afectación psiquiátrica grave, dificultades de adaptación manifiestas en el trabajo y la familia y problemas interpersonales (Kazdin, 1988).

El término de conducta antisocial hace referencia básicamente a una diversidad de actos que violan las normas sociales y los derechos de los demás. No obstante, el término de conducta antisocial es bastante ambiguo, y, en no pocas ocasiones, se emplea haciendo referencia a un conjunto de conductas claramente sin delimitar. El que una conducta se catalogue como antisocial, puede depender de juicios acerca de la severidad de los actos y de su alejamiento de las pautas normativas, en función de la edad del niño, el sexo, la clase social y otras consideraciones (Kazdin y Bucla-Casal, 2002). La delincuencia implica como fenómeno social una designación legal basada normalmente en el contacto oficial con la

justicia. Hay, no obstante, conductas específicas que se pueden denominar delictivas. Éstas incluyen delitos que son penales si los comete un adulto, además de una variedad de conductas que son ilegales por la edad de los jóvenes, tales como el consumo de alcohol, conducción de automóviles y otras conductas que no serían delitos si los jóvenes fueran adultos (Cerón, 2013). En España, esta distinción es precisamente competencia de los Juzgados de Menores (antes Tribunales Tutelares de Menores), que tienen la función de conocer las acciones u omisiones de los menores que no hayan cumplido los 18 años (antes 16 años) y que el Código Penal u otras leyes codifiquen como delitos o faltas, ejerciendo una función correctora cuando sea necesario, si bien la facultad reformadora no tendría carácter represivo, sino educativo y tutelar (Lázaro, 2001).

Por tanto, a la hora de conceptualizar la Conducta delictiva, ésta se encuadraría como una forma de desviación; como un acto prohibido por las leyes penales de una sociedad. Se utiliza así para denominar las conductas de los menores de edad, que se encuentran tipificadas en la ley penal como delitos. Es decir, tiene que existir una ley anterior a la comisión que prohíba dicha conducta y tiene que ser de carácter penal, que el responsable ha de ser sometido a la potestad de los Tribunales de Justicia. Pero de la misma forma que la desviación, el delito es igualmente relativo, tanto en tiempo como en espacio. Las leyes evolucionan, y lo que en el pasado era un delito, en la actualidad puede que no lo sea (consumo de drogas) o al contrario. Asimismo, el espacio geográfico limitaría igualmente la posibilidad de que una conducta pueda ser definida como delito o no (Garrido, 1987).

El delincuente juvenil, por tanto, es una construcción sociocultural, porque su definición y tratamiento legal responden a distintos factores en distintas naciones, reflejando una mezcla de conceptos psicológicos y legales. Técnicamente, un delincuente juvenil es aquella persona que no posee la mayoría de edad penal y que comete un hecho que está castigado por las leyes. La sociedad por este motivo no le impone un castigo, sino una medida de reforma, ya que le supone falta de capacidad de discernimiento ante los modos de actuar legales e ilegales. Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, en España ha surgido actualmente una reforma de los antiguos Tribunales de Menores, así como de las leyes relativas a los delincuentes juveniles, la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal del menor, reformada posteriormente, por la Ley Orgánica 8/2006. Tales reformas han procurado conseguir una actuación judicial más acorde con los aspectos psicológicos del desarrollo madurativo del menor infractor (Peña, 2005).

Sin embargo, no todos los países mantienen el mismo concepto de “delincuencia juvenil” o “menor infractor”. Unos consideran que existe delincuencia o infracción exclusivamente cuando los menores realizan las mismas conductas que los mayores de edad infringiendo el ordenamiento jurídico penal. Otros países consideran que, además, son conductas tipificadas como delitos las infracciones de las normas sociales o morales, constituyendo “delitos por razón de la condición jurídica”. Aquí, se incluirían actividades como ausencias injustificadas o desobediencia en la escuela y en la familia, ebriedad en público, drogadicción, haraganería, crueldad con los animales o dar muestras de disturbios de comportamiento, actos relacionados con un delito moral o sexual, el juego, la mendicidad o la asociación con personas de naturaleza criminal o inmoral o que habitualmente perjudican su propia naturaleza o la de otras personas (ONU, 1998).

Asimismo, se equiparan conductas simplemente desviadas o inadaptadas a actividades delictivas, lo cual supone dar un ámbito excesivo o innecesario a la delincuencia juvenil, ya que existen otros medios de control social más adecuados que el derecho penal para reconducirlas. La denominación más realista de estas circunstancias es la de “jóvenes en situación de riesgo social” a los que hay que prestar una especial atención para prevenir que cometan infracciones penales (Cerón, 2013).

El concepto de delincuencia referida a los menores se debe basar en los mismos principios que en los adultos. Así, el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: “toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella, puede desarrollar libre y plenamente su personalidad” y que “en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”. En España, sólo son conductas delictivas para los menores aquellas infracciones de las normas jurídico-penales que están recogidas en el Código Penal (Cerón, 2013).

Sentado el concepto de menor infractor, debemos diferenciarlo de otros conceptos próximo o afines, fundamentalmente de aquellos que por tener un terreno común con la delincuencia, se prestan con frecuencia a la confusión (Herrero, 1997). Si bien, un concepto que se utiliza en multitud de ocasiones de manera indistinta es el de desviación social,

entendiéndose éste como cualquier comportamiento que se aleja de las normas colectivamente aceptadas por la sociedad.

Por tanto, la conducta delictiva sería una parte integrante de un concepto más general de desviación social (Cohen, 1965; Pitch, 1980; Vázquez, 2003). Desde esta aproximación, la desviación se entendería como aquel tipo de conductas o incluso, como señalan Higgins y Buttler (1982) de ideas o atributos personales que violan una norma social (Binder, 1988). En este sentido, la norma social podría conceptualizarse como criterios esencialmente descriptivos que definen un rango de comportamientos mayoritarios y “típicos” dentro de un determinado sistema sociocultural. Lo desviado, sería a su vez, lo “raro”, lo “distinto”, aquello que se aparta del “término medio” dentro de unas coordenadas sociales dadas. Por tanto, la desviación social no constituiría únicamente lo “infrecuente”, sino que presentaría además connotaciones negativas, reprobables o sancionables para, al menos, en parte de los miembros de una estructura social. Pero, la desviación social no constituye un delito, ya que éste no se refiere a transgresiones de la ley, sino que se refiere a la no observancia de normas, ya sean legales o no (Cerón, 2013).

3.2. Indicadores sobre justicia de menores infractores

3.2.1. Introducción

La delincuencia juvenil se configura en la actualidad como uno de los fenómenos que han ido ganando espacio en la preocupación de la sociedad, y es uno de los problemas criminológicos a los que se viene prestando una permanente observación en diferentes ámbitos internacionales (Comité Económico y Social Europeo, 2006).

Las conductas protagonizadas por los jóvenes obtienen, en la mayoría de las ocasiones, una relevancia social mayor que las realizadas por los adultos, en especial las de carácter negativo (Fierro, 2006), y se genera así una percepción social especialmente adversa respecto de los menores infractores (Vázquez y Serrano, 2004).

En España, hasta fechas muy recientes, no existían estudios sobre la opinión pública y actitudes punitivas (Varona, 2008), lo que no ha sido obstáculo para que algunas de las reformas llevadas a cabo en la LORPM, se hayan justificado según la exposición de motivos de la Ley Orgánica 8/2006 en: “Un aumento considerable de delitos cometidos por menores, lo que ha causado gran preocupación social y ha contribuido a desgastar la credibilidad de la Ley por la sensación de impunidad de las infracciones más cotidianas y frecuentemente cometidas por estos menores, como son los delitos y faltas patrimoniales (BOE, 2006).

La preocupación social sobre el fenómeno de la delincuencia juvenil es uno de los presupuestos que legitiman la reforma (Fernández, Bartolomé, Rechea y Megías, 2009; Fernández y Tarancón, 2010a). La disociación entre percepción social y la realidad criminal quedó patente en la anteriormente citada reforma de la LORPM, llevada a cabo en el 2006, pues aunque algunos datos podían poner de manifiesto un aumento de la delincuencia juvenil, otros estudios cuestionaban tal afirmación, como reseñaban algunos trabajos (Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, 2006; Gabinete de Estudios de Seguridad Interior de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, 2006; Montero, 2009; Serrano, 2009; Vázquez, 2007).

La percepción social viene siendo un factor determinante en las reformas penales (Varona, 2009), y dirige la política criminal hacia una mayor punición (Vázquez, 2006), sustentada en una “tolerancia cero”. Así, algunos estudios de la Universidad de Castilla-La Mancha (2008-2009), ponen de manifiesto una percepción distorsionada acerca de los jóvenes, la delincuencia y la justicia juvenil, así como el volumen de la misma. Si bien, en un estudio llevado a cabo por Fernández y Tarancón (2010b) sobre el conocimiento y actitud pública hacia la delincuencia juvenil, concluyeron que, no existen datos relevantes que permitan calificar a los ciudadanos de punitivos o demandantes de una respuesta más severa hacia los delitos cometidos por menores.

La importancia que la sociedad concede al fenómeno de la delincuencia juvenil requiere que se desarrollen respuestas efectivas, que habrán de construirse, principalmente, sobre tres pilares básicos: prevención, medidas sancionadoras educativas e integración y reinserción social de los menores infractores, pero además, la distorsionada percepción social haría necesarias políticas de información adecuadas, que contribuyan a situar en sus justos

términos esa percepción, en ocasiones exageradamente negativa, a lo cual contribuye el conocimiento y análisis de datos (Montero, 2014).

Con carácter previo, se reseñará la evolución de la población española de entre 14 y 17 años desde la fecha de entrada en vigor de la LORPM, y que pone de manifiesto un descenso global de la población en esta franja de edad (un 9,80% entre el 2001 y 2012) cuando el total de la población española aumentó un 14,95%, lo que ha supuesto que el peso de la franja de edad de entre 14 y 17 años sobre el volumen total haya disminuido más de un 1%, y pasar de representar el 4,68% de la población a sólo el 3,67%. Este descenso de la cantidad de menores no es uniforme, pues mientras que el número de españoles decreció un 19,15%, el de extranjeros censados aumentó un 333,81% (Montero, 2014).

En España, la atribución a las comunidades autónomas de las competencias para la ejecución de las medidas impuestas por los juzgados de menores hace muy difícil obtener un mapa nacional completo y homogéneo sobre la delincuencia juvenil del país, y son pocas las fuentes de información que ofrecen una visión global (Montero, 2014).

En el presente trabajo a la hora de cuantificar indicadores sobre la justicia de menores infractores, se ha atendido a la prevalencia e incidencia, habiendo tomado como referencia tres fuentes diferentes de información. Por un lado, a nivel nacional, la “Estadística de condenados: menores” que confecciona el Instituto Nacional de Estadística, los datos de las memorias de la Fiscalía General del Estado, y de manera más concreta, los datos de la memoria de la Agencia de Reeducción y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad Autónoma de Madrid. Si bien, dichas fuentes atienden a variables y métodos diferentes en la recogida de información, por lo que no es posible la comparación de los datos, pero nos aporta una visión global de dicha prevalencia. De las tres fuentes, se recogen datos del año 2013, dado que en la elaboración del presente trabajo, aún no se había publicado ninguna de las memorias del 2014.

De todas ellas, la más completa es la “Estadística de condenados: menores”, que confecciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) desde 1998, dado que concreta los datos tanto a nivel global, como por Comunidades Autónomas. Su objetivo es el estudio sociodemográfico y criminológico de los menores condenados por sentencia firme. Y en el análisis de la información que esta estadística facilita es preciso tener presente el cambio

metodológico producido a partir del 2007. Hasta el año anterior, la recogida de datos se realizaba trimestralmente, mediante un boletín en papel que cumplimentaban los juzgados de menores por cada sentencia dictada. A partir del 2007, con base en el acuerdo de colaboración suscrito entre el INE y el Ministerio de Justicia, se ha cambiado la fuente primaria de los datos para elaborar esta estadística, con la finalidad de mejorar la cobertura y calidad de la misma, realizándose una explotación del Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores a partir de las sentencias firmes inscritas en el mismo, actualmente regulado en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (BOE núm. 33, de 7 de febrero de 2009), que derogó el Real Decreto 232/2002, de 1 de marzo, por el que se regulaba el registro de sentencias sobre responsabilidad penal de los menores. Este cambio en la forma en que se lleva a cabo la recogida de información hace que no sea posible realizar un estudio de la evolución experimentada en la delincuencia juvenil desde la entrada en vigor de la LORPM (Montero, 2014).

Los resultados de esta estadística se publican a nivel nacional y autonómico, con periodicidad anual en la página web del INE (www.ine.es). La publicación se lleva a cabo en el mes de octubre del año siguiente al de referencia, por lo que en las fechas que se elabora este trabajo, los últimos datos publicados corresponden al 2013.

En el marco concreto de la delincuencia juvenil en España, resulta muy complicado tener un conocimiento real de su volumen, pues junto con el difícil acceso a algunos datos (por su falta de publicación o su dispersión), también hay retrasos en su publicación, por lo que los datos conocidos raras veces son actuales, y también cambios en la forma de recogida de la información, que hacen que no siempre sean comparables en el tiempo estadísticas provenientes de una misma fuente, como antes se expuso en relación con la “Estadística de condenados: menores” del INE (Montero, 2014).

A estas dificultades se añade el hecho de que la ejecución de medidas impuestas por los juzgados de menores es competencia de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, lo que hace que no existan unas “estadísticas penitenciarias” nacionales más allá del boletín estadístico que confecciona el Observatorio de Infancia, y que tiene importantes errores metodológicos (Montero, 2014).

Por otro lado, se han utilizado también los datos de las Memorias de la Fiscalía General del Estado para concretar la evolución de la criminalidad en Menores, aunque una vez más dichas Memorias referían que la cifra global de Diligencias Preliminares incoadas en las Fiscalías no era un indicador fiable a la hora de valorar la evolución cuantitativa de la delincuencia juvenil. Esta dificultad es debida a la diversidad de criterios registrales, las cuales motivaron que se celebrasen unas Jornadas anuales de Delegados de Menores en 2012, donde se elaboran unas conclusiones sobre el registro de causas, aprobadas por el Excmo. Sr. Fiscal General del Estado el 28 de enero de 2013. Para el presente trabajo se han utilizado los datos publicados en 2014 de la memoria de 2013.

Por último, como otra fuente principal de recogida de información, se va a utilizar los datos que aporta la Agencia de Reeducción y Reinserción del Menor Infractor ARRFMI en su memoria de 2013, publicada también en el 2014, en la cual se describen datos epidemiológicos como la edad, sexo, país de procedencia, delito cometido, así como relacionando dichas variables con las medidas impuestas.

A la hora de analizar y cuantificar el fenómeno de la delincuencia juvenil puede atenderse a diferentes indicadores, como son la prevalencia, la incidencia y la estabilidad delictivas. La prevalencia se refiere a la extensión que presenta la delincuencia juvenil, en cuanto a la proporción de jóvenes, del conjunto de la población juvenil, que participan en actividades delictivas. La incidencia concierne a la frecuencia, menor o mayor, de conductas delictivas realizadas por cada sujeto, es decir, la intensidad de su comportamiento delictivo. Mientras que la estabilidad es la duración de las actividades infractoras en un determinado individuo, los años a lo largo de los cuales comete delitos. Dada la relevancia para el presente estudio, a continuación se presentan estos conceptos con mayor detalle (Redondo, Martínez y Andrés-Pueyo, 2011).

3.2.2. Prevalencia

La prevalencia delictiva, o proporción de menores que cometen infracciones es una medida social y global del delito. Distintas investigaciones han estimado que entre los adolescentes y jóvenes existe una elevada prevalencia delictiva, de hasta el 80%, pero circunscrita generalmente a conductas leves (Farrington, 2008; Howell, 2009; McMurrin y Hollin, 1993; Rechea, 2008; Redondo y Garrido, 2001). La mayor prevalencia o participación juvenil en conductas antisociales tendría lugar en el intervalo de edad de 16-17 años

(Farrington, 1992, 2008; Garrido, Stangeland, y Redondo, 2006; Rechea, 2008; Sampsons y Laub, 2005).

3.2.2.1. Datos publicados por la Fiscalía General del Estado en la Memoria de 2013

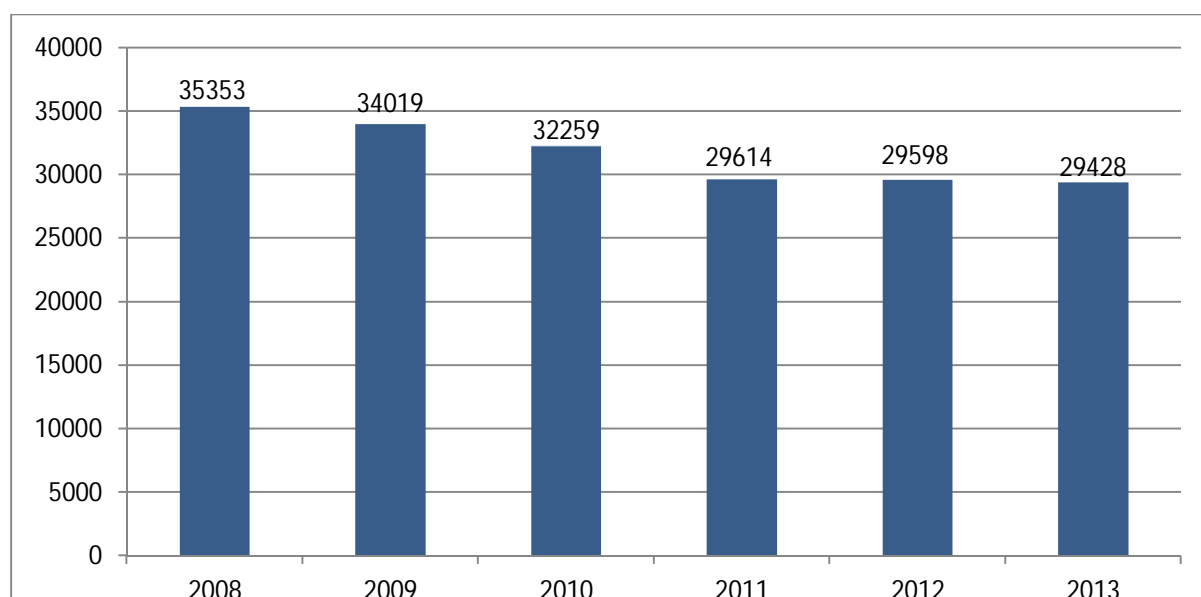
3.2.2.1.1. Diligencias Preliminares

Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) (2014) correspondiente al año 2013, y en los ejercicios anteriores a 2012 se constataron sucesivos decrementos en la incoación de Diligencias Preliminares, que reflejaban una tendencia a la baja de la delincuencia juvenil. En el último trimestre de 2012, la aplicación de las nuevas directrices registrales en muchas Secciones se tradujo en una variación significativa del número de Diligencias Preliminares abiertas, que pudo determinar que en 2012 se observara un descenso del 4,92% en la cifra global de 97.817 Diligencias Preliminares incoadas (FGE, 2014).

A lo largo del 2013, y tras generalizar la aplicación de las nuevas pautas registrales, el número total de Diligencias Preliminares incoadas se ha reducido aún más, a 89.756, lo que supone una rebaja porcentual del -7,21%. Cabe preguntarse si ese descenso obedece lisa y llanamente a la aplicación de unos nuevos criterios de registro o si también y en qué medida responde a un descenso real de la delincuencia juvenil. Por tanto, y dado que la aplicación de las directrices a las que llegaron en las Jornadas anuales de Delegados de Menores que se celebró en Granada en 2012, aún no es generalizada, al no haberse superado en algunas Secciones inercias burocráticas que sobredimensionan las cifras de incoación. En tanto, no se uniformicen las pautas de registro, persistirá un margen de incertidumbre. Por ello se deben atender a otras variables.

La primera y más objetiva es el número de Expedientes incoados. A lo largo de los últimos años su evolución a la baja fue clara. En 2008 se incoaron 35.353 expedientes; 34.019 lo fueron en 2009, frente a los 32.259 de 2010 (-5,17%); y 29.614 en 2011 (-8,19%). En el año 2012 fueron 29.598 expedientes, tan sólo 16 menos que el año anterior. Por su parte, en 2013 la cifra fue de 29.428, o lo que es lo mismo, solamente 170 expedientes menos en total. Este número sugiere, que las cifras reales de delincuencia se mantienen, aunque con una tendencia a la baja, máxime si se tienen en cuenta, además, otros factores, como los escritos de alegaciones evacuados, el total de sentencias dictadas o medidas aplicadas (FGE, 2014).

Gráfico 3.1 Evolución de Expedientes Incoados según la Fiscalía General del Estado



Fuente: Datos procedentes de la Memoria de 2013 publicada por FGE en 2014

Así, según la Fiscalía General del Estado, como conclusión general, matiza algo importante, y es que, mientras todas las cifras de infracciones criminales experimentan descensos, las únicas que ascienden son las constitutivas de faltas, en sus diversas modalidades. En algunas provincias es palpable que cerca de la mitad de los expedientes que se abren lo son por faltas (FGE, 2014).

3.2.2.1.2. Conciliación, reparación y actividad educativa extrajudicial

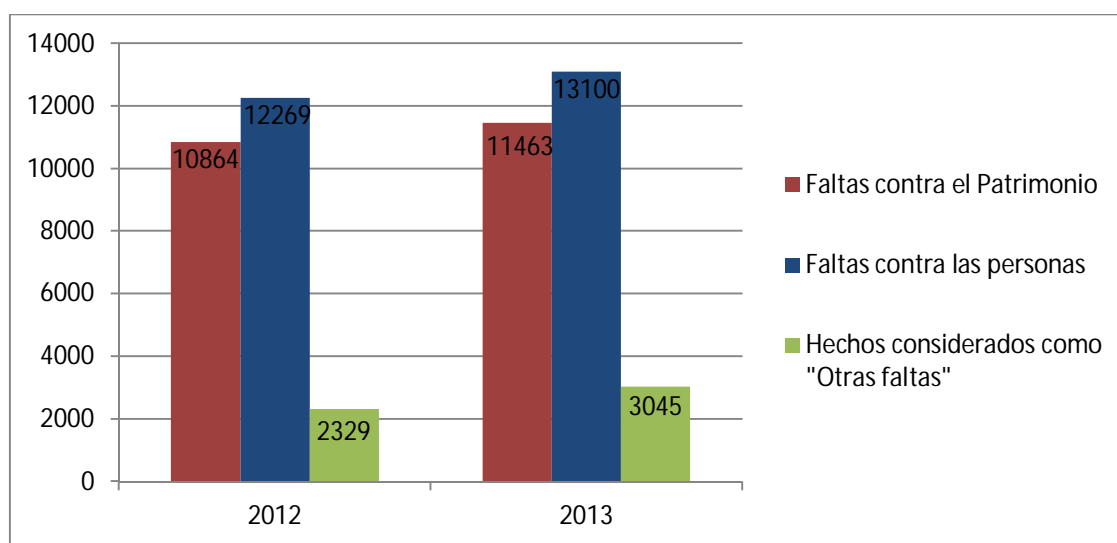
Mediante conciliación o reparación (art. 19 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor LORPM), o por apreciar el Equipo Técnico la conveniencia de no continuar el expediente (art. 27.4) se archivaron en 2013 un total de 6.687 expedientes, lo que supone un 22,72% de los incoados. Implica una disminución porcentual en relación a los años precedentes, ya que en 2012 fueron un 26,03% y en 2011 un 30,93% (FGE, 2014).

Dentro de la cifra anterior debe especificarse que los expedientes archivados conforme al art. 19 LORPM (conciliación, reparación o actividad educativa extrajudicial) fueron 4.706, un 15,99% del total. Continúa de esa forma la tónica de descenso apuntada en los ejercicios anteriores (16,19% en 2012 frente a los 21,26% del 2011) (FGE, 2014).

3.2.2.1.3. Faltas

Como se ha comentado con anterioridad, las cifras de diligencias registradas como faltas experimentan en 2013 un ascenso respecto al anterior en todos sus apartados: 11.463 las faltas contra el patrimonio, frente las 10.864 de 2012; 13.100 faltas contra las personas en 2013; por las 12.269 de 2012; y 3.045 hechos conceptuados como “otras faltas” en 2013, frente a los 2.329 registrados en 2012. En total 27.608 diligencias, o lo que es lo mismo el 30,59% de los asuntos incoados (FGE, 2014).

Gráfico 3.2 Evolución de Diligencias registradas como Faltas según FGE (2014)



Fuente: Datos procedentes de la Memoria de 2013 publicada por FGE en 2014

3.2.2.1.4. Medidas judiciales no privativas de libertad

Continúan siendo de utilización preferente las medidas alternativas a las privativas de libertad (FGE, 2014).

a) Libertad Vigilada

La medida más aplicada dentro de la Justicia Juvenil se mueve dentro de las mismas cifras del último trienio: en 2013 se impuso en 10.085 ocasiones, por las 10.289 de 2012 y las 10.920 de 2011. Las anualidades anteriores fueron de paulatino ascenso: año 2010 (10.527); año 2009 (10.346); año 2008 (9.382) y año 2007 (8.218) (FGE, 2014).

b) Prestaciones en beneficio de la comunidad

En 2013 se impuso 4.697 veces. Las cifras de años anteriores fueron: en 2012 (5.026); en 2011 (5.888); en 2010 (6.072); en 2009 (5.441); en 2008 (5.371) en 2007 (7.012) (FGE, 2014).

c) Amonestación

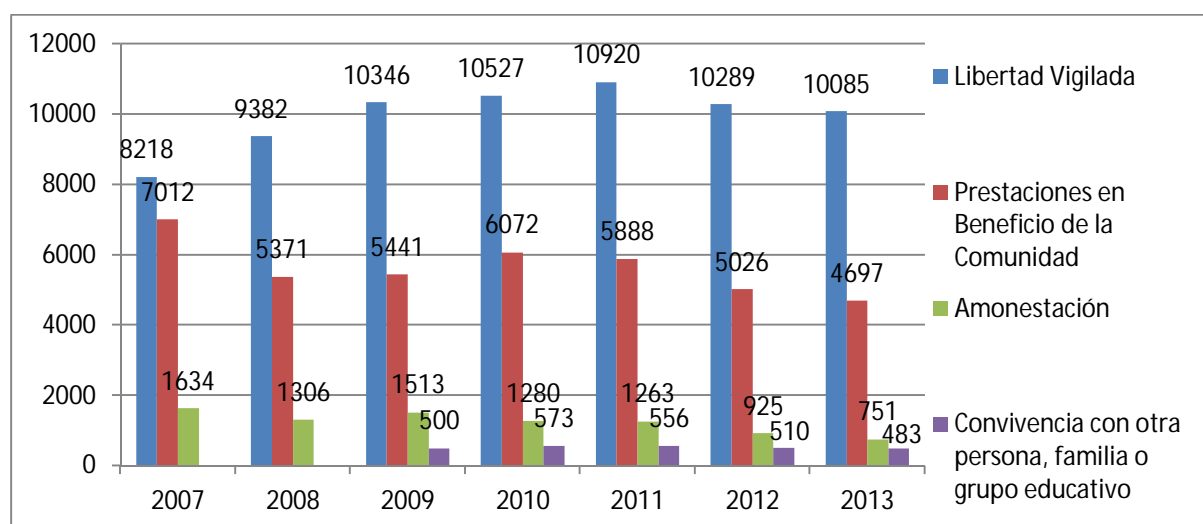
En 2013 se impuso en 751 ocasiones, continuando su declive progresivo, si se atiende a los años anteriores: en 2012 (926); en 2011 (1.263); en 2010 (1.280); en 2009 (1.513); en 2008 (1.306); y en 2007 (1.634) (FGE, 2014).

d) Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo

Se impusieron 483 medidas en 2013. En años precedentes fueron 510 medidas en 2012; 556 en 2011; 573 en 2010 y 500 en 2009. La estabilidad de las cifras –dentro de un descenso poco significativo-, se explica por el condicionante que supone la falta de creación de nuevas plazas de este recurso, a pesar de que continúa demandándose para el tratamiento de algunos casos de violencia intrafamiliar (FGE, 2014) .

A modo de resumen, se incluye el gráfico siguiente, donde se observa la evolución de las medidas judiciales impuestas no privativas de libertad, entre el periodo 2007-2013.

Gráfico 3.3. Evolución de las medidas judiciales no privativas de libertad (2007-2013) según la FGE (2014)



Fuente: Datos procedentes de la Memoria de 2013 publicada por FGE en 2014

3.2.2.1.5. Medidas judiciales privativas de libertad

No pueden extraerse conclusiones de las cifras de este apartado distintas a las de años anteriores. El internamiento cerrado sigue imponiéndose de modo restrictivo, siendo el régimen semiabierto al que más se acude (FGE, 2014).

Los internamientos terapéuticos continúan su moderado incremento. Ese aumento obedece a la creación paulatina, de nuevas plazas, a día de hoy aún escasas, si se tiene en cuenta que cada vez son más frecuentes los casos de menores con trastornos del comportamiento y consumo de sustancias estupefacientes, que precisan de intervención psicoterapéutica (FGE, 2014).

Se transcriben seguidamente los datos numéricos de los últimos años.

a) *Internamiento en régimen cerrado*

En 2013 se impuso en 754 ocasiones; en 2012 (766); en 2011 (797); en 2010 (687); en 2009 (771); en 2008 (853) y en 2007 (961) (FGE, 2014).

b) *Internamiento en régimen semiabierto*

Se impusieron 3.079 medidas en 2013. En los seis años precedentes siguió esta evolución: en 2012 (3.265); en 2011 (3.491); en 2010 (3.352); en 2009 (3.225); en 2008 (2.891) y en 2007 (3.200) (FGE, 2014) .

c) *Internamiento en régimen abierto*

Se impuso en 231 ocasiones en 2013, por las 252 en 2012 y las 265 en 2011. Tanto la memoria de 2013, como en las anteriores publicadas por la FGE, no reflejan datos de las medidas de medio anteriores al 2011 (FGE, 2014).

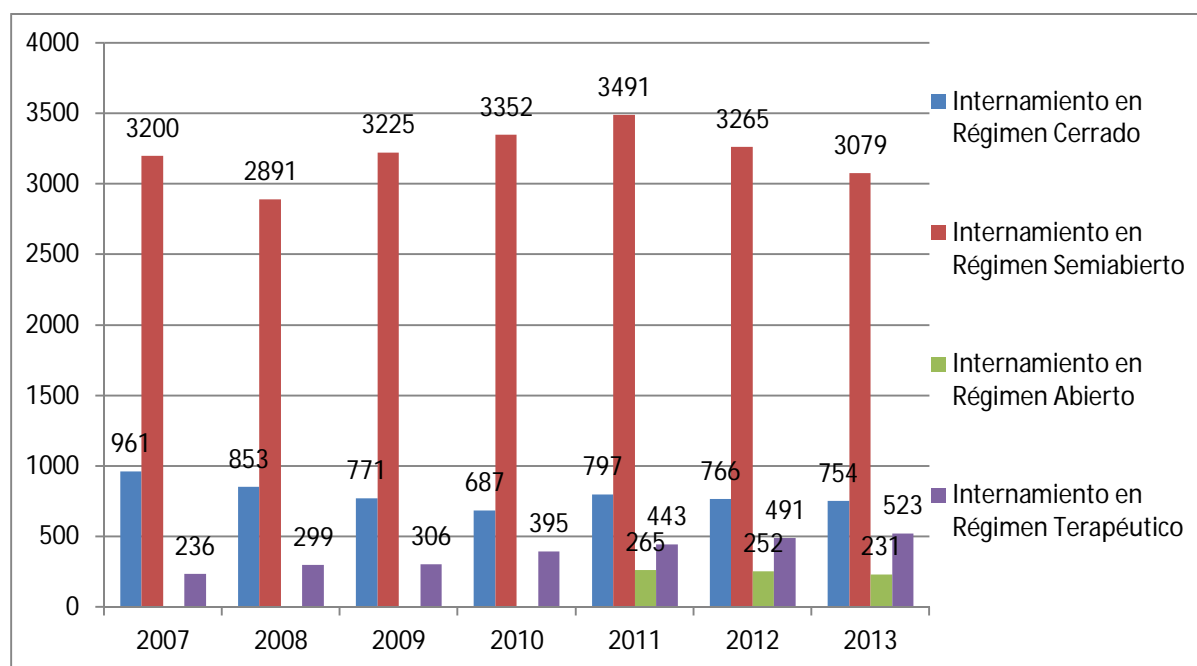
d) *Internamiento en régimen terapéutico*

En 2013 recayó en 523 ocasiones. Los años anteriores registran las siguientes cifras; en 2012 (491); en 2011 (443); en 2010 (395); en 2009 (306); en 2008 (299) y en 2007 (236) (FGE, 2014).

e) *Permanencias de fines de semana*

En 2013 se impuso en 1.256 ocasiones. En años anteriores: en 2012 (1.306); en 2011 (1.622); en 2010 (1.487); en 2009 (1.583); en 2008 (1.462) y en 2007 (2.180) (FGE, 2014).

Gráfico 3.4. Evolución de las medidas privativas de libertad (2007-2013) según la FGE (2014).



Fuente: Datos recogidos de la Memoria de 2013, 2012 y 2011 de la Fiscalía General del Estado

3.2.2.1.6. Modificación de medidas por quebrantamiento

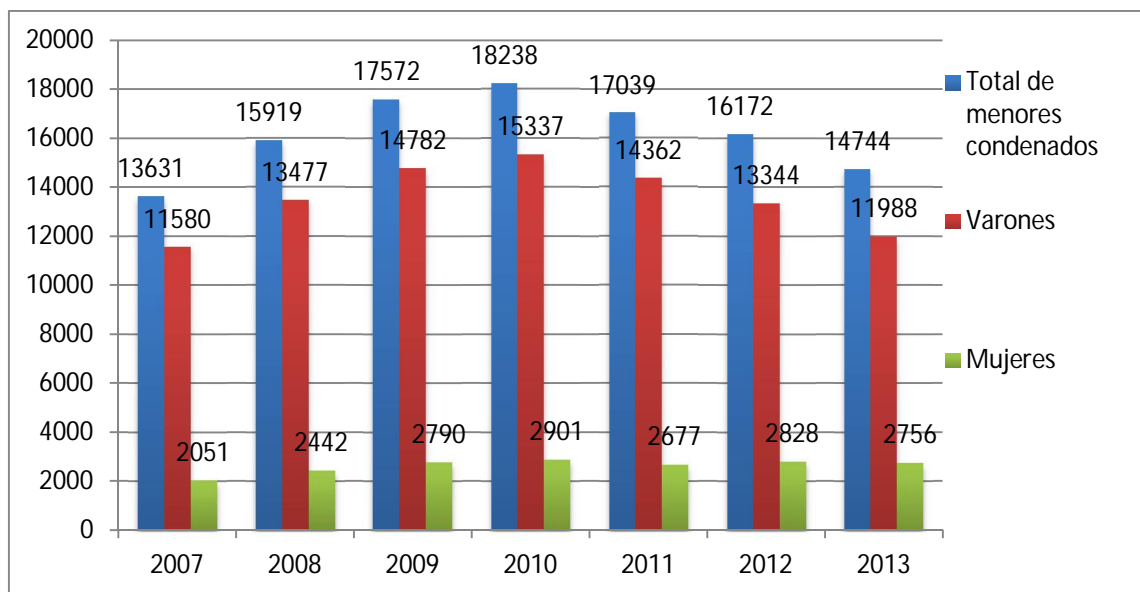
Según los datos de la FGE (2014), en 2013, hubo 837 medidas transformadas por quebrantamiento, conforme al art. 50.2 LORPM. Una muy ligera variación a la baja respecto al año precedente, que parece correlativa al menor número de medidas impuestas. Las cifras de años anteriores son las siguientes: en 2012 (1.157); en 2011 (894); en 2010 (936); en 2009 (900); en 2008 (556) y en 2007 (824).

Por otro lado, la transformación de internamiento semiabierto en cerrado, sigue siendo una potestad de uso muy excepcional. Según la FGE (2014), se utilizó en 2013 en 23 ocasiones, frente a las 21 en 2012, las 31 de 2011, las 36 de 2010, y las 71 de 2009 (FGE, 2014).

3.2.2.2. Según los datos publicados por la Estadística de Condenados: Menores del Instituto Nacional de Estadística.

Haciendo alusión a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2014, en 2013 fueron inscritos 14.744 menores condenados (de 14 a 17 años) según sentencias firmes dictadas comunicadas al Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, lo que supuso un descenso del 8,8% respecto al año anterior. Si bien, la tasa de menores de 14 a 17 años condenados por cada 1000 habitantes de ese mismo rango de edad fue de 8,6%.

Gráfico 3.5. Evolución de los menores condenados según datos del INE (2007-2013)



Fuente: Datos procedentes de la Memoria de 2013 publicada por INE en 2014

3.2.2.2.1. Menores condenados según sexo, edad y nacionalidad.

El 81,3% de los menores condenados fueron varones y el 18,7% mujeres. Por edad, el grupo de 17 años fue más numeroso (32,5% del total), seguido del grupo de 16 años (28,6%) (INE, 2014).

La mayoría de los menores condenados fue de nacionalidad española (76%). Sin embargo, la tasa de menores por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años fue casi tres veces superior en los menores de nacionalidad extranjera (18,9%), que en los de nacionalidad española (7,3%) (INE, 2014).

3.2.2.2.2. Menores condenados por lugar de condena

Según el INE (2014), al igual que en el 2012, Andalucía fue la comunidad con más menores condenados inscritos en el Registro, con el 23,2% del total. Le siguieron la Comunidad Valenciana (15,3%) y Cataluña (11,5%) (ver Tabla 3.1.). Este orden se mantuvo en el caso de menores de nacionalidad española. Sin embargo, en Cataluña fue la comunidad con mayor número de menores condenados extranjeros (19,4%), seguida de Comunidad de Madrid (14,5%) y Andalucía (13,5%) (INE, 2014). La ciudad autónoma de Ceuta (37,2 por 1.000), la ciudad autónoma de Melilla (19,3 por 1.000) y la comunidad de Islas Baleares (13,5 por 1.000), registraron las mayores tasas de menores de 14-17 años condenados por cada 1.000 habitantes del mismo rango de edad (INE, 2014). Por su parte, Comunidad de Madrid (5,5 por 1.000), Navarra (5,8 por 1.000) y Cataluña (6,2 por 1.000), presentaron los valores más bajos (INE, 2014). A continuación, en la Tabla 3.1. se especifican los menores condenados por CCAA, según el lugar de condena.

Tabla 3.1. Menores condenados por CCAA según datos del INE (2014)

CCAA	Condenados	Tasas
Melilla	86	19,3
Navarra	140	5,8
La Rioja	144	12,7
Ceuta	152	37,2
Cantabria	233	12,5
Asturias	270	9,2
Aragón	303	6,5
Extremadura	428	9,7
País Vasco	514	7,3
Galicia	541	6,5
Islas Baleares	553	13,5
Canarias	579	7,0
Murcia	595	9,5
Castilla-La Mancha	764	9,2
Castilla y León	816	10,1
Comunidad de Madrid	1251	5,5
Cataluña	1690	6,2
Comunidad Valenciana	2.262	12,3
Andalucía	3.423	9,9
Total	14.744	8,6

Valores absolutos y tasas por 1.000 habitantes de 14 a 17 años

Año 2013 Tasas calculadas sobre la población de 14 a 17 años a partir de las Cifras de Población provisionales a 1 de julio de 2013

Fuente: Memoria de 2013 del Instituto Nacional de Estadística: Condenados Menores

3.2.2.2.3. Infracciones penales y su tipología

En 2013 se inscribieron 25.814 infracciones penales cometidas por menores, un 7,9% menos que en el año anterior. De este total, el 64,5% fueron delitos y el 35,5% faltas (INE, 2014).

Por sexo, los menores varones cometieron el 82,3% de las infracciones penales y las mujeres el 17,7%. Los varones cometieron el 86,6% de los delitos y el 74,4% de las faltas (INE, 2014).

Atendiendo a la edad, al igual que en el año anterior, se observa que el número de infracciones cometidas aumenta con la misma. Así, las realizadas a los 17 años (33,2% del total) supusieron más del doble que las practicadas a los 14 años (15,5%) (INE, 2014).

El 74,4% de las infracciones fueron cometidas por menores españoles y el 25,3% por extranjeros (frente al 76,5% y el 23,5%, respectivamente, del año anterior) (INE, 2014).

Tabla 3.2. Infracciones penales cometidas por C.C.A.A. según el INE (2014)

CCAA	Infracciones penales	Delitos	Faltas
Comunidad de Madrid	8,9	6,1	2,8
Canarias	10,1	6,3	3,8
Navarra	10,9	6,1	4,8
Cataluña	11,7	8,1	3,6
Galicia	12,7	8,0	4,7
Aragón	12,8	8,3	4,5
País Vasco	14,1	7,2	6,9
Murcia	14,1	11,6	2,5
Extremadura	15,1	8,5	6,6
Castilla-La Mancha	15,8	10,0	5,8
Castilla y León	16,7	8,6	8,1
Andalucía	17,2	10,8	6,3
Asturias	19,2	13,2	6,1
Comunidad Valenciana	21,2	14,6	6,5
Cantabria	23,4	16,4	6,9
Islas Baleares	24,0	16,3	7,7
Melilla	32,3	20,2	12,1
La Rioja	39,9	13,8	26,1
Ceuta	60,6	43,0	17,6
Total	15,1	9,7	5,3
Año 2013. Tasas por mil habitantes de 14 a 17 años			

Fuente: Memoria de 2013 del Instituto Nacional de Estadística: Condenados Menores

Del total de infracciones, el 23,1% se registraron en Andalucía, el 15,1% en Comunidad Valenciana y el 12,3% en Cataluña. Por su parte, los menores porcentajes correspondieron a las ciudades autónomas de Melilla (0,6%), Ceuta (1,0%) y Navarra (1%) (INE, 2014).

3.2.2.2.4. Medidas judiciales adoptadas

En el año 2013 los jueces adoptaron 23.771 medidas, lo que supuso un descenso del 6,4% respecto al año anterior (INE, 2014).

Las medidas adoptadas más frecuentes fueron la libertad vigilada (39,6% del total), la prestación en beneficio de la comunidad (18,1%) y la de internamiento en régimen semiabierto (12,4%) (INE, 2014).

Conforme aumenta la edad del infractor se incrementa la medida de prestación en beneficio de la comunidad (pasando del 15,9% del total a los 14 años al 20,6% a los 17 años) y disminuye la de libertad vigilada (del 43,4% a los 14 años hasta el 35,1% a los 17) (INE, 2014).

Atendiendo a la nacionalidad del infractor, las medidas de internamiento en régimen cerrado e internamiento en régimen semiabierto recaen con más frecuencia en menores extranjeros (4,5% y 16,2% del total, respectivamente) que en menores españoles (1,9% y 11,0%) (INE, 2014).

En cambio, los menores extranjeros incurren con menos frecuencia en las medidas de realización de tareas socio-educativas y prestación en beneficio de la comunidad (7,4% y 16,2% del total, respectivamente, frente a 10,4% y 18,8% de los españoles) (INE, 2014).

3.2.2.3. Según la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI)

Tal y como refleja la Memoria de 2013 que publica la Agencia para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) (2014), en el año 2013 hubo 2.023 menores distintos atendidos, con 2.189 medidas judiciales, con altas en el 2013 y cuya medida era su primer delito, ascendiendo a 3009 si se tienen en cuenta todos los delitos.

Si bien, al contemplar el número de medidas procedentes del año anterior, más las altas del 2013, los menores atendidos fueron de 3.321, siendo el número de medidas de primer delito 3.495 y 4.932 en todos los delitos (AARMI, 2014).

Por otro lado, el número de medidas ejecutadas tanto con alta en 2013, como procedentes del año anterior, fueron de 4.076 (siendo su primer delito), habiendo 3.321 menores atendidos (AARMI, 2014).

Realizando un recorrido por la evolución tanto del número de menores, como de medidas impuestas desde el año 2007, se exponen las siguientes tablas:

Tabla 3.3. Evolución del número de menores atendidos por la ARRM (2007-2013) según la ARRM

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
REP. EXTRAJUDICIAL	464	493	591	574	559	501	454
MEDIO ABIERTO	1.807	1.851	1.788	1.804	1.668	1.411	1.311
INTERNAMIENTO	539	429	330	321	337	287	258
TOTAL	2.810	2.773	2.709	2.699	2.564	2.199	2.023
	-37	-64	-10	-135	-365	-179	
	-1'31%	-2'30%	-0'36%	-5%	-14'24%	-8%	

Fuente: Memoria de 2013 del ARRM

Tabla 3.4. Evolución del número de medidas ejecutadas según la ARRM (2007-2013)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
REP. EXTRAJUDICIAL	464	493	591	586	575	514	459
MEDIO ABIERTO	2.503	2.455	2.352	1.959	1.852	1.553	1.442
INTERNAMIENTO	539	429	364	343	369	319	288
TOTAL	3.506	3.337	3.307	2.888	2.796	2.386	2.189
	-129-	-70	-419	-92	-410	-197	
	3'67%	-2'07%	-12'67%	-3'18%	-14'66%	-8'26%	

Fuente: Memoria de 2013 del ARRM

3.2.2.3.1. Reparaciones extrajudiciales y medidas judiciales ejecutadas

a) Reparaciones extrajudiciales

Con alta en 2013 hubo 454 menores atendidos, 459 medidas de primer delito y 477 medidas teniendo en cuenta todos los delitos. Atendiendo a las medidas procedentes del año anterior, más las altas 539 menores distintos atendidos, 545 medidas de primer delito y 564 medidas que contemplan todos los delitos (AARMI, 2014).

b) Medio abierto

Con alta en 2013, se atendieron a 1311 menores, 1442 medidas de primer delito y 2075 de todos los delitos. Al contemplar también las procedentes del año anterior, ascienden a 2.255 menores atendidos, 2.393 medidas de primer delito y 3.433 medidas que contemplan todos los delitos (AARMI, 2014).

c) Medidas de internamiento

Con alta en 2013, se atendieron a 258 menores, con 288 medidas de primer delito y 457 medidas que contienen todos los delitos. Atendiendo al número de altas más las procedentes del año anterior, los menores atendidos fueron de 527, 557 medidas de primer delito y 935 en relación a todos los delitos (AARMI, 2014).

A modo de resumen de los últimos 3 apartados que reflejan tanto Reparaciones Extrajudiciales, como Medidas en Medio Abierto e Internamiento, se expone a continuación la siguiente tabla.

Tabla 3.5. Resumen de datos de las medidas ejecutadas en 2013 según la AARMI

	ALTAS 2013				ALTAS 2013+ AÑO ANTERIOR			
	MENORES DISTINTOS ATENDIDO S	MEDID AS	DELITOS		MENORES DISTINTOS ATENDIDO S	MEDI DAS	DELITOS	
			1º	TODO S			1º	TO DO S
REPARACIONES EXTRAJUDICIA LES	454	459	459	477	539	545	545	564
MEDIO ABIERTO	1.311	1.442	1.442	2.075	2.255	2.393	2.393	3.433
INTERNAMIENT O	258	288	288	457	527	557	557	935
TOTAL	2.023	2.189	2.189	3.009	3.321	3.495	3.495	4.932

3.2.2.3.2. Distribución por género

El total de menores atendidos con alta en 2013 fue de 1.569 de los cuales 1.282 eran de género masculino y 287 de género femenino, lo que representa un 81,71% y 18,29% respectivamente. Por otro lado, analizando la tipología de medida que cumplen en cuanto al género, en medidas de medio abierto hubo un total de 1.311, de los cuales 1.068 eran menores varones, mientras que 243 eran de género femenino, lo que representa un 81,47% y 18,53%, respectivamente. En cuanto a las medidas cumplidas que han requerido de internamiento el

total han sido 258, siendo 214 chicos, mientras que 44 chicas, lo que a su vez representa un 82,95% y 17,05%, correspondientemente (AARMI, 2014).

Tabla 3.6. Distribución Altas Medio Abierto + Internamiento por GÉNERO en 2013 según la ARRM

ALTAS 2013				
GÉNERO	M.ABIERTO	INTERNAMIENTO	TOTAL	TOTAL %
Masculino	1068	214	1282	81,71%
Femenino	243	44	287	18,29%
TOTAL	1311	258	1569	100'00%

Fuente: Memoria de 2013 del ARRM (2014)

3.2.2.3.3. Distribución por edad

Según los datos de la Agencia para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor (ARRM), los 18 años fueron la edad con mayor número de jóvenes, representando un 27,34% del total, siendo superior al resto de edad, tanto en medidas de medio abierto (363), como de internamiento (66). Seguidamente, los 17 años, representan un 26'07%, con un total absoluto de 409, siendo a su vez el medio abierto (363) significativamente más predominante que el internamiento (65) (AARMI, 2014).

Cabe destacar la franja etaria de los 14 años como significativamente minoritaria, con un 1,21% del total, con un número absoluto de 19, 15 habían cumplido medidas de medio abierto y 4 de internamiento (AARMI, 2014).

Tabla 3.7. Distribución Altas Medio Abierto + Internamiento en 2013 por edad en 2013 según la ARRM

ALTAS				
EDAD	M. ABIERTO	INTERNAMIENTO	TOTAL ABS.	TOTAL %
14	15	4	19	1,21%
15	127	34	161	10,26%
16	249	47	296	18,87%
17	344	65	409	26,07%
18	363	66	429	27,34%
19 o más	213	42	255	16,25%
TOTAL	1311	258	1569	100,00%

Fuente: Memoria de 2013 del ARRM (2014)

A lo largo de las diversas memorias que cada año son publicadas por la ARRM, se puede apreciar como la edad de 17 años, es la más frecuente en las medidas que conllevan internamiento, seguida de los 18 años, y aunque con menor frecuencia los 19 años o más (ARRMI, 2014).

Tabla 3.8. Distribución por edades en relación con el tipo de medida en el período 2009-2013 según la ARRM

EDAD		14	15	16	17	18	19 o más	TOTAL
2009	M. ABIERTO	18	113	297	488	494	378	1.788
	INTERNAMIENTO	8	36	64	91	83	48	330
	TOTAL	1,2%	7%	17,1%	27,3%	27,3%	20,1%	2.118
2010	M. ABIERTO	12	97	296	423	537	439	1.804
	INTERNAMIENTO	6	32	66	83	80	54	321
	TOTAL	0,9%	6,1%	17%	23,8%	29%	23,22%	2.125
2011	M. ABIERTO	11	99	249	406	449	454	1.668
	INTERNAMIENTO	5	25	57	96	93	61	337
	TOTAL	0,8%	6,2%	15,3%	25%	27%	25,7%	2.005
2012	M. ABIERTO	18	96	240	378	402	277	1.411
	INTERNAMIENTO	9	23	47	84	76	48	287
	TOTAL	1,6%	7%	16,9%	27,2%	28,2%	19,1%	1.698
2013	M. ABIERTO	15	127	249	344	363	213	1.311
	INTERNAMIENTO	4	34	47	65	66	42	258
	TOTAL	1,2%	10,3%	18,9%	26,1%	27,3%	16,2%	1.569

Fuente: Memoria de 2013 del ARRM (2014)

3.2.2.3.4. Distribución por procedencia geográfica

Según los datos los menores procedentes de España, representan un 55,32% del total de menores, seguidos de los procedentes de Latinoamérica con un 24,09%, siendo los que menos porcentaje ofrecen los menores de Europa no comunitaria (ARRMI, 2014).

Tabla 3.9. Distribución altas Medio Abierto + Internamiento en 2013 por procedencia geográfica según la ARRM

ALTAS				
PROCEDENCIA GEOGRÁFICA	MEDIO ABIERTO	INTERNAMIENTO	TOTAL ABSOLUTO	TOTAL %
ESPAÑA	736	132	868	55,32%
MAGREB	139	34	173	11,03%
LATINOAMÉRICA	319	59	378	24,09%
EUROPA COM.	86	29	115	7,33%
EUROPA NO COMUNITARIA	8	0	8	0,51%
OTRA	23	4	27	1,72%
TOTAL	1.311	258	1.569	100,00%

Fuente: Memoria de 2013 del ARRM (2014)

La siguiente tabla alude a la evolución desde el año 2009 según la distribución del tipo de medida en relación con procedencia geográfica (AARRMI, 2014).

Tabla 3.10. Evolución de la distribución del tipo de medida y procedencia geográfica (2009-2013) según la AARRMI

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA	ESPAÑA	MAGREB	LATINOAMÉRICA	EUROPA COM.	EUROPANO COM.	OTRAS	TOTAL	
2009	M. ABIERTO	1.079	155	422	82	17	33	1.788
	INTERNAMIENTO	155	49	95	19	4	8	330
	TOTAL	58,3%	9,6%	24,4%	4,7%	1%	1,9%	2.118
	M. ABIERTO	1.103	140	405	111	8	37	1.804
2010	INTERNAMIENTO	170	41	85	18	2	5	321
	TOTAL	59,9	8,5	23	6,1	0,5	2	2.125
	M. ABIERTO	1.002	146	386	96	11	27	1.668
	INTERNAMIENTO	164	47	96	20	0	10	337
2011	TOTAL	58,2%	9,6%	24%	5,8%	0,5%	1,9%	2.005
	M. ABIERTO	826	136	333	83	6	27	1.411
	INTERNAMIENTO	137	47	80	18	1	4	287
	TOTAL	56,7%	10,8%	24,3%	5,9%	0,4%	1,8%	1.698
2012	M. ABIERTO	736	139	319	86	8	23	1.311
	INTERNAMIENTO	132	34	59	29	0	4	258
	TOTAL	55,3%	11,1%	24,1%	7,3%	0,5%	1,7%	1.569

Fuente: Memoria de 2013 del AARRMI (2014)

3.2.2.4. Tipología de infracciones más frecuentes de los menores

3.2.2.4.1. Infracciones contra la propiedad

La mayoría de las infracciones juveniles son claramente instrumentales para la obtención de gratificaciones materiales. Para algunos jóvenes, sobre todo para aquéllos pertenecientes a sectores de la población con más carencias, la finalidad de muchos hurtos y robos sería la de procurarse algunos bienes deseados o necesitados (Redondo, et al., 2001).

Para otros, incluso perteneciendo a familias con acomodo suficiente, ciertas infracciones contra la propiedad comienzan a ser una manera fácil y eficaz de obtener de modo inmediato y carente de esfuerzo aquello de que desean. A partir de estas consecuencias gratificantes, las conductas delictivas contra la propiedad pueden consolidarse en unos y otros (Redondo et al., 2011).

Los delitos contra la propiedad, en los que participan ampliamente los jóvenes, constituyen el grueso de la delincuencia, superando en los países europeos el 70% del total de las denuncias. La mayoría son delitos menores como el hurto, pero otros pueden comportar diversos grados de fuerza o violencia. En 2006 se produjeron en España 6.201 detenciones de jóvenes por robos con intimidación o con violencia, cifra que representa el 13,6% del total de las 45.550 detenciones de jóvenes acontecidas en ese año (véase tabla 3.11.).

Tabla 3.11. Menores detenidos en España por robo con violencia e intimidación (2002-2006)

	2002	2003	2004	2005	2006	2002-2006
14 y 15 años	1.821	1.496	1.545	1.427	1.373	-24,60%
16 y 17 años	2.523	2.267	2.231	2.029	1.987	-21,4%
18 a 20 años	3.105	2.659	2.687	2.684	2.841	-8,50%
Total jóvenes	7.582	6.524	6.550	6.185	6.201	-18,21%

Fuente: Tomado del Informe estadístico de *delincuencia juvenil* del Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia (2006)

Como puede verse en la Tabla 3.11., las detenciones de jóvenes experimentaron una tendencia decreciente durante el periodo 2002-2006, para todos los intervalos de edad, observándose una disminución promedio del 18,21%. Este dato no sostiene la creencia

frecuentemente expresada en el sentido de que la delincuencia juvenil violenta sería un fenómeno cada vez más frecuente.

En cuanto a los datos del estudio de Rechea (2008), a continuación se presentan los diversos tipos de delitos contra la propiedad que los jóvenes afirman haber realizado alguna vez a lo largo de su vida (véase tabla 3.12.).

Tabla 3.12. Prevalencia de delitos contra la propiedad

Tipo de delito contra la propiedad	Alguna vez en la vida %
Robar en una tienda	20,9
Entrar en un edificio para robar	2,8
Robar una bici o ciclomotor	3,7
Robar un coche o moto	1,6
Robar algo de un coche	3,6
Pegar un tirón a alguien para quitarle algo	1,1

Fuente: Tomada de Redondo, et. al 2001 a partir del Informe sobre Conductas Antisociales y delictivas de los jóvenes en España (Rechea, 2008).

Tal y como puede verse en la tabla precedente, la infracción contra la propiedad que los jóvenes cometen con mayor frecuencia es el robo (en realidad, generalmente hurto) en tiendas (20,9%), siguiéndole el hurto de bicicletas o ciclomotores (3,7%) y de objetos del interior de los vehículos (3,6%). Un 1,1% de los jóvenes afirma, sin embargo, haber realizado un tirón para quitarle algo a alguien, delito más grave desde el punto de vista de la intimidación y el riesgo que puede suponer para las víctimas.

En los datos publicados por la Fiscalía General del Estado (2014), en cuanto a los delitos contra el patrimonio, cobran especial importancia los robos con fuerza, habiéndose incoado 6.935 procedimientos en 2013, frente a los 7.738 de 2012, y los 8.156 de 2011. En el año 2010 se abrieron 8.658 diligencias; en el año 2009 fueron 9.673 y en el año 2008 fueron 8.225 por este tipo de delitos.

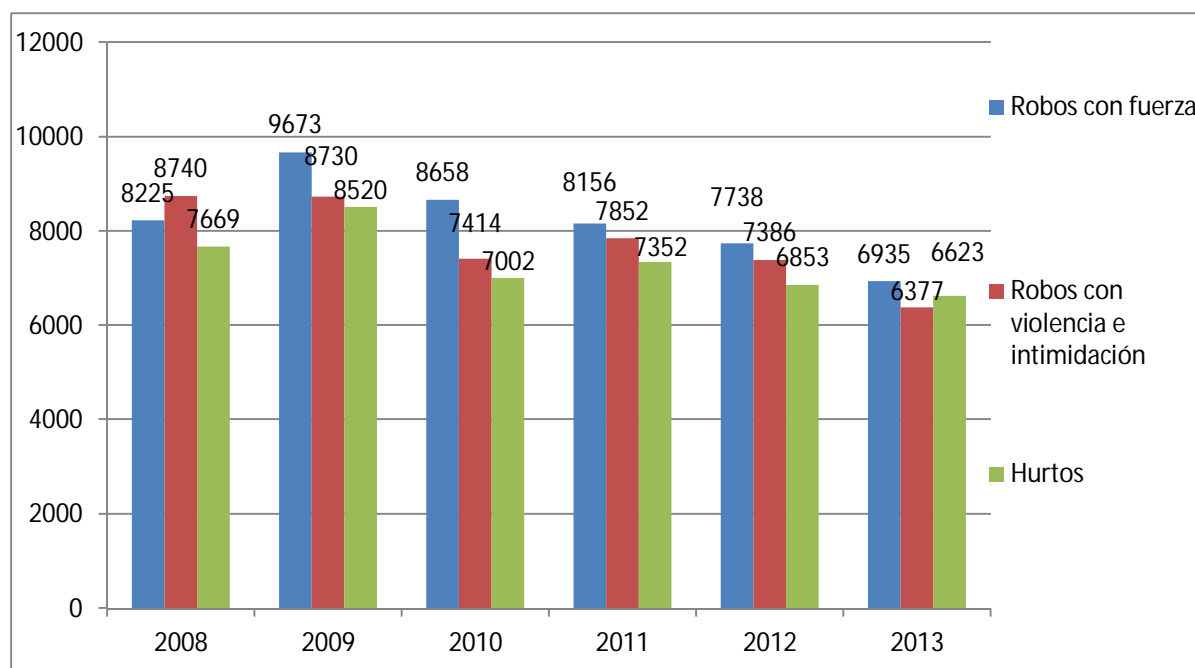
Con respecto al área territorial, la FGE (2014) informa que en Madrid, aunque descendiendo también el número total de robos con fuerza (-21,40%), sin embargo, los robos en domicilio, tipología poco frecuente entre menores, sufren un incremento del 11,89%. Asimismo, en Valencia también se objetiva un incremento de las sustracciones de oro y otros efectos de valor en domicilios, para su posterior reventa.

En cuanto a los robos con violencia o intimidación, la FGE (2014), informa que se abrieron 6.377 causas en 2013, por las 7.386 de 2012 y las 7.852 de 2011. En el año 2010 por estos delitos se incoaron 7.414 diligencias; en el año 2009 fueron 8.730 y 8.740 en el año 2008. Si bien, la misma Fiscalía refiere que el objeto más buscado con estos actos depredatorios sigue siendo los teléfonos móviles de última generación.

En referencia a los hurtos, la FGE (2014) publica que en el año 2013 se incoaron 6.623 procedimientos por hurto, frente a los 6.853 de 2012 y los 7.352 del año 2011. En el año 2010 se incoaron 7.002 diligencias; en el año 2009 fueron 8.520 y en el año 2008 se registraron 7.669 por estos delitos. Asimismo, la Fiscalía refiere que han proliferado en Valladolid las sustracciones de cobre en las que se arrancan cables de instalaciones en desuso y se ocasionan graves daños. Los menores de edad cometen el delito ayudando a sus familiares que suelen ser los principales implicados.

A modo de resumen de los datos aportados por la FGE, se expone el siguiente gráfico:

Gráfico 3.6. Evolución de delitos contra el patrimonio según FGE (2008-2013)



Fuente: Memoria de 2013 publicada por la FGE (2014)

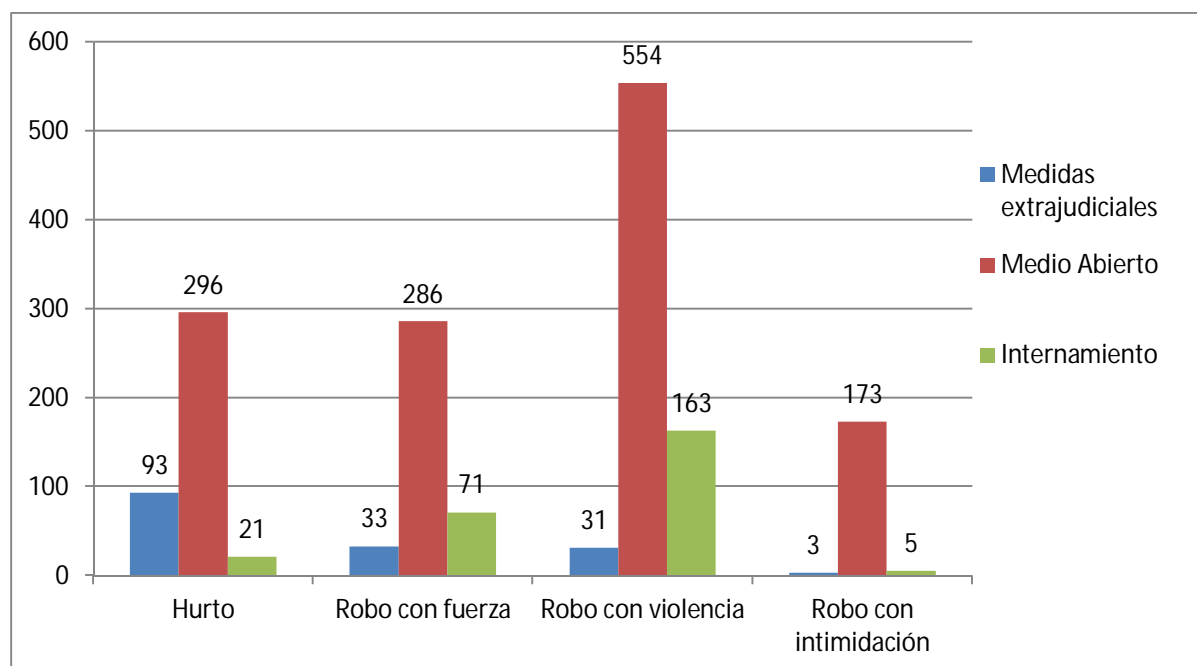
Según los datos publicados por el INE (2014), en relación a la tipología del delito, los de mayor incidencia fueron los robos (41,6% del total), y entre las faltas, las más frecuentes fueron las realizadas contra las personas (62,4%) y contra el patrimonio (34,2%).

Según los datos proporcionados por la ARRMI (2014), en las reparaciones extrajudiciales que fueron dadas de alta en 2013, siendo el primer delito imputado, el hurto representó un 20,26% de los casos, el robo con fuerza un 7,19% y el robo con violencia (6,75%), siendo el robo con intimidación el porcentaje más bajo con un 0,65%.

Asimismo, en las medidas en medio abierto dadas de alta en 2013 y cuya medida como primer delito imputado, la causa más frecuente fue la de robo con violencia, con un 21,50%, hurto con un 13,18%, así como robo con fuerza (12,97%) y por último, nuevamente con un menor porcentaje, robo con intimidación 10,89%. Por otro lado, atendiendo a las altas de 2013, más las medidas procedentes de 2012, vuelve a ser el robo con violencia el porcentaje más alto con un 23,15%, hurto con un 12,37%, robo con fuerza y con intimidación, con 11,95% y 11,41%, respectivamente (ARRMI, 2014).

Por último, en las medidas que han conllevado internamiento en 2013, y ha sido su primer delito imputado, el robo con violencia continúa siendo la causa más frecuente, con un 29,17% de los casos, seguida de robo con intimidación, 11,11%, robo con fuerza 10,76% y hurto con un 4,17%. Al considerar las medidas que proceden de 2012, los resultados son parecidos, siendo el robo con violencia el más frecuente de todas las causas que han propiciado internamiento, con una representación del 29,26%, seguida del robo con fuerza, 12,75% y de robo con intimidación, 12,57%, siendo también el hurto menos frecuente, 3,77% (ARRMI, 2014).

Gráfico 3.7 Delitos contra el patrimonio según ARRM, con datos procedentes de las altas de 2013 + medidas procedentes de 2012



Fuente: Memoria de 2013 publicada por la ARRM (2014)

3.2.2.4.2. Infracciones relacionadas con las drogas

La producción y distribución de drogas constituyen actividades delictivas en la mayoría de los países y, por ello, perseguidas por la justicia. Aquí se encontrarían tanto los delitos definidos por las propias drogas, es decir, derivados de su prohibición (que convierte en ilícitas las conductas de fabricación, posesión o consumo en la vía pública), como los cometidos en el sistema de distribución de drogas, esto es, los robos, agresiones, extorsiones y agresiones relacionados con el tráfico de drogas (Redondo et al., 2011).

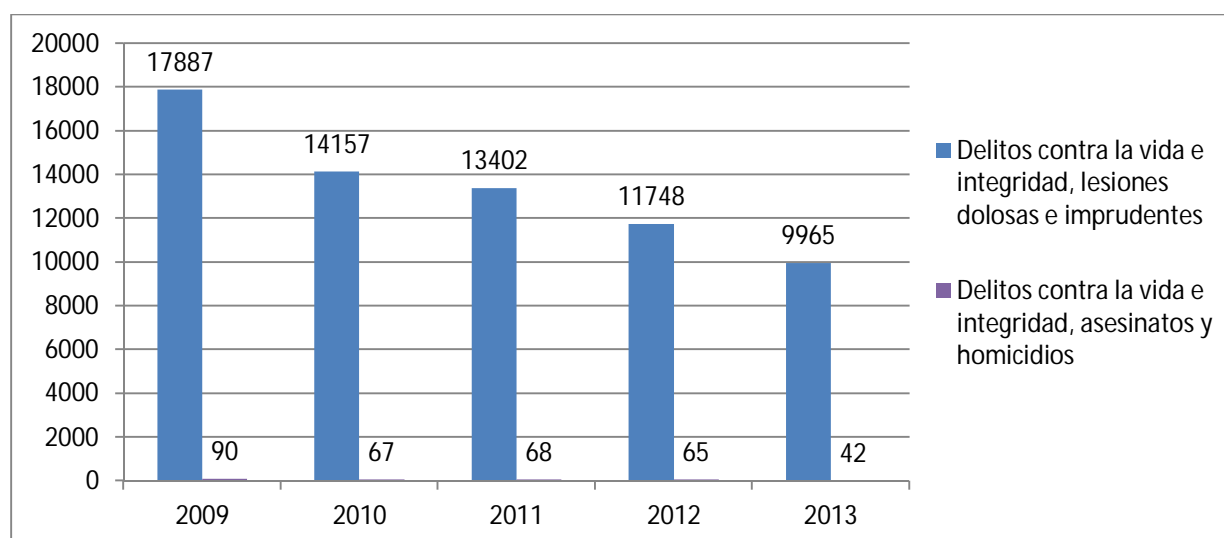
Según los datos del Ministerio de Sanidad y Consumo, relativos a los años 2007/2008, el 72,9% de la población española afirmaba haber ingerido alcohol durante el año precedente, un 10% haber consumido cannabis, un 3% cocaína en polvo y casi un 1% otros tipos de drogas. La edad de inicio del primer consumo de sustancias tóxicas se encuentra entre los 16 y los 20 años. Las más empleadas por los jóvenes de entre 14 y 18 años son el alcohol (81,2%), el tabaco (44,6%), el cannabis (35,2%) y los tranquilizantes o pastillas para dormir (17,3%). El consumo del resto de sustancias (cocaína, éxtasis, alucinógenos, etcétera) es muy minoritario, situándose entre el 0,5% y el 2% la proporción de consumidores habituales (Ministerio Sanidad y Política Social, 2009).

Otros consumos de sustancias tóxicas por parte de los jóvenes tales como heroína, cocaína, LSD, hachís, disolventes de colas, y otras sustancias estimulantes o perturbadoras del sistema nervioso, parecen relacionarse con la conducta delictiva mediante una potenciación recíproca, de manera que cada uno de estos comportamientos acaba convirtiéndose en un elemento favorecedor del otro (Redondo y Garrido, 2001); la idea central que sugiere esta hipótesis es que en algunos sectores de la población, a menudo marginales, ambos comportamientos –delito y droga- confluyen y recíprocamente se potencian: ciertos actos delictivos (un hurto, un robo con violencia, una violación, etcétera) pueden favorecer el consumo de drogas por parte del individuo que los ha cometido, y, recíprocamente, la dependencia a las drogas, o sus efectos psicofarmacológicos sobre el individuo, pueden promover ciertos delitos (por ejemplo, un robo, o bien delitos violentos o sexuales) (véase Gráfico 3.6.).

Internacionalmente se estima que entre un 40% y un 60% de los delitos (especialmente los violentos) se hallan conectados con el consumo de sustancias tóxicas, tanto legales (como puede ser el alcohol) como ilegales. El alcohol, que reduce los controles inhibitorios de las personas, disminuye el miedo ante situaciones de riesgo y suaviza los sentimientos de culpa, juega un papel importante en muchos delitos violentos, tales como las agresiones y los homicidios producidos en peleas con desconocidos, o en el maltrato a la pareja y los hijos (Redondo et.al., 2011).

Según la FGE (2014), por delitos contra la salud pública en el año 2013 se incoaron 665 procedimientos por los 680 de 2012. En 2011 fueron 788; en el año 2010 fueron 819; en el año 2009 se abrieron 928 procedimientos; en el año 2008 se incoaron 901 asuntos y en el año 2007 fueron 1.037. Se mantienen, pues, las cifras por estos delitos en los mismos niveles de 2012, tras el descenso experimentado en los años precedentes. Destaca la disminución en Ceuta, punto principal desde donde se introduce el hachís procedente de Marruecos, al bajar allí las causas incoadas de 101 a 55.

Gráfico 3.8. Evolución de los delitos contra la salud pública según FGE (2007-2008).



Fuente: Memoria de 2013 publicada por la FGE (2014)

En su Memoria, la FGE (2014), destaca un expediente de la Audiencia Nacional dirigido contra un menor egipcio por un delito contra la salud pública de los art. 368.1.º y 369.5 (notoria importancia) y 370.3.º (extrema gravedad por cantidad y empleo de barco) del CP, al haber sido interceptado, junto con otras trece personas más, a bordo de un pesquero sin bandera ni matrícula, y en aguas internacionales, con 16 toneladas de resina de hachís. Recayó sentencia condenatoria, con fecha 25 de febrero de 2014, imponiéndole tres años de internamiento en régimen cerrado, seguidos de dos de Libertad Vigilada.

La memoria de 2013 del INE (2014), no aporta datos sobre delitos relacionados con las drogas.

Según la ARRFMI (2014), en la memoria de 2013, las reparaciones extrajudiciales que fueron dadas de alta en 2013, según primer delito imputado por causas contra la salud pública o tráfico de drogas fueron 2, representando un 0,44% de los casos. Asimismo, en medidas en medio abierto dadas de alta en 2013, según primer delito fueron 13, un 0,90% de los casos, siendo 22, un 0,92% de los casos si se tienen en cuenta medidas procedentes de 2012.

Al tener en cuenta medidas que hayan conllevado internamiento, ha habido un caso de delito contra la Salud pública/Tráfico de drogas, en cual representa 0,35% de los casos, y, 8, un 1,44% de los casos, al contemplar medidas procedentes del 2012 (ARRMI, 2014).

3.2.2.4.3. Infracciones de carácter violento

En España se detiene anualmente a algo más de doscientos jóvenes en relación con delitos de homicidio, lo que supone en torno a un 0,5% del total de las detenciones de jóvenes, y por delitos de lesión a casi tres mil jóvenes (en torno a un 6,5% del total de las detenciones). Aunque durante el período 2002-2006, hubo una reducción del número de jóvenes detenidos, hubo un aumento de las detenciones por delitos de homicidio y lesiones, del 11, 57% y del 28,95% respectivamente (FGE, 2014).

Según la Memoria de 2013 de la FGE (2014), los delitos contra la vida e integridad física, así como las lesiones dolosas e imprudentes representan la variable delictiva que motiva mayor número de procedimientos. Los descensos sólo son explicables a partir de los cambios registrales mencionados. En tal sentido, en el año 2013, se incoaron 9.965 procedimientos frente a los 11.748 de 2012 y los 13.402 del año 2011.

Repasando los años anteriores puede verse que en el 2010 se incoaron 14.157 procedimientos; en el año 2009 se incoaron 17.887 procedimientos; en el año 2008 se incoaron 16.412 y en el año 2007 fueron 17.539 (FGE, 2014).

En cuanto a delitos contra la vida, asesinatos y homicidios, su número continúa estable a lo largo de los últimos años: 42 causas en 2013, frente a los 65 asuntos del año 2012 y los 68 del año 2011. En 2010 fueron 67 y 90 en el 2009. En el año 2013, los hechos consumados dolosos con muerte de la víctima, de los que se ha dado cuenta a esta Unidad han sido 9. De esa cifra de 42 procedimientos deben detraerse los acumulados a otros, los archivados, y los calificados finalmente como lesiones, o como homicidios imprudentes (FGE, 2014).

Los datos ofrecidos en la Memoria del INE, en 2013, muestran un 12'9% de delitos de lesiones, y un 9% de delitos de torturas y contra la integridad moral, siendo las más frecuentes las faltas realizadas contra las personas en un 62,4% (INE, 2014).

En los datos publicados por la ARRFMI, se reflejan un conjunto de hechos delictivos diferentes en cuanto a delitos violentos se refiere. Así, podemos diferenciar hechos delictivos como: Homicidio/Asesinato, Lesiones/Agresión, Daños, Atentado contra la autoridad/Orden Público, Amenazas/Intimidación/Coacción, Maltrato/Maltrato Familiar, Contra la integridad moral/Injurias/Insultos y Violencia de Género. De este modo, se desglosarán a continuación según el tipo de medida impuesta (ARRMI, 2014).

Asimismo, se reflejan en los datos que en las reparaciones extrajudiciales dadas de alta en 2013, cuyo hecho es imputado como primer delito, están en primer lugar las Lesiones/Agresión, con 89 casos, 19,39% del número de casos, seguidas de Daños, con 46, 10,02%, Atentado contra la autoridad/Orden público se han dado 29, 6,32%, Amenazas/Intimidación/Coacción, 20, 4,36%, Contra la integridad moral/Injurias/Insultos, 12, 2,61% y Violencia de género que se dieron 3 casos, los cuales representan el 0,65% (ARRMI, 2014).

En cuanto a las medidas en medio abierto, dadas de alta en 2013, y siendo su primer delito, los datos reflejan que se han dado 176 casos de Lesiones/Agresión, los cuales representan un 12,21%, 55 de Atentado contra la Autoridad/Orden Público, 3,81%, 43 de Amenazas/Intimidación/Coacción, un 2,98%, 37 de Daños, 2,57%, 28 Contra la integridad moral/Injurias/Insultos, 1,94%, y, 3 de Homicidio/Asesinato, los cuales representan un 0,21%. Si atendemos igualmente a las medidas que se suman procedentes del 2012, nos encontramos con 323 delitos de Lesiones/Agresión, un 13,50%, 82 casos de Atentado contra la autoridad/Orden Público, un 3,43%, 78 de Amenazas/Intimidación/Coacción, un 3,26%, 49 de Daños, un 2,05%, 44 casos de delitos Contra la Integridad moral/Injurias/Insultos, un 1,13%, y, Homicidio (incluido en grado de tentativa) con 3 casos, los cuales representan el 0,13% (ARRMI, 2014).

Según las medidas de internamiento dadas de alta en 2013 y cuyo hecho es el primer delito imputado, nos encontramos con Maltrato/Maltrato Familiar/Violencia de género como el hecho delictivo violento con mayor frecuencia, las Lesiones/Agresión con 24 casos, un 8,33%, 12 de Atentado contra la Autoridad/Orden Público, un 4,17%, 8 casos de Homicidio/Asesinato, un 2,78%, 6 de Amenazas/Intimidación/Coacción, un 2,08%, 5 Contra la Integridad Moral, un 1,74%. Una vez más, si se tienen en cuenta las medidas privativas de libertad procedentes a su vez del año 2012, tenemos nuevamente el Maltrato/Maltrato familiar/Violencia de Género con una significativa mayor frecuencia, seguida de 39 Lesiones/Agresión, un 7%, 18 de Homicidio/Asesinato (en grado de tentativa), un 3,23%, 17 de Atentado contra la autoridad/Orden público, 3,05%, 13 de Amenazas/Intimidación/Coacción, un 2,33%, 7 Contra la Integridad moral, que representan el 1,26% de los casos (ARRMI, 2014).

Dentro de los delitos violentos, se va a especificar los delitos de maltrato familiar ascendente y delitos por violencia de género. Así, en la sociedad actual, los episodios de

violencia intrafamiliar son un fenómeno que se da cada vez con mayor frecuencia. La realidad nos muestra la presencia de una nueva forma de violencia con características propias, que se ha ido diferenciando cada vez más de otros tipos de violencia: la de los hijos que agreden a sus padres física y/o psicológicamente (ARRMI, 2014).

De este nuevo fenómeno, dan cuenta, precisamente, los datos aportados por la Fiscalía General del Estado, que ya en el año 2006 comienza a registrar de manera sistemática el maltrato ascendente como parte de la categoría de violencia doméstica, diferente de la violencia de género. Aunque debe advertirse que las cifras de los años 2007 a 2010 aún incluían tanto violencia doméstica sobre ascendientes como los casos de violencia de género. Otra dificultad añadida, es que las cifras de esta tipología, aún hoy en día, se mantienen a veces, como señala Las Palmas, acumuladas en un solo expediente, por conexidad, las sucesivas denuncias contra un mismo menor (FGE, 2014).

Precisamente, en su Memoria de 2007, del número total de procedimientos incoados, es decir, iniciados en sus primeros trámites respecto a la violencia doméstica, un 13,30% de los mismos se referían a delitos cometidos por los hijos hacia sus progenitores y un 2,75% hacia sus abuelos (FGE, 2014).

Más recientemente, la violencia sobre ascendientes y hermanos en 2013 arroja un número total de 4.659 asuntos incoados, frente a los 4.936 de 2012 y los 5.377 procedimientos del año 2011. En los años anteriores se advertían subidas sucesivas, a partir de un importante salto cuantitativo en el año 2007: 4.995 procedimientos en 2010; 5.201 procedimientos en 2009; 4.211 en 2008 y 2.683 causas en 2007 (FGE, 2014).

Más allá de los números, trasciende el drama humano en que se encuentran inmersas miles de familias, afectadas por esta problemática. Según la FGE, continúa siendo la modalidad delictiva a la que más empeño dedican las distintas Secciones, no siendo infrecuente que los progenitores acudan a Fiscalía derivados por los propios Servicios Sociales para que les den solución a los problemas de convivencia, referidos incluso a menores de menos de catorce años (FGE, 2014).

Según los datos de la AARRMI en el 2013, en las reparaciones extrajudiciales dadas de alta ese año, siendo su primer delito, han sido 17 casos, los cuales han representado un 3,70%, en 140 en medio abierto, siendo un 9,71%, y si se tienen en cuenta los casos procedentes del 2012, han sido 213, un 8,90%. Cabe destacar que en cuanto a los delitos que han conllevado

internamiento, este hecho delictivo se sitúa en segundo lugar por frecuencia, con 57 altas en 2013, lo que lo sitúa en un 19,79% y si se tienen en cuenta los datos del 2012, han sido 101 casos, que contempla el 18,13% de los casos. Cabe destacar que dentro de esta tipología delictiva las mujeres representan un 35%, siendo un dato suficientemente estable en base al número total de menores atendidos. Se da una proporción mucho mayor de mujeres que en la delincuencia general, algo que tiene sentido al tratarse de una problemática relacionada con las dinámicas internas de la familia y los estilos educativos de progenitores. El 82% son españoles, siguiéndole a gran distancia (13%) los de origen latinoamericano. La media de edad es de 16 años –frente a más de 17 años de la población total atendida por la Agencia- (ARRMI, 2014).

En cuanto a los delitos por violencia de género, cabe destacar que según la FGE, y como se ha comentado ya con anterioridad, hasta el año 2011 los casos de violencia de género se registraban conjuntamente con los de violencia doméstica. Aún hoy, la mayoría de los programas ofimáticos no permiten su contabilización separada y debe hacerse manualmente (FGE, 2014).

Desde entonces su evolución ha sido la siguiente: las diligencias incoadas por esta clase de hechos fueron 473 en 2011, en el año 2012 se registraron 632 asuntos y en el año 2013 han sido un total de 327. Relacionando el descenso numérico apreciable en este ejercicio con los ajustes registrales realizados, debe concluirse que, aunque se puedan producir sucesivos picos conyunturales a la alza y a la baja, esta tipología oscila en la Justicia Juvenil dentro de unas cifras moderadas. Las Secciones, en aplicación del Dictamen 7/2012 de esta Unidad, sobre criterios de actuación en supuestos de violencia de género, optan por el alejamiento y la Libertad Vigiladas como medidas más adecuadas (FGE, 2014).

Según la Memoria de la ARRM (2013), en ese mismo año hubo 3 casos de violencia de género, lo que constituye un 0,65% de los casos, por los cuales la medida fue de reparaciones extrajudiciales. Si atendemos a medidas en medio abierto, no hubo ningún alta en 2013, siendo 3 en número de menores atendidos en ese año cuya medida ha conllevado internamiento, siendo predominante la población española -38,8% de los casos atendidos-, seguida de la República dominicana y Ecuador, ambos con un 22,23% (ARRMI, 2014).

Por último, en cuanto a delitos de carácter violento, en la actualidad están tomando fuerza los que se producen en el ámbito escolar, aunque según la FGE los datos numéricos son imprecisos, ya que al incluir infracciones penales diversas, se registran como lesiones,

amenazas, coacciones o faltas, pero sin existir dicha categoría como tal en los registros oficiales, ya que según la misma Fiscalía siguen siendo escasos los supuestos de acoso escolar que por su gravedad se califican como delito contra la integridad moral (art. 173.1 CP), resolviéndose la mayor parte de los asuntos, constitutivos de faltas, mediante soluciones extrajudiciales (FGE, 2014).

3.2.2.4.4. Infracciones de carácter sexual

Los delitos sexuales corresponden a una mínima proporción de la delincuencia tanto en autores jóvenes como adultos. Tanto en España como en otros países occidentales, los delitos sexuales constituyen un porcentaje muy reducido –inferior al 1% del total de los delitos que son denunciados y, en concreto, en la Comunidad de Madrid también dicho porcentaje es inferior al uno por ciento del total de las medidas ejecutadas por la AARMI. Además, en España, la tasa de los delitos sexuales denunciados ha permanecido esencialmente estable durante los últimos años. Según la memoria de 2013 publicada por la A.R.R.M.I., las medidas que supusieron internamiento en centros de reeducación por esta tipología delictiva, fueron del 1,04%.

En España en el año 2006 se detuvo 713 jóvenes por su presunta relación con un delito de carácter sexual, aproximadamente una décima parte de la población adulta detenida por estos mismos delitos (que ascendió a 7.809 personas) (Redondo, et al., 2011). Sin embargo, se considera que existe una considerable cifra oculta de abusos y agresiones sexuales, es decir, hechos no denunciados. En algunos estudios internacionales se ha estimado que una de cada seis mujeres podría sufrir a lo largo de su vida una violación, aunque muchas no lo denunciarían. Por lo que aunque no es fácil determinar la incidencia absoluta de este problema en la población, en estudios norteamericanos un 27% de mujeres y un 16% de hombres reconocían, siendo ya adultos, haber sido víctimas de abusos sexuales en su infancia (Echeburúa y Guerricaechevarría, 2000). En España se ha estimado, también a partir de estudios de autoinforme, que la frecuencia de los abusos sexuales podrían afectar al 20% de la población (23% de las chicas y 15% de los varones), siendo la proporción de abusos sexuales graves es más pequeña (estimándose en torno al 4-8% de la población) (López, Hernández y Carpintero, 1994; Pereda y Forns, 2007).

Las infracciones sexuales más graves son las agresiones sexuales y violaciones que comportan fuerza y violencia sobre las víctimas, y los abusos de menores, que aunque no

suelen implicar el empleo de violencia física, pueden conllevar graves daños para el desarrollo personal de las niñas y niños que sufren el abuso (Redondo et al., 2011).

Por otro lado, aunque la mayoría de los abusos sexuales en la infancia se producen en el contexto de la familia, con cierta frecuencia los abusadores son adolescentes y jóvenes que se sirven de otros menores para su propia satisfacción sexual (Barbaree y Marshall, 2006; Becker y Johnson, 2001; Sigurdsson, Gdjonsson, Asgeirsdottir y Sigfusdottir, 2010).

Las víctimas de agresión sexual y violación por parte de individuos suelen ser chicas conocidas por los agresores, y, en unos pocos casos, chicas desconocidas para ellos. Las víctimas de abusos sexuales habitualmente son niñas y, a veces niños pequeños. El perfil de los agresores sexuales no suele diferir mucho del de otros delincuentes juveniles agresivos y violentos: sujetos impulsivos, con bajo autoconcepto, poca tolerancia a la frustración, que menosprecian la figura femenina, con retraso en su desarrollo madurativo y con serias carencias afectivas, muy influenciables, con rasgos de agresividad física y verbal, con falta de internalización normativa y de sentimientos de culpa, y con dificultades de aprendizaje. Muchos suelen pertenecer a familias con problemas de afecto y violencia entre sus miembros, y en las que el modelo educativo ha sido de gran permisividad y falta de control (Redondo, et. al, 2011).

Los datos que nos aporta la FGE (2014) refieren que se han incoado en el año 2013 un total de 1.124 procedimientos. En el año 2012 se abrieron 1.127 causas; en 2011 fueron 1.251 causas; 1.363 en el año 2010; 1.513 las abiertas en 2009 y 1.740 procedimientos en 2008.

A partir de 2011 se distinguió entre delitos de agresión sexual y abuso sexual. En 2013 los casos de agresión sexual fueron de 575 frente a los 537 de 2012 y los 594 de 2011. Los de abuso sexual fueron 575 frente a los 549 de 2013, frente a los 680 de 2012 y los 657 que se registraron en 2001. Las cifras se mantienen estables con un ligero ascenso de las agresiones y una bajada de los abusos, poco significativos en uno y otro caso (FGE, 2014).

La ARRFMI afirma que en 2013 hubo 3 reparaciones extrajudiciales por delitos de Pornografía infantil/tenencia, lo que constituye un 0'65%. En medio abierto fueron 14 delitos de carácter sexual, que representa un 0,97%, y si se suman los casos procedentes de 2012 fueron 27, un 1,13% del total. En medidas que han conllevado internamiento han sido 4, un 1'39%, y aunando las de 2012, fueron 13, un 2,33 del total de casos atendidos. Según los datos de la ARRFMI (2014), el origen geográfico de los menores con mayor frecuencia ha sido

España y Países de Latinoamérica, seguido de Marruecos y Rumanía, siendo la media de edad de 16,4 años.

Para finalizar este apartado y a modo de resumen del mismo, se incluye una tabla donde se especifican según los datos de la ARRMi la evolución en la Comunidad de Madrid de la tipología delictiva desde el año 2007 hasta el 2013 (ARRMi, 2014).

Tabla 3.13. Evolución de la tipología delictiva según la ARRMi en el período 2007-2013

TIPO DE DELITO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Delitos de carácter sexual	63	40	28	26	19	19	18
Robo con intimidación	491	562	250	236	232	197	189
Robo con violencia	554	514	749	488	479	453	394
Robo con fuerza	308	307	246	270	273	238	218
Lesiones	427	405	363	336	287	238	200
Hurtos	343	276	220	246	233	193	202
Amenazas	85	81	81	86	75	64	49
Maltrato familiar/Violencia doméstica	176	282	268	217	216	205	197
Homicidio/Asesinato (Incl. en grado tentativa)	35	25	51	14	5	6	11
Tráfico de drogas/Contra la Salud Pública	55	40	41	34	17	27	14
Atentado contra la Autoridad	19	12	12	67	90	54	67
Delitos contra la Seguridad Vial				91	70	46	23
Otros (Daños, Estafa, Robo vehículo, Tenencia de armas, etc.)	486	340	407	191	225	132	148
TOTAL	3042	2884	2716	2302	2221	1872	1730

Fuente: Memoria de 2013 del ARRMi (2014)

3.2.3. Incidencia y estabilidad

La incidencia y estabilidad delictivas, constituyen dos parámetros fundamentales de las carreras delictivas juveniles (Rutter, Giller, y Hagell, 2000); es decir, con qué frecuencia se cometen delitos y durante cuánto tiempo. De hecho, las intervenciones educativas y de tratamiento en justicia juvenil tienen como objetivo fundamental la reducción de la reincidencia juvenil, lo que necesariamente se ha de traducir o en una disminución del número (incidencia) de delitos cometidos y de su gravedad, o bien en una interrupción de la estabilidad del comportamiento delictivo (o sea, en un acortamiento de la duración de las carreras delictivas) (Redondo et al., 2011).

Un reducido grupo de menores suele ser el responsable de la mayoría de los delitos, especialmente de los más graves y violentos, que se cometen en un determinado territorio (Bechtel, Lowenkamp, y Latessa, 2007; Hengeler, 1989, 2003; Loeber, Farrington, y Waschbusch, 1998; Lösel, 2000). Estos jóvenes serán principalmente los que acabarán cumpliendo medidas penales juveniles y quienes, a la postre, constituirán el objetivo de las intervenciones educativas y los tratamientos en el marco de la justicia juvenil (Redondo et al., 2011).

En España, un estudio de autoinforme realizado (Rechea, 2008), se efectuó, mediante una adaptación del Questionnaire for the International Study on Self-Report Delinquency; dicho cuestionario se aplicó a una muestra de 4.152 jóvenes escolarizados, incluyendo desde la educación secundaria obligatoria (ESO) hasta segundo de Bachillerato y Formación Profesional, de ambos sexos (49,2% varones y 50,7% mujeres), y con edades comprendidas entre 12 y 17 años (con excepción de aquellos casos correspondientes a sujetos repetidores, que podían tener una edad algo superior). Este estudio ofreció información no sólo sobre comportamientos delictivos más o menos graves sino acerca de una amplia tipología de posibles infracciones legales, muchas de ellas leves (Redondo et al., 2011).

Según este informe, 13 años sería la edad en que mayoritariamente los jóvenes españoles manifiestan haber cometido su primera infracción legal, aumentando la frecuencia infractora con la edad, hasta los 17 años. Un 98,8% de los adolescentes de la muestra refiere haber cometido alguna vez en su vida una conducta ilícita leve, siendo las más comunes: bajar música mediante Internet (66% de la muestra), consumir bebidas alcohólicas siendo menores de edad (63%), haberse emborrachado (41%), consumir cannabis (28%) y participar en peleas

(22%). Mientras que otras conductas violentas contra la propiedad de mayor entidad que las anteriores no superan el 5% (Redondo et al., 2011).

Como es bien sabido, y así como se ha visto en el apartado anterior, los varones llevan a cabo un mayor número de conductas antisociales que las mujeres. En el estudio de autoinforme de Rechea (2008), así como en otro estudio de autoinforme anterior, de Rechea, Barberet, Montañés, y Arroyo, (1995) el porcentaje de chicas infractores es inferior al de varones en todos los comportamientos ilícitos y antisociales analizados: participar en peleas, violencia contra las personas, vandalismo, consumo y venta de drogas, y delitos contra la propiedad. Las únicas excepciones a lo anterior tienen que ver con el consumo de alcohol y cannabis, y con el robo en tiendas, infracciones en el número de chicas que dicen haberlas cometido es superior al de los varones (Redondo et al., 2011).

Según la Memoria de 2013 publicada por la Fiscalía General del Estado, en todas las secciones siguen destacando el fenómeno creciente de la adolescencia disruptiva, la incidencia de los trastornos del comportamiento en esta etapa y las demandas de auxilio por parte de los padres. Si bien, se registraron un total de 8.226 asuntos, un ligero incremento respecto a los 8.058 archivos de 2012, si se toman en consideración, además los ajustes registrales producidos. En años precedentes fueron 10.425 en 2011, 11.832 en 2010 y 13.449 en 2009 (FGE, 2014).

Por otro lado, analizando el número de infracciones cometidas, según la Estadística de Condenados: Menores que publicó el Instituto Nacional de Estadística en 2013, dos de cada tres menores condenados cometieron una única infracción penal y uno de cada tres realizó más de una (INE, 2014).

Una cuestión de alta relevancia científica para nuestros intereses aquí tiene que ver con la pregunta de si los jóvenes que cometen delitos con una cierta frecuencia lo hacen preferentemente de un modo especializado (en un solo tipo de delitos) o más bien de manera generalista o versátil (es decir, cometen delitos de diferentes modalidades). Aunque no existe una respuesta categórica a esta cuestión, muchos jóvenes infractores no presenta una clara especialización delictiva, sino que su comportamiento antisocial tiene un carácter esencialmente genérico, dirigiéndose a diferentes objetivos y víctimas, según las circunstancias: pueden robar un coche, agradeciendo si es conveniente a su propietario, a la vez que trafican y consumen drogas; algunos de ellos pueden también realizar actos sexuales violentos, etcétera. Sin embargo, no todos los infractores persistentes llevan a cabo todo tipo

de conductas delictivas sino que en algunos se produce una cierta especialización (Redondo, et. al., 2011).

3.3. Estadística internacional de menores infractores

3.3.1. Inglaterra y Gales

Según el informe publicado por el Equipo de Análisis y el Equipo de Información en la Junta de Justicia Juvenil (Youth Justice Board, YJB), bajo la dirección del Jefe de Estadística en el Ministerio de Justicia en 2014, en general, hubo 98.837 infracciones comprobadas por los jóvenes en 2012/2013, habiéndose reducido un 28% con respecto al ejercicio anterior. La tipología delictiva que descendió de una manera más significativa fue: Quebrantamiento de medida, que se redujo en un 61%, delitos de tráfico 60%, atentado contra el Orden Público, 58%. Sin embargo, los delitos de robo, se redujeron en menor medida con un 32% entre 2009/2010 y 2012/2013 (YJB, 2014).

En 2012/2013, hubo 27.854 menores que entraron por primera vez en el Sistema de Justicia, habiéndose reducido en un 67% con respecto al 2002/2003, un 25% en referencia al ejercicio anterior (YJB, 2014).

En 2012/2013, había 43.601 jóvenes condenados en Inglaterra y Gales, lo que suponía un 28% menos que el año anterior. El número de jóvenes condenados con internamiento inmediato se redujo en un 31%, a partir de 4.024 en 2011/2012 a 2.780 en 2012/2013. Este número se ha reducido en un 61% desde el 2002/2003, cuando hubo 7.110 jóvenes condenados con internamiento inmediato (YJB, 2014).

De este modo, si atendemos a la variable internamiento, la población medida de los jóvenes que cumplían internamiento (menores de 18 años), se ha reducido en un 21%, con respecto al 2011/2012, y un 36% desde el 2009/2010. Si se incluye, además, aquellos jóvenes de 18 años de edad, la cifra asciende a 1.708, lo cual representa una reducción del 20% en el promedio de 2.141 en 2011/2012 (YJB, 2014).

Así, en 2011/2012, había 67.995 detenciones de los jóvenes (10-17 años) por delitos de declaración obligatoria, lo que representa el 13'6% total de la población arrestada. En 2012/2013, la mayoría (77%) de los delitos fueron cometidos por jóvenes de 15 años de edad o más, hasta 76.034 delitos probados, y 22.803 por menores entre 10 a 14 años (YJB, 2014).

Por último, atendiendo al género del infractor, los hombres representaron el 82% de los delitos probados por jóvenes en 2012/2013, cifra que ha aumentado en un 14% desde el

2009/2010. Así, la proporción de los delitos probados cometidos por mujeres fue del 18% en 2012/2013, esta proporción ha fluctuado entre el 16 y 22 en la última década (YJB, 2014).

3.4. Resumen

La delincuencia de menores es uno de los fenómenos que produce más alarma social en las sociedades europeas aunque las cifras de delitos cometidos por menores tanto en España como en otros países de Europa no son tan elevadas como suele considerarse por la opinión pública (Columbu et al., 2012; Redondo et al., 2011).

Si bien, a la hora de conceptualizar la conducta delictiva, se define como un acto prohibido por las leyes penales de una sociedad, es decir, conductas protagonizadas por menores de edad, que se encuentran tipificadas por la ley penal de adultos. Por lo que debe existir una ley anterior a la conducta, ésta ley debe ser de carácter penal y que someta al responsable a los Tribunales de Justicia. Aun así, el delito es igualmente relativo, tanto en el tiempo como en el espacio. Las leyes evolucionan, y lo que en el pasado era un delito, en la actualidad puede que no lo sea, o al contrario (por ejemplo, el consumo de drogas). Asimismo, el espacio geográfico limitaría igualmente la posibilidad de que una conducta puede ser definida como delito o no (Garrido, 1987). De este modo, no todos los países mantienen el mismo concepto de menor infractor. Unos consideran que existe delincuencia o infracción exclusivamente cuando los menores realizan las mismas conductas que los mayores de edad, mientras que otros países, incluyen en las conductas tipificadas como delitos las infracciones de las normas sociales o morales, constituyendo “delitos por razón de la condición jurídica”.

En España, aunque se carecía de estudios sobre la opinión pública y actitudes punitivas hacia los menores infractores (Varona, 2008), no ha sido obstáculo para que algunas de las reformas llevadas a cabo en la LORPM se hayan justificado según la exposición de motivos de la L.O. 8/2006 en: “Un aumento considerable de delitos cometidos por menores, lo que ha causado gran preocupación social y ha contribuido a desgastar la credibilidad de la Ley por la sensación de impunidad de las infracciones más cotidianas y frecuentemente cometidas por estos menores, como son los delitos y faltas patrimoniales (BOE, 2006).

En el presente trabajo a la hora de cuantificar indicadores sobre la justicia de menores infractores, se ha atendido a la prevalencia e incidencia, habiendo tomado como

referencia tres fuentes diferentes de información. Por un lado, a nivel nacional, la “Estadística de condenados: menores” que confecciona el Instituto Nacional de Estadística, los datos de las memorias de la Fiscalía General del Estado, y de manera más concreta, los datos de la memoria de la ARRFMI en la Comunidad Autónoma de Madrid. Si bien, dichas fuentes atienden a variables y métodos diferentes en la recogida de información, por lo que no es posible la comparación de los datos, pero nos aporta una visión global de dicha prevalencia. De las tres fuentes, se recogen datos del año 2013, dado que en la elaboración del presente trabajo, aún no se había publicado ninguna de las memorias del 2014.

Así, la Fiscalía General del Estado atiende a expedientes incoados, y como se puede en este capítulo de la revisión teórica, a partir del 2008 comenzó una tendencia a la baja, que es más acusada en 2010 y, posteriormente, aunque bajando, se mantiene relativamente estable. Por otra parte, la Libertad Vigilada, es la medida mayoritariamente impuesta y, en las medidas privativas de libertad, el régimen semiabierto.

Por otro lado, según la Estadística de Condenados: Menores, del Instituto Nacional de Estadística, que atiende a las sentencias firmes comunicadas al Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, apuntando igualmente a datos que descenden en cuanto al número de sentencias. Si bien, en el año 2013, el 81,3% de los menores condenados fueron varones, frente al 18,7% mujeres. Por edad, el grupo de 17 años fue el más numeroso, representando el 32,5% del total. La mayoría de los condenados fueron de nacionalidad española (76%). En 2013, al igual que el año anterior, Andalucía fue la comunidad con más menores condenados inscritos en el registro, con el 23,2% del total, le siguieron la Comunidad Valenciana (15,3%) y Cataluña (11,5%). Del total de las infracciones, el 65,5% fueron delitos, mientras que el 35,5% fueron faltas. Por sexo, las infracciones penales fueron cometidas en un 82,3% por varones, mientras que por mujeres fueron el 17,7%. También la medida adoptada fue en mayor frecuencia la Libertad Vigilada (39,6%) del total, la prestación en beneficio de la comunidad (18,1%) y el internamiento en régimen semiabierto (12,4%).

La Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI, 2014), que en su memoria de 2013 contempla los menores atendidos en la Comunidad de Madrid, estos fueron 2.023 contando las reparaciones extrajudiciales, junto el medio abierto y el internamiento, y haciendo alusión a las altas en 2013 fueron 1.569, de los cuales el 81,71%

fueron varones y el 18,29% mujeres. En la evolución de los datos por menores atendidos desde el 2007, hasta el 2013 también hay una tendencia a la baja del -179%. Al igual que en las otras dos fuentes, las medidas en medio abierto son más predominantes, 1.311 menores atendidos, seguida de las reparaciones extrajudiciales 454, y 258 menores con medidas de internamiento. Según los datos de la ARRMI en 2013, los 18 años fueron la edad con mayor número de jóvenes, representando un 27,34% del total, seguida de los 17 años con un 26,07%. Aunque atendiendo a memorias anteriores, también son los 17 años la edad más frecuente. Por otro lado, la nacionalidad española representa un 55,32%, seguida de la latinoamericana con un 24,09%.

Atendiendo a la tipología delictiva, las tres fuentes consultadas aluden a una mayor frecuencia de robos con violencia, robos con fuerza y, por último delitos contra las personas.

Capítulo IV:

Evaluación del riesgo de

reincidencia

4.1. Introducción

Son diferentes las causas por las que los menores terminan en un Juzgado. En varias ocasiones se ha atribuido el mayor peso de este tipo de conductas al entorno familiar, en cambio, la mitad de los menores atendidos en las Fiscalías del Estado Español, pertenecen a familias sin problemática destacable y son de clase media alta. Según Ruiz y Navarro (2004), la causa de sus conductas no se encuentra tanto en el entorno marginal del menor, sino en la crisis de autoridad de los progenitores, el afán consumista de los jóvenes y la sensación de impunidad que pueden tener los menores respecto a sus acciones (Cuervo, 2011).

La criminología del desarrollo ha efectuado estudios sobre carreras delictivas en relación a la etapa evolutiva en la que se encuentra el menor: infancia, adolescencia o juventud (Loeber et al., 1998). Muchos jóvenes realizan actividades delictivas de manera puntual en la adolescencia, que en la mayoría de los casos tienden a desaparecer al superar esta etapa. En relación a las carreras delictivas, la teoría integradora de Farrington (1996) diferencia entre la tendencia antisocial de un sujeto a la hora de cometer un delito y la decisión de cometerlo. La primera opción, la tendencia antisocial, depende de tres factores: 1) los procesos relacionados con el deseo de bienes materiales, de estimulación, prestigio social, de frustración y estrés; 2) una direccionalidad antisocial, como consecuencia de la ausencia de actividades prosociales; 3) la carencia de inhibiciones al comportamiento delictivo como empatía, creencias o actitudes relacionadas con la crianza. En cambio, la toma de decisión para cometer un delito depende de la oportunidad para el delito y de los costes y beneficios percibidos en una situación en concreto (Cuervo, 2011).

Al centrarnos en la carrera delictiva de un individuo según Farrington (1996), el inicio de la actividad delictiva dependerá de sus amistades, de su motivación hacia bienes materiales y de la posible imitación de modelos antisociales. La continuidad en el delito va a depender de la persistencia de estas tendencias antisociales. Por su parte, el abandono de este tipo de vida dependerá de la habilidad para conseguir satisfacer sus objetivos y deseos por medios legales y su relación con vínculos prosociales (Cuervo, 2011).

Cabe destacar que la delincuencia es un fenómeno complejo y multicausal, cuyo tratamiento requiere de intervenciones en diversos niveles, tanto personales como sociales. En esta multicausalidad, uno de los factores destacados del mantenimiento de las carreras

delictivas juveniles es, la motivación delictiva de los propios infractores. Es decir, el grado en que propenden a buscar oportunidades delictivas, a pensar e imaginar posibles delitos, a justificar sus acciones antisociales, a no tomar en consideración los daños que puedan causar a las víctimas. Así, un modo de prevenir los delitos e interrumpir las carreras delictivas juveniles es rebajar la motivación antisocial de los menores infractores (Blackburn, 1994; Hollin y Palmer, 2006). Para ello, los tratamientos intentan producir cambios en las conductas, cogniciones y emociones que se orientan a la infracción delictiva.

Debido a lo anterior, es importante conocer los factores relacionados tanto con la delincuencia, como con la reincidencia delictiva para poder no sólo valorarla, sino realizar el tratamiento individualizado más adecuado a las necesidades criminógenas del menor/joven. Aun así, y dada la existencia de diferentes proyectos europeos relacionados con la delincuencia y con la participación prosocial activa de este sector, se constata que hay una falta de instrumentos y medidas específicas para el tratamiento de la delincuencia juvenil (European Economic and Social Committee, 2006).

4.2. Teorías sobre la Conducta Delictiva

Los enfoques teóricos sobre la conducta delictiva señalan que el medio social en el que nos encontramos puede favorecer el desarrollo de conductas delictivas, pero aun así, no todos los individuos se comportan de la misma forma ante las mismas condiciones socioambientales. Por ello, para entender el proceso de adquisición de las pautas delictivas, se hace necesario recurrir tanto a variables sociales, como individuales (Cuervo, 2011).

El proceso de aprendizaje y de socialización que ha tenido el individuo puede haberle llevado a una educación deficitaria a la hora de integrar las normas sociales y las pautas de conducta prosociales e incompatibles con la delincuencia. Se asume así, que dicho aprendizaje cuenta con una cierta estabilidad, que explicaría la persistencia de ciertas conductas y por lo tanto, de cierta predictividad en su conducta delictiva. Diversos estudios demuestran que los niños con conductas antisociales, tienden a reproducirlas incluso en la edad adulta (Farrington, 1992; Loeber y Stouthamer-Loeber, 1986). Quizás muchos de estos delitos podrían haber sido prevenidos o disminuidos con una detección y reeducación en los inicios de estos actos, mediante una aplicación eficaz de las medidas de Justicia de Menores (Cuervo, 2011).

A lo largo de la historia, la explicación de la conducta delictiva, se ha ido caracterizando desde una corriente biológica y psicobiológica a una definición más relacionada con el contexto, donde los factores individuales interaccionan con el ambiente. Si bien, la literatura científica cuenta con diferentes corrientes en la investigación acerca de la conducta delictiva, para el presente trabajo se han seleccionado tres: la sociológica, la psicopatológica y la derivada del aprendizaje social.

4.2.1. La Corriente Sociológica

Esta corriente explica la delincuencia como producto de fuerzas socioeconómicas y políticas. En el marco de la misma, la delincuencia se origina debido al conflicto de poder, conflictos de clases o la frustración ante la pobreza. Los factores de riesgo suelen ser estáticos, como la raza, sexo o el estatus socioeconómico, haciendo referencia a un cierto determinismo en las circunstancias del individuo. Hay pocas áreas de influencia del menor y en el caso de intervenir, debe ser a un nivel sociológico muy amplio, sin contar con un plan de evaluación del menor infractor (Cuervo, 2011).

Dentro de esta corriente se encuentra la Teoría de la contención de Reckless (1961), la cual señala que los factores asociados a la delincuencia son de dos tipos. El primer tipo son factores derivados de las presiones ambientales, de pobreza, de conflicto y represión social o de la desigualdad de oportunidades o también incitadores ambientales como la existencia de objetivos atractivos, subculturas que refuerzan la delincuencia de sus miembros o la influencia criminógena de los medios o la publicidad. Mientras que el segundo grupo, se refiere a los controles para no cometer delitos, tanto internos (tolerancia a la frustración, sentido de la responsabilidad, capacidad de autocontrol, etc.), como externos (educación moral, instituciones sociales que refuercen el cumplimiento de las normas, etc.). Por tanto, la probabilidad de la comisión de los delitos dependerá del balance entre estos dos tipos de factores.

Las siguientes dos posturas, dan mayor importancia a los factores individuales y a los factores dinámicos de riesgo, haciendo más factible la intervención.

4.2.2. Los Modelos derivados de la Psicopatología

Estos modelos defienden que el causante del desarrollo de la delincuencia es el déficit psicológico personal, un trastorno biológico emocional, cognoscitivo o comportamental, relacionado con variables como la testosterona, ansiedad, impulsividad o baja inteligencia. Como ejemplo cabe citar la teoría de Eysenck (1964) y Lykken (1995), quienes abogan por un perfil del delincuente con altos niveles de psicoticismo, con alta impulsividad y tendencia a la búsqueda de sensaciones, respectivamente. Sin embargo, estos factores tienen un nivel bajo de predicción (Gendreau, Litle y Gossin, 1996).

4.2.3. Las Teorías del Aprendizaje Social

Estas teorías incluyen ambos tipos de factores, individuales y sociales, por ende, la delincuencia deriva de la interacción de ambos. Los diferentes factores psicológicos, emocionales, sociales, biológicos y cognitivos, influyen en los costes y beneficios percibidos de las interacciones con el entorno. El énfasis se sitúa en la intensidad de los costes y recompensas para la conducta antisocial en oposición a los costes y recompensas de la conducta prosocial (Andrews y Bonta, 2006). La percepción de las recompensas está determinada por factores individuales como la historia previa o las actitudes ante los actos delictivos, pero también por factores sociales como la familia o los amigos, que se encargan de regular las recompensas o los castigos. Esta balanza se verá mediada por los factores cognitivos del menor e incluso por la historia observada de costes y beneficios de otros individuos, que también forman parte del bagaje del aprendizaje (Bandura, 1977).

Estas teorías se basan en que el comportamiento es aprendido a través de la interacción con el entorno y la conducta delictiva será más probable en menores que perciban más recompensas para la realización de actividades antisociales que prosociales. Esto corrobora el hecho de que los menores con amigos antisociales o que se perciben como pertenecientes a una banda, poseen mayor riesgo de reincidencia que los que poseen amigos normalizados (Tollet y Benda, 1999). En general, las investigaciones determinan que las amistades y las actitudes antisociales son los mayores predictores de la reincidencia delictiva y consecuentemente, los cambios en estos dos constructos influyen en la futura conducta delictiva (Andrews, Wormith y Keisling, 1985). Esta perspectiva cuenta con un mayor apoyo empírico y mayores implicaciones prácticas, ya que cuenta poca literatura en la predicción de

la reincidencia acerca de los costes percibidos y menos aún de los beneficios (Halliday y Graham, 2000).

Los factores relacionados con las teorías sociológicas tienden a ser estáticos, por lo tanto la intervención debe ser muy amplia para que tenga efecto, mientras que las otras dos perspectivas, la psicopatológica y la del aprendizaje social, dan pie a una intervención más individualizada, ya que cuenta en mayor medida con factores dinámicos e individuales. A partir del estudio de Andrews y Bonta (2006), se comprobó que los factores predictores más pobres fueron los de las Teorías Sociológicas y Psicopatológicos, por lo tanto, en este trabajo se considera la Teoría del Aprendizaje Social como la más apropiada para el estudio de la reincidencia, ya que cuenta con mayor base empírica debido a la interacción de factores personales y situacionales (Cuervo, 2011).

A continuación, se detallan las dos perspectivas principales del Aprendizaje Social que explican la conducta delictiva. En concreto, se describen dos modelos: el Modelo del Desarrollo Social: una teoría de la conducta antisocial, de Catalano y Hawkins (1996), y el Modelo General Psicológico, Social y de Personalidad de la Conducta Criminal, de Andrews, y Bonta (2006).

4.2.3.1. El Modelo del Desarrollo Social

Este Modelo incorpora asunciones de diferentes teorías, aunque su principal premisa proviene de las teorías del Aprendizaje Social: las personas se implican en actividades por la satisfacción o recompensa que esperan conseguir de ellas. Esta premisa es válida tanto para las conductas prosociales, como antisociales. La segunda premisa de este modelo asume que existe un consenso normativo en nuestra sociedad en lo que se refiere al conocimiento de las normas sociales. Este consenso implica que las conductas prosociales serán, por lo general, preferibles a las antisociales (Cuervo, 2011).

La conducta se explica a través de dos trayectorias de desarrollo, la prosocial y la antisocial, a diferencia de otros modelos teóricos, que sólo representan la trayectoria antisocial. Una trayectoria se encuentra encaminada a una creencia en el orden moral y un estilo de vida prosocial general y la otra conduce a valores antisociales y propensión a un

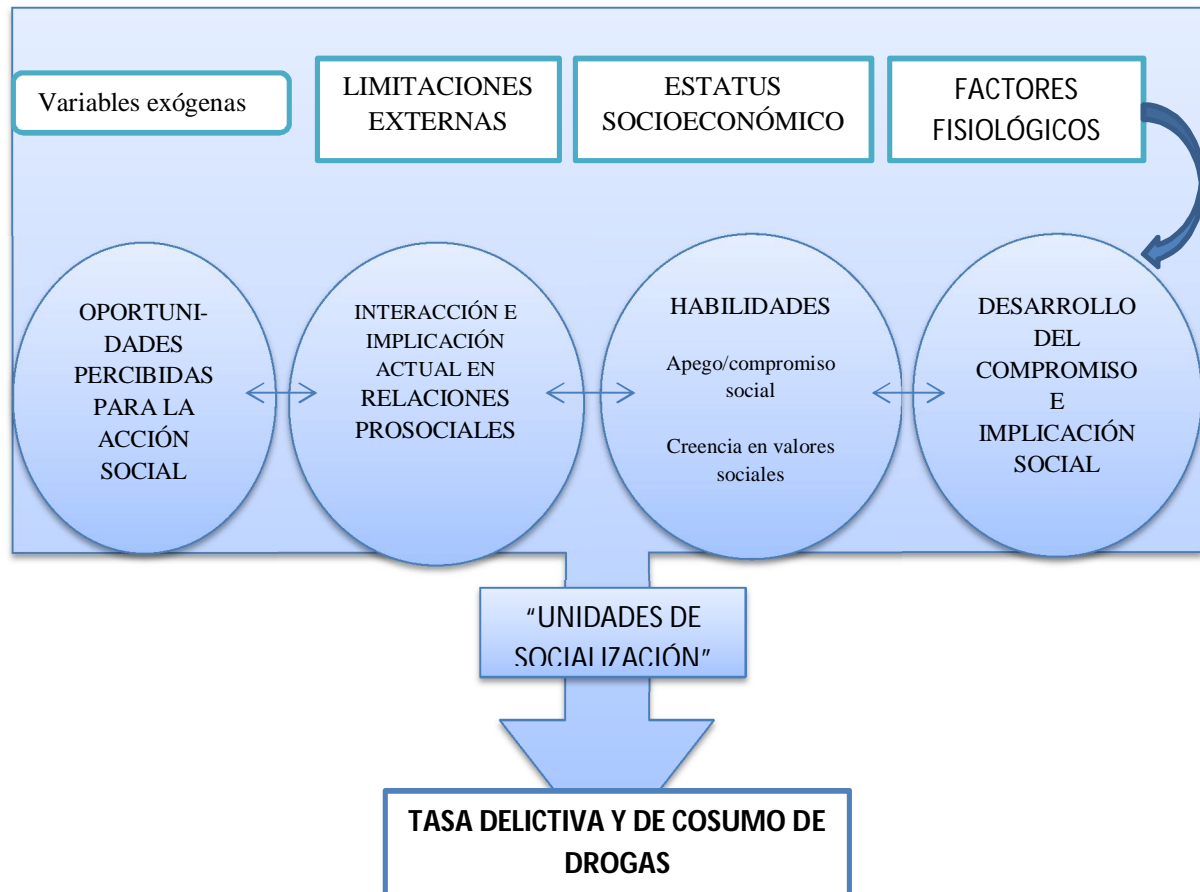
estilo de vida marginal. De esta manera, se intenta explicar la conducta antisocial o comportamientos delictivos, representando cómo los encuentros con elementos prosociales o antisociales la facilitan o inhiben. Los autores crearon este modelo con la finalidad de identificar constructos e integrar la evidencia de los diferentes estudios generales capaces de predecir este tipo de comportamiento y usar este conocimiento para predecir la relación con el comportamiento antisocial (Cuervo, 2011).

Con el objetivo de entender la forma en que se adquiere el comportamiento antisocial, es necesario un modelo ecológico amplio, donde se incluyan tanto factores de delincuencia, como de consumo de drogas. Los patrones de comportamiento son adquiridos a través del tiempo, mediante interacciones sociales (Shaw y Bell, 1993). Los valores y creencias en torno a comportamientos prosociales o antisociales determinan el desarrollo de patrones de conductas relacionadas con dichas tendencias hacia un lado o hacia otro. Estos valores se adquieren mediante las denominadas “unidades de socialización” como la familia, la escuela, la religión, el grupo de iguales o la sociedad, que son las que influyen en la adquisición de dichos valores. Por ejemplo, la creencia en el orden moral inhibe el inicio de pequeños delitos, mientras que el haberlos cometido, influye en nuestra concepción de la moralidad (Agnew, 1985). Para la adquisición de estos valores, tanto prosociales como antisociales, cabe tener en cuenta cuatro procesos o constructos (Cuervo, 2011):

1. Las oportunidades percibidas para iniciar o involucrarse en actividades o interaccionar con los demás.
2. El grado de implicación en la interacción actual en dichas actividades, con los individuos o instituciones.
3. Las habilidades sociales, cognitivas, emocionales a nivel individual para participar e involucrarse en dichas interacciones:
 - a) Apego y compromiso con actividades y grupos, el cual afecta directamente a la creencia hacia las normas morales y de la sociedad.
 - b) La creencia en el sistema de valores de los iguales, colegio o comunidad que lleven al menor a decidir qué actividades son moralmente aceptables para él y le llevan a mantener o crear lazos con este grupo.
 - c) Percepción de la oportunidad de interactuar con otros grupos.
4. El desarrollo del compromiso e implicación en actividades o grupos prosociales o antisociales. Este proceso dependerá de en qué forma se refuerce a los individuos y

a su vez, también estará influido por la experiencia anterior de castigos y recompensas en esas actividades (Hundleby, 1986).

Figura 4.1. Modelo de Desarrollo Social



Fuente: Figura tomada de Catalano y Hawkins (1996)

Estos factores se relacionan con las habilidades y competencias que el joven muestra en situaciones sociales, afectándose y modulándose unos a otros. La adherencia a cualquiera de ellos en sentido prosocial, afectará a los demás inhibiendo e influyendo las relaciones con los otros factores en sentido antisocial y viceversa. Los iguales y el entorno escolar forman los mayores focos de explicación de la conducta. Por otra parte, la buena relación o el rechazo de los padres juegan un papel importante, pero las experiencias del joven en la escuela y su relación con los amigos, son las que determinan en mayor medida, el tipo de oportunidades y recompensas que le harán involucrarse en actividades prosociales o antisociales (Cuervo, 2011).

Cuando estos cuatro procesos se consolidan, se desarrolla un vínculo con la “unidad de socialización” que tiene poder como para influir en el comportamiento futuro. Este vínculo social consiste en el apego con los otros miembros de la “unidad de socialización” y en la creencia de los valores de la unidad. Esto inhibe el comportamiento adaptado o desadaptado influyendo a su vez en el cálculo de costes y beneficios de sus propios intereses según las normas y valores de la unidad de socialización (Cuervo, 2011).

De esta forma, los factores protectores y la capacidad individual operan indirectamente en los factores de riesgo modulando su efecto (Hawkins, Catalano y Miller, 1992; Rutter, 1990). Este efecto es recíproco y se ve influenciado a su vez por el comportamiento previo. De esta forma, se genera un entramado de variables que interactúan entre ellas, contando con períodos de mayor o menor gravedad, que afectarán a un futuro comportamiento.

El Modelo trata de explicar el inicio, mantenimiento y cese de conductas delictivas y abuso de drogas, asumiendo que este tipo de conductas evolucionan a lo largo del desarrollo, bajando de intensidad en la edad adulta. De tal manera, este marco teórico desarrolla un enfoque evolutivo. Las fases se han separado en función de los cambios en el entorno escolar de los menores. Según la etapa evolutiva del joven, desde la infancia hasta la adolescencia, el modelo incluye nociones específicas para cada una de las cuatro etapas, de la edad escolar a la etapa del Instituto. Los periodos que diferencia el modelo son cuatro: periodo preescolar, escuela primaria, E.S.O. y Bachillerato. Se debe tener en cuenta que estas fases no coinciden exactamente con las etapas escolares en nuestro país (Cuervo, 2011).

En el periodo que según el modelo, podemos equiparar al de Bachillerato, muchos factores protectores y de riesgo ya se han establecido, como por ejemplo, las pautas educativas inadecuadas (Blumstein, Farrington y Moitra, 1985; Loeber y Dishion, 1983). En general, las influencias prosociales y antisociales del periodo anterior influyen en los factores del siguiente. Por ejemplo, si en un periodo el menor ha estado involucrado en conductas violentas, le será más difícil percibir oportunidades para la interacción prosocial en el siguiente periodo. En cada transición, se espera que el comportamiento antisocial tenga un efecto negativo indirecto en las relaciones e interacciones prosociales, refuerzo prosocial, lazos prosociales de apego, compromiso y creencia en la legitimidad de las leyes y normas (Cuervo, 2011). En este periodo, los iguales desempeñan el factor principal, los padres juegan un papel importante en cuanto a consumo de drogas, sexo y uso de anticonceptivos (Munsch y Blyth, 1993). Aun así, de forma global, las limitaciones externas que delimitan las

conductas del menor, las constituyen los iguales, el Instituto, el sistema legal y en menor medida, la familia.

Por tanto, este se considera el periodo más importante en el desarrollo del menor, ya que en él se determinan los comportamientos que se mantendrán durante los años futuros. Las recompensas y costes percibidos, solidificarán las conductas tanto prosociales como antisociales. Se espera que en esta etapa, las recompensas por conductas delincuenciales disminuyan en los menores que no han sido expuestos a altos niveles de riesgo temprano, y que las han llevado a cabo como medio de individualización. En cambio, aquellos menores que hayan experimentado pocas recompensas por interacciones prosociales y que han contado con altos niveles de delincuencia temprana y consumo de drogas, se hipotetiza que tenderán a ser delincuentes con mayor grado de cronicidad. El resultado final del camino antisocial en el periodo del Instituto, comprende un proceso acumulativo. Su entorno se verá caracterizado por un bajo rendimiento escolar, bajo estatus social y falta de acceso a roles de liderazgo social adaptativo. La constelación de unidades de socialización en esta etapa, reflejará altas tasas de delincuencia, un consumo de drogas frecuente y persistente, asociado a problemas de comportamiento (Cuervo, 2011).

Este modelo pretende demostrar que cambios inducidos experimentalmente en el contexto diario del menor, donde las recompensas son más breves en el tiempo y varían en mayor medida, conllevan cambios en los factores de riesgo. Como consecuencia, estos cambios afectarán a su vez en el futuro comportamiento antisocial mediante procesos más duraderos que se reflejan en las actitudes, apego o las creencias de los menores y por lo tanto en sus conductas (O'Donnell, Hawkins y Abbott, 1995).

4.2.3.2. El Modelo General Psicológico, Social y de Personalidad de la Conducta Criminal

En este Modelo se concibe al individuo como un agente que interactúa con su entorno y que no se explica sin este contexto interactivo y dinámico. Por lo tanto, el modelo pretende explicar los procesos que conducen al delito mediante una perspectiva social y comunitaria. La escuela, la familia, el grupo de iguales y la comunidad son los agentes del proceso de socialización que interactúan recíprocamente entre sí y que deben ser considerados en la tarea de predecir la conducta. De la misma forma, la génesis de la conducta delictiva se explica en

concreto mediante el refuerzo personal, interpersonal y comunitario que recibe el menor. A su vez, en un contexto más amplio, el menor se encuentra también influido por variables como el género, el sexo, la edad o la raza (Cuervo, 2011).

Este Modelo nace de la pretensión de estudios iniciales en décadas anteriores, de determinar las causas de la delincuencia, estableciendo una relación causal entre las circunstancias particulares de los menores y sus actos. Uno de los estudios pioneros en este campo fue el de Glueck y Glueck (1950), donde compararon a un grupo de 500 menores de 10 a 17 años con actos delictivos, con 500 menores de un colegio. Ya en este estudio, los autores diferenciaron unos factores centrales como responsables en mayor medida de la conducta delictiva: antecedentes delictivos de los padres, pautas educativas deficientes e impulsividad, llegando a la conclusión de que el efecto de los factores es aditivo, como apuntarán los posteriores estudios de la misma temática.

Aun así, existía la creencia de que los factores estáticos, referidos a los factores difícilmente modificables en la vida del individuo, ejercían mayor influencia que los dinámicos, es decir, los modificables a la hora de reincidir. Para intentar esclarecer esto, Gendreau et. al., (1996) llevaron a cabo un importante meta-análisis de más de 131 estudios y cerca de 750.000 infractores en el seguimiento de la reincidencia en menores a partir de los 18 años. Este estudio pretendía determinar el papel de los factores de riesgo en la reincidencia, a partir de la distinción que hicieron Andrews y Bonta (2006). En el estudio, los mejores predictores de la reincidencia fueron la historia criminal adulta, el diagnóstico de personalidad antisocial, las amistades delincuentes, y las actitudes antisociales. De los predictores con resultados significativos encontrados, aparecieron ocho factores que se clasificaron en factores dinámicos y estáticos. A pesar de que ambas categorías fueron significativas, había cierta superioridad en los factores dinámicos, con una correlación media de 0.13 frente a 0.11 de los factores estáticos. En este meta-análisis, se obtuvo el mayor coeficiente promedio para los estudios que habían utilizado diferentes factores en la predicción de la reincidencia, en lugar de centrarse únicamente en un único factor indicando que la predicción aumenta con el número de factores añadidos. La mayoría de los factores de riesgo aisladamente presentaban baja correlación con la delincuencia futura, en cambio cuando se unían varios factores, el efecto era exponencial, es decir, mucho mayor a la suma de ellos.

De la misma manera, a partir de diferentes meta-análisis en la predicción de la reincidencia (Gendreau et al, 1996; Lipsey y Derzon, 1998; Loeber y Dishion, 1983; Loeber,

y Stouthamer-Loeber, 1986), se han seleccionado los mayores factores emergentes de riesgo y más significativos de la actividad delictiva de estas investigaciones. Estos factores estáticos y dinámicos, se recogen en el Modelo General Psicológico, Social y de Personalidad de la Conducta Criminal, de Andrews y Bonta (2006), siendo los factores con mayor valor predictivo, los cuatro primeros.

- Actitudes procriminales/antisociales, valores, creencias y estados cognitivo-emocionales.
- Relaciones antisociales y pocas relaciones prosociales.
- Factores temperamentales y de personalidad en relación con la actividad criminal (impulsividad, activo, bajo capacidad en la resolución de problemas/ habilidades de autorregulación).
- Historia de comportamiento antisocial desde edad temprana.
- Factores familiares que incluyen delincuencia y problemas psicológicos en la familia de origen (bajo nivel de cohesión, baja supervisión parental, etc.).
- Bajos niveles de educación personal, vocacional o recursos económicos.

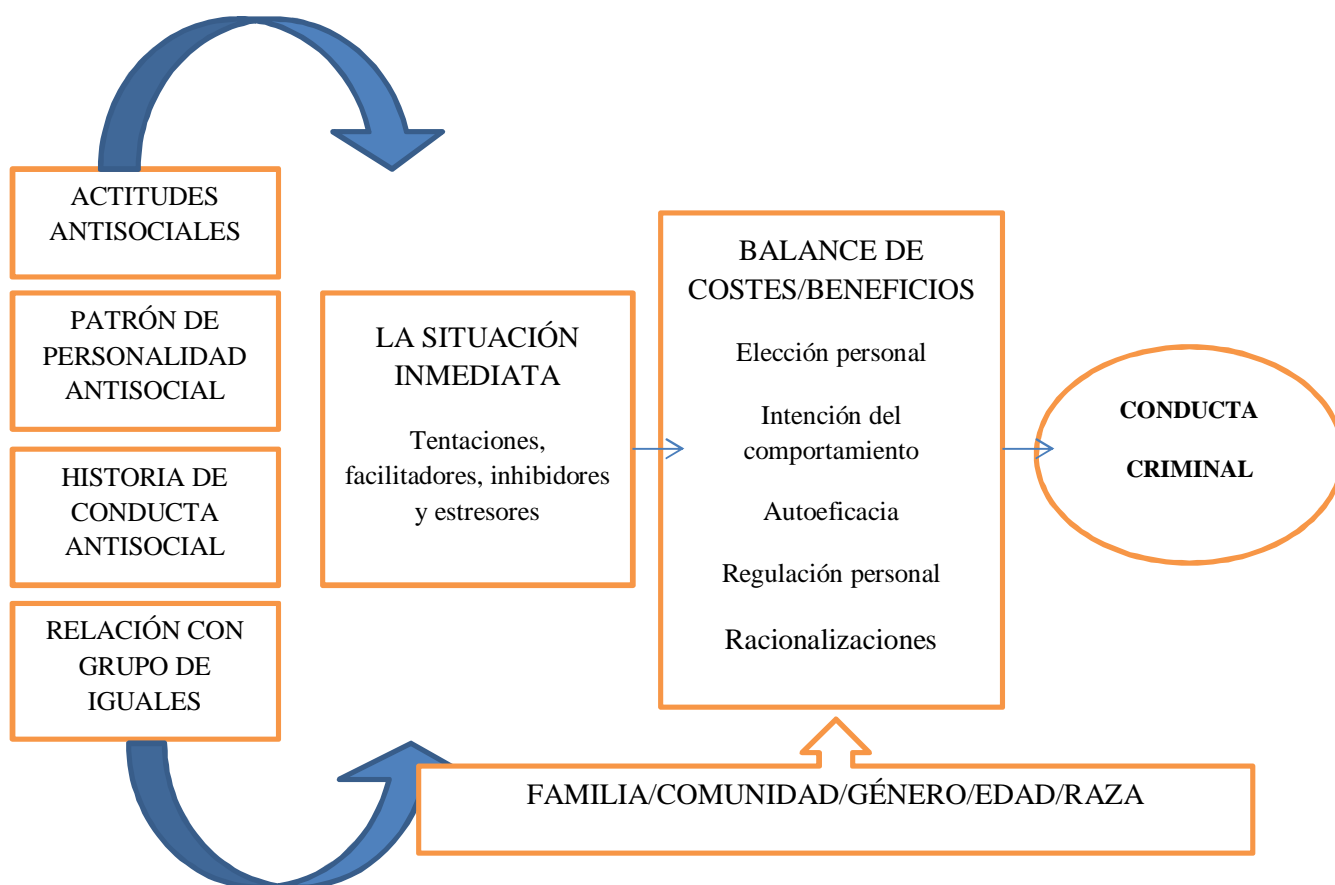
En la actualidad, estos cuatro factores continúan siendo los mayores predictores de la reincidencia: la historia delictiva pasada, el estilo de personalidad antisocial, actitudes antisociales y amistades antisociales, también llamados *The Big Four* por Andrews y Bonta (2006). Los estudios anteriores encuentran que estos cuatro factores estarían seguidos de otro grupo de factores con correlaciones moderadas: circunstancias familiares deficitarias, área de educación y empleo, área de abuso de sustancias y área de ocio y tiempo libre, también llamados *The Central Eight* (Andrews y Bonta, 2006). Estas ocho áreas principales coinciden con las planteadas en el Inventario YLS/CMI, instrumento utilizado en varios estudios de este trabajo. La historia previa de conductas delictivas incrementará la aparición de conductas futuras de este tipo. Si en el pasado un menor obtuvo más beneficios que penalizaciones por su conducta, aumentará su autoeficacia. La personalidad y actitudes marcan la dirección del comportamiento, racionalizan y explican la conducta, siendo la base del control personal.

Las amistades antisociales regulan y modelan mediante la presión de grupo lo que se considera correcto o no mediante recompensas y castigos, así el menor va interiorizando las conductas delictivas en el caso de que su grupo de referencia sea antisocial. La historia previa de conductas delictivas, como ya se ha comentado anteriormente, también incrementará la

aparición de conductas futuras de este tipo, si en el pasado tuvieron más beneficios que penalizaciones, aumentando su autoeficacia (Cuervo, 2011).

De esta forma, las diferencias individuales se explicarían según los factores de riesgo de cada menor, a más factores de riesgo, mayor probabilidad de que se desarrolle la conducta delictiva. Estos factores influyen en la situación inmediata, en el determinado momento y contexto de la situación, es decir, en el aquí y ahora. Es entonces cuando el menor analiza la situación según el balance de costes y beneficios percibidos y según estas racionalizaciones y la definición de la situación realizada, elige o no cometer el acto delictivo (Andrews y Bonta, 2006).

Figura 4.2. Modelo General Psicológico, Social y de Personalidad de la Conducta Criminal



Fuente: Figura tomada de Andrews y Bonta (2006)

4.2. Análisis de las trayectorias delictivas de los menores infractores

Desde el paradigma de la Criminología del Desarrollo, diferentes estudios demuestran que la mayoría de los jóvenes realiza algún tipo de actividad delictiva durante su adolescencia, pero sólo algunos persisten en este tipo de conductas (Rechea y Fernández, 2001). La mayoría de las carreras delictivas suelen ser abandonadas de manera natural, en cambio los menores que persisten en este tipo de conductas suelen ser un menor número, con un inicio precoz en estas conductas desadaptadas y delitos más graves (Howell, 2003; Moffit, 1993).

Según la teoría de Moffit (1993), *Dual Taxonomy Theory*, existen dos tipologías delictivas en los menores, una en la que la trayectoria delictiva se encuentra limitada a la adolescencia, y otra persistente a lo largo de la vida del individuo. La primera trayectoria se inicia en la adolescencia temprana, con su máximo auge en la mitad de esta etapa y terminando al inicio de la edad adulta. Este proceso en el que los adolescentes muestran este tipo de conductas representaría un estándar en su desarrollo, como declaración de su autonomía y poniendo a prueba sus límites. Mientras, la trayectoria persistente comprende a una pequeña proporción de menores con problemas de comportamiento desde edades más tempranas o desde la niñez, que se mantienen involucrados en conductas delictivas a lo largo de sus vidas.

Esta dualidad en las trayectorias es ampliada por Catalano y Hawkins (1996), mediante la explicación de las causas que conducen a la trayectoria puntual. Esta trayectoria estaría caracterizada por encuentros con elementos prosociales que definirían un estilo de vida prosocial general. En este modelo, los valores y creencias en torno a comportamientos prosociales o antisociales determinan el desarrollo de patrones de conductas hacia un tipo u otro de trayectoria.

De la misma forma, un estudio mediante encuestas a menores (Rechea y Fernández, 2006) confirma que el 98,8% de los jóvenes ha cometido algún tipo de conducta antisocial o delictiva alguna vez en su vida y un 72,4% lo ha hecho en ese último año. Estas conductas desde los inicios de la adolescencia, irían en aumento con la edad, alcanzando su nivel máximo a los 17 años. Una vez pasado este punto, la conducta se normalizaría y al final de la

adolescencia, sobre los 18 años, las conductas delictivas comenzarían a descender (Fernández et al., 2009).

Por otra parte, el hecho de delinquir más allá de una forma exploratoria, podría ser un factor de riesgo para la continuación de este tipo de conductas en la adolescencia o incluso condicionarles en gran medida en la edad adulta. Por esta razón es importante detectar qué variables o factores conducen o influyen en el menor a la hora de cometer delitos (Cuervo, 2011).

De este modo, con respecto a la continuidad delictiva, se ha documentado una relativa tendencia de la conducta antisocial desde la infancia a la adolescencia, y después a la edad adulta. Así, como puso de relieve Robins (1978), “el comportamiento delictivo adulto casi siempre requiere que haya existido una previa conducta antisocial juvenil”. Pero, por otro lado, la mayoría de los niños y adolescentes porque hayan realizado conductas antisociales en edades juveniles no van a convertirse en infractores adultos (LeBlanc, y Loeber, 1998; Loeber y LeBlanc, 1990).

Loeber, Farrington, Stouthamer-Loeber y White (2008), también examinaron en el *Pittsburgh Youth Study* la persistencia de la conducta delictiva, a partir de auto-informes y registros oficiales de condenas, y hallaron lo siguiente: 1) prácticamente uno de cada cinco jóvenes delincuentes graves, devino delincuente persistente a lo largo de un período de 6 años o más; 2) se encontró un mayor nivel de persistencia delictiva grave (71%) para aquellos sujetos con un inicio delictivo temprano (entre las edades 10-12 años, para la cohorte muestral de sujetos más jóvenes), en comparación con la menor persistencia (32%) de aquellos individuos que habían comenzado a delinquir más tardíamente, durante el periodo de la adolescencia temprana (entre las edades 13-15 años); y 3) entre el 40% y el 50% de quienes fueron infractores prematuros, presentando tempranamente una gravedad delictiva entre moderada y severa, persistieron en el delito durante un período de alrededor de 7-9 años. En síntesis, se constató que un reducido grupo de delincuentes persistentes cometían una tasa elevada de delitos durante un periodo de tiempo prolongado.

Para evaluar la continuidad delictiva, Piquero, Farrington y Blumstein, en 2007 examinaron, a partir del *Estudio Cambridge sobre Desarrollo Delictivo*, las condenas experimentadas por los sujetos entre estos dos períodos de edad distintos y sucesivos, y en

concreto el intervalo de edad 10-15 años y el periodo de edades 16-20 años. De los 67 varones que contaban con registros delictivos a las edades 10-15 años, 46 de ellos (el 67%) tuvieron nuevos expedientes por delito entre los 16 y 20 años; en cambio, de los 340 casos que no habían sido condenados entre las edades de 10 a 15 años, solo 58 de ellos (el 17%) experimentaron alguna condena por delito entre los 16 y 20 años. Un análisis de estos datos mediante el índice *odds ratio* puso de relieve que el que un sujeto hubiera sido sancionado por delito en las edades entre 10 y 15 años aumentaba en más de 9 veces su probabilidad de ser condenado de nuevo entre las edades de 16 a 20 años.

En relación con la persistencia delictiva en España, aunque no existen estudios longitudinales semejantes a los anteriores, puede disponerse de algunas investigaciones y análisis sobre reincidencia de los menores que han cumplido medidas judiciales. A continuación, se expone una tabla con los principales estudios españoles de reincidencia juvenil extraído de Redondo y Garrido (2013).

Tabla 4.1. Estudios españoles de reincidencia juvenil y correlatos principales asociados a la reincidencia

ESTUDIOS	MUESTRA (Comunidad Autónoma): Edad promedio	TASA DE REINCIDENCIA (Años de seguimiento)	CORRELATOS PRINCIPALES ASOCIADOS A LA REINCIDENCIA
Capdevilla, Ferrer y Luque (2006)	2.903 (Cataluña): 16,5	22,7%	- Varones - Menor edad - Más riesgos sociofamiliares (antecedentes, patologías)
Bravo, Sierra y del Valle (2007)	382 (Asturias): Varones: 16,7 Mujeres: 17	29,6% (1-4 años)	- Maltrato físico - No vivir con la familia/ tener domicilio fijo
San Juan, Ocariz y de la Cuesta (2007)	Todos los jóvenes en medio abierto en el periodo 2003-2004 (País Vasco)	21,5% (5 años)	- Trastorno mental, hiperactividad, impulsividad, consumo de drogas
García, Ortega y De la Fuente (2010): Meta-análisis de 17 estudios previos	16.502 (España); 14,68 años (86% varones)	26,12% (<i>Sd</i> =11 '27)	- Fracaso escolar/formación/trabajo - Amigos/pareja delincuentes - Más antecedentes/delitos violentos - Experiencia de internamientos

Fuente: Tabla tomada de Piquero, Hawkins, Kazemian, Petechuk y Redondo (2013)

Como puede verse en la Tabla 4.1, gran parte de las muestras evaluadas en estos estudios españoles estaban integradas por jóvenes infractores que habían cumplido diversos

tipos de medidas judiciales, pero sobre todo, medidas de cariz comunitario o abierto. Como tasa de reincidencia promedio puede tomarse la ofrecida por el meta-análisis de García, Ortega y De la Fuente (2010), que es del 26,12%. En la columna de la derecha de la tabla se resumen, a partir de todos estos estudios, los correlatos más frecuentes que se asociaron a la reincidencia delictiva de los menores. Entre ellos se encuentran factores de riesgo individuales y estáticos, como el hecho de ser varón y ser más joven, una mayor impulsividad o trastorno hiperactivo, haber sufrido maltrato físico, contar con antecedentes delictivos o haber consumido drogas; y otros de cariz más social o experiencial, como puedan ser los riesgos sociofamiliares, vivir fuera de la familia o carecer de domicilio fijo, fracaso académico, y tener amigos o una pareja delincuentes (Piquero et al., 2013).

Por otro lado, la idea de que existen delincuentes especializados, particularmente en relación con los delitos económicos y con los delitos sexuales, ha sido objeto constante de debate criminológico (Piquero et al., 2013). Dos revisiones de amplio espectro de la bibliografía especializada a este respecto, convergen en tres conclusiones generales (Blumstein, Cohen, Roth y Visser, 1986; Piquero, Paternoster, Brame, Mazerolle y Dean, 1999). La primera es que la mayoría de los delincuentes frecuentemente participan, a lo largo de su carrera criminal, en una amplia variedad de delitos, siendo pocos los sujetos que se concentran en una única tipología delictiva. En segundo lugar, aquellos delincuentes que muestran cierta especialización parecen orientar sus infracciones, no a un tipo concreto y único de delito, sino en torno a una categoría más amplia de delitos relacionados, por ejemplo, de infracciones contra la propiedad, pudiendo cometer tanto hurtos, como robos de vehículos, robos en casas, etc. En tercer lugar, existe alguna evidencia científica de que habría con la edad una ligera tendencia a la especialización, aunque, con los datos hasta ahora existentes, no puede formularse una conclusión definitiva a este respecto (Piquero et al., 2013).

Para explorar estas cuestiones, algunos estudios han examinado la evolución de los patrones delictivos entre los periodos juvenil y adulto. Por ejemplo, Piquero et. al. (1999), a partir de datos de la cohorte de sujetos nacidos en 1958 en Filadelfia, abarcando el período de edades comprendido entre 8 y 26 años, hallaron asociación entre la menor edad de inicio delictivo (según datos oficiales) y una mayor versatilidad o variabilidad de los delitos cometidos. Es decir, a medida que el inicio delictivo es más temprano, mayor sería la versatilidad delictiva y menor la especialización. Sin embargo, esta asociación estadística precocidad-versatilidad decayó tras controlar la variable edad, lo que sugiere que, con el

tiempo, los delincuentes tendrían a hacerse un poco más especializados en sus delitos, independientemente de la edad de inicio delictivo.

Un hecho criminológico relevante, bien documentado, es la fuerte correlación que existe entre la actividad criminal anterior y posterior de un sujeto. Se han propuesto dos explicaciones principales para intentar dar cuenta de dicha asociación (Nagin y Paternoster, 1991; 2000). La primera sugiere que la correlación que frecuentemente se observa entre la actividad delictiva previa y posterior de los individuos sería debida, esencialmente, a las diferencias inter-individuales, que suelen tener una naturaleza relativamente estable. En función de ello, algunos sujetos presentarían cierta propensión estable para la comisión de delitos, mientras que otros no mostrarían tal propensión, lo que explicaría la firme correlación que se observa entre el comportamiento pasado y el posterior (antisocial o no) (Piquero et al., 2013).

La segunda explicación aludiría, por el contrario, al estado o situación de dependencia contextual de los individuos, sugiriendo más bien que la conducta delictiva ejercería un efecto catalizador sobre los vínculos y apegos sociales de los sujetos, y viceversa, tales apegos condicionarían, a su vez, la estabilidad a largo plazo del comportamiento criminal. En este contexto, la experiencia habida con la actividad delictiva influiría directamente sobre el individuo y generaría más delincuencia posterior, esencialmente como resultado de un contagio delictivo, recíproco y duradero, entre personas que participan en el delito. Una tercera explicación, de cariz mixto o integrador, sugeriría que ambos procesos, diferencias inter-individuales e influencias contextuales, serían responsables, en diversos grados a lo largo de la vida, de la correlación que se observa entre conducta delictiva anterior y posterior (Piquero et al., 2013).

Por otro lado, el conocimiento científico sobre los patrones de co-delincuencia, o actividad criminal en grupo, es también una realidad delictiva poco conocida, en buena medida debido a la escasez de información individual de carácter longitudinal, la cual resulta imprescindible para poder estudiar las trayectorias personales de delincuencia y co-delincuencia a lo largo del tiempo (Goldweber, Dmitrieva, Cauffman, Piquero y Steinberg, 2011; McCord y Conway, 2002; McGloin y Piquero, 2009; Sarnecki, 2009). Por otra parte, al igual que sucede con otros aspectos de las carreras delictivas, la mayoría de la información existente sobre co-delincuencia corresponde al periodo juvenil, y son muy pocos los estudios

que han relacionado los patrones de delincuencia y co-delincuencia, entre la etapa juvenil y la edad adulta.

Ampliando los análisis previos sobre co-delincuencia que efectuaron Reiss y Farrington (1991) y Piquero et al. (2007) analizaron, a partir del Estudio Cambridge, la naturaleza y alcance de la cooperación entre los sujetos a la hora de cometer delitos. Hallaron que la curva de edad de la co-delincuencia alcanzaba su cota máxima al final de la adolescencia y después disminuía con la edad. La co-delincuencia era más frecuente en algunos delitos, como robos personales y robos de casas, que en otros. Además, se encontró relación directa entre el número total de co-delincuentes con que un sujeto cooperaba a lo largo de su carrera criminal y la duración de dicha carrera. Mientras que los individuos con carreras delictivas de duración más corta (< 5 años) tendían a asociarse con un menor número de compañeros delincuentes, los que presentaban carreras delictivas muy largas (de 20 años o más) tenían muchos compañeros delincuentes a lo largo de su carrera delictiva (con un promedio de más de diez co-delincuentes).

Piquero et al. (2007) también encontraron que los delincuentes que habían experimentado una primera medida judicial a una edad muy temprana, propendían a tener un mayor número de compañeros de delitos a lo largo de su carrera criminal, que aquellos otros individuos cuya primera condena había sido más tardía. Al examinar en esta muestra a los sujetos reincidentes (concretados en 24 varones que, a la edad de 24 años, ya habían cometido un mínimo de diez delitos), se constató que el 53% de sus delitos los habían cometido en solitario o, contrariamente, que el 47% los habían cometido en compañía de otros sujetos. En general, fue rara y atípica la actividad criminal exclusivamente en solitario o únicamente en compañía de otros, a la vez que tampoco se constató una tendencia clara a que los delincuentes permanecieran en el mismo patrón delictivo, es decir, delincuencia en solitario o co-delincuencia en solitario, en las diferentes edades.

En otra investigación a este respecto, Van Mastrigt y Farrington (2009) utilizaron el universo completo de infracciones registradas oficialmente por una gran fuerza policial metropolitana destinada en el norte de Inglaterra entre 2002 y 2005 (computándose en total 105.348 delitos, y 61.646 delincuentes). Examinaron las interrelaciones entre co-delincuencia, edad, sexo y tipo de delito, obteniendo los siguientes resultados principales. En primer lugar, solo una minoría de la delincuencia oficial registrada involucraba a varios delincuentes. En

segundo término, en coherencia con lo que sucede con carácter general en relación edad-delito, la co-delincuencia disminuyó con la edad. En tercer lugar, la co-infracción fue mayor en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Por último, la cooperación delictiva varió según el tipo de infracción, y fue más común para el robo de casas y el robo violento que para otros delitos.

Diferentes sectores parecen ser partícipes de la creencia de que los menores en la actualidad suponen un gran peligro para la sociedad, y más aún si ya han formado parte de un proceso judicial. De hecho, en un estudio realizado al respecto, la mayoría de los encuestados piensa que el nivel de reincidencia de los menores se sitúa entre el 50% y el 75% (García, Martín, Torbay y Rodríguez, 2010). Estudiar la reincidencia de este colectivo concreto servirá para conocer su situación actual, pero también como posible predictor de futuros comportamientos delictivos. De esta forma, al detectar cuáles son las variables o factores que conducen o influyen en el menor a la hora de cometer delitos, se estarían evitando futuros comportamientos delictivos.

Así pues, se puede considerar la tasa de reincidencia delictiva como un indicador criminológico, que al cuantificarlo de manera precisa en los diferentes períodos de tiempo, indicaría el estado de la realidad social en la que se encuentran los menores. En relación a esto, el concepto tomado para clasificar a un menor como reincidente, varía enormemente de unos estudios a otros, ya que puede ser obtenido por diferentes métodos. En general, se tiene en cuenta el criterio más amplio que sería la nueva entrada al sistema judicial, sin que exista un criterio unificado para determinarla. Otras formas de obtener esta tasa serían por ejemplo, ser acusado de algún otro delito, recibir una medida educativa (Forcadell, Camps, Rivarola y Pérez, 2004), la comparecencia en un tribunal (Cain, 2000) o ser detenido únicamente a partir de los 18 años (Redondo, Funes y Luque, 1993; Sipe, Jensen y Everett, 1998).

Por tanto, comparar las tasas de reincidencia delictiva es una cuestión delicada, ya que los estudios varían en gran medida, en relación a sus tasas, sufriendo grandes oscilaciones de unos a otros. Algunos de los factores que provocan estas diferencias son: la edad penal de los menores en los países, sistemas judiciales diferentes, variaciones en la tipificación de los delitos y en las formas en las que son sancionados los menores, etc. Asimismo, también influyen cuestiones metodológicas como el periodo de seguimiento de los menores, los

métodos de recogida de la información e incluso el criterio para definir la propia reincidencia (Cuervo, 2011).

Más concretamente, a continuación se exponen diversos estudios que hacen referencia al perfil de la población de menores infractores en España, atendiendo al número de delitos, tiempo medio entre un delito y otro, el tipo de delito, así como las medidas impuestas.

Muchos de los menores infractores analizados en diferentes estudios cuentan en toda su trayectoria delictiva únicamente con un delito o expediente en el juzgado, 56,6%, 46,9%, 78,3%, 70% y 78,88% (Bravo, Sierra y del Valle, 2009; Capdevilla, Ferrer y Luque, 2005; Garrido, 2009; Iborra, Rodríguez, Serrano y Martínez, 2011; San Juan y Ocariz, 2009). Así, el grupo de menores que comete un único delito a lo largo de su adolescencia, formaría parte de la tendencia adolescente de cometer delitos con carácter anecdótico, con tasa de reincidencia muy baja: 12,7% (Capdevilla et. al. 2005). Este colectivo forma la mayoría de las poblaciones en los juzgados de menores estudiados. En otros países, importantes estudios también corroboran que la mayoría de los menores tienen una relación puntual con la justicia: el 80% en el Reino Unido (Jennings, 2002) y el 70% de los jóvenes australianos (Cain, 2000; Coumarelos, 1994). Por lo tanto, se obtienen medias del número de expedientes por menor para las poblaciones totales de 1,61 y 1,86 (Capdevilla et. al.2005; Graña, Garrido y González, 2006).

Tabla 4.2. Porcentajes de menores con relación puntual con la Justicia

AUTORES	LUGAR	MENORES CON UN ÚNICO EXPEDIENTE
Bravo et. al. (2009)	Asturias	70%
Garrido (2009)	Cantabria	46,9%
San Juan et. al (2009)	País Vasco	78,3%
Capdevilla et. al. (2005)	Cataluña	56,6%
Jennings (2002)	Reino Unido	80%
Cain (2000)	Australia	70%
Coumarelos (1994)	Australia	70%
Iborra et. al. (2011)	Comunidad Valenciana	78,88%

Fuente: Tabla tomada de Cuervo (2011)

De la misma forma, los menores con un mayor número de delitos son más escasos. A medida que aumenta el número de delitos en un mismo menor, los porcentajes para estos disminuyen considerablemente (Capdevilla et al., 2005; Garrido, 2009).

En el estudio realizado por Cuervo (2011) los resultados reflejan que existe un porcentaje muy significativo de menores que cuentan con un solo expediente (61,43%) y por lo tanto, una tasa de reiteración delictiva del 38,57%, frente al grupo de menores con una trayectoria delictiva más larga o persistente, donde van disminuyendo los porcentajes a medida que aumenta la acumulación de expedientes. Estos datos son similares a otros estudios españoles, donde se obtiene el 59,4% de menores con un único expediente en toda su historia judicial, el 17% con dos expedientes, el resto de los porcentajes son decrecientes, acumulando una tasa de reiteración delictiva (número de expedientes que acumula el menor a lo largo de toda su trayectoria en el Juzgado de Menores) del 40,6% (San Juan y Ocariz, 2009). En el caso de la reincidencia (que en este estudio se contempla como los expedientes posteriores a partir de un momento temporal concreto, que en este caso se caracterizó por la fecha de la primera evaluación), la mayoría cuenta con un único expediente y a medida que aumenta el número de los mismos decrecen sus porcentajes correspondientes.

De este modo, los mayores porcentajes corresponden a los menores con menor número de expedientes. En concreto, en el estudio anteriormente expuesto, el 30,6% de los menores cuenta con 2 expedientes en todo su historial, el 14,29% con 3 y el 20,41% con 4. Al sumar el grupo de menores que poseen 2, 3 o 4 expedientes en todo su historial, formarían el 65,31% de todos los menores reincidentes. Los menores con más de 4 expedientes cuentan con porcentajes muy bajos. Por tanto, los grupos de menores más amplios son los que cuentan con menos expedientes. Resultados de otros estudios confirman la concentración de delitos en un grupo de menores reducido, en este sentido, ante un mayor número de expedientes o causas previas, existe una mayor posibilidad de acumular otro expediente judicial (Capdevilla et. al., 2005).

De lo anterior se concluye que los menores con largas trayectorias delictivas son un pequeño grupo de menores. Por tanto, una cantidad relativamente pequeña de menores es responsable de una alta proporción de los delitos (McLaren, 2000; Iborra, et. al., 2011). De la misma forma, Le Blanc (1999) hace referencia al aumento de persistencia y concentración de las carreras delictivas de los menores con más riesgo.

Por otra parte, en relación a las diferencias de género, los chicos reinciden en mayor medida que las chicas, 25,2% y 12,7%, respectivamente (Capdevilla et. al., 2005). Aun así, parece que ha habido un incremento de la violencia de las chicas en el ámbito familiar, incluso se duplica el porcentaje en comparación con los chicos (Berga, 2005). También las chicas suelen reincidir en un periodo más corto de tiempo, ya que parece que inician sus carreras con mayor edad y las abandonan antes (Rechea, 1999).

En relación al tiempo medio entre delitos, se encuentran periodos de entre 10 meses y 11 días (Capdevilla et al., 2005), 17,9 meses (Carcach y Leverett, 1999). En relación al tiempo entre los delitos siguientes, parece que va disminuyendo a medida que el menor va alargando su trayectoria delictiva. En el caso de Capdevilla et al. (2005), la segunda reincidencia ya se reduce a los 6,4 meses y así sucesivamente, hasta reducirse a un periodo de algo más de 3 meses entre causas abiertas. De la misma forma, el trabajo de Carcach y Leverett (1999) muestra que los días entre reincidencias van disminuyendo de los 14 a los 18 años. Es decir, a medida que el menor va creciendo, el tiempo que tarda en reincidir se reduce. Por lo tanto, se coincide que a medida que el menor va incrementando su contacto con la justicia, el tiempo entre delitos es menor.

Al examinar el tipo de delito cometido en mayor medida por los menores, se encuentra que los resultados varían según la población estudiada, por lo tanto se expondrán los resultados a rasgos generales. Varios estudios encuentran que el mayor porcentaje se sitúa en los delitos contra la propiedad (Capdevilla et al., 2005, Graña et al., 2006; Garrido, 2009), en robos y robo con violencia o intimidación (San Juan et al., 2009) y robo con fuerza en las cosas (Bravo et al., 2009).

De igual manera, al relacionar la tasa de reincidencia delictiva con el tipo de delito cometido, en general se comprueba que los delitos contra la propiedad se asocian a una mayor tasa de reincidencia, seguidos por los delitos contra las personas y los delitos sexuales, por este orden (Capdevilla et al., 2005; Escofet y Pérez, 1994; Redondo et al., 1993; Sánchez-Meca, 1996; Winner, Lanza-Kaduce, Bishop y Frazier, 1997). A su vez, el hecho de haber cometido un delito de mayor gravedad no implica que la carrera delictiva se alargue (Capdevila et al., 2005).

Con respecto a la tasa de reincidencia en relación a las medidas, la menor tasa de la misma es para los menores con medidas de mediación y reparación, seguidas de las de medio abierto, mientras que la mayor tasa de reincidencia se encuentra en las medidas de

internamiento (Capdevilla et al., 2005; Cuervo, 2011; San Juan y Ocariz, 2009). Por lo tanto, en los estudios analizados, los menores con mayor reincidencia son los de medidas con mayor restricción. Lo anterior, pudiéndose explicar porque estos menores hayan cometido delitos más graves y/o que en su exploración psicosocial sea aconsejable el internamiento por superior interés del menor al contemplar un elevado riesgo delictivo, así como numerosos factores de riesgo, lo que explicaría la mayor reincidencia y no así el hecho de que la medida haya sido más restrictiva.

A grandes rasgos, tal y como concluye Cuervo (2011), se podría establecer un perfil del menor reincidente, de sexo masculino, el que iniciaría su trayectoria con un delito o falta contra la propiedad, con un riesgo detectado alto, que reincide con único expediente judicial, mediante un delito o falta también contra la propiedad y tarda una media de 9 meses en reincidir. Estos resultados rebaten la creencia de la peligrosidad de los menores infractores, ofreciendo un perfil general y mayoritario de menores con un único expediente, un nivel de riesgo bajo y un contacto puntual con el sistema judicial. Se descarta entonces, que todo menor que posea expediente judicial en el Juzgado de Menores, tendrá un perfil delincucional.

4.3. Predicción del riesgo de reincidencia

La predicción de la reincidencia intenta averiguar y comprender los factores de riesgo determinados que pueden impulsar a un menor hacia una carrera delictiva, es decir, que lo hacen vulnerable a la delincuencia. Tales aspectos, cualidades del individuo y de su ambiente, contribuyen a señalar el camino que va a tomar el menor. Muchos de los predictores más sólidos son factores de carácter dinámico, variables que pueden modificarse si se establecen como objetivos específicos de intervención. De ahí la necesidad de contar con un procedimiento que valore de forma precisa dichas necesidades (Cuervo, 2011).

Históricamente, la valoración del riesgo de reincidencia del menor, necesaria para la intervención, ha sido informal y llevada a cabo por profesionales que han variado en filosofías y diferentes niveles de experiencia y conocimientos, y que han usado criterios diversos en el procedimiento de valoración (Wiebush, Baird, Krisberg y Onek, 1995).

La prevención y los programas de tratamiento dirigidos a menores infractores y a otros problemas de conductas antisociales, deben estar basados en cuidadosas evaluaciones del riesgo y necesidades para la adecuada asignación de los programas. La precisión de las valoraciones del riesgo son importantes hasta el punto de asegurar la seguridad pública, así como la del menor/joven (Andrews y Bonta, 2006). Varios estudios han demostrado la relación de las escalas de riesgo con la predicción de la reincidencia (Gendreau et al. 1996; Glover, Nicholson, Hemmati, Bernfeld y Quinsey, 2002).

A continuación, se describen las etapas de predicción de la conducta delictiva, siendo un reflejo del progresivo reconocimiento de esta importancia. En la predicción de la conducta delictiva se diferencian cuatro generaciones, que han ido evolucionando en los últimos 30 años (Andrews, Bonta y Wormith, 2006):

4.4.1. Evaluación del Riesgo realizada mediante Juicio Profesional o Clínico

En esta etapa, las predicciones se basan en el juicio clínico que depende de la experiencia del profesional usando criterios informales y no observables. Las razones para tomar las decisiones son subjetivas, a veces intuitivas y no validadas empíricamente, siendo pobres en sus predicciones debido a la poca estructura de sus juicios. La atribución de características que no están relacionadas empíricamente con la conducta delictiva, lleva a la diferencia de criterios en la evaluación del menor. En ocasiones, en algunos sistemas incluso se hacen preguntas básicas a todos por igual, sin diferenciar al menor según sus necesidades (Cuervo, 2011).

4.4.2. Escalas de Riesgo Estáticas

Las escalas de riesgo estáticas son originarias de Burguess (1928), a partir del estudio en el que se encontraron 21 factores que diferenciaban una libertad condicional con éxito de una sin éxito. El estudio más exhaustivo que compara el juicio profesional con este método, es el Andrews y Bonta (2006), concluyendo que este último supera al juicio profesional.

Sin embargo, como señalan Andrés-Pueyo y Echeburúa (2010), estas escalas presentan varios problemas:

- No parten de bases teóricas.
- Se basan en factores estáticos o históricos, es decir, los pertenecientes al pasado del menor o a circunstancias difíciles de modificar. Por lo tanto, ítems considerados entonces como

predictores, como por ejemplo, la historia delictiva, adquirirían demasiada importancia en las puntuaciones y por tanto, existía poco crédito a la oportunidad de mejora o recuperación. Por ejemplo, un menor que haya mostrado conductas de riesgo años atrás del pase del cuestionario se contabilizaría como que todavía mantiene la conducta desviada, ya que el ítem es estático y esto limitaría su valor predictivo.

- Se rechazan factores empíricamente demostrados como válidos predictores como las amistades o las actitudes antisociales.
- Tampoco informan de las necesidades o factores dinámicos del menor o del tipo de intervención a llevar a cabo con él para reducir el riesgo de reincidencia.
- Se encuentran dificultades para el proceso de revisión del caso y de la toma de decisiones.

Por lo tanto, es evidente que se necesita integrar ambos tipos de factores estáticos y dinámicos, ambos asociados teórica y empíricamente con el comportamiento delictivo (Cuervo, 2011).

La literatura científica especializada refleja que las evaluaciones de riesgo son superiores cuando se utilizaron valoraciones actuariales, frente a las valoraciones clínicas (Garrido, 2003). En sus inicios, las predicciones se realizaban fundamentalmente utilizando el juicio clínico y otras pruebas estandarizadas de personalidad (p. ej., algunas escalas del MMPI, EPQ-J, Inventario de Beck, Ansiedad: Estado-Rasgo, STAI), pero debido a que dichas pruebas de personalidad no han sido diseñadas y baremadas específicamente para predecir la conducta delictiva, se fueron desarrollando al respecto, principalmente en Norteamérica y algunos países Europeos, instrumentos estandarizados para tal fin; extendiéndose su aplicación en la predicción de la reincidencia violenta y no-violenta. A continuación, se expone un meta-análisis (ver Tabla 4.3.) donde se evidencia la superioridad de las evaluaciones actuariales del riesgo (Cuervo, 2011).

Tabla 4.3. Meta-análisis de las evaluaciones clínicas y actuariales del riesgo de reincidencia en diferentes tipologías delictivas.

ESTUDIO	CRITERIO	CLÍNICA	ACTUARIAL
Bonta, Law y Hanson (1998)	Reincidencia general	$r=,03$	$r=,39$
	Reincidencia violenta	$r=,09$	$r=,30$
Hanson y Bussière (1998)	Reincidencia sexual	$r=,11$	$r=,42$
Grove y Meehl (1996)	Índice general	Favorable 6%	Favorable 46%
Mossman (1994)	Violencia	$AUC=,67$	$AUC=,78$

Nota. r = tamaño del efecto; AUC =área bajo la curva

Fuente: Tomada de López y Dolera (2008)

4.3.3. Evaluación: Escalas de Riesgo/Necesidad

En esta etapa se miden sistemática y objetivamente las necesidades concretas y actuales del menor, es decir, las dinámicas y modificables. Se da cabida a la posibilidad de mejora o recuperación del menor debido al incremento en la importancia de los factores modificables, en lugar de centrarse en factores estáticos como en la generación anterior (Cuervo, 2011).

El cuestionario que contó con una mayor validez en esta etapa fue el LSI Level of Supervision Inventory o *Inventario revisado del nivel de Supervisión* (para adultos) (Andrews, 1982). Está formado por 76 ítems que miden el riesgo o las necesidades del menor, agrupados en factores, que son los probados por la literatura como los más relacionados teóricamente con la conducta delictiva. Basado en la perspectiva del Aprendizaje Social, las cualidades estadísticas de este instrumento han sido probadas desde el estudio de Andrews en 1982, hasta la actualidad. Este Inventario ofrece la posibilidad de unificar criterios de evaluación entre los profesionales del ámbito de menores relacionados con la delincuencia. Evalúa principalmente la tendencia a romper las reglas y en los 76 ítems que lo componen, se reflejan áreas como la historia delictiva, el apoyo social para cometer delitos, la actitud procriminal, las características personales, los factores familiares, el abuso de sustancias o el logro social (Andrews y Bonta, 2006; Andrews, Kiessling, Mikus y Robinson, 1986). Este instrumento ampliamente utilizado en diferentes países con delincuentes adultos, construido principalmente para asesorar la toma de decisiones en cuanto a la libertad condicional y supervisión de adultos condenados a prisión (Cuervo, 2011).

Un ejemplo de cuestionario que también se podría clasificar en esta etapa, es el Structured Assessment of Violence Risk in Youth, SAVRY (Borum, Bartel, y Forth, 2003), el cual ha sido adaptado y traducido en castellano y catalán por Hilterman y Vallés (2007). La herramienta de valoración del riesgo de violencia juvenil, SAVRY es un instrumento que sirve para estimar el riesgo de reincidencia en adolescentes. Esta herramienta, el SAVRY, está diseñada basándose en un modelo ecológico de la delincuencia, donde todos los apartados están interrelacionados.

Está compuesta de 24 ítems de riesgo, entre los que encontraremos 10 ítems históricos, 6 ítems sociales/contextuales, 8 ítems individuales y 6 ítems de protección. Estos factores que explora el SAVRY, son aquellos que la investigación empírica ha identificado como los que más pueden incidir en la comisión de nuevas conductas delictivas. Por consiguiente, son factores básicos a trabajar para la reinserción de menores y jóvenes. Hay otros factores que puede el profesional observar durante la valoración del riesgo, y que considere deben ser tenidos en cuenta por su importancia para la comprensión de la situación del menor, permitiendo el SAVRY que puedan ser tomados en consideración y que sean sopesados en las conclusiones finales (Hilterman y Vallés, 2007).

Los diferentes ítems de riesgo que componen el SAVRY se valoran como de riesgo bajo, moderado o alto. Los factores de protección se valoran como presente o ausente. Es fundamental la argumentación de la valoración y puntuación de cada factor, para una correcta gestión del riesgo. No está por tanto diseñado para ser una escala o test formal, por el modo de codificación de sus factores, no se les asigna un valor numérico, sino una valoración profesional (Cuervo, 2011).

Finalmente y tras completar la valoración de todos los ítems, se establecerá un resumen final en el que se dispondrá si el riesgo de reincidencia es bajo, moderado o alto. La valoración, por lo tanto, es cuantitativa, pero también cualitativa. Su finalidad es la clasificación del menor según su riesgo de reincidencia. El tiempo estimado para su administración es de 10 a 15 minutos. A la evaluación final del riesgo en tres niveles (bajo, moderado, alto) se llega a través de la reflexión clínica. Tampoco se asignan valores numéricos, ni puntos de corte, sino que el instrumento se utilizaría como una guía para el juicio profesional con la finalidad de no perder los factores de riesgo importantes y estructurar

la evaluación. Está considerado como un instrumento especializado para valorar comportamientos agresivos o violentos (Cuervo, 2011).

Tabla 4.4. Ítems valorados por el SAVRY

FACTORES DE RIESGO HISTÓRICOS	<ul style="list-style-type: none"> - Violencia previa - Inicio temprano de la violencia - Historia de actos delictivos - Fracaso de intervenciones anteriores - Intentos de autolesión o suicidio previo - Exposición a la violencia en el hogar - Historia de maltrato infantil - Separación temprana de cuidadores - Bajo rendimiento en la escuela
FACTORES DE RIESGO SOCIALES/CONTEXTUALES (Últimos 6 meses)	<ul style="list-style-type: none"> - Delincuencia en el grupo de iguales - Rechazo del grupo de iguales - Estrés e incapacidad para enfrentar dificultades - Escasa habilidad de los padres para educar - Falta de apoyo social - Entorno marginal
FACTORES DE RIESGO INDIVIDUALES (Últimos 6 meses)	<ul style="list-style-type: none"> - Asunción de riesgos - Impulsividad - Problemas de consumo de sustancias - Problemas de manejo del enfado - Baja empatía - Hiperactividad - Baja colaboración e intervenciones/actitud negativa - Bajo interés/compromiso escolar o laboral
FACTORES DE PROTECCIÓN (Últimos 12 meses)	<ul style="list-style-type: none"> - Implicación prosocial - Apoyo social fuerte - Vínculos con adulto prosocial - Actitud positiva hacia intervenciones y autoridad - Fuerte compromiso con la escuela o el trabajo - Resiliencia

Como crítica al instrumento se podría añadir que sólo se centra en la detección de comportamientos violentos futuros, mientras que el objetivo de este estudio es la detección de cualquier tipo de reincidencia delictiva. Tampoco cuenta con puntuaciones de corte, ni valores numéricos finales, ni por tanto baremos, por lo que continúa basándose en una medida subjetiva del juicio clínico del profesional (Cuervo, 2011).

En el estudio de Cathpole y Gretton (2003), se comparan los tres instrumentos, utilizándose retrospectivamente sobre la información de archivo de 74 jóvenes que habían cometido delitos. Se realizó un seguimiento durante un año, examinando sus actos delictivos

y si fueron condenados por ello. Los resultados indicaron un parámetro entre moderado y fuerte en la relación entre cada uno de los instrumentos. Demostrando que de los que puntuaron en los niveles más altos de riesgo al menor un tercio volvieron a reincidir en menos de un año, mientras que los que fueron agrupados en los niveles más bajos de riesgo apenas reincidieron, como puede verse en la tabla que se expone a continuación:

Por otro lado, en la investigación de Wels, Schmidt, Mckinnon, Chatta y Meyers (2008) se compara la validez de tres instrumentos, Level of Service/ Case Management Inventory (YLS/CMI), Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) y la Psychopathic Checklist Youth Version (PCL-YV), con un seguimiento de tres años. Los resultados de este estudio indican que el YLS/CMI tiene una menor validez predictiva que el SAVRY y PCL-YV en cuanto a la violencia. Otros estudios de meta-análisis (Edens, Campbell y Weir, 2007; Schwalbe, 2007, 2008), en la revisión sistemática de la validez predictiva de las escalas de evaluación de riesgo con menores y jóvenes en conflicto con la ley, han demostrado que el YLS/CMI y SAVRY, son útiles para el pronóstico de reincidencia. Aun así, otro estudio llevado a cabo por Olver, Stockdale y Wormith (2009) mostraron que la validez para el pronóstico es similar.

Schmidt, Campbell y Houlding (2011) publican un análisis comparativo a 10 años de seguimiento en reincidencia violenta de tres instrumentos: YLS/CMI, Structured Assessment of Violence Risk in Youth - SAVRY (Borum et al., 2004) y The Psychopathy Checklist: Youth Version – PCLYV (Forth, Kosson y Hare, 2003). El YLS/CMI muestra un $AUC = 0,66$; el SAVRY muestra un tamaño de efecto mayor de $AUC = 0,74$; sin embargo, es el PCL-YV el instrumento que demuestra el mayor tamaño de efecto de $AUC = 0,78$ para reincidencia violenta.

4.3.4. Integración de Gestión del caso con Evaluación del Riesgo

Aunque las evaluaciones de los menores en la etapa anterior, se realizaban administrando las escalas de riesgo, los resultados no se tenían en cuenta a la hora de planificar su intervención (Lowencamp, Latessa y Holsinger, 2006). Por ello, esta cuarta etapa destaca y enfatiza la necesidad del vínculo entre evaluación e intervención, reconociendo y

valorando las cualidades del menor/joven, y encaminándola a una orientación prosocial, maximizando los beneficios del tratamiento.

Esta etapa es compatible con la clasificación realizada por Andrés-Pueyo y Echeburúa en 2010; “Valoración basada en el juicio clínico estructurado”. Se trata de un procedimiento mixto que combina factores predictores empíricamente verificados y a la vez, permite reflejar el juicio clínico en la valoración final. Este procedimiento está diseñado para gestionar el riesgo detectado en el evaluado. Por lo tanto, las decisiones en relación a la gestión del riesgo se ven facilitadas por la guía del instrumento. De esta forma, se evitan los olvidos y los sesgos, facilitando la claridad y la transparencia de los juicios de expertos. Se considera la técnica idónea para predecir y gestionar el riesgo de violencia, (aunque se requiere formar a los profesionales previamente), ya que al detectar la presencia de factores de riesgo, ofrece grandes posibilidades de encaminar correctamente tanto la intervención, como la prevención (Cuervo, 2011).

A partir del LSI *Level of Supervision Inventory* (Andrews, 1982), situado en la etapa anterior, se desarrolló el LSI-R, (*Level of Service Inventory Revised*), una versión revisada de Andrews y Bonta (1995), de 54 ítems en total, con 10 subescalas, así como la versión actual, LS/CMI, de Andrews, Bonta y Wormith (2004). En estas últimas versiones ya se incorporaba en los inventarios la posibilidad de realizar un seguimiento de la intervención del evaluado.

Es en esta etapa donde se sitúa el Inventario YLS/CMI, Youth Level of Service/Case Management Inventory (Hoge y Andrews, 2006), versión para menores de 12 a 17 años del LS/CMI. La última actualización de este Inventario es el YLS/CMI 2.0 (Hoge y Andrews, 2010). Asimismo fue traducido al español por Garrido, López, Silva, López y Molina (2006) como el Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes (IGI-J), siendo un instrumento caracterizado por la heteroevaluación en el riesgo de reincidencia. Este método ha sido utilizado en diversas investigaciones en reincidencia, en países europeos, así como fuera de Europa: en Estados Unidos, Canadá y Australia.

Este Inventario se creó a partir de los factores que la literatura científica había identificado como mejores predictores de la actividad delictiva. Esta prueba toma en consideración cuáles son los factores de riesgo dinámicos que podrían ser objeto de posterior intervención, es decir, lo que se ha denominado previamente “necesidades criminógenas”,

obteniendo así un nivel de reincidencia para cada menor/joven. En ningún caso se aplica a los menores, como autoinforme, sino que se valora a éstos a partir de la información obtenida. Los datos para cumplimentarlo provienen de diferentes fuentes de información, como la entrevista con el menor y su familia, expedientes previos, informes policiales o información de otros centros de ejecución de medidas judiciales, de acogida, protección o recursos asistenciales, etc., así como coordinación con los diferentes profesionales que hayan intervenido con el menor/joven o su familia (Cuervo, 2011).

De este modo, el IGI-J es el Inventario con mayor base teórica que responde a los Principios de Riesgo, Necesidad, Capacidad de Respuesta y Autoridad del Modelo General Psicológico, Social y de Personalidad de la Conducta Criminal, habiéndose demostrado que la adherencia a estos principios reduce la reincidencia en diferentes tipologías de programas de intervención (Hoge, 2001). Así, el Inventario es capaz de predecir tanto la reincidencia violenta, como la no violenta, a diferencia de otros cuestionarios específicos para la conducta violenta (Bourgon y Amstron, 2005). De tal forma, el Inventario detecta las necesidades criminógenas del menor, sus factores protectores y todas aquellas circunstancias concretas necesarias para la intervención, así como la probabilidad del menor de reincidir en futuras conductas delictivas. Los Principios de Riesgo, Necesidad, Capacidad de Respuesta y Autoridad deben estar recogidas en la evaluación del menor. Así, en la utilización del Inventario, quién debe beneficiarse de qué tratamiento, lo recoge el Principio de Riesgo, qué se debe intervenir, es recogido por el Principio de Necesidad y cuál es el modo más adecuado de conseguirlo, el Principio de la capacidad de respuesta. Todo esto llevado a cabo siempre bajo el punto de vista del profesional que puede y debe actuar de forma diferente a los principios cuando lo considere necesario (Cuervo, 2011).

El YLS/CMI se compone de 42 ítems y 8 subescalas. Los factores de riesgo son los siguientes: 1) Delitos y medidas judiciales pasadas y actuales; 2) Pautas educativas; 3) Educación formal y empleo; 4) Relación con el grupo de iguales; 5) Consumo de sustancias; 6) Ocio/diversión; 7) Personalidad/Conducta; 8) Actitudes, valores y creencias. Cada una de las áreas de riesgo ofrece la posibilidad de marcar un “factor protector” en el menor, que nos servirá como punto de apoyo a la hora de intervenir con él, ya que refleja sus características positivas o habilidades en un área determinada y moderan los factores de riesgo y la conducta problema. En cada factor o subescala, el profesional señala los ítems de riesgo que se pueden aplicar al menor describiendo la fuente desde la que se ha obtenido la información: entrevista

con el menor, progenitores, profesionales intervinientes, informes psicológicos, policiales, etc.

En el YLS/MCI se incorpora un apartado que permite reflejar la correspondencia entre el nivel de riesgo del menor y su nivel de intervención, aumentando la medida propuesta hacia una mayor supervisión a medida que va aumentando el nivel de riesgo. Al contar con una puntuación cuantitativa, se puede establecer con mayor objetividad el grado de supervisión socioeducativa que requiere el menor. Por último, en el caso en que el profesional no esté totalmente de acuerdo con el nivel de riesgo obtenido, lo puede modificar a pesar del nivel que indique el Inventario, ya que permite reflejar la opinión cualitativa del evaluador indicando las razones del cambio a un nivel de riesgo superior o inferior (Cuervo, 2011).

Por otra parte, una vez obtenida la puntuación de riesgo de reincidencia, los apartados siguientes del Inventario permiten señalar los objetivos y estrategias que debemos utilizar para erradicar o reducir el riesgo de reincidencia. De hecho, la principal ventaja frente a las otras escalas, es que gracias a su diseño, a partir de las necesidades detectadas en el menor/joven, se posibilita realizar la planificación y evaluación de programas educativos señalando los objetivos de intervención (Cuervo, 2011).

Otra especificidad del Inventario, es que en la 3ª parte del mismo: “Evaluación de otras necesidades y consideraciones especiales”, se permite reflejar aspectos tanto del menor, como de su familia, cualidad que no había sido contemplada con anterioridad por ningún otro instrumento de evaluación. De este modo, dichas necesidades no influyen en la puntuación final, sino que se recogerían por la importancia que dicha variable tendría de cara a la intervención. De la misma manera, en la cuarta parte, se incluye la posibilidad al profesional de poder modificar el nivel de riesgo encontrado en la segunda parte, pudiendo así justificar su decisión de manera cualitativa, ya que el profesional que interviene con el menor/joven es el que mejor conoce las particularidades del caso.

En la parte 5ª, se determina a grandes rasgos el nivel de intervención necesario que requiere cada menor/joven, según haya sido clasificado en la franja de riesgo bajo, medio, alto o muy alto. También se puede reflejar la hipótesis explicativa por la que el menor está involucrado en la conducta delictiva.

En la 6ª parte, se especifica de forma más concreta la medida educativa que se propone, su duración, y los objetivos específicos que se deben alcanzar con el menor/joven, basándose en los detectados en la exploración anterior. El apartado VII está dedicado a la reevaluación del caso.

Así, si el menor/joven ha sido evaluado con anterioridad, se puede comparar la evaluación anterior con la actual, para poder observar la evolución en el tratamiento y objetivos planteados en cada una de las áreas, y así determinar si se han conseguido los mismos y en qué grado. Por lo que en el caso de que las necesidades criminógenas del menor estén siendo cubiertas con la intervención, se prevé entonces que el riesgo de reincidencia delictiva disminuirá.

Aunque la intención inicial con la que se diseñó el Inventario fue la de guiar a los Técnicos mientras eran ejecutadas las medidas judiciales como Libertad Vigiladas, Tareas en Beneficio de la Comunicas o Tareas educativas, etc., Hoge (2001) afirma que el instrumento es apropiado para la evaluación en todas las áreas dentro del sistema de Justicia juvenil, en las que se deba tomar una decisión del riesgo y las necesidades del menor.

También se resalta el IGI-J por su funcionalidad, ya que al contar con puntuaciones de corte, se puede comprobar la mejoría del menor al cambiar de rango en nivel de riesgo (Schwalbe, 2007). Así, al permitir evaluar y reevaluar las necesidades criminógenas permite modificar el nivel de riesgo del menor de forma cada vez más efectiva, sin olvidar la ventaja al transmitir la información a otros centros o recursos psicoeducativos. De esta forma, la situación o características del menor se transmiten de forma más objetiva y precisa, ya que se parte de un marco de referencia común y no de las percepciones subjetivas del evaluador.

Por lo tanto, se ha constatado que existen diferencias significativas entre las diferentes generaciones de instrumentos a la hora de predecir el riesgo de reincidencia. Existen numerosos estudios que ponen de manifiesto la mayor precisión de los instrumentos de riesgo frente al juicio clínico a la hora de predecir la reincidencia (Flores, Travis y Latessa, 2004). Así, en un estudio realizado por Graña, Garrido, y González (2008), concluyen, y coinciden con otras investigaciones similares, que salvo en unas pocas áreas, más de la mitad de las variables que componen las hipótesis utilizadas por los profesionales para explicar el comportamiento delictivo no guardan una relación estadísticamente significativa con los

demás factores del IGI-J, existiendo además pocas relaciones existentes entre las variables utilizadas por los profesionales y los factores del riesgo del IGI-J. Y, dado que la capacitación técnica, experiencia y profesionalidad de este grupo de profesionales está sobradamente demostrada, sólo queda por insistir que el manejo de instrumentos como el que nos ocupa facilitará un mejor desempeño metodológico en la intervención con los menores.

Cabe señalar que existen diferentes instrumentos para conocer las circunstancias individuales y el entorno del menor, y por lo tanto, los factores que influyen en su conducta delictiva. Son numerosos los estudios que han utilizado estos métodos para evaluar el riesgo de reincidencia de los menores infractores, sus factores de riesgo o su predisposición a la violencia (Schwalbe, 2007; Schmidt et al., 2011).

Por último, cabe destacar las limitaciones de la investigación en la clasificación del riesgo de menores en comparación con la de los adultos. Hay limitaciones en el número de participantes, cortos períodos de seguimiento y estudios realizados retrospectivamente, en los que la reincidencia contabilizada se evalúa mediante los expedientes en el historial del menor. Por tanto, en este último supuesto, puede que el menor ya se encuentre en una situación normalizada, pero que se le siga considerando en un alto nivel de riesgo. También, habría que tener en cuenta que puede haber limitaciones basadas en reincidencia oficial o que existan casos de delincuentes que no han sido localizados o contabilizados por el sistema judicial (Bechtel, Lowenkamp y Lattesa, 2007).

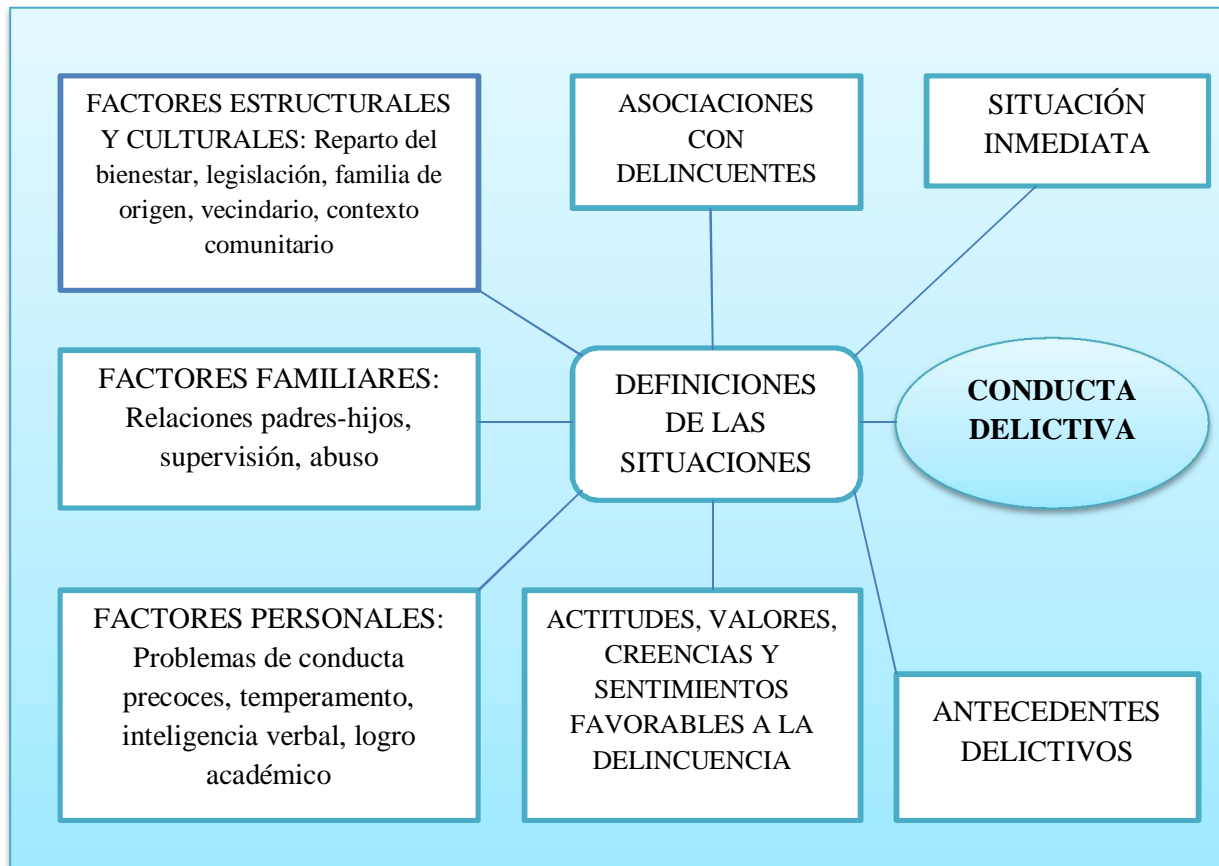
4.4. Capacidad predictiva de los Instrumentos

4.5.1. Inventario para la Gestión e Intervención con Jóvenes IGI-J

El marco teórico en el que sustenta el IGI-J es el modelo integrado de la conducta delictiva de Andrews y Bonta (1994, 2003). La cual, a grandes rasgos, explica la conducta delictiva partiendo de unas perspectivas de reforzamiento personal, interpersonal y comunitario. Parten de la psicología de la acción, es decir, la importancia de los determinantes de la acción en situaciones particulares centradas principalmente en los principios del condicionamiento clásico y operante (recompensas, costes y antecedentes) y en los del aprendizaje social y cognitivo (control cognitivo de la conducta y significación de las creencias, actitudes y relaciones sociales). De este modo, las fuentes principales en la variación de los juicios sobre la idoneidad o no de una acción en una situación dada son: 1)

características del medio inmediato; 2) actitudes, valores, creencias y racionalizaciones sobre la conducta social y antisocial; 3) apoyo para la conducta delictiva; 4) una historia previa de comportamiento antisocial; 5) habilidades de solución de problemas y autogobierno; 6) otras características relativamente estables de personalidad que potencian el comportamiento antisocial. A continuación, se muestra la Figura 4.3. que resume dicho modelo:

Figura 4.3. El Modelo de Andrews y Bonta



Fuente: Tomado de Graña et al. (2008)

Si bien, partiendo de las principales variables causales extraídas de la investigación psicológica (actitudes, relaciones interpersonales, historia conductual y personalidad antisocial), este modelo sostiene que la persona no puede ser considerada como algo aislado, sino que vive, crece y se desarrolla en un contexto interactivo y dinámico. De ahí que la escuela, la familia, el grupo de iguales y la comunidad deban tenerse en cuenta como unidades que conforman el proceso de socialización pues la persona, su ambiente y su conducta interaccionan en un proceso de influencia recíproca, motivo por el cual los factores situacionales (ambientales y sociales) deben ser considerados, junto con los personales, si

queremos mejorar nuestra habilidad para predecir conductas (Graña et al., 2008). Por tanto, como se señalaba con anterioridad, es este reforzamiento personal, interpersonal y comunitario el que explica la génesis de la conducta delictiva.

Como se ha comentado con anterioridad, el IGI-J, al igual que el YLS/MCI, consta de 42 ítems agrupados en 8 factores de riesgo: 1) delitos y medidas judiciales pasadas y actuales; 2) pautas educativas; 3) educación formal y empleo; 4) relación con el grupo de iguales; 5) consumo de sustancias; 6) ocio/diversión; 7) personalidad/conducta; 8) actitudes, valores y creencias (Ver Tabla 4.5.). Cada uno de estos factores está subdividido en varios ítems –entre 3 y 7- que se describen en términos operativos y definidos previamente y cuya información ha de obtenerse fundamentalmente a partir de la observación, del conocimiento directo del menor/joven y su entorno, de la entrevista semiestructurada ya establecida para ello y de la documentación que se tiene del mismo/a (Ver Anexo 4). Además, la existencia en cada una de las áreas del riesgo de un elemento denominado “factor protector” pone de relieve el esfuerzo de esta prueba (y de la teoría que la sustenta) por definir aspectos susceptibles de ser tenidos en cuenta en la planificación de los programas de tratamiento (Graña et al., 2008).

Tabla 4.5. Áreas de Riesgo del IGI-J

ÁREAS DE RIESGO DEL IGI-J		
Delitos y medidas judiciales pasadas y actuales	Tres o más medidas judiciales anteriores Incumplimientos/quebrantamientos de medidas Medidas en medio abierto Internamiento en centro de reforma Actualmente tres o más medidas judiciales	
Pautas educativas	Supervisión inadecuada Dificultad en controlar el comportamiento Disciplina inadecuada Pautas educativas inconsistentes Malas relaciones (padre-joven) Malas relaciones (madre-joven)	
Educación formal y Empleo	Comportamiento disruptivo en clase/trabajo Daños en la propiedad de la escuela/trabajo Bajo rendimiento académico/laboral Problemas con el grupo de iguales Problemas con los profesores/superiores Absentismo escolar/laboral Desempleo/No busca empleo	
Relación con el grupo de iguales	Algunos de sus conocidos son delincuentes Algún amigo suyo es delincuente Pocos conocidos son modelos positivos Ninguno/pocos amigos son modelos positivos	
Consumo de sustancias	Consumo habitual de alcohol/cannabis Consumo ocasional de otras drogas Consumo habitual de otras drogas El abuso de drogas interfiere en su vida Delitos relacionados con el consumo de drogas.	
Ocio/Diversión	Pocas actividades organizadas Malgasta claramente su tiempo de ocio No demuestra intereses personales	
Personalidad/Conducta	Autoestima inflada Agresividad física Ataques de cólera Incapacidad para mantener la atención Baja tolerancia a la frustración Sentimientos de culpa inadecuados Insolente/agresivo verbalmente	
Actitudes, valores y creencias	Actitudes procriminales/antisociales No busca ayuda Rechaza activamente la ayuda Desafía a la autoridad Insensible, poco preocupado por los otros	

A partir de la suma de todos los ítems presentes en el menor, en la segunda parte del Inventario se obtiene un nivel de riesgo de reincidencia, siendo las franjas de riesgo en las que los menores pueden ser clasificados las siguientes: Bajo, de 0 a 8 puntos, Moderado, de 9 a 22 puntos, Alto de 23 a 34 puntos, y Muy Alto de 35 a 43 puntos.

Diferentes estudios realizados con menores en el extranjero avalan su validez y eficacia predictiva (Bechtel et al., 2007; Jung y Rawana, 1999; Onifade et al., 2005; Schmidt, Hoge y Gomes, 2005). Asimismo, existe evidencia de que este Inventario predice la reincidencia en el menor incluso en diferentes poblaciones con diferencias en variables como la edad, raza, sexo o zona geográfica. Por estas razones, este Inventario está considerado por Gendreau et al., (1996) como la mejor opción para valorar el riesgo de reincidencia en menores. Por otra parte, del meta-análisis de 28 estudios con un seguimiento del año 1998 al 2007, que habían utilizado diferentes instrumentos para predecir la reincidencia delictiva, en 11 de ellos se había utilizado el Inventario YLS/MCI y sus puntuaciones en AUC oscilaban entre ,57 y ,75 (Schwalbe, 2007).

En el estudio llevado a cabo por Cuervo (2011), al evaluar la eficacia predictiva del Inventario, el porcentaje mayoritario de riesgo de reincidencia clasificado por el mismo en la primera evaluación fue bajo (65,24%), de acuerdo con las propuestas de medida (con bajo nivel de restricción) y en contra, como ya se ha mencionado con anterioridad, de cómo se podría percibir al colectivo que acude a los Juzgados de Menores, en la mayoría de las ocasiones considerado de alto riesgo. El porcentaje de riesgo alto fue mínimo, un 4,76%. Este perfil no coincide con el de otros estudios similares (Garrido et al. y Graña et al., 2008), seguramente debido a que en ellos, los menores ya se encontraban cumpliendo medidas judiciales cuando fueron evaluados, lo que influye en el nivel de riesgo total de los menores.

Por otro lado, el estudio de Flores et al. (2004) destaca por el gran número de menores (N=1.679). Los resultados muestran que el Inventario presenta indicadores de fiabilidad y validez adecuados, discriminando entre reincidentes y no reincidentes y recomienda su uso también en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales. Según sus datos, la mayoría de jóvenes infractores se encontraba en la franja de riesgo moderado (51,3%), mientras que el grupo siguiente más amplio correspondía al nivel de riesgo alto (37,4% de los menores). Por otra parte, se realizó otro estudio con un periodo de seguimiento de 3,4 años (periodo largo si se compara con otros estudios de esta temática) y con un total de 4.482 menores en Ohio (Bechtel et al., 2007). Los análisis continúan indicando relaciones significativas en la diferenciación de los tres grupos de riesgo y que por lo tanto, existe suficiente apoyo para confiar en la capacidad de clasificar a los jóvenes según su nivel de riesgo.

Atendiendo a las áreas del Inventario, se ha encontrado a los ocho factores que lo componen, como fuertes predictores que correlacionan con la reincidencia real encontrada en los menores (Lipsey y Derzon, 1998; Loeber y Dishion, 1983). De estos ocho factores, los que han sido considerados como mayores predictores de la delincuencia, son los siguientes: el factor de pares delincuenciales y el de actitudes y conducta antisocial, coincidiendo con el Modelo General, Psicológico, Social y de la Personalidad de la Conducta Criminal (Andrews y Bonta, 2006). Por otra parte, se señala la historia delictiva, el mal comportamiento, problemas en las relaciones familiares y falta de participación en actividades prosociales, como fuertes predictores asociados a conductas delictivas (Cottle, Lee y Heilbrun, 2001). Otro estudio destaca el factor de delitos y medidas anteriores y actuales, seguido con gran diferencia del factor de consumo de sustancias y por el de actitudes, valores y creencias, como predictores de la reincidencia (Flores et al., 2004).

Por lo tanto, según la revisión realizada, se podrían establecer como mayores predictores, los factores de la relación con iguales delincuenciales, actitudes antisociales, problemas de conducta y la historia delictiva del menor. Estos factores fueron nombrados por Andrews y Bonta (2006) como los mayores predictores de la reincidencia delictiva en el menor (Big Four). Por tanto, estos factores son los que medirían en el balance de costes y beneficios a la hora de que el menor decida implicarse en conductas relacionadas con la delincuencia. Es importante resaltar que otros estudios encontraron como mayores predictores de la reincidencia estos mismos cuatro factores (Cottle et al., 2001; Flores et al., 2004).

Los estudios de Garrido et al. (2006) y Graña et al. (2008), concluyen como veremos a continuación que el Inventario discrimina con éxito a los menores reincidentes y puede considerarse como un predictor válido de la reincidencia delictiva.

En el estudio de Graña, Garrido y González (2007), concluyeron que los reincidentes puntúan significativamente más que los no reincidentes en muchas de las escalas y que, con la excepción de la escala de Ocio/Diversión, en las otras los reincidentes obtienen puntuaciones superiores de modo significativo a las que obtienen los no reincidentes. Este hecho indica con claridad que el Inventario discrimina de modo potente entre ambos grupos de jóvenes delincuentes. Sin embargo, esa capacidad de discriminación es muy pobre cuando hablamos de delitos violentos, ya que obtienen puntuaciones de mayor riesgo que los no violentos, si bien en conjunto las diferencias son poco relevantes.

Para analizar la potencia predictiva, Graña et al. (2007), realizaron una regresión logística y los resultados indican que los jóvenes que puntúan alto en la escala de delitos y medidas judiciales pasadas y actuales tienen una probabilidad 1,67 veces mayor de ser reincidentes (es decir, cerca de dos veces más, en concreto un 67%), y 1,29 veces más (es decir, un 29%) los que tienen un alto consumo de sustancias. Por el contrario, la reincidencia es menor en aquellos casos que tienen un nivel de ocio/diversión no desviado, es decir, tienen una probabilidad del 44% de no reincidir ($1-66=44\%$). Asimismo, una puntuación alta en personalidad/conducta incrementa 1,26 veces la probabilidad de ser reincidente. De las variables del IGI-J la que mejor predice la reincidencia es los delitos pasados, seguida por el consumo de drogas y la personalidad y conducta del menor/joven. Por otro lado, el análisis de validez predictiva ofreció un valor de 0,717, que es idéntico al hallado en el estudio de Marshall, Egan, English y Jones (2006), lo que nos confirma su buena capacidad predictiva, en términos de los valores habituales obtenidos en la investigación internacional. Finalmente, en el estudio de Graña et al., (2008), la fiabilidad obtenida mediante el coeficiente alfa de Cronbach (consistencia interna), ha sido adecuada, de 0,88.

En el estudio de Cuervo (2011), las áreas con mayor riesgo encontradas han sido en ocio/diversión, educación formal/empleo y en la relación con el grupo de iguales. Mientras que en relación a los factores protectores y de forma coherente con el dato anterior, el área de ocio/diversión, es la que cuenta con menores porcentajes de factores protectores (15,7%). Es decir, los menores no cuentan con actividades de ocio apropiadas ni estructuradas que les proporcionen un enriquecimiento en su desarrollo personal. El área donde aparecen en mayor medida los factores protectores, es el área de Consumo de Drogas, al contrario de los estudios de Graña et al. (2008), la cual aparece en el CRIM (Cuadernillo de Recogida de Información del Menor), con porcentajes significativos entre la muestra, así como la segunda variable que más se relaciona con la reincidencia.

Si bien, Cuervo (2011), ha detectado como áreas del IGI-J que mayor predicen la conducta infractora, la personalidad/conducta, la relaciones con los iguales, el área de educación formal/empleo y la de ocio/diversión. Las tres últimas áreas tienen en común su influencia en la gestión del tiempo libre del menor y el carácter en mayor medida social y comunitario. Es decir, el tipo de amistades con las que se relaciona el menor, puede influir en su asistencia al centro educativo o laboral y en la adecuada relación con los adultos, así como la productividad de las actividades realizadas en su tiempo libre. Mientras que el factor de la

personalidad/conducta, de carácter más individual en comparación con los anteriores, puede parecer no relacionado con estos, pero al analizar los ítems que lo componen, se comprueba que en su mayor parte evalúan la agresividad y el control de impulsos, por lo que éste área también se relacionaría con la manera en que interactúa el menor con los demás.

En cuanto a la variable tiempo, hay que tener en cuenta que el riesgo de reincidencia se predice con la finalidad de modificar los factores de riesgo y las necesidades dinámicas que lo causan, por lo tanto se debe asumir que éstas pueden cambiar. En este sentido, se plantea la duda de hasta qué punto periodos de seguimiento muy largos en los estudios serían válidos. Ya que, de esta forma se estaría asumiendo que un nivel de riesgo determinado y, por lo tanto, sus circunstancias, no cambiarían en un largo periodo de tiempo, negando la capacidad del menor de adquirir nuevos comportamientos adaptativos. Bajo esta suposición, se asumiría que si un menor ha sido clasificado en el riesgo de reincidencia alto, lo va a mantener durante años, independientemente de que sus circunstancias hayan cambiado. Por esta razón, no se podría pretender que la validez de una evaluación fuera precisa durante un periodo de tiempo excesivo, ya que en este caso se estaría determinando excesivamente al menor por las circunstancias en las que se encontraba en el momento de la evaluación. De este modo, el IGI-J propone 6 meses para revisar el caso, coincidiendo dicho periodo con otros estudios (Capdevilla et al., 2005; Rennie y Dolan, 2010).

En el estudio de Cuervo (2011), y en cuanto a la variable anterior se refiere, a medida que va aumentando el periodo de seguimiento, se observa que los menores que reinciden habían sido clasificados en el momento de la evaluación en los riesgos moderado y alto. En este caso, el nivel de reincidencia es del 23,3% a los 2 años. Por lo tanto, a largo plazo van aumentando los porcentajes de predicciones correctas. La mejor predicción sería a partir de los 12 meses de seguimiento, lo cual resulta congruente con el tiempo medio que tardan los menores en reincidir: entre 9 y 10 meses. Aunque dicha mejoría también se podría explicar si el menor está siendo objeto de intervención.

En el estudio de Cuervo (2011), la tasa de reincidencia, ha ido aumentando a medida que aumentaba el período de seguimiento, del 13,3% al 23,3%, fenómeno similar al de otros estudios (Garrido, 2009). Las tasas de reincidencia de este estudio, realizado en Castellón, serían comparables a las de estudios previos llevados a cabo en las comunidades de Madrid, Murcia y Barcelona, siendo 26,92% (Graña et al., 2008), 36,48% (Garrido et al., 2006),

22,7% (Capdevilla et al., 2005) y 28,1%, (San Juan y Ocáriz, 2009). Cabe destacar que las edades en la muestra son superiores en los estudios de Madrid y Murcia, con casi la mitad de menores superando la mayoría de edad, por lo tanto, habrían tenido más oportunidades de cometer un mayor número de delitos.

Una de las grandes ventajas del IGI-J es que fundamentalmente toma en consideración cuales son los factores de riesgo dinámicos o necesidades criminógenas que podrían ser objeto posterior de intervención. El listado de factores nos permite examinar todas las áreas que se consideran más relevantes en la vida de estos menores/jóvenes. Así, una vez identificados los factores de riesgo y protección más pertinentes, el IGI-J también ayuda a identificar los objetivos más apropiados para la intervención; la última parte del instrumento permite centrar la intervención específica y su evaluación. Parece entonces que, por su estructura, el IGI-J es una prueba que está muy orientada a esa doble tarea de identificar factores de riesgo al mismo tiempo que definir objetivos que sean adecuados al posterior diseño de un programa de intervención (Graña et al., 2007).

De este modo, en el mismo estudio (Graña et al., 2007), obtienen que los sujetos reincidentes puntúan significativamente más que los no reincidentes en muchas de las escalas y que, con la excepción de la escala de ocio, en las otras los reincidentes obtienen puntuaciones superiores de modo significativo a la que obtienen los no reincidentes. Este hecho indica con claridad que la escala IGI-J discrimina de modo potente entre ambos grupos de menores/jóvenes delincuentes. Sin embargo, esa capacidad de discriminación era muy pobre cuando se fijaban en los delitos violentos. Los resultados al respecto señalan que los delincuentes violentos obtenían puntuaciones de mayor riesgo que los no violentos, si bien en conjunto las diferencias eran poco relevantes.

Finalmente, el análisis de la validez predictiva es de 0,717, (Graña et al. 2007; Marshall et al., 2006), lo que confirma su buena capacidad predictiva, en términos de los valores habituales obtenidos en la investigación internacional. En los aspectos metodológicos, la baja relación entre la valoración de los diferentes factores de riesgo, la elaboración de hipótesis y la determinación de objetivos para la intervención –algo común, por otra parte, en estudios similares- revela la necesidad de incidir en el manejo de instrumentos de este tipo para obtener una mayor objetividad y garantía en el tratamiento de los menores. Cabe destacar a su vez, el uso del IGI-J como prueba general, a partir de la cual se debe conformar el

Protocolo Individualizado de Intervención, en los casos de medida firme, y en el Modelo Individualizado de Intervención, en las medidas judiciales cautelares. De esto se desprende, que cuando se elabora un programa de intervención, éste debería responder al nivel de riesgo que presenta el joven y, de entre los factores de riesgo evaluados, ha de pretender cambiar aquéllos que, en opinión del profesional, están influyendo en esos momentos para mantener la carrera delictiva del menor/joven. Además, como proporciona una estimación del riesgo de reincidencia, sirve para discriminar en qué medida se puede necesitar aplicar un instrumento más específico de evaluación de la reincidencia (Graña et al., 2007).

En cuanto a la sensibilidad del Inventario, a partir del punto de corte en la Curva ROC, se obtiene un valor de un 79% para la sensibilidad y de un 54% para la especificidad (Graña et al., 2008).

4.5.2. La Escala de Conducta Antisocial (PCL-YV)

La Escala de Conducta Antisocial (PCL-YV), es una adaptación española de la PCL-R (Hare, 1991), la cual tiene en cuenta las características de la población para la que fue diseñada: jóvenes entre los 14 y los 21 años. Tal como sucede con la PCL-R, la PCL-YV utiliza una entrevista semiestructurada e información colateral para medir rasgos interpersonales, afectivos y conductuales relacionados con la concepción tradicional de psicopatía. Se obtienen puntuaciones dimensionales (baja, media o alta psicopatía), pero puede también utilizarse un punto de corte para agrupar a los jóvenes en categorías (psicópatas vs. no psicópatas) (Garrido, 2009).

De este modo, es el instrumento de referencia en el contexto profesional y científico para la valoración de la peligrosidad y del riesgo de violencia en delincuentes. La PCL-R es una escala específicamente diseñada para poder evaluar la presencia de psicopatía por medio de informaciones procedentes de archivos penitenciarios y clínico-biográficos, de una entrevista semiestructurada y de la aplicación de los 20 ítems de la escala. Los ítems se corresponden en parte con los principales síntomas de este grave trastorno de personalidad, que tanta relevancia tiene en la estimación de los problemas antisociales y violentos (Andrés-Pueyo y Echeburúa, 2010).

Se trata de una escala actuarial que incluye ítems relacionados con la vida afectiva, las relaciones interpersonales y los hábitos antisociales, así como con algunos aspectos de la biografía personal y delictiva del evaluado. Sus niveles de fiabilidad y validez están muy contrastados, así como su capacidad predictiva de la conducta violenta, que se puede establecer en torno a un valor *AUC* de 0,80. La prueba ofrece una estructura de cuatro factores: Afectivo, Interpersonal, Conducta impulsiva y Antisocial (véase Tabla 4.6.), componiéndose de 4 ítems los dos primeros factores y 5 los dos segundos (véase Anexo 1).

Tabla 4.6. Los factores de la PCL: YV

FACTORES DE LA PCL:YV	
▪ Factor 1: Afectivo:	<ul style="list-style-type: none">- Imagen personal falsa- Grandioso sentido de valía personal- Mentira patológica- Manipulación para obtener una ganancia personal
▪ Factor 2: Interpersonal:	<ul style="list-style-type: none">- Falta de remordimientos (A)- Afecto superficial (A)- Insensibilidad y falta de empatía (A)- Fracaso para aceptar la responsabilidad (A)
▪ Factor 3: Conducta impulsiva:	<ul style="list-style-type: none">- Búsqueda de estimulación- Orientación parásita- Falta de metas- Impulsividad- Irresponsabilidad
▪ Factor 4: Antisocial:	<ul style="list-style-type: none">- Pobre control de la ira- Problemas tempranos de conducta- Violación grave de la libertad condicional (medida)- Conducta delictiva grave- Versatilidad delictiva.

Su empleo es muy extenso y ha dado lugar a una serie de versiones relacionadas para tareas como el cribado (PCL-SV) o la valoración de la psicopatía en jóvenes (PCL-YV y APSD). Existe incluso una versión reciente en formato de auto-informe (PCL-Self).

Las variables de personalidad han sido poco atendidas e incluso ignoradas en la corriente criminológica principal aun cuando la evidencia arrojada por la investigación es claramente favorable a la relación entre personalidad y delincuencia (Sobral, Romero y Luengo, 1998). La personalidad en su relación con la conducta delictiva o antisocial es un tema de estudio sumamente complejo, no sólo por la dificultad inherente a las numerosas

definiciones y teorías que se han realizado en torno a esta noción, sino también por las complicaciones metodológicas que subyacen al estudio de esta variable psicológica (Graña et al., 2008).

De tal modo, podría ser necesario evaluar la personalidad de los menores/jóvenes, así como su nivel de violencia y/o rasgos psicopáticos. Aunque el constructo de psicopatía como un trastorno estable de la personalidad procede del campo de la psicología forense, y se basa, en la asunción de que es consistente a lo largo de las distintas etapas del desarrollo del individuo. La base de esta afirmación se deriva de la investigación realizada con sujetos no delincuentes que señala la existencia de una relación entre el temperamento temprano y los rasgos posteriores de la personalidad, apreciables en la edad adulta.

Como era de esperar, teniendo en cuenta las connotaciones del concepto “psicopatía” y sus propias dificultades conceptuales, el estudio de la psicopatía en niños y adolescentes se desarrolla rodeado de debate y controversia (Petrila y Skeem, 2003; Rutter, 2005; Seagrave y Grisso, 2002; Wiener, 2002). Así, la decisión de crear un instrumento que midiera psicopatía en jóvenes procede de la creencia de que las características psicopáticas no parecen emerger de repente en la edad adulta (Forth et al., 2003), defendiendo la mayoría de los autores que los rasgos de personalidad y los comportamientos característicos de la psicopatía se manifiestan precozmente de alguna forma y que, por tanto, son susceptibles de ser evaluados durante la edad juvenil e incluso en la infancia. Esto ha hecho que Hare y su equipo, guiados por todo el conocimiento que se fue adquiriendo de la experiencia con la PCL-R, intentaran desarrollar un nuevo instrumento adecuado a los jóvenes. Así, la PCL-YV (Psychopathic Checklist Youth Version), fue modificado con respecto a la forma para adultos con objeto de que el instrumento fuera más apropiado con respecto a las circunstancias de la etapa juvenil, y al modo en que la psicopatía puede expresarse en esos años (Graña et al., 2008). Con todo, se pueden observar muchas similitudes entre la PCL-R (adultos, desarrollada por Robert Hare, 1991) y PCL-YV (Forth et al., 2003). Primero, las medidas de rasgos interpersonales, afectivos, antisociales y comportamentales recuerdan la forma de evaluar que utiliza la PCL-R. Segundo, se emplea el formato de evaluación por expertos y se reitera la necesidad de disponer de múltiples fuentes de información sobre diversas áreas para conseguir evaluar adecuadamente los rasgos psicopáticos. Tercero, la PCL-YV proporciona una puntuación dimensional que representa el número y gravedad de los rasgos psicopáticos que el joven manifiesta (Graña et al., 2008).

Por otro lado, al contrario a lo que ocurre con la PCL-R, en esta escala no se proporciona un punto de corte para el diagnóstico clínico, dado que hasta que se obtenga un cuerpo empírico sólido sobre la estabilidad de los rasgos de psicopatía entre la adolescencia y la edad adulta, es prematuro adoptar puntos de corte específicos, al menos en escenarios clínicos. Algunos investigadores (Gretton, Hare y Catchpole, 2004) aventuraron un significado teórico para su resultados con puntos de corte en 30, que se utiliza con delincuentes adultos, sin embargo, en la actualidad se sugiere que se valoren las puntuaciones atendiendo a la distribución de las mismas en las muestras sometidas a estudio (Graña et al., 2008).

De tal manera, las variables más destacadas que contiene un trastorno de personalidad como es la psicopatía, la falta de empatía o insensibilidad emocional, así como el miedo al castigo, serían aspectos que al estar presentes en los inicios del desarrollo de un menor infractor, actuarían como rasgos o factores de riesgo que la literatura moderna denomina como un síndrome de desviación general, no contemplándolo así como un trastorno de personalidad característico de esta población (Graña et al., 2008). Es decir, la empatía no es sino una parte muy relevante de un conjunto de rasgos del carácter mucho más complejo. Es el sustrato del temperamento, resultado de la interacción de la biología heredada con el ambiente, aunque existen otros atributos importantes como la impulsividad, el predominio de emociones negativas y el deseo de correr riesgos o temeridad y la búsqueda de sensaciones. Estas variables definirán una modalidad de reacción psicofisiológica habitual donde tomarían asiento atributos psicológicos como una autoestima lábil (en ocasiones pobre pero a menudo hipertrofiada), una visión narcisista del mundo y una percepción hostil de los acontecimientos, a partir de la cual la violencia sería una respuesta privilegiada ante las amenazas cotidianas con que los jóvenes violentos registran los acontecimientos ordinarios de la vida diaria, derivada en parte de esa autoestima sesgada (Graña et al., 2008).

En el ámbito de las capacidades o aptitudes cognitivas, en los delincuentes violentos reincidentes suele detectarse una deficiente inteligencia, lo que les dificultaría planear adecuadamente la conducta, anticipar las consecuencias perniciosas, negociar los conflictos mediante pactos, compromisos o demoras; desarrollar alternativas ante la agresión y tomar decisiones más adaptadas a los problemas. Se trataría, en resumen de un déficit generalizado en el rendimiento del cerebro “ejecutivo” o ponderador, lo que tendría profundos efectos en el

ámbito del desarrollo de las competencias (éxito en la escuela o en el empleo) y en las relaciones (rechazo de compañeros de edad con tendencias prosociales).

Esta realidad en el equipamiento psicológico del carácter del individuo le hace particularmente vulnerable a presentar diferentes tipos de desviación, que podríamos agrupar en cuatro grandes modalidades de conductas asociales: la violencia interpersonal (agresiones físicas, vandalismo, incendios), los delitos contra la propiedad, el desafío a la autoridad (acoso y rebeldía en la escuela, en el empleo y en el hogar) y conductas de riesgo elevado (conducción temeraria, abuso de drogas y alcohol, prostitución, etc.). Nada menos que 21 estudios en diferentes países del mundo occidental han demostrado que detrás de estas actividades se halla un síndrome general: el sujeto que fracasa a la hora de integrarse en la sociedad va mostrando una secuencia de comportamientos que se desarrollan durante el transcurso de la vida (LeBlanc y Bouthillier, 2003). Esta secuencia muestra variaciones de acuerdo con el contexto específico en el que el patrón asocial desviado toma cuerpo y en función de la edad y los recursos del individuo. De esta manera, la aparición temprana de este síndrome en los menores (infancia), evoluciona de modo más intenso y perdurable que la aparición tardía (al final de la adolescencia). En otras palabras, no todos los delincuentes violentos exhiben todas las conductas incluidas en el síndrome general de la desviación social, pero cuanto más joven el individuo al presentar conductas desviadas más probabilidades habrá que muestren una variedad más amplia del mismo, y que mantengan las conductas antisociales con mayor persistencia y gravedad (Graña et al., 2008).

De este modo, estudios relevantes en la literatura científica especializada revelan que los jóvenes que obtienen puntuaciones elevadas en psicopatía son los mejores ejemplos de desviación social generalizada y amplificadas (aunque sin duda el contexto social puede canalizar hacia una mayor adaptación social a jóvenes que, a pesar de presentar una fuerte tendencia a este trastorno, pueden inhibir sus impulsos de violencia). Lo cierto es que, en la actualidad existen ya diversos estudios que señalan que el PCL-YV predice la violencia entre los adolescentes con una alta fiabilidad y validez, con períodos de seguimiento de hasta cinco años (Vincent y Hart, 2002). También hay investigaciones que avalan que la puntuación en psicopatía puede predecir la edad del primer arresto, el número de internamientos, la gravedad de los delitos y el hecho de si el sujeto ha pasado previamente por instituciones de custodia. Por lo que parece claro que los delincuentes juveniles que tienen una alta puntuación en psicopatía cometen nuevos delitos con más violencia y en menos tiempo que los sujetos con

una psicopatía baja, llevando a cabo una mayor variedad de acciones delictivas (Graña et al., 2008).

A pesar de ello, se debe tener cierta cautela a la hora de emplear el término psicopatía en los adolescentes, debido principalmente a que la personalidad a pesar de ser un constructo estable, se encuentran en una época vital que ofrece a veces cambios notables en su desarrollo psicosocial. Si bien, la investigación indica que la psicopatía juvenil está relacionada de forma teórica con variables externas antisociales. Vicent y Hart (2002) advierten que se puede identificar algo fiable en los adolescentes que es, por lo menos fenotípicamente similar a la psicopatía en los adultos y que ello está asociado con la delincuencia futura. El problema es que no existe evidencia fuerte o directa de que lo que se está midiendo sea psicopatía per se, un trastorno de personalidad estable que no desaparece en el tiempo. El contenido de este debate está determinado, en parte, por la relevancia de la psicopatía en el contexto de una política preventiva y en decisiones del marco jurídico-legal, donde se plasma la esperanza de identificar un importante subgrupo de adolescentes con los que se debe intervenir precozmente. Sin embargo, algunos autores defienden que es probable que la psicopatía se utilice como criterio de exclusión para el tratamiento, basándose en la creencia actual de que los psicópatas son intratables (Salekin, 2002; Salekin, Rogers y Machin, 2001).

Graña et al., (2008), mantienen que en su estudio debe evitarse emplear el concepto de psicopatía como término excluyente en los jóvenes, recomendando emplear la expresión personalidad antisocial o rasgos de psicopatía, antes que la de joven psicópata. Por lo que en ningún caso dicho término debe servir para plantear un tratamiento discriminatorio; antes bien, los rasgos evaluados en su estudio mediante la PCL-YV en cualquier delincuente juvenil debería orientar el diseño de prácticas educativas que tendieran a favorecer el control de la conducta antisocial e impulsiva, teniendo en cuenta sus cualidades afectivas e interpersonales evaluadas mediante la prueba.

Las propiedades psicométricas iniciales de la PCL-YV se obtuvieron a partir de 19 muestras de poblaciones clínicas y forenses, con un total de 2.438 jóvenes (Forth et al., 2003). Se concluyó que las puntuaciones varían bastante en función del escenario en que se aplica la escala: las muestras de jóvenes institucionalizados tenían las puntuaciones más altas, con una media de 24,4 (máximo de 40 puntos), seguidas de aquellas en las que los jóvenes se encontraban en libertad vigilada o cumpliendo otras medidas de menor restricción. Por

último, las muestras de jóvenes procedentes de la comunidad o del ámbito clínico tenían puntuaciones relativamente bajas.

La investigación sobre la PCL-YV ha mostrado una buena capacidad predictiva para los comportamientos violentos. En un estudio retrospectivo, de Gretton et al. (2004), la aplicaron, utilizando información de expedientes compilada en un periodo de 10 años, a un grupo de 157 chicos entre los 12 y los 18 años, enviados para evaluación a un servicio de psiquiatría forense. El riesgo de violencia en la edad adulta fue mayor entre aquellos con puntuaciones elevadas, incluso después de tomar en cuenta variables como presencia de trastorno de conducta, edad del primer delito e historia de delincuencia violenta y no violenta.

Este es un indicador del incremento de la utilidad de la PCL-YV: aunque concurren muchos factores de riesgo para la delincuencia y la violencia, los resultados indican claramente que dentro de muestras poblacionales de este tipo de psicopatía es, en sí misma, un factor de riesgo potencial, tal como lo ha demostrado ser en poblaciones de delincuentes adultos y psiquiátricos forenses. Las puntuaciones más altas se asocian fundamentalmente con el incremento de la probabilidad de delincuencia violenta y una latencia más corta para la siguiente agresión después de la evaluación (Garrido, 2009).

En el estudio de Gretton et al. (2004), se observó que el Factor 1 (Interpersonal-Afectivo) estuvo significativamente asociado con la violencia y con el tiempo del primer delito violento. El Factor 2 (Estilo de Vida Antisocial) se asoció con delitos violentos y no violentos, así como con el tiempo que tardaba en cometerse el primer delito no violento y el primer delito violento. En este estudio la dimensión conductual de la psicopatía estuvo más claramente asociada con la violencia que la dimensión afectiva-interpersonal, probablemente porque las puntuaciones de la PCL-YV distinguían la propensión para la violencia en un grupo que ya poseía un alto riesgo de delincuencia juvenil.

Así, en cuanto a las capacidades predictivas de la PCL-YV, existen dos estudios en los que se ha comparado con el IGI-J. En el primero de ellos, Catchpole y Gretton (2003) examinaron ambas pruebas y observaron que tenían una capacidad predictiva similar, con áreas bajo la curva situadas en el rango ,74-.78. Otro estudio más reciente, Marshal, et. al., (2006), evaluaron a 94 delincuentes juveniles, con una edad media de 15 años, que estaban institucionalizados en Escocia, un 60% de ellos varones. Se trata de un estudio retrospectivo,

en el que los investigadores emplearon como criterios tres medidas: número de actos violentos cometidos en los dos últimos años, número de sentencias condenatorias en el año anterior, y número de asaltos dentro de esas condenas. La media de sentencias condenatorias de la muestra fue de seis y los participantes tenían una media de 5,5 actos de violencia. La puntuación media en la PCL-YV fue de 17,4 ($dt=6,6$), mientras que en el YLS fue de 21,4 ($dt=7,.$).

La PCL-YV correlacionó con ,28 con los registros de violencia ($p<.01$), una relación no observada con la YLS ($r=.07$; ns). En cambio, ambos instrumentos correlacionaron positivamente con el número de condenas y el número de asaltos. En cuanto a la capacidad predictiva, en análisis *COR*, la PCL-YV proporciona 0,73 en los registros de violencia y número de condenas y ,75 en el número de asaltos, habiendo una diferencia estadísticamente significativa (con valor $p<.06$) en el caso de los registros de violencia a favor de la PCL-YV, aunque en otros criterios ambos instrumentos fueron comparables (Marshall et al., 2006).

Por consiguiente, se puede apreciar una capacidad predictiva parecida entre IGI-J y PCL-YV, aunque esta última podría ser superior a la hora de predecir actos violentos. Esta superioridad podría explicarse porque el constructo de psicopatía que principalmente mide la PCL-YV, incluye rasgos como la falta de empatía y de sentimientos de culpa, que están directamente relacionados con la conducta violenta. Estos hechos, junto con un pobre control del impulso, hacen que los actos violentos sean más frecuentes. Es cierto, que el IGI-J también incluye un área de personalidad y otra de actitudes, donde estos aspectos tienen cabida, pero probablemente la evaluación que realiza tiene menos profundidad que la que proporciona la PCL-YV en la medición de un modo de ser frío, egocéntrico y cruel. Esta es la fuerza de los dos primeros factores de la PCL-YV, el afectivo e interpersonal (factor I y II). Precisamente, en los estudios realizados con adultos se observa que si bien el factor II, es un mejor predictor de la reincidencia o delincuencia en general, cuando se trata de predecir la reincidencia violenta tanto el factor I, como el II parecen igualmente importantes. Hemphill y Hare (2004) señalan a este respecto que la importancia relativa del Factor I y del factor II depende del contexto donde se lleve a cabo la evaluación. El factor II puede jugar un papel mayor si se trata de predecir la reincidencia en general.

Aunque ambas pruebas tengan una capacidad predictiva parecida en la reincidencia o delincuencia en general podría explicarse por la relación en las variables que evalúan. Así, en

el factor III y IV la PCL-YV (conducta impulsiva y antisocial, respectivamente) evalúa componentes de riesgo que también están incluidos en el IGI-J. Por otra parte, algunos de los componentes del factor I (afectivo), están recogidos en el IGI-J como las actitudes y valores antisociales, la autoestima inflada o la ausencia de sentimientos de culpa. Por ello, ambos instrumentos muestrean de una forma amplia los principales factores de riesgo de la delincuencia.

En el estudio llevado a cabo por Graña et al. (2008), en cuanto a la relación entre los factores del PCL-YV y la reincidencia, los sujetos reincidentes obtienen puntuaciones significativamente mayores en los 4 factores y en el total. Las diferencias son particularmente marcadas en los factores conductual y antisocial. Como se ha comentado anteriormente, la capacidad de establecer relaciones significativas disminuye mucho en el caso de contrastar a los delincuentes violentos con los que no lo son, donde sólo se mantiene el factor conductual y el total de la prueba. Así, los factores III y IV es decir, el conductual y antisocial, son los que presentan correlaciones significativas con las variables que implican actividad y persistencia en el delito, alcanzando el PCL-antisocial los valores más elevados, superando incluso al PCL total. Por tanto, las dos variables del PCL-YV con mayor capacidad predictora son los factores III y IV, en particular este último si atendemos a la reincidencia en general. Su valor *Beta* es de ,70, y presenta un *odds ratio* de 2,01, lo que significa que los sujetos con una puntuación elevada en este factor tienen una probabilidad de reincidir dos veces mayor que los que obtienen una puntuación baja. Ahora bien, si atendemos a delincuencia violenta, cabe especificar que sería el factor III, conductual, sería muy sensible para predecir a los delincuentes violentos, con un *Beta* de ,24 y *odds ratio* de 1,28.

La PCL en el estudio de Graña et al. (2008) obtiene un valor de 79% para la sensibilidad y de un 54% para la especificidad. El punto de corte corresponde a la puntuación 12,50 en la PCL-YV total. Estos valores indican que el PCL tiene una capacidad de predicción moderada-alta, muy ligeramente inferior a la prueba IGI-J (que obtuvo un área bajo la curva de ,71). Por lo que si señalamos el valor *alfa* de consistencia interna la PCL-YV es de ,86, esto es un valor muy adecuado, que respalda la fiabilidad de su empleo.

A pesar de ello, cabe destacar las diferencias entre la utilización de la PCL-YV y el IGI-J, siendo la principal, que éste último toma en consideración cuáles son los factores de riesgo dinámicos que podrían ser objeto posterior de intervención, es decir, como ya se ha

comentado con anterioridad, necesidades criminógenas. Por otro lado, el IGI-J evalúa una realidad necesariamente dinámica, mientras la PCL-YV (como su antecesora en adultos, la PCL-R), evalúa un constructo estable (como es la psicopatía) que se va desarrollando en el individuo en el proceso de desarrollo, por lo que mostraría dificultades a la hora de plantear elementos dinámicos que mejorasen tras un programa de intervención (Graña et al., 2007).

4.4.3. La escala de desarrollo antisocial. APSD

La APSD (Antisocial Process Screening Device), se compone de 20 ítems que miden tres dimensiones conductuales: 1) Rasgos de Insensibilidad Emocional (IE), 2) Narcisismo (NAR) y, 3) Impulsividad (IMP) (Tabla 4.7.). Los 20 ítems son calificados en una escala de tres puntos TF (Totalmente Falso), AV (A veces Verdadero) y SV (Siempre Verdadero) (Anexo 3). La obtención de puntuaciones altas en estos factores indica puntuaciones altas en estos rasgos (Frick y Hare, 2001). Así, la APSD es una prueba que evalúa el desarrollo temprano de tendencias características de la delincuencia persistente y psicopatía.

Tabla 4.7. Escala de Desarrollo Antisocial (APSD)

PADRES
APSD. Insensibilidad emocional
APSD. Narcisismo
APSD. Impulsividad
APSD. Total
PROFESIONALES
APSD. Insensibilidad emocional
APSD. Narcisismo
APSD. Impulsividad
APSD. Total
COMBINADO
APSD. Insensibilidad emocional
APSD. Narcisismo
APSD. Impulsividad
APSD. Total

Esta escala está pensada para ser cumplimentada originalmente por el padre o la madre y un profesor del niño, que debe tener entre 6 y 13 años. La APSD fue elaborada en un intento de medir las manifestaciones de inicio en la infancia/adolescencia de los rasgos asociados a la psicopatía. Al igual que la PCL-YV, también utiliza como guía la PCL-R. Sin embargo, los autores han definido objetivos diferentes, lo que se traduce en diferencias sustanciales en el

contenido de los ítems y en el formato de evaluación de esta medida. En primer lugar, la APSD fue diseñada específicamente para evaluar los precursores de los rasgos de psicopatía previos a la adolescencia, lo que exige métodos que sustituyan el autoinforme, dada su baja fiabilidad en este grupo de edades. En segundo lugar, la APSD fue diseñada para utilizarse fuera de las instituciones forenses o de salud mental, lo que implica no poder beneficiarse de la información contenida de los historiales como parte del proceso de evaluación. Tercero, la APSD ha sido diseñada para permitir evaluar amplias muestras normativas, lo que es imprescindible para descartar características que pueden ser propias del comportamiento típico de la infancia tardía y la adolescencia, e identificar, contrariamente, rasgos que, asociados a la psicopatía pueden expresarse a lo largo del desarrollo (Garrido, 2009).

La normalización de la APSD se realizó en una muestra poblacional amplia de 1.120 niños de tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo cursos del sistema escolar estadounidense con una media de edad de 10,6 años (Frick, Bodin y Barry, 2000). Basándose en el análisis factorial, Frick, Barry y Bodin (2000), encontraron que los ítems se agrupaban en las tres dimensiones señaladas anteriormente, debido a que una estructura tri-factorial describía mejor los rasgos psicopáticos en estas franjas de edades. Asimismo, las dimensiones de Narcisismo e Impulsividad parecen tener algunas diferencias importantes en sus correlaciones con otras variables. Asimismo, Narcisismo parece estar más correlacionado con los criterios del diagnóstico del trastorno negativista-desafiante, mientras que Impulsividad parece asociarse fuertemente con los criterios del TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad (Frick et al., 2000).

En el estudio llevado a cabo por Graña et al. (2008), pudieron constatar que los profesionales o educadores otorgaban puntuaciones más elevadas que los padres, tanto en el total como en cada uno de los tres factores. La diferencia mayor se sitúa en el factor de insensibilidad emocional (en adelante, IE), donde los profesionales superaban a los padres en dos puntos (5,82 y 3,96, respectivamente). Por supuesto, el total y los factores de la forma combinada eran los más elevados, ya que se rellena tomando los valores más altos de las formas anteriores. En todo caso, los valores medios totales eran elevados tanto si lo rellenan los padres como si lo rellenan los profesionales: 14,58 y 17,30, respectivamente, de un máximo de 40 puntos.

En el mismo estudio, en relación a la APSD y la reincidencia, se obtuvo que, salvo el factor IE los padres y la puntuación total, en todos los casos se aprecian diferencias significativas a favor de los reincidentes. Cabe destacar que los valores dados por los profesionales/educadores eran los que más discriminan, en todos los casos al nivel de $p<.000$, seguido por la prueba combinada. De este modo, hasta 6 puntos separaban el total de los reincidentes de los no reincidentes (21,11 y 15,87, respectivamente) en la forma de los educadores. Por otro lado, al analizar los delincuentes violentos de los no violentos, de nuevo los profesionales eran los únicos cuya puntuación discriminaba a ambos grupos, en todos los factores salvo en el de Narcisismo, pero en este caso con un nivel de significación más discreto, de $p<0,05$ (Graña et al., 2008).

Para determinar la precisión predictiva del riesgo de reincidencia del APSD, se halló un área bajo la curva de 0,692 (el error típico de .04 y el intervalo de confianza al 95% va de ,61 a ,78). De esta forma, se obtuvo a partir del punto de corte en la *Curva ROC* un valor de 81% para la sensibilidad y de un 53% para la especificidad. El punto de corte corresponde a la puntuación de 13,50 en la APSD-profesionales (Graña et al., 2008). En esencia, entonces, la prueba APSD profesionales (o educadores) predice de modo muy semejante al IGI-J y a la PCL-YV, en torno al 70%. El punto débil de la APSD es, sin duda, la especificidad, ya que sólo predice a los no reincidentes en el 53% de los casos, un valor inferior al de las dos pruebas anteriores. Esto significa que un menor que no vaya a reincidir tiene la misma probabilidad de ser predicho correctamente por la APSD que al azar. Finalmente, en este estudio el valor alfa de consistencia interna es también aceptable, 0,79, aunque ligeramente inferior al obtenido en el mismo en el IGI-J y la PCL-YV (Graña et al., 2008).

En otro estudio llevado a cabo por Garrido (2009) se obtuvo que respecto a la APSD que rellenan los padres, no se detectan diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones entre los reincidentes y no reincidentes en ninguna de las dimensiones, ni en las puntuaciones totales del test; esto quiere decir que los padres asignan aproximadamente las mismas puntuaciones a ambos grupos de menores. De este modo, los profesionales asignan mayor puntuación a los reincidentes en las dimensiones de IE e Impulsividad; sin embargo, en la dimensión de Narcisismo a pesar de que las puntuaciones son notablemente superiores en el caso de los reincidentes, la diferencia no llega a ser estadísticamente significativa al valor del 0.05 por cien (sí con un valor de $p<0,01$). Las puntuaciones totales del test son significativamente mayores en reincidentes.

Asimismo, en este estudio en la prueba combinada se observan diferencias estadísticamente significativas únicamente en la dimensión de Impulsividad, donde las puntuaciones mayores las obtienen los reincidentes. Por consiguiente, parece claro que los profesionales discriminan mejor a los reincidentes, de lo que lo hacen los padres. Por otro lado, la escala APSD no discriminó entre jóvenes violentos y no violentos. De este modo, en cuanto a la predicción de la reincidencia, los datos muestran que los menores reincidentes a los que los padres asignan menor puntuación en la dimensión de insensibilidad emocional tienen menor riesgo de reincidir, es decir, actúa como un factor de protección en la reincidencia. En cuanto a las puntuaciones asignadas por los profesionales, la dimensión IE e Impulsividad aparecen como factores de riesgo predictores de la reincidencia. Según los profesionales, un menor con puntuaciones elevadas en estas dimensiones tiene 1,4 y 1,6 veces más riesgo de reincidir que aquellos que obtienen puntuaciones bajas en estas. Respecto a los resultados de la prueba combinada, se observa que los menores que obtienen puntuaciones elevadas en la dimensión impulsividad, tienen 1,3 veces más riesgo de reincidir.

El modelo estimado consigue una tasa de aciertos del 76,5%, de los cuales están correctamente clasificados un 70% de los menores no reincidentes y un 81,6% de menores reincidentes, aunque significativamente menor en los padres 51%, siendo de 59% en la forma combinada y 68% en los profesionales, por lo que la APSD cumplimentada por los profesionales se podría decir que tiene una buena capacidad para discriminar entre reincidentes y no reincidentes. En este estudio, la consistencia interna se ha estimado en 0,748 con el estadístico de fiabilidad *Alfa de Cronbach*, (Garrido, 2009), resultado que se considera satisfactorio al igual que en el estudio anterior (Graña et al., 2008).

4.4.4. Análisis conjunto de las correlaciones entre las tres pruebas: IGI-J, PCL-YV y APSD

En el estudio de Graña et al., (2008), obtienen que el total de ambas pruebas correlacionan entre sí, $r=,24$, un valor bajo, lo que demuestra que ambas pruebas no miden lo mismo. Por lo que respecta a los diferentes factores del PCL, en general las correlaciones con las diferentes escalas del IGI-J no son muy importantes, con la excepción del factor 4 (Antisocial), que correlaciona de forma baja (pero significativa) con 6 de las escalas del IGI-J, además de con la puntuación total, donde alcanza un valor más alto de $r=,33$.

Así, en el estudio anterior, al examinar las correlaciones con la APSD, las puntuaciones más elevadas se hallan en la forma combinada. Los tres factores correlacionan con valores altos con respecto a la puntuación total: el factor IE presenta una $r=.82$, el factor narcisismo una $r=.87$, y el factor impulsividad una $r=.79$. Por otra parte, impulsividad correlaciona con narcisismo $r=.62$, y con la IE $r=.63$, lo que son valores moderados, mostrando que cada factor, aunque relacionados, no miden lo mismo. Esto mismo es aplicable a la correlación hallada entre IE y narcisismo, $r=.60$ (Graña et al., 2008).

Por otra parte, parece claro que la APSD y la PCL-YV correlacionan de forma baja a moderada. Los valores más elevados ($r=.50$) se dan entre el factor impulsividad del APSD3 (combinado), y los factores conductual y antisocial del PCL-YV, lo que es del todo lógico (factores 3 y 4). Es obvio, entonces, que ambas pruebas tienden a medir un mismo constructo, pero no son pruebas intercambiables. Esto sin embargo, tiene una gran utilidad en el plano diagnóstico, porque podría utilizarse el APSD como una prueba de screening para detectar en qué medida podría ser conveniente pasar la PCL-YV a un menor en particular. Esta conclusión puede extenderse a las otras dos formas, las rellenadas por los padres y profesionales/educadores, que presentan valores de correlación parecidos (Graña et al., 2008). Por otra parte, la APSD correlaciona menos con el IGI-J, en todos los casos son valores bajos aunque significativos, con la excepción de la escala I (delitos y medidas pasadas y actuales), donde la correlación es casi de cero.

Finalmente, en este estudio concluyen que lo que realmente tiene fuerza predictiva es el total de cada una de las pruebas. Sin embargo, destacan los autores que de esta comparación de los factores de las tres pruebas que, por ejemplo, la escala del IGI delitos y medidas tiene una probabilidad de 1,55 veces, lo que indica que el sujeto que puntúe alto en ella, está más cerca de reincidir en una relación de “dos a uno” que el sujeto que puntúe bajo en ella, igual consideración hacen respecto al PCL antisocial (Graña et al., 2008).

Por otra parte, en el estudio de Garrido (2009), los resultados concuerdan con el estudio anterior. Así, la correlación del total del IGI-J con los factores de la PCL-YV y el total de esta prueba. Los resultados apuntan a una correlación baja-moderada entre el IGI-J y los factores interpersonal y afectivo de la PCL-YV, y una correlación moderada-elevada con el factor conductual y antisocial. La razón, según cita el autor, se halla en el hecho de que el IGI-J mide más extensamente el comportamiento e historial delictivo de los jóvenes que los

aspectos de personalidad, que son los evaluados por los primeros factores de la PCL-YV. La correlación con la PCL-YV de 0,61 indica que ambas pruebas tienen un dominio de evaluación común (puesto que la correlación es elevada), pero que a parte miden cosas diferentes (puesto que la correlación no es muy elevada).

Ahora bien, en este estudio, comparación a la escala APSD1 (padres) y 2 (profesionales), lo primero que se aprecia es que las correlaciones que presentan con el resto de las pruebas son muy parecidas, si bien los valores tienden a ser más elevados en el caso de los profesionales. Por otra parte, las correlaciones de la escala combinada (APSD 3) son muy parecidas a las de los profesionales, aunque un poco más elevadas. Las puntuaciones que dan los padres están relacionadas con las de los profesionales, reflejándose en la correlación entre ambas, $r=.57$, pero al mismo tiempo nos dice que están lejos de ser semejantes. Es decir, como se ha comentado con anterioridad, la forma de los profesionales discriminaban a reincidentes y no reincidentes en mayor medida que la forma cumplimentada por los padres. Así, los profesionales aportan información complementaria a la suministrada por los padres y, en términos de predicción de la reincidencia, más eficaz.

Asimismo, las correlaciones de la forma de los profesionales con el total del IGI-J es $r=0,54$, y con el total de la PCL-YV de $r=0,69$. Por tanto, con respecto al IGI-J, se observa que hay una correlación media relevante, lo que implica que ambas pruebas tienen cosas en común, aunque miden claramente dominios diferentes. Y en relación con la PCL-YV, el valor obtenido es muy importante, porque al ser elevado nos dice que esta prueba puede considerarse como una primera opción de diagnóstico, y caso de que la puntuación lo requiera, puede dejar paso a emplear la prueba PCL-YV, mucho más laboriosa de administrar (Garrido, 2009).

Para concluir, Garrido (2009), afirma que la matriz de correlaciones reveló que las tres escalas están relacionadas, pero que no miden exactamente lo mismo. Las tres son instrumentos de predicción relevantes, aunque el problema de la especificidad debe ser tenido en cuenta. En síntesis, el problema puede resumirse así: cuando aplicamos estas pruebas tenemos una alta probabilidad de acertar con los reincidentes, pero se corre el riesgo de introducir muchos reincidentes falsos (el problema de los falsos positivos), es decir, de sujetos que predijimos que reincidirían pero que luego no lo hicieron.

Este problema, que es habitual en la literatura científica sobre predicción, es más notable en la escala APSD, pero afecta a las tres. Sin embargo, en los análisis de regresión, donde se predice la reincidencia mostrando los valores de cada una de las dimensiones o factores que componen el instrumento, dan unos porcentajes de sensibilidad parecidos, pero mejores en el caso de la especificidad, sobre todo en lo que respecta a la especificidad del IGI-J, que es del 70% (Garrido, 2009).

Parece, por tanto, que la APSD puede ser un instrumento fiable y válido si no contamos con tiempo para aplicar la PCL-YV, ya que esta nos permite definir aspectos de la personalidad antisocial que deben ser tenidos en cuenta en la elaboración del programa de intervención. Por ello, puede reservarse su uso en los casos en que la puntuación de la APSD haya resultado relevante (Garrido, 2009).

Por otra parte, dado que el IGI-J tiene una capacidad de predicción similar a los otros dos instrumentos, pero además establece necesidades y objetivos de intervención, debería ser un instrumento prioritario, y la base sobre la que realizar el protocolo de intervención individualizado (Garrido, 2009).

4.5. Resumen

Atendiendo a las carreras delictivas, la teoría integradora de Farrington (1996), diferencia entre la tendencia antisocial de un sujeto a la hora de cometer un delito y la decisión de cometerlo. Así, esta teoría establece que la tendencia antisocial depende de tres factores: 1) los procesos relacionados con el deseo de bienes materiales, de estimulación, prestigio social, de frustración y estrés; 2) una direccionalidad antisocial, como consecuencia de la ausencia de actividades prosociales y; 3) la carencia de inhibiciones al comportamiento delictivo como empatía, creencias o actitudes relacionadas con la crianza. Sin embargo, la decisión de cometerlo depende de la oportunidad para el delito y de los costes y beneficios que el menor perciba.

Si bien, tanto el inicio, como el mantenimiento de una carrera delictiva es un fenómeno complejo y multicausal. Así, el inicio de una carrera delictiva podrá depender del grupo de iguales, motivación por la adquisición de bienes materiales o incluso, imitación o

modelado disocial. Pero, en el mantenimiento de la carrera delictiva, necesariamente debe haber motivación delictiva del propio menor, por lo que disminuir la misma sería un objetivo a tener en cuenta de cara a la intervención, así como intentar producir modificaciones en las conductas, cogniciones y emociones que se orientan hacia la conducta infractora.

En la actualidad, los mayores predictores de la reincidencia delictiva son los llamados *The Big Four* de Andrews y Bonta (2006): Historia delictiva pasada, estilo de personalidad y conducta antisocial, actitud y creencias antisociales y grupos de iguales antisocial. A estos cuatro, Andrews y Bonta (2008), incluyen otros cuatro, y pasan a denominarlo *The Central Eight*, estos son: Circunstancias familiares deficitarias, área de educación y empleo, área de abuso de sustancias y área de ocio y tiempo libre disfuncional. Así, se puede apreciar que estos ocho predictores coinciden con los factores de riesgo planteados en el YLS/CMI y, posteriormente en el IGI-J.

De esta forma, las diferencias individuales se explicarían según los factores de riesgo de cada menor, a más factores de riesgo, mayor probabilidad de que el menor cometa una conducta delictiva.

Por otro lado, desde la Criminología del Desarrollo, señalan que la mayoría de los jóvenes realiza algún tipo de actividad delictiva durante su adolescencia, pero sólo algunos persisten en este tipo de conductas (Rechea y Fernández, 2001). Así, la mayoría de las carreras delictivas suelen ser abandonadas de manera natural, siendo un menor número los menores que persisten en éste tipo de conductas, los cuáles además, coinciden con un inicio precoz en estas conductas desadaptadas, así como delitos más graves (Howell, 2003). Tal y como puso de relieve Robins (1978), el comportamiento delictivo adulto casi siempre requiere que haya existido una previa conducta antisocial juvenil. Pero, además, la mayoría de los niños y adolescentes porque hayan realizado conductas antisociales en edades juveniles no van a convertirse en infractores adultos (LeBlanc y Loeber, 1998; Loeber y LeBlanc, 1990).

En cuanto a la especialización delictiva, la literatura científica sugiere tres premisas. La primera, es que la mayoría de los delincuentes frecuentemente participan, a lo largo de su carrera criminal, en una amplia variedad de delitos, siendo pocos los sujetos que se concentran en una única tipología delictiva. En segundo lugar, aquellos delincuentes que muestran cierta especialización parecen orientar sus infracciones, no a un tipo concreto y

único de delito, sino en torno a una categoría más amplia de delitos relacionados, por ejemplo, robos y hurtos de diferentes propiedades, casas, vehículos, etc. En tercer lugar, existe cierta evidencia empírica de que con la edad una ligera tendencia a la especialización (Blumstein et al., 1986; Piquero et al., 1999).

Menos estudiado ha sido el fenómeno de la co-delincuencia, o actividad criminal en grupo, Piquero et al. (2007) señalaron que la curva de edad de este fenómeno alcanzaba su cuota máxima al final de la adolescencia y después disminuía con la edad, siendo más frecuente en los delitos de robo, y habiendo una relación directa entre el número de co-delincuentes con que el sujeto coopera y la duración de su carrera delictiva, así como que una edad temprana en el primer acto delictivo predecía un mayor número de compañeros en los delitos.

En cuanto a la reincidencia, cabe señalar que a la hora de comparar los estudios, nos encontramos con una cuestión delicada, ya que varían en gran medida, en relación a sus tasas, edad penal de los menores en los distintos países, sistemas judiciales diferentes, variaciones en la tipificación de los delitos, así como diferentes cuestiones metodológicas como el periodo de seguimientos, los métodos de recogida de información e incluso el criterio para definir la propia reincidencia (Cuervo, 2011).

Por otro lado, los estudios apuntan a un hecho anteriormente mencionado, y es que la mayoría de los menores cuentan en toda su trayectoria delictiva únicamente con un delito o expediente en el juzgado, estando la concentración de delitos en un grupo de menores reducido (Bravo et al., 2009; Capdevilla et al., 2005; Iborra et al., 2011; San Juan y Ocáriz, 2009). Los menores varones reinciden en mayor medida que las chicas (Capdevilla et al., 2005), aunque cabe señalar el mayor incremento de violencia ascendente en las chicas (Berga, 2005). De igual manera, se asocia una mayor reincidencia a delitos contra la propiedad (Capdevilla et al., 2005; Escofet y Pérez, 1994; Redondo et al., 1993; Sánchez-Meca, 1996; Winner et al., 1997). Otro fenómeno importante en el tema de la reincidencia, es la menor tasa de la misma en medidas de medio abierto, así como una mayor reincidencia en medidas de mayor restricción, pudiendo ser explicado no por la medida en sí, sino por un mayor nivel de riesgo del menor.

A la hora de evaluar la reincidencia, las valoraciones que tienen en cuenta el riesgo y necesidades criminógenas del menor, así como la integración de gestión del caso con dicha evaluación del riesgo, sugieren un mayor grado de objetividad y estructuración. Así, se han especificado tres instrumentos englobados aquí y que han demostrado ser fiables y válidos; APSD, PCL-YV e IGI-J. Así, cabe especificar que el APSD en la forma en que lo cumplimentan los profesionales, éstos otorgan una mayor puntuación, discriminando en mayor medida a los reincidentes de los no reincidentes. La PCL-YV, aunque también obtiene al igual que el IGI-J una adecuada capacidad predictiva, ésta podría ser superior a la hora de predecir actos violentos, y en comparación con la APSD, la PCL-YV permite definir aspectos de la personalidad antisocial del menor que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar su programa de intervención. Por último, el IGI-J, además de ofrecer una adecuada capacidad de predicción de la reincidencia (Garrido, 2009), permite estructurar la intervención, ya que ofrece la posibilidad de establecer necesidades y objetivos de intervención, pudiendo así estructurar la misma y evaluarla periódicamente, pudiendo sentar las bases sobre las que realizar el protocolo de intervención individualizado.

Capítulo V:

El ocio y el tiempo libre

como factor de riesgo

5.1. Introducción

El ocio se puede definir como la disposición comportamental que la persona tiene ante el tiempo exento de responsabilidades externas. Es decir, hace referencia al uso que se hace del tiempo libre (exento de cargas) donde la función predominante (productiva o no) que de este se haga y la satisfacción que produce son aspectos determinantes para entender su influencia o poder como variable de riesgo (Puig y Trilla, 1996).

En general, hay que considerar la adolescencia como un período evolutivo que también implica modificaciones en las actitudes hacia el tiempo libre. El joven comienza a considerarlo como un espacio íntimo y privado ajeno al control familiar y a las actividades lúdicas anteriores, centrándose en la diversión y el ocio compartido con los iguales, donde su influencia junto con la búsqueda de aceptación y éxito entre sus miembros ejercen un papel determinante (Muñoz-Rivas y Graña, 2005).

En el contexto actual, la onnipresencia de la publicidad, la potencia del “sector pantallas”, el libre acceso a cantidades no selectivas de información y la rapidez con la que nuestro entorno se renueva y modifica, compiten con la influencia que sistemas como la familia o la escuela han tenido tradicionalmente como ejes para la transmisión de pautas culturales y sociales. Estos cambios obligan a estos agentes tradicionales de socialización (familias y entornos educativos formales) a replantearse su papel, aceptando sus limitaciones y ofreciendo nuevas respuestas acordes con las condiciones actuales. Asimismo, demandan al adulto una revisión de sus propios roles, debiendo establecer nuevos modelos de autoridad y nuevas pautas educativas y socializadoras.

Por otro lado, el nuevo contexto social, por razón de esa dinámica acelerada de la que se hablaba, es cada vez menos estable, lo que obliga a los individuos a un difícil equilibrio para aceptar y adaptarse a los cambios. Las desigualdades, la inestabilidad escolar y laboral, la necesidad permanente de capacitación requerida para conseguir un adecuado posicionamiento en la sociedad y la consecución de logros exitosos (en competencia con otras vías más inmediatas), conducen a los ciudadanos a explorar y encontrar gratificación a sus necesidades en entornos específicamente creados para ello: los contextos de ocio, que han pasado a constituirse en el epicentro actual de la socialización juvenil, hasta el punto de que muchos análisis actuales reflejan la importancia identitaria de los espacios y tiempos de ocio como sustitutivos de lo que el espacio laboral o profesional han venido aportando hasta el momento a la identidad social (Ballesteros, De Asís, Rodríguez y Megías, 2009).

En otro orden de cosas, si se habla de ocio, hay que advertir de entrada que pocos términos existen tan polisémicos y que puedan ser interpretados de forma tan subjetiva por cada individuo o cada grupo, pese a ser algo universalmente reconocido en la sociedad occidental. El ocio nace bajo el paraguas del tiempo libre que surge en las sociedades industrializadas, en las que para la regulación del trabajo fue necesario establecer límites al espacio laboral. El tiempo libre es el tiempo que resta una vez realizadas las obligaciones (trabajo, estudio, tareas domésticas, etc.) es durante ese tiempo cuando se realizan las actividades libremente elegidas, pudiendo tener o no un carácter lúdico o de divertimento. Se podría decir que el tiempo libre es el continente en el que el ocio surge como uno de sus contenidos (Ballesteros et al., 2009).

La delimitación del concepto de ocio incluye diferentes dimensiones: la autonomía (el sujeto debe percibirse como libre para elegir lo que quiera hacer), la finalidad (el ocio se busca por sí mismo, no hay otro objetivo) y la actividad (el ocio debe ser grato y placentero). Es, en definitiva, un tiempo para ser vivido tal y como uno desea, al margen de cualquier convencionalismo o regla asumida para el resto de la semana, en un ejercicio de escenificación del alejamiento del contexto de la obligatoriedad. Esta predisposición de laxitud en espacios para el ocio impregna a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y se manifiesta en cada uno de ellos de un modo singular, acorde con su momento evolutivo y con el contexto en el que se desarrollan sus vidas (Ballesteros et al., 2009).

Para adolescentes y jóvenes, el tiempo libre y en concreto el ocio, se convierten en un espacio para ser ellos mismos, sin los condicionamientos de los contextos adultos. Sus protagonistas hacen de esos microespacios temporales un lugar de desarrollo y de búsqueda de identidad. Esa exploración se manifiesta en el ensayo de conductas a través de actividades y de nuevas vivencias, en un ejercicio consciente o no, pero siempre activo y predispuesto. Es un espacio para “dejarse llevar” por el grupo, la oferta o la moda, e incorporarse al mismo de una forma pasiva; un único ejercicio es obligado: elegir entre lo que el contexto ofrece (Ballesteros et al., 2009).

Por todo ello, para esos sujetos adolescentes, en no pocas ocasiones el ocio sirve como espacio para la magnificación de la ruptura con el mundo adulto, a través de una teatralización hedonista del “no límite”. Y es aquí donde a veces se producen los deslizamientos hacia comportamientos disruptivos: en el afán del cambio, en la búsqueda de una libertad absoluta,

se disparan las conductas de riesgo, a través de una legitimación del “no control” como algo intrínseco al ocio (Ballesteros et al., 2009).

Muchas de las ofertas de ocio existentes presentan una característica común: se ofrecen como algo que valida la trasgresión de normas sociales, propiciando un contexto de “no límites”. Así, se oferta diversión ilimitada, juegos que bordean la ética del comportamiento, espacio sin reglas para el consumo, etc. Encontrar el límite queda sólo en manos del participante, en función de su capacidad y de sus intereses. Es un ejercicio de libertad al alcance de todos los colectivos, independientemente de su desarrollo evolutivo, de su edad y de su capacidad para el autocontrol. Eso implica que, quien tiene acceso a estos escenarios, no siempre tiene idénticas posibilidades de encontrar sus propios límites. Esto, que en principio se presenta como un problema de carácter individual, puede plantearse en términos colectivos; además de las singularidades individuales que puedan explicar ciertos comportamientos, también hay rasgos grupales que son potenciales detonantes de conductas de riesgo en según qué contextos (Ballesteros et al. 2009).

5.2. Influencia de la adolescencia y ocio en la desviación social

En nuestra cultura occidental, la adolescencia como etapa evolutiva cada vez adquiere más importancia, por ello se convierte en objeto de estudio de la biología, medicina, psicología, sociología, antropología, trabajo social, etc. (Bueno y Pérez, 1998). Si bien, se considera una etapa evolutiva, la condición adolescente es algo más que un grupo de edades o unas características evolutivas, por lo que es necesario adoptar visiones poliédricas (Funes, 2005).

En nuestro entorno, estamos en las primeras generaciones de adolescentes postmodernos, donde el ocio juega un papel fundamental en la socialización. El ocio en sí mismo, es capaz de prevenir y de promocionar simultáneamente. Hablamos de ocio constructivo cuando el escenario lúdico converge con espacios para el aprendizaje, favoreciendo la configuración de competencias que incitan a la reflexión de los adolescentes (Navarro, Uceda y Pérez, 2013).

Para tratar de comprender la vivencia de los riesgos en la adolescencia hay que partir del análisis de los cambios cognitivos, emocionales y comportamentales que se producen durante esta etapa de transición, máxime si tenemos en cuenta la disociación entre los riesgos

objetivos (contextualizados, matizados y contrapuestos en los diferentes espacios y tiempos de elección comportamental).

Hay un amplio consenso en la literatura científica donde se considera a la adolescencia como una etapa fundamental del individuo ya que en ella se producen procesos claves, entre los que deben destacar (Krauskopf, 2000) la exploración, la necesidad de diferenciarse del contexto más cercano (la familia fundamentalmente) y la búsqueda de pertenencia y de proyección vital. La adolescencia implica el planteamiento y el inicio de la búsqueda de quién se es realmente, y de quién se espera llegar a ser. Es un viaje sin retorno hacia la individuación y la autonomía, completa o deficiente, en la que el adolescente ensaya conductas, actitudes, valores, relaciones, etc., que irá haciendo suyas o descartando, en un proceso de conformación de la identidad adulta. Es el ámbito de los primeros pasos que conducen al siguiente peldaño, la juventud; pasos que serán claves para situarse, y sobre todo para cómo situarse, en la plataforma definitiva de la adultez. Esta etapa, de incertidumbres y cambios, supone la condición de paso necesaria para los importantes logros que deben posibilitar el establecimiento de la propia identidad, pero también puede facilitar el establecimiento de algunas conductas disruptivas y/o desajustadas de la norma social que, si no son exclusivas, si podrían ser características de los adolescentes (Chandler, Boyes y Ball, 1990).

La psicología evolutiva ha prestado una atención especial a algunas características de gran relevancia, con objeto de comprender qué función desempeñan las conductas de riesgo en esta edad, subrayando especialmente dos: reducir la incertidumbre y construir la propia identidad. Una manifestación específica de estas necesidades funcionales es la convicción de que los adolescentes y jóvenes son invulnerables (Schinke, Botvin y Orlandi, 1991), especialmente frecuente en la adolescencia temprana y que surge como consecuencia de una cierta forma de egocentrismo que aparece en dicha edad y que origina lo que se ha denominado como “auditorio imaginario y fábula personal” (Elkind, 1967).

La “fábula personal” se basa en la inclinación adolescente a centrarse en uno mismo, a buscar la diferenciación y la coherencia interna en esa diferencia, lo que lleva con frecuencia al convencimiento de que la experiencia personal es algo especial y único; una distorsión cognitiva que puede estar en la base de las graves conductas de riesgo en que eventualmente se implican algunos adolescentes, creyendo que las consecuencias más probables de dichas conductas no pueden sucederles a ellos porque son especiales. A todo ello hay que añadir que,

algunos estudios sociológicos realizados en nuestro país (Martín y Velarde, 2001), destacan como una característica de la identidad adolescente la escasa orientación hacia el futuro y la dificultad para apropiarse de lo que se va a ser y para construir un proyecto propio, un fenómeno al que suele denominarse presentismo; esta característica se incorpora como un elemento más a esos rasgos adolescentes que incrementan la orientación a las conductas de riesgo. Obviamente, no tener en cuenta lo anterior puede restar eficacia a los programas de prevención que se limitan a dar información sobre las posibles consecuencias de las conductas (Díaz-Aguado, 1996).

El riesgo es inherente a cualquier proceso de aprendizaje y abarca mayores o menores dimensiones, según el actor que lo valore (y la valoración que se haga) y el momento histórico y cultural que se viva. El riesgo pues, podría entenderse como la probabilidad de que ocurra algo no deseado, es decir, una consecuencia negativa (que podría entorpecer el desarrollo psicosocial normalizado) a partir de una situación que se busca intencionadamente; incluye elementos como la incertidumbre, el dilema o el desconcierto.

La búsqueda de identidad personal, la incertidumbre ante el futuro y la falta de planificación, pueden llevar al adolescente a explorar gratificaciones más inmediatas, sin tener en cuenta otras consecuencias, favoreciendo el incremento de conductas de riesgo (Gardner, 1993). En cualquier caso, para comprender las conductas de riesgo en esta etapa es necesario tener en cuenta que no acontecen de forma gratuita, sino que responden a funciones psicológicas y sociales, en sí mismas o a falta de otros recursos. Entre dichas funciones cabe destacar la integración en el grupo de compañeros, la reducción del estrés y de la incertidumbre sobre la propia identidad, la búsqueda de experiencias de poder y de protagonismo social, el logro de la autonomía respecto a los progenitores, la explicitación del rechazo de las normas y valores de la autoridad y la materialización del tránsito de la infancia al estatus de adulto (Díaz-Aguado, 1996; Jessor, 1992). Todos estos elementos de funcionalidad se completan con el hecho de que la asunción de estas formas de comportamiento proporciona al adolescente unas vivencias de estímulo, que compensan los elementos de ansiedad derivados de la conciencia de que debe protegerse más, debido a su falta de experiencia vital, así como a la carencia de estrategias adecuadas de afrontamiento (Apter, 1992).

Los factores relacionados con la participación y la presencia activa de los adolescentes en actividades de ocio, deberán ser el marco de referencia para la articulación de prácticas

educativos en los espacios de socialización que a su vez favorezcan el intercambio, la conexión hacia nuevos y atractivos retos tratando de lograr además, que los espacios lúdicos sirvan de instrumento para la inclusión social (Navarro et al. 2013).

En este sentido, Fernández (2009) señala que la participación tiene que ver con el ejercicio de la palabra y la posibilidad de los adolescentes de actuar en todas aquellas áreas de su vida cotidiana que son de su interés. Así, desde la infancia, los niños inician en el entrenamiento de los afectos en combinación con los elementos propios de lo lúdico; ambas dimensiones potenciarán otras esferas que conformarán la personalidad del adolescente (Úcar, 2001). Razón principal por la que se entiende prioritaria la gestión constructivo-educativa de los espacios de ocio, articulando para ello nuevas y atractivas vías para la inclusión social del adolescente.

En la sociedad postmoderna, la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión alcanzan a sectores más amplios de la sociedad; los riesgos se han ampliado y diversificado haciéndonos más vulnerables en extensión e intensidad. Castel (1997) señala que la sociedad actual se caracteriza por la consolidación de una extensa zona de vulnerabilidad antesala de la exclusión. El reto es comprender cómo la creciente vulnerabilidad y exclusión social afecta a los adolescentes y a su proyección de futuro. En este sentido, los factores de vulnerabilidad están más relacionados con las actividades vinculadas a las causas que generan el riesgo en los adolescentes (carecer de actividades inclusivas durante los procesos absentistas o de ausencia escolar), que con el riesgo o actividad desviada en sí misma (absentismo escolar). Zarzuri (2000) revela que los factores de vulnerabilidad en los adolescentes están más relacionados con las contingencias vinculadas a las causas que generan el riesgo (residir en un barrio con elevada tasa de paro y ociosidad), que con el riesgo en sí mismo (el paro/la ociosidad). Desde esta perspectiva, el tiempo de exposición al riesgo configurará el grado de vulnerabilidad al que se ha sometido un individuo, sobre el que la exclusión diseñará su particular plan de desgaste.

Pues bien, este análisis de la relación entre el adolescente o joven y las diferentes situaciones de riesgo con las que se tropieza, puede realizarse desde una doble vertiente, tal como han apuntado diferentes autores. Desde un punto de vista desadaptativo o negativo, podría percibirse un adolescente inmerso en una maraña de comportamientos (consumo de drogas, violencia, relaciones sexuales inadecuadas, así como trasgresión de normas sociales que podrían llegar a ser conductas antisociales que le vinculen con el sistema de justicia) que

le irán alejando cada vez más de sus objetivos personales y de los valores sociales; sobre todo, por la búsqueda de sensaciones y experiencias novedosas, por la falta de sistemas de protección y por la búsqueda de gratificaciones inmediatas, todas ellas características propias de este periodo. Desde una vertiente positiva la aceptación de riesgos puede favorecer la interacción con el medio, proporcionando entornos menos endogámicos que los familiares, necesarios para la construcción de la identidad y autonomía personales. La postura excesivamente conservadora, que enfatiza la evitación de riesgos, puede acarrear un desarrollo deficitario en estas áreas, además de reducir la tolerancia al estrés o dificultar la integración, limitando el repertorio personal de estrategias adecuadas para hacer frente a estas situaciones (Oliva y Acevedo, 2005).

La conciencia de este dilema permite analizar el riesgo como una realidad que no se puede negar y posibilita establecer unas mejores condiciones para que los adolescentes puedan gestionar las amenazas, integrándolas como parte necesaria de su crecimiento. Luhmann (1998), estableció un dilema entre el precaucionismo y la negociación democrática de los riesgos, para el que, en el caso de adolescentes y jóvenes, es fundamental tener en cuenta la perspectiva de “selección” de riesgos, que no necesariamente determina un único itinerario personal sino que más bien contrapone, en cada situación, que elección concreta, de entre los diferentes riesgos posibles, es la más acorde a las necesidades inmediatas. Y es ahí, donde los programas de prevención y tratamiento deberán incidir (Ballesteros et al., 2009).

Asimismo, y a modo de ejemplo, los daños conocidos de consumir alcohol y sustancias psicoactivas durante el tiempo de ocio de una determinada manera se contraponen a los daños conocidos de no participar de los escenarios y tiempos de intercambio social e identitario que se esperan (como prescripción social) de los jóvenes en nuestra sociedad. En esa situación, cada menor/joven opta por uno de esos dos riesgos, y lo hace desde un discurso particular y subjetivo (Megías y Elzo, 2006).

La acción de la justicia penal de menores se articula sobre las conductas desviadas de los adolescentes, configurando pues un importante termómetro de la situación social que atraviesan y de las políticas que tratan de prevenir y controlar estas acciones que truncan el desarrollo ajustado de los adolescentes (Navarro et al., 2013). El uso del tiempo de ocio, es fundamental para la socialización de los adolescentes, ya se encuentren en conflicto con la ley o no. Asimismo es un espacio educativo, preventivo y generador de identidad, y en nuestra sociedad se puede afirmar también que de ciudadanía (Savater, 1997; Pérez y Uceda, 2009).

El ocio como construcción social, es fundamental en la socialización y en el binomio integración-vulnerabilidad forma parte de los derechos humanos individuales y colectivos, y concebido como una práctica individual y colectiva articulada a modo de capital social que se inscribe en las biografías de los sujetos y en sus vidas en común (Navarro et al., 2013).

En este contexto, Cuenca (2004) señala que el disfrute y el ejercicio del ocio, sea a nivel personal o comunitario, no depende tan sólo del hecho de disponer de tiempo y de recursos sino, y de un modo especial, de la percepción y actitud que se tiene sobre el mismo; así pues, la gestión del ocio por los propios adolescentes a través de redes estables de relación, constituye un proceso que pondera más si cabe la diversión y el desarrollo madurativo en clave positiva.

En este sentido, Lévesque y Robert (2008) plantean que los adolescentes que planifican su tiempo libre a través de grupos no consolidados, asumen un riesgo adicional atendiendo a los diferentes niveles entornos requeridos para cimentar la relación. Por el contrario, en espacios seguros, comprometidos y autogobernados por ellos, los propios adolescentes aprenden a ganar, a perder, a compartir, a implicarse, a asumir tareas individuales y de grupo, en una palabra, los espacios de ocio que han sido creados por grupos consistentes de adolescentes permiten autogestión de sus dinámicas y que después estas puedan verse reflejadas en otras esferas; los lazos de amistad, la reciprocidad, la lealtad a los acuerdos, la articulación de normas constituyen interesantes respuestas que el marco del ocio permite entrenar.

Las buenas prácticas (ocio activo, constructivo, creativo, lúdico, participativo, experiencial, etc.), todavía van de la mano de los contratiempos que también el ocio evoca en nuestras sociedades, confundiéndolo con ociosidad, banalidad, consumismo, vagancia, pereza, indolencia, etc. De este modo, las malas prácticas que los adolescentes vinculan a los tiempos de ocio (Caballo, Caride y Meira, 2011). El problema de convertir el ocio en una rutina, supone que todo el tiempo, se convierte en tiempo libre, en que lo anodino se hace habitual y donde los espacios de ocio quedan subyugados a las inercias del tiempo. Esto supone iniciar la espiral de riesgo a través del mismo ocio, lo que nos lleva a la conclusión de que esta banalización del ocio o infrautilización del tiempo libre, viene determinado básicamente por cuatro elementos: 1) Las situaciones marcadas por la ausencia de intercambio relacional (siempre los mismos, en el mismo sitio y haciendo las mismas cosas); 2) La disminución de los estímulos positivos y motivadores (contacto limitado a lo inmediato, pasivo e inamovible);

3) Rechazo al ambiente educativo, ya que por norma general este incita a la movilización y 4) Ausencia de identificación con ambientes normalizados sobre los que poder articular dinámicas de relación positiva (Navarro et al., 2013).

De tal manera, también se podría señalar que el ocio puede jugar un factor de protección frente al desarrollo de conductas desviadas como la delincuencia juvenil o representar en sí mismo un componente aditivo, un factor de riesgo más, atendiendo a la investigación de Catalano y Hawkins (1996) en la que se señalan que las conductas desviadas se producen por la abundancia de factores de riesgo sin que existan factores de protección que ejerzan un influjo de compensación.

5.3. Principales enfoques teóricos que relacionan variables relativas al ocio y conducta delictiva

Larson y Verma (1999), en un estudio internacional sobre la gestión del tiempo libre de los jóvenes señalan que en los países occidentales una gran parte de ese tiempo los jóvenes lo dedica a ver la televisión o chatear con los amigos, pero también hay muchos jóvenes que se dedican a actividades estructuradas como hacer parte de una asociación cultural o deportiva. En general, estos autores encontraron que durante la adolescencia el tiempo pasado con los padres disminuye y el que se pasa con los amigos aumenta hasta ocupar una cuarta parte del tiempo libre del que dispone el joven. El conjunto de la vida social de los jóvenes está así principalmente relacionada con las actividades llevadas a cabo con los amigos y son precisamente estas actividades las que se analizaron en la presente investigación.

El tiempo libre puede ser considerado como un arma de doble filo, por un lado, en ausencia de supervisión, o de encuadramiento el adolescente dejado a sí mismo, corre un riesgo mayor de tener problemas de comportamiento incluida la delincuencia. De otro lado, si hay un esfuerzo conjunto para hacer que la recreación tenga un propósito constructivo para el individuo, el tiempo libre podría convertirse en un factor decisivo y favorecer el desarrollo en el adolescente de actitudes y valores compartidos por la sociedad (Giorgi, 2012).

Dado que en otros apartados del presente trabajo ya que ha expuesto una base teórica, en este apartado se realizará un breve resumen concretando lo que dichas teorías revelan

acerca de la influencia del ocio adolescente y variables relacionadas con el mismo en la conducta delictiva.

5.3.1. Las teorías de la socialización

5.3.1.1. La teoría de la Asociación Diferencial

La teoría de la asociación diferencial explica la conducta delictiva a través de la influencia de algunos hechos o eventos del pasado sobre la vida del delincuente (Sutherland y Cressey, 1966). Este enfoque en su versión final, se compone de nueve proposiciones, de las cuales tres son las más destacables de cara al tema que nos ocupa (Killias, 2001). Esta teoría explica que el comportamiento criminal se aprende (primera proposición) mediante un proceso de comunicación con otras personas (segunda proposición) y que este tipo de formación criminal se lleva a cabo mediante el aprendizaje de técnicas y actitudes criminales (octava proposición). Esto se hace a menudo en compañía de un grupo, donde los intercambios y las relaciones personales se supone son más bien íntimos. Es por ello, y de acuerdo con esta teoría que la pertenencia a un grupo delictivo constituye un factor determinante que influye en el grado de delincuencia del individuo, así como la duración, la intensidad y la frecuencia de contactos con modelos delincuentes refuerzan la tendencia al delito de la persona.

En esta perspectiva, las actividades recreativas, especialmente aquellas que se practican con el grupo de pares y sin supervisión, constituyen una fuente de peligro. Es en efecto, en tales circunstancias que el joven puede ser influenciado por los comportamientos delictivos del grupo de pares que él frecuenta, o puede llegar a conocer jóvenes delincuentes.

5.3.1.2. La teoría del Aprendizaje Social

La teoría más ampliamente aceptada en el campo de la criminología, como ya se ha comentado con anterioridad en el presente trabajo, es la del aprendizaje social, desarrollada por Burgess y Akers (1966) y teorizada posteriormente por Akers (1977). Este enfoque agrega al concepto de asociación diferencial otros elementos para explicar la conducta criminal. Según esta teoría, la probabilidad de que una persona se encamine hacia la delincuencia depende de la asociación con otros delincuentes (asociación diferencial), de los refuerzos/castigos que la persona ha sufrido o que espera recibir como respuesta a su

comportamiento (reforzamiento diferencial), de la exposición a modelos criminal/desviados (imitación) y de los valores favorable/desfavorable del individuo en relación con la noción de delito (definición).

El adolescente aprende estos conceptos en su entorno. Por tanto, es posible que el hecho de pasar tiempo realizando algunas actividades con sus padres pueda reforzar en el joven su conducta conforme a las normas, esto, gracias a la exposición a modelos y definiciones contrarios a la delincuencia. En cambio, ciertas actividades de ocio practicadas con su grupo de pares, sobre todo cuando éstas son poco estructuradas y/o sin supervisión de los adultos, ofrecen la oportunidad de estar expuestos a modelos criminales y a personas que valoran favorablemente la delincuencia. En tales situaciones, el comportamiento criminal del individuo se verá reforzado (Giorgi, 2012).

5.3.1.3. La teoría del Control Social

Hirschi (1969) publicó la versión más conocida de la teoría del control social. Esta teoría trata de explicar la delincuencia juvenil en función de las relaciones o lazos entre el individuo y la sociedad. En esta perspectiva, Hirschi (1969) se desliga de otras teorías criminológicas, y en lugar de preguntarse por qué la gente toma el camino de la delincuencia, él se plantea la cuestión de por qué las personas respetan las normas y las convenciones sociales (Junger-Tas y Block, 1988). Si bien, esta teoría se basa en que la respuesta está en el control social implementado sobre el individuo. Este es un control que se ejerce por la existencia de normas y valores compartidos dentro de la comunidad, que deben acatarse con el fin de integrarse en la sociedad. Por lo tanto, la tendencia a la delincuencia estará pues influenciada por el “*social bond*”, o vínculo social entre el individuo y la sociedad del cual Hirschi (1969) identifica cuatro dimensiones principales:

- 1) *El apego del individuo a las personas que le son importantes* (padres, amigos, profesores) constituye un freno, ya que los jóvenes, para no decepcionarlos prestará atención a cómo se comporta.
- 2) *El apego actual o previsto en actividades convencionales* (en la escuela, el trabajo) limita la tendencia a la delincuencia, pues el adolescente, con el fin de mantener el rol que ha adquirido o de realizar sus objetivos, evita tener una conducta desviada.
- 3) *La implicación en actividades convencionales* (en la escuela, el club deportivo o cultural) tiene la ventaja de ocupar el tiempo y la energía del adolescente, en

consecuencia reduce el número de posibilidades de tener un comportamiento desviado.

- 4) *Las convicciones favorables a las normas existentes en la sociedad* constituyen otro factor que impulsa al individuo a comportarse de acuerdo con lo establecido.

Por tanto, las actividades recreativas tienen un impacto sobre cada una de estas dimensiones. Por ejemplo, las actividades llevadas a cabo con los padres (ir al cine, teatro, etc.) pueden fortalecer en el adolescente el apego a los padres. El hecho de realizar las tareas o deberes escolares le permite comprometerse e involucrarse en actividades convencionales, y más aún realizar deporte tiene el poder de fortalecer valores como la perseverancia, la cooperación o conformidad en el individuo (Giorgi, 2012).

5.3.2. Las teorías de las Ocasiones u Oportunidades

Las teorías tomadas en consideración precedentemente se focalizan todas en el individuo y las causas profundas que estimulan la tendencia a la delincuencia. Estas teorías ven la solución del problema en el cambio de las estructuras sociales (familia, grupo de amigos, formación) que forman el carácter de la persona. La teoría de las oportunidades introduce un enfoque alternativo, que tiene en cuenta el papel desempeñado por la situación en el surgimiento de la propensión a la delincuencia (Giorgi, 2012).

La idea de delito como producto de la situación no es nueva, pero no fue hasta la década de 1970 que las dos teorías principales de este enfoque surgen. El *lifestyle model* de Hindelang, Gottfredson y Garofalo (1978) relaciona el modo de vida con el riesgo de ser victimizado, y en este sentido, las personas más victimizadas son los hombres jóvenes, quienes pasando mucho tiempo fuera de la casa en las zonas sensibles de la ciudad y clubes nocturnos, tienen más oportunidades de encontrarse con delincuentes (Killias, 2001). En general, la *routine activity approach* de Cohen y Felson (1979) explica las variaciones en las tasas de criminalidad por los cambios en las actividades de rutina de las personas. El éxito de un acto criminal dependerá de la convergencia en el tiempo y en el espacio de tres componentes: un autor motivado, un objetivo atractivo y la ausencia de un guardián que lo proteja.

Osgood, Wilson, O'Malley, Bahman y Johnston (1996) extienden esta teoría a las actividades de ocio. En esta perspectiva, algunas de las actividades practicadas con los pares o compañeros, especialmente las que se desarrollan sin supervisión ni estructura (andar por las calles, ir a discotecas o conciertos nocturnos), son susceptibles de reforzar la tendencia al

comportamiento criminal, y esto incluso en los casos en que el propósito en sí mismo de la actividad no es desviado.

5.3.3. La teoría de la Acción Situacional

Una visión alternativa en la explicación de la criminalidad es proporcionada por la teoría de la acción situacional de Wikström (2004), quien integra dentro del mismo marco teórico el enfoque individual y del entorno. Esta teoría considera que el comportamiento criminal es el resultado de la interacción entre la tendencia a la delincuencia de la persona y las características del contexto ambiental. A nivel individual, la tendencia a la delincuencia está determinada por la moralidad (valores y emociones) del individuo, lo que influye la percepción de la delincuencia como acción alternativa, así como su capacidad para ejercer el autocontrol, lo cual tiene un efecto sobre la capacidad de resistirse a la tentación de cometer actos delictivos. En el ámbito del entorno, el factor decisivo está representado por el contexto moral de la situación, que influye en el comportamiento del individuo, proporcionándole diversos motivadores y tentaciones (Svenson y PauWels, 2008; Wikström, 2008).

Desde este punto de vista, el tiempo que pasa el joven adolescente con su grupo de pares realizando actividades no estructuradas constituye el contexto que genera el mayor riesgo (Agnew y Petersen, 1989; Osgood et al., 1996), pero este elemento no es en sí mismo suficiente para que la conducta criminal surja. En efecto, de acuerdo con la teoría de la acción situacional, la exposición a un medio ambiente criminógeno influye en la implicación en conductas delictivas solamente entre los jóvenes que tienen ya una tendencia a la delincuencia.

A continuación, y al hilo de lo anterior, se exponen factores de riesgo tanto personales, como sociales que la literatura científica especializada ha estimado que su presencia se relaciona con el aumento de la probabilidad de cometer conductas delictivas, así como un estilo de vida antisocial.

5.4. Factores de riesgo asociados a la delincuencia juvenil que a su vez tienen que ver con el ocio de riesgo

Es necesario destacar que la conducta delictiva, puede verse desencadenada por multitud de factores, subrayándose así, su multicausalidad. El menor vive en una situación determinada. Por tanto, menor y situación no se pueden separar, es necesario contemplarlos en conjunto. La respuesta del menor está en función de la situación que está viviendo y esa misma situación, con sus peculiaridades, va a determinar, en mayor o menor medida, su respuesta (Peña, 2005). De este modo, el menor siempre va a responder de una manera que él considere adaptativa; es decir, el menor va a intentar, mediante su respuesta al medio, conseguir el fin que se propone. En este sentido, no importa de qué tipo sea tal respuesta (legal, ilegal, normal o antisocial (Cerón, 2013).

Mischel (1980) señala que lo que una persona hace no puede aislarse significativamente de las condiciones en las que lo hace. De este modo, las variables situacionales o ambientales no tienen por qué ser iguales o tener la misma influencia en los menores, por tanto hablaremos de factores de riesgo, en lugar de establecer variables causales al comportamiento delictivo. Así, para Berkowitz (1996), un factor de riesgo es una condición que aumenta la probabilidad de la ocurrencia de acciones agresivas, aunque no de forma invariable. Loeber (1990), por otra parte, conceptualiza estos factores como eventos que ocurren con anterioridad al inicio del problema y que predicen el resultado posterior, incrementando la probabilidad de su ocurrencia por encima de los índices básicos de la población. Esta perspectiva, es la que a juicio de Berkowitz (1996), debería adoptarse al considerar todas las condiciones que pueden promover la conducta antisocial y delictiva en jóvenes y adolescentes.

En términos más específicos, un factor de riesgo es un atributo y/o característica individual, condición situacional y/o contexto ambiental que incrementa la probabilidad de que el menor realice conductas delictivas (inicio), así como una transición en el nivel de implicación de las mismas (mantenimiento). Por el contrario, también cabe mencionar que un factor de protección es un atributo y/o característica individual, condición situacional y/o contexto ambiental que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad de la comisión de conductas delictivas (inicio) o la transición en la implicación de las mismas (mantenimiento) (Muñoz-Rivas, De Lucas y Graña, 2007).

A la hora de estudiar ambos factores es necesario tener en cuenta que, en la mayor parte de las ocasiones, se hablará siempre de los mismos constructos pero en dimensiones o polos opuestos. Es decir, si un individuo se expone a múltiples factores de riesgo, mayor será la probabilidad de que realice conductas desviadas con la norma social. Ahora bien, del mismo modo que la exposición a estos factores facilita el inicio y/o mantenimiento de dichas conductas, la exposición a otros o, lo que es más importante, a los mismos predeterminantes de la conducta, pero en dimensión distinta (polo opuesto del constructo), puede llegar a protegerle reduciendo la probabilidad de que realice y/o mantenga conductas delictivas. Así, un mismo factor (por ejemplo actitud familiar ante conductas antisociales) situado en un extremo de la escala puede reflejar un alto riesgo para el inicio/mantenimiento de conductas antisociales (en el mismo ejemplo, una actitud permisiva, sin normas, ni límites) mientras que, en el otro extremo (actitud explícita de oposición a conductas delictivas) puede señalar una alta protección contra el mismo (Muñoz-Rivas et al. 2007).

A pesar de tener en cuenta estos aspectos, la complejidad del estudio parte de la realidad de que la mayor parte de los individuos se sitúan en la mitad de la escala, sin estar en una clara y estable condición de alto riesgo ni de protección, por lo que se ven afectados por distintos factores al mismo tiempo y, dentro de un mismo factor, pueden oscilar de un extremo a otro de influencia dependiendo de su relación con el resto de los predeterminantes y de sus características relacionales (Muñoz-Rivas et al, 2007).

Todos los aspectos planteados nos recuerdan que además de conocer la tipología de los factores que analizamos también es necesario tener presente la dificultad de considerarlos de forma aislada sin tener clara la existencia de importantes relaciones de carácter dinámico y recíproco que se establecen entre sus propios componentes y, sobre todo, entre ellos mismos y el inicio/mantenimiento de una trayectoria delictiva. Por todo lo expuesto, la comprensión de la función de este tipo de factores debe ser planteada desde un marco dinámico, considerándose, a modo de resumen, los siguientes principios fundamentales (Muñoz-Rivas et al., 2007):

- a) Los factores de riesgo (características individuales o condiciones ambientales) pueden estar presentes o no en un caso concreto. Cuando un factor de riesgo está presente, es más probable que la persona realice conductas delictivas.

- b) La presencia de un solo factor de riesgo no es garantía para que vaya a producirse el inicio de una carrera delictiva, y por el contrario, la ausencia del mismo no garantiza que no se produzca. Lo mismo sucede en el caso de los factores de protección.
- c) El número de factores de riesgo presentes está directamente relacionado con la probabilidad de cometer conductas delictivas aunque este efecto sumatorio puede atenuarse según la naturaleza y contenido de los mismos.
- d) La mayoría de los factores de riesgo y de protección tienen múltiples dimensiones medibles y cada uno de ellos influye de forma independiente y global en la conducta delictiva.
- e) Las intervenciones directas son posibles en el caso de algunos de los factores detectados y pueden tener como resultado la eliminación o reducción de los mismos, disminuyendo la probabilidad de emisión de conductas delictivas. Por el contrario, en el caso de otros factores de riesgo, la intervención directa no es posible, siendo el objetivo principal atenuar su influencia y, así, reducir al máximo las posibilidades de que éstos lleven a cabo conductas delictivas.

Por tanto, cabe destacar que, que un menor presente factores de riesgo, no implica que necesariamente vaya a cometer infracciones, sino que dichos factores, van a aumentar su probabilidad de llevar a cabo dichas conductas. Por otro lado, dichos factores, como hemos visto anteriormente, no son estáticos, sino que se relacionan e influyen recíprocamente. De este modo, los factores de riesgo no actúan de manera independiente, sino que tienden a asociarse y/o determinarse, pudiendo disponer al menor de un patrón conductual determinado en determinadas situaciones. Por otro lado, algunos estudios han mostrado que la suma de varios factores de riesgo no produce efectos puramente aditivos. Así, aunque la literatura científica avala la existencia de modelos aditivos/acumulativos de factores de riesgo de la delincuencia, esto sería muy válido en cuanto a la evaluación de los mismos, pero hay que tener en cuenta que estos factores de riesgo producen interacciones entre ellos de modo que el riesgo no es simplemente la suma de estos factores, sobre todo de cara al tratamiento y el seguimiento del mismo.

Tal y como se acaba de señalar, los factores de riesgo no son entidades que actúen aisladamente determinando unívocamente unas conductas que al interrelacionarse, predicen tendencias generales de actuación (Peña, 2005). Esto implica que para la exposición de los principales factores de riesgo que determinan la comisión de conductas antisociales, se alude

a clasificarlos, seleccionando para el presente trabajo aquellos que tienen que ver o influyen en el contexto de ocio, ya sea de manera directa o indirecta. Es decir, se tendrán en cuenta no sólo variables relacionadas de manera exclusiva con el ocio y tiempo libre, (por ejemplo el contexto o grupo en el que se desarrolla, nivel de estructuración del tiempo libre), sino variables de personalidad que se entiende también influyen en la preferencia y elección de actividades llevadas a cabo en el ocio (por ejemplo, impulsividad, agresividad, búsqueda de sensaciones), y por consiguiente, determinarán si dichas conductas lo sitúan en el polo prosocial o antisocial, así como el tipo de consecuencias que conlleva, las cuales podrían relacionarle con el sistema de justicia. Si bien, se expondrá a continuación una clasificación que atiende a: 1) factores individuales, 2) factores de socialización.

5.4.1. Factores de riesgo individuales

Entre los factores de riesgo individuales se van a tener en cuenta aquellas variables de personalidad y de conducta de cada individuo y no compartidas por un mismo entorno ni por todas las familias. De este modo, características como los niveles de impulsividad, la desinhibición, el consumo de sustancias psicoactivas son relevantes a la hora de ofrecer una explicación sobre cómo funciona y se modula el comportamiento antisocial. Según diversos autores (Farrington, Loeber y Van Kammen, 1990; López y López, 2003) existe una asociación entre determinados rasgos de personalidad y el comportamiento desajustado de la norma social.

De este modo, encontramos una gran variedad de variables individuales que actuarían como factores de riesgo de la conducta delictiva. Así, existe un cuerpo de investigación (Arce, Fariña, Novo, Seijo y Vázquez, 2003; Cava y Musitu, 2001; Garrido y López-Latorre, 1995) que ha encontrado correlación positiva entre diversas variables individuales (por ejemplo, nivel intelectual, locus de control, autoestima, baja tolerancia a la frustración, egocentrismo, socialización, fracaso escolar) y la presentación de conducta antisocial. Además, también apuntan a otros factores de riesgo asociados al menor como la edad, y el género, el temperamento, o la presencia de patologías.

5.4.1.1. Impulsividad

Eysenck y Eysench (1978) relacionaron la impulsividad con su teoría de los tres superrasgos de personalidad: extraversión, neuroticismo y psicoticismo. La impulsividad, en una definición amplia (impulsividad como asunción de riesgos, no planificación e irreflexión)

correlacionaría positivamente con la extraversión y psicoticismo mientras que, la impulsividad en una definición más restringida correlacionaría positivamente con el neuroticismo y el psicoticismo. En un sentido amplio de la definición de impulsividad ésta correlacionaría con la delincuencia. Sin embargo, las predicciones son matizables en cuanto a que los autores admiten que el término psicoticismo usado por ellos no se corresponde con el contenido general del concepto. Existen estudios al respecto que parecen constatar que la impulsividad presenta una relación más potente con el neuroticismo que con la extraversión (Romero, Luengo, Carrillo y Otero, 1994c; Schweizer, 2002). Eysenck y Schoenthaler (1997), señalan que la impulsividad está relacionada con las conductas de riesgo y la falta de planificación.

Whiteside y Lynam (2001) identificaron cuatro facetas de la personalidad concebida como vías para acceder a un comportamiento impulsivo. El primer aspecto, la urgencia, se refiere a la tendencia a experimentar un fuerte impulso, con frecuencia, en condiciones de afecto negativo. La segunda faceta, la falta de premeditación, se refiere a la tendencia a pensar y reflexionar sobre las consecuencias de un acto antes de participar en ese acto. La tercera faceta, la falta de perseverancia, se entiende como la capacidad de permanecer concentrado en una tarea que pueda ser aburrida o difícil. Por último, la cuarta faceta, la búsqueda de sensaciones, se concibe como una tendencia a disfrutar y realizar actividades que son emocionantes y tener una actitud abierta a probar nuevas experiencias.

A su vez, Whiteside y Lynam (2001), señalan que la impulsividad es un término genérico artificial que en realidad abarca cuatro aspectos distintos de la personalidad, sugiriendo además que las diversas formas de comportamiento impulsivo están asociadas con las distintas formas de psicopatología. Por ejemplo, la falta de capacidad para permanecer en su tarea a pesar del aburrimiento, podría estar relacionado con los problemas de falta de atención que están en el centro del Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), la búsqueda de sensaciones podría estar relacionado con la participación en actividades interesantes pero peligrosas, como el abuso de sustancias y la falta de premeditación podría conducir a problemas psiquiátricos, como trastorno antisocial de la personalidad y la psicopatía.

Caspi et al. (1994), en un estudio con doble muestreo para varones y mujeres, asociaban la delincuencia a un débil autocontrol o a una elevada impulsividad, así como a una emotividad negativa (tendencia a estar enojado, ansioso o irritable). Tremblay, Pihl, Vitaro y

Dobkin (1994) demostraron la relación existente entre la impulsividad mostrada por los niños en el jardín de infancia y su posterior predicción de la delincuencia a los 13 años. White et al. (1994) encontraron que la impulsividad conductual era un predictor de la delincuencia más fuerte que la impulsividad cognitiva. Así, Krueger, Caspi, Moffit y White (1996) encontraron que los niños que manifiestan dificultades para retrasar las satisfacciones o bajo autocontrol a la edad de 12 años, se asociaba a la presencia de conductas antisociales y no con dificultades emocionales. Stuewing (2001) encuentra que la impulsividad está relacionada con la conducta antisocial junto con otros factores como la búsqueda de sensaciones, el temperamento, logro académico y uso de sustancias por parte de los pares, de tal forma que, de sus modificaciones dependerá de que dicha conducta desista o persista en el tiempo. De esta forma, la impulsividad incrementaría la probabilidad de aparición de conductas antisociales, siendo considerada como uno de los factores de riesgo más potentes de tales conductas (Huang et al., 2001; Patterson, 1992).

Los estudios para los que se ha utilizado muestra española también confirman dicha relación. Así, Sobral, Gómez-Fraguela, Romero, y Luengo (2000) confirman en un estudio como la impulsividad se muestra como una variable de suma importancia en la explicación de la conducta antisocial. Pero además, encuentran como puede potenciar los efectos de una serie de factores de riesgo cuando se asocia a ellos, como bajo apoyo parental y apego escolar, pertenencia a grupos desviados, y en el caso de las chicas, déficits socioeconómicos. También encuentran como los varones presentan mayores niveles de impulsividad y, por tanto, de conducta antisocial. De la misma forma, Mestre, Samper y Frías (2002) encontraron en una muestra de adolescentes que aquellos que eran más impulsivos e inestables emocionalmente, eran los más propensos a emitir comportamientos agresivos y antisociales. A resultados similares han llegado Gaigordobil, Álvarez y Carralero (2004) en una muestra infantil de 10 a 12 años.

Luengo, Romero, Gómez-Fraguela, Guerra y Lence (2002) señalan que la impulsividad aparece asociada a otra serie de variables que potencian su poder predictivo sobre la conducta antisocial. Por un lado, estos jóvenes impulsivos presentan dificultades en la resolución de problemas y la toma de decisiones, en la demora de la gratificación y en tener una perspectiva temporal a largo plazo que les ayudaría a prestar atención a las consecuencias de sus conductas. De la misma forma Schweizer (2002) ha encontrado pruebas que demuestran que la impulsividad correlaciona negativamente con el razonamiento, por lo que

dichas dificultades pondrían al adolescente en riesgo de implicarse en conductas problemáticas.

En conclusión, según la literatura científica, la impulsividad es considerada como uno de los factores de riesgo más potentes de la delincuencia (Huang et al., 2001; Patterson, 1992). Si bien la investigación muestra en ocasiones resultados contradictorios en cuanto la relación entre impulsividad y delincuencia, ello sería consecuencia de los diferentes conceptualizaciones e instrumentos para medir dicho constructo (Rutter et al, 2000). A pesar de dicha confusión conceptual, hay una serie de aspectos que caracterizan a la impulsividad, como son dificultades para demorar las gratificaciones, un estilo rápido y falto de meditación en la toma de decisiones, dificultades para considerar las consecuencias de la propia conducta así como una incapacidad para ejercer un autocontrol sobre el propio comportamiento (McCown y De Simone, 1993; citado en Peña, 2005).

5.4.1.2. Empatía

En la literatura científica existe un amplio consenso sobre la empatía como una respuesta afectiva afectiva congruente con las emociones de otros o situaciones de la vida (Hoffman, 1987), que involucra el esfuerzo mental activo para comprender las experiencias y las perspectivas de otras personas (Wispé, 1986).

La empatía como respuesta cognitiva y afectiva es una de las variables individuales más importantes en el contexto del comportamiento social (Cronbach, 1955; Zahn-Waxler y Radke-Yarrow, 1990; Wispé, 1986). La empatía se trata, como condición previa para el desarrollo de la justicia, el juicio moral y el comportamiento altruista (Hoffman, 1990).

Dentro de este constructo se puede distinguir dos aspectos: a) por un lado, se podría hacer referencia a una empatía más cognitiva, la cual abarcaría la comprensión del estado emocional del otro (Eisenberg et al., 1996) y b) una empatía afectiva, la cual viene definida como la capacidad para “sentir” los afectos de los demás (Calvo, González y Martorell, 2001). Diversas investigaciones con jóvenes delincuentes han mostrado que éstos presentan ciertos déficits a la hora de identificar y comprender los estados internos de los otros (pensamientos, perspectivas, sentimientos) (Bandura, Barbarelli, Caprara y Pastorelli, 1996; Garaigordobil et al., 2004).

De este modo, se han llevado a cabo muchas investigaciones con respecto a la interrelación entre empatía, conducta agresiva, desviada o delictiva, considerando que una

mayor empatía se asocia con una mayor habilidad para el comportamiento prosocial (Batson, Fultz, y Schoenrade, 1987; Eisenberg, 2000), el déficit en la empatía estaría vinculado a diversos problemas de adaptación social, como comportamiento agresivo, un menor autocontrol y el egocentrismo (Ellis, 1982; Miller y Eisenberg, 1988). Otros estudios revelaron que una menor capacidad de empatía y un desconocimiento de las señales afectivas de los demás se presentan en personas con trastorno de personalidad antisocial (Blair et al., 1996; Bootzin, Acocella y Alloy, 1993).

En cuanto a la conducta delictiva, estos presentan ciertos déficits a la hora de identificar y comprender las reacciones emocionales de sus víctimas, una empatía alta debe contrarrestar los comportamientos agresivos (Feshbach, 1975). En el estudio de meta-análisis de Jolliffe y Farrington (2004), detectaron niveles menores de empatía en el grupo de delincuentes. Por tanto, la falta de empatía ha sido reconocida como un factor de riesgo fundamental en los problemas de conducta antisocial (Eisenberg, 2000; Gibbs, 2010; Hoffman, 2000; Narvaez y Rest, 1995; Staub, 1995).

5.4.1.3. Autoestima y autoconcepto

Una de las conceptualizaciones más utilizadas de la autoestima, la define como la evaluación que realiza un individuo sobre el concepto de sí mismo en las diferentes áreas que implica la competencia, el logro y el juicio de valor propio (Guindon, 2010).

Las conclusiones sobre la relación entre autoestima y conducta antisocial que ofrece la literatura científica son contradictorias, variando según utilizan el término de autoestima global o multidimensional. Por otro lado, algunos autores consideran que la autoestima social y física también son protectoras frente al desarrollo de problemas comportamentales (Lau y Leung, 1992; Levy, 1997), mientras que otros han señalado que constituyen un factor de riesgo para problemas como comportamientos agresivos y consumo de sustancias tóxicas (Musitu, Jiménez y Murgui, 2007). Otros estudios apuntan en esta última dirección y señalan que los adolescentes con comportamientos antisociales tienden a sobrevalorarse en los dominios sociales, sobrevaloran su capacidad para hacer amigos y su aceptación en el grupo de pares (Baumeister, Bushman y Campbell, 2000; Brendgen, Vitaro, Turgeon y Poulin, 2002) y físico, se autoevalúan muy positivamente en fortaleza y apariencia física (O'Moore y Kirkham, 2001; Salmivalli, 1998).

Otros estudios han señalado que una autoestima demasiado elevada conlleva expectativas poco realistas de uno mismo, las cuales pueden estar en el origen de sentimientos

depresivo y comportamientos agresivos (Baumeister et al., 2000; Brendgen, Vitaro, Turgeon, Poulin y Wanner, 2004). Además, en el caso de la delincuencia, parece que los adolescentes implicados en tales comportamientos no presentan consistentemente una autoestima más baja que los no implicados (Thornberry, 2004). Aunque otros investigadores han argumentado que los individuos con baja autoestima tienen predisposición a los problemas de externalización como la delincuencia o conducta antisocial (Fergusson y Horwood, 2002; Sprott y Doob, 2000).

Más específicamente, Tracy y Robins (2003) sugieren que los sentimientos de inferioridad y vergüenza conducen a sentimientos de ira y hostilidad hacia otras personas, coincidiendo con lo que otras perspectivas teóricas plantean en relación a la externalización motivada, en parte, por una baja autoestima.

A pesar de estos planteamientos teóricos, la investigación sobre el vínculo entre la baja autoestima y problemas de externalización sigue en debate, aunque en estudios recientes, los resultados muestran que la baja autoestima se asocia con problemas de externalización, aumentando los actos violentos y agresivos entre los 13 y los 15 años de edad, aunque tal efecto no es mayor que otras variables contextuales (Boden, Fergusson y Horwood, 2007; Donnellan, Trzesniewski, Robins, Moffit y Caspi, 2005).

Por otro lado, en cuanto al autoconcepto, entendiéndose este como la percepción que el individuo tiene sobre sí mismo, según la literatura científica, determinaría el comportamiento. Así, son abundantes las investigaciones que relacionan un autoconcepto negativo con el comportamiento antisocial (Fariña, García y Vilariño, 2010; Vázquez, Mohamed, y Vilariño, 2008). En este sentido, algunas hipótesis interpretativas sostienen que el comportamiento antisocial puede funcionar como un mecanismo para compensar los déficits en autoconcepto (Kaplan, 1972).

5.4.1.4. Ansiedad y estados emocionales de valencia negativa

Muchos individuos que ejercen conductas antisociales manifiestan una alta comorbilidad con trastornos emocionales (Dishion, French y Patterson, 1995; Lahey y McBurnett, 1992).

En varios estudios longitudinales y epidemiológicos en población general se ha señalado la relación entre perturbaciones emocionales y una mayor probabilidad de ejercer conductas antisociales (Lund y Merrell, 2001; Nottelman y Jensen, 1995; Simonoff et al.,

1997). Asimismo, Stefuerak, Calhoun y Glaser (2004) sugieren en su estudio que los trastornos emocionales podrían ser considerados como un canalizador hacia la delincuencia, así como también hacia la personalidad antisocial.

En relación a diferencias en cuanto al sexo, Smith (2002), encontró que los factores de riesgo emocionales afectarían más a las niñas que a los niños para el incremento de la conducta antisocial, encontrando a su vez dichas diferencias también para los factores familiares.

Por otro lado, Fombonne, Wostear, Cooper, Harrington y Rutter (2001) comprueban que, entre aquellos jóvenes que presentaban depresión y trastornos de conducta asociados, tenían mayor riesgo de cometer conductas suicidas, delictivas y presentaban mayor disfunción social en la vida adulta. Resultados similares fueron encontrados por Marmorstein e Iacono (2003).

Vermeiren, Jones, Ruchkin, Deboutte, y Schwab-Stone (2004), encuentran que los sujetos antisociales presentan más problemas emocionales, exceptuando la ansiedad, pero contrariamente a lo esperado, los antisociales que habían sido arrestados no presentaban mayor depresión que los no arrestados.

Diversos estudios han mostrado también como los individuos con conductas antisociales presentan trastornos o síntomas emocionales concomitantes entre los que aparecía la depresión, características como el autoconcepto disminuido o desconfianza hacia el otro (Achenbach, 1991; Carrasco, Del Barrio y Rodríguez, 2001; Caron y Rutter, 1991; Del Barrio, 2004a; Muñoz-Rivas, Graña, Andreu y Peña, 2000; Thornberry, 2004; Wilde, 1996). Así, los adolescentes deprimidos y con una baja autoestima sienten que no tienen nada que perder cuando se embarcan en actividades de riesgo, así como en una conducta socialmente reprobable, a la vez que no valoran su vida, no temerían ponerla en riesgo (Del Barrio, 2004a; Wilde, 1996).

5.4.1.5. Agresividad

Diversos estudios han encontrado cierta relación y continuidad desde la agresividad temprana hacia la conducta antisocial en la adolescencia y la presencia de crímenes violentos (Loeber, 1990; Loeber y Hay, 1996; Olweus, 1979; Pfeiffer, 2004; Thornberry, 2004; Tremblay, 2001; Velázquez, Cabrera, Chaine, Caso-López y Torres, 2002).

La identificación de personas con tendencia a tipos determinados de agresividad no sólo ayuda a predecir pautas comportamentales futuras, sino que también ofrece estrategias de intervención distintas a la hora de prevenir actos agresivos, facilitando el tratamiento apropiado y disminuyendo futura violencia interpersonal (Caprara, Barbaranelli y Zimbardo, 1996; Stanford, Greve y Dickens, 1995).

Por tanto, es importante considerar las conductas específicas presentes, por ejemplo, la agresión proactiva puede predecir una temprana agresividad física (Vitaro, Brendgen y Tremblay, 2002) que ulteriormente aumentará el riesgo de conducta antisocial abierta y encubierta (Connors, Steingard, Anderson y Melloni, 2003; Miller y Lynam, 2006; Pulkkinen, 1996). Asimismo, el diagnóstico de conducta antisocial en edades tempranas del desarrollo, actuará como predictor de la conducta agresiva y antisocial durante la adolescencia (Tremblay, Kurtz, Masse, Vitaro y Phil, 1995; Trianes, 2000).

Para Trianes (2000), la conducta agresiva puede derivar en conducta antisocial en los casos en los que se focaliza en asaltos, vandalismo y daños a propiedades. Tanto en los estudios de Quinsey, Book y Lalumiere (2001), como en el de Garaigordobil et al. (2004) encuentran altas correlaciones entre medidas de agresividad y conductas agresivas, con elevadas puntuaciones en conducta antisocial. En otros casos, la agresividad deriva hacia el deterioro de las relaciones interpersonales, como peleas frecuentes verbales y físicas con los iguales, disputas en la familia, enfrentamientos a los profesores y educadores, así como conductas impulsivas de alto riesgo (consumo de alcohol y drogas) (Cerón, 2013).

5.4.1.6. Búsqueda de sensaciones

En cuanto a la búsqueda de sensaciones, la cual se define como la necesidad de buscar y experimentar sensaciones novedosas, variadas y complejas, de las que pueden derivarse riesgos físicos y/o sociales. Este constructo posee cuatro dimensiones: búsqueda de emociones y aventuras, búsqueda de experiencias, desinhibición y susceptibilidad al aburrimiento (Zuckerman, 1979). Así, el propio Zuckerman (1994) relaciona la búsqueda de sensaciones con la carencia de acuerdo con las normas sociales y la irresponsabilidad. En esta línea, la búsqueda de sensaciones se ha mostrado como una de las variables con más clara asociación con la delincuencia en la adolescencia en diferentes muestras (Chico, 2000).

De este modo, son muchos los estudios que corroboran una relación positiva entre la búsqueda de sensaciones y la conducta antisocial y/o delictiva, tanto en muestras de adultos (Levenson, Kiehl y Fizpatric, 1995; Pérez y Torrubia, 1985), como en muestras adolescentes

(Luengo, Otero-López, Mirón y Romero, 1995; Romero, 1996; Simó y Pérez, 1991) y de niños (Kafry, 1982). Agnew (1990), concluyó en sus investigaciones que la búsqueda de riesgo y aventuras, la curiosidad y el deseo de superar el aburrimiento eran las razones más frecuentes dadas por los jóvenes a la hora de explicar su conducta delictiva. De la misma manera, en el estudio realizado por Otero, Romero y Luengo (1994), señalan que la búsqueda de sensaciones posibilitaba la predicción de la conducta antisocial en un periodo de tres años, así como Schmeck y Poustka (2001), que confirman la relación entre el temperamento difícil y los problemas de agresión y violencia en niños y jóvenes, pero sobre todo cuando este tipo de temperamento se asocia con una alta necesidad de búsqueda de sensaciones.

Para finalizar, Romero, Sobral y Luengo (1999), señalan una diferenciación conceptual entre distintos factores que forman parte del constructo y que deberían analizarse por separado. De este modo, distinguen en el constructo búsqueda de sensaciones, por un lado, la desinhibición y búsqueda de experiencias, que sí parecen ser las dimensiones más estrechamente ligadas a la conducta antisocial, sobre todo en muestras de adolescentes, y por otro lado, búsqueda de emociones y aventuras, que actuarían en sentido contrario, estando más débilmente relacionadas con dichas conductas antisociales.

5.4.1.7. Distorsiones cognitivas

La teoría del procesamiento de la información social (Crik y Dodge, 1994), ha contribuido al estudio de las distorsiones cognitivas porque son una parte esencial en la transformación de la información (Dodge, 1991; Dodge y Coie, 1987). Las distorsiones cognitivas se caracterizan principalmente como sesgos en el procesamiento, actúan como mediadores entre los estímulos de entrada de información y las respuestas de comportamiento. El sesgo puede pertenecer tanto los esquemas particulares, como estructuras generales del conocimiento que componen el tratamiento permanente de la información, es decir, la codificación, representación mental, acceso y la generación de respuestas posibles, la selección de una respuesta, así como a la evaluación que se realiza de las respuestas (Crick y Dodge, 1994).

En la literatura científica, las investigaciones acerca de las distorsiones cognitivas se han estudiado operacionalizándolas de manera general y específica (Barriga, Landau, Stinson y Gibbs, 2000; Leitenberg, Yost y Carroll-Wilson, 1986). De esta manera, para describir las distorsiones cognitivas en general, se han usado los conceptos autoserviente y autohumillación. Por lo que la tendencia de transformar la información de manera parcial,

puede manifestarse mediante internalización o externalización de la conducta (Gibbs, Potter, Barriga y Liau, 1996). De este modo, tanto la internalización, como la externalización han resultado dos problemas que se han asociado con las distorsiones cognitivas consideradas como representaciones mentales parciales o inexactas (Achenbach y McConaughy, 1997; Achenbach y Rescorla, 2001; Barriga et al., 2000; Gibbs, 2010).

A su vez, las distorsiones cognitivas autosirvientes se dividen acuerdo con Gibbs, (1991, 1993) y Barriga, Gibbs, Potter y Liau (2001) en dos principales distorsiones; primarias (relacionadas con el egocentrismo) y distorsiones secundarias (relacionadas con culpar a los demás, minimizar, etiquetar incorrectamente o suponiendo lo peor). A su vez, estas distorsiones cognitivas pueden dar lugar a un comportamiento antisocial abiertamente perjudicial para terceros (Gibbs, Potter y Goldstein, 1995). Una vez que el comportamiento se ha comprometido, las personas pueden experimentar tensiones psicológicas como la culpa y el daño a la imagen de sí mismo. Por lo tanto, las distorsiones cognitivas autosirvientes secundarias (culpar a los otros, asumir lo peor, así como minimizar la conducta) permiten desarrollar en los jóvenes la conducta antisocial al neutralizar la culpa y la prevención de daños a la conciencia (Barriga et al., 2000).

Las distorsiones específicas de autohumillación son: a) la abstracción selectiva; se atiende selectivamente a los aspectos negativos de las experiencias, b) generalización; el pensamiento negativo es el resultado de una experiencia y tendrá lugar en una situación similar o en situaciones futuras, c) el catastrofismo; siempre pensando los peores escenarios sobre un acontecimiento, d) la pesonalización; indebidamente atribuir eventos externos para uno mismo (Cerón, 2013).

Las distorsiones cognitivas son consideradas como esquemas equivocados de interpretar los hechos o pensamientos negativos automáticos que generan múltiples consecuencias, es posible que las interpretaciones erróneas generen conflictos, proporcionen una visión simplista y negativa sobre su entorno social (Barriga et al., 2000). Por lo tanto, las distorsiones cognitivas consisten en polarizaciones negativas o inexactas de la atención o el significado que se le confiere a la experiencia social (Barriga et al., 2000; Barriga, Morrison, Liay y Gibbs, 2001).

5.1.4.8. Escasos recursos personales y pobre desarrollo moral

Al realizar un repaso por la literatura científica actual, aplicada a la psicología jurídica con menores infractores, resulta difícil encontrar referencias de trabajos, tanto teóricos como

empíricos, que aborden la cuestión del desarrollo moral como un factor de riesgo de la conducta delictiva.

Si bien, los valores guían la conducta, lo que habitualmente tratamos en la justicia de menores son adolescentes que han mostrado una conducta contraria a lo permitido por la ley, contraria a la norma social, contraria a determinados valores compartidos por una sociedad en la que se hallan insertos. Existen otras acciones contrarias a valores que no son perseguidas por la ley. La finalidad última que persigue todo proceso educativo es una modificación de las conductas y estructuras que las generan. Un individuo que actúe conforme a los valores básicos compartidos por una sociedad significa que los asume, los traduce en cumplimiento de normas y muestra una actitud en esa dirección (Álvarez y Hidalgo, 1997).

Una gran parte de los profesionales que investigan o trabajan en desarrollo socio-moral comparten el supuesto de que la vida moral del individuo depende en gran medida de su nivel de razonamiento o juicio moral y, por tanto, mejorarán sus acciones morales en la medida en que el sujeto alcance niveles superiores de razonamiento moral. En consecuencia, se trata de favorecer el avance del niño, adolescente o adulto hacia estadios de juicio moral cada vez más elevados, lo que supone en general que revertirá en una mejora global de su conducta moral (Álvarez y Hidalgo, 1997).

Del mismo modo, Díaz y Elícegui (2001) realizan un estudio con menores infractores de la provincia de Bizkaia, poniendo en relación el desarrollo moral de los menores con las diferentes variables que puedan interactuar con él, con la pretensión de utilizarlo como criterio para las recomendaciones de medidas judiciales. Asimismo, los autores concluyen que existe un bajo desarrollo moral entre los menores usuarios del juzgado de menores, no habiendo encontrado ningún sujeto más allá del nivel II (convencional), situándose estadio 3 (mutuas expectativas interpersonales, relaciones y conformidad interpersonal), y en ningún caso más allá de este nivel, es decir, ninguno de ellos se situaba en el Nivel III (posconvencional). Por lo que concluyen afirmando que existe una relación importante entre el desarrollo moral y la conducta delictiva, considerándolo así un factor de riesgo, aunque matizan que no pueden afirmar una relación directa, dado que seguramente más variables influyen en la comisión de un hecho delictivo, incluso en el propio hecho bajo un estadiaje de su desarrollo moral.

Fabián (2001) señala que a pesar de los numerosos estudios que se han llevado a cabo sobre qué factores predicen el comportamiento antisocial, se ha prestado poca atención a la

moral como un posible factor de riesgo. Así, en su estudio con adultos, encuentra que aquellos que habían cometido actos delictivos puntuaban más bajo en razonamiento moral que los no delincuentes, sin embargo, no había diferencias entre los delincuentes violentos y no violentos. También añade que el tener un alto razonamiento moral, estaría asociado a diversos factores protectores, entre ellos, una buena educación familiar y la importancia de la religión.

Es importante señalar que no sólo hay evidencias del poder protector del desarrollo moral, sino que su ausencia podría actuar como factor de riesgo hacia una mayor involucración en comportamientos antisociales (Peña, 2005). Así, en numerosos estudios se señala la religión como importante variable en el desarrollo moral de los adolescentes, por un lado, por la mayor proximidad paterno-filial que suele ir asociada, así como la relación con una limitación o disminución de la influencia en el grupo de pares (Regnerus, 2001).

Por otra parte, la literatura científica, que reconoce la religión como fuente importante en el desarrollo moral, equipara de la misma forma el realizar o participar en actividades deportivas, ya que también actuaría como inhibidor de la conducta antisocial, asociándose a fuentes de enseñanza, ya que el deporte en sí mismo no garantiza que se desarrollen dichas conductas prosociales (McKenny y Dattilo, 2001). Otros autores han señalado el importante papel que pueden tener los deportes de riesgo como forma de canalizar de forma socializada la alta necesidad de búsqueda de sensaciones y desinhibición, factores que aparecen asociados a la adolescencia y a la manifestación de conductas antisociales (Sánchez y Cantón, 2001).

5.1.4.9. Consumo de sustancias tóxicas

El estudio de variables que inciden en el consumo de sustancias ha cobrado una gran importancia en la literatura científica, con numerosos estudios e informes que alertan de la progresiva normalización del consumo de drogas entre los adolescentes (Elzo, Comas, Laespada, Salazar y Vielva, 2000; PNSD, 2007). El alcohol, el tabaco y el cannabis, principalmente, y las drogas de síntesis y anfetaminas, en menor medida, están presentes en el ocio de muchos jóvenes y constituyen un motivo de gran preocupación entre los diversos agentes sociales (familia, educadores, políticos) (Laespada, Iraurgi y Aróstegi, 2004), debido a que diversas investigaciones sugieren la fuerte relación entre el uso de sustancias y el comportamiento delictivo en la adolescencia temprana (Tubman, Gil y Wagner, 2004).

Por sus propias características evolutivas, como la búsqueda de identidad personal e independencia, el alejamiento de los valores familiares y el énfasis en la necesidad de aceptación por el grupo de iguales, la adolescencia se convierte en facilitador de inicio del

consumo de drogas, apareciendo cada vez a edades más tempranas (Sussman, Unger y Dent, 2004).

Así, la revisión realizada por Espada, Méndez, Griffin y Botvin (2003) mostró que el abuso de alcohol en la adolescencia se relaciona con problemas de salud, fracaso escolar, sexo no planificado, problemas legales, alteraciones afectivas e inicio de consumo de otras drogas. Este último factor es especialmente significativo ya que el inicio y mantenimiento del consumo de estas drogas legales ha sido identificado como factor de riesgo y puente para iniciarse en el uso o abuso de drogas ilegales (Kandel, Yamaguchi y Chen, 1992; PNSD, 2007; Vargas y Trujillo, 2006).

En el estudio de Peñafiel (2009), encontró que de todas las variables analizadas que correlacionaban con el aumento de riesgo para el consumo de sustancias tóxicas, las que habían obtenido un mayor índice eran las relacionadas con el grupo de iguales, destacando las relaciones entre los diferentes grupos de consumidores y las variables relacionadas con los consumos de los amigos y con la relación de actividades grupales ligadas a bares y discotecas especialmente. Así, la variable que predecía un mayor riesgo para el uso de drogas era el ir a bares con los amigos. La influencia de los consumos de los amigos en los consumos propios es coherente con la teoría del aprendizaje social de Bandura (1984), que destaca la importancia de la identificación del sujeto con el modelo, en este caso, que consumo sustancias. En menor medida que los amigos, los hermanos también ejercen una influencia importante en los consumos de los adolescentes, actuando como modelos (Aburto et al., 2007), pudiéndose explicar esta menor influencia, por el periodo propio de la adolescencia, ya que éste comparte un mayor espacio, tiempo y confidencialidad con el grupo de pares como vía de individualización familiar.

Al hilo de lo anterior, numerosas investigaciones realizadas en los últimos años que asocian el consumo de sustancias al ocio nocturno asociado a bares y discotecas (Barriuso, 2003; Gómez-Fraguela, Fernández, Romero y Luengo, 2008). En esta línea, Calafat, Fernández, Juan y Becoña (2007) han mostrado cómo un ocio ligado a la vida nocturna (bares, discotecas, botellón) predice más los consumos de los adolescentes que otros factores analizados tradicionalmente. A su vez, el permanecer ocioso y/o el absentismo escolar injustificado ha resultado tener un impacto relevante como predictor de una mayor implicación del joven en diferentes tipos de consumo, llegando a incrementar el riesgo en alguno de los casos en más de doce veces. Los resultados obtenidos son cohortes con los de

otras investigaciones realizadas en las últimas décadas que relacionan el absentismo escolar con el consumo de sustancias (Laespada et al., 2004).

Por otro lado, los estudios realizados por Loeber, Green, Lahey, Frick y McBurnett (2000) mostraron que el inicio temprano del consumo de sustancias aumenta la probabilidad de conductas infractoras severas y crónicas. En otro estudio, consideran que los jóvenes delincuentes tienden a estar más involucrados en el uso de drogas que los jóvenes no delincuentes (Wagner y Kassel, 1995), asimismo, otros estudios indican que el consumo de sustancias agrava la conducta delictiva (Dembo, Schmeidler, Pacheco, Cooper y Williams, 1997; Ellickson y McGuigan, 2000; Snyder y Sickmund, 2006, Tubman et al., 2004). Además, los delincuentes que consumen sustancias cometen delitos más violentos y presentan un mayor riesgo de conducta antisocial persistente (Greenwood, 1992; Sealock, Gottfredson y Gallagher, 1997).

Atendiendo a una variable temporal, el estudio de Dembo, Wareham y Schmeidler, (2007), señalan que sobre la continuidad en el uso del alcohol, la marihuana y la delincuencia autoinformada entre los adolescentes en una muestra de 278 participantes de centros de justicia para jóvenes, los resultados indicaron que el uso de sustancias se mantiene a través del tiempo y que la conducta delictiva tiende a disminuir, sin embargo, bajo la influencia simultánea de ambas variables, consideran que la delincuencia se exacerbaba con el uso de sustancias a través del tiempo. Asimismo, el uso de sustancias y conductas delictivas mantienen una significativa temporalidad durante el periodo adolescente (Brook, Whiteman, Finch y Cohen, 1995; Bui, Ellickson y Bell, 2000; Tubman et al., 2004).

Cabe destacar que aunque muchos jóvenes delincuentes están involucrados en drogas, hay que señalar que otros delincuentes no utilizan sustancias, y muchos jóvenes que utilizan sustancias no cometen delitos (Wagner y Kassel, 1995), sin embargo, como se ha podido ver diversas investigaciones identifican que existe una asociación positiva entre consumo de drogas y delincuencia (Giancola, Hezzigh y Tarter, 1998).

Por otro lado, puede estimarse que más del 50 por 100 de los delitos, tanto leves como graves, se halla conectado con el consumo de sustancias tóxicas, ya sean ilegales o legales (Watts y Wrights, 1990). La producción y distribución de drogas constituyen actividades delictivas en la mayoría de los países y, por ello, perseguidas por la policía y la justicia. En este ámbito se encontrarían tanto los delitos definidos por las propias drogas, es decir, derivados de su prohibición (fabricación, posesión o consumo), como los cometidos en el

sistema de distribución de drogas, esto es, los robos, agresiones, extorsiones u homicidios necesarios para el funcionamiento de las redes de tráfico y distribución de drogas (Redondo, Martínez y Andrés, 2011).

En relación con el consumo de drogas, el alcohol y otras drogas reducen los controles inhibitorios de la violencia, disminuyendo el miedo ante situaciones de riesgo y los sentimientos de culpa que normalmente se producirían en individuos en estado sobrio. El consumo de alcohol desempeña un papel importante en muchos delitos violentos, tales como las agresiones y homicidios producidos en peleas con desconocidos o el maltrato a la pareja y el maltrato ascendente. Pese a la evidente asociación entre consumo de alcohol y delitos violentos, el consumo de alcohol no puede explicar por sí mismo la violencia a la que se vincula. La inmensa mayoría de los jóvenes y adultos que poseen hábitos de bebida no llevan a cabo acciones violentas o delictivas asociadas a tal consumo.

Mención aparte merece el consumo por parte de los jóvenes de drogas ilegales tales como heroína, cocaína, LSD, hachís, disolventes de colas y otras sustancias estimulantes o perturbadoras del sistema nervioso, que pueden ser tomadas por diferentes vías (ingiriéndolas, fumándolas, esnifándolas o inyectándolas). Muchos delincuentes violentos se inician en la adolescencia, de una manera paralela, tanto en la carrera delictiva como en el consumo de drogas. Así se ha puesto de relieve en múltiples investigaciones longitudinales, entre las cuales puede destacarse el denominado *Estudio Cambridge*, desarrollado por West y Farrington (1973) sobre una muestra de jóvenes de los suburbios de Londres (Farrington, 1987, 1989, 1992). Además, muchos de estos infractores continúan consumiendo drogas durante la vida adulta.

Por último, la relación entre consumo de drogas y conducta delictiva puede comprenderse mejor desde una hipótesis de interrelación formulada por el Redondo y Garrido, (2001) y denominada de potenciación recíproca. Las principales premisas de esta hipótesis son las siguientes:

1. En principio, el comportamiento delictivo y el consumo de drogas son hábitos que pueden aprenderse y mantenerse independientemente el uno del otro. En realidad, esta independencia entre ambos comportamientos constituye la norma más que la excepción, si tomamos en consideración separadamente las poblaciones de delincuentes y de consumidores de drogas.

2. Pero sucede que para los sectores más marginales de la población los contextos en los que se aprende a delinquir y a consumir drogas son los mismos. Ello facilita que en estos sujetos marginales, antes o después, ambos comportamientos confluyan y se combinen entre sí.
3. Cuando ello sucede, se produce una *cualificación y potenciación recíproca* de ambos tipos de conducta: ciertos actos delictivos (por ejemplo, un robo, la perspectiva de un delito violento, como un atraco a mano armada o una violación) acaban facilitando o instando el consumo de drogas y, recíprocamente, la dependencia de las drogas o sus efectos psicofarmacológicos pueden acabar instando ciertos delitos (por ejemplo, un robo para obtener dinero) o induciendo otros (por ejemplo, delitos violentos y sexuales). Es decir, los comportamientos delictivos y los de consumo se hacen tan interdependientes y funcionales entre sí que adquieren características de cerrada *potenciación recíproca*. En estos casos, las actividades delictivas acaban conduciendo casi con seguridad al consumo de drogas, y éste demanda, como si de un álter ego se tratara, acciones delictivas funcionales para consumir. Esta manifestación conjugada de ambos comportamientos es la que lleva al gran público a concluir que consumo de drogas y delincuencia pueden llegar a ser, en la práctica, la misma cosa.
4. Una interpretación psicológica de la potenciación recíproca puede efectuarse desde el concepto de “cadena de conducta”. Las cadenas de conducta (por ejemplo, robar mediante intimidación un bolso o una cartera) están integradas por distintos “eslabones” de acciones específicas (por ejemplo, proveerse de una navaja, salir de casa hacia una calle concurrida por turistas, seleccionar una víctima posible, acercarse a ella, etc.) que son reforzadas y mantenidas por el resultado gratificante final (por ejemplo, obtener dinero). Pues bien, la potenciación recíproca entre actividad delictiva y consumo de drogas se produce cuando las cadenas de conducta de ambos comportamientos se unen y entrelazan, combinándose entre sí sus eslabones y dando como resultado una cadena compleja e integrada delito-droga. Entonces las actividades delictivas serían poderosamente reforzadas por los efectos psicofarmacológicos de las drogas y podrían adquirir un formato compulsivo muy resistente a la extinción.

5.4.2. Factores de riesgo relacionados con la socialización

En relación con la socialización, cabe destacar a grandes rasgos que la mayoría de los estudios llevados a cabo han evidenciado la existencia de una relación entre una competencia social limitada y el comportamiento antisocial (Arce, Fariña y Vázquez, 2011; Novo, Seijo y Vilariño, 2008). De este modo, diferentes autores postulan que la competencia social juega un rol central en el desarrollo de una vida efectiva y satisfactoria a escala personal e interpersonal (Arce et al., 2005).

La manifestación de conductas antisociales queda también bajo la acción de una compleja interacción entre las características intrínsecas de los individuos y las influencias provenientes de diversos grupos sociales. Esta afirmación es claramente encuadrable en la teoría del aprendizaje social de Bandura (1969, 1977), que considera el proceso de socialización como una adquisición de conductas y valores determinada, en su mayor parte, por un conglomerado de relaciones sociales en la que el individuo está inmerso.

Las variables sociales más inmediatas o propias del entorno específico de relación interpersonal del adolescente, pueden constituir factores de riesgo, en tanto en cuanto, pueden modular la conducta del individuo por simple imitación u observación de una figura o modelo inadecuado, reforzando finalmente aquellas conductas concordantes con las del modelo, claramente inadecuadas o impidiendo que se lleve a cabo de forma adecuada el proceso de socialización de éste (Peña, 2005).

5.4.2.1. Ámbito familiar desadaptativo

La presencia de vínculos afectivos débiles, la falta de confianza de los padres, patrones de comunicación poco fluidos o relaciones tensas y conflictivas entre padres e hijos, son también un claro factor de riesgo para el desarrollo de comportamientos problemáticos o antisociales (Brody y Forehand, 1993; Brook, Brook, Gordon, Whiteman y Cohen, 1990; Frías, Corral, López, Díaz y Peña, 2001; Hanson, Henggeler, Haefele y Rodick, 1984; Loeber y Farrington, 2000; Mirón, Luengo, Sobral y Otero-López, 1988; Romero, Luengo, Gómez-Fraguela y Otero, 1998).

La calidad de las relaciones entre los padres y los hijos es fundamental. Si la relación es cálida y afectuosa, el índice de delincuencia juvenil disminuye (Loeber y Dishion, 1983). Sin embargo, las pautas educativas erróneas han sido típicamente relacionadas con un

aumento del riesgo de cometer delitos en los hijos mientras que la interacción padres-hijos y el fuerte apego familiar han sido considerados habitualmente como factores que protegerían potencialmente a los hijos contra el desarrollo del comportamiento delictivo (Catalano y Hawkins, 1996). Aunque más allá de las estrategias parentales que se utilicen para el manejo de los hijos, el grado en que los padres interactúan y se compenetran con sus hijos, también ha sido hipotéticamente considerado como un factor predictor del comportamiento delictivo y violento (Peña, 2005). Williams (1994) encontró que la comunicación patero-filial y la compenetración a la edad de 14 años, estaba inversamente relacionado con la violencia autoinformada a la edad de 16 años. Esta relación era relativamente consistente en los varones, en los afroamericanos y en los euroamericanos, pero era notablemente más débil en el caso de las chicas.

De forma similar, Farrington (1989a) encontró que los hijos (de 12 años en el momento de la investigación) cuyos padres no se comprometían en las actividades de ocio de sus hijos, reportaban más conductas violentas durante la adolescencia, y en la adultez era más probable que fuesen detenidos por delitos violentos. Un bajo compromiso parental en la educación de sus hijos a la edad de 8 años también predecía violencia posterior, al igual que una carencia de interacción y de compenetración parental en la vida de sus hijos parecía contribuir al riesgo de manifestar comportamientos violentos futuros.

El estudio longitudinal llevado a cabo por Crosnoe, Glasgow y Dornbusch (2002), hallaron relaciones positivas con los padres y profesores así como el establecer compromisos, actuando ambas variables como factores protectores a la hora de mostrar problemas comportamentales. Estos hallazgos indican, en general, que los adolescentes que informan relaciones cálidas con sus progenitores se muestran mejor organizados en casa, se sienten emocionalmente vinculados a los profesores, actúan adecuadamente en la escuela, valoran los logros académicos y, a la vez, se protegen de las influencias negativas de sus posibles compañeros con conductas antisociales, aunque estas diferencias no son uniformes en relación al género y a los distintos tipos de comportamiento. Asimismo, Laird, Pettit, Doge y Bates (2003), señalan que los padres que informan mantener una buena relación con sus hijos y pasan mucho tiempo juntos, se asocia con menos comportamientos sociales, encontrándose también estos resultados a la inversa.

De este modo, teniendo en cuenta el estudio meta-analítico de Rothbaum y Weisz (1994) sobre las dimensiones de crianza, la pobre supervisión de los padres era el predictor

más fuerte de la delincuencia. Asimismo, estudios similares, llegan a la misma conclusión (Barnes y O’Gorman, 1995; Farrington, 1978; Hoeve et al., 2009; Loeber y Stouthamer-Loeber, 1986; Patterson, Capaldi y Bank, 1991), donde una escasa supervisión fueron algunos de los mejores predictores de los problemas de externalización, principalmente la delincuencia. De la misma forma, en un estudio meta-analítico más reciente, Hoeve, et. al. (2009) consideran que la crianza de los hijos representa hasta un 11% de la varianza en el comportamiento delictivo.

Asimismo, el clima familiar influye dentro de la conducta delictiva, Villar, Luengo, Gómez y Romero (2003), encuentran que un alto grado de conflictividad familiar unido a un bajo nivel de comunicación o un estilo educativo permisivo se relacionaba con una mayor probabilidad de que los adolescentes se implicaran en conductas antisociales. Thornberry (2004) encontró una relación constante entre el inicio temprano de la delincuencia y la adversidad familiar. Así, los delincuentes infantiles o de inicio temprano tienen una mayor probabilidad de proceder de familias muy conflictivas y con alto grado de hostilidad entre ellos, frente a aquellos que se inician en la adolescencia.

Por otro lado, Quinton y Rutter (1988) y Quinton, Pickles, Maughan y Rutter (1993), concluyen en sus estudios la relación de una característica parental como es la adolescencia de los progenitores y la conducta antisocial de sus descendientes. Así, señalan que la conducta antisocial se ha visto asociada con la maternidad adolescente y con aquellas relaciones de éstas con hombres antisociales. De la misma manera, Conseur, Rivara, Barnoski y Emanuel (1997), encontraron que ser hijo de madre soltera, está asociado a más del doble de riesgo de llegar a ser un menor infractor con larga carrera delictiva; así el haber nacido de una madre menor de 18 años, está asociado a un aumento de más del triple de riesgo de llegar a ser un infractor crónico. El grupo más alto de riesgo se concentra precisamente en aquellos varones nacidos de madres que tienen menos de 18 años cuando se produjo el nacimiento, siendo su riesgo de acabar siendo un infractor crónico, once veces mayor que el del grupo de más bajo riesgo. Otros estudios obtienen resultados muy comparables (Kolvin, Miller, Scott, Gatzains y Fleeting, 1990; Loeber y Farrington, 2000; Maynard, 1997; Moffit y Caspi, 1998). Aunque, por otro lado, Rutter et al. (2000), concluyen que dado que todos los estudios dejan de ver que el ser padre o madre en la adolescencia va asociado a otros factores de riesgo, entre ellos, dificultades de crianza, acortamiento de la educación, pobreza, falta de apoyo de una pareja, es probable que gran parte del riesgo que afecta al menor se deba al efecto de estos factores más que a la edad de los padres en sí misma.

Por último, cabría destacar que la comisión de delitos por parte de los padres es un factor de riesgo para el ejercicio de conductas antisociales de sus hijos (Farrington, 1995; Loeber y Farrington, 2000). McCord (1982), usando una muestra de 201 varones, encontró una relación positiva entre los comportamientos desviados paternos, medidos por la presencia de conductas como el alcoholismo del padre o haber estado convicto por embriaguez y/o crimen grave, y las conductas violentas registradas por sus hijos. Por tanto, la conducta criminal, en general, así como el alcoholismo del progenitor, en particular, han sido algunos de los factores más potentes en el aumento del riesgo del comportamiento delincuencial. Asimismo, Farrington (1989) en el *estudio Cambridge*, encontró relación entre el arresto parental, antes del décimo cumpleaños de sus hijos y, el aumento de los delitos violentos autoinformados y registrados oficialmente por parte de los últimos en la adolescencia.

Así, parece estar corroborado en la literatura científica que padres antisociales tienden a tener hijos antisociales (Lipsey y Derzon, 1998). En el estudio longitudinal de McCord (1997) mostró que los padres con actitudes criminales, tendían a tener hijos que cometían actos delictivos.

5.4.2.2. Pobre adherencia al contexto formativo reglado

La literatura científica ha estudiado durante mucho tiempo la relación entre las variables relacionadas con la escuela y la delincuencia (Elliott, Hamburgo y Williams, 1998; Gottfredson, 1986; Gottfredson y Gottfredson, 1985, Gottfredson, Gottfredson y Hybl, 1993; Hirschi, 1969; Jarjoura, 1993; McNeal, 1995; Sampson y Laub, 1993; Thornberry, Moore, y Christensen, 1985). La escuela es junto a la familia el contexto más importante y con más influencia en el desarrollo social e individual de los niños y adolescentes; ya que no sólo se aprenden normas para una adecuada convivencia en la sociedad sino que se adquieren y se pueden mantener patrones de aprendizaje de diferentes comportamientos, que se entienden en primer lugar adaptativos para el desarrollo psicosocial, aunque también podría haber entre ellos conductas antisociales y delictivas (Lotz y Lee, 1999).

Una variedad de variables relacionadas con la escuela han sido ligados de manera consistente con la escuela han sido ligados de manera consistente con la conducta infractora, incluido el compromiso de la escuela (Jenkins, 1996), la participación en la escuela (McNeal, 1995), la asistencia a la escuela (Jarjoura, 1993; Thornberry et al., 1985), y el clima escolar (Gottfredson y Gottfredson, 1985).

Beccaria (1994) señalaba que el más seguro, pero el más difícil medio de evitar los delitos es perfeccionar la educación, ya que ésta suele ir asociada a negativas experiencias escolares (fracaso escolar y abandono temprano de estudios), reconociéndose el éxito escolar como uno de los mejores preventivos de la delincuencia.

La inasistencia escolar contribuye a facilitar el paso a la delincuencia debido a que proporciona tiempo y oportunidades adicionales para conductas inadecuadas, sobre todo cuando el adolescente presenta una elevada ociosidad (Farrington, 1995). En un estudio sobre la variable inasistencia escolar, Farrington (1989) mostró que aquellos jóvenes entre los 12 y 14 años con mayor número de inasistencias en la escuela eran más propensos a desarrollar conductas antisociales y delictivas en una etapa adulta, así como a estar recluidos en centros de detención, que los jóvenes con asistencia continua a la escuela.

Maguin y Loeber (1996) en su estudio longitudinal manifiestan que un pobre rendimiento académico se relaciona no sólo con el comienzo y la prevalencia de la delincuencia, sino también con la escalada en la frecuencia y en la gravedad de las ofensas. El fracaso escolar es un factor de riesgo importante de la conducta antisocial, no es determinante. Sin embargo, ha de tenerse muy en cuenta en los niños y jóvenes que acumulan otros factores de riesgo, especialmente los referidos a problemas familiares, niveles bajos de desarrollo y consumo de drogas (Del Barrio, 2004a).

Así, el fracaso escolar se ha mostrado como una variable relevante en la explicación de la conducta antisocial y delictiva juvenil. La autopercepción referente al pobre desempeño académico puede influir directamente en los niveles de autoestima del joven, a su vez, los bajos niveles de autoestima son factores que influyen en el desarrollo de conductas antisociales (Swain, 1991). Por último, Farrington (1989) observó que el 20% de los hombres adolescentes de 11 años con un bajo rendimiento académico en la escuela primaria fueron condenados por delitos violentos en una edad adulta, comparados con un 10% del grupo con rendimiento normal. Sin embargo, respecto a la relación entre conducta antisocial y fracaso escolar, no es claro si el riesgo deriva de bajas capacidades cognitivas (bajo CI), o del propio fracaso escolar.

5.4.2.3. Influencia del grupo de pares

Dentro del contexto evolutivo, la adolescencia es considerada como un período de riesgo en el que se suceden continuos cambios que conllevan bruscas adaptaciones psicológicas consecuencia de un proceso de maduración no sólo fisiológico sino también

personal y social (Álvarez-Monteserín et al., 1999; Fierro, 1991; Fuertes, 1996; Garaigordobil, 2000; Trianes y Gallardo, 1998). Además, en ella, el joven persigue afianzarse en su individualidad adquiriendo y consolidando definitivamente las habilidades y repertorios conductuales que le posicionan ante el mundo y los demás. Es aquí donde los modelos, el apoyo y la vinculación a los iguales toma especial relevancia, puesto que supone una vía a través de la que el adolescente se siente integrado en un contexto en el que sus componentes pasan por las mismas circunstancias vitales que él y en el que, posiblemente por primera vez en su vida, comienza a sentirse autónomo y capaz de tomar iniciativas por sí mismo ajenas a la “protección” familiar.

Por tanto, este período evolutivo es el más susceptible de verse afectado por el grupo de iguales y por las relaciones tanto personales como conductuales que el joven establece con él y, por ello, la dirección de la influencia que entre ambos se establezca y las características de esta pueden llegar a constituir importantes factores de riesgo para el posterior desarrollo del joven en la vida adulta.

Por otro lado, muchos estudios señalan que la baja aceptación y el rechazo emocional por parte del grupo de iguales y/o mantener continuos problemas de relación con ellos parecen también poner a los adolescentes en una situación de riesgo que incrementa la probabilidad de: a) tener problemas importantes en la escuela (p. ej., agresión, bajo rendimiento escolar, absentismo); b) exhibir comportamientos agresivos y violentos que son, asimismo, factores de riesgo para el consumo de drogas; c) presentar sintomatología depresiva, y d) abusar de sustancias psicoactivas (Brendgen et al, 2002; Coie, 1990; Kupersmidt, Coie y Dodge, 1990; Panak y Garber, 1992; Parker y Asher, 1987; Woodward y Fergusson, 1999).

Los escasos estudios que de forma específica han intentado determinar la dirección existente entre el rechazo por parte de los amigos y la presencia de este tipo de conductas desadaptadas se han centrado en estudiar los rasgos característicos de aquellos menores que han sido rechazados por sus iguales (p. ej., timidez, agresividad) (Muñoz-Rivas y Graña, 2005).

Con respecto a su influencia del rechazo del grupo de iguales para el uso/abuso de drogas, los resultados obtenidos sugieren que los menores que habían sido tímidos en los primeros cursos escolares mostraban bajos niveles de implicación con las drogas en la etapa adolescente, mientras que aquellos que habían sido menos inhibidos socialmente y que habían

estado menos aislados de sus compañeros en etapas tempranas mostraban una probabilidad mayor de encontrarse en un nivel de consumo más avanzado que el resto de sus iguales (Hops, Davis, y Lewin, 1999).

Otra variable importante en la influencia del grupo de pares, son aquellos que se integran en una banda urbana de carácter violento, así como las interrelaciones en su entorno producen más impacto en la futura trayectoria criminal del joven que la asociación del joven con amigos delincuentes (Thornberry, 2001).

Es importante señalar que cuando se hace referencia en el presente trabajo al grupo de iguales y las actividades de ocio que con ellos se realiza considerándolos como posibles factores de riesgo, se hace suponiendo que, en sí mismos y por definición, no llevan implícitos el riesgo, puesto que ambas variables son determinantes y adaptativas para el adecuado desarrollo social y personal del adolescente. En cambio, ciertas características del grupo de amigos y de la naturaleza de la relación afectiva que con ellos se establece y, asimismo, las diferentes actividades que se realizan en su seno dirigidas a la ocupación del tiempo libre, junto con el nivel de satisfacción que producen en el menor, serán las que sí puedan ser consideradas como predictores relevantes de la aparición de diversos comportamientos desadaptados y/o delincuenciales (Muñoz-Rivas y Graña, 2005).

Dada la importancia que este factor tiene en el presente trabajo, debido a la trascendencia demostrada en la literatura científica en relación tanto a las conductas que se realizan en el tiempo libre, compartidas de manera casi exclusiva con los pares, como la relación que éstos tienen con la comisión de conductas delictivas, por lo que a continuación se expone la referencia que los distintos enfoques teóricos anteriormente expuestos, hacen de esta cuestión.

5.4.2.3.1. Revisión teórica acerca de la relación entre el grupo de pares y conductas delictivas en el ocio.

Como ya se ha mencionado, la adolescencia es un período en el cual el tiempo que se comparte con los amigos aumenta gradualmente, y por lo tanto estos se convierten en los principales agentes de socialización en esta edad. En un trabajo de investigación que busca establecer el vínculo entre la delincuencia juvenil y el manejo del tiempo libre de los adolescentes, parece esencial exponer específicamente el papel del grupo de pares en las teorías y estudios comentarios en apartados anteriores.

Las teorías de la socialización suponen la existencia de un vínculo de causalidad entre la asociación con amigos delincuentes y la delincuencia de la persona, pero esta idea ha sido objeto de numerosas críticas desde su aparición. De hecho, varios autores (Gluek y Glueck, 1950, citado por Killias, 2001) afirman que el orden temporal de esta relación podría ser inverso en el sentido de que sería el estilo de vida desviado lo que llevaría al individuo a buscar la compañía de otros delincuentes haciendo más fácil la asociación con un grupo criminal. Otra serie de investigaciones longitudinales posteriores (Junger-Tas y Block, 1988; Elliott y Menard, 1996) encontró un proceso de influencia mutua entre los dos fenómenos, donde la delincuencia es tanto el producto como la causa de la pertenencia a un grupo de delincuentes.

La teoría del control social considera en cambio a los amigos –que respeten las normas o no- como un factor protector de la delincuencia. Efectivamente, según Hirschi (1971), el apego a los amigos, como también el apego a otras figuras importantes de la vida de un adolescente (padres, maestros), fortalece vínculos sociales y la integración en la sociedad. En este sentido, más el adolescente se relaciona con su grupo de pares, menos tenderá a desviarse. Esta relación no ha sido apoyada por la comunidad científica. De hecho, numerosos estudios (Elliot y Voss, 1974; Hindeland, 1973) no se identifican con las predicciones de Hirschi (1971) y más bien consideran las características del grupo de pares del adolescente como factores importantes para comprender la influencia de estos sobre aquel.

En cuanto a las teorías de las oportunidades, plantea que el tiempo que el adolescente pasa con su grupo de pares, que aquellos sean desviados o no, aumenta la probabilidad de caer en la delincuencia, pero esto se debe principalmente al hecho de que las actividades de ocio que realiza con los amigos son a menudo de tipo no estructurado y/o sin supervisión. En este sentido, la presencia de los pares o amigos facilita la participación de la delincuencia, pero el factor clave es el grado de estructuración de la actividad que realiza el adolescente (Giorgi, 2012).

La teoría de la acción situacional introduce así un elemento de la individualidad, en el sentido de que un estilo de vida riesgoso (actividades no estructuradas, amigos delincuentes) aumenta su impacto sobre la delincuencia cuando interactúa con una tendencia a la delincuencia en la persona en cuestión (débil moralidad y autocontrol). En esta teoría, la influencia del grupo de pares sobre la delincuencia está condicionada por esta tendencia, y si ella es débil, la influencia de los pares delincuentes será reducida. Es decir, todavía se puede

suponer la existencia de un proceso inverso. En efecto, el hecho de pasar mucho tiempo con sus amigos delincuentes puede cambiar algunos de los valores de la persona y reducir su nivel de autocontrol. En tales circunstancias, un estilo de vida riesgoso podría reforzar la tendencia a la delincuencia en los adolescentes (Giorgi, 2012).

5.4.2.3.2. Grupo de iguales como modelo de comportamientos desadaptados

El grupo de pares crean normas de conducta proporcionando información directa e indirecta sobre los comportamientos apropiados en situaciones distintas a las del hogar y la escuela. Ofrecen un soporte para experimentar y resolver problemas de socialización mientras el joven pasa de la influencia familiar a la vida adulta conformando una identidad independiente a la de los padres en la que la formación de estrechos lazos de unión con los amigos es determinante. Por tanto, la interacción con los amigos guía la socialización en la adolescencia y se ha venido utilizando repetidamente en un amplio número de estudios de carácter social y psicológico como variable explicativa del comportamiento juvenil, subrayando la influencia determinante de los iguales en la conducta del adolescente (Becoña, 2000; Brown, Dolcini y Leventhal, 1997; Cairns, Leung, y Cairns, Leung y Cairns, 1995; García-Pindado, 1993; González, 2000).

Son diversos los efectos en términos de trastornos psicológicos o alteraciones del comportamiento que señala la bibliografía científica que se derivan de la exposición a determinadas características del grupo de iguales y/o al vínculo afectivo que el menor establece con ellos (Muñoz-Rivas et al., 2005).

Tal y como se mencionaba en el apartado de consumo de sustancias tóxicas y su influencia con la conducta delictiva, la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura (1984), destacaba la identificación del menor con su grupo de pares, como determinante de su conducta. Así, el modelado por parte de los iguales es uno de los procesos de aprendizaje más relevantes en la adolescencia y a través de él el joven interioriza las actitudes y patrones de comportamiento que se exhiben en el grupo. Si bien esta forma de “aprender” afecta a todas las conductas típicas de esta edad y etapa evolutiva, son sólo algunas las que se han identificado de forma consistente a través de estudios empíricos rigurosos metodológicamente como importantes variables y modelos de riesgo al evidenciarse su influencia negativa en el aprendizaje de conductas desadaptadas y que interfieren en todas las áreas de desarrollo del joven adolescente. Así pues, a continuación se exponen dos variables relevantes que poseen mayor soporte empírico y de las cuales se han establecido claramente los efectos concretos y

específicos que inciden en el comportamiento juvenil; estas son la influencia del grupo de pares en el consumo de drogas, así como la influencia de los mismos en la comisión de delitos por parte de los menores.

5.4.3.2.3.3. Influencia del grupo de iguales en el consumo de drogas

Son muchos los estudios que señalan que durante la adolescencia el consumo de sustancias psicoactivas (p. ej., el alcohol, tabaco, hachís, drogas de diseño, fármacos) por parte de los iguales es un potente precursor del uso y abuso de drogas de los jóvenes (Andrews, Tildesley, Hops, y Li, 2002; Díaz y Sanabria, 1993; Graña y Muñoz-Rivas, 2000; Griffin, Botwin, Scheier, y Nichols, 2002; Jenkins, 1996; Kandel, Davies, y Baydar, 1990; Kobus, 2003; Muñoz-Rivas, Graña, y Cruzado, 2000; Otero, Mirón, y Luengo, 1989; Pons, Berjano, y García, 1996; Pons y Pinazo, 1998), prediciendo tanto el inicio y la frecuencia del consumo (Orejudo, Mígueles, y Arévalo, 1997) como su estabilidad en el tiempo (Chassin, Curran, Hussong, y Colder, 1996).

Más detalladamente, se ha analizado el comportamiento de distintos grupos de jóvenes en función de aspectos como su etnia, clase social, estatus familiar y/o lugar de residencia, con el objetivo de confirmar de forma genérica la dirección positiva entre estas dos variables (asociación amigos consumidores y consumo de drogas) llegando a conclusiones similares (Muñoz-Rivas y Graña, 2005). En primer lugar, la evidencia sostiene que la influencia del grupo de amigos para el consumo de drogas en la adolescencia es determinante, llegando a ser significativamente más fuerte que la de los padres, especialmente en las etapas iniciales de implicación con estas favoreciendo, a su vez, la selección por parte del adolescente de aquellas compañías que refuerzan sus normas y conductas recién establecidas (Allen, Donolwe, Griffin, Ryan, y Turner, 2003; Bauman, Carver, y Gleiter, 2001; Duncan, Tildesley, Duncan y Hops, 1995; Fergusson, Lynskey y Horwood, 1995; Flay et al., 1994; Wang, Eddy, y Fitzhugh, 2000; Webster, Hunter, y Keats, 1994).

En segundo término, si se profundiza en el análisis del tipo de sustancias consumidas, los datos señalan que el hecho de que los amigos sean fumadores, bebedores, consumidores de fármacos sin prescripción médica o sean usuarios de cocaína o derivados morfínicos determina en gran medida no sólo el inicio y posterior uso de drogas por parte del adolescente sino también el tipo de sustancia que consumirá en función de las preferencias del grupo de referencia (Graña, Muñoz-Rivas, y Delgado, 2000; Luengo, Otero, Mirón, y Romero, 1992; Otero et al., 1989).

En este sentido, cabe exponer algunos resultados ilustrativos obtenidos por los autores en estudios recientes en los que, para el consumo de drogas legales, (p. ej., tabaco, alcohol en cualquiera de sus formas), las variables relacionadas con el grupo de iguales que demostraron ser más predictivas del posterior uso de las mismas sustancias por parte de los jóvenes fueron asociarse con amigos consumidores y la realización de determinadas actividades de ocio y tiempo libre como acudir a bares o discotecas, mientras que para el consumo de drogas ilegales (p. ej., derivados morfínicos, cocaína, drogas de síntesis) la única variable que resultó ser significativa y determinante en su valor predictivo fue el uso de cocaína por parte de los amigos (Graña y Muñoz-Rivas, 2000).

Asimismo, cabe destacar el polo opuesto de esta interacción, algunos estudios han señalado que relacionarse con amigos y compañeros que muestran claras normas y actitudes en contra de las drogas y que no consumen es un potente factor de protección para el uso de sustancias psicoactivas, llegando a ser más significativo que la influencia de la familia (cohesión familiar o castigo parental), de la escuela o de los valores prosociales (Bailey, Flewelling, y Rachal, 1992; Hemmelstein, 1995; Lo y Globetti, 1995; Towberman y McDonalds, 1993; Younoszai, Lohrmann, Seefeldt y Greene, 1999).

5.4.2.3.4. Influencia del grupo de iguales en la comisión de conductas delictivas y/o violentas

Al igual que en el apartado anterior, los datos aportados por la literatura científica señalan que el mantenimiento y exhibición de conductas delictivas y agresivas por parte del grupo de pares en edades tempranas es uno de los predictores más significativos y estables de este mismo tipo de comportamientos en la adolescencia y en etapas evolutivas posteriores (Elliot et al, 1996; Farrington, 1991; Hawkins et al.,1998; Herrenkohl, 2001; Herrenkohl, Maguin, Hill, Hawkins y Abott, 2000), llegando a ser más relevantes a la hora de explicar este hecho que otras variables como la presencia de sintomatología depresiva o el aislamiento (Brenden, Vitaro, Bukowski, 2000).

Además, no sólo es relevante el hecho de llevar a cabo este tipo de actos dentro del grupo sino también mantener actitudes favorables hacia la violencia y la agresión (incluso sin llegar a realizarlas), puesto que llegar a aceptarlas y justificarlas como principios de lícita actuación vuelve a destacarse como importante precursor y significativo predictor del

posterior comportamiento delictivo de sus miembros tanto de forma individual como grupal (Hochstetler, 2001; 2002; Matsueda y Anderson, 1998; Warr, 1996; Warr y Stafford, 1991).

A la vista de los resultados, se plantea que tanto el consumo de drogas como la presencia de conductas delinquentes y de riesgo pertenecían a un síndrome de conducta desviada para el que uno de los factores predictores más relevantes sería la influencia del grupo de iguales además de otros de carácter más contextual (p. ej., pertenencia a barrios pobres o marginales) y/o personal (p.ej., características de la personalidad) (Muñoz-Rivas y Graña, 2005).

Este planteamiento ha sido corroborado empíricamente en diversidad de estudios al detectar consistentemente aspectos como (Muñoz-Rivas y Graña, 2005):

- 1) Aquellos menores que exhiben un mayor número de conductas desviadas de las normas de comportamiento social típicas de la edad y comportamientos predelictivos o violentos son los que presentan un mayor uso y abuso de sustancias psicoactivas (Catalano, Kosterman, Hawkins, Newcomb y Abbot, 1996; Hawkins et al., 1997; Muñoz-Rivas et al., 2000) y viceversa, los adolescentes consumidores son los que se relacionan con más asiduidad e interés con amigos desviados pertenecientes a grupos no convencionales (Mirón, Serrano, Godás, y Rodríguez, 1997; Otero et al., 1989).
- 2) La presencia de conductas de riesgo se acompaña en gran número de ocasiones, del consumo de drogas, como es el conducir bajo los efectos del alcohol. En este caso, nuevamente las actitudes no punitivas del grupo hacia la realización de actos peligrosos bajo los efectos de sustancias psicoactivas y la consiguiente presión ejercida por sus miembros para llevarlos a cabo son importantes determinantes de la aceptación, inicio y mantenimiento de dichos comportamientos de riesgo en el repertorio de los jóvenes (Donovan, 1993; Shope, Raghunatha, y Patil, 2003).

En el otro extremo del continuo de influencia y tal como ocurría en otros factores de riesgo, se ha constatado también a la inversa, es decir, que el hecho de que el grupo de referencia del joven mantenga actitudes y comportamientos prosociales rechazando cualquier comportamiento de carácter agresivo y/o antisocial que afecte a otros se erige como importante factor de protección al correlacionar negativamente con la presencia de dichas conductas, así como con el consumo de drogas (Fergusson y Horwood, 1996; Keenan, Loeber, Zhang, Stouthamer-Loeber, y Van Kammen, 1995; Prinstein, Boergers, y Spirito, 2001).

5.4.2.4. Pertenencia a bandas urbanas de carácter violento

Los jóvenes miembros de las bandas tienen mayor grado de participación en la comisión de delitos, sobre todo violentos, que los jóvenes que no son miembros de estas aunque se relacionen con amigos cuya conducta sea altamente delictiva (Battin, Hill, Abbott, Catalano y Hawkins, 1998; Craig, 2002; Esbensen y Huizinga, 1993; Huizinga y Schumann, 2001; Sharp, Aldridge y Medina; 2006; Thornberry, 2001; Walker-Barnes y Mason, 2001).

Thornberry, Krohn, Lizotte y Chard-Wierschem (1993), basándose en los datos de *Rochester Youth Development Study* realizado en Estados Unidos, destaca que los miembros de una banda tienen un mayor compromiso con la delincuencia que los jóvenes que no se asocian con ninguna banda. Como muestran estos autores, el 98,1% de los miembros de las bandas estaban involucrados en la delincuencia general (llevar armas, hurtos, destrucción de la propiedad, peleas, etc.), frente al 68,4% de los jóvenes que no mantienen vínculos estables con las bandas. La diferencia en el grado de participación en las actividades violentas (como robos, atracos, violación, etc.) entre los miembros de las bandas y los jóvenes que no se asocian con ninguna banda es aún más significativa: el 90,6% de los integrantes de las bandas han reconocido su participación en tales actividades frente al 46,4% de los jóvenes no integrantes. Por otro lado, en el mismo estudio, al referirse al consumo y distribución de droga la diferencia también es considerable: a los miembros de la banda les corresponden el 65,1% y el 39,5% frente al 23,3% y el 9,5% de los no miembros respectivamente. Además, los integrantes de bandas callejeras tienen mayor probabilidad de ser arrestados en comparación con los no miembros: un 54% frente a un 31% respectivamente (Kazyrytski, 2008).

Resultados similares también han sido obtenidos en el caso de las chicas que han admitido formar parte de alguna banda. Respecto de la participación femenina los datos indican que la frecuencia y la prevalencia del compromiso de las chicas miembros de las bandas con la delincuencia son similares a los de los chicos. Los resultados mostraron que un 94,4% de las chicas que se asocian con bandas estaban involucradas en la delincuencia general frente al 56,1% de las chicas que no estaban asociadas a bandas (Kazyrytski, 2008).

Asimismo, estudios posteriores como el de Bennet y Halloway (2004), o el de Sharp et al. (2006), ambas investigaciones fueron llevadas a cabo con jóvenes de Inglaterra y Gales, llegando a las mismas conclusiones. Los miembros de las bandas tenían mayor probabilidad, a diferencia de los jóvenes con comportamiento desviado pero que no pertenecían a ninguna

banda, de cometer delitos contra la propiedad, delitos relacionados con venta de droga y con la manifestación de la violencia. Así, en el segundo de los estudios mencionados, apuntaban que el 6% de todos los jóvenes pertenecientes a bandas entre 10 a 19 años, fueron responsables de una quinta parte de delitos como robos, agresiones, robos en el domicilio, hurtos, daños de la propiedad y venta de droga de los cometidos por todos los jóvenes de esta edad.

Otros estudios que llegan a la misma conclusión, sugieren que el pertenecer a una banda contribuye a la delincuencia más allá de la mera influencia de tener pares delincuentes (Battin, Hill, Abbott, Catalano y Hawkins, 1998). La investigación también sugiere que está asociado con delitos más serios y violentos en la juventud (Thornberry, 1999). Como se demostró a través de los estudios de Seattle, el pertenecer a una banda a los 14 y 16 años predecía comportamientos violentos a los 18 años (Maguin et al., 1995). Así, tres de los estudios longitudinales más importantes llevados a cabo con adolescentes, el de Rochester (Thornberry, 1996), el de Seattle (Hill, Howell, Hawkins y Battin, 1996), y el de Denver (Huizinga, 1997), confirmaron que los jóvenes que presentaban conductas antisociales presentaban mayor probabilidad de pertenecer o ser miembro de una banda, a la vez que participan en más actos delictivos y violentos.

Del mismo modo, pertenecer a una banda se ha relacionado con presentar una mayor promiscuidad sexual (Bjerregaard y Smith, 1993; Le Blanc y Lanctot, 1999), mayor consumo de alcohol y drogas (Bjerregaard y Smith, 1993; Cohen, Williams, Bekelman y Crose, 1994; Thornberry et al., 1993), mayor violencia (Friedman, Mann y Friedman, 1975; Le Blanc y Lanctot, 1999), pertenencia de un arma (Bjerregaard y Lizotte, 1995) y más delincuencia general (Curry y Spengel, 1992; Esbensen y Huizinga, 1993; Le Blanc y Lanctot et al., 1999).

Cairns, Cadwallader, Estell y Neckerman (1997) postularon tres vías fundamentales para referirse a la importancia de las bandas en la comisión de las conductas antisociales: a) representan la reunión de individuos agresivos y dominantes que tienen un papel de control de las redes sociales en las que operan; b) muchos individuos que ingresan en bandas son jóvenes desarraigados y alienados que se escapan de casa y se convierten en personas sin techo; c) algunas bandas operan como prósperos negocios que están edificadas sobre el tráfico de drogas ilegales o al menos participan intensamente en él.

Con respecto a los efectos de la banda en el comportamiento de sus miembros se suele hablar de la existencia de tres modelos explicativos (Craig, 2002):

- 1) El *modelo de selección (Selection Model)*: las bandas reclutan a los individuos entre quienes ya han manifestado conducta delictiva o entre quienes están predispuestos a manifestarla. La influencia del grupo no es la causa de que sus integrantes sean delincuentes; los jóvenes al unirse con los iguales que desarrollan comportamiento criminal, participan en las actividades delictivas debido a la predisposición que ya había sido adquirida antes de su ingreso en la banda.
- 2) El *modelo de facilitación social (Facilitation Model)*: pone un mayor énfasis sobre las normas, los procesos grupales y las interacciones dentro de la banda que facilitan el aumento de la delincuencia. Según este modelo, los miembros de las bandas no tienen diferencias intrínsecas respecto de los jóvenes que no son miembros de las bandas. Sin embargo, la influencia del grupo comporta que su nivel de participación en las actividades delictivas aumente.
- 3) El *modelo mixto (Enhancement Model)*: supone el uso conjunto del Selection Model y del Facilitation Model. Los miembros que ingresan en las bandas ya de antemano son más proclives a la comisión de delitos que los individuos que no mantienen vínculos con la realidad callejera. Por otro lado, al formar parte del grupo, el grado de compromiso con el delito aumenta.

Debe tenerse en cuenta que los resultados de las investigaciones de campo realizadas sobre la delincuencia de las bandas callejeras ofrecen la posibilidad de que sean aplicables los tres modelos mencionados. Sin embargo, el *facilitation model* y el *enhancement model* han obtenido un mayor respaldo por parte de la comunidad de investigadores (Battin et al., 1998; Decker y Van Winkle, 1994; Gordon et al, 2004; Thornberry, Krohn, Lizotte, Smith, y Tobin, 2003), subrayando además que al igual que el compromiso y actividad antisocial aumenta el ingreso en la banda, también han comprobado una disminución de la participación de los miembros de la misma en actividades delictivas cuando estos abandonan sus grupos.

Thornberry (2004) ha encontrado que los delincuentes infantiles o de inicio temprano tienden más a asociarse con iguales delincuentes y a formar parte de bandas, que los que inician su comportamiento antisocial en la adolescencia o los jóvenes no antisociales.

La mayoría de los académicos estadounidenses destacan el carácter juvenil de las bandas calleras (Esbensen y Huizinga, 1993). La participación de los jóvenes en la banda tiene una duración temporal relativamente corta y cuando los jóvenes alcanzan la edad adulta, por regla general, su asociación con el grupo se termina.

Así, Thornberry et al. (2003), han puesto de manifiesto que la participación en las bandas callejeras es un fenómeno que corresponde sobre todo a la edad de la adolescencia y que con el paso de tiempo la participación en las bandas callejeras de los individuos que van alcanzando la edad adulta disminuye. Según se desprende de la investigación basada en los datos de *Rochester Youth Development Study*, el 22% de los jóvenes identificados como miembros de alguna banda eran adolescentes de 14 años de edad, pero tan sólo integraban estos grupos un 5,2% de jóvenes cuya edad hubiese llegado a los 17 años.

Por otra parte, Thornberry et al. (2003), ha destacado otro rasgo del fenómeno de las bandas de bastante interés, en este caso el referido al género de sus integrantes. Las chicas en la adolescencia temprana suelen tener un mayor porcentaje de participación en las bandas en comparación con los chicos: a la edad de 14 años el 24,5% de las chicas han sido miembros de bandas frente al 19,9% de los chicos. No obstante, el porcentaje de asociación de las chicas con los grupos disminuye con la edad más rápidamente que la asociación de los jóvenes varones: a la edad de 17 años, 8,6% de los chicos han sido integrantes de bandas frente a sólo el 1,8% de las chicas.

Por último, otros investigadores que han llevado a cabo estudios cualitativos sobre las actividades de las bandas callejeras en E.E.U.U., destacan que la mayoría de los miembros de las bandas abandonan sus grupos al alcanzar la edad adulta y se incorporan a la sociedad convencional, pero otros pueden seguir manteniendo relaciones con las bandas aunque ya hayan abandonado el período de su adolescencia. En muchos casos, este hecho se encuentra relacionado con la imposibilidad de integrarse al mundo laboral debido a un escaso desarrollo de sus habilidades laborales, así como una escasa formación educativa reglada (Fleiser, 1995; Hagedorn, 1998; Moore, 1991).

5.5. Desarrollo del ocio como factor de riesgo

Cuando se analizan las formas y funciones que los adolescentes otorgan a la ocupación del tiempo libre es importante señalar que, en este sector de la población, las necesidades que se persiguen cubrir se suelen referir a la búsqueda de evasión relacionad directamente con el consumo (ocio destinado a superar el aburrimiento, la rutina), frente a un ocio más reflexivo (ocio dirigido al crecimiento personal), o de descanso actividades centradas en la recuperación del desgaste psicológico y fisiológico derivado de la carga profesional) (Aguinaga y Comas, 1997; Cuenca, 1995).

Persiguiendo los fines señalados (evasión, diversión), los jóvenes optan por aquellos servicios y/o lugares recreativos que faciliten su consecución, haciendo uso de la amplia oferta de centros de ocio-consumo de los que se dispone (Muñoz-Rivas y Graña, 2005).

Por tanto, los estudios señalan que un alto porcentaje de jóvenes elige preferentemente aquellos lugares en los que pueden desarrollar actividades “divertidas” y “liberadoras” que suponen una ruptura con la rutina cotidiana. Por ello, una gran mayoría optará por invertir su tiempo libre durante los fines de semana en actividades de ocio como ir a bares o discotecas, según informaba ya el Plan Nacional sobre Drogas (PSND, 2000), este porcentaje se sitúa en prácticamente el 80% de los estudiantes de secundaria, frente a otras como el cine y el teatro, la práctica de deportes u otras aficiones.

Cuando el ocio se centra exclusivamente en la diversión, frente a un empleo más productivo del tiempo libre, y se utilizan preferentemente lugares como bares o discotecas y se valora subjetivamente este tipo de ocio como insatisfactorio y/o frustrante, se establece una situación de riesgo que puede llegar a conducir a problemas de inadaptación social, búsqueda de conductas marginales, actos cercanos a la delincuencia y/o el consumo de drogas y la violencia (Robins, 1995; Zill, Nord, y Loomis, 1995).

Diversos estudios han señalado que la ocupación del tiempo libre centrada en la realización de actividades de ocio relacionadas con las salidas nocturnas, la participación frecuente en fiestas y la asistencia repetidas a bares, pubs y discotecas se relaciona de forma significativa con el consumo de drogas (Alonso y Del Barrio, 1994; Borden, Donnermeyer, y Scheer, 2001; Calafat et al., 2000; Muñoz-Rivas et al., 2000) y el desarrollo de pautas sexuales de riesgo (McKee, 1999; Van der Akker y Lees, 2001).

Según estudios llevados a cabo con población española (Muñoz-Rivas et al., 2000; PSND, 2000), se constata que el consumo de alcohol y otras drogas entre los jóvenes de 15 a 29 años se concentra fuertemente durante el fin de semana (viernes, sábado y domingo) decreciendo notablemente durante los días laborales y se relacionan en gran medida con su forma de divertirse concentrada en los fines de semana y dirigida básicamente a la liberación y al descontrol (Muñoz-Rivas y Graña, 2005). Aunque cada vez con mayor frecuencia puede observarse que entre jóvenes ociosos o con una escasa motivación y compromiso por realizar

actividades formativas y/o laborales, la presencia diaria de consumo de derivados del cannabis.

En un estudio realizado por Bellis, Hale, Bennet, Chaundy y Kilfoyle (2000), con jóvenes ingleses tras su paso por lugares vacacionales conocidos por su vida nocturna, se encontró que el hecho de cambiar sus patrones diurnos de ocupación del tiempo libre a los nocturnos durante sus vacaciones marcaba ya un incremento significativo del uso de alcohol, tabaco y otras drogas, además del mantenimiento de un mayor número de conductas sexuales de riesgo.

Por lo que respecta al hecho de desarrollar preferentemente las actividades recreativas en lugares como bares o discotecas, los estudios señalan nuevamente que frecuentar este tipo de lugares como forma habitual de pasar el tiempo de ocio con los amigos es un importante predictor del uso de sustancias y aquellos jóvenes que lo hacen presentan un consumo significativamente superior de alcohol, tabaco y fármacos sin prescripción médica (p. ej., estimulantes, anfetaminas) en comparación con aquellos otros que salen frecuentemente con los amigos al cine, a pasear o a reunirse en espacios abiertos en actividades estructuradas (Calafat et al, 2000; Graña y Muñoz-Rivas, 2000; Muñoz-Rivas et al., 2000). Al intentar explicar este hecho, Calafat et al., (2000) proponen que la presión hacia el consumo en discotecas o bares es especialmente alta, puesto que cada una de las sustancias de fácil acceso en estos lugares posee un componente simbólico muy importante para el adolescente al asegurar la diversión, la capacidad para hacer amigos, ligar y/o afianzar las relaciones interpersonales, la consecución de estados emocionales o sensoriales que les ayuden a olvidar los problemas cotidianos y, especialmente, les hace sentir que se aproximan al mundo adulto teniendo la sensación de ser libres y dueños de sus vidas.

Por último, en el estudio de Giorgi (2012), se pone en relación la estructuración de las actividades de ocio con la delincuencia juvenil y el autor concluye que la relación entre las actividades no estructuradas y la conducta delictiva resultaron significativa para ambos sexos. Sin embargo, se observa una marcada diferencia entre chicos y chicas en cuanto a la implicación en la delincuencia y esto para todos los comportamientos delictivos, con la excepción de los hurtos en almacenes y el consumo de alcohol. Estas anomalías, señala el autor podrían explicarse por el hecho de que estos dos tipos de comportamientos, a diferencia

de los otros, no son ni violento, ni muy estigmatizado, lo que implica que tanto chicos como chicas estén involucrados de manera similar.

Asimismo, los resultados a nivel general constatan que las actividades estructuradas reducen globalmente los riesgos de adoptar comportamientos delictivos y contrariamente, las actividades no estructuradas aumentan la implicación de los adolescentes en este tipo de comportamiento (Giorgi, 2012). Por otro lado, en el mismo estudio, el autor señala que los jóvenes más supervisados por sus padres, tienen menos probabilidades de estar involucrados en cualquier conducta criminal, pero esta variable es a menudo una de las menos predictivas.

Sin embargo, Giorgi (2012), no aboga por la eliminación total de las actividades recreativas no estructuradas, aun siendo consciente de que si por un lado las actividades no estructuradas representan un factor de riesgo para la delincuencia, por el otro lado, también podrían contener un importante valor educativo para el individuo. De hecho esas experiencias no planificadas y no organizadas contribuyen al desarrollo de la autonomía y la identidad de los adolescentes (Caldwell y Darling, 1999; Silbereisen, Noack y Eyferth, 1986), y es precisamente por estas razones que en lugar de eliminarlas, se debe tratar de limitar el impacto adverso, alternándolas con otras más estructuradas, para que el joven tenga la oportunidad de conocer los aspectos beneficiosos propios de los diferentes tipos de recreación.

En general, la investigación ha encontrado que el tipo de entretenimiento, ya sea a través de actividades estructuradas o no, es un factor importante que debe tenerse en cuenta al abordar el tema de la delincuencia juvenil. De hecho, en el estudio de Giorgi (2012), la estructuración de las actividades en el ocio resultó predictivo incluso después de haber verificado la influencia de ciertas variables de control que se suponen ser de los factores más indicativos de la delincuencia. Los resultados del estudio son alentadores, y plantean la necesidad de realizar investigaciones más específicas sobre la relación entre el ocio o manejo del tiempo libre y la delincuencia juvenil. Es fundamental, así, tener en cuenta una gama más amplia de actividades realizadas, si se quiere revelar el peso de esta variable en el comportamiento de los adolescentes. En particular, sería interesante según Giorgi (2012), incluir en el análisis actividades estructuradas realizadas con el grupo de pares (en el seno de una asociación de carácter cultural, deportiva, política, religiosa o de otro tipo) con el fin de comprender si es la presencia de amigos la que tienen un efecto negativo o si es al contrario,

es decir, el hecho de que la estructuración de la actividad, fuese el factor determinante en la tendencia de la criminalidad en el individuo.

En este sentido, un estudio de Mahoney y Stattin (2000) encontraron que la participación en actividades estructuradas con sus compañeros (actividades extracurriculares dentro de la escuela o la comunidad) reduce el riesgo de actos delictivos y la participación en actividades no estructuradas se asocia con un aumento de la conducta antisocial.

Más allá de los aspectos ligados a la criminología, el desarrollo de actividades estructuradas y con fines educativos es un desafío que debe interesar a toda la sociedad. Este tipo de actividad constituye un elemento clave para enseñar a los jóvenes a convertirse en adultos responsables, en el respeto por los demás y las normas. Por lo tanto, como se indica en el Informe de la ONU sobre Juventud (2003), es necesario proporcionarles oportunidades para el desarrollo constructivo, dándoles los medios para participar activamente en la vida comunitaria, así como para el desarrollo psicosocial adaptativo (ONU, 2003).

5.6. Resumen

Desde la infancia, los niños se inician en su desarrollo y entrenamiento de habilidades y afectos en combinación con los elementos propios de lo lúdico y ambas dimensiones potenciarán otras esferas que conformarán la personalidad del adolescente (Úcar, 2001). Asimismo, en el adolescente juega un papel de socialización, estando en el uso que este haga en relación al tiempo libre (exento de cargas) donde la función predominante (productiva o no) que de éste se haga y la satisfacción que produce son aspectos determinantes para entender su influencia o poder como variable de riesgo (Puig y Trilla, 1996).

De este modo, el ocio que se encuadraría dentro del concepto de tiempo libre, incluye diferentes dimensiones: la autonomía (el sujeto debe percibirse como libre para elegir lo que quiera hacer), la finalidad (el ocio se busca por sí mismo, no hay otro objetivo) y la actividad (el ocio debe ser grato y placentero). Así, para los adolescentes el ocio simboliza la magnificación de la ruptura con el mundo adulto, a través de una teatralización hedonista del “no límite”, lo que puede llevar en ocasiones a comportamientos disruptivos con el único afán del cambio, búsqueda de identidad, donde se disparan las conductas de riesgo, a través de una legitimación del “no control” como algo intrínseco al ocio, donde encontrar el límite se encuentra en manos del participante, pudiendo aumentar dicho riesgo rasgos grupales en según qué contextos (Ballesteros et al., 2009).

Así, la búsqueda de identidad personal, la incertidumbre hacia el futuro y la falta de planificación, fenómeno que Martín y Velarde (2001) denominaron como presentismo, puede llevar al adolescente a explorar las gratificaciones más inmediatas, sin tener en cuenta otras consecuencias, favoreciendo el incremento de conductas de riesgo (Gardner, 1993). Sin embargo, como señala Zarzuri (2000), los factores de vulnerabilidad en los adolescentes están más relacionados con las contingencias vinculadas a las causas que generan el riesgo, que con el riesgo en sí mismo. Si bien, el problema que supone convertir el ocio en una rutina, supone que todo el tiempo, se convierte en tiempo libre, en lo que lo anodino se hace habitual y donde los espacios de ocio quedan subyugados a las inercias del tiempo. Esto supone iniciar la espiral de riesgo de un adolescente a través del ocio, lo que nos lleva a la conclusión de que esta banalización del ocio o infrautilización del tiempo libre, viene determinado básicamente por cuatro elementos: 1) las situaciones marcadas por la ausencia de intercambio relacional (siempre los mismos, en el mismo sitio y haciendo las mismas cosas); 2) la disminución de los estímulos positivos y motivadores (contacto limitado a lo inmediato, pasivo e inamovible); 3) rechazo al ambiente educativo, ya que por norma general este incita a la movilización y; 4) ausencia de identificación con ambientes normalizados sobre los que poder articular dinámicas de relación positiva (Navarro et al., 2013).

De cara a contextualizar el ocio dentro de la criminología y más concretamente con la explicación a nivel teórico que ofrece en referencia a la génesis y mantenimiento de la conducta delictiva en menores, se ha atendido a los modelos compatibles con el concepto de ocio, siendo las teorías de la socialización las que han ayudado a poder unir ambos constructos.

Por último y más concretamente, en el estudio de Giorgi (2012), se pone de relación la estructuración de las actividades de ocio con la delincuencia juvenil, concluyendo el autor que la relación entre las actividades no estructuradas y la conducta delictiva resultaron significativas para ambos sexos, lo que igualmente sucedía a la inversa, las actividades estructuradas reducían globalmente los riesgos de adoptar comportamientos delictivos. Sin embargo, este autor no aboga por la eliminación total de las actividades recreativas no estructuradas, aun representando un factor de riesgo para la delincuencia, ya que según él también podrían aportar un importante valor educativo para el adolescente. Así, en lugar de sustituirlas por completo habría que proporcionar habilidades de afrontamiento.

En general, aunque la investigación al respecto es escasa, los datos sugieren que el tipo de entretenimiento, ya sea mediante actividades estructuradas o no, es un factor importante que debe tenerse en cuenta al abordar el tema de la delincuencia juvenil. De hecho en el estudio de Giorgi (2012) mencionado anteriormente, la estructuración de las actividades en el ocio resultó predictivo incluso después de haber verificado la influencia de ciertas variables de control que se suponen son factores indicativos de la delincuencia juvenil reconocidos por la investigación empírica. Los resultados del estudio son alentadores, y plantean la necesidad de realizar investigaciones más específicas sobre la relación entre el ocio o manejo del tiempo libre y la delincuencia juvenil.

Capítulo VI:

Programas y modelos de

tratamiento de ocio y

tiempo libre

6.1. Introducción

Los tratamientos con jóvenes infractores se dirigen a dotar a los sujetos de nuevas habilidades y competencias de comunicación e interacción humanas, a ofrecerles nuevas experiencias para la integración social (familiar, educativa, laboral) y a promover la inhibición de ciertas actitudes para las conductas infractoras (Israel y Hong, 2006; Palmer, 2003).

Así, los tratamientos implican esencialmente modificar ciertos factores de riesgo dinámicos presentes en los infractores, que constituyen los objetivos fácticos de la intervención. De esta forma, el diseño y la aplicación de un tratamiento con menores infractores debe iniciarse con la evaluación de las necesidades y carencias relacionadas con su actividad delictiva. Para elegir el tratamiento más adecuado, debería, en todo caso, considerarse una intervención basa en un modelo teórico plausible del comportamiento delictivo y de su tratamiento. Después, se debería seleccionar, de entre las disponibles, aquella intervención que resulte más acorde a las necesidades de tratamiento que se han detectado, o en su defecto, adaptar una iniciativa ya existente, o bien diseñarla ex profeso de manera individualizada. Para conseguir la máxima eficacia, el programa tiene que aplicarse de la manera más completa posible y según la temporalización prevista. Por último, es imprescindible evaluar la eficacia del tratamiento aplicado (Martínez y Redondo, 2013).

En la actualidad, se aplican programas de tratamiento y rehabilitadores muy diversos por lo que se refiere a la base teórica sobre la que se fundamentan. Sin embargo, las perspectivas más empleadas y conocidas se corresponden a las mencionadas teorías del aprendizaje social y modelo de riesgo-necesidades-responsividad (Cooke y Philip, 2001; Cullen y Gendreau, 2006; Howell, 2009; Lipsey, 2009; Ogloff y Davis, 2004; Redondo, 2008a), además del modelo cognitivo-conductual, que ha dado lugar al diseño de numerosas técnicas psicológicas de tratamiento de alta eficacia, aplicadas en muchos de los programas de rehabilitación con delincuentes (Redondo, 2008b).

En cuando a la eficacia de los tratamientos, en el estudio de Martínez y Redondo (2013) refieren que, en general, obtienen una eficacia entre moderada y baja. Concretamente, los metanálisis existentes obtienen un tamaño del efecto promediado de entre $r=0,07$ y $r=0,13$ (Jolliffe y Farrington, 2009; Lipsey, 1999a, 1999b; Redondo, Sánchez-Meca y Garrido, 1999a, 1999b; Sánchez-Meca y Redondo, 2002). Es decir, las intervenciones aplicadas reducen entre

el 7% y el 13% la reincidencia en los grupos tratados respecto a los grupos de control o no tratados. Pese a que la magnitud de dicha eficacia pueda resultar pequeña, es relevante en términos de reducción de posibles víctimas y agresores (Martínez y Redondo, 2013).

Los meta-análisis revisados por Martínez y Redondo (2013), indican que la mayor eficacia terapéutica se da en las intervenciones fundamentadas en el modelo conductual y cognitivo-conductual (con un tamaño del efecto $r=0,12$), así como, en aquellas que tienen como objetivo el desarrollo de habilidades de vida ($r=0,18$). No obstante, con carácter general, las terapias cognitivo-conductuales podrían llegar a alcanzar una eficacia de en torno a $r=0,25$. También, las intervenciones basadas en comunidades terapéuticas con sistemas de organización estructurados y los programas de derivación de los jóvenes a la comunidad han demostrado una eficacia elevada ($r=0,12$ y $r=0,15$, respectivamente) (Redondo, 2008b; Redondo, Sánchez-Meca y Garrido, 2002a, 2002b). En cambio, las intervenciones basadas en el modelo disuasorio, o de cariz meramente punitivo, como los llamados *boot camps*, fundamentados en la disciplina y el castigo suelen mostrar bajo o nula eficacia terapéutica ($r=0,00$ y $r=0,01$) (Cooke y Philip, 2001; Cullen y Gendreau, 2006).

6.2. Teorías sobre el tratamiento del comportamiento delictivo

Existen en la literatura científica diversas perspectivas teóricas que sustentan el tratamiento con jóvenes delincuentes, diferenciándose entre ellas por los distintos mecanismos que identifican como implicados en el desarrollo del comportamiento delictivo, por lo que cada uno de los enfoques atenderá a diferentes objetivos en sus tratamientos. A continuación, se expone en la Tabla 6.1. un breve resumen de los principales enfoques teóricos, pasando posteriormente a detallar aquellos que en la investigación se reconocen con mayor eficacia.

Tabla 6.1. Principales perspectivas teóricas en las que se sustentan los tratamientos con menores infractores

PERSPECTIVA TEÓRICA	MECANISMOS IMPLICADOS EN EL COMPORTAMIENTO DELICTIVO	OBJETIVOS DE LOS TRATAMIENTOS
Teoría del Aprendizaje Social (Burguess y Akers, 1966)	<ul style="list-style-type: none"> • Asociación diferencial • Definiciones antisociales • Imitación • Reforzamiento diferencial 	Enseñar a los jóvenes, mediante técnicas de aprendizaje, y específicamente la técnica de imitación de modelos, nuevas habilidades para la vida y definiciones prosociales que les ayuden a conseguir una mejor reintegración social.
Modelo cognitivo-conductual (Beck, Ellis o Meichenbaum son algunos autores destacados de esta perspectiva)	<ul style="list-style-type: none"> • Déficits en competencias relativas a habilidades de conducta, cogniciones y emociones. 	La finalidad de las intervenciones sería resolver tales déficits, entrenando para ello a los sujetos en todas estas competencias que son necesarias para la vida social. Empleo preferente de dos herramientas básicas: el análisis topográfico y el análisis funcional. Utilización de un amplio espectro de técnicas psicológicas que han demostrado eficacia: entrenamiento en habilidades sociales, reestructuración cognitiva, relajación, así como autocontrol de impulsos.
El Modelo de Riesgo-Necesidades-Responsividad (Andrews y Bonta, 1994, 2010)	<ul style="list-style-type: none"> • Confluencia de factores de riesgo estáticos y dinámicos 	<p>Los tratamientos deben seguir los tres principios siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Principio de riesgo:</i> previamente a la aplicación del tratamiento, hay que evaluar el riesgo de los individuos, para ajustar la intensidad de las intervenciones a dicho riesgo. ▪ <i>Principio de necesidad:</i> los objetivos del tratamiento deben ser las necesidades criminógenas o factores de riesgo dinámicos de los individuos. ▪ <i>Principio de responsividad:</i> los tratamientos deben tener en cuenta aquellos factores que puedan dificultar su eficacia o aplicación (características individuales de los sujetos o factores externos).
Modelo de Tratamiento: Vidas Satisfactorias (Ward, 2002)	El comportamiento delictivo se traduce en déficits de recursos de los sujetos para lograr satisfacer sus objetivos.	Enseñar habilidades y potenciar los propios recursos para buscar su bienestar, encaminándolos hacia un estilo de vida satisfactorio a las circunstancias cambiantes.
Terapia multisistémica (Edwards, et. al., 2001; Henggeler y Borduin, 1990)	<ul style="list-style-type: none"> • Origen multifactorial, papel relevante de las relaciones familiares. • Los problemas de conducta se mantendrían 	Las intervenciones propuestas por la terapia multisistémica se desarrollan, especialmente, en la propia familia, o en las interacciones de ésta con los otros sistemas relacionados. Buscan solventar

	debido a la aparición de transacciones problemáticas en los diferentes contextos en los que se desarrolla el individuo: familia, escuela, grupo de amigos, vecindario, así como otras instituciones de la comunidad.	las dificultades de relación entre los sistemas.
Disfunciones psicológico-emocionales	El comportamiento antisocial es, en realidad, un síntoma de otras problemáticas más profundas de la psique del individuo.	Se aplican “terapias psicológicas” orientadas a resolver disfunciones personales, tales como trastornos de personalidad, carencias afectivas, complejo de inferioridad.
Carencias educativas	El delito se produce por graves limitaciones en la educación del menor.	Las intervenciones consisten en el desarrollo de planes de “educación compensatoria” que resuelvan tales carencias de educación mediante un estilo educativo afectuoso y de control de límites

Fuente: Tabla tomada de Martínez y Redondo (2013)

6.2.1. Aprendizaje social y facetas del comportamiento delictivo (hábitos, emociones y cogniciones)

En la actualidad existe un amplio consenso acerca de que la Teoría del Aprendizaje Social –en sus modernas formulaciones, que incorporan la interacción dinámica entre factores conductuales, emocionales y cognitivos- constituye la explicación más completa y parsimoniosa sobre cómo se inician y se mantienen las carreras delictivas (Andrews y Bonta, 2006; McGuire, 2006; Ogloff y Davis, 2004). El enunciado más avalado por lo que se refiere al análisis de la delincuencia es el de Akers (1997; Akers y Sellers, 2004; Burgess y Akers, 1966), tomando como base la previa teoría de la asociación diferencial de Sutherland (formulada en 1924) y los modelos psicológicos del aprendizaje.

La teoría del aprendizaje social de Akers (1997) propone que el comportamiento delictivo se aprende a partir de la acción de cuatro mecanismos interrelacionados:

1. La asociación diferencial (es decir, preeminente) con personas que muestran actitudes y hábitos delictivos (familiares, amigos, vecinos, etc.).
2. La entrada en contacto de influencia preferente (a través del mecanismo anterior de asociación diferencial) con definiciones favorables al comportamiento

antisocial e ilícito (definiciones de conducta, justificaciones, negación, etc.) y la adquisición por el individuo de tales definiciones predelictivas.

3. El reforzamiento diferencial de las conductas, hábitos y definiciones delictivas mediante recompensas tanto sociales como materiales (beneficios del delito) o a través de autorreforzamiento o lenguaje interno.

4. La imitación de modelos delictivos.

La teoría identifica con claridad los elementos esenciales que, de acuerdo con multitud de investigaciones, desempeñan papeles decisivos en los aprendizajes delictivos, a saber: a) la imitación de modelos antisociales y el reforzamiento de las propias conductas y hábitos delictivos y b) la generación en el sujeto de estructuras cognitivas (y, en íntima vinculación, emocionales) que dan cobertura y coherencia a las rutinas antisociales.

Los estímulos ambientales de toda índole (materiales, sociales, normativos, etc.) influyen en los seres humanos, favoreciendo la realización o la inhibición de comportamientos o respuestas. Las personas son en este proceso no elementos pasivos, sino agentes activos e intencionales, a partir de los anteriores mecanismos interconectados de regulación conductual (Damasio, 2004; LeDoux, 1999; Raine, 2000): sus aprendizajes y hábitos, su sistema emocional y su sistema cognitivo. El complejo conductual/emocional/cognitivo, cuyas bases son los sistemas nervioso y endocrino, acumula información experiencial del individuo, genera preferencias y hábitos y prefabrica opciones de conducta (White, 2000). Las respuestas del individuo, que suelen ser coherentes con sus hábitos, preferencias y opciones de conducta más probables, acaban teniendo consecuencias gratificantes o aversivas para él. Cada nueva secuencia experiencial constituye un nuevo aprendizaje del individuo que la vive, que puede reestructurar la memoria acumulada de su historia cognitivo-emocional y alterar sus preferencias y opciones de conducta futura.

Por lo que lo que la teoría del aprendizaje social nos está sugiriendo es que la adquisición y la estabilización de la carrera delictiva es amparada por varias facetas del individuo que acaban orientando sus flechas de influencia en idéntico sentido. Dichas facetas son: a) la faceta de los hábitos antisociales (rutinas que implican hurtar, robar, amenazar, acosar, agredir, carecer de un trabajo, abusar del alcohol y otras drogas, ir con delincuentes,

etc.); b) la faceta del pensamiento (que propende a amparar y justificar rutinas antisociales), y, en íntima conexión con la anterior (a veces, de modo inseparable), y c) la faceta de la desregulación emocional (que puede operar como detonante de agresión y otras conductas antisociales). Aunque no se conocen con gran precisión los mecanismos de interacción entre las anteriores facetas del comportamiento delictivo (y del comportamiento humano en general), sí que se constata la interdependencia y recíproca influencia entre ellas. Así, la influencia directa sobre una sola de las anteriores facetas del individuo (por ejemplo,, promoviendo cambios en su pensamiento) es susceptible de influir en el comportamiento en su conjunto, lo que implica también alterar, mediante un proceso de influencia indirecta, el estado de las restantes facetas de la conducta (hábitos y emociones) (Redondo, 2008a).

Existe una amplia evidencia empírica de que el riesgo de comportamiento antisocial – que implica a las facetas “hábitos delictivos”, “distorsiones y justificaciones de los delitos” y “desregulación emocional”- puede reducirse mediante la incidencia directa (por ejemplo, como resultado de un tratamiento) en alguna de las antedichas facetas, lo que acaba teniendo influencia sobre el comportamiento global del sujeto y sobre las restantes facetas implicadas. Así, el riesgo delictivo puede reducirse mediante la enseñanza de habilidades prosociales (faceta de los hábitos), a través del desarrollo del pensamiento social (faceta cognitiva) o mediante el entrenamiento para mejor regulación de las emociones (faceta emocional). Sin embargo, es muy probable que la opción más sólida y potente para disminuir el riesgo de conducta antisocial sea la intervención coordinada a través de todos los anteriores sistemas, facilitando el que las flechas de la dirección de la intervención dentro de las tres facetas converja. Es decir, los cambios de comportamiento coherentes y duraderos en el tratamiento de la conducta antisocial requieren que las facetas de los hábitos, las emociones y las cogniciones de un individuo se impulsen y se acaben orientando en el mismo sentido prosocial. De otra manera, las mejoras logradas en facetas aisladas podrían resultar efímeras (Redondo, 2008a).

Por otro lado, la investigación neuropsicológica avanzada está poniendo de manifiesto la organización del sistema nervioso en estructuras neurales que hacen que todo flujo de información (y en consecuencia toda opción de comportamiento) deba transcurrir por circuitos integrados de memoria emocional (en núcleos basales y más primitivos del cerebro) y de análisis racional (en zonas del córtex cerebral) (Damasio, 2004; LeDoux, 1999; Raine, 2000). Ello significa que la evolución ha “diseñado” un “procedimiento” complejo de

comportamiento que “obliga” a revisar, al adoptar opciones de conducta, las experiencias vividas, las rutinas de solución “archivadas” para cada ocasión, los “recuerdos” emocionales (de placer/displacer) de dichas experiencias y rutinas y las expectativas “más racionales” que pueden hacerse acerca de las opciones de conducta barajadas en cada situación específica. Probablemente en lo anterior radique la complejidad y la “impredictibilidad” del comportamiento humano.

6.2.2. Modelo de Tratamiento: Riesgo-Necesidades-Responsividad (Andrews y Bonta, 1992-2006)

Más allá de los modelos terapéuticos generales, se han formulado dos teorías específicas de la rehabilitación de los delincuentes. La primera fue el modelo de psicología criminal y de tratamiento, propuesto por Andrews y Bonta en los años noventa y desarrollado en diversos trabajos posteriores, conocido el modelo de riesgo-necesidades-responsividad. Dicho modelo se fundamenta en la teoría del aprendizaje social de Bandura y Walters (1983), en su versión psicológica, y de Burgess y Akers (1966) en su formato criminológico ya referido) y del condicionamiento operante (Skinner, 1977).

A partir de estas bases teóricas generales, el modelo establece tres principios básicos del tratamiento de los delincuentes (Andrews y Bonta, 2006; Cooke y Philip, 2001; Cullen y Gendreau, 2006; Howell, 2003; Ogloff y Davis, 2004):

1. *El principio de riesgo*, que tiene dos posiciones centrales: 1) para administrar a los delincuentes una intervención apropiada a sus características es necesario evaluar previamente y predecir el nivel de riesgo de reincidencia de cada individuo, y 2) los individuos con alto nivel de riesgo deben recibir intervenciones más intensivas. Se establece una diferenciación importante entre factores de riesgo estáticos, relativos a características profundas del sujeto o a su pasado, que no son modificables, y factores de riesgo dinámicos, o “necesidades criminógenicas” (tales como cogniciones o actitudes defensivas), que se consideran directamente conectados a sus conductas delictivas y que resultan modificables (Israel y Hong, 2006; Polaschek y Reynolds, 2001).

2. *El principio de necesidad*, que significa que, aunque en apariencia son muy diversos los factores que pueden constituir objetivos hipotéticos del tratamiento (objetivos educativos, laborales, variables psicológicas como la asertividad, la autoestima, etc.) para reducir la reincidencia de los delincuentes, el tratamiento debe enfocarse a sus “necesidades

criminógenas” (Polachek y Reynolds, 2001). Se trata de aquellos factores dinámicos que, para cada delincuente (y para muchos delincuentes en general), guardan relación empírica directa con la conducta delictiva. Hasta ahora, la investigación (Ogloff, 2002) ha evidenciado que son necesidades criminogénicas factores tales como tener actitudes antisociales, tener amigos/compañeros delincuentes, abusar de sustancias tóxicas, mostrar déficit en la capacidad de resolución de problemas y presentar alta hostilidad. Por el contrario, no se ha probado claramente que sean necesidades criminogénicas variables como la baja autoestima, la elevada ansiedad, los sentimientos de alienación o el malestar psicológico genérico. Así, este modelo ha ejemplificado las implicaciones del principio de necesidad de la siguiente manera: “Si la reincidencia está reflejando la existencia de pensamiento antisocial, no hay que ocuparse de la autoestima sino del pensamiento antisocial. Si la reincidencia refleja dificultades para mantener un trabajo, no es la prioridad enseñar a buscar trabajo sino mantenerlo” (Redondo, 2008a).

3. *El principio de responsividad*, que se refiere a aquellos factores que pueden dificultar que los sujetos respondan o reaccionen adecuadamente al tratamiento. Dichos factores pueden ser internos (como un bajo nivel intelectual o la falta de motivación) o externos (las características del terapeuta, la baja calidad de la relación terapéutica o el contenido inadecuado del programa de tratamiento). La derivación aplicada del principio de responsividad es que, en función de las dificultades concretas que puedan presentar los sujetos, el tratamiento debe ofrecérseles de la manera que pueda resultarles más beneficiosa. Una recomendación es utilizar acercamientos cognitivo-conductuales, que han mostrado en general alta responsividad para amplias poblaciones de delincuentes (y de sujetos no delincuentes en múltiples problemas de conducta y patologías) (Redondo, 2008a).

Andrews y Bonta (2006) han añadido dos principios complementarios:

4. *Discrecionalidad profesional*. Dicho principio asume que, considerando la complejidad que tienen el comportamiento humano en general y el delictivo en particular, en algunos casos los profesionales (evaluadores y terapeutas) deberán adoptar decisiones que probablemente tendrán que desviarse de las evaluaciones y procedimientos estandarizados. Según los autores (Andrews y Bonta, 2006), ello puede ser necesario en alrededor de un 10 por 100 de los casos.

5. *Integridad de la evaluación y del programa.* Este principio parte de la constatación de la resistencia que presenta un parte del personal responsable de la rehabilitación a la hora de aplicar programas de tratamiento con los delincuentes y de su falta de entrenamiento específico para ello. Considerado lo anterior, se prescribe que, para garantizar la integridad de la aplicación del tratamiento y obtener el máximo rendimiento y eficacia, se supervise técnicamente tanto el uso apropiado de la evaluación como de la aplicación de los principios de riesgo-necesidad-responsividad (Redondo, 2008a).

En la Figura 6.1. se representa gráficamente el modelo de Andrews y Bonta, añadiendo entre los factores estáticos y dinámicos definidos por estos autores un tercer grupo de actores que se han denominado aquí “factores parcialmente modificables” (o factores estático-dinámicos). La base científica para ello es que algunos factores humanos (por ejemplo, algunos rasgos de personalidad tales como la impulsividad, la empatía y otros) ni son completamente estáticos e inmodificables ni son plenamente dinámicos. A pesar de su origen personal y tendente a la estabilidad, dichos factores permiten, sin embargo, ciertos cambios o reformas. Es decir, unan persona impulsiva propenderá a la impulsividad toda su vida, pero puede aprender, con esfuerzo y entrenamiento (por ejemplo, mediante un tratamiento), a anticipar e inhibir sus arrebatos de comportamiento.

Siguiendo una metáfora utilizada en la moderna terapia de aceptación y compromiso (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999; Luciano, 2001a), los factores estáticos serían “la casa”, que un delincuente tiene (en realidad, es) y que no puede ser cambiada, tal como su pasado delictivo o sus rasgos profundos de personalidad. Los factores estáticos deben ser considerados como una medida relevante (y de influencia bastante estable) del riesgo delictivo del sujeto. Su evaluación puede ayudar tanto a ponderar la magnitud global de dicho riesgo para el futuro como a indicar la intensidad de la intervención que resulta necesaria. Como se ha comentado, el “principio de riesgo” prescribe que cuanto mayor sea la magnitud global del riesgo estático, mayor deberá ser la intensidad de la intervención que se realice con el sujeto (Redondo, 2008a).

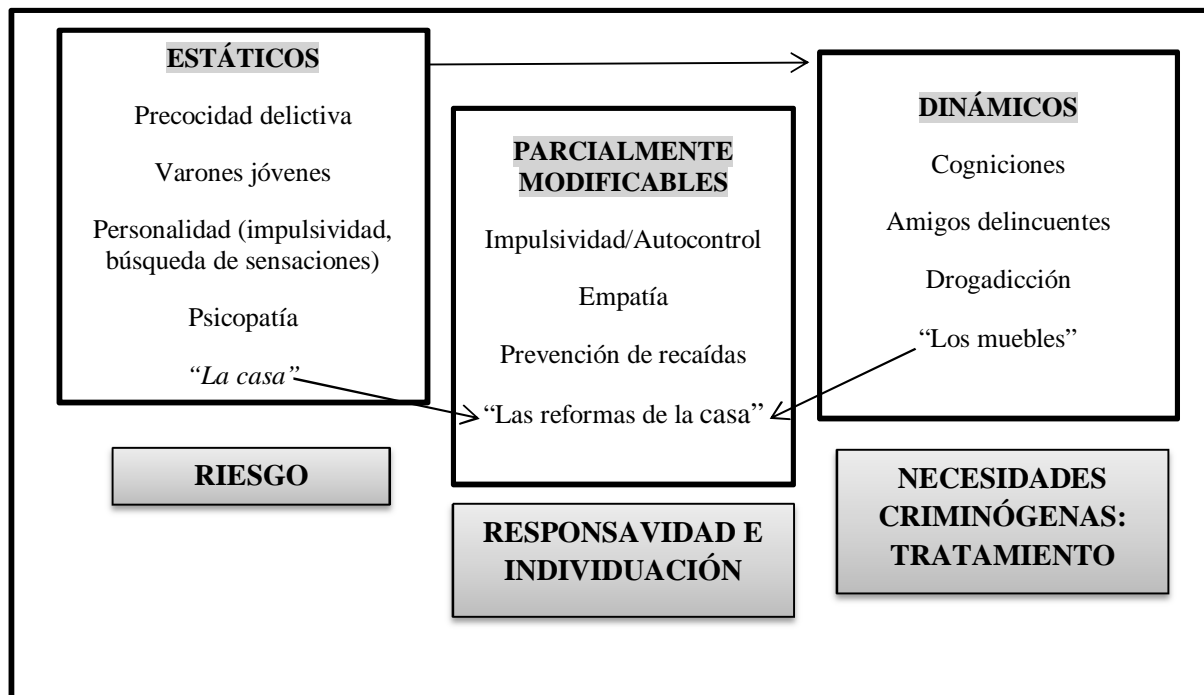
Los factores dinámicos, tales como las justificaciones delictivas, tener amigos delincuentes o las adicciones, serían los metafóricos “muebles” de la casa de una persona; los muebles sí que pueden cambiarse con relativa facilidad, pudiendo instalarse muebles nuevos y más confortables. Estos muebles metafóricos, o factores de riesgo “dinámicos”, son la esencia

del “principio de necesidad” en el modelo de Andrews y Bonta en cuanto que constituyen las necesidades criminógenas u objetivos prioritarios del tratamiento (Redondo, 2008a).

El tercer grupo de factores parcialmente modificables, que se ha añadido aquí al modelo original, hace referencia a las posibles “reformas de la casa” (es decir, las “reformas” que puede hacer la persona en su manera de ser y comportarse): la casa es la que es, y su estructura (la persona) no puede esencialmente ni ensancharse ni cambiarse, pero, más allá de la renovación del mobiliario (hábitos, creencias, etc.), “la casa” puede hacerse más funcional y acogedora, llevando a cabo pequeñas reformas (quizá modificando la división de los tabiques de las habitaciones o pintándola de nuevos colores). Estos ajustes se refieren en esencia al “principio de responsividad” o individuación del modelo de Andrews y Bonta (2006): es decir, pueden ajustarse las potencialidades del tratamiento (los cambios teóricamente posibles por medio del tratamiento) a las capacidades de los delincuentes, sus estilos de aprendizaje, sus ritmos personales, sus ritmos personales, sus intereses y preferencias, etc. En tal sentido, la aspiración sería que cada sujeto que participa en un tratamiento pueda lograr lo máximo que el tratamiento pueda lograr lo máximo que el tratamiento puede ofrecerle y que las capacidades del propio sujeto permiten (Redondo, 2008a).

A continuación, se expone la Figura 6.1., un esquema que hace referencia al Modelo de Tratamiento: Riesgos- Necesidades- Responsividad de Andrews y Bonta, (2006), extraído de Redondo (2008).

Figura 6.1. Posibilidad y límites del tratamiento en la reducción del riesgo de reincidencia: factores estáticos, dinámicos y parcialmente modificables (Redondo, 2008).



Fuente: Figura tomada de Redondo (2008)

6.2.3. Modelo de Tratamiento: Vidas Satisfactorias (Ward, 2002)

Ward y sus colaboradores (Ward, 2002; Ward y Brown, 2004) han criticado el “modelo de riesgos-necesidades-responsividad” y han propuesto un “modelo de vidas satisfactorias” de rehabilitación de los delincuentes. La principal crítica que hacen al modelo de Andrews y Bonta es que “el manejo de los riesgos es una condición necesaria pero no suficiente para la rehabilitación de los delincuentes” (Ward y Brown, 2004). Desde una psicología positiva, estos autores postulan que “el camino para reducir las tasas de reincidencia delictiva es equipar a los sujetos con las herramientas que necesitan para vivir vidas más satisfactorias, más que simplemente desarrollar manejos de riesgo cada vez más sofisticados”. Para hacer esto, los autores conciben su “modelo de vidas satisfactorias” a partir de cuatro grandes principios (Redondo, 2008a):

1. *Trabajar positivamente con los delincuentes.* Todos los seres humanos intentan lograr bienes primarios, como mantenimiento de la propia vida, satisfacción en las relaciones de intimidad y sexuales, conocimiento, excelencia en sus actividades, autonomía, paz interior, felicidad, etc. Los problemas humanos en general, y la conducta delictiva en particular, se interpretan aquí como soluciones erróneas en el camino de lograr los bienes primarios apetecidos. En el caso de la conducta delictiva, se estima que existen cuatro grandes tipos de dificultades: 1) problemas en el medio utilizado para lograr bienes o satisfacciones; 2) falta de perspectiva para un plan de vida satisfactorio; 3) conflicto o incoherencia entre objetivos, y 4) falta de capacidades para definir o adaptar un modelo de vida satisfactoria a las circunstancias cambiantes. Es decir, se considera que un sujeto comete delitos porque carece de las capacidades para caer en la cuenta de cuáles serían, en su propio contexto, los objetivos valiosos en términos personalmente satisfactorios y socialmente aceptables. Por tanto, tomando en consideración el tipo de problema de modelo *personal* de vida satisfactoria que tiene un delincuente, un plan de tratamiento debe explícitamente construirse en forma de una concepción de vidas satisfactorias que, tomando en cuenta las preferencias de los delincuentes, sus potencialidades, sus satisfacciones primarias, sus ambientes relevantes, especifique exactamente qué competencias y recursos se requieren para conseguir dichos bienes o satisfacciones.

2. *Relaciones entre riesgos y satisfacciones humanas.* De acuerdo con este modelo, las necesidades criminógenicas (del modelo de Andrews y Bonta) son marcadores que indican la existencia de problemas en los caminos de los delincuentes para buscar satisfacciones primarias. En tal sentido, detectar los riesgos en un delincuente es el primer paso, pero el segundo es diseñar un plan explícito para equipar a los sujetos con las capacidades necesarias para la obtención de satisfacciones primarias de una manera diferente.

3. *Disposición para la rehabilitación.* Este principio establece que la disposición para el tratamiento es una precondition necesaria. Ello requiere asegurar que los delincuentes poseen ciertas creencias, valores, competencias y motivación, y que el ambiente también cuenta con los recursos y apoyo necesarios para que la terapia sea “sostenible”.

4. *Actitudes de los terapeutas hacia los delincuentes.* En este principio Ward y sus colegas ponen énfasis en aspectos como la necesidad de que el terapeuta logre establecer una buena “alianza terapéutica”, que priorice la “aceptación del delincuente”, que realmente

crea en sus posibilidades de cambio y que plantee la terapia en una interacción de “autenticidad”.

6.2.4. Debate teórico y avales empíricos

Los dos modelos precedentes son teorías específicas de la rehabilitación de los delincuentes, formuladas desde presupuestos psicológicos distintos. El que son teorías específicas de la rehabilitación quiere implicar aquí que se enfocan sobre el tratamiento y las posibilidades de cambios personales mediante el tratamiento, pero no insertan explícitamente sus formulaciones en el marco más general del conocimiento criminológico, que implica otras consideraciones tales como los controles sociales (informales y formales) y las oportunidades para el delito. El hecho de que ambos modelos se basan en presupuestos psicológicos diferentes significa que, mientras que el “modelo de riesgo-necesidades” pone el énfasis en la prioridad de los factores de riesgo empíricamente conectados al delito, el “modelo de vidas satisfactorias” rechaza tal planteamiento por considerarlo mecanicista y negativista y propone equipar a los individuos con las herramientas para vivir vidas más satisfactorias (Redondo, 2008a).

El “*modelo de riesgos-necesidades*” se fundamenta en una de las teorías del comportamiento delictivo (la teoría del aprendizaje social) que ha sido más avalada por la investigación a lo largo de los últimos ochenta años, desde la formulación pionera de Sutherland en 1924 hasta los ulteriores desarrollos teóricos de Bandura y Walters (1983) y Burgess y Akers (1966; Akers, 1997, 2006; Akers y Sellers, 2004). Además, el constructo nuclear del modelo de Andrews y Bonta se asienta en resultados de múltiples investigaciones sobre carreras delictivas y factores de riesgo. Por último, una de sus derivaciones aplicadas más importantes, que es la aplicación de intervenciones cognitivo-conductuales, ha probado también que es la aproximación más efectiva en el tratamiento del comportamiento delictivo (y de otros problemas de conducta) (Akers, 2006). En suma, el modelo de rehabilitación de Andrews y Bonta cuenta con sólidos avales científicos (Tittle, 2006). Ello no obsta, por supuesto, para que la investigación futura pueda aconsejar su modificación y mejora (como siempre sucede en la ciencia) en aquellos puntos en que presente mayor debilidad (Redondo, 2008a).

Por otro lado, el “*modelo de vidas satisfactorias*”, de Ward y sus colaboradores, tiene todavía que caminar todos los anteriores senderos de la investigación. En criminología

aplicada y en psicología criminal, han sido muy pocos los desarrollos, tanto teóricos como investigadores, de los modelos “humanístico-existenciales” a los que se ha aludido con anterioridad y a los que se ha aludido con anterioridad y a los que parece adscribirse el modelo de Ward. Hasta ahora, el “modelo de vidas satisfactorias” no pasa de ser entusiasta y grandilocuente declaración de principios terapéuticos generales, sin que se sepa muy bien qué implicaciones concretas (y diferenciales con lo hecho hasta ahora) tiene para el tratamiento de los delincuentes (Ogloff y Davis, 2004). Tal y como ha comentado críticamente McGuire (2004), la formulación de Ward y sus colegas enuncia algunos de los requerimientos de conducta ética que se hacen a los psicólogos y a otros profesionales que trabajan en contextos de justicia criminal, tal y como se expresan en los códigos éticos de muchas asociaciones profesionales de psicología, pero no queda completamente claro de qué manera estas condiciones son elementos integrantes de un modelo teórico del cambio de los delincuentes (Redondo, 2008a).

6.3. Modelos teóricos y de intervención educativa en el ocio

6.3.1. Modelo de habilidad de ocio de Peterson y Gunn, 1984

El modelo de habilidad de ocio (Peterson y Gunn, 1984), es uno de los modelos conceptuales de prestación de servicios de ocio terapéutico más antiguo, más ampliamente utilizado y a la vez más debatido. Peterson (1989) señaló que la principal razón de este amplio debate era que la orientación hacia el ocio implica que el resultado final o conjunto de creencias directrices se refiere a la conducta de ocio, y que esa orientación se basa en el ámbito del conocimiento relativo al ocio como su fuente y fundamentación. La orientación terapéutica, por otro lado, apuesta por el cambio o la mejora de las conductas funcionales con el fin deseable y se basa en el conocimiento de la medicina, la psiquiatría, la psicología y las ciencias del desarrollo humano (Stumbo y Peterson, 2000).

En otras palabras, el modelo de habilidad de ocio fue elaborado pensando que el producto final de los servicios de ocio terapéutico era una mejora en el funcionamiento independiente y satisfactorio de ocio de los sujetos, también denominado “estilo de vida de ocio” (Peterson, 1981; Petterson y Gunn, 1984).

El estilo de vida de ocio es la expresión comportamental diaria de las actitudes, conciencia y actividades de ocio que se manifiesta en el contexto y entramado de toda la

experiencia vital (Peterson y Gunn, 1984). Csikszentmihalyi (1990) afirmó que las personas que aprenden a controlar su experiencia interna serán capaces de determinar la calidad de sus vidas.

La literatura especializada en la conducta y teoría del ocio hace alusión de manera principal a diversos conceptos y hallazgos relacionados con un estilo de vida satisfactorio, la calidad de vida, así como la satisfacción con la misma. Dichos conceptos son: a) la indefensión aprendida frente a la competencia o la autodeterminación; b) la motivación intrínseca, el locus de control interno y la atribución causal; c) la elección; y d) el flujo (Stumbo y Peterson, 2000).

Para enmarcar los conceptos planteados, el modelo de habilidad del ocio los justifica en base a un conjunto lógico de supuestos relativos a la conducta de ocio típica. Así, el primer supuesto es que todo ser humano necesita, requiere y se merece el ocio. El ocio ofrece oportunidades para probar nuevas conductas, experimentar la sensación de competencia, aprender nuevas destrezas, conocer gente nueva, profundizar las relaciones existentes y desarrollar un sentido más claro de uno mismo. El ocio ofrece el contexto en que las personas pueden aprender, interactuar, expresar su individualidad y autorrealizarse (Kelly, 1990).

A continuación, se especifican los cuatro conceptos sobre los que se asienta el presente modelo (Stumbo y Peterson, 2000):

1) Indefensión aprendida frente a competencia o autodeterminación.

El psicólogo social, Iso-Ahola (1980) señala que el ocio terapéutico era un medio de ayudar a las personas a derivar satisfacción psicológica de su participación en el ocio. Formuló un marco de referencia para utilizar otros constructos psicológicos a fin de analizar el fenómeno del ocio, específicamente los relativos al concepto de estilo de vida de ocio.

Asimismo, Iso-Ahola (1980), afirma que, la gente, en general, espera que su participación en el ocio y las actividades recreativas sea psicológicamente terapéutica, no siendo así en la mayoría de los casos. De este modo, el autor define el ocio terapéutico, cuando un profesional de forma activa e intencional, se esfuerza para eliminar las barreras psicológicas que impidan que las personas experimenten un ocio satisfactorio. Así, la mera participación en actividades de ocio, no tiene sentido. La consideración más importante es lo que las personas por sí mismas y con la ayuda de un profesional en ocio terapéutico sean capaces de obtener a nivel psicológico, de su vida recreativa.

Si bien, la indefensión aprendida es la percepción de un sujeto de que los acontecimientos de su vida están más allá de su control personal y, por tanto, la persona deja de intentar producir cambios o resultados en su vida (Seligman, 1975). Así, la indefensión aprendida se convierte en una significativa barrera para llevar a cabo un estilo de ocio libremente elegido y autodeterminado.

Iso-Ahola (1980) afirma que es importante tener en cuenta que la indefensión se aprende en las interacciones con el medio ambiente; no es el resultado de rasgos heredados, sino una barrera psicológica, por lo que habría que llevar a cabo una intervención psicológica específica sobre este constructo para dotar de estrategias personales que posibiliten una plena y adaptativa participación en el ocio. A su vez, el autor señala que de la indefensión aprendida se derivan tres consecuencias: a) una falta de motivación interna para escapar de las condiciones que llevaron al estado de indefensión; b) una falta de comprensión cognitiva de la eficacia personal (p. ej. de que la persona pueda producir cambios); y c) una mayor emocionabilidad (denominada trastorno de estrés postraumático cuando la exposición repetida a acontecimientos incontrolables es extrema).

Este modelo propone que el papel del terapeuta es revertir las consecuencias de la indefensión aprendida, es ayudar al sujeto a: a) aumentar el sentido de la causación personal y el control interno; b) incrementar la motivación intrínseca, c) aumentar el sentido de la elección y alternativas personales, y d) lograr el estado de experiencia óptima o flujo. Por tanto, este modelo se ofrece a influir en la conducta total de ocio (el estilo de vida de ocio) de las personas.

2) Motivación intrínseca, locus de control interno y atribución causal.

Los tres conceptos, motivación intrínseca, locus de control (Deci, 1975) y causación personal (Seligman, 1975) están íntimamente ligados y ayudan a explicar el fundamento de la provisión de servicios de ocio terapéutico. Todas las personas están intrínsecamente motivadas para aquellas conductas en las que puedan experimentar competencia y autodeterminación. Así, las personas buscan experiencias incongruentes (esto es, ligeramente por encima de su nivel de destrezas percibido) o retos en los que pueden dominar la situación, reducir la incongruencia y mostrar competencia. Este es un proceso continuo y mediante la adquisición de destrezas y de sentido de dominio produce sentimientos de satisfacción, competencia y control.

Un locus de control interno se supone que la persona tiene tendencia a creer que es responsable de la conducta y resultados que produce (Deci, 1975). La causalidad personal o la atribución supone que una persona cree que puede influir en un resultado concreto (Deci, 1975; Seligman, 1975). Por tanto, para poder llevar a cabo un estilo de ocio prosocial, la persona debe establecer un nexo entre los resultados y su esfuerzo personal.

3) Elección

Este concepto implica que se ha de dotar al sujeto de estrategias y habilidades para que pueda elegir entre las diferentes opciones que se le plantean. Lee y Mobily (1988) incluyen los conceptos de “libertad de” y “libertad para”. Así, habría que intervenir para que los sujetos pudieran ser conscientes de qué actividades quieren hacer “libertad de”, y donde, en qué contexto y con quién “libertad para”.

4) Flujo

Csizszentmihalyi (1990) propone que para una persona entre en el estado de flujo, deben estar presentes una serie de elementos, entre los cuales se encuentra el reto que plantee la actividad y el nivel de destreza de la persona. Así, si la actividad conlleva un nivel de destreza del sujeto es más alto que el de la actividad, es probable que se produzca aburrimiento, y que experimente frustración si es a la inversa. Por lo que se deben ajustar en la elección de actividades tanto la destreza personal, como la de la actividad.

Por última señalar, que el terapeuta debe analizar de manera funcional a la persona, y a partir de ahí proponer un itinerario individualizado con actividades acordes a la misma. Como limitación de este modelo, se puede señalar que está pensado en intervenciones con personas con discapacidad, aunque dado los conceptos en los que se basa, podría aplicarse también con cualquier tipo de población, así como con cualquier edad (Stumbo y Peterson, 2000).

6.3.2. Modelo de intervención educativa UD de Cuenca (2004)

El modelo de intervención en educación del ocio es propuesto por Cuenca (2004), el cual señala que lo que persigue este modelo es entender el ocio autotélico y su educación. Se entiende por ocio autotélico una importante experiencia vital, un ámbito de desarrollo humano que parte de una actitud positiva que induce a la acción y descansa en tres pilares esenciales: percepción de elección libre, fin en sí mismo y sensación gratificante.

Así, desde este modelo se entiende el ocio como una experiencia integral de la persona y un derecho humano fundamental:

- Una experiencia humana integral, es decir, total, compleja (direccional y multidimensional), centrada en actuaciones queridas (libres, satisfactorias), autotéticas (con fin en sí mismas) y personales (con implicaciones individuales y sociales).
- Un derecho humano básico que favorece el desarrollo humano, como la educación, el trabajo o la salud.

De este modo, el modelo encamina las distintas acciones de ocio hacia valores y planteamientos educativos, siendo la educación del ocio autotético el horizonte de referencia tanto para la educación terapéutica y preventivo como para la educación de un ocio exotético, es decir, el ocio en cuanto medio para otros fines. Así, la educación de ocio autotético tendría una serie de dimensiones: a) dimensión lúdica, b) dimensión ambiental-ecológica, c) dimensión creativa, d) dimensión festiva y e) dimensión solidaria (Cuenca, 2004).

Los principios del modelo son (Cuenca, 2004):

- Vivencia: hace referencia a una necesidad para la autorrealización y forma parte del proceso de personalización, por lo que se basa en la experiencia. Como principio educativo, la vivencia es una llamada de atención para que la educación del ocio favorezca el desarrollo de un ocio activo, que no desprecia la observación pausada de la vida, ni la contemplación.
- Libertad: entendida como la máxima expresión de autonomía de la persona, es la capacidad de auto-organización y autodeterminación, la posesión y el uso efectivo de la libertad. En este sentido, se entiende la libertad, como *libertad de* y *libertad para*. En el primer caso, indica ausencia de coacción, independencia respecto a los posibles obstáculos de una acción. Pero la libertad también tiene un sentido positivo de capacidad, de autodeterminar nuestras acciones, es decir, de elegir en cada momento la obra o el modo de obrar que se considere mejor entre las distintas posibilidades que la situación ofrece; esta libertad tiene un sentido positivo, que puede considerarse como principio de actividad y se expresa como libertad para. Así, la educación de la libertad tiene su expresión más clara en el desarrollo de la capacidad de elección. Enseñar a elegir o educar para elegir bien es un objetivo de la educación personalizada. La pedagogía del ocio también debe considerar este

objetivo e intentar superar los factores de reducción de la libertad originados por distintas circunstancias. De esta manera, y siguiendo a Trilla (1989), se entiende que la acción educativa de ocio debe contribuir a superar las limitaciones de la libertad que siguen: a) limitaciones del contexto; b) estereotipos y tradiciones selectivas o discriminatorias y; c) factores educogénicos, es decir, la educación del ocio desarrollará aptitudes, capacidades, habilidades y predisposiciones necesarias para hacer viables las actividades del ocio autotélico.

- Satisfacción: la educación del ocio ha de ser satisfactoria para quien la recibe. Aquí dicha satisfacción se define, desde el punto de vista psicológico y centrada en el plano emocional, como el ajuste entre las expectativas de una persona y su vivencia de ocio real. La motivación que nos impulsa a una acción puede ser analizada desde múltiples puntos de vista, pero entendemos que dos objetivos explícitos de la educación del ocio debieran ser no aburrir y permitir hacer compatible diversión, creación y aprendizaje. Por tanto, el objetivo será que la persona aprenda a divertirse mejor aumentando su potencial experiencial positivo.
- Autotelismo: el ocio, entendido en su sentido más pleno, no es un medio de conseguir algo, sino un fin en sí mismo; busca la realización de algo independientemente de la utilidad de la acción. La actuación educativa debe ir orientada a que la persona sea capaz de apreciar y cultivar el ocio por su valor autónomo, en cuanto bienestar desinteresado.

Por otro lado, Cuenca (2004) propone además, cinco principios relacionados con la educación del ocio:

- 1) Personalización: la acción educativa ha de partir del conocimiento de cada persona a la que se dirige y de un tratamiento personalizado que incluye objetivos de carácter individual, en cuanto ser único y diferenciado, y objetivos de carácter social y comunitario, vinculados a su relación con los demás y orientados a favorecer la integración en su comunidad. La educación del ocio debe ser un proceso encaminado a interiorizar conocimientos, valores, actitudes y destrezas básicas de ocio para lograr un comportamiento justo y equilibrado. Además, debe permitir a la persona ser autónoma, tanto en las decisiones como en el proceso de ejecución de las actividades de ocio que libremente elija.

- 2) Continuidad: la educación del ocio debe ser un proceso continuo de aprendizaje a lo largo de la vida que incorpora el desarrollo de actitudes, valores, conocimientos, habilidades y recursos de ocio, potenciando el desarrollo integral de la persona.
- 3) Inclusión: este principio hace referencia a una actitud relacionada con un sistema de valores y creencias y no un conjunto de acciones. Asume que la convivencia y el aprendizaje en los grupos con diferencias es la mejor forma de beneficiar a todos y a cada uno. Los valores que conlleva la inclusión son: aceptación, pertenencia, relaciones personales, interdependencia y consideración de todos los agentes implicados en la comunidad educativa (familias, profesionales, etc.).
- 4) Solidaridad: entendiéndose por el reconocimiento práctico de la obligación natural que tienen las personas y los grupos humanos de contribuir al bienestar de los que tienen que ver con ellos, especialmente de los que tienen mayor necesidad (Sebastián, 1996). Atendiendo a esta definición, se asienta este principio de acuerdo a las ideas centrales de responsabilidad, respeto y sostenibilidad. Así, la educación del ocio debe adaptarse a las necesidades y demandas locales de países y regiones, teniendo en consideración los distintos sistemas sociales, culturales y económicos.

6.4. Programas de ocio y tiempo libre

Durante las últimas tres décadas, los programas de ocio en España han cobrado un gran interés como consecuencia de la rápida expansión de los nuevos patrones de uso recreativo de las drogas entre importantes sectores de la población juvenil, entendiéndose el uso del tiempo de ocio o tiempo libre, como uno de los factores de riesgo de especial importancia en el consumo, y a la vez, con la posible comisión de conductas antisociales. De este modo, según diversas investigaciones, una parte importante de la varianza implicada en el consumo de sustancias tóxicas tiene que ver con los hábitos que se desarrollen en el ocio. Por otra parte, también se puede identificar en la literatura específica, como el desarrollo de actividades de ocio alternativas a esos hábitos de riesgo, actuarían como factores de protección tanto ante el consumo, como ante conductas delictivas. Tales afirmaciones, irían encaminadas a las poblaciones de mayor riesgo, jóvenes de entre 14 y 20 años, que utilizan como principales recursos para ocupar su tiempo libre la asistencia a bares, salas de juego o la

simple estancia en la calle acompañados de su grupo de pares, con una elevada ociosidad, así como una escala o nula supervisión adulta.

La asociación entre drogas y diversión, ha ido calando en amplios sectores juveniles, de tal manera que el uso de sustancias psicoactivas (sobre todo, alcohol), ha acabado por convertirse en un referente obligado de la cultura juvenil, en un componente esencial de su ocio, y en la manera en que se contempla satisfacción con el mismo, debido, por ejemplo, a la desinhibición que esta sustancia provoca, y que podría facilitar interacciones sociales, una mayor predisposición a relacionarse, así como a implicarse en actividades de riesgo. Así, el patrón dominante de uso de drogas entre los jóvenes (y en particular de los jóvenes españoles) se correspondería con consumos centralizados en el fin de semana, asociados a contextos lúdicos y realizados en grupo y en espacios públicos (Errasti, Vallejo, Fernández, y Secades, 2002).

De este modo, el consumo de drogas recreativas ha pasado a convertirse en un elemento clave de la diversión, junto con la música, el baile y la compañía de otros jóvenes (Sánchez, 2002). Además, las investigaciones señalan que los cambios en los modos de ocupación del ocio de los jóvenes no sólo afectan al tipo de actividades que los jóvenes realizan, son también a la cantidad y frecuencia de éstas, destacando el incremento del tiempo que se dedica a salir de fiesta y a la diversión nocturna de fin de semana. Dichos cambios han sido tan intensos que las generaciones actuales de adolescentes y jóvenes han establecido la diversión y el disfrute como uno de los valores sociales de referencia más importantes (Sánchez, 2002).

Otra variable importante, a la que se va a hacer mención, es la escasa supervisión de los menores en el ocio, según Secades y Fernández (2002), lo que aumenta exponencialmente la posibilidad del uso de alcohol y drogas entre los jóvenes, explicado sobre todo por el creciente número de hogares monoparentales y de hogares donde ambos progenitores trabajan.

Es precisamente en este contexto, donde los programas de ocio alternativo han cobrado interés en España, entendidos ante todo como una de las formas de responder a los patrones de consumo recreativo de drogas. Así, hasta ahora las investigaciones y las aproximaciones teóricas sobre factores de riesgo y protección de los menores en relación al

ocio, se han centrado fundamentalmente en el estudio del consumo como conducta problema o como conducta desviada. La mayoría de las investigaciones realizadas concluyen que el consumo de drogas y otras conductas problema, tales como el fracaso escolar, la violencia, la delincuencia, la conducta sexual de riesgo, etc. Tienen las mismas raíces, es decir, factores de riesgo comunes. Según estas investigaciones, los factores de protección serían también los mismo o similares (Martín y Moncada, 2003).

En definitiva, esta nueva forma de divertirse lleva asociado un cambio en el patrón de consumo de sustancias en esta población, el cual no es sólo característico de nuestros jóvenes, sino que se trata de un fenómeno que, de alguna manera, también está ocurriendo en otros países de nuestro entorno (Calafat et al., 2000).

Aunque bajo el epígrafe se reúnen muy diversos tipos de intervenciones, se denominan programas de ocio alternativo, pudiendo afirmarse que se trata de un tipo de programas de base comunitaria, cuyo objetivo primordial es el desarrollo de actividades incompatibles a la vez que alternativas al uso de drogas. Así, aunque dichos programas no se encuadran en un marco terapéutico y/o de intervención como el que se propone en el presente trabajo, resulta interesante recogerlos debido a que con anterioridad se ha podido comprobar en la literatura científica, cómo influye tanto el consumo de drogas, como la desestructuración de las actividades que llevan a cabo los adolescentes en su tiempo de ocio, con la conducta delictiva.

Si bien, dentro de la denominación de programas de ocio alternativo se reúnen diversos programas, que desde el punto de vista taxonómico, se consideran de base comunitaria, en los cuales se ejecutan en espacios de ocio y que centran su objetivo primordial en el desarrollo de actividades de carácter lúdico, incompatibles y a la vez alternativas al uso de drogas, es decir, actividades que den respuesta a las mismas necesidades que cubren otras ofertas de ocio centradas en el consumo de sustancias, a su vez también existen otros programas que intentan minimizar, desde la prevención, la poderosa influencia que ejerce el grupo de iguales en el comportamiento desadaptado de los jóvenes en el ocio. Por tanto, se podría decir que estos programas buscan, en mayor o menor medida, disminuir los factores de riesgo y potenciar los factores de protección, tanto del propio individuo como del entorno en el que operan, ya que el contexto del ocio también se ha entendido como un espacio propicio para el desarrollo de habilidades y capacidades personales, procesos de socialización positivos y otros factores protectores del desarrollo psicosocial adaptativo del menor/joven.

De este modo, los programas se dirigen a muy diferentes tipos de población, yendo desde los grupos en situación de riesgo, a los jóvenes en general, y desarrollan actividades muy variadas de carácter lúdico, educativo, etc. Por lo tanto, la finalidad esencial de estos programas, teniendo en cuenta que el tiempo de ocio transcurre fuera de los espacios de control social formal (escuela, familia y trabajo), es intentar eliminar o reducir al máximo las consecuencias negativas que provoca la utilización de ese ocio. Y en última instancia, se trata de dotar a los jóvenes de recursos personales para que, disfrutando satisfactoriamente del ocio y tiempo libre, aprendan a manejar adecuadamente esas situaciones de riesgo y desarrollen al máximo hábitos de vida saludable (Marín y Moncada, 2003).

Sánchez (2002) señala dos estrategias preventivas que han demostrado mayor eficacia, y que fácilmente pueden ser desarrolladas en contextos de ocio:

- Las estrategias de influencia: que persiguen incrementar los conocimientos y modificar actitudes, tanto ante drogas, como ante actividades que conllevan un ocio de riesgo.
- Las estrategias de desarrollo de competencias: que pretenden mejorar los recursos y habilidades personales (habilidades sociales, de toma de decisiones, etc.) de los sujetos para que puedan afrontar situaciones de la vida cotidiana que incrementan el riesgo de uso de drogas, así como inmiscuirse en otras actividades que conlleven consecuencias negativas para su desarrollo psicosocial.

Sin embargo, cabe destacar que existe poca evidencia en investigaciones rigurosas que nos indiquen exactamente qué tipo de programas, qué tipo de actividades dentro de ellos o con qué poblaciones específicas son más efectivos.

En Estados Unidos, donde estos programas se vienen aplicando con anterioridad a nuestro país, autores como Hansen (1992) y Tobler et al. (2000) han llevado a cabo revisiones sistemáticas y aplicaciones de meta-análisis que sí nos permiten acceder a una evaluación de resultados e identificar algunas claves para garantizar su buen funcionamiento. Asimismo, bajo el título *A Review of Alternative Activities and Alternative Programs in Youth-Oriented Prevention*, la División de Desarrollo de Conocimiento y Evaluación del *Center for Substance Abuse Prevention* (en adelante CSAP), dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, desarrolló a finales de la década de los 90 un amplio informe en

donde se recogía el estado de la cuestión acerca de la situación de los programas de prevención de drogas de ocio alternativo en dicho país, con un acento especial en la descripción detallada de aspectos prácticos y empíricos de la puesta en marcha de dichos programas, en los principales problemas con los que se encuentra el desarrollo de esta estrategia de prevención, y en la difícil obtención de los resultados que caracteriza a estos programas.

6.4.1. Programas de ocio alternativo en Estados Unidos

Las investigaciones sobre actividades alternativas, han señalado la aparición de programas de prevención centrados en las capacidades personales y en las habilidades sociales. También, se ha señalado que el número de estudios que examinan este tipo de programas es bastante escaso, y los que se han realizado acostumbran a tener serias limitaciones metodológicas (Cook, Laurence, Morse y Roeh, 1984). Desafortunadamente, la cantidad y la calidad de los estudios centrados en programas de ocio alternativo no ha mejorado significativamente, ya que algunos de estos tipos de programas nunca han sido evaluados, y muchas de las evaluaciones llevadas a cabo son incompletas o poco rigurosas en su metodología (Errasti et al., 2002).

El primer meta-análisis que efectuó una revisión de una variedad de programas de prevención fue realizado por Schaps, DiBartolo, Moskowitz, Palley, y Churgin (1981), los cuales examinaron datos sobre los resultados de 127 estudios. Los estudios fueron clasificados de acuerdo a 10 tipos de estrategias de prevención, incluyendo las de ocio alternativo. Los programas de ocio alternativo fueron definidos como de *actividades recreativas* o de *actividades misceláneas experienciales*. Sólo 12 de los 127 programas incluidos en el meta-análisis fueron considerados como programas de ocio alternativo. Dado que los programas combinan frecuentemente un número variado de estrategias, los investigadores redujeron más aún los 10 tipos de estrategias en 5 categorías: informativos (educación tradicional y estrategias orientadas a la persuasión), afectivos (estrategias de experiencias de crecimiento afectivo y construcción de habilidades), informativos y afectivos, aconsejadores (como única estrategias o empleados en combinación con cualquier otra estrategia), y otras combinaciones (todas las estrategias aisladas o cualquier otra combinación con excepción de las ya señaladas). Los programas de ocio alternativos se relacionan con todas las categorías, con excepción de la categoría informati (Errasti et al., 2002).

Así, los investigadores midieron la efectividad del programa en cinco categorías de resultados: conocimiento acerca del alcohol y las drogas, cambios afectivos, actitudes hacia el uso, intenciones hacia el uso y uso actual. Entre los 10 tipos de estrategias pensados en un primer momento, los programas de ocio alternativo quedaron en segundo lugar en relación a su efectividad en las cuatro categorías de resultados relacionados con las drogas, es decir, todas las categorías de resultados excepto los cambios afectivos. Las estrategias más efectivas eran las que buscaban mejorar las relaciones familiares. Entre los 5 tipos de estrategias combinadas, el tipo informativo y afectivo demostró ser el más efectivo. Éstos incluían programas de ocio que buscaban proporcionar a los jóvenes actividades experienciales (Errasti et al., 2002).

Por otro lado, centrándose únicamente en los 12 programas de ocio alternativo incluidos en este meta-análisis, ha de señalarse que 7 de estos estudios informaron de poco o ningún impacto sobre los participantes en el programa. Tres de los restantes programas tenían impactos modestos, y 2 programas estaban incluidos entre los 10 programas más efectivos. Estos programas también empleaban al menos una de otras estrategias de prevención y fueron descritos como bastante intensivos en términos de oferta de servicios. Así, este meta-análisis sugiere que las estrategias de ocio alternativo, cuando se combinan con otras estrategias y se ofrecen de forma intensiva pueden producir resultados deseables (Errasti et. al., 2002).

Tobler (1986), publicó un meta-análisis de 143 programas de prevención de drogas entre adolescentes. Cada programa era codificado por sus elementos, y después categorizado en 5 modalidades: solamente de conocimientos (programas meramente informativos), solamente afectivos (centrados en la construcción de habilidades), de conocimiento y afectivos, programas de compañeros (en donde los compañeros sirven como fuentes de información o modelos de conducta) y alternativos (actividades no basadas en la escuela, muchas de las cuales incluyen actividades afectivas). Tobler categorizó los efectos de los programas en términos del conocimiento sobre drogas, las actitudes y valores hacia las drogas, el desarrollo de habilidades de carácter y el uso auto-informado de drogas. Ha de señalarse que, de los 143 programas incluidos en este meta-análisis, sólo 11 fueron definidos como de ocio alternativo, y muchos de estos estudios no comprobaron directamente el uso auto-informado de drogas.

Con relación a la obtención de resultados deseados, los programas de compañeros demostraron poseer la estrategia de prevención más efectiva. Los programas de ocio alternativo fueron la segunda estrategia más efectiva, seguida por los programas de conocimiento y afectivos. Tobler categoría los programas de ocio alternativo en dos grupos: a) aquellos diseñados para el joven adaptado, y que tienen que ver con servicios a la comunidad y actividades de ocio, y 2) aquellos diseñados para atender déficits individuales en habilidades básicas de la vida, baja autoestima y experiencias limitadas que colocan a los jóvenes en riesgo de consumo de drogas. Este tipo de programas de ocio alternativo dirigido a jóvenes en riesgo suele incluir acciones tutoriales, entrenamientos laborales y aventuras físicas (Errasti et al., 2002).

Así, como conclusión del estudio, Tobler (1986), señaló que nueve de los programas de ocio alternativo estudiados se dirigían a jóvenes en riesgo y se ofrecían con una temporización bastante intensiva (más de 21 horas por semana). De este modo, el autor señala que si este tipo de programa de ocio alternativo se evalúa por su efectividad en la reducción del uso de drogas, estos programas muestran un tamaño del efecto para estas poblaciones especiales al equivalente obtenido por programas de compañeros no selectivos ni indicados. Para explicar estos resultados se ha añadido que estos tipos de programas de ocio alternativo ofrecen a los jóvenes la oportunidad de poder ejercer un control considerable sobre algunos aspectos de sus vidas. Finalmente, los análisis de Tobler apoyan la idea de que los programas de ocio alternativo son efectivos cuando se dirigen a poblaciones especiales y se llevan a cabo de forma intensiva. También sugieren que cuando están diseñados para mejorar habilidades, los programas de ocio alternativo tienen un potencial mayor para obtener resultados positivos que aquellos programas de ocio alternativo puramente recreativos.

El *Center for Substance Abuse Prevention (CSAP)* pone a disposición de la comunidad científica y técnica mundial dedicada al estudio de los temas relacionados con el abuso de sustancias una lista de programas modelo de prevención del consumo de drogas, para que puedan servir de guía de todo tipo de intervenciones que se pretendan realizar en esta línea. Los *Model Programs* han superado de forma satisfactoria controles de calidad estrictos relativos a todos los momentos y aspectos de su realización, sin que falten en esta lista requisitos de evaluación rigurosos que permitan concluir acerca de los resultados obtenidos por los programas.

A continuación, se exponen cuatro de los programas recogidos en los *Model Programs*, que han prestado especial atención a los procedimientos de evaluación practicados, así como a los resultados obtenidos (Errasti et al., 2002):

a) Across ages

Es un programa de ocio que trabaja la prevención de drogas centrado en la comunidad y en la escuela para jóvenes de entre 9 y 13 años, el cual busca fortalecer los lazos entre los adultos y los jóvenes y proporcionar oportunidades para el compromiso positivo con la comunidad. La única y altamente eficaz característica del Across Ages es el emparejamiento de tutores adultos mayores de 55 años, con adolescentes jóvenes que están haciendo la transición hacia el instituto, considerándose ésta una etapa difícil. El programa utiliza la tutorización, los servicios comunitarios, el entrenamiento en competencia social y las actividades familiares para construir en los jóvenes un sentido de responsabilidad personal para él y con respecto a la comunidad. Como objetivo general, el programa busca aumentar los factores protectores entre los menores de alto riesgo para prevenir, reducir o por lo menos retrasar el uso de alcohol, tabaco y drogas ilegales, así como los problemas asociados al consumo. Por otro lado, como objetivos específicos el programa pretende:

- Aumentar el conocimiento sobre la salud y el abuso de sustancias y fortalecer las conductas, intenciones y actitudes saludables sobre el abuso de drogas.
- Mejorar la adherencia al contexto escolar, el rendimiento académico, la asistencia a clase y la conducta y actitudes hacia la escuela.
- Fortalecer las relaciones con adultos, así como con el grupo de pares.
- Obtener habilidades de resolución de problemas y de toma de decisiones.

El programa sigue un cronograma de 12 meses de realización del mismo entre los jóvenes y los tutores para su realización adecuada, siguiendo la siguiente metodología:

- Tutorización: adultos mayores de 55 años son reclutados y entrenados, y pasan un mínimo de dos horas por semana en contacto personal con el joven.
- Servicios comunitarios: los jóvenes pasan de 1 a 2 horas semanales realizando servicios comunitarios.

- Entrenamiento en competencia social: a través de 26 lecciones semanales de 45 minutos cada una.
- Actividades familiares: un fin de semana al mes se organizan actos para los jóvenes, sus familias y los tutores.

El diseño de evaluación de resultados fue cuasi-experimental en vez de experimental ya que no fue posible seleccionar las escuelas de forma completamente aleatoria. Se realizó un diseño clásico de evaluación pre-test/ post-test con un con un grupo control. Los tres grupos evaluados fueron:

- *Grupo C*: el grupo control que no recibió la intervención.
- *Grupo PS*: este grupo participó en actividades de desarrollo positivo y llevó a cabo servicios comunitarios durante 2 horas por semana. Los cuidadores y miembros de la familia eran invitados a asistir a los talleres familiares y a las actividades.
- *Grupo MPS*: este grupo participó en actividades de desarrollo positivo, en servicios comunitarios y en talleres familiares y actividades durante 4 horas por semana. Los participantes en este grupo también eran emparejados con tutores mayores con los que se veían durante 2 o 3 horas/semana.

La hipótesis principal de la evaluación del *Across Ages* era que las intervenciones realizadas en este proyecto darían lugar a resultados positivos significativos para todos los estudiantes que participasen en los grupos experimentales. Más específicamente, se predijo que los participantes en los grupos *PS* y *MPS* mostrarían una mejoría significativa entre las puntuaciones pre-test y post-test en comparación con los estudiantes del grupo control.

Los datos demuestran la eficacia de la intervención para todos los jóvenes del programa. En particular, la intervención mostró la eficacia del emparejamiento de jóvenes con tutores adultos mayores en la mejoría de valores sociales, en el aumento del conocimiento de las consecuencias del abuso de sustancias y en la ayuda a los jóvenes a evitar posteriores abusos de sustancias enseñándoles conductas de resistencia apropiadas. Se aumenta el conocimiento y las actitudes negativas hacia el uso de drogas, disminuye el uso de alcohol y tabaco, aumenta la asistencia a clases, disminuyen los abandonos de la escuela y mejora el rendimiento académico, así como las actitudes hacia la escuela y el futuro, mejorando también las actitudes hacia los adultos en general y los ancianos en particular.

b) Casastart

Es un programa centrado en la escuela y la comunidad diseñado para mantener a los pre-adolescentes de alto riesgo (entre 8 y 13 años de edad) libres de drogas y de actividades delictivas. La noción central que subyace al programa es que mientras que las tasas de experimentación con drogas son iguales para los jóvenes de todos los orígenes, aquellos a los que les falta apoyo eficaz social y personal están en mayor riesgo de intensificar y continuar el abuso de sustancias. Usando una unión intensiva y coordinada de servicios preventivos y apoyos legales, *CASASTART* atiende a las necesidades individuales de los participantes así como a los problemas más amplios de sus familias y comunidades. Opera en tres niveles para: 1) construir resiliencia en el menor, 2) fortalecer las relaciones familiares y, 3) hacer que los vecindarios sean más seguros para los niños y sus familias.

Entre la población objetivo, se seleccionan niños de entre 8 y 13 años que presenten al menos 4 factores de riesgo. Ejemplos de estos factores de riesgo son:

- Riesgo académico: rendimiento académico pobre, conductas problemáticas en la escuela.
- Riesgo familiar: violencia familiar, miembros de la familia involucrados con bandas, uso o venta de drogas, penas de prisión, pobreza extrema.
- Riesgo personal: jóvenes con historia de uso o venta de drogas sabido o sospechado, arrestos en el pasado o relaciones con actos delictivos, pertenencia a bandas, disturbios emocionales serios, posesión de armas, embarazo o paternidad, haber sido víctimas de maltrato infantil o vivir en un vecindario peligroso.

En cuanto a su funcionamiento, el *CASASTART* emplea un marco de desarrollo positivo juvenil y utiliza la metodología de caso intensiva para coordinar y proporcionar servicios que contrarresten los varios factores de riesgo que hacen a los menores vulnerables al abuso de sustancias y a la delincuencia juvenil. Cada director de casos se dedica a 15 chicos y a sus familias. Los directores de caso proporcionan directamente o coordinan una amplia serie de servicios para el joven y la familia. Cada lugar desarrolla su propio acercamiento para diseñar y producir los servicios de acuerdo con la cultura y las prácticas locales. Así, cada menor incluido en el programa recibe todos los servicios, excepto los servicios de justicia juvenil si no están inmersos en procedimientos judiciales. Las categorías de servicios son: 1) apoyo social, 2) servicios familiares, 3) servicios educativos, 4) actividades extra-escolares y

veraniegas, 4) tutorización, 5)refuerzo del vínculo con la comunidad y, 6) intervenciones de justicia juvenil, e incentivos como respuesta a conductas prosociales.

Como fundamentos de su realización, cada programa *CASASTART* está dirigido localmente en función de los contextos y la cultura locales, pero comparte una serie de características básicas. En cualquier caso, para asegurar una réplica válida de un programa *CASASTART*, deberán seguirse los siguientes pasos esenciales:

Fase 1 - Pasos iniciales:

1. Llevar a cabo una evaluación de la comunidad
2. Identificar alguna institución líder.
3. Identificar potenciales patrocinadores.
4. Identificar miembros consejeros
5. Marcarse objetivos realistas con el menor y la familia.

Fase 2 – Realización:

1. Desarrollar acuerdos de comprensión entre las instituciones.
2. Incluir patrocinadores adicionales según se vaya necesitando.
3. Establecer y respetar acuerdos de confidencialidad.
4. Prestar servicios de intervención.
5. Comenzar las reuniones de *CASASTART*.

La planificación del programa y su puesta a punto lleva entre 6 y 8 meses, incluyendo el establecimiento de relaciones, la obtención de apoyo financiero y el establecimiento de relaciones entre los participantes del programa.

En cuanto a su evaluación, se ha llevado a cabo un análisis riguroso del impacto del programa. Este trabajo ha incluido un estudio cualitativo basado en análisis y metodología etnográfica, una evaluación de resultados mediante un diseño cuasi-experimental con asignación aleatoria longitudinal y un sistema de información diseñado para recoger datos en las diversas localizaciones del programa. Para esta evaluación, los estudiantes de escuelas del vecindario elegido fueron asignados aleatoriamente bien al programa (338 estudiantes) o al grupo control (333 estudiantes). Los datos de 203 estudiantes de vecindarios en los que no se ofrecía el programa fueron usados como grupo de comparación adicional.

En primer lugar, entre los beneficios encontrados con el CASASTART, se encuentran: mayores niveles de una presión positiva entre el grupo de iguales, menores niveles de asociación con grupos de iguales delincuentes, mejora en los vínculos con modelos prosociales e instituciones, descenso de los vínculos con normas o grupos desviados y aumento de oportunidades para conseguir objetivos positivos.

Entre los resultados, cabe destacar que los menores que participaron en el CASASTART mejoraron su vínculo con instituciones e individuos positivos, redujeron sus lazos con normas y grupos desviados y aumentaron las oportunidades para alcanzar metas positivas. Como resultado, se redujo la probabilidad de que los chicos consumiesen drogas, de que participasen en venta de drogas y aumentó la probabilidad de pasar al siguiente curso académico. También los chicos tuvieron niveles más bajos de encuentros violentos, mayores niveles de influencias positivas de los compañeros, niveles más bajos de asociación con compañeros delincuentes y experimentaron menor presión de sus compañeros (Errasti et al., 2002).

c) Leadership and resiliency program

El *Leadership and Resiliency Program (LRP)* es un programa basado en la escuela y la comunidad para estudiantes de instituto de entre 14 y 19 años de edad que trabaja para aumentar las fuerzas internas y la resiliencia de los jóvenes, mientras que previene el uso de sustancias y la violencia. Los componentes del programa incluyen: – grupos de resiliencia, que se reúnen con periodicidad semanal durante la jornada escolar – actividades alternativas aventureras, que incluyen cursos de escalada, acampadas o actividades en ríos, y – servicios a la comunidad, en los cuales los participantes realizan un número de proyectos centrados en la comunidad y en la escuela. Estas actividades alternativas, ofrecidas tras la escuela, en fines de semana o durante el verano, se centran en servicios a la comunidad, altruismo, aprendizaje acerca del afrontamiento de situaciones de riesgo, mejora de las habilidades sociales y resolución de conflictos.

Entre la población objetivo *LRP* es un amplio programa anual enfocado a jóvenes de entre 14 y 19 años que muestran una combinación de asuntos conductuales tales como alto absentismo escolar o problemas disciplinarios, mal rendimiento académico, uso de sustancias y violencia. Los administradores y el personal escolar, en colaboración con el personal preventivo del programa identifican a los jóvenes adecuados para el programa. Los estudiantes son entrevistados para evaluar sus factores de riesgo y de protección, siendo así

los jóvenes con mayor riesgo los incluidos en el programa. Los participantes han procedido de diversos sustratos étnicos y culturales, y el programa está diseñado para poblaciones de instituto normalizadas o alternativas.

Entre los objetivos del programa se encuentran:

- Mejorar la identificación de los participantes con roles prosociales.
- Reducir sanciones disciplinarios en la escuela.
- Mejorar las habilidades de comunicación interpersonal.
- Aumentar el compromiso de la comunicación en la promoción de desarrollos de hábitos de ocio saludables en los jóvenes.
- Aumentar la percepción de los estudiantes en cuanto a su propia competencia social y autovalía.

Cómo funciona *LRP* requiere la colaboración entre una escuela y una asociación de servicios de salud o de lucha contra el abuso de sustancias. Las escuelas trabajan con el personal de las asociaciones en identificar candidatos para el programa y proporcionar diferentes tipos de apoyo según se necesite.

Para obtener los mejores resultados, los estudiantes deben iniciar el programa a comienzos de su estancia en el instituto, y participar en él hasta la graduación. En cualquier caso, los estudiantes pueden iniciar el programa en cualquier curso durante el instituto. Los participantes asisten a reuniones semanales en la escuela de grupos de resiliencia, conducidas por un profesional del programa durante la duración del mismo. Reuniones adicionales individuales o pequeños grupos de discusión entre este líder y los estudiantes pueden ser llevadas a cabo en otros momentos durante la semana. Se espera que los estudiantes de *LRP* participen al menos semanalmente en actividades de servicio a la comunidad que tengan lugar después de la escuela o los fines de semana.

Las actividades fundamentales incluyen:

- rehabilitación animal: los jóvenes voluntarios de *LRP* rescatan y dan acogida a animales maltratados o abandonados.
- embellecimiento de la comunidad: los participantes limpian áreas y plantan árboles para mejorar el entorno.

– proyecto «Marioneta»: los participantes aprenden cuentos sobre temas relevantes, tales como el abuso de sustancias o el desarrollo de habilidades sociales, y los presentan a estudiantes de escuelas de primaria.

Los participantes del *Leadership and Resiliency Program, LRP* deben participar en actividades de rehabilitación animal al menos una vez al mes, en actividades al aire libre y de aventura son también programadas regularmente, y se espera que cada participante asista al menos a cinco de estos viajes a lo largo de los varios años en los que participe en el programa. Los participantes de *LRP* que muestran haber mejorado en su desarrollo psicosocial y responsabilidad ganan la oportunidad de participar en el Proyecto «Marioneta». Cada grupo realiza una obra de marionetas para alumnos de primaria al menos una vez durante su estancia en el instituto (y preferiblemente tres o más veces). Los participantes de *LRP* ayudan a escribir las obras y las representan. Todos los servicios comunitarios y actividades de aventuras se realizan en grupo y se supervisan por un profesional del programa *LRP*.

En cuanto a su evaluación, los datos pre-test y post-test son recogidos durante el año escolar mediante instrumentos desarrollados por *LRP*. Los registros escolares se usan para tomar nota de la asistencia, los informes conductuales y el rendimiento académico. Datos complementarios se recogen de los jóvenes, el personal de la escuela, los padres y los informes de prensa.

Por último, en los resultados entre los participantes en el programa se ha registrado un aumento de 0,8 en una escala de 4 puntos en una prueba que mide la resistencia a la pertenencia a bandas juveniles, de un 60 a un 70% de aumento en la asistencia a la escuela, de un 65 a un 70% de reducción en incidentes conductuales escolares, un 100% de alumnos que consiguen graduarse, aumento en los lazos percibidos hacia la escuela, sí como un extremadamente alto porcentaje de participantes que consiguen un empleo o continúan con la educación post-secundaria.

d) *Project Northland*

El *Project Northland* es un programa multinivel plurianual que ha demostrado retrasar la edad en la que los jóvenes comienzan a beber, reducir el uso de alcohol entre aquellos que ya habían empezado a beber y limitar el número de problemas relacionados con el alcohol entre los jóvenes bebedores. Está diseñado para menores de entre 10 y 14 años, el *Project*

Northland se interesa tanto por el cambio conductual individual, como por el cambio ambiental. El *Project Northland* también intenta cambiar la forma de cómo los padres se comunican con sus hijos, cómo los compañeros se influyen entre sí, y cómo las comunidades responden al uso del alcohol entre los jóvenes adolescentes.

Entre sus componentes se incluyen una serie de principios y actividades, como son: compromiso paterno, programaciones conductuales, actividades de grupos pequeños de compañeros, movilización de la comunidad, y estrategias para reducir el acceso al alcohol.

Cada año de intervención se centra en un tema global y se ajusta al nivel de desarrollo de los jóvenes adolescentes. El alcohol es el centro del *Project Northland* dado que es la droga de elección por los adolescentes americanos y provoca el mayor daño entre la juventud. Entre su población objetivo *Project Northland* está diseñado para proporcionar a los jóvenes los materiales más actuales de prevención del uso del alcohol. La evaluación original incluyó aproximadamente a 2.400 estudiantes de 24 distritos escolares de áreas con altos niveles de problemas relacionados con el alcohol.

Entre sus objetivos, se encuentra:

- Enseñar a los jóvenes habilidades interpersonales y de toma de decisiones.
- Aumentar las habilidades parentales.
- Fortalecer las normas contra el uso de alcohol en la comunidad, entre los padres y entre el grupo de pares.
- Reducir el acceso de los jóvenes al alcohol y aumentar su nivel de concienciación acerca de las consecuencias del consumo de esta sustancia.

En cuanto al funcionamiento del *Proyect Northland*, se destacan cuatro componentes:

– *Slick Tracy Home Team Program* toma a adolescentes y a sus padres para realizar actividades educativas y de entretenimiento en el hogar. Este acercamiento de «equipo doméstico» proporciona un foro para que los estudiantes y sus familias discutan temas relacionados con el alcohol durante ocho sesiones de 45 minutos. Los estudiantes crean pósters y murales acerca del alcohol y los enseñan a sus padres.

– *Amazing Alternatives* proporciona actividades durante 8 sesiones de 45 minutos conducidas con los profesores y los compañeros. Está diseñado para enseñar a los chicos las habilidades para identificar y resistir la influencia para consumir alcohol y para destacar alternativas libres de alcohol.

– *Power Lines* consiste en 8 sesiones de 45 minutos que forman parte de un programa de 4 semanas para los estudiantes. Se enseña a los estudiantes cómo el contexto influye en la conducta y cómo se pueden provocar cambios en las comunidades.

– *Supercharged* incluye estrategias que funcionan en las comunidades del «Project Northland» y proporcionan a las escuelas materiales y marcos que puedan ayudar a los padres y a las comunidades a reducir el acceso de los jóvenes al alcohol. Los jóvenes son colocados en un papel dirigente para apoyar las actividades saludables y las iniciativas.

En cuanto a la evaluación del *Project Northland*, se agrupó aproximadamente a 2.400 estudiantes de 24 distritos escolares durante sus años de instituto, e incluyeron menores de 7 áreas de reservas indias americanas. Esta población tenía tasas altas de problemas relacionados con el alcohol.

Veinticuatro distritos escolares fueron reclutados sistemáticamente y cuatro distritos escolares más pequeños se combinaron con distritos cercanos para asegurar un tamaño de muestra adecuado en cada unidad que iba a ser aleatorizada. Estos distritos combinados fueron bloqueados por tamaño y aleatorizados en grupos que iban a recibir la intervención o en grupos de control. La población de los 6 condados participantes era de 235.000 personas, el 94% de los estudiantes eran blancos, mientras que los estudiantes indios americanos constituyeron el 5,5% de los integrantes en el estudio. Debido a su pequeño número, los análisis de los efectos de la intervención en este subgrupo no fueron posibles. Este área es predominantemente rural, con clases sociales medias bajas y clases medias.

En cuanto a los resultados del *Project Northland*, se realizó un estudio durante 3 años en la realización de actividades en todas las escuelas en las que se intervino, con participaciones de los padres en actividades educativas sobre el alcohol y participación de la mitad de los estudiantes en actividades extraescolares libres de alcohol con sus compañeros. En comparación con los controles, los participantes en el programa consumían significativamente menos al final del instituto, mostrando una mayor concienciación de las consecuencias negativas de dicho hábito. El *Project Northland* fue efectivo en cambiar la influencia de los iguales en el uso de alcohol, las expectativas acerca de cuántos jóvenes beben y la comunicación paterno-filial acerca de las consecuencias del uso de alcohol y las razones para no usar alcohol. El uso semanal de alcohol fue un 46% menor en el grupo sobre el que se intervino. El uso de marihuana fue un 50% menor y el uso de cigarrillos fue un 37%

menor al final del instituto. El grupo sobre el que se intervino sintió menor presión de sus compañeros para consumir alcohol.

6.4.2. Programas de ocio alternativo en España

El primer programa de esa naturaleza aplicado en España fue “Abierto hasta el Amanecer”, puesto en marcha en Gijón en 1997, por la Juventud Obrera Cristiana de Asturias, JOCE, siendo prioritario para la prevención del consumo de drogas de carácter recreativo según la Estrategia Nacional sobre Drogas 2000-2008. Este proyecto pretende generar alternativas de ocio activo y participativo, basado en actividades deportivas y culturales en instalaciones municipales durante las noches de los fines de semana. Aunque surge con el propósito inicial de prevenir el abuso de las drogas a través de un uso alternativo del tiempo libre, persigue también otros objetivos como el establecimiento de redes sociales positivas, la creación de espacios de convivencia en los que se fomente respetar y compartir con los demás, y el empoderamiento adolescente (Rotella, 2000).

Los usuarios no se limitan a asistir a las actividades propuestas, sino que pueden también ofertar otras participando en su diseño y gestión, lo que aumenta su responsabilidad y autonomía y potencia la efectividad del programa. Las actividades son de una gran diversidad y surgen en muchos casos de la iniciativa juvenil. Como ejemplos podemos citar talleres de ligar, de supervivencia doméstica o de primeros auxilios, noches multiculturales, mecánica de bicis y automoción o reciclado de papel, juguete y ropas.

Como prueba de su éxito, ya se han realizado 15 ediciones -de hecho sigue vigente en la actualidad- y se ha extendido a diferentes comunidades autónomas, entre ellas, Madrid, Andalucía, Castilla y León o Canarias. Los jóvenes que participan en Abierto Hasta el Amanecer adquieren conocimientos y experiencias que pueden poner en práctica en otros espacios sociales. Así, la participación reduce el riesgo de consumo de drogas, no sólo porque la realización de las actividades es incompatible con el consumo, sino porque el propio aprendizaje que se extrae de esa experiencia ayuda a que los jóvenes conozcan más maneras de divertirse y comprendan que el consumo de alcohol sólo es una opción más, no la única. Al mismo tiempo este programa evidencia día a día que la juventud puede desempeñar un papel muy importante en la vida comunitaria (Arenas, Legaza y Muñoz, 2007).

Otro de los programas que se han considerado como eficaces es el Programa “Promoviendo la adaptación saludable de nuestros adolescentes” (Ruiz-Lázaro, Puebla, Cano y Ruiz, 2000). Este programa no sólo trabaja con los jóvenes de entre 12 y 16 años de una

determinada comunidad, sino que también busca la participación de sus madres y padres. Surge desde los servicios de salud, y sus objetivos generales son tres: ayudar a los padres y madres a promover la adaptación saludable de sus hijas e hijos adolescentes; aportar recursos y estrategias a los jóvenes que faciliten su desarrollo personal y su adaptación saludable; y entrenarlos en las habilidades necesarias para elegir las conductas más saludables.

Los objetivos específicos respecto al trabajo con los padres serían reflexionar sobre cómo mejorar las habilidades de diálogo con sus hijas e hijos o favorecer una actitud positiva hacia los jóvenes que favorezca el desarrollo personal de los menores. Así, los objetivos concretos para el trabajo con los jóvenes podemos citar el comprenderse y conocerse mejor a sí mismos y a los demás, saber afrontar los conflictos interpersonales o desarrollar la capacidad de controlar de forma libre y responsable sus deseos, emociones y conductas. Estos objetivos se logran con una metodología activa, participativa y basada en el diálogo, que utiliza una gran diversidad de técnicas como la exposición teórica, la lluvia de ideas, el juego de papeles, el estudio de casos, el entrenamiento o las tareas para casa.

Las actividades se planifican en dos ciclos de tres talleres –uno para padres y dos para adolescentes que constan de tres y cinco sesiones cada uno. Cada sesión es de hora y media, y los grupos, de entre 12 y 15 personas, son coordinados por un médico y dos diplomados en enfermería, dos observadores externos –educador y sanitario- y dos expertos externos –técnico de salud y psiquiatra-. En cada una de las sesiones se realizan entre tres y cinco actividades destinadas a trabajar los objetivos comentados anteriormente. Según los autores, la evaluación del proyecto ha sido sobresaliente, demostrando su factibilidad y utilidad (Ruiz-Lázaro, 2004).

6.5. Programas educativos y terapéuticos para menores infractores

De cara al presente trabajo se han seleccionado dos programas para menores infractores que en sus contenidos de intervención en relación a la conducta infractora, que aunque no trabajan de manera explícita el ocio de riesgo en sí, hacen alusión en módulos específicos a temáticas que se relacionan con este concepto.

a) Programa Central de Tratamiento Educativo y Terapéutico para menores infractores de Graña y Rodríguez (2010)

De este modo, el Programa Central de Tratamiento Educativo y Terapéutico para Menores Infractores que publica la Agencia para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor en el año 2010, en el Módulo VI: Personalidad y su influencia en la desviación social, incluye dos sesiones que hacen referencia a la Búsqueda de Sensaciones.

De manera concreta, la sesión 5: Búsqueda de Sensaciones (I), marca como objetivos específicos: 1) identificar sensaciones límite, 2) modificar la percepción de los participantes sobre las sensaciones límite ayudándoles a desmitificarlas, 3) tomar conciencia de que las sensaciones límite se pueden percibir y sentirse de forma diferente según el contexto, aun siendo fisiológicamente iguales. Por otro lado, define la sensación límite como la percepción sensorial o emocional extrema por el nivel de excitación, placer y/o activación fisiológica que produce y que llama poderosamente la atención de la persona que la experimenta.

Entre las actividades que propone este programa se encuentran en primer lugar una encaminada a explicar el concepto de sensaciones límite a los participantes, donde además se ejemplifican situaciones o actividades asociadas con sensaciones límite, el monitor elegirá dos, una agradable y otra desagradable y posteriormente, se analizan funcionalmente dichas sensaciones según los pensamientos, emociones y sensaciones fisiológicas que las acompañan. En la siguiente actividad se sigue la misma dinámica, exceptuando que los participantes son los que tienen que aportar dichas sensaciones límites.

Posteriormente, la sesión 6: Búsqueda de Sensaciones (II), establece como objetivos específicos: 1) diferenciar entre sensación límite y actividades o situaciones que generan dicha situación; 2) diferenciar entre actividades de riesgo y las que no lo son; 3) facilitar el desarrollo de alternativas para que las actividades o situaciones que generan sensaciones

límite no sean perjudiciales ni antisociales/delictivos y; 4) tomar conciencia sobre la posibilidad de experimentar las mismas sensaciones con diferentes actividades.

En esta sesión define los conceptos clave de sensación límite y actividad de riesgo, entendiendo esta última como una acción que conlleva una alta probabilidad de daño y de consecuencias negativas a largo plazo. Si bien, la sesión comienza con un análisis funcional de tres actividades de riesgo: consumir drogas, hacer puenting y conducir a 170 km/h, donde los participantes deben describir las consecuencias tanto negativas, como positivas de dichas actividades, así como proponer ellos mismos actividades de riesgo y volver a analizar las consecuencias.

La siguiente actividad intenta que los participantes aumenten su nivel de conciencia acerca de la existencia de otro tipo de actividades que no conllevan riesgo y con las que se puede alcanzar las mismas sensaciones. Para ello, se analizan las consecuencias de cuatro actividades propuestas: tomarse un tripi, ver una peli en 3D, hacer alpinismo sin arnés y montar en lanzadera, donde los participantes deberán analizar las consecuencias de cada una de ellas.

Finalmente, en la siguiente actividad, ellos a partir de dos ejemplos que se le proporcionan deberán establecer consecuencias positivas y negativas con el objetivo de buscar alternativas sin riesgo.

b) Intervención educativa y terapéutica: Programa menores infractores, de López, Carpintero, Del Campo, Lázaro y Soriano (2011)

Este programa divide su intervención en cuatro bloques. En primer lugar, una intervención general, que los autores denominan actividades transversales, donde introducen el sentido y utilidad de las actividades en el marco de los tres bloques diferenciados de los que se compone este programa. Así, introducen el programa mediante la exposición de técnicas de relajación, así como trabajando conceptos tales como: el reconocimiento, el arrepentimiento y el compromiso, el perdón y la reparación.

De manera más específica, el programa contiene tres tipos de intervención diferenciadas. La primera, intervención en conductas y delitos violentos, la segunda, intervención en delitos contra la propiedad y, la tercera, intervención en violencia sexual.

Si bien, dado el objetivo del presente trabajo, se estima oportuno exponer el modo de intervención en las dos primeras, debido a que dentro de sus actividades se relacionan con variables que de manera indirecta afectan y se relacionan con el ocio.

De este modo, en la intervención en conductas y delitos violentos, en el Bloque II, que denominan Comportarse de forma violenta no vale la pena. Una nueva forma de ser uno mismo, de hacerse valer y de ser valorado por los demás sin recurrir a la violencia, entre sus objetivos establecen el tomar conciencia y analizar la presión a la conformidad ejercida por el grupo de iguales, como motivador de la violencia y conductas antisociales, intentando fomentar estrategias alternativas para integrarse en el grupo y resistir a la presión. Así, entre las actividades ejemplifican situaciones de adolescentes con un conflicto interpersonales que tienen lugar en contextos de tiempo libre, y que acaba en violencia. Posteriormente, los adolescentes deben analizar de manera funcional, según los protagonistas de dichos ejemplos qué fin ha perseguido la conducta, qué tipo de conducta ha sido, quién ha recibido violencia y quién la ha realizado, para finalmente, los participantes deben resolver dichas situaciones con una conducta alternativa prosocial.

Por otro lado, en la intervención que hace referencia a delitos contra la propiedad, exponen en una de las actividades trayectorias vitales de otros menores que comienzan a realizar robos, también en varias ocasiones en el tiempo de ocio, así como a realizarse con grupos de iguales con creencias antisociales, comenzando a cambiar la forma en que usan su ocio, debiendo los participantes analizar las consecuencias tanto a nivel personal, como social y judicial.

6.6. Programas de tratamiento en la Comunidad de Madrid

La Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), desarrolla diversos programas especializados de tratamiento, dos de tipo general y una serie de programas específicos. Así, en primer lugar, como programas generales se encuentra:

- **Programa para la Predicción del Riesgo de Reincidencia**, que se compone del Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes (IGI-J), junto con el Historial Criminológico y Social (HCS).
- **Programa Central de Tratamiento Educativo y Terapéutico para menores infractores**. Este Programa está dirigido a menores con conducta antisocial cuya

aplicación garantiza una mayor eficacia en los tratamientos educativos y terapéuticos. Es un programa estructurado que sigue una metodología cognitivo-conductual, y su elaboración parte del estudio del perfil de la población atendida, de sus características y necesidades.

Por otro lado, atendiendo al tipo de delito cometido por el menor en sus características diferenciadoras, se han desarrollado programas específicos de tratamiento:

- **Programa de Tratamiento Educativo y Terapéutico por Maltrato Familiar Ascendente.** Programa específico destinado al tratamiento de menores con comisión de esta tipología delictiva. Este programa parte de la premisa de incorporar al tratamiento a la familia, insertándolos en la intervención de la conducta problema, así como aumentando por parte de todos el nivel de concienciación de la misma.
- **Programa de Tratamiento Educativo y Terapéutico para Agresores Sexuales Juveniles.** Programa específico que se desarrolla con menores que han cometido delitos contra la integridad sexual, en el que se incide, de forma primordial, en la empatía hacia la víctima, las distorsiones cognitivas que presentan, modificación del impulso sexual/autocontrol y prevención de recaídas; y donde desarrollan contenidos transversales que abarcan desde la educación sexual hasta las habilidades sociales y la intervención específica con la familia.
- **Programa Terapéutico en consumo de sustancias tóxicas ENLACE.** Programa de apoyo y refuerzo del proceso de deshabituación y rehabilitación del menor que presenta problemas de abuso o adicción a sustancias psicoactivas y precisa de un contexto estructurado en el que poder llevar a cabo una actuación terapéutica y que, por sus características personales y/o de régimen de internamiento no puede ser atendido ambulatoriamente o en otros programas.
- **Programa de Madres con hijos a su cargo.** Designación de centro específico y adecuación de la infraestructura y espacios favorecedores del desarrollo de la relación madre-hijo. Además de la intervención que se lleva a cabo en calidad de menores infractoras, se incide de forma importante en que adquieran una concienciación sobre la responsabilidad maternal.
- **Programa en Salud Mental.** Este programa pretende la restauración y promoción de la salud mental y por tanto el ajuste y la armonía integral del menor, través de la

elaboración de un diagnóstico diferencial de la psicopatología asociada a la comisión del delito imputado y el establecimiento de un tratamiento específico.

- **Programa de Paternidad Responsable PARES.** Algunos menores internos en los centros presentan características específicas a las que es necesario prestar especial atención con el fin de prevenir situaciones de mayor gravedad, este es el caso de los menores, varones, que, a su vez, son padres o van a serlo y que las propias dificultades dentro del propio núcleo familiar, la trayectoria vital que presenta, así como la edad temprana de paternidad y el desconocimiento sobre cómo ejercerla adecuadamente, les sitúa en una posición de mayor riesgo, tanto a ellos como a sus hijos, lo que convierte a este programa en un recurso de prevención selectiva e indicada.
- **Programa de Violencia en la Relación de Pareja (VIOPAR).** Este programa está dirigido a aquellos menores que muestran conductas violentas en el ámbito de la relación de pareja. El programa atiende a menores que ingresan por delito cometido en relación a la violencia de género y aquellos otros menores que sin haber ingresado por tales hechos presentan factores de riesgo asociados a conductas violentas en dicho ámbito.

Por último, aunque no es un programa terapéutico como tal, cabe añadir otro de los programas que contribuyen a la inserción social:

- **Programa de inserción sociolaboral, PRIAMO-é.** Dirigido a menores con edad superior a 16 años (edad mínima de inicio en el mundo laboral), con medidas judiciales tanto de internamiento, como de libertad vigilada, cuando en las resoluciones judiciales se determina como una de las actividades prioritarias de la medida adoptada, o cuando el menor o joven requiere de alguna o algunas de las actuaciones de inserción sociolaboral más significativas: orientación, formación prelaboral o especializada, búsqueda de empleo y desarrollo de actividad laboral, con el objetivo de lograr su efectiva integración social y laboral.

6.7. Resumen

Los tratamientos con menores infractores, tanto específicos, como generales, implican esencialmente modificar ciertos factores de riesgo dinámicos presentes en los infractores. De esta forma, el diseño y la aplicación de un tratamiento con menores infractores debe iniciarse con la evaluación de las necesidades y carencias relacionadas con su actividad delictiva, así como con el seguimiento de un modelo teórico plausible en cuanto al comportamiento delictivo y su tratamiento.

La literatura especializada identifica tanto la Teoría del Aprendizaje Social, como el Modelo de Tratamiento: Riesgo-Necesidades_Responsibilidad de Andrews y Bonta (2006), como los modelos más eficaces de tratamiento, así como más avalados por la investigación.

En cuanto a los modelos de intervención educativa y terapéutica en el ocio, se han expuesto dos de ellos que cuentan un mayor nivel de estructuración y teoría en sus planteamientos, aunque ninguno de ellos está formulado para llevarlo a cabo con menores infractores, sino en el caso del Modelo de Peterson y Gunn, con personas dependientes, ya que es elaborado desde el sistema de salud, sus planteamientos y los conceptos que trabajan podrían ser útiles de cara a una población de elevado riesgo. Así, este Modelo, tiene en cuenta el concepto de indefensión aprendida en aquellas personas que llevan a cabo un ocio desadaptativo; debido a la falta de motivación interna para escapar de las condiciones en que se desarrolla el ocio, una falta de comprensión cognitiva de la eficacia personal (por ejemplo, de que la persona pueda producir cambios), y una falta de emocionabilidad por la exposición repetida a acontecimientos incontrolables. Por otro lado, el Modelo se asienta sobre cuatro conceptos básicos: a) indefensión aprendida, frente a competencia o autodeterminación; por lo que se propone intervenir intentando aumentar el sentido de la causación personal y control interno, incrementar la motivación intrínseca, aumentar el sentido de elección y al alternativas personales, así como lograr el estado de experiencia óptima o flujo, por lo que intenta influir en la conducta del ocio en su totalidad (Stumbo y Peterson, 2000).

Por otro lado, el Modelo de intervención educativa UD de Cuenca (2004), se basa en el concepto de ocio autotélico y su educación. Así, se entiende por ocio autotélico una importante experiencia vital que desarrolla una actitud positiva que induce a la acción y descansa en tres pilares fundamentales: percepción de elección libre, el ocio como fin en sí mismo y sensación gratificante. De este modo, la educación de ocio autotélico tendría una serie de dimensiones: a) dimensión lúdica, b) dimensión ambiental-ecológica, c) dimensión

creativa y, d) dimensión solidaria. A su vez, el modelo se asiente sobre cuatro principios: 1) vivencia como una necesidad de autorrealización y personalización, por lo que se basa en experiencia, 2) libertad, como expresión de autonomía de la persona, con capacidad de auto-organización y autodeterminación, entendiéndose a su vez la libertad como “libertad de” y “libertad para”, 3) satisfacción y 4) autotelismo entendido como no el mero hecho de llevar a cabo actividades en el tiempo de ocio, sino que es un fin en sí mismo; busca la realización de algo independientemente de la utilidad de la acción.

Por otro lado, Cuenca (2004) propone de cara a la intervención otros principios relacionados con: 1) personalización, continuidad, inclusión de un sistema de valores y creencias, y 4) solidaridad, entendida como el reconocimiento práctico de la obligación natural que tienen las personas y los grupos humanos de contribuir al bienestar de los que le rodean.

En España existe poca evidencia en investigaciones rigurosas que nos indiquen exactamente qué tipo de programas, qué tipo de actividades dentro de ellos o con qué poblaciones específicas son más efectivos. Además, los programas existentes hacen alusión a una intervención preventiva, encaminada al consumo de drogas, no llevando a cabo ni una evaluación individualizada del ocio, ni estudios de fiabilidad de los programas que se llevan a cabo.

Por último, en Estados Unidos el *Center for Substance Abuse Prevention* pone a disposición de la comunidad científica una lista de *programas modelo* de prevención del consumo de drogas, para que puedan servir de guía para todo tipo de intervención que se pretenda realizar en ésta línea. Estos programas modelo han superado de forma satisfactoria controles de calidad estrictos relativos a todos los momentos y aspectos de su realización, así como una evaluación rigurosa que permita realizar conclusiones acerca de los resultados obtenidos por los programas. Así, los principales programas que se recogen por los procedimientos de evaluación practicados, así como a los resultados obtenidos son: a) el *Across ages* el cual intenta aumentar factores protectores entre los menores de alto riesgo para prevenir, reducir o por lo menos retrasar el uso de alcohol y drogas ilegales, así como los problemas asociados al consumo. Tras una evaluación de resultados cuasi-experimental, los datos demuestran eficacia de la intervención para todos los participantes del mismo. b) *Casastart*, destinado a aquellos menores que les falta apoyo eficaz social y personal, encontrándose en un mayor riesgo de intensificar y continuar el consumo de drogas, también

en su evaluación utilizan un diseño cuasi-experimental con asignación aleatoria longitudinal, ofreciendo buenos resultados en cuanto a eficacia. c) *Leader and resiliency program*, el cual intenta aumentar la resiliencia en los jóvenes, mientras previene el uso de sustancias y la violencia, realizan una evaluación pre-test y post-test durante un año. Así, entre los resultados mejora la resistencia de los participantes a pertenecer a bandas juveniles, medida mediante una prueba, aumento de asistencia a la escuela, reducción de incidentes conductuales y mejora significativamente el rendimiento escolar. d) *Project norhland*, es un programa multi-nivel que enfatiza en su intervención reducir el consumo de alcohol entre los menores, se estableció un estudio de eficacia con una amplia muestra y un grupo control, donde los participantes mostraban un menor consumo y mayor concienciación de las consecuencias negativas de dicho hábito, así como resistencia a la influencia del grupo de pares y aumento de la comunicación filio-parental.

En España, los programas de ocio alternativo se han centrado exclusivamente en la prevención del consumo de drogas, no contando con estudios empíricos rigurosos que avalen ni su eficacia, ni la evaluación de los mismos. Entre estos programas, está el Abierto hasta el Amanecer y Promoviendo la adaptación saludable de nuestros jóvenes. Asimismo, dichos programas se destinan a la población en general. Por otro lado, en cuanto a programas destinados a menores infractores y que aunque intervienen en la conducta delictiva en general, de manera más concreta hacen hincapié en su intervención aunque indirectamente al ocio y tiempo libre, están el Programa Central de Tratamiento Educativo y Terapéutico para Menores infractores, mediante la intervención en Búsqueda de Sensaciones, y el Programa de Intervención educativa y terapéutica que mediante la intervención en conductas y delitos violentos, así como en la intervención que hace referencia a delitos contra la propiedad, ejemplifica en sus actividades ambas conductas en situaciones de ocio y tiempo libre entre adolescentes, intentando aumentar el nivel de conciencia de las consecuencias de dichas acciones.

CONCLUSIONES TEÓRICAS

De cara a contextualizar el concepto jurídico del menor, se ha comenzado la presente tesis doctoral realizando un recorrido histórico del mismo. Así, se destacan tres momentos de especial relevancia a nivel internacional con respecto a dicho concepto y la forma en que los menores que infringían la ley han sido sancionados y más concretamente, en España, el concepto ha ido evolucionando con las sucesivas leyes y reformas de las mismas.

En primer lugar, la valoración de la responsabilidad penal del menor y la atenuación de las penas, seguía el criterio de discernimiento, donde se valoraba si el menor distinguía lo justo de lo injusto y en base a ello se absolvía, o se atenuaban las penas, basándose por un lado, en el principio de la ciencia moral y, por otro lado, en un criterio biológico que abogaba porque el entendimiento se desarrolla de manera gradual con el desarrollo del menor. Así, se atendía a criterios estrictamente jurídicos, que a efectos penales marcaban el grado de responsabilidad, dándose un período de irresponsabilidad absoluta, responsabilidad condicional, responsabilidad plena y responsabilidad modificable en sus resultados.

Si bien, dentro de la evolución del concepto penal de menor infractor, como se ha referido anteriormente, el menor estuvo sometido a las mismas normas que regulaban la responsabilidad criminal de adultos, meramente y aunque no en todos los casos se suavizaban las sanciones. Así, en España, el primer Código Penal de 1822 establecía dos períodos; fijando el límite inferior de irresponsabilidad total a los 7 años y entre el período de 7 a 17 años se valoraba si el menor había obrado con o sin discernimiento. Así, si se demostraba que el menor carecía de discernimiento se entregaba a sus progenitores o a una casa de corrección, o en caso contrario, se imponía una pena atenuada (Sánchez, 1998).

Los sucesivos códigos penales de 1848 y 1879, alzaron la irresponsabilidad plena a los 9 años, responsabilidad penal condicionada a la evaluación del discernimiento entre la edad de 9 y 15 años y, responsabilidad penal atenuada en la franja etaria de 15 a 18 años si se considerase al menor sin discernimiento, o en caso contrario, si se consideraba que el menor de entre 15 y 18 años obraba con discernimiento se imponía una pena inmediatamente inferior a la que legalmente se establecía para los adultos (Landrove, 2007).

En segundo lugar, la reforma correccional, donde la premisa principal era sacar al niño y al adolescente del derecho penal de adultos, sometiéndolo tras las infracciones de los mismos a medidas puramente tutelares y educativas. En este período, ya no se atiende a criterios estrictamente jurídicos, sino que entra a formar parte disciplinas como la pedagogía, psicología, psiquiatría y sociología, con el objetivo de reformar, rehabilitar, reeducar y reinsertar al menor infractor. Aunque cabe destacar que dentro de este modelo, el movimiento reformista promovía eliminar las distinciones entre el menor que había cometido un hecho ilícito y aquel desadaptado o desatendido, ya que se afirmaba que si no se intervenía y limitaba la conducta de dichos menores, daría lugar en el futuro a las mismas malas acciones de los infractores.

De esta manera, la Ley de Bases, desarrollada por el Real Decreto de 25 de noviembre de 1918 y complementada con el Reglamento de 16 de julio de 1919, mediante la cual y con el objetivo de sustraer al menor delincuente del Derecho Penal de adultos, se crea una jurisdicción especial cuya finalidad no es retributiva o intimidatoria, sino educativa y protectora (Sánchez, 1998). Así, el modelo de Tribunales especiales para niños impulsado por esa ley se extendía no sólo al conocimiento de delitos cometidos por menores de 15 años (facultad reformadora), sino también a la protección de los mismos cuando se encuentran abandonados o en peligro (facultad protectora) (Landrove, 2007).

El Real Decreto-Ley de 15 de julio de 1925, sobre organización y atribuciones de los Tribunales de menores, extendía su competencia hasta la edad de 16 años del infractor. La siguiente reforma surgió con el Real Decreto-ley de 3 de febrero de 1929, sobre organización y atribuciones de los Tribunales Tutelares de menores, lo que supone una armonización con el Código Penal de 1928. Y, en 1948, se reforma la antigua Ley de Bases de 1918, aunque se mantiene la doble funcionalidad, protectora, para menores en riesgo y jurisdiccional, con miras a la corrección y reforma.

Aunque los Tribunales Tutelares no estaban exentos de irregularidades, al no cumplir con las garantías jurídicas mínimas. Así, en primer lugar, el esquema tutelar trataba de separar al menor del Derecho Penal de adultos, para someterlo a Tribunales tutelares y procedimientos distintivos, pero éstos estaban exentos de garantías judiciales mínimas, ya que ni siquiera era obligatorio que hubiera un juez en el proceso judicial, ni tampoco la presencia de abogado defensor, ni Ministerio Fiscal. Por otro lado, se sometía a tales procedimientos

legales no sólo a los menores infractores, sino que meramente la conducta desviada servía para ser sometido a un tratamiento legal con carácter reeducador y corrector, pudiendo haber internamiento por un tiempo no estipulado previamente y que por tanto, era indeterminado.

Posteriormente, el Modelo Garantista que establece como principio axiológico el superior interés del menor, incorporándose derechos procesales legales en el enjuiciamiento de los menores, además de establecerse medidas de protección o programas de reeducación para problemas de conducta cuando las características de la situación de los menores lo exigía.

Este modelo nace a partir tanto de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, como de la posterior Constitución de 1978, que regula el aspecto organizativo, competencial y del procedimiento legal, incluyendo en primer lugar, a jueces y magistrados, debiendo ejercitar la acción penal el Ministerio Fiscal, y no el propio Tribunal Tutelar, el cual había asimilado todo tipo de competencias en cuanto a materia de menores. A pesar de ello, legalmente se mantiene la Ley refundida de 1948, hasta la Ley Orgánica de Poder Judicial de 1985 por lo que los Tribunales Tutelares pasaron a ser Juzgados de menores, organizándose judicialmente en función de sistemas territoriales.

Otro aspecto importante que supuso esta Ley es la diferenciación de reforma y protección, atribuyéndose esta última a entidades públicas. Si bien, las tras Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) de 1986, nace la primera ley específica para menores, la Ley Orgánica reguladora de la competencia y el procedimiento de Juzgados de menores de 1992, la cual incorporó el criterio de superior interés del menor, como base para la aplicación de la medida judicial, así como los límites temporales de ésta (Cruz, 2009). Esta Ley 4/92, establece la irresponsabilidad plena en los 12 años, siendo menor de los 12 a los 16 años y joven de los 16 a los 18 años. Y, por otro lado, pasa a valorar la responsabilidad penal, atendiendo a un criterio biológico-psicológico, por lo que además de considerar la edad del infractor, toma en cuenta su capacidad para comprender el hecho y actuar de acuerdo a esa comprensión, así como atendiendo a su grado de madurez podría extenderse de manera excepcional la competencia del Tribunal de menores de los 18 a los 21 años, aproximándonos así a la situación existente en otros países que desde hacía tiempo preveían una fase intermedia entre la minoría de edad

penal y la mayoría plena, fase durante la cual es aplicable un Derecho penal juvenil, penal ya, pero distinto en sus consecuencias al de los mayores de edad.

Posteriormente, la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores de 5/2000 (en adelante, LORPM), instaura en España un nuevo sistema de intervención con menores infractores, estableciendo el límite de responsabilidad penal en los 14 años, diferenciando dos tramos de edad a través de los cuales se gradúan las consecuencias por los hechos cometidos. Estos son: de los 14 a los 16 años y de los 16 a los 18 años, en esta franja supone una agravación específica de la sanción cuando los delitos han conllevado violencia, intimidación o peligro para las personas (Alonso, 2005). Asimismo, esta ley sigue cuatro principios básicos: sistema garantista, naturaleza sancionadora y de contenido educativo, fines de la intervención iguales al derecho penal general e interés superior del menor como axioma principal.

Dicha ley sufrió una importante modificación en virtud de la Ley Orgánica de 8/2006, de 4 de diciembre, que implicó el endurecimiento del tratamiento penal de los menores, debido según se señala en la exposición de motivos al aumento de delitos cometidos por los mismos. Aunque al atender a las estadísticas dichos delitos no sólo no habían aumentado, sino que habían disminuido (Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, 2006; Fiscalía General del Estado, 2014; Instituto Nacional de Estadística, 2014; Montero, 2009; Serrano, 2009; Vázquez, 2007). Por lo que se trata de una percepción social de impunidad, debido probablemente a la demora del sistema de justicia juvenil para intervenir, así como a la falta de medios para llevar a cabo dichas intervenciones en determinados ámbitos territoriales, quedando patente una disociación entre la percepción social y la realidad criminal. Aunque cabe destacar que hasta fechas posteriores a la reforma 8/2006 en España, no existían estudios sobre la opinión pública y actitudes punitivas (Varona, 2008).

En cuanto a la determinación de la responsabilidad penal la LORPM continúa manteniendo un criterio biológico, es decir, que el menor haya cumplido los 14 años, presumiendo que ya es capaz de comprender la ilicitud del hecho y actuar en consecuencia, teniendo en cuenta el grado de madurez cognitiva y de decisión a la hora de determinar la culpabilidad del menor, y establecer la medida judicial más acorde a sus características y necesidades, así como a su superior interés.

De este modo, aunque el Código Penal de 1995 armoniza la mayoría de edad penal plena con la mayoría de edad política, marcada por la Constitución y la mayoría de edad civil, prevista en el Código Civil. El artículo 19 del C.P. establece que: “Los menores de 18 años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código”. Cuando un menor de dicha edad cometa un acto delictivo podrá ser responsable de acuerdo en lo dispuesto a la LORPM. Por tanto, aunque para el C.P. los menores de 18 años son inimputables, no impide que éstos menores sean enjuiciados y responsables penalmente.

Por otro, a la hora de conceptualizar la conducta delictiva, cabe destacar que ésta se encuadraría dentro de una forma de desviación. De esta manera, tal y como definen la desviación social Higgins y Buttler (1982), se entendería como aquel tipo de conductas, ideas o atributos personales que violan una norma social (Binder, 1988). En este sentido, la norma social se encuadra dentro de un determinado sistema sociocultural, con criterios estrictamente descriptivos donde no se constituye únicamente lo infrecuente, sino que definen un rango de comportamientos mayoritarios o típicos. Así, las conductas reprobables o sancionables no constituyen un delito, sino que se refiere a la no observancia de normas, sean legales o no (Cerón, 2013). Pero la conducta delictiva pese a ser incluía como forma de desviación social de manera general, de manera específica sí que se considera un acto tipificado en la ley penal como delito, debiendo existir por tanto una ley previa a la comisión de dicha acción y que ésta sea de carácter penal, con lo que el responsable sea sometido a los Tribunales de Justicia. Pese a ello, tal y como ocurre con la desviación, la conducta delictiva es relativa, tanto en tiempo, como en espacio. Asimismo, el concepto de menor infractor responde a un constructo sociocultural, por lo que su definición y tratamiento legal atenderán a diversos factores, y será distinto según el país. Aunque de manera general, se podría definir como aquella persona que no ha alcanzado la mayoría de edad y que ha realizado una conducta que está tipificada y castigada por las leyes como un hecho delictivo.

En relación a las carreras delictivas existen dos trayectorias avaladas por diferentes estudios. Por un lado, una relación puntual con el sistema de justicia que coincide con el período adolescente, la cual obtiene una menor tasa de reincidencia y son más frecuentes entre los menores infractores, y otra, que se extiende y persiste a lo largo del desarrollo del individuo y que al contrario del anterior, obtienen mayores tasas de reincidencia, pero se da en un menor número de menores (Moffit, 1993). Por lo que es importante y así se ha expuesto a lo largo de la revisión teórica los diferentes modelos teóricos, haciendo unos más hincapié en

factores estáticos y otros con mayor respaldo empírico, en factores dinámicos que nos permiten intervenir con el menor.

Por otra parte, otro concepto que ha sido menos estudiado, es el de co-delincuencia. Este fenómeno se da con mayor frecuencia en la adolescencia y en la tipología delictiva que tiene que ver con robos personales y robos en casas. Así, Piquero, et. al. (2007) especifica la importancia del mismo, señalando la relación entre el número total de delincuentes que cometen los delitos y la duración de sus carreras delictivas. Así, ese mismo autor apunta que a menor edad del infractor, más probabilidad de que se asocie con compañeros en las actividades delictivas a lo largo de la carrera criminal.

Tal y como se ha mencionado en la revisión teórica, en cuanto a la evaluación del riesgo de reincidencia, son mucho más eficaces y objetivas las valoraciones del Riesgo/Necesidad del menor, donde se evalúan factores de riesgo estáticos y dinámicos aunque dado que estas evaluaciones no integraban los resultados a la hora de planificar la intervención, se ha dado lugar a otro tipo de evaluaciones que integran la gestión del caso con la evaluación del riesgo. Así, el instrumento con mayor base teórica y apoyo empírico, además de haber ofrecido mayores índices de validez a la hora de evaluar el riesgo de reincidencia, ha sido el IGI-J, ofreciendo además el Inventario la posibilidad de planificar la intervención y posteriormente, evaluarla de manera periódica. Contando además, con que el profesional puede realizar una hipótesis explicativa del comportamiento del menor, encuadrarlo dentro de un nivel de riesgo y de intervención y justificar cualitativamente tanto las necesidades criminógenas como cualquier desacuerdo con la puntuación.

Atendiendo al eje central del presente trabajo, el concepto de ocio es un término polisémico y que puede ser interpretado de manera subjetiva por cada individuo, grupo y sociedad. Así, hay que diferenciar los conceptos de ocio y tiempo libre, siendo este último el tiempo que resta una vez realizadas las obligaciones, mientras el ocio es lo que se hace dentro de ese tiempo libre. Así, el ocio incluye dimensiones como autonomía, finalidad y actividad en sí mismo, lo que hace alusión al ocio autotélico.

De esta manera, para los adolescentes el ocio es el espacio de ruptura con el mundo adulto, siendo así un contexto de diferenciación, exploración y búsqueda de pertenencia. Por lo que el adolescente podría inmiscuirse en actividades que conllevan riesgos

contraponiéndolo a los daños de no participar en determinados escenarios y tiempos de intercambio social e identitario (Megías y Elzo, 2006). Ante lo cual, si atendemos a la población a la que va destinada la propuesta del Programa de intervención, nos encontramos que tanto la diferenciación, como la exploración y búsqueda de pertenencia, podrían ser caldo de cultivo para una mayor desadaptación en el menor. Es decir, si los escenarios y grupo de iguales donde se desarrolla el tiempo de ocio comparten creencias y actitudes alejadas de la norma social, tal y como señalan las teorías de la socialización, la interacción del menor con éstos factores de riesgo, hará que se asocie de una manera diferencial con el fin de integrarse, lo que a su vez reforzará dichas actitudes y creencias, pudiendo establecerse actividades desorganizadas y desestructuradas como rutinarias, lo cual promueve conductas antisociales, lo que podría ser reforzado diferencialmente dentro de un grupo disocial de relación.

Aun así, a pesar de la magnitud del fenómeno para estos menores, el ocio de riesgo que sí que ha sido contemplado y avalado por investigaciones empíricas como factor de riesgo tanto de la conducta delictiva como de la reincidencia, no ha sido estudiado de manera aislada como otros factores de riesgo tales como, impulsividad, violencia, consumo de sustancias, etc. Por tanto, tampoco existen intervenciones específicas para esta población en concreto, centrándose la mayoría de los programas en una prevención primaria, mediante un ocio alternativo. Asimismo, tampoco estos programas se siguen de investigaciones empíricas en relación a la eficacia que los avalen. Por tanto, los tratamientos que se dan en la actualidad, tanto a nivel internacional, como nacional, no contemplan variables sociodemográficas, delictivas, ni clínicas entre su abordaje. Así, los programas de ocio que muestran un mayor grado de estructuración y apoyo teórico, se han centrado más de manera específica en dotar a los adolescentes de actividades alternativas al consumo de drogas, destinados mayoritariamente a una población adaptada a la sociedad. En resumen, el objetivo final de los tratamientos en ocio se centran en un ocio adaptativo alejado del consumo de alcohol y drogas, los medios de consecución son muy variados, y en ocasiones, poco contundentes, concentrándose en la mera información y aumento de concienciación en los jóvenes de las consecuencias negativas del consumo.

Debido a ello, la presente tesis doctoral, como paso previo a toda la evolución que requiere este tema, pretende recoger la amplia contribución realizada en el campo de la criminología en materia de menores infractores hasta la fecha, así como las principales, aunque limitadas consideraciones de la literatura científica en relación al ocio, para poder subsanar las escasas aportaciones existentes que aúnan ambos campos. Por tanto, el primer

objetivo se basa en conocer las variables sociodemográficas, delictivas y clínicas que caracterizan a los menores infractores, así como el análisis de dichas variables en la reincidencia delictiva general, reincidencia delictiva, no reincidencia y reincidencia violenta. Y, en segundo lugar, se pretende desarrollar un modelo predictivo del ocio de riesgo de los menores con el fin de proponer un programa de intervención basado en evidencias empíricas. Por tanto, a continuación se presenta el apartado empírico en el que se plantean más específicamente los objetivos e hipótesis propuestas, la metodología empleada, los resultados obtenidos, así como la discusión y conclusiones derivadas de los mismos.

PARTE EMPÍRICA

Capítulo VII:

Objetivos e Hipótesis

7.1. Objetivos

Tal y como se ha ido exponiendo a lo largo de toda la revisión teórica, son múltiples los factores de riesgo que llevan a un menor a cometer un hecho delictivo, manteniendo el ocio y sus variables relacionadas importantes influencias en este tipo de conductas. El objetivo principal del presente estudio, es establecer las principales líneas de intervención de un Programa de Ocio y Tiempo Libre para menores infractores, para ello, se analizan más profundamente los factores implicados en la conducta delictiva de los menores, intentando ampliar el conocimiento de la relación entre ocio y conducta delictiva atendiendo a: 1) las características descriptivas de los menores infractores; 2) influencia de variables sociodemográficas, delictivas y clínica en la reincidencia delictiva general, no reincidencia y reincidencia violenta y; 3) la presentación de un modelo de riesgo en función del valor predictivo de cada una de las variables analizadas en el ocio de riesgo del menor.

En concreto los objetivos específicos del estudio son:

Objetivo 1: Realizar un análisis descriptivo de las principales características definitorias de los menores implicados en actos delictivos, explorando tanto variables sociodemográficas, como variables delictivas y clínicas, atendiendo a aspectos psicosociales, personalidad, entorno y relaciones sociales del menor, a partir del HCS/IGI-J.

Objetivo 2: Determinar el grado en que dichas variables sociodemográficas, delictivas y clínica están relacionadas con la reincidencia delictiva general, la no reincidencia y la reincidencia violenta. Más concretamente, se pretende determinar si los principales factores de riesgo tanto estáticos, como dinámicos correlacionan con la reincidencia delictiva general, la no reincidencia y la reincidencia violenta.

Objetivo 3: Presentar un modelo de riesgo en función del valor predictivo de cada una de las variables contempladas en el ocio de riesgo del menor, con el objetivo de establecer las líneas de intervención de un Programa Educativo y Terapéutico de Ocio y Tiempo libre que se ajuste a la realidad de los menores infractores.

7.2. Hipótesis

Debido a que los dos primeros objetivos son de carácter exploratorio, no se plantean hipótesis iniciales. Así, en relación al tercer objetivo, y teniendo en cuenta los datos empíricos presentados en la parte teórica de la presente tesis doctoral, que apoyan la relación entre diversas variables sociodemográficas, psicosociales y clínicas y la presencia de un ocio de riesgo del menor, se plantearon y se han probado las siguientes hipótesis:

Hipótesis 1: La presencia de factores de riesgo relacionados con la conducta delictiva y reincidencia serán pronosticadores del ocio de riesgo de los menores infractores.

Hipótesis 2: Los déficits en habilidades sociales para relacionarse y resolver conflictos interpersonales de manera adaptativa, serán pronosticadores del ocio de riesgo de los menores infractores.

Hipótesis 3: Un grupo de iguales caracterizado por compartir creencias antisociales, será un pronosticador significativo del ocio de riesgo de los menores infractores

Hipótesis 4: La presencia de actividades desorganizadas y desestructuradas en el ocio y tiempo libre, serán pronosticadores significativos del ocio de riesgo de los menores infractores.

Hipótesis 5: Los problemas relativos con el consumo de drogas o alcohol serán pronosticadores significativos del ocio de riesgo de los menores infractores.

Hipótesis 6: Una escasa motivación por llevar a cabo un proceso formativo reglado o por introducirse en el mundo laboral, serán pronosticadores significativos del ocio de riesgo de los menores infractores.

Hipótesis 7: La procedencia de un núcleo familiar disfuncional será un pronosticador significativo del ocio de riesgo de los menores infractores.

Capítulo VIII:

Método

8.1. Diseño

El diseño del presente estudio es descriptivo exploratorio, de corte transversal y carácter prospectivo de un solo grupo constituido por una muestra incidental. Además, en base a los análisis realizados, y con el fin de cubrir el tercer objetivo, se engloba a su vez en un diseño correlacional en el que se estimó la capacidad predictiva de diversos tipos de variables en cuanto a su que su presencia predecía el comportamiento delictivo.

Como variable dependiente se consideró la puntuación en el factor de riesgo Ocio/Diversión, operativizada a partir del Youth Level of Service/Case Management Inventory (Hoge y Andrews, 2002), en su adaptación española, Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes IGI-J, adaptación española realizada por Garrido et al. (2006). De este modo, la variable dependiente quedó definida como una variable cuantitativa en la que se incluyó el sumatorio de los ítems relativos a la subescala de Ocio/Diversión, tomando valores dicotómicos (presencia=1, ausencia=0). Los ítems relativos a la subescala y que compusieron dicha variable se presentan en la Tabla 8.1.

Tabla 8.1. Variable dependiente

Subescala	Ítems
Ocio/Diversión	Pocas actividades organizadas Malgasta claramente su tiempo de ocio No demuestra intereses personales

En cuanto a las variables contempladas para el análisis descriptivo, obtenidas en relación con cada una de las variables estudiadas con el instrumento Historial Criminológico y Social, HCS-J, se describen en la Tabla 8.2:

Tabla 8.2. Variables empleadas en el análisis descriptivo

Etiqueta de la variable	Niveles
Género	Varón Mujer
Edad El Historial no ofrece niveles en esta variable, se recogen menores/jóvenes desde los 14 hasta los 21 años	
Fecha en la que se empezó a cumplir la medida judicial actual Al igual que en la anterior variable, en este ítem se especifica mediante un desplegable la fecha concreta, para el presente estudio se tiene en cuenta el año, que iría desde el 2004, hasta el 2011	
Tipo de medida que cumple actualmente	Firme Cautelar
Nacionalidad	España Latinoamérica Magrebí Europeo comunitario Europeo no comunitario Otros
Duración de las medidas judiciales anteriores En este ítem se hacen diferencias entre las medidas que han conllevado internamiento y las que de Libertad Vigilada	0-6 meses 6-12 meses 12-18 meses 18-24 meses 42-48 meses
Tipos de delitos cometidos en el pasado A pesar de que en el HCS-J en referencia a este ítem se hace alusión a una mayor variabilidad de delitos, para el presente trabajo se han seleccionado los siete delitos más representativos, distribuyéndolos según el tipo de medida Internamiento, seguido de Libertad Vigilada o Libertad Vigilada.	Delitos contra la libertad sexual Delitos violentos con afectación del patrimonio Delitos violentos sin afectación del patrimonio Delitos contra el patrimonio menos violentos Delitos violentos en el ámbito familiar Delitos contra la salud pública Otros delitos
Tipos de delitos cometidos en la actualidad Al igual que en el apartado anterior, se han seleccionado los siete más representativos, distribuyéndolos a su vez de la misma manera en cuanto a la supervisión de la medida judicial.	Delitos contra la libertad sexual Delitos violentos con afectación del patrimonio Delitos violentos sin afectación del patrimonio Delitos contra el patrimonio menos violentos Delitos violentos en el ámbito familiar Delitos contra la salud pública Otros delitos

Etiqueta de la variable	Niveles (Continuación)
Medidas judiciales en el pasado	Régimen Cerrado (RC) Régimen Semiabierto (RSA) Régimen Abierto (RA) Terapéutico en Régimen Cerrado (TRC) Terapéutico en Régimen Semiabierto (TRSA) Permanencia de Fin de Semana en Centro (FSC) Permanencia de Fin de Semana en Domicilio (FSD) Libertad Vigilada (LV) Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (PBC) Realización de Tareas Socioeducativas (TSE) Otras
Medidas judiciales en la actualidad	Régimen Cerrado (RC) Régimen Semiabierto (RSA) Régimen Abierto (RA) Terapéutico en Régimen Cerrado (TRC) Terapéutico en Régimen Semiabierto (TRSA) Permanencia de Fin de Semana en Centro (FSC) Permanencia de Fin de Semana en Domicilio (FSD) Libertad Vigilada (LV) Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (PBC) Realización de Tareas Socioeducativas (TSE) Otras
Composición familiar	Nuclear Monoparental Reconstituida Protección No consta
Tipo de familia	Funcional Disfuncional No consta
Tipo específico de problemática familiar disfuncional	Multi-problemática Delincuencial Factores económicos Consumos de sustancias Enfermedad Problemas relacionales Maltrato físico padres a hijo/a Maltrato psíquico padres a hijo/a Violencia ascendente Violencia de género
Escolarización de los menores	Sí No No consta

Etiqueta de la variable	Niveles (Continuación)
Nivel Formativo	Sin formación (No sabe leer ni escribir) Educación Primaria Educación con Estudios Primarios Educación Secundaria. Primera etapa Educación Secundaria. Segunda etapa Bachillerato Incompleto Bachillerato Completo Universidad. Primer ciclo PCPI Prelaborales Ciclo Medio No consta
Absentismo escolar	Frecuente (más de un día a la semana durante más de un mes) Ocasional No No consta
Abandono escolar (Se considera abandono cuando el menor ha faltado a clase en un periodo superior a tres meses seguidos)	Sí No No consta
Repetición de curso	Sí No No consta
Rendimiento escolar (En los últimos meses)	Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo No escolarizado No consta
Características del grupo de iguales Se consideró el grupo de referencia antes de cumplir la medida judicial, pudiendo consignarse más de un tipo de relaciones, si éstas son estables y continuadas	Carencia de relación/es estable. Aislamiento social Normalizados, sin una problemática destacable Grupo de relación disocial Grupo violento-disocial Banda organizada Grupo de relación de edad mayor que él/ella
Papel del menor en relación con los iguales	De liderazgo (maneja el grupo; influye sobre los demás) De sumisión (pasivo; se deja influir por los demás) Intermedio No consta

Etiqueta de la variable	Niveles (Continuación)
Uso del ocio y tiempo libre antes de cumplir la medida Esta variable se evalúa en función de la frecuencia que presenta el menor de las siguientes actividades. Así, el nivel de frecuencia para cada una de las actividades iría desde: nunca o casi nunca; 1 o 2 veces al mes; 1 o 2 veces por semana; más de dos veces por semana y no consta.	Ir a pubs, bares o discotecas Estar en la calle, plazas o parques Estar en la calle bebiendo o fumando Ir al cine o al teatro Practicar deportes Practicar deportes de riesgo Ir a conciertos o eventos deportivos Ir a casa de amigos o familiares Participar en una asociación o grupo Ir de excursión Salir al campo de acampada Realizar actividades culturales Estar en la calle Pasar el tiempo en centros comerciales
Consumo de drogas o alcohol alguna vez en la vida	Sí No No consta
Consumo frecuente de drogas o alcohol durante los últimos 12 meses En el HCS-J se puede especificar dicha frecuencia en: menos de una vez por semana; una o dos veces a la semana; más de dos veces a la semana y no consta. Para el presente estudio se ha considera la presencia o ausencia de consumo.	Sí No No Consta
Evidencias de que el menor continúa consumiendo drogas Para evaluar esta variable, se tiene en cuenta si se han realizado controles y/o tratamientos de sustancias psicoactivas al menor/joven	Sí No No consta
Tratamiento previo al cumplimiento de la medida por consumo de sustancias	Sí No No consta
Presencia de conductas violentas en los últimos 12 meses Se consideran todas las conductas violentas, como peleas, agresiones, golpes, etc., también las que se recogen en los hechos motivo del expediente	Sí No No consta
Empleo de violencia en los hechos expedientados	Sí No No consta
Características de personalidad auto-informadas	Dificultad para ponerse en lugar del otro Frialdad emocional Manipulación frecuente de los otros Falta de remordimientos Insensibilidad Mentira frecuente Afecto superficial Simulación emocional Problemas tempranos de conducta

En cuanto a las variables predictoras introducidas en el análisis de regresión fueron medidas por los factores de riesgo que recoge el IGI-J (Delitos y medidas judiciales pasadas y actuales, Pautas educativas, Educación formal/Empleo, Grupo de iguales, Consumo de sustancias, Personalidad/Conducta y Actitudes/Creencias), y por variables recogidas en diversas áreas del HCS-J (área de Relación, Ocio y Tiempo Libre, datos Familiares y Económicos, datos Escolares y Formativos, datos Laborales, área de Conductas adictivas y área de Personalidad y conducta), siendo variable dependiente el ocio de riesgo, medido con el Factor Ocio/Diversión del IGI-J.

Tabla 8.3. Variables predictoras

VARIABLES PREDICTORAS	
Factores de riesgo medidos con el IGI-J	<ul style="list-style-type: none"> - Pautas educativas - Educación formal / Empleo - Grupo de iguales - Consumo de sustancias - Personalidad/ Conducta - Actitudes, valores y creencias
Variables del área de Relación, Ocio y Tiempo Libre del HCS-J	<ul style="list-style-type: none"> - Papel del menor en su grupo de relación - Número de amigos íntimos - Cómo se lleva con sus hermanos - Cómo se lleva con otros jóvenes - Cómo se comporta con sus padres - Cómo hace las cosas por sí mismos - Aislamiento social antes de cumplir la medida judicial - Grupo de pares normalizados antes cumplir de la medida judicial - Grupo disocial antes de cumplir la medida judicial - Grupo violento antes de cumplir la medida judicial - Grupo de iguales de mayor edad que la suya antes de cumplir la medida judicial - Ir a bares y discotecas antes de cumplir la medida judicial - Estar en la calle con amigos pasando el rato antes de cumplir la medida judicial - Estar en la calle haciendo botellón y fumando porros antes de cumplir la medida judicial - Ir al cine o al teatro antes de cumplir la medida judicial - Practicar deportes habituales antes de cumplir la medida judicial - Practicar deportes de riesgo antes de cumplir la medida judicial - Ir a conciertos o eventos deportivos antes de cumplir la medida judicial - Ir a casa de amigos/familiares antes de cumplir la medida judicial - Participar en una asociación o grupo antes de cumplir la medida judicial - Ir de excursión antes de cumplir la medida judicial - Salir al campo antes de cumplir la medida judicial

	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar actividades culturales antes de cumplir la medida judicial - Estar en la calle sin ningún objetivo antes de cumplir la medida judicial - Pasar tiempo en centros comerciales antes de cumplir la medida judicial - Coincide el ocio actual con el ocio anterior al cumplimiento de la medida judicial - La comisión del delito motivo del expediente la realizó en compañía de miembros de su grupo de relación - Cuando consume drogas lo hace en compañía de alguno de los miembros de su grupo de relación
Variables del área de Datos Familiares y Económicos del HCS-J	<ul style="list-style-type: none"> - Composición familiar nuclear - Familia monoparental - Familia reconstituida - Protección - Familia disfuncional multiproblemática - Familia disfuncional delincencial - Familia disfuncional por factores económicos - Familia disfuncional por consumo de sustancias - Disfuncional por enfermedad - Familia disfuncional por problemas relacionales - Familia disfuncional por maltrato físico de padres a hijos - Familia disfuncional por maltrato psíquico de padres a hijos - Familia disfuncional por abuso sexual - Familia disfuncional por violencia ascendente - Familia disfuncional por violencia de género - Estilo educativo familiar de la madre - Nivel socioeconómico - Nivel cultural
Variables del área de Datos Escolares y Formativos del HCS-J	<ul style="list-style-type: none"> - Si estaba escolarizado en el momento de ser denunciado - Nivel real formativo aproximado - Presencia en su historial educativo de situaciones de absentismo escolar - Presencia en su historial educativo de alguna situación de abandono escolar - Repetición de curso alguna vez - Número de veces que ha repetido curso - Rendimiento escolar en los últimos meses - Presencia de comportamientos disruptivos en el contexto escolar que han supuesto expulsiones reiteradas (dos o más en un curso) - Desobediencia - Insultos a compañeros - Insultos a adultos - Hurtos o daños - Peleas con compañeros - Acoso escolar - Enfrentamiento grave con adultos
Variables del área de Datos Laborales del HCS-J	<ul style="list-style-type: none"> - Incorporación al mercado laboral - Motivo de la finalización de los trabajos - Uso que hace el menor con los ingresos percibidos

Variables del área de Conductas adictivas del HCS-J	<ul style="list-style-type: none"> - Consume o ha consumido drogas o alcohol alguna vez en su vida - Evidencia (controles, centros de tratamiento, etc.), de que sigue consumiendo drogas - Existencia de tratamiento previo al cumplimiento de la medida judicial por consumo de sustancias
Variables del área de Personalidad y Conducta del HCS-J	<ul style="list-style-type: none"> - Presencia de conductas violentas en los últimos 12 meses, incluidos los hechos motivo del expediente judicial - Si el motivo del expediente conllevó empleo de violencia física o amenazas - Dificultad para ponerse en el lugar del otro - Frialdad emocional - Manipulación frecuente de los otros - Falta de remordimientos - Insensibilidad - Mentira frecuente - Afecto superficial - Simulación emocional - Problemas tempranos de conducta - Conducta sexual impersonal

8.2. Participantes

La muestra del presente estudio ha estado compuesta por 428 menores/jóvenes. Los participantes del presente estudio fueron menores/jóvenes que han cumplido una medida judicial de internamiento tanto cautelar, como firme en los diferentes Centros de Ejecución de Medidas Judiciales de Madrid; Renasco, El Madroño, Altamira, El Pinar, El Pinar II, El Laurel, Puerta Bonita, Los Robles y Teresa de Calcuta, así como medidas en medio abierto en los diversos recursos del ARRMi en la Comunidad de Madrid durante los años 2010 y 2011.

Al inicio de la medida judicial se abre un período de evaluación psicosocial del menor, donde en primer lugar, se valoran tanto sus características sociodemográficas, como variables que tienen que ver con su historial delictivo, familiar y social, personalidad, habilidades o déficits de desarrollo personal y competencia social, nivel formativo, consumo de sustancias, etc. En síntesis, en dicha valoración se evalúan sus factores de riesgo y protección, donde lo que se pretende es llevar a cabo una hipótesis explicativa que permita comprender la conducta delictiva del menor.

Para ello, en dicha valoración, se utiliza un primer instrumento a modo de entrevista estructurada inicial, Historial Criminológico y Social; HCS-J, y, posteriormente, se lleva a

cabo el Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes; IGI-J, lo que nos permitirá medir tanto cualitativamente, como cuantitativamente el nivel de riesgo del menor, tanto por áreas, como de manera global, así como sentar las bases para la intervención.

Por tanto, de los 428 menores y jóvenes que componen la muestra del presente estudio, todos han sido evaluados mediante el HCS-J: Versión Juvenil y el IGI.-J., en los años 2010 y 2011.

Cabe destacar, que de estos 428 menores, 378 eran varones, lo que representa el 88,3% de la muestra, frente a 50 mujeres, que representa un 11,7% del total de los participantes, atendiendo a la edad, ésta estaba comprendida en un rango etario entre los 14 y los 21 años, con una media de 16,8 años, siendo la española la nacionalidad predominante con un 54,4% de representación, seguida de la latinoamericana con un 29%. Otro dato importante, es que en cuanto al nivel formativo, casi la mitad de la muestra, el 47,2% no estaban escolarizados, y el 63,9% tampoco se había incorporado al mundo laboral.

Tabla 8.4. Características sociodemográficas de la muestra (N=428)

VARIABLES		VALORES							
Género	Varones: 88,3% (n=80)				Mujeres: 11,7% (n=50)				
Edad	Media =16,8 años $\sigma=1,3$	14 años= 2,6% (n=11)	15 años= 13,1% (n=56)	16 años= 24,1% (n=103)	17 años= 30,8% (n=132)	18 años= 21,5% (n=92)	19 años= 5,8% (n=25)	20 años= 1,6% (n=7)	21 años= 0,5% (n=2)
Nacionalidad	España 54,4% (n=233)	Latinoamericano 29% (n=124)	Magrebí 10% (n=43)	Europeo comunitario (n=17)	4%	Europeo no comunitario (n=17)	4%	Otros 0,7% (n=8)	
Formación académica/Empleo	Escolarizado 47,2% (n=202)			No escolarizado 47,9% (n=205)		Incorporado al mundo laboral 18,2% (n=78)		No incorporado al mundo laboral 63,6% (n=272)	

8.3. Instrumento de evaluación

Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes (I.G.I.-J)

Este instrumento es la adaptación española que llevaron a cabo Garrido, et. al. (2006) del Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/MCI) de Hoge y Andrews (2002), que a su vez era la versión para jóvenes del Inventario de Nivel de Servicio Revisado (LSI-R) de Andrews y Bonta (1995). Este instrumento cuenta con una considerable evidencia empírica sobre su fiabilidad y validez (Andrews y Bonta, 1995).

El instrumento se asienta sobre las bases del Modelo integrado de la conducta delictiva de Andrews y Bonta (1994; 2003), la cual parte de los principios del condicionamiento clásico y operante, así como del aprendizaje social y cognitivo, entendiendo la conducta delictiva como una integración de factores personales que interactúan con variables determinantes situaciones.

El instrumento se compone del HCS-J, para una evaluación inicial que podría constituirse como una entrevista semiestructurada con el menor/joven y donde se recogen por ítems desplegados información sociodemográfica relevante, historial delictivo (tipología delictiva, medidas anteriores, duración de las mismas), composición familiar, dinámica y la existencia de problemática dentro de la misma, nivel formativo y su adherencia, características del grupo de iguales y su interrelación, uso del tiempo libre, consumo de drogas, tratamientos psicológicos previos, empleo de la violencia y características de personalidad significativas. Así, el Historial Criminológico y Social para Jóvenes, nos aporta una visión global del menor antes de comenzar a evaluar sus factores de riesgo y/o protección.

El IGI-J, como ya se ha hecho mención a lo largo del presente trabajo, se compone de 42 ítems agrupados en 8 factores de riesgo, Delitos y medidas judiciales pasadas y actuales, Pautas educativas, Educación Formal/Empleo, Relación con el grupo de iguales, Consumo de drogas, Ocio/diversión, Personalidad/Conducta y Actitudes, valores y Creencias, (ver Anexo 4), así, en cada uno de ellos se debe señalar la presencia del mismo en el menor. En ningún caso, el IGI-J puede realizarse de manera auto-informada por el menor, sino que es tarea del evaluador, con la información que dispone tanto del HCS-J, como de las diversas fuentes que considere relevantes (por ejemplo mediante entrevistas familiares, mediante coordinación con los profesionales centros formativos donde haya estado matriculado, Centros de Servicios Sociales y/o protección, o cualquier otra fuente que en el caso pueda resultar significativa).

Por otro lado, es importante hacer mención a que la primera área del IGI-J, hace referencia a un factor de riesgo estático, ante el cual no existe la posibilidad de intervenir, pero que en la literatura científica es considerado como uno de los mayores predictores del comportamiento delictivo futuro; Delitos y medidas judiciales pasadas y actuales.

Cabe destacar también que todos los factores que mide el IGI-J, el evaluador los puede contemplar tanto como factores de riesgo, como de factor de protección, si así lo considera, lo que va a facilitar a la hora de efectuar un programa de intervención ajustado a las características psicosociales del menor.

En la segunda parte del IGI-J, el instrumento ofrece una serie de tablas, que exponen de manera visual los principales factores de riesgo y protección del menor, donde además, nos aporta el nivel de riesgo total global, así como una clasificación ponderada del mismo. De este modo, según la puntuación el nivel de riesgo lo clasifica en; Bajo (0-8 puntos); Moderado (9-22 puntos); Alto (23-34) y Muy Alto (35-43).

En la tercera parte, el Inventario evalúa otras necesidades y consideraciones especiales, valorando aspectos disfuncionales de las relaciones intrafamiliares y posteriormente, déficits del desarrollo psicosocial del menor.

Posteriormente, en la cuarta parte, se realiza una evaluación cualitativa del nivel general de riesgo y necesidades del menor, pudiendo señalar los cuatro niveles de riesgo (Bajo, Moderado, Alto y Muy Alto) y el motivo por el cual el evaluador cree que el menor alcanza ese nivel concreto. Cabe destacar que si la estimación del riesgo que ofrece el Inventario difiere de la del evaluador, se tiene la oportunidad de justificar cualitativamente su razonamiento.

Por otro lado, en la quinta parte del Inventario, el evaluador debe especificar el nivel de intervención que considera necesario. Así, el IGI-J proporciona cuatro niveles de intervención; Burocrática/Administrativa, Supervisión mínima, Supervisión media y Supervisión máxima. Dichos niveles hacen referencia a la restricción que se otorgará a su vez a la medida judicial en la intervención, es decir, por ejemplo, a un menor con nivel de riesgo alto no se le otorgaría un nivel Burocrático/administrativo, sino que la intervención requeriría de una mayor supervisión, aspecto importante a tener en cuenta tanto en los objetivos generales y específicos, como en las actividades propuestas a llevar a cabo para su consecución.

Posteriormente, el IGI-J aporta un espacio donde el evaluador pueda explicar cualitativamente los motivos por los que el menor ha llevado a cabo la actividad delictiva, es decir, de qué manera interactúan sus factores de riesgo y han podido influenciar en su comportamiento.

En la sexta parte se incluyen cuatro objetivos generales con dos objetivos específicos, así como el profesional responsable de los mismos, la actividad o actividades que se van a llevar a cabo, horario y tiempo que se le va a dedicar a las mismas, fecha de revisión, lugar de realización y recursos necesarios. A modo de ejemplo, si un menor consume sustancias

psicoactivas y como objetivo se plantea el que se reduzca su consumo, y aumente su nivel de conciencia acerca de las consecuencias negativas inherentes a dicho hábito, el responsable sería su psicólogo de referencia en el Centro, así como los profesionales del Programa ENLACE, como actividad, se podrían incluir terapias individualizadas con su psicólogo y asistencia a dicho programa, el horario sería el estimado para las terapias, 1 hora semanal en cada una de ellas, el lugar de realización sería el Centro de Ejecución de Medidas Judiciales, y los recursos necesarios en este caso serían humanos.

Por último, la séptima parte propone la valoración de la evaluación anterior, donde se puntúa de 0 a 10 si el menor ha logrado los objetivos. Así, aporta tres posibilidades en cada uno de los objetivos generales que irían desde Logrado (si se le otorga entre 9 y 10 puntos), Parcialmente logrado (si la puntuación es entre 8-5 puntos), y No logrado (si corresponde a valores entre 4-0 puntos), pudiendo el evaluador explicar el motivo por el cual otorga dicha puntuación a cada uno de los objetivos. Este Instrumento se valora cada 6 meses, por lo que cuando se vuelve a evaluar el nivel de riesgo, en el IGI-J anterior, se valora si el menor ha evolucionado en cuanto a la obtención de los objetivos propuestos en la intervención, y por consiguiente, su nivel de riesgo puede haber bajado, o si experimenta una involución, por lo que orientará al profesional de cara al planteamiento de nuevos objetivos con el menor.

Cabe señalar, que una especificidad de este Inventario es que no sólo evalúa de manera estandarizada y fiable el nivel de riesgo del menor, sino que aporta otras cualidades de cara a la intervención. Por un lado, vincula la evaluación a la intervención, aspecto importante para que esta pueda resultar efectiva, sino que además, permite valorar dicha intervención de cara a las periódicas evaluaciones semestrales que el Inventario propone y que le volverán a guiar según la evolución del menor hacia otros objetivos acordes a la situación actual.

En cuanto a los datos relativos a la fiabilidad del Instrumento, existen diversos estudios que coinciden en sus resultados, considerando una consistencia interna muy alta (entre 0'70 y 0'90) mediante el Alfa de Cronbach, en la Tabla 8.5 puede verse el análisis de algunos de ellos.

Tabla 8.5. Fiabilidad del IGI-J

IGI-J	Coefficiente Alpha de Cronbach
Graña et al. (2007)	0,88
Cuervo (2011)	0,92
Garrido (2009)	0,803

Por su parte, los datos de fiabilidad obtenidos mediante el coeficiente Alfa de Cronbach a partir del uso de este Inventario en el presente estudio, ha sido de 0,91 en el Inventario en su totalidad.

8.4. Procedimiento

El proceso de evaluación consistió en el desarrollo de diversas sesiones de recogida de información por parte de los psicólogos de los diversos Centros de Ejecución de Medidas Judiciales de la Comunidad de Madrid, llevando a cabo a su vez las coordinaciones necesarias con otros profesionales externos al C.E.M.J. y que hayan intervenido previamente con el menor en diversas áreas para obtener una visión completa de cada caso. En las sesiones de evaluación se llevó a cabo la administración primero del HCS-J, y posteriormente, del IGI-J.

Cabe destacar que la evaluación se ha enmarcado dentro del contexto judicial en el que los psicólogos encargados de la misma, posteriormente, son los responsables de la intervención a lo largo del cumplimiento de la medida judicial.

8.5. Evaluadores

Según la L.O.R.P.M. 5/2000, así como su reglamento, Real Decreto 1774/2004, una vez que un menor/joven cuenta con una medida judicial, ya sea en sentencia cautelar o firme, así como de Internamiento o Libertad Vigilada, la entidad pública competente de dicha ejecución designa de forma inmediata, y en todo caso, en el plazo máximo de cinco días, un profesional que se responsabiliza de la medida impuesta. De este modo, se dentro del Equipo Técnico, un psicólogo de referencia, el cual realizará una primera evaluación, valorando

transversalmente el área, psicológica, social y educativa, para su posterior intervención. Así, tanto las medidas de Libertad Vigilada, como en las de Internamiento, se elabora un Programa Individualizado de Ejecución, en caso de que ésta sea firme, o un Modelo Individualizado de Intervención, si la medida es cautelar, contando el Equipo Técnico en los casos de internamiento, con 20 días desde su ingreso.

Así, los psicólogos de los C.E.M.J. de la Comunidad de Madrid, están especialmente entrenados en la valoración de riesgo de reincidencia mediante el IGI-J, así como en la aplicación del HCS-J, habiendo a su vez recibido diversos cursos de formación en el manejo del Inventario, habiendo colaborado dichos profesionales con los estudios que la Agencia para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor y la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid han llevado a cabo sobre la reincidencia delictiva y sus características y evaluación.

8.6. Análisis estadístico

Todos los análisis estadísticos fueron realizados mediante el paquete estadístico *SPSS 19.0*. Se llevaron a cabo diferentes análisis en relación a los objetivos e hipótesis propuestos en este estudio.

En primer lugar, se determinó el índice de fiabilidad a través del coeficiente *Alpha* de Cronbach para el Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes (IGI-J). A continuación, se procedió a realizar un análisis descriptivo de diversas variables. Para ello, se calcularon frecuencias, porcentajes, estadísticos de tendencia central y dispersión dependiendo de la naturaleza de cada una de las variables incluidas.

En segundo lugar, se utilizaron pruebas de *Chi-Cuadrado* de Pearson para comprobar la posible existencia de diferencias estadísticamente significativas entre grupos de participantes en variables de tipo socio-demográfico, descriptivas y de reincidencia delictiva, en el caso de variables categóricas, y *r* de Pearson y *t* de Student para encontrar posibles relaciones entre variables cuantitativas.

Por último, se realizaron diversos análisis de regresión por grupos de variables para determinar modelos predictivos de la presencia de ocio de riesgo en los menores infractores. Para ello, se empleó el análisis de regresión múltiple siguiendo el método de *pasos sucesivos*.

Capítulo IX:

Resultados

9.1. Análisis descriptivo de las características de la muestra en función de los datos obtenidos en el HCS-J.

En este apartado se van a presentar los estadísticos descriptivos obtenidos en relación con cada una de las variables estudiadas con el instrumento HCS-J. La muestra total de estudio estuvo compuesta por 428 menores evaluados en los diferentes centros y recursos del ARRMi en la Comunidad de Madrid durante los años 2010 y 2011 (Tabla 9.1).

Tabla 9.1. Centros de Ejecución de Medidas Judiciales (C.E.M.J.) y número de jóvenes evaluados en la muestra total

		Tipo de medida		
		I + LV	LV	Total
Centro de internamiento	Renasco	11	0	11
		5,2%	0%	2,6%
	El Madroño	4	0	4
		1,9%	0%	,9%
	Altamira	14	0	14
		6,6%	0%	3,3%
	El Pinar	19	0	19
		9%	0%	4,4%
	El Pinar II	16	0	16
		7,6%	0%	3,7%
	El Laurel	26	0	26
		12,3%	0%	6,1%
	Puerta Bonita	2	0	2
		,9%	0%	,5%
	Los Robles	8	0	8
		3,8%	0%	1,9%
	Teresa de Calcuta	71	0	71
		33,6%	0%	16,6%
	Las Palmeras	13	0	13
		6,2%	0%	3,1%
	Libertad Vigilada	0	217	217
		0%	100%	50,9%

	El Lavadero	27	0	27
		12,9%	0%	6%
Total		211	217	428
		100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

Tal y como se observa en la Tabla 9.2, un total de 141 menores (66,8%) de la muestra del grupo I+LV estaban cumpliendo medida firme, frente a 70 (33,2%) que lo hacían de forma cautelar. En cambio, en el grupo LV cumplían medida firme 211 menores (97,2%).

Tabla 9.2. Tipo de medida judicial en la actualidad

		Tipo de medida		
		I + LV	LV	Total
Tipo de medida	Firme	141	211	352
		66,8%	97,2%	82,2%
	Cautelar	70	6	76
		33,2%	2,8%	17,8%
Total		211	217	428
		100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

9.1.1. Descripción de las características socio-demográficas

Al tener en cuenta el género de los participantes (Tabla 9.3), se observa que en la muestra total un 88,3% (n=378) eran hombres y el 11,7% restante mujeres (n=50).

Tabla 9.3. Género de los participantes

		Tipo de medida		
		I + LV	LV	Total
Sexo	Varones	183	195	378
		86,7%	89,9%	88,3%
	Mujeres	28	22	50
		13,3%	10,1%	11,7%
Total		211	217	428
		100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

La distribución en función de la edad muestra un rango que se sitúa entre los 14 y los 21 años, siendo la edad media de 16,8 años ($SD=1,3$). La Tabla 9.4 refleja esta distribución por grupos de edad que será utilizada para otros análisis con el objetivo de verificar la relación entre esta variable y otras incluidas en el estudio.

Tabla 9.4. Edad de los participantes

		Tipo de medida		
		I + LV	LV	Total
Edad	14 años	9	2	11
		4,3%	,9%	2,6%
	15 años	32	24	56
		15,2%	11,1%	13,1%
	16 años	45	58	103
		21,3%	26,7%	24,1%
	17 años	69	63	132
		32,7%	29%	30,8%

18 años	39	53	92
	18,5%	24,4%	21,5%
19 años	14	11	25
	6,6%	5,1%	5,8%
20 años	3	4	7
	1,4%	1,8%	1,6%
21 años	0	2	2
	0%	,9%	,5%
Total	211	217	428
	100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

En la Tabla 9.5 se muestra la distribución de la muestra en función del lugar de origen que es, tal y como puede evidenciarse, bastante heterogénea, presentando los menores procedencias muy diversas.

Tabla 9.5. Procedencia geográfica de los menores

		Tipo de medida		
		I + LV	LV	Total
Origen	España	105	128	233
		49,8%	59%	54,4%
	Latinoamericano	68	56	124
		32,2%	25,8%	29%
	Magrebí	28	15	43
		13,3%	6,9%	10%
	Europeo comunitario	5	12	17
		2,4%	5,5%	4%
	Europeo no comunitario	1	2	3
		,5%	,9%	,7%
	Otros	4	4	8

	1,9%	1,8%	1,9%
Total	211	217	428
	100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

En la última tabla de este apartado, y en relación con la situación escolar y laboral de los participantes antes del inicio de la medida actual, se evidencia que un porcentaje elevado se encontraba sin escolarizar (47,9%, n=205) y nunca se habían incorporado al mercado laboral en un 63,6% (n=236).

Tabla 9.6. Escolarización y situación laboral antes del inicio de la medida actual

		Tipo de medida		
		I + LV	LV	Total
Escolarizado	Sí	80	122	202
		37,9%	56,2%	47,2%
	No	125	80	205
		59,2%	36,9%	47,9%
	No consta	6	15	21
		2,8%	6,9%	4,9%
	Total	211	217	428
		100%	100%	100%

		Tipo de medida		
		I + LV	LV	Total
Incorporado al mercado laboral	Sí	28	50	78
		13,3%	23%	18,2%
	No	135	137	272
		64%	63,1%	63,6%
	No consta	48	30	78
		22,7%	13,8%	18,2%
	Total	211	217	428
		100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada

9.1.2. Descripción de las carreras delictivas

En cuanto a las principales características delictivas se observa que el 48,3% de los menores en I+LV empezaron a cumplir su medida actual desde el año 2009; mientras que el 79,3% del grupo de LV cumple la medida desde el año 2010 (Tabla 9.7). En la Tabla 9.8 se describe la duración del internamiento de las medidas impuestas al menor.

Tabla 9.7. Fecha en la que se empezó a cumplir la medida actual

Año	Tipo de medida		Total
	I + LV	LV	
2004	1	0	1
	,5%	0%	,2%
2007	3	0	3
	1,4%	0%	,7%
2008	18	1	19
	8,5%	,5%	4,4%
2009	102	29	131
	48,3%	13,4%	30,6%
2010	86	172	258
	40,8%	79,3%	60,3%
2011	1	15	16
	,5%	6,9%	3,7%
Total	211	217	428
	100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

Tal y como se describe en la Tabla 9.8., las medidas de menor restricción suelen presentar una mayor duración.

Tabla 9.8. Duración del internamiento de las medidas impuestas al menor

		Tipo de medida		
		I + LV	LV	Total
Tiempo de la medida de internamiento	0-6 meses	59	214	273
		28%	98,6%	63,8%
		(-15,2)	(15,2)	
	6-12 meses	122	2	124
		57,8%	,9%	29%
		(13)	(-13)	
	12-18 meses	25	1	26
		11,8%	,5%	6,1%
		(4,9)	(-4,9)	
	18-24 meses	4	0	4
		1,9%	0%	,9%
		(2)	(-2)	
	42-48 meses	1	0	1
		,5%	0%	,2%
		(1)	(-1)	
	Total	211	217	428
		100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

Respecto a los delitos cometidos, en el Gráfico 9.1, que se refiere al grupo I+LV, se observa que la mayoría han sido delitos violentos con afectación del patrimonio (37,2%). En segundo lugar, el 24,8% fueron delitos contra el patrimonio menos violento. El Gráfico 3.2, que corresponde a los delitos cometidos en el grupo LV, presenta que el 35% corresponden a

delitos violentos contra el patrimonio, mientras que el 29,1% corresponden a delitos contra el patrimonio menos violentos.

Gráfico 9.1. Delitos cometidos en la actualidad en el grupo Internamiento + Libertad Vigilada

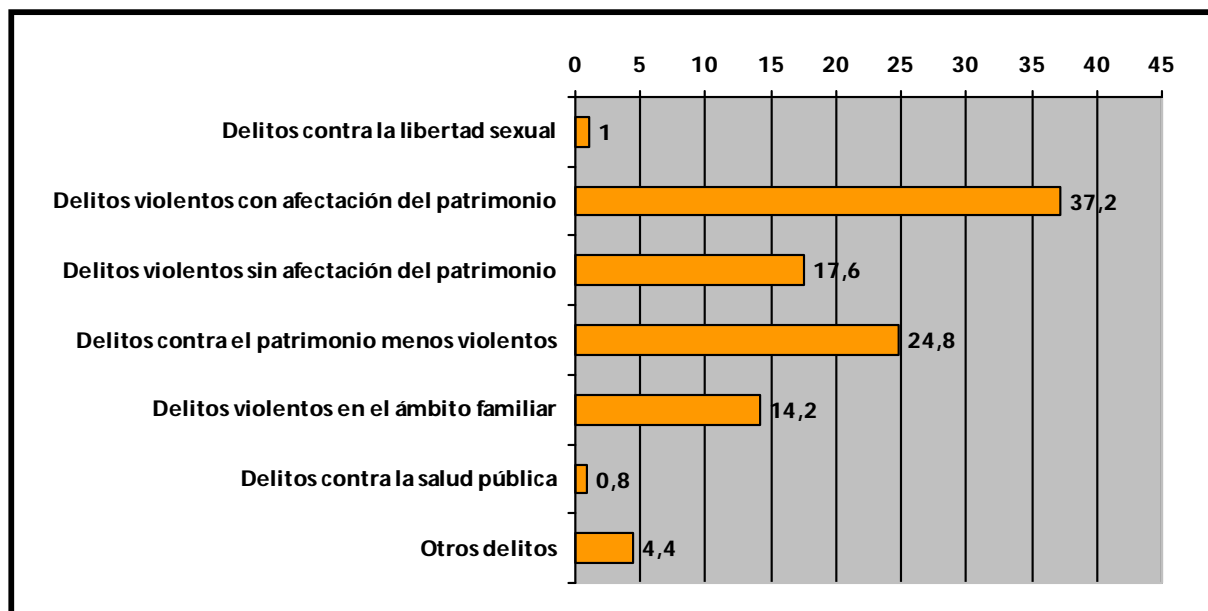
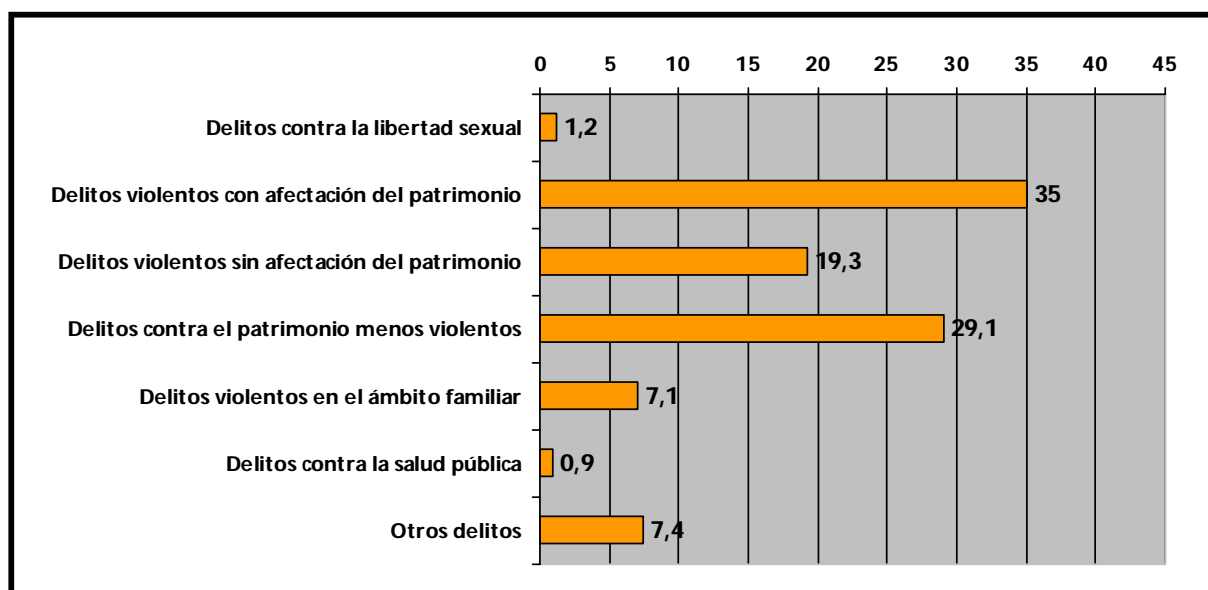


Gráfico 9.2. Delitos cometidos en la actualidad en el grupo Libertad Vigilada



Los Gráficos 9.3 y 9.4 describen los porcentajes de delitos cometidos en el pasado en ambos grupo.

Gráfico 9.3. Delitos cometidos en el pasado en el grupo Internamiento + Libertad Vigilada

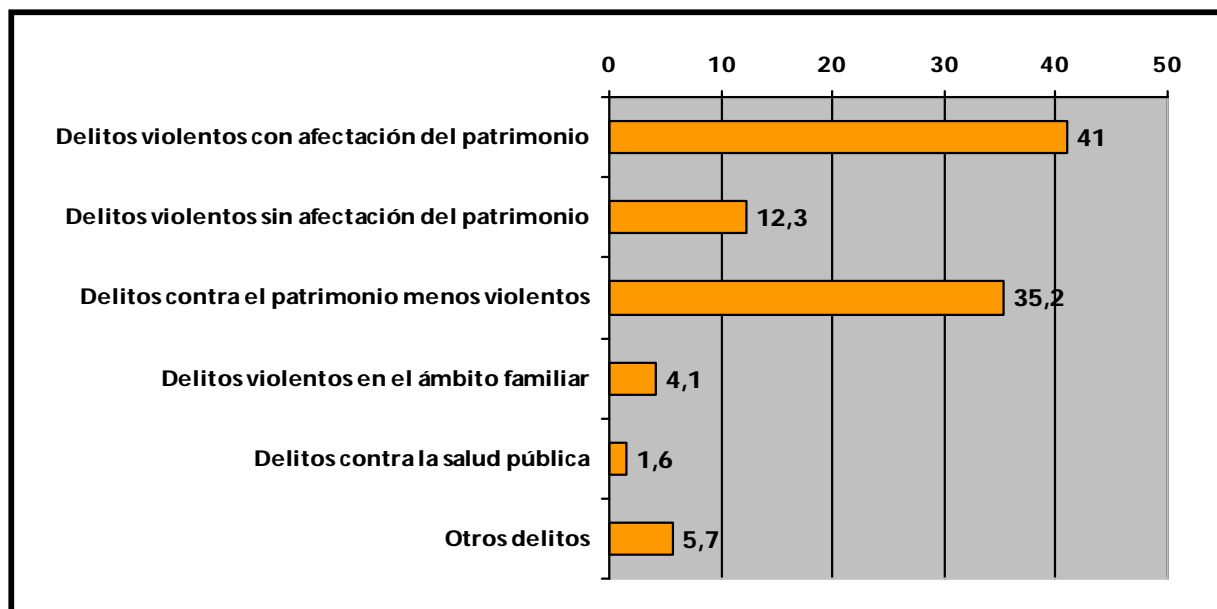
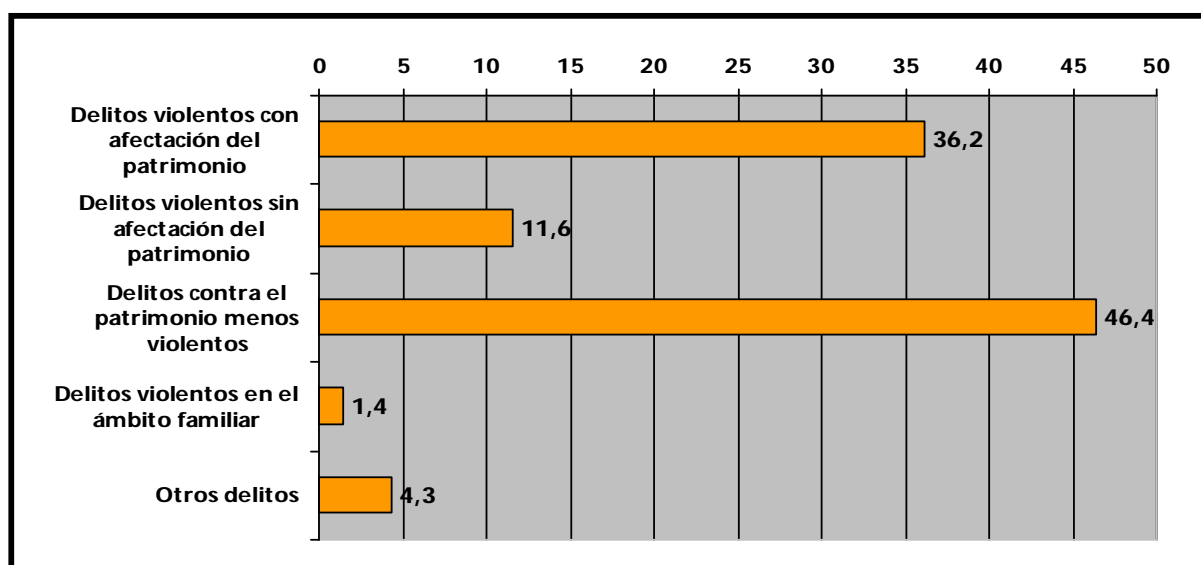
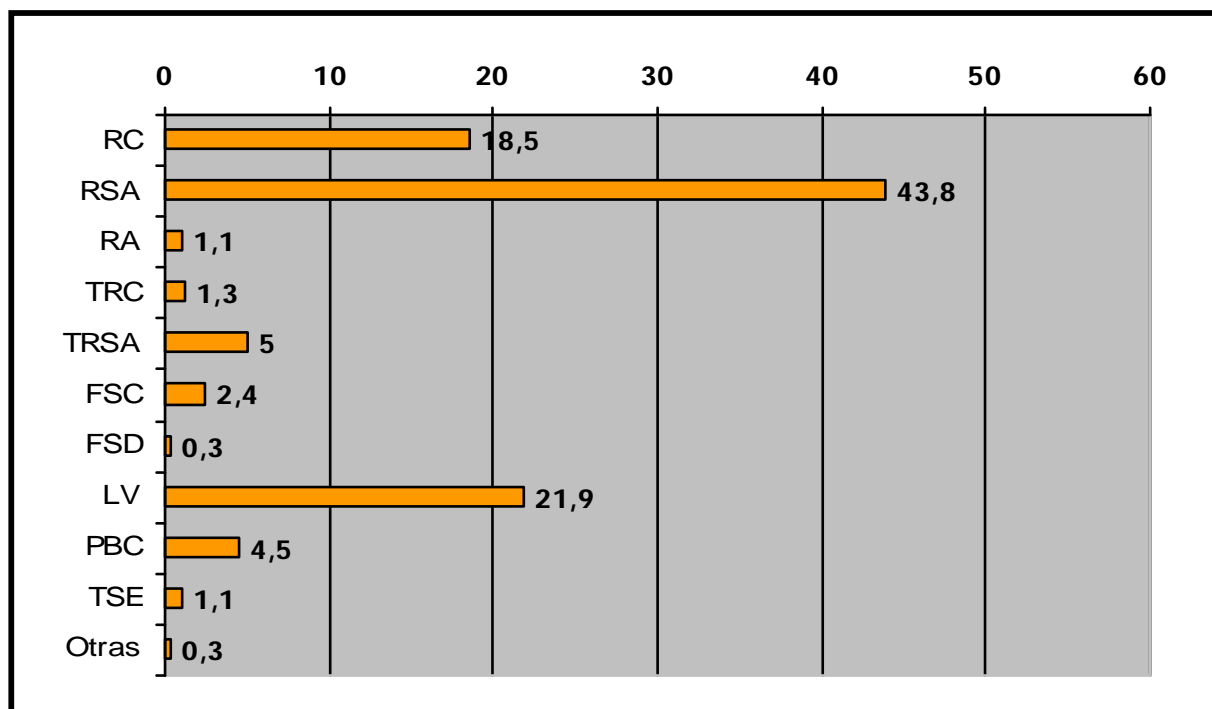


Gráfico 9.4. Delitos cometidos en el pasado en el grupo Libertad Vigilada



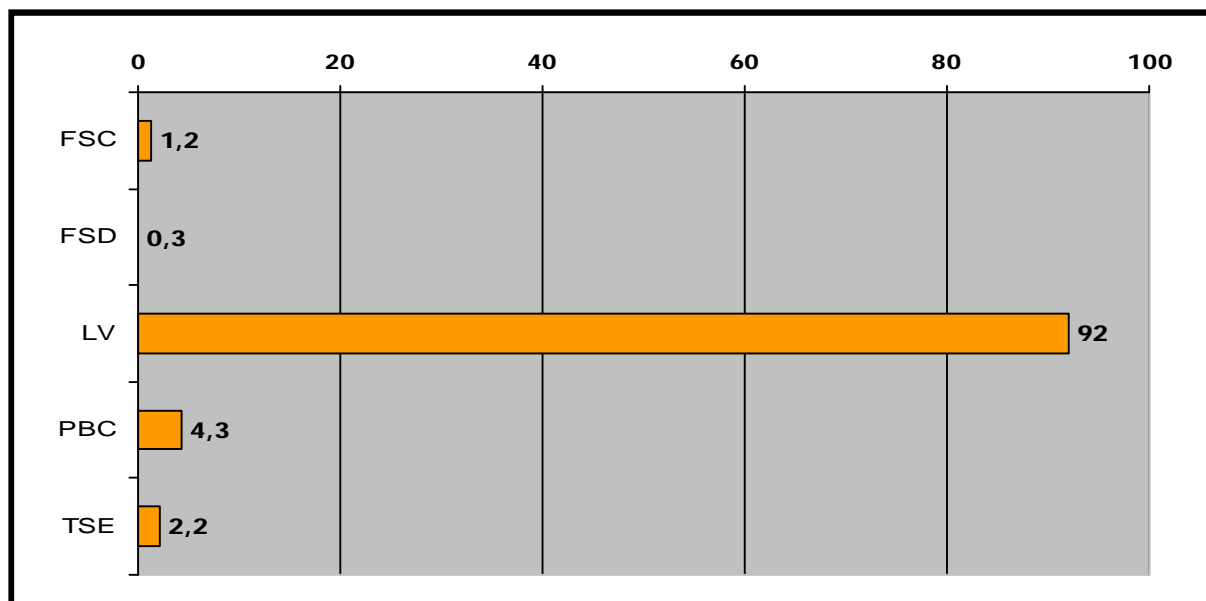
Por lo que respecta a la distribución de las medidas actuales (Gráfico 9.5), se observa que la más frecuente en el grupo I+LV es el RSA (43,8%), seguida de la medida de LV en un 21,9% de los casos. En este sentido, hay que señalar que se refiere a medias pendientes de cumplir cuya ejecución es incompatible con la situación de internamiento.

Gráfico 9.5. Distribución de las medidas en la actualidad en el grupo Internamiento+Libertad Vigilada



Nota. RC= Régimen Cerrado; RSA= Régimen semiabierto; RA= Régimen abierto; TRC= Terapéutico régimen cerrado; TRSA= Terapéutico régimen abierto; FSC= Fin de semana en Centro; FSD= Fin de semana en domicilio; LV= Libertad Vigilada; PBC= Prestaciones en Beneficio de la Comunidad; TSE= Tareas socio-educativas.

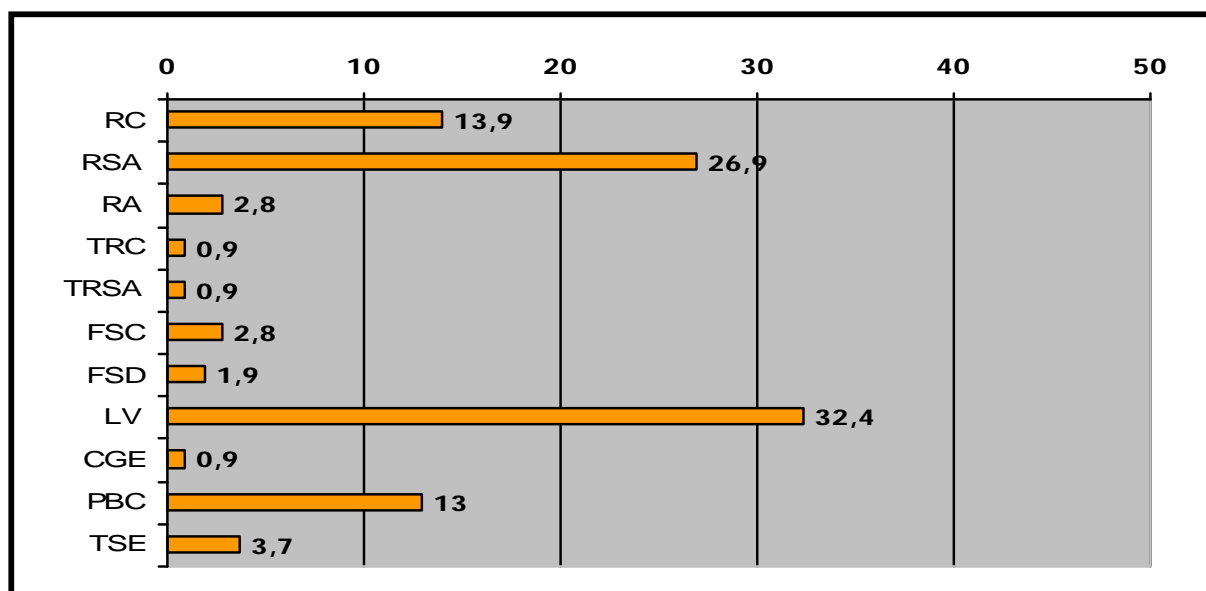
Gráfico 9.6. Distribución de todas las medidas que se cumplen en la actualidad en el grupo Libertad Vigilada



Nota. FSC= Fin de semana en Centro; FSD= Fin de semana en domicilio; LV= Libertad Vigilada; PBC= Prestaciones en Beneficio de la Comunidad; TSE= Tareas socio-educativas

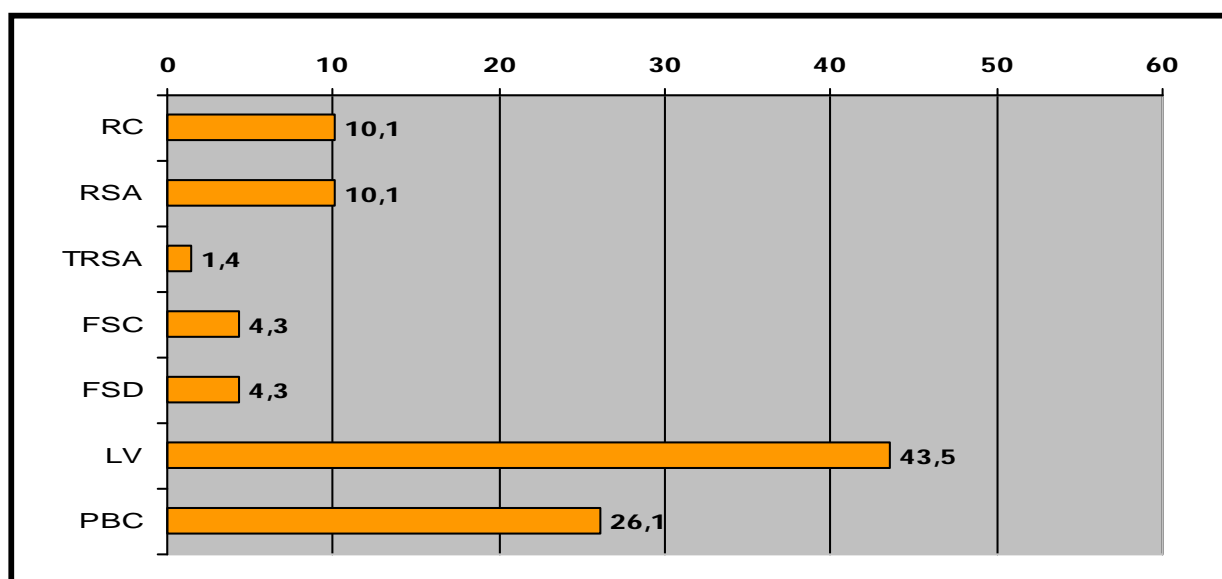
Finalmente, los Gráficos 9.7 y 9.8 se presentan la distribución de las medidas en el pasado en ambos grupos.

Gráfico 9.7. Distribución de las medidas en el pasado en el grupo Internamiento+Libertad Vigilada



Nota. RC= Régimen Cerrado; RSA= Régimen semiabierto; RA= Régimen abierto; TRC= Terapéutico régimen cerrado; TRSA= Terapéutico régimen abierto; FSC= Fin de semana en Centro; FSD= Fin de semana en domicilio; LV= Libertad Vigilada; CGE= Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo; PBC= Prestaciones en Beneficio de la Comunidad; TSE= Tareas socio-educativas.

Gráfico 9.8. Distribución de las medidas en el pasado en el grupo Libertad Vigilada



Nota. RC= Régimen Cerrado; RSA= Régimen semiabierto; TRSA= Terapéutico régimen abierto; FSC= Fin de semana en Centro; FSD= Fin de semana en domicilio; LV= Libertad Vigilada; PBC= Prestaciones en Beneficio de la Comunidad.

9.1.3. Descripción de las características familiares, escolares y del entorno.

Con respecto a las características familiares, dentro de los distintos tipos de composición familiar (Tabla 9.9), es la de tipo nuclear la más representativa en ambos grupos (35,9% y 44,3%). Destaca también que el 7,8% y el 5,2% de los casos provienen de protección lo que, en principio, es inferior a lo esperado. Más específicamente (Tabla 9.10), el grupo I+LV presenta en mayor proporción mayor problemática disfuncional que el grupo LV (57,8% vs. 35%; $\chi^2=25,32$; $p<0,001$). De forma conjunta, la problemática familiar más frecuente (Tabla 9.11) es la originada por problemas relacionales, seguida por los factores económicos.

Tabla 9.9. Composición familiar

	Tipo de medida		Total
	I + LV	LV	
Nuclear	74	94	168
	35,9%	44,3%	
Monoparental	74	76	150
	35,9%	35,8%	
Reconstituida	50	36	86
	24,3%	17%	
Protección	16	11	27
	7,8%	5,2%	
Total	206	212	418

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

Tabla 9.10. Tipo de familia

	Tipo de medida		Total
	I + LV	LV	
Funcional	89	141	230
	42,2%	65%	53,7%
	(-4,7)	(4,7)	
Disfuncional	122	76	198
	57,8%	35,0%	46,3%
	(4,7)	(-4,7)	
Total	211	217	428
	100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

Tabla 9.11. Tipo específico de problemática familiar disfuncional

	Tipo de medida		Total
	I + LV	LV	
Multi-problemática	27 56,3%	21 43,8%	48
Delincuencial	30 66,7%	15 33,3%	45
Factores económicos	71 65,1%	38 34,9%	109
Consumos de sustancias	33 67,3%	16 32,7%	49
Enfermedad	28 62,2%	17 37,8%	45
Problemas relacionales	67 59,8%	45 40,2%	112
Maltrato físico padres a hijos	28 84,8%	5 15,2%	33
Maltrato psíquico padres a hijo	16 84,2%	3 15,8%	19
Violencia ascendiente	42 80,8%	10 19,2%	52
Violencia de género	26 81,3%	6 18,8%	32
Total	132	82	214

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

La Tabla 9.12 describe si el menor estaba escolarizado en el momento de ser denunciado. Tal y como se observa, en un porcentaje significativo, los menores del grupo I+LV están menos escolarizados que los del grupo LV (37,9% vs. 56,2%; $\chi^2 = 22,39$; $p < 0,001$).

Tabla 9.12. Escolarización de los menores

		Tipo de medida		
		I + LV	LV	Total
Escolarizado	Sí	80	122	202
		37,9%	56,2%	47,2%
		(-3,8)	(3,8)	
		125	80	205
	No	59,2%	36,9%	47,9%
		(4,6)	(-4,6)	
		6	15	21
		2,8%	6,9%	4,9%
	No consta			
	Total	211	217	428
		100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

La Tabla 9.13 describe el nivel formativo de los menores, en el que se observan diferencias significativas ($\chi^2=46,17$; $p<0,001$).

Tabla 9.13. Nivel formativo de los menores

Nivel real formativo		Tipo de medida		
		I + LV	LV	Total
	Sin formación	9	0	9
		4,3%	0%	2,1%
	Educación Primaria	(3,1)	(-3,1)	
		48	14	62
		22,7%	6,5%	14,5%
		(4,8)	(-4,8)	
	Educación con Estudios Primarios	44	33	77
		20,9%	15,2%	18,0%
		(1,5)	(-1,5)	
	Educación Secundaria. Primera etapa	69	97	166
		32,7%	44,7%	38,8%
		(-2,5)	(2,5)	
	Educación Secundaria. Segunda Etapa	20	38	58
		9,5%	17,5%	13,6%
		(-2,4)	(2,4)	
	Bachillerato Incompleto	3	7	10
		1,4%	3,2%	2,3%
		(-1,2)	(1,2)	
	Bachillerato Completo	0	1	1
		0%	,5%	,2%
		(-1)	(1)	
	Universidad. Primer ciclo	1	2	3
		,5%	,9%	,7%
		(-,6)	(,6)	
	PCPI	12	19	31
		5,7%	8,8%	7,2%
		-1,2	1,2	
	Prelaborales	3	2	5
		1,4%	,9%	1,2%
		(,5)	(-,5)	
	Ciclo Medio	0	2	2
		0%	,9%	,5%
		(-1,4)	(1,4)	
	No consta	2	2	4
		,9%	,9%	,9%
	Total	211	217	428
		100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

En cuanto al absentismo escolar previo, éste es más frecuente entre los menores del grupo I+LV (73,9% vs. 41,9%; $\chi^2=45,37$; $p<0,001$). El abandono escolar, también es más frecuente en este grupo como se observa en la Tabla 9.15 (57,8% vs. 37,3%; $\chi^2=21,71$; $p<0,001$).

Tabla 9.14. Absentismo escolar

		Tipo de medida		
		I + LV	LV	Total
Absentismo	Frecuente	156	91	247
		73,9%	41,9%	57,7%
		(6,7)	(-6,7)	
	Ocasional	24	49	73
		11,4%	22,6%	17,1%
		(-3,1)	(3,1)	
	No	22	51	73
		10,4%	23,5%	17,1%
		(-3,6)	(3,6)	
	No consta	9	26	35
		4,3%	12%	8,2%
Total		211	217	428
		100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

Tabla 9.15. Abandono escolar

		Tipo de medida		
		I + LV	LV	Total
Abandono	Si	122	81	203
		57,8%	37,3%	47,4%
		(4,2)	(-4,2)	
	No	72	94	166
		34,1%	43,3%	38,8%
		(-2)	(2)	
	No consta	17	42	59
		8,1%	19,4%	13,8%
	Total	211	217	428
		100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

En cuanto a la Tabla 9.16 se observa que no se han producido diferencias en la repetición de curso ($\chi^2=0,51$; $p=0,78$). No obstante, es necesario mencionar que en número de datos que no constan en esta variable es muy elevado.

Tabla 9.16. Repetición de curso

		Tipo de medida		
		I + LV	LV	Total
Repetición de curso	Sí	137	135	272
		64,9%	62,2%	63,6%
		(,6)	(-,6)	
	NO	34	35	69
		16,1%	16,1%	16,1%
		(0)	(0)	
	No consta	40	47	87
		19,0%	21,7%	20,3%
		(-,7)	(,7)	
Total	211	217	428	
	100%	100%	100%	

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

Finalmente, la Tabla 9.17 presenta las diferencias en el rendimiento escolar en ambos grupos de medidas ($\chi^2=44,35$; $p<0,001$). Puede destacarse que el grupo I+LV presenta mayoritariamente un rendimiento escolar “muy bajo” frente al grupo LV (26,1% vs. 11,1%).

Tabla 9.17. Rendimiento escolar

		Tipo de medida		
		I + LV	LV	Total
Rendimiento escolar	Muy alto	1	1	2
		,5%	,5%	,5%
		(0)	(0)	
	Alto	4	10	14
		1,9%	4,6%	3,3%
		(-1,6)	(1,6)	
	Medio	18	52	70
		8,5%	24,0%	16,4%
		(-4,3)	(4,3)	
	Bajo	52	50	102
		24,6%	23%	23,8%
		(,4)	(-,4)	
	Muy bajo	55	24	79
		26,1%	11,1%	18,5%
		(4)	(-4)	
	No escolarizado	81	68	149
		38,4%	31,3%	34,8%
		(1,5)	(-1,5)	
	No consta	0	12	12
		0%	5,5%	2,8%
	Total	211	217	428
		100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

9.1.4. Descripción del grupo de relación, ocio y tiempo libre

Con respecto al grupo de iguales con el que el joven mantiene relación, en la Tabla 9.18, en la que se representan todas las respuestas múltiples ofrecidas por los menores, se destaca que las características del grupo de iguales con una mayor tasa total de respuesta (272 casos) fue la de una relación disocial que se distribuye entre un 56,3% de los casos en el grupo de I+LV y un 43,8% en el grupo LV. El papel del menor en relación con sus iguales se describe en la Tabla 9.19 en la que se observa que el porcentaje entre ambos grupos es similar

en cuanto a liderazgo y sumisión, destacando en ambos grupos un papel intermedio 59,7% y 51,6% respectivamente entre los internamiento y en Libertad Vigilada.

Tabla 9.18. Características del grupo de iguales

		Tipo de medida		
		I + LV	LV	Total
Carencia de relaciones		27	19	46
		58,7%	41,3%	
Normalizados		25	52	77
		32,5%	67,5%	
Grupo de relación disocial		153	119	272
		56,3%	43,8%	
Grupo violento-disocial		66	20	86
		76,7%	23,3%	
Banda organizada		31	14	45
		68,9%	31,1%	
Grupo de edad mayor		87	54	141
		61,7%	38,3%	

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

Tabla 9.19. Papel del menor en su relación con los iguales

		Tipo de medida		
		I + LV	LV	Total
Papel	De liderazgo	19	12	31
		9,0%	5,5%	7,2%
		(1,4)	(-1,4)	
	De sumisión	57	59	116
		27,0%	27,2%	27,1%
		(0)	(0)	
	Intermedio	126	112	238
		59,7%	51,6%	55,6%
		(1,7)	(-1,7)	
	No consta	9	34	43
		4,3%	15,7%	10,0%

Total	211	217	428
	100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

En relación con el uso del ocio y del tiempo libre antes de cumplir la medida (Tabla 9.20), es de destacar que el 93% de los menores afirman acudir frecuentemente a pubs, bares y discotecas. De forma significativa, el 97,6% de los menores del grupo I+LV afirmaron acudir a este tipo de locales en mucho mayor porcentaje que los del grupo LV ($\chi^2=13,74$; $p<0,001$). En la Tabla 9.20. referidas al ocio y tiempo libre, también podemos observar que el grupo I+LV informan usar su tiempo libre en un mayor porcentaje cada una de las actividades evaluadas. No obstante, las diferencias significativas observadas pueden haber sido originadas por el propio contexto de evaluación.

Tabla 9.20. Uso del ocio y del tiempo libre

		Tipo de medida		Total
		I + LV	LV	
Ir a pubs, bares o discotecas	No	5	25	30
		2,4%	11,5%	7%
		(-3,7)	(3,7)	
	Sí	206	192	398
		97,6%	88,5%	93%
		(3,7)	(-3,7)	
	TOTAL	211	217	428
		100%	100%	100%
Estar en la calle, plazas o parques	No	2	6	8
		,9%	2,8%	1,9%
		(-1,4)	(1,4)	
	Sí	209	211	420
		99,1%	97,2%	98,1%
		(1,4)	(-1,4)	
	TOTAL	211	217	428
		100%	100%	100%
Estar en la calle bebiendo o fumando	No	8	34	42
		3,8%	15,7%	9,8%
		(-4,1)	(4,1)	
	Sí	203	183	386
		96,2%	84,3%	90,2%
		(4,1)	(-4,1)	
	TOTAL	211	217	428
		100%	100%	100%
Ir al cine o al teatro	No	7	24	31
		3,3%	11,1%	7,2%
		(-3,1)	(3,1)	
	Sí	204	193	397
		96,7%	88,9%	92,8%
		(3,1)	(-3,1)	
	TOTAL	211	217	428
		100%	100%	100%
Practicar deportes	No	5	22	27
		2,4%	10,1%	6,3%
		(-3,3)	(3,3)	
	Sí	206	195	401
		97,6%	89,9%	93,7%
		(3,3)	(-3,3)	
	TOTAL	211	217	428
		100,0%	100,0%	100,0%
Practicar deportes de riesgo	No	6	26	32
		2,8%	12,0%	7,5%
		(-3,6)	(3,6)	
	Sí	205	191	396
		97,2%	88%	92,5%
		(3,6)	(-3,6)	
	TOTAL	211	217	428
		100%	100%	100%

		Tipo de medida		Total
		I + LV	LV	
Ir a conciertos o eventos deportivos	No	7	26	33
		3,3%	12,0%	7,7%
		(-3,4)	(3,4)	
	Sí	204	191	395
		96,7%	88%	92,3%
		(3,4)	(-3,4)	
	TOTAL	211	217	428
		100%	100%	100%
Ir a casa de amigos o familiares	No	12	29	41
		5,7%	13,4%	9,6%
		(-2,7)	(2,7)	
	Sí	199	188	387
		94,3%	86,6%	90,4%
		(2,7)	(-2,7)	
	TOTAL	211	217	428
		100%	100%	100%
Participar en una asociación o grupo	No	8	25	33
		3,8%	11,5%	7,7%
		(-3)	(3)	
	Sí	203	192	395
		96,2%	88,5%	92,3%
		(3)	(-3)	
	TOTAL	211	217	428
		100%	100%	100%
Ir de excursión	No	10	24	34
		4,7%	11,1%	7,9%
		(-2,4)	(2,4)	
	Sí	201	193	394
		95,3%	88,9%	92,1%
		(2,4)	(-2,4)	
	TOTAL	211	217	428
		100%	100%	100%
Salir al campo de acampada	No	8	27	35
		3,8%	12,4%	8,2%
		(-3,3)	(3,3)	
	Sí	203	190	393
		96,2%	87,6%	91,8%
		(3,3)	(-3,3)	
	TOTAL	211	217	428
		100%	100%	100%
Realizar actividades culturales	No	6	24	30
		2,8%	11,1%	7%
		(-3,3)	(3,3)	
	Sí	205	193	398
		97,2%	88,9%	93,0%
		(3,3)	(-3,3)	
	TOTAL	211	217	428
		100%	100%	100%

		Tipo de medida		Total
		I + LV	LV	
Estar en la calle	No	9	27	36
		4,3%	12,4%	8,4%
		(-3)	(3)	
	Sí	202	190	392
		95,7%	87,6%	91,6%
		(3)	(-3)	
	TOTAL	211	217	428
		100%	100%	100%
Pasar el tiempo en centros comerciales	No	9	29	38
		4,3%	13,4%	8,9%
		(-3,3)	(3,3)	
	Sí	202	188	390
		95,7%	86,6%	91,1%
		(3,3)	(-3,3)	
	TOTAL	211	217	428
		100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

9.1.5. Descripción de las conductas de consumo de alcohol y drogas

Las características analizadas sobre la prevalencia en el consumo alguna vez de alcohol y otras drogas (Tabla 9.21), indican que el 99,8% de los menores informan haber consumido drogas o alcohol alguna vez en su vida; sin existir diferencias entre ambos grupos en relación con este consumo ($\chi^2=0,97$; n.s.). Por el contrario, sí hay diferencias significativas entre ambos grupos en relación con el consumo de drogas o alcohol frecuentemente ($\chi^2=30,43$; $p<0,001$).

Tabla 9.21. Consumo de drogas o alcohol alguna vez en la vida

		Tipo de medida		Total
		I + LV	LV	
No		0	1	1
		0%	,5%	,2%
		(-1)	(1)	
Sí		211	216	427
		100%	99,5%	99,8%
		(1)	(-1)	
Total		211	217	428
		100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

Tabla 9.22. Consumo frecuente de drogas o alcohol durante los últimos 12 meses

		Tipo de medida		
		I + LV	LV	Total
Consumo frecuente	No	156	203	359
		73,9%	93,5%	83,9%
		(-5,5)	(5,5)	
	Sí	55	14	69
		26,1%	6,5%	16,1%
		(5,5)	(-5,5)	
Total	211	217	428	
	100%	100%	100%	

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

En relación al consumo actual, hay una mayor evidencia de que el 15,7% de los menores continúan consumiendo drogas en el grupo LV, siendo el porcentaje significativamente menor, casi la mitad, en el grupo I+LV ($\chi^2=5,1$; $p<0,05$), posiblemente esta diferencia se explica por la propia contención que realiza la institución, es decir, la situación de internamiento en la que se encuentran estos menores.

Tabla 9.23. Evidencias de que el menor continúa consumiendo drogas

		Tipo de medida		
		I + LV	LV	Total
Evidencias sobre el consumo	No	193	183	376
		91,5%	84,3%	87,9%
		(2,3)	(-2,3)	
	Sí	18	34	52
		8,5%	15,7%	12,1%
		(-2,3)	(2,3)	
Total	211	217	428	
	100%	100%	100%	

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

Finalmente, en cuanto al tratamiento previo al cumplimiento de la medida por consumo (Tabla 9.24), en el 13,1% de los casos hubo tratamiento previo al cumplimiento de

la medida por consumo, sin darse diferencias significativas entre ambos grupos ($\chi^2=3,36$; n.s.).

Tabla 9.24. Tratamiento previo al cumplimiento de la medida por consumo

	Tipo de medida		Total
	I + LV	LV	
No	177	195	372
	83,9%	89,9%	86,9%
	(-1,8)	(1,8)	
Sí	34	22	56
	16,1%	10,1%	13,1%
	(1,8)	(-1,8)	
Total	211	217	428
	100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

9.1.6. Descripción de aspectos relacionados con la personalidad, conducta y creencias

En relación con la presencia de conductas violentas en los menores durante el último año (Tabla 9.25), no se dan diferencias significativas entre ambos grupos ($\chi^2=1,59$; n.s.).

Tabla 9.25. Presencia de conductas violentas en el último año

	Tipo de medida		Total
	I + LV	LV	
No	5	10	15
	2,4%	4,6%	3,5%
	(-1,3)	(1,3)	
Sí	206	207	413
	97,6%	95,4%	96,5%
	(1,3)	(-1,3)	
Total	211	217	428
	100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

Respecto a los hechos motivo del expediente que han conllevado empleo de violencia física o amenazas, destaca que es el grupo I+LV quien ha presentado en un mayor porcentaje en este tipo de conductas ($\chi^2=40,22$; $p<0,001$).

Tabla 9.26. Empleo de violencia en los hechos expedientados

	Tipo de medida		Total
	I + LV	LV	
No	93	161	254
	44,1%	74,2%	59,3%
	(-6,3)	(6,3)	
Sí	118	56	174
	55,9%	25,8%	40,7%
	(6,3)	(-6,3)	
Total	211	217	428
	100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

Finalmente, la característica de personalidad con mayor tasa de respuesta fue la insensibilidad, siendo muy superior en el grupo de I+LV (67,3% vs. 32,7%). La manipulación frecuente de los otros es la segunda característica más presente en los menores, siendo también muy superior en el grupo I+LV (70,3% vs. 29,7%).

Tabla 9.27. Características de personalidad auto-informadas

	Tipo de medida		Total
	I + LV	LV	
Dificultad para ponerse en lugar del otro	72	31	103
	69,9%	30,1%	
Frialdad emocional	67	31	98
	68,4%	31,6%	
Manipulación frecuente de los otros	83	35	118
	70,3%	29,7%	
Falta de remordimientos	46	22	68
	67,6%	32,4%	
Insensibilidad	99	48	147
	67,3%	32,7%	
Mentira frecuente	49	27	76
	64,5%	35,5%	
Afecto superficial	40	22	62
	64,5%	35,5%	
Simulación emocional	77	39	116
	66,4%	33,6%	
Problemas tempranos de conducta	9	4	13
	69,2%	30,8%	

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

9.2. Análisis de la reincidencia delictiva

Tal y como se describió previamente en el apartado de metodología, la **reincidencia delictiva** se ha determinado en este estudio en función de los siguientes criterios: a) por la presencia de uno o más de un delito (causa base) por los que un menor está cumpliendo medida en la actualidad y b) por el cumplimiento futuro de otras medidas judiciales pendientes de aplicar por hechos delictivos que han ocurrido o bien de forma simultánea o posteriormente al inicio de la medida judicial que está cumpliendo en la actualidad. Por otro lado, la reiteración delictiva se refiere al historial delictivo previo del que hay constancia, y se establece en función de la comisión pasada de uno o más delitos por los que el menor ya ha cumplido alguna medida judicial.

La combinación entre reincidencia delictiva y reiteración delictiva da lugar a cuatro grupos diferentes de análisis:

- a) **Reincidencia con reiteración delictiva.** Se refiere a la situación en la que un menor: a) está cumpliendo medida en la actualidad (causa base) por uno o más delitos, b) tiene pendiente la aplicación de otra medida judicial por un delito diferente al actual, y c) existe constancia de un historial delictivo previo.
- b) **Reincidencia sin reiteración delictiva.** Se refiere a la situación en la que un menor: a) está cumpliendo medida en la actualidad (causa base) por uno o más delitos, b) tiene pendiente la aplicación de otra medida judicial por un delito diferente al actual, y c) no existe constancia de un historial delictivo previo.
- c) **No reincidencia con reiteración delictiva.** Se refiere a la situación en la que un menor: a) está cumpliendo medida en la actualidad (causa base) por uno o más delitos, b) no tiene pendiente la aplicación de otra medida judicial por un delito diferente al actual y existe constancia de un historial delictivo previo.
- d) **No reincidencia sin reiteración delictiva.** Se refiere a la situación en la que un menor a) está cumpliendo medida en la actualidad (causa base) por uno o más delitos, b) no tiene pendiente la aplicación de otra medida judicial por un delito diferente al actual y c) no existe constancia de un historial delictivo previo. Gráficamente, puede representarse tal y como se muestra en la Figura 9.1.

Figura 9.1 Grupos resultantes de la combinación entre reincidencia delictiva y reiteración delictiva

TOTAL: 428 CASOS		REINCIDENCIA	
		SI	NO
REITERACIÓN	SI	(a) 64	(c) 40
	NO	(b) 114	(d) 210

A efectos de esta investigación, la **Reincidencia Delictiva General (RDG)** se determina considerando las cuatro combinaciones utilizadas para definir la reincidencia y reiteración delictiva. Concretamente, la constituyen la reincidencia con reiteración delictiva (a), la reincidencia sin reiteración delictiva (b) y la no reincidencia con reiteración delictiva (c), frente a la no reincidencia sin reiteración delictiva (d).

Finalmente, la **Reincidencia Delictiva Violenta (RDV)** se ha definido por a) la comisión en la actualidad de uno o más delitos que conlleven algún tipo de agresión grave (incluyendo delitos contra la integridad de las personas, delitos violentos con y sin afectación del patrimonio, delitos contra la libertad sexual y delitos violentos en el ámbito familiar), y b) existe constancia de la comisión de uno o más delitos de carácter violento en el historial delictivo previo del menor infractor.

9.2.1. Análisis de los diferentes tipos de reincidencia delictiva

En la Tabla 9.28 se presentan los datos referidos al cálculo de la reincidencia y reiteración delictiva. Se observa que la reincidencia con reiteración en el grupo I+LV alcanzó el 19,9%, mientras que en el grupo LV fue del 10,1%. Por otro lado, la reincidencia sin reiteración delictiva alcanzó un 31,3% en el grupo I+LV y un 22,1% en el LV.

Tabla 9.28. Reincidencia y reiteración delictiva entre los grupos I+LV y LV

		Tipo de medida		
		I + LV	LV	Total
Grupos de reincidencia	No reincidente y no reiteración	83	127	210
		39,3%	58,5%	49,1%
		(-4)	(4)	
	No reincidente y reiteración	20	20	40
		9,5%	9,2%	9,3%
		(,1)	(0)	
	Reincidente y no reiteración	66	48	114
		31,3%	22,1%	26,6%
		(2,1)	(-2,1)	

Reincidente y reiteración	42	22	64
	19,9%	10,1%	15,0%
	(2,8)	(-2,8)	
Total	211	217	428
	100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

En relación al porcentaje en los no reincidentes con reiteración, éste alcanzó el 9,5% en el grupo I+LV frente al 9,2% en el LV. Finalmente, el 39,3% del grupo I+LV no reincidieron ni presentaron reiteración delictiva, frente al 58,5% del grupo LV.

9.2.2. Relación entre la reincidencia delictiva y variables socio-demográficas y delictivas

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el análisis de la reincidencia delictiva en función de las variables evaluadas con el HCS-J. En el caso de darse un tamaño muestral pequeño (<20) se ha aplicado la *corrección por continuidad* de Yates. La significación de los grupos se determinó mediante los residuos tipificados corregidos (superiores a 1,96) y en el caso de que la variable tuviera algún valor que no constara, el estadístico *chi-cuadrado* se recalculó teniendo sólo en cuenta los valores completos de la variable. Se consideran significativos los estadísticos con $p < 0,05$, es decir, aquellos en los que la probabilidad de que la diferencia encontrada se deba al azar es muy pequeña (inferior al 5%).

Con respecto a la relación entre reincidencia delictiva y variables sociodemográficas (Tabla 9.29), se observa que se producen diferencias significativas entre hombres y mujeres, pero sólo en el grupo I+LV ($\chi^2=8,05$; $p < 0,05$) ($\chi^2=0,71$; n.s.).

En relación con los grupos de edad analizados, se producen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de edad en ambos grupo, I+LV y LV ($\chi^2=18,18$; $p < 0,001$) ($\chi^2=22,32$; $p < 0,001$), tal y como se observa en la Tabla 9.30.

Tabla 9.29. Reincidencia delictiva y género

			Grupos de reincidencia				Total
	Tipo de medida		No reincidente y no reiteración	No reincidente y reiteración	Reincidente y no reiteración	Reincidente y reiteración	
I + LV	Sexo	Varones	72	20	52	39	183
			86,7%	100%	78,8%	92,9%	86,7%
			(0)	(1,8)	(-2,3)	(1,3)	
		Mujeres	11	0	14	3	28
			13,3%	,0%	21,2%	7,1%	13,3%
			(0)	(-1,8)	(2,3)	(-1,3)	
	Total		83	20	66	42	211
			100%	100%	100%	100%	100%
LV	Sexo	Varones	114	17	44	20	195
			89,8%	85,0%	91,7%	90,9%	89,9%
			(0)	(-,8)	(,5)	(,2)	
		Mujeres	13	3	4	2	22
			10,2%	15%	8,3%	9,1%	10,1%
			(,1)	(,8)	(-,5)	(-,2)	
	Total		127	20	48	22	217
			100%	100%	100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

Tabla 9.30. Reincidencia delictiva y edad

			Grupos de reincidencia				Total
	Tipo de medida		No reincidente y no reiteración	No reincidente y reiteración	Reincidente y no reiteración	Reincidente y reiteración	
I+LV	14-15 años		23	0	15	3	41
			27,7%	0%	22,7%	7,1%	19,4%
			(2,4)	(-2,3)	(,8)	(-2,2)	
	16-17 años		46	11	34	23	114
			55,4%	55%	51,5%	54,8%	54%
			(,3)	(,1)	(-,5)	(,1)	
	18-21 años		14	9	17	16	56
			16,9%	45,0%	25,8%	38,1%	26,5%
			(-2,6)	(2,0)	(-,2)	(1,9)	
	Total		83	20	66	42	211
			100%	100%	100%	100%	100%

LV	14-15	18	0	8	0	26
	años	14,2%	0%	16,7%	0%	12%
		(1,2)	(-1,7)	(1,1)	(-1,8)	
	16-17	76	10	28	7	121
	años	59,8%	50%	58,3%	31,8%	55,8%
		(1,4)	(-,5)	(,4)	(-2,4)	
	18-21	33	10	12	15	70
	años	26%	50%	25%	68,2%	32,3%
		(-2,3)	(1,8)	(-1,2)	(3,8)	
	Total	127	20	48	22	217
		100%	100%	100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada.

Finalmente, en relación al tipo de medidas, se observa que no hay diferencias estadísticamente significativas en el grupo I+LV ($\chi^2=23,48$; n.s.), pero sí se producen en el grupo LV ($\chi^2=23,95$; $p<0,05$).

Tabla 9.31. Reincidencia delictiva y tipos de medidas

	Tipo de medida	Grupos de reincidencia				Total
		No reincidente y no reiteración	No reincidente y reiteración	Reincidente y no reiteración	Reincidente y reiteración	
I + LV	RC	21	5	12	11	49
		25,3%	25%	18,2%	26,2%	23,2%
		(,6)	(,2)	(-1,2)	(,5)	
	RSA	41	14	44	18	117
		49,4%	70%	66,7%	42,9%	55,5%
		(-1,4)	(1,4)	(2,2)	(-1,8)	
	RA	1	0	1	1	3
		1,2%	0%	1,5%	2,4%	1,4%
		(-,2)	(-,6)	(,1)	(,6)	
	TRC	2	0	1	2	5
		2,4%	,0%	1,5%	4,8%	2,4%
		(0)	(-,7)	(-,6)	(1,1)	
	TRSA	8	1	2	5	16
		9,6%	5%	3%	11,9%	7,6%
		(,9)	(-,5)	(-1,7)	(1,2)	
	FSC	0	0	0	1	1
		0%	0%	0%	2,4%	,5%
		(-,8)	(-,3)	(-,7)	(2)	
	LV	7	0	5	4	16

LV	Tipo de medida		8,4%	0%	7,6%	9,5%	7,6%
			(,4)	(-1,3)	(0)	(,5)	
		PBC	0	0	1	0	1
			0%	0%	1,5%	0%	,5%
			(-,8)	(-,3)	(1,5)	(-,5)	
		NO CONSTAN	3	0	0	0	3
			3,6%	0%	0%	0%	1,4%
		Total	83	20	66	42	211
			100%	100%	100%	100%	100%
		RC	1	0	0	0	1
			,8%	0%	,0%	,0%	,5%
			(,8)	(-,3)	(-,5)	(-,3)	
		RSA	0	0	1	1	2
			0%	0%	2,1%	4,5%	,9%
			(-1,7)	(-,5)	(1)	(1,9)	
		FSC	0	0	0	1	1
			0%	0%	0%	4,5%	,5%
			(-1,2)	(-,3)	(-,5)	(3)	
		LV	126	20	47	19	212
			99,2%	100%	97,9%	86,4%	97,7%
			(1,8)	(,7)	(,1)	(-3,7)	
		PBC	0	0	0	1	1
			0%	0%	0%	4,5%	,5%
			(-1,2)	(-,3)	(-,5)	(3)	
		Total	127	20	48	22	217
			100%	100%	100%	100%	100%

Nota. I+LV= Internamiento seguido de Libertad Vigilada; LV= Libertad Vigilada; RC= Régimen Cerrado; RSA= Régimen semiabierto; RA= Régimen abierto; TRC= Terapéutico régimen cerrado; TRSA= Terapéutico régimen abierto; FSC= Fin de semana en Centro; PBC= Prestaciones en Beneficio de la Comunidad.

9.2.3. Relación entre el tipo de reincidencia delictiva y otras variables del HCS-J.

En este apartado se van a analizar los cuatro grupos establecidos, siguiendo criterios de reincidencia/reiteración, en relación con los antecedentes familiares, socioeconómicos, de consumo de drogas y otras variables de interés recogidas en el HCS-J. En relación con el tipo de familia (Tabla 9.32), no se produjeron diferencias estadísticamente significativas, pero sí en relación con el nivel socioeconómico (Tabla 9.33).

Tabla 9.32. Reincidencia delictiva y tipo de familia

		Grupos de reincidencia				
		No reincidente y no reiteración	No reincidente y reiteración	Reincidente y no reiteración	Reincidente y reiteración	Total
Tipo de familia	Funcional	122	24	56	28	230
		58,1%	60%	49,1%	43,8%	53,7%
		(1,8)	(,8)	(-1,2)	(-1,7)	
	Disfuncional	88	16	58	36	198
		41,9%	40%	50,9%	56,3%	46,3%
		(-1,8)	(-,8)	(1,2)	(1,7)	
	Total	210	40	114	64	428
		100%	100%	100%	100%	100%

($\chi^2=5,7$; n.s.).

Tabla 9.33. Reincidencia delictiva y nivel socioeconómico

		Grupos de reincidencia				
		No reincidente y no reiteración	No reincidente y reiteración	Reincidente y no reiteración	Reincidente y reiteración	Total
Nivel socioeconómico	Alto	14	2	10	1	27
		6,7%	5%	8,8%	1,6%	6,3%
		(,3)	(-,4)	(1,3)	(-1,7)	
	Medio	84	17	39	18	158
		40,0%	42,5%	34,2%	28,1%	36,9%
		(1,3)	(,8)	(-,7)	(-1,6)	
	Bajo	97	16	53	30	196
		46,2%	40%	46,5%	46,9%	45,8%
		(,2)	(-,8)	(,2)	(,2)	
	Muy bajo	15	5	12	15	47
		7,1%	12,5%	10,5%	23,4%	11%
		(-2,5)	(,3)	(-,2)	(3,5)	
	Total	210	40	114	64	428
		100%	100%	100%	100%	100%

($\chi^2=18,27$; $p<0,05$)

En relación con el nivel cultural (Tabla 9.34), no se encontraron diferencias significativas entre los diferentes tipos de reincidencia delictiva. Para el consumo alguna vez de drogas o alcohol (Tabla 9.35), tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas aunque el valor de significación fue muy cercano, de 0,08. Finalmente, sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas para el consumo frecuente de drogas y alcohol en los últimos doce meses (Tabla 9.36).

Tabla 9.34. Reincidencia delictiva y nivel cultural

		Grupos de reincidencia				
		No reincidente y no reiteración	No reincidente y reiteración	Reincidente y no reiteración	Reincidente y reiteración	Total
Nivel cultural	Alto	19	5	11	3	38
		9%	12,5%	9,6%	4,7%	8,9%
		(,1)	(,8)	(,3)	(-1,3)	
	Medio	100	17	46	20	183
		47,6%	42,5%	40,4%	31,3%	42,8%
		(2)	(0)	(-,6)	(-2)	
	Bajo	73	10	42	28	153
		34,8%	25,0%	36,8%	43,8%	35,7%
		(-,4)	(-1,5)	(,3)	(1,4)	
	Muy bajo	18	8	15	13	54
		8,6%	20%	13,2%	20,3%	12,6%
		(-2,5)	(1,5)	(,2)	(2)	
Total	210	40	114	64	428	
	100%	100%	100%	100%	100%	

($\chi^2=15,25$; $p=0,08$).

Tabla 9.35. Reincidencia delictiva y consumo de alcohol y/o drogas alguna vez en la vida

		Grupos de reincidencia				
		No reincidente y no reiteración	No reincidente y reiteración	Reincidente y no reiteración	Reincidente y reiteración	Total
Consumo de drogas	No	1	0	0	0	1
		,5%	0%	0%	0%	,2%
		(1)	(-,3)	(-,6)	(-,4)	
	Sí	209	40	114	64	427
		99,5%	100%	100%	100%	99,8%
		(-1)	(,3)	(,6)	(,4)	
	Total	210	40	114	64	428
		100%	100%	100%	100%	100%

($\chi^2=1,04$; n.s.)

Tabla 9.36. Reincidencia delictiva y consumo de alcohol y/o drogas durante los últimos 12 meses

		Grupos de reincidencia				
		No reincidente y no reiteración	No reincidente y reiteración	Reincidente y no reiteración	Reincidente y reiteración	Total
Consumo	No	186	31	93	49	359
		88,6%	77,5%	81,6%	76,6%	83,9%
		(2,6)	(-1,2)	(-,8)	(-1,7)	
	Sí	24	9	21	15	69
		11,4%	22,5%	18,4%	23,4%	16,1%
		(-2,6)	(1,2)	(,8)	(1,7)	
	Total	210	40	114	64	428
		100%	100%	100%	100%	100%

($\chi^2=7,06$; $p<0,05$)

Finalmente, en cuanto al grupo de referencia, se observa que el mayor porcentaje de respuestas múltiples dadas por los menores en todas las categorías de reincidencia analizadas, corresponde a los grupos de relación disocial (65,1%).

Tabla 9.37. Reincidencia delictiva y grupos de referencia

	Grupos de reincidencia				Total
	No reincidente y no reiteración	No reincidente y reiteración	Reincidente y no reiteración	Reincidente y reiteración	
Carencia de relación estable	23	1	17	5	46
	5,5%	,2%	4,1%	1,2%	11%
Normalizados	54	3	14	6	77
	12,9%	,7%	3,3%	1,4%	18,4%
Disociales	116	29	74	53	272
	27,8%	6,9%	17,7%	12,7%	65,1%
Violentos-disociales	25	12	24	25	86
	6%	2,9%	5,7%	6,0%	20,6%
Bandas o grupos organizados	17	5	15	8	45
	4,1%	1,2%	3,6%	1,9%	10,8%
Grupo de relación de edad mayor	62	22	40	17	141
	14,8%	5,3%	9,6%	4,1%	33,7%

9.2.4. Reincidencia delictiva general

Tal y como se mencionó anteriormente, la reincidencia delictiva general se determina considerando las cuatro combinaciones utilizadas para definir la reincidencia y reiteración delictiva. Concretamente, la reincidencia sin reiteración delictiva, la reincidencia con reiteración delictiva y la no reincidencia con reiteración delictiva frente a la no reincidencia sin reiteración delictiva.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la comparación entre los reincidentes delictivos generales (n=218) y los no reincidentes (n=210). La Tabla 9.38 presenta la comparación entre ambos grupos en función del género. Como puede apreciarse en la Tabla 9.38 las diferencias para ambos sexos no son estadísticamente significativas, aunque el porcentaje de varones que reinciden, 88,1%, es mayor que el de las mujeres 11,9%, siguiendo en comparación con la no reincidencia la misma distribución, es decir, los varones y las mujeres que no reinciden obtienen puntuaciones similares a los que sí, 88,6% y 11,4% respectivamente.

Tabla 9.38. Reincidencia delictiva general y género

		Reincidencia General		
		No reincidente	Reincidente general	Total
Sexo	Varones	186	192	378
		88,6%	88,1%	88,3%
		(-,2)	(-,2)	
	Mujeres	24	26	50
		11,4%	11,9%	11,7%
		(-,2)	(-,2)	
	Total	210	218	428
		100%	100%	100%

($\chi^2=0,03$; n.s.).

En relación con los grupos de edad (Tabla 9.39), se observaron diferencias estadísticamente significativas entre reincidentes y no reincidentes. En el grupo de no reincidentes hay un porcentaje de 19,5% de menores de 14-15 años y en el grupo de reincidentes de 18 a 21 años el porcentaje corresponde a 36,2%, lo que es obvio dado que la reincidencia está asociada al paso del tiempo.

Tabla 9.39. Reincidencia delictiva general y grupos de edad

		Reincidencia General			
		No reincidente	Reincidente general	Total	
Grupos de Edad	14-15 años	41	26	67	
		19,5%	11,9%	15,7%	
		(2,2)	(-2,2)		
	16-17 años	122	113	235	
		58,1%	51,8%	54,9%	
		(1,3)	(-1,3)		
	18-21 años	47	79	126	
		22,4%	36,2%	29,4%	
		(-3,1)	(3,1)		
	Total		210	218	428

($\chi^2=11,68$; $p<0,005$).

La Tabla 9.40 describe el tipo de medidas actuales en función del grupo de reincidentes y no reincidentes, pudiéndose observar diferencias estadísticamente significativas en cuanto al tipo de medidas ($\chi^2=29,95$; $p<0,001$).

Tabla 9.40. Reincidencia delictiva general y tipo de medidas actuales

Tipo de Medida	RC	Reincidencia General		Total
		No reincidente	Reincidente general	
		22	28	50
		10,5%	12,8%	11,7%
		(-,8)	(,8)	
	RSA	41	78	119
		19,5%	35,8%	27,8%
		(-3,8)	(3,8)	
	RA	1	2	3
		,5%	,9%	,7%
		(-,5)	(,5)	
	TRC	2	3	5
		1,0%	1,4%	1,2%
		(-,4)	(,4)	
	TRSA	8	8	16
		3,8%	3,7%	3,7%
		(,1)	(0)	
	FSC	0	2	2
		0%	,9%	,5%
		(-1,4)	(1,4)	
	LV	133	95	228
		63,3%	43,6%	53,3%
		(4,1)	(-4,1)	
	PBC	0	2	2
		0%	,9%	,5%
		(-1,4)	(1,4)	
	OTRAS	3	0	3
		1,4%	0%	,7%
		(1,8)	(-1,8)	
	Total	210	218	428
		100%	100%	100%

Nota. RC= Régimen Cerrado; RSA= Régimen semiabierto; RA= Régimen abierto; TRC= Terapéutico régimen cerrado; TRSA= Terapéutico régimen abierto; FSC= Fin de semana en Centro; LV= Libertad Vigilada; PBC= Prestaciones en Beneficio de la Comunidad.
($\chi^2=29,95$; $p<0,001$).

La Tabla 9.41 presenta la duración de las mismas en las que se observaron diferencias estadísticamente significativas. El grupo de reincidentes generales presenta en mayor porcentaje una duración de las medidas en todos los grupos a partir de los 6 meses hasta los 18-24 meses.

Tabla 9.41. Reincidencia delictiva general y duración de las medidas

		Reincidencia General		
		No reincidente	Reincidente general	Total
Tiempo medida internamiento	0-6 meses	152	121	273
		72,4%	55,5%	63,8%
		(3,6)	(-3,6)	
	6-12 meses	45	79	124
		21,4%	36,2%	29,0%
		(-3,4)	(3,4)	
	12-18 meses	11	15	26
		5,2%	6,9%	6,1%
		(-,7)	(,7)	
	18-24 meses	1	3	4
		,5%	1,4%	,9%
		(-1)	(1)	
	42-48 meses	1	0	1
		,5%	0%	,2%
		(1)	(-1)	
Total	210	218	428	
	100%	100%	100%	

($\chi^2=15,31$; $p<0,005$).

En relación con el tipo de familia (Tabla 9.42), con el nivel socioeconómico (Tabla 9.43) y cultural de los menores (Tabla 9.44), así como con el consumo alguna vez de alcohol o drogas (Tabla 9.45) no se produjeron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos; produciéndose tales diferencias en relación al consumo frecuente de drogas durante los últimos 12 meses (Tabla 9.46).

Tabla 9.42. Reincidencia delictiva general y tipo de familia

		Reincidencia General		
		No reincidente	Reincidente general	Total
Tipo de Familia	Funcional	122	108	230
		58,1%	49,5%	53,7%
		(1,8)	(-1,8)	
	Disfuncional	88	110	198
		41,9%	50,5%	46,3%
		(-1,8)	(1,8)	
	Total	210	218	428
		100%	100%	100%

($\chi^2=3,15$; n.s.).

Tabla 9.43. Reincidencia delictiva general y nivel socio-económico

		Reincidencia General		
		No reincidente	Reincidente general	Total
Nivel socio-económico	Alto	14	13	27
		6,7%	6,0%	6,3%
		(,3)	(-,3)	
	Medio	84	74	158
		40%	33,9%	36,9%
		(1,3)	(-1,3)	
	Bajo	97	99	196
		46,2%	45,4%	45,8%
		(,2)	(-,2)	
	Muy bajo	15	32	47
		7,1%	14,7%	11%
		(-2,5)	(2,5)	
Total	210	218	428	
	100%	100%	100%	

($\chi^2=6,69$; n.s.).

Tabla 9.44. Reincidencia delictiva general y nivel cultural

		Reincidencia General		
		No reincidente	Reincidente general	Total
Nivel Cultural	Muy alto	1	0	1
		,5%	0%	,2%
		(1)	(-1)	
	Alto	18	19	37
		8,6%	8,7%	8,6%
		(0)	(,1)	
	Medio	100	83	183
		47,6%	38,1%	42,8%
		(2)	(-2)	
	Bajo	73	80	153
		34,8%	36,7%	35,7%
		(-,4)	(,4)	
	Muy bajo	18	36	54
		8,6%	16,5%	12,6%
		(-2,5)	(2,5)	
	Total	210	218	428
		100%	100%	100%

($\chi^2=8,78$; n.s.).

Tabla 9.45. Reincidencia delictiva general y consumo de drogas/alcohol alguna vez en la vida

		Reincidencia General		
		No reincidente	Reincidente general	Total
Consumo de drogas	No	1	0	1
		,5%	,0%	,2%
		1	-1	
	Sí	209	218	427
		99,5%	100%	99,8%
		-1	1	
	Total	210	218	428
		100%	100%	100%

($\chi^2=1,04$; n.s.).

Tabla 9.46. Reincidencia delictiva general y consumo de drogas/alcohol en los últimos 12 meses

		Reincidencia General		
		No reincidente	Reincidente general	Total
Consumo	No	186	173	359
		88,6%	79,4%	83,9%
		(2,6)	(-2,6)	
	Sí	24	45	69
		11,4%	20,6%	16,1%
		(-2,6)	(2,6)	
	Total	210	218	428
		100%	100%	100%

($\chi^2=6,72$; $p<0,05$).

Finalmente, la Tabla 9.47 describe el grupo de referencia característico del menor antes de cumplir la medida en cada grupo de reincidencia en la que se observa que el grupo de reincidentes generales presentan en un mayor porcentaje de grupos de relación disociales, violentos y bandas, 57,4%, 70,9% y 62,2%, respectivamente.

Tabla 9.47. Reincidencia delictiva general y grupos de referencia

		Reincidencia General		
		No reincidente	Reincidente general	Total
Grupos	Carencia de relaciones estables	23	23	46
		50%	50%	
	Normalizados	54	23	77
		70,1%	29,9%	
	Disociales	116	156	272
		42,6%	57,4%	
	Violentos-disociales	25	61	86
		29,1%	70,9%	
	Bandas	17	28	45
		37,8%	62,2%	
	Grupo mayor de edad	62	79	141
		44%	56%	

9.2.5. Reincidencia delictiva violenta

Un aspecto importante a desarrollar en esta investigación consiste en analizar el nivel de violencia de los delitos cometidos por los menores infractores que han sido evaluados en la presente investigación. En este sentido, se han considerado como delitos violentos todos aquellos que conllevan algún tipo de agresión grave (incluyendo delitos tanto contra las personas, como contra la libertad sexual o contra el patrimonio) y se han considerado como delitos violentos los siguientes:

1. **Delitos violentos contra las personas:** Asesinato, asesinato en grado de tentativa, homicidio, homicidio en grado de tentativa, lesiones, maltrato familiar, maltrato, amenazas, atentado contra la autoridad.
2. **Delitos violentos con la libertad sexual:** Abuso, agresión sexual, agresión sexual en grado de tentativa.
3. **Delitos violentos contra el patrimonio:** Robo con intimidación y violencia, robo con intimidación y violencia en grado de tentativa, robo con violencia, robo con violencia en grado de tentativa, robo con intimidación y robo con intimidación en grado de tentativa.

Tal y como se mencionó anteriormente, la reincidencia delictiva violenta se ha definido por la comisión de uno o más delitos que conlleven algún tipo de agresión grave (delitos contra las personas, contra la libertad sexual y contra el patrimonio), debiendo constar como delito en el historial delictivo actual y pasado del menor infractor, por lo tanto todos ellos son menores incluidos en alguno de los grupos con reincidencia y/o reiteración (grupos a, b y c). Aplicando estos criterios, la muestra estuvo compuesta por 52 menores.

En relación con el género y la proporción de reincidentes violentos y no violentos, no hubo diferencia estadística significativa entre los grupos, por lo que tanto el grupo de hombres como mujeres fueron muy similares en las tasas de reincidencia delictiva.

Tabla 9.48. Reincidencia delictiva violenta y género

		Reincidencia Violenta		
		No reincidente	Reincidente delitos violentos	Total
Sexo	Varones	186	50	236
		88,6%	96,2%	90,1%
		(-1,6)	(1,6)	
	Mujeres	24	2	26
		11,4%	3,8%	9,9%
		(1,6)	(-1,6)	
	Total	210	52	262
		100%	100%	100%

($\chi^2=2,68$; n.s.).

En relación con los grupos de edad (Tabla 9.49), se observaron diferencias estadísticamente significativas entre reincidentes violentos y no reincidentes. Destacar la tendencia a que conforme aumenta la edad del grupo también aumenta la proporción de reincidentes de tipo violento, lo que es obvio en la medida que la reincidencia depende del paso del tiempo.

Tabla 9.49. Reincidencia delictiva violenta y grupos de edad

		Reincidencia Violenta		
		Reincidente delitos		
		No reincidente	violentos	Total
Grupos de edad	14-15 años	41	3	44
		19,5%	5,8%	16,8%
		(2,4)	(-2,4)	
	16-17 años	122	26	148
		58,1%	50%	56,5%
		(1,1)	(-1,1)	
	18-21 años	47	23	70
		22,4%	44,2%	26,7%
		(-3,2)	(3,2)	
	Total	210	52	262
		100%	100%	100%

($\chi^2=12,63$; $p<0,005$).

La Tabla 9.50 describe el tipo de medidas actuales en función del grupo de reincidentes y no reincidentes.

Tabla 9.50. Reincidencia delictiva violenta y tipo de medidas actuales

		No reincidente	Reincidente delitos violentos	Total
Tipo de medida	RC	22	13	35
		10,5%	25%	13,4%
		(-2,8)	(2,8)	
	RSA	41	17	58
		19,5%	32,7%	22,1%
		(-2)	(2)	
	RA	1	0	1
		,5%	0%	,4%
		(,5)	(-,5)	
	TRC	2	1	3
		1%	1,9%	1,1%
		(-,6)	(,6)	
	TRSA	8	3	11
		3,8%	5,8%	4,2%
		(-,6)	(,6)	
	FSC	0	2	2
		0%	3,8%	,8%
		(-2,9)	(2,9)	
	LV	133	16	149
		63,3%	30,8%	56,9%
		(4,2)	(-4,2)	
	OTRAS	3	0	3
		1,4%	0%	1,1%
		(,9)	(-,9)	
Total		210	52	262
		100%	100%	100%

Nota. RC= Régimen Cerrado; RSA= Régimen semiabierto; RA= Régimen abierto; TRC= Terapéutico régimen cerrado; TRSA= Terapéutico régimen abierto; FSC= Fin de semana en Centro; LV= Libertad Vigilada. ($\chi^2=27,4$; $p<0,001$)

En cuanto a las medidas judiciales, se observa que a los no reincidentes se les concede mayoritariamente una medida como la LV (63,3%), mientras que a los reincidentes violentos tienen medidas más restrictivas como RC y RSA en un 25% y en un 32,7%, lo que podría explicarse por el principio de intervención mínima de la Ley 5/2000.

Las Tablas 9.51 a 9.55 presentan los resultados en relación al tipo de familia, nivel socio-económico y cultural, y consumo de drogas/alcohol en las que sólo se produjeron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos comparados en relación con el nivel socio-económico y consumo de alcohol y drogas en los últimos 12 meses.

Tabla 9.51. Reincidencia delictiva violenta y tipo de familia

		Reincidencia Violenta		
		Reincidente delitos		
Tipo de familia		No reincidente	violentos	Total
Funcional		122	26	148
		58,1%	50%	56,5%
		(1,1)	(-1,1)	
	Disfuncional	88	26	114
		41,9%	50%	43,5%
		(-1,1)	(1,1)	
Total	210	52	262	
	100%	100%	100%	

($\chi^2=1,1$; n.s.).

Tabla 9.52. Reincidencia delictiva violenta y nivel socio-económico

		Reincidencia Violenta		
		No reincidente	Reincidente delitos violentos	Total
Nivel socio-económico	Alto	14	1	15
		6,7%	1,9%	5,7%
		(1,3)	(-1,3)	
	Medio	84	13	97
		40%	25%	37%
		(2)	(-2)	
	Bajo	97	28	125
		46,2%	53,8%	47,7%
		(-1)	(1)	
	Muy bajo	15	10	25
		7,1%	19,2%	9,5%
		(-2,7)	(2,7)	
Total	210	52	262	
	100%	100%	100%	

($\chi^2=11,1$; $p<0,05$).

Tabla 9.53. Reincidencia delictiva violenta y nivel cultural

		Reincidencia Violenta		
		Reincidente delitos		
		No reincidente	violentos	Total
Nivel cultural	Muy alto	1	0	1
		,5%	,0%	,4%
		(,5)	(-,5)	
	Alto	18	3	21
		8,6%	5,8%	8%
		(,7)	(-,7)	
	Medio	100	16	116
		47,6%	30,8%	44,3%
		(2,2)	(-2,2)	
	Bajo	73	22	95
		34,8%	42,3%	36,3%
		(-1)	(1)	
	Muy bajo	18	11	29
		8,6%	21,2%	11,1%
		(-2,6)	(2,6)	
Total	210	52	262	
	100%	100%	100%	

($\chi^2=9,95$; n.s.).

Tabla 9.54. Reincidencia delictiva violenta y consumo de drogas/alcohol alguna vez en la vida

		Reincidencia Violenta		
		No Reincidente	Reincidente delitos violentos	Total
No		1	0	1
		,5%	0%	,4%
		(,5)	(-,5)	
Sí		209	52	261
		99,5%	100%	99,6%
		(-,5)	(,5)	
Total		210	52	262
		100%	100%	100%

($\chi^2=0,24$; n.s.).

Tabla 9.55. Reincidencia delictiva violenta y consumo frecuente de alcohol y drogas en los últimos 12 meses

		Reincidencia Violenta		
		No reincidente	Reincidente delitos violentos	Total
Consumo No		186	38	224
		88,6%	73,1%	85,5%
		(2,8)	(-2,8)	
Sí		24	14	38
		11,4%	26,9%	14,5%
		(-2,8)	(2,8)	
Total		210	52	262
		100%	100%	100%

($\chi^2=8,07$; $p<0,01$).

Finalmente, en la Tabla 9.56 se describe el grupo de referencia característico del menor antes de cumplir la medida en cada grupo de reincidencia en la que se observa que se dieron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Por ejemplo, un 80,4%

de los Reincidentes Violentos presenta un grupo de relación disocial frente al 57,4% de los No Reincidente. Algo parecido ocurre con la relación con grupos violentos/disociales: un 45,1% de los Reincidentes Violentos la tiene frente únicamente el 12,4% de los No Reincidentes.

Tabla 9.56. Reincidencia delictiva violenta y grupos de referencia

	Reincidencia Violenta		Total
	No reincidente	Reincidente delitos violentos	
Carencia de relaciones	23 11,4%	4 7,8%	27
Normalizados	54 26,7%	5 9,8%	59
Disociales	116 57,4%	41 80,4%	157
Violentos/disociales	25 12,4%	23 45,1%	48
Banda o grupo	17 8,4%	10 19,6%	27
Grupo de edad mayor	62 30,7%	17 33,3%	79

9.3. Análisis de la reincidencia delictiva general y violenta en función del IGI-J.

A continuación, se presenta el análisis de la reincidencia general y violenta en función de la puntuación total del IGI-J y de cada uno de sus factores. Tal y como se mencionó anteriormente, la reincidencia delictiva general se determina considerando las cuatro combinaciones utilizadas para definir la reincidencia y reiteración delictiva. Concretamente, la reincidencia sin reiteración delictiva, la reincidencia con reiteración delictiva y la no reincidencia con reiteración delictiva frente a la no reincidencia sin reiteración delictiva. De esta forma, se obtienen dos grupos de comparación compuestos por reincidentes ($n=218$) y no reincidentes ($n=210$).

En la Tabla 9.57 se describen las correlaciones del IGI-J y de sus ocho factores con la reincidencia general delictiva. Todas las correlaciones fueron estadísticamente significativas. El coeficiente de correlación entre la escala total y la reincidencia general fue de ,33 y las correlaciones más elevadas entre los factores se dieron entre el factor de historial de medidas judiciales ($r=,45$), grupo de iguales desadaptados ($r=,30$), consumo de sustancias ($r=,25$) y actitudes/creencias ($r=,24$).

Tabla 9.57. Correlaciones entre el IGI-J y la reincidencia general

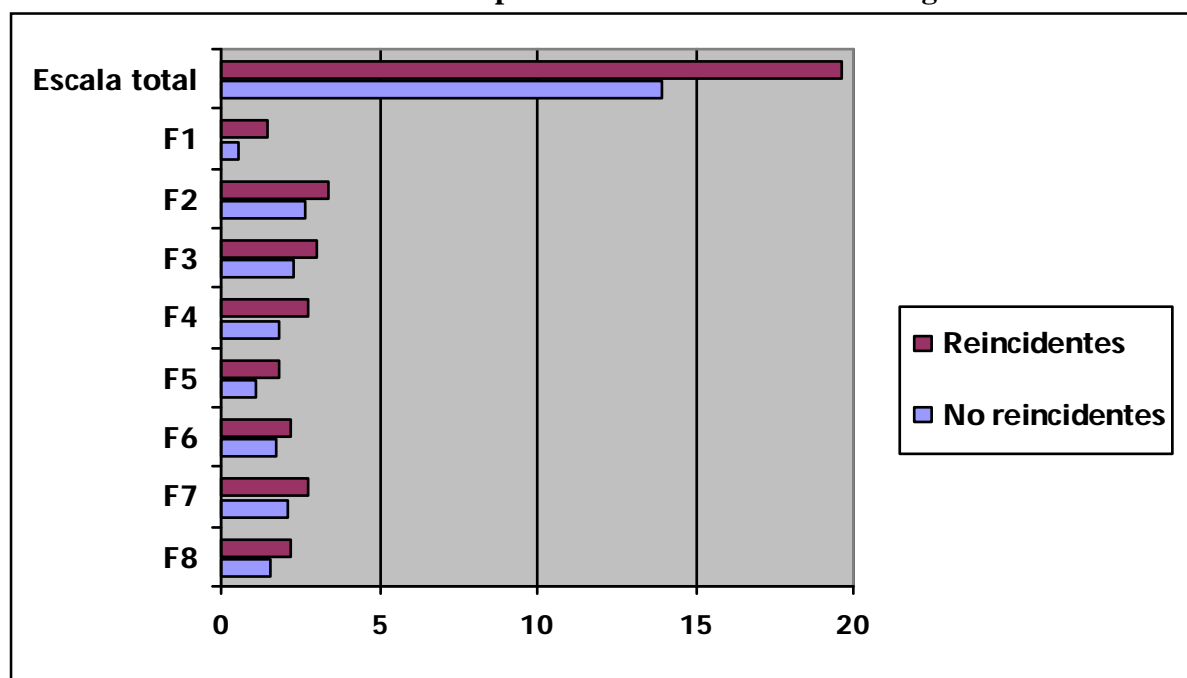
Factores del IGI-J	Reincidencia general
Factor I (Historial delictivo)	,45***
Factor II (Pautas educativas)	,21***
Factor III (Educación/Empleo)	,18***
Factor IV (Grupo de iguales)	,30***
Factor V (Consumo de sustancias)	,25***
Factor VI (Ocio/diversión)	,20***
Factor VII (Personalidad/Conducta)	,17 **
Factor VIII (Actitudes/creencias)	,24 **
Escala Total	,33***
*** $p < 0,001$ ** $p < 0,01$ * $p < 0,05$	

Tabla 9.58. Diferencias entre reincidentes delictivos generales (n=218) y no reincidentes delictivos (n=210) en los factores del IGI-J

	Reincidentes	N	Media	Desviación típ.	T de Student
Medidas judiciales	No	210	,55	,765	-9,626***
	Sí	218	1,51	1,119	
Pautas educativas	No	210	2,66	1,838	-4,223***
	Sí	218	3,40	1,545	
Educación/Empleo	No	210	2,33	1,854	-3,613***
	Sí	218	3,01	1,763	
Grupos de iguales	No	210	1,88	1,426	-6,161***
	Sí	218	2,72	1,209	
Consumo de drogas	No	210	1,14	1,365	-4,878***
	Sí	218	1,85	1,477	
Ocio	No	210	1,73	1,223	-4,011***
	Sí	218	2,18	,961	
Personalidad/Conducta	No	210	2,09	1,893	-3,328 **
	Sí	218	2,72	1,761	
Actitudes	No	210	1,53	1,483	-4,446***
	Sí	218	2,21	1,499	
Escala Total	No	210	13,92	8,67	-6,71***
	Sí	218	19,61	7,75	

*** $p < 0,001$ ** $p < 0,01$ * $p < 0,05$

Si analizamos las diferencias entre las puntuaciones medias de ambos grupos en cada factor del IGI-J (Tabla 9.58), se observa que hay diferencias estadísticamente significativas en la escala total del IGI-J y en todos los factores. Es decir, en todos los factores del IGI-J, así como en la escala total, el grupo de reincidentes delictivos generales puntuaron significativamente más alto que el grupo de no reincidentes. En el Gráfico 9.9. se representan gráficamente las diferencias obtenidas en ambos grupos en las puntuaciones del IGI-J.

Gráfico 9.9. Diferencias en el IGI-J para los reincidentes delictivos generales

Nota. F1= Delitos y medidas judiciales pasadas y actuales; F2= Pautas educativas; F3= Educación formal/Empleo; F4= Relación con el grupo de iguales; F5= Consumo de drogas; F6= Ocio/Diversión; F7= Personalidad/Conducta; F8= Actitudes/Valores/Creencias.

La Tabla 9.59 presenta las correlaciones obtenidas entre el IGI-J y la reincidencia delictiva violenta. La correlación entre la puntuación total y esta reincidencia fue significativa ($r=,25$). Además, todos los factores correlacionaron significativamente con la reincidencia violenta, y aquellos más elevados fueron el historial delictivo ($r=,39$), grupo de iguales ($r=,25$) y consumo de sustancias ($r=,22$). La 9.60 presenta las diferencias entre las puntuaciones medias de cada grupo de reincidencia en el IGI-J.

Tabla 9.59. Correlaciones entre cada factor del IGI-J y la reincidencia violenta

Factores del IGI-J	Reincidencia violenta
Factor I (Historial delictivo)	,39***
Factor II (Pautas educativas)	,15*
Factor III (Educación/Empleo)	,15*
Factor IV (Grupo de iguales)	,25***
Factor V (Consumo de sustancias)	,22***
Factor VI (Ocio/diversión)	,11*
Factor VII (Personalidad/Conducta)	,15*
Factor VIII (Actitudes/creencias)	,12*
Escala total del IGI-J	,25***

*** $p < 0,001$ ** $p < 0,01$ * $p < 0,05$

Tabla 9.60. Diferencias entre reincidentes delictivos violentos (n=52) y no reincidentes (n=210) en los factores del IGI-J

	Reincidencia Violenta	N	Media	Desviación típ.	"t" de Studen
Factor 1	No reincidente	210	,4095	,65906	-12,94***
	Reincidente delitos violentos	52	2,3846	1,05075	
Factor 2	No reincidente	210	2,6095	1,79577	-4,22***
	Reincidente delitos violentos	52	3,5577	1,34912	
Factor 3	No reincidente	210	2,2857	1,66710	-2,92**
	Reincidente delitos violentos	52	3,0769	2,04696	
Factor 4	No reincidente	210	2,0571	1,25526	-5,17***
	Reincidente delitos violentos	52	3,0385	1,08396	
Factor 5	No reincidente	210	1,0476	1,18911	-5,32***
	Reincidente delitos violentos	52	2,0577	1,36358	
Factor 6	No reincidente	210	1,8429	1,07118	-3,68***
	Reincidente delitos violentos	52	2,4231	,75006	
Factor 7	No reincidente	210	2,0286	1,86099	-4,53***
	Reincidente delitos violentos	52	3,3269	1,79018	
Factor 8	No reincidente	210	1,4286	1,52402	-4,59***
	Reincidente delitos violentos	52	2,5000	1,43486	
IGI-J Total	No reincidente	210	13,7095	7,98542	-7,92***
	Reincidente delitos violentos	52	22,3654	6,79974	

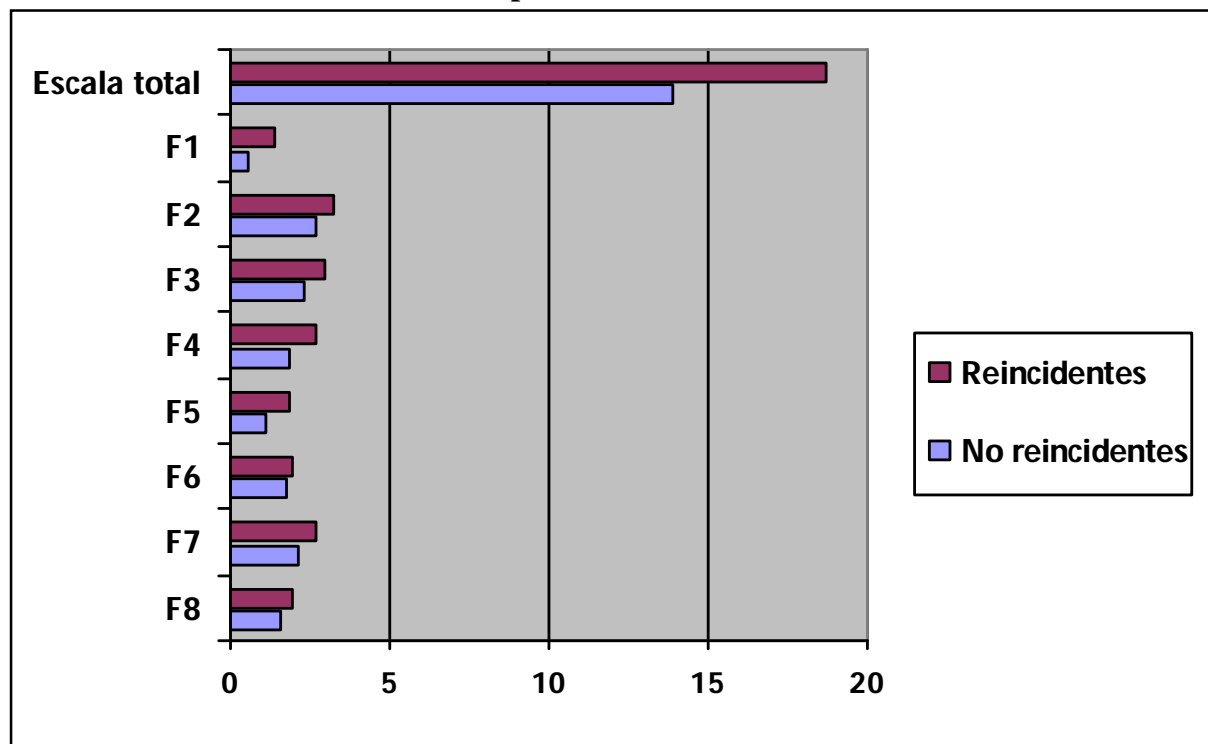
Nota. F1= Delitos y medidas judiciales pasadas y actuales; F2= Pautas educativas; F3= Educación formal/Empleo; F4= Relación con el grupo de iguales; F5= Consumo de drogas; F6= Ocio/Diversión; F7= Personalidad/Conducta; F8= Actitudes/Valores/Creencias.

*** $p < 0,001$ ** $p < 0,01$ * $p < 0,05$

Cabe destacar, analizando las correlaciones entre el IGI-J y la reincidencia general y reincidencia violenta, (Tablas 9.57 y 9.59), que en ambos tipos de reincidencia coinciden con una correlación más elevada los factores Historial delictivo, Grupo de iguales y Consumo de sustancias.

Tal y como se observa en la Tabla 9.60, el grupo de reincidentes violentos presenta significativamente una mayor puntuación en la escala total del IGI-J. Además, en el resto de factores las diferencias también son significativas por lo que el grupo de reincidentes violentos puntúa en mucha mayor medida en todos los factores del IGI-J considerados. Finalmente, en el Gráfico 9.10 se representan gráficamente las diferencias obtenidas en ambos grupos en las puntuaciones del IGI-J.

Gráfico 9.10. Diferencias en el IGI-J para los reincidentes violentos



Nota. F1= Delitos y medidas judiciales pasadas y actuales; F2= Pautas educativas; F3= Educación formal/Empleo; F4= Relación con el grupo de iguales; F5= Consumo de drogas; F6= Ocio/Diversión; F7= Personalidad/Conducta; F8= Actitudes/Valores/Creencias.

9.4. Análisis de regresión: predicción del ocio de riesgo en los menores infractores

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de los diversos análisis de regresión realizados con el objetivo de detectar los mejores pronosticadores del ocio de riesgo de los menores infractores. De este modo, se expone un resumen de los modelos resultantes para cada grupo de variables evaluado por separado.

9.4.1. Predicción del ocio de riesgo (Factor VI Ocio/Diversión del IGI-J) en función de los factores de riesgo medidos con el IGI-J

El primer grupo de variables predictoras introducidas en el análisis de regresión fueron los Factores del IGI-J: Delitos y medidas judiciales pasadas y actuales, Pautas educativas, Educación/Empleo, Grupo de iguales, Consumo de sustancias, Personalidad/Conducta y

Actitudes/Creencias, siendo la variable dependiente o variable criterio el ocio de riesgo (medido con el Factor Ocio/Diversión del IGI-J).

Como puede observarse en la Tabla 9.61., el modelo quedó conformado por la presencia de Pautas Educativas, Consumo de sustancias, Educación Formal/Empleo, Grupo de iguales y Actitudes Creencias ($R^2=0,45$ y R^2 Corregida= 0,44).

Considerando las variables incluidas en el modelo, las Pautas educativas fue la que obtuvo un mayor poder predictivo puesto que explica, por sí sola, el 34% de la variabilidad encontrada en el ocio de riesgo de los menores infractores. Asimismo, es importante destacar como, las otras cuatro variables incluidas añaden una mayor proporción de información al modelo, con un poder explicativo total del 44%, con la inclusión de la última variable, Actitudes/Creencias (cambio en $R^2= 0,01$; Cambio en $F= 4,46$, $p<0,05$).

Por último, el signo positivo de los coeficientes β para todas las variables incluidas en el modelo indica que éstas conllevan un pronóstico de un mayor ocio de riesgo en los menores (véase Tabla 9.61). Es decir, que a más puntuación en estos 5 factores de riesgo del IGI-J que se han incluido en el modelo, mayor puntuación en el ocio de riesgo medido con el IGI-J.

Tabla 9.61. Predicción del ocio de riesgo en función del resto Factores de riesgo medidos por el IGI-J

Pasos sucesivos	Modelo de regresión	β	R^2	R^2 Corregida	Cambio de R^2	Cambio en F	F
1	Pautas educativas	0,31	0,34	0,34	0,34	217,75***	217,75***
2	Consumo	0,15	0,40	0,40	0,06	42,90***	141,03***
3	Educación/ empleo	0,15	0,42	0,42	0,02	16,34***	102,86***
4	Grupo iguales	0,14	0,44	0,43	0,02	13,76***	82,91***
5	Actitudes/ creencias	0,11	0,45	0,44	0,01	4,46*	67,76***

* $p<,05$; ** $p<,01$; *** $p<,001$

9.4.2. Análisis de regresión: predicción del ocio de riesgo en función de los ítems que valoran el tipo de ocio en el HCS-J

Las variables predictoras introducidas en el siguiente análisis de regresión fueron las variables del área de Grupo de relación, ocio y tiempo libre del cuestionario HCS-J: Papel del menor en su grupo de relación, Número de amigos íntimos, Cómo se lleva con sus hermanos, Cómo se lleva con otros jóvenes, Cómo se comportan con sus padres y Cómo hace las cosas por sí mismo. Mientras que la variable dependiente o variable criterio es el ocio de riesgo (medido con el Factor Ocio/Diversión del IGI-J).

Como se puede observar en la Tabla 9.62. el modelo quedó conformado por la variable Relación con sus padres en comparación con jóvenes de su misma edad ($R^2= 0,02$ y R^2 Corregida= 0,02), variable predictora que explica, el 2% de la variabilidad encontrada en el ocio de riesgo de los menores infractores (cambio en $R^2= 0,02$; Cambio en $F= 6,76$, $p<0,05$).

Por último, el signo negativo del coeficiente β de la variable incluida en el modelo indica que a peor relación del menor con sus padres mayor ocio de riesgo en los menores (véase Tabla 9.62.).

Tabla 9.62. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con número de amigos y relaciones con amigos y familiares, del área Grupo de relación, ocio y tiempo libre del HCS-J.

Pasos sucesivos	Modelo de regresión	β	R^2	R^2 Corregida	Cambio de R^2	Cambio en F	F
1	Relación con sus padres en comparación con otros jóvenes de su edad	-0,15	0,02	0,02	0,02	6,76*	6,76*

* $p<,05$; ** $p<,01$; *** $p<,001$

Las variables predictoras introducidas en el siguiente análisis de regresión fueron las variables del área de Grupo de relación, ocio y tiempo libre del cuestionario HCS-J. Así, se incluyen las características del grupo de referencia antes de cumplir la medida: Aislamiento social, Grupo de pares normalizados, Grupo disocial, Grupo violento, Banda con organización

y Grupo de iguales con mayor edad que él. Mientras que la variable dependiente o variable criterio es el Ocio de riesgo (medido con el Factor Ocio/Diversión del IGI-J).

Tal y como se expone en la Tabla 9.63. el modelo quedó conformado por la presencia de: Grupo normalizado, Grupo de relación disocial, Grupos violentos, Grupos de mayor edad y Aislamiento social o carencia de relaciones estables ($R^2= 0,25$ y R^2 Corregida= 0,24).

De este modo, consideran las variables incluidas en el modelo, el Grupo Normalizado fue el que obtuvo un mayor poder predictivo, ya que por sí sólo explica el 13% de la variabilidad encontrada en el ocio de riesgo de los menores infractores, aunque como se explica a continuación con una relación inversa. Por otro lado, señalar que las otras cuatro variables que ha incluido el modelo, añaden una mayor proporción de información, con un poder explicativo del 24%, con la inclusión del aislamiento social o carencia de grupo de relación estable (cambio en $R^2= 0,01$; Cambio en $F= 5,68$, $p<0,05$).

El signo negativo del coeficiente β de la variable Grupo normalizado, sin una problemática destacable, indica que cuanto menos normalizado sea el grupo de referencia mayor ocio de riesgo en los menores. Y los signos positivos del resto de variables indican que a mayor grupos de relación disocial, violentos, de mayor edad o a mayor aislamiento social, mayor ocio de riesgo en los menores infractores (véase Tabla 9.63.).

Tabla 9.63. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con las características del grupo de referencia, del área Grupo de relación, ocio y tiempo libre del HCS-J

Pasos sucesivos	Modelo de regresión	β	R^2	R^2 Corregida	Cambio de R^2	Cambio en F	F
1	Grupo normalizado	-0,15	0,13	0,13	0,13	64,07***	64,07***
2	Grupo relación disocial	0,27	0,18	0,17	0,05	24,18***	45,87***
3	Grupos violentos	0,19	0,22	0,21	0,04	21,25***	39,12***
4	Grupos de mayor edad	0,16	0,24	0,23	0,02	10,65**	32,67***
5	Aislamiento social	0,11	0,25	0,24	0,01	5,68*	27,56***

* $p<,05$; ** $p<,01$; *** $p<,001$

Las variables predictoras introducidas en el siguiente análisis de regresión fueron las variables del área de Grupo de relación, ocio y tiempo libre del cuestionario HCS-J: Uso Del ocio y tiempo libre antes de cumplir la medida: ir a bares y discotecas, estar en la calle con amigos pasando el rato, estar en la calle haciendo “botellón” y fumando “porros”, ir al cine o teatro, practicar deportes habituales, practicar deportes de riesgo, ir a conciertos o eventos deportivos, ir a casa de amigos/familiares, participar en una asociación/grupo, ir de excursión, salir al campo, realizar actividades culturales, estar en la calle sin ningún objetivo, pasar el tiempo en centros comerciales. Mientras que la variable dependiente o variable criterio el ocio de riesgo (medido con el Factor Ocio/Diversión del IGI-J).

Tal y como refleja la Tabla 9.64 el modelo predictivo relativo al ocio y tiempo libre antes de cumplir la medida judicial incluyó una única variable relativa a estar en la calle, plaza o parque haciendo “botellón” y fumando “porros” ($R^2= 0,04$ y R^2 Corregida= 0,04).

Como se observa, dicha variable únicamente permitió explicar el 4% de la variabilidad encontrada en el ocio de riesgo de los menores infractores, siendo también escasa la información aportada al modelo (cambio en $R^2= 0,04$; Cambio en $F= 16,94$, $p<0,01$), y permitiendo predecir un incremento del ocio de riesgo en base a su valor de $\beta= 0.20$, es decir, el signo positivo de este coeficiente, nos señala que a mayor uso del tiempo libre estando en la calle, plaza o parque haciendo botellón o fumando porros, mayor ocio de riesgo en los menores (véase Tabla 9.64).

Tabla 9.64. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con el uso del ocio y tiempo libre, del área Grupo de relación, ocio y tiempo libre antes de cumplir la medida judicial del HCS-J

Pasos sucesivos	Modelo de regresión	β	R^2	R^2 Corregida	Cambio de R^2	Cambio en F	F
1	Estar en la calle, plaza o parque haciendo “botellón” y fumando “porros”	0,20	0,04	0,04	0,04	16,94***	16,94***

* $p<,05$; ** $p<,01$; *** $p<,001$

Por último, las variables predictoras introducidas en el siguiente análisis de regresión fueron las variables del área de Grupo de relación, ocio y tiempo libre del cuestionario HCS-J: Coincide el tipo de ocio actual con el ocio anterior al cumplimiento de la medida, la comisión del delito motivo del expediente la realizó en compañía de algunos miembros de su grupos de relación y cuando consume drogas ¿lo hace en compañía de miembros de alguno de sus grupos de relación?. Mientras que la variable dependiente o variable criterio el ocio de riesgo (medido con el Factor Ocio/Diversión del IGI-J).

El modelo predictivo que valora las variables relacionadas con el ocio de riesgo del menor pone de manifiesto la inclusión de dos variables relacionadas con dicha dimensión, su ocio actual coincide con el anterior a la medida judicial y cuando consume lo hace en compañía del grupo de relación ($R^2= 0,10$ y R^2 Corregida= 0,03) (véase Tabla 9.65).

De modo concreto, el que coincida su ocio actual con el anterior a la medida judicial, ayudó a explicar el 7% del ocio de riesgo del menor, mientras que cuando consumo lo haga en compañía de su grupo de relación permitió el incremento de dicho porcentaje hasta el 10%. Una vez más, fue la primera variable incluida en el modelo la que más información aportó (cambio en $R^2= 0,07$; Cambio en $F= 34,10$, $p<0,001$), en comparación con la segunda, (cambio en $R^2= 0,03$; Cambio en $F= 15,59$, $p<0,001$).

Por último, en el caso de la variable relativa a El tipo de ocio actual coincide con el anterior reflejó, en base a su signo positivo ($\beta = 0,28$), que a mayor coincidencia o si sigue manteniendo el mismo tipo de ocio, mayor ocio de riesgo en los menores. En contraposición, el signo negativo del coeficiente β de la variable Cuando consume drogas lo hace en compañía de alguno de los miembros de su grupo de relación, indica que a menor consumo con otros miembros del grupo de relación mayor ocio de riesgo (véase Tabla 9.65).

Tabla 9.65. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con el uso del ocio y tiempo libre, del área Grupo de relación, ocio y tiempo libre del HCS-J

Pasos sucesivos	Modelo de regresión	β	R^2	R^2 Corregida	Cambio de R^2	Cambio en F	F
1	Coincide el ocio actual con el anterior	0,28	0,07	0,07	0,07	34,10***	34,10***
2	Cuando consume lo hace en compañía del grupo de relación	-0,18	0,11	0,10	0,03	15,59***	25,43***

* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$

9.4.3. Análisis de regresión: predicción del ocio de riesgo en función de los ítems que valoran Datos familiares y socioeconómicos en el HCS-J

En este apartado se incluyen como predictoras variables relacionadas con Datos familiares y socioeconómicos medidas con el cuestionario HCS-J. Las variables predictoras introducidas en el siguiente análisis de regresión fueron: composición familiar nuclear, monoparental, reconstituida y protección. Mientras que la variable dependiente o variable criterio el ocio de riesgo (medido con el Factor Ocio/Diversión del IGI-J).

El modelo predictivo relativo a la composición familiar incluyó una única variable relativa a la Composición familiar nuclear ($R^2 = 0,01$ y R^2 Corregida = 0,01) (véase Tabla 9.66).

Como se observa, dicha variable únicamente permitió explicar el 1% de la variabilidad del ocio de riesgo del menor, siendo también escasa la información aportada por el modelo (cambio en $R^2 = 0,01$; Cambio en $F = 5,55$, $p < 0,05$).

El signo negativo del coeficiente β de la variable Composición familiar nuclear ($\beta = -0,11$), indica que a menor presencia de composición familiar nuclear, mayor ocio de riesgo en los menores infractores de la muestra de este estudio (véase tabla 9.66).

Tabla 9.66. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con el tipo de composición familiar, del área Datos familiares y socioeconómicos del HCS-J

Pasos sucesivos	Modelo de regresión	β	R^2	R^2 Corregida	Cambio de R^2	Cambio en F	F
1	Composición familiar nuclear	-0,11	0,01	0,01	0,01	5,55*	5,55*

* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$

En el siguiente análisis de regresión, las siguientes variables predictoras introducidas fueron las variables del área Datos familiares y socioeconómicos del cuestionario HCS-J que hacen referencia al tipo de familia, en este caso se analiza la pertenencia del menor a una familia disfuncional: multiproblemática, delincuencial, factores económicos, consumo de sustancias, enfermedad, problemas relacionales, maltrato físico de padres a hijo/a, maltrato psíquico de padres a hijo/a, maltrato por abuso sexual, violencia ascendente, violencia de género. Mientras que la variable dependiente o variable criterio el ocio de riesgo (medido con el Factor Ocio/Diversión del IGI-J).

Respecto al modelo predictivo del ocio de riesgo del menor contemplando las variables relacionadas con un tipo de familia disfuncional, cabría destacar la inclusión de cuatro variables relativas a factores económicos, delincuencial, violencia ascendente y maltrato físico de padres a hijos ($R^2 = 0,11$ y R^2 Corregida = 0,10) (véase Tabla 9.67).

Así, teniendo en cuenta las variables incluidas en el modelo, los factores económicos presentó un poder predictivo bajo, del 6%, en relación al ocio de riesgo del menor. Considerando todas las demás variables de manera conjunta, añaden una mayor proporción de información al modelo, aunque continúa sin ser muy elevado, alcanza un poder explicativo del 10% con la inclusión de la última variable, maltrato físico de padres a hijos (cambio en $R^2 = 0,10$; Cambio en $F = 4,55$, $p < 0,05$).

El signo positivo de los coeficientes β de todas las variables introducidas en el modelo, indica que a mayor presencia de familias con estos 4 tipos de disfuncionalidades, mayor ocio de riesgo en los menores infractores de la muestra de este estudio (véase Tabla 9.67).

Tabla 9.67. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con el tipo de familia disfuncional, del área Datos familiares y socioeconómicos del HCS

Pasos sucesivos	Modelo de regresión	β	R^2	R^2 Corregida	Cambio de R^2	Cambio en F	F
1	Disfuncional factores económicos	0,18	0,06	0,06	0,06	29,13***	29,13***
2	Disfuncional delincuencia	0,14	0,08	0,08	0,02	7,12**	18,33***
3	Disfuncional violencia ascendente	0,13	0,10	0,09	0,02	8,26**	15,19***
4	Disfuncional maltrato físico de padres a hijo/a	0,10	0,11	0,10	0,10	4,55*	12,62***

* $p < ,05$; ** $p < ,01$; *** $p < ,001$

Tal y como pone de manifiesto la Tabla 9.68, se introdujeron las variables predictoras para el análisis de regresión relativas al área de Datos familiares y socioeconómicos del HCS-J: estilo educativo familiar de la madre, nivel socioeconómico y nivel cultural, siendo la variable dependiente o criterio el ocio de riesgo medido por éste factor en el IGI-J.

El modelo predictivo resultante, pone de manifiesto la inclusión de dos variables, Estilo educativo de la madre y Nivel socioeconómico familiar ($R^2 = 0,12$ y R^2 Corregida = $0,11$) (véase Tabla 9.68).

De modo concreto, el estilo educativo de la madre ayudó a explicar el 10% del ocio de riesgo del menor, mientras que el nivel socioeconómico de la familia permitió un pequeño incremento, llegando al 11%. Una vez más, fue la primera variable incluida en el modelo la que más información aportó (cambio en $R^2 = 0,10$; Cambio en $F = 47,02$ $p < 0,001$), en comparación con la segunda (cambio en $R^2 = 0,01$; Cambio en $F = 4,67$, $p < 0,01$).

El signo positivo del coeficiente β de la variable nivel socioeconómico familiar (que el Historial valora desde muy alto a muy bajo), indica que más bajo sea el nivel socioeconómico

de la familia, mayor ocio de riesgo en los menores. Mientras que el signo negativo del coeficiente β de la variable estilo educativo de la madre (que en el HCS-J va desde negligente/ausente hasta adecuado/de apoyo), indica que un estilo educativo de la madre menos adecuado, predice mayor riesgo en el ocio del menor (véase Tabla 9.68).

Tabla 9.68. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con el estilo educativo y el nivel cultural y socioeconómico, del área Datos familiares y socioeconómicos del HCS

Pasos sucesivos	Modelo de regresión	β	R^2	R^2 Corregida	Cambio de R^2	Cambio en F	F
1	Estilo educativo de la madre	-0,30	0,10	0,10	0,10	47,02***	47,02***
2	Nivel socioeconómico familia	0,11	0,12	0,11	0,01	4,67*	26,06***

* $p < ,05$; ** $p < ,01$; *** $p < ,001$

9.4.4. Análisis de regresión: predicción del ocio de riesgo en función de los ítems que valoran Datos escolares y formativos en el HCS-J

En este apartado se incluyen como predictoras variables relacionadas con Datos escolares y formativos medidas con el cuestionario HCS-J. Así, en el primer análisis de regresión realizado las variables predictoras introducidas fueron variables del área Escolar/Formativa del HCS-J: si estaba el menor escolarizado en el momento de ser denunciado, nivel real formativo aproximado, presencia en su historial educativo de situaciones de absentismo escolar, presencia en su historial educativo alguna situación de abandono escolar, si repitió curso alguna vez, número de veces que ha repetido curso, rendimiento escolar en los últimos meses, presencia de comportamientos disruptivos en el contexto escolar que han supuesto expulsiones reiteradas (dos o más en un curso). La variable dependiente o variable criterio es el ocio de riesgo (medido con el Factor Ocio/Diversión del IGI-J).

El modelo predictivo resultante del análisis de regresión, incluyó las variables presencia de absentismo escolar y rendimiento escolar en los últimos seis meses ($R^2= 0,28$ y R^2 Corregida= 0,26) (véase Tabla 9.69).

Considerando la primera variable incluida en el modelo, la presencia de absentismo escolar obtuvo un valor predictivo del 21% de la variabilidad encontrada en el ocio de riesgo. En este caso, es importante destacar, que al añadir la segunda variable incluida en el modelo, rendimiento escolar en los últimos meses, tras la variable anterior, aumenta la proporción de información al modelo, con un poder explicativo total del 26% (cambio en $R^2= 0,26$; Cambio en $F= 8,32$, $p<0,01$).

En este caso, la variable relativa a Presencia de absentismo escolar (que en el HCS-J va desde frecuente, considerándose más de un día a la semana durante más de un mes a no hay en su historial educativo situaciones de absentismo), reflejó, en base a su signo negativo ($\beta= -0,39$), indica que a mayor frecuencia de absentismo, mayor ocio de riesgo en los menores infractores. Mientras que por otro lado, el signo positivo del coeficiente β ($\beta =0,25$) en la variable Rendimiento escolar (que va desde muy alto a no escolarizado) revela que a menor rendimiento escolar mayor ocio de riesgo (véase Tabla 9.69).

Tabla 9.69. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con la escolarización del menor, del área Datos escolares/formativos del HCS-J

Pasos sucesivos	Modelo de regresión	β	R^2	R^2 Corregida	Cambio de R^2	Cambio en F	F
1	Presencia de absentismo escolar	-0,39	0,22	0,21	0,22	30,23***	30,23***
2	Rendimiento escolar en los últimos meses	0,25	0,28	0,26	0,06	8,32**	20,30***

* $p<,05$; ** $p<,01$; *** $p<,001$

Por otro lado, las variables introducidas en el siguiente análisis de regresión son Comportamientos disruptivos presentados por los menores en el contexto escolar, también del área Datos escolares y formativos del HCS-J: desobediencia, insultos a compañeros, insultos a adultos, hurtos o daños, peleas con compañeros, acoso escolar, enfrentamiento grave con adultos. La variable dependiente o variable criterio es el ocio de riesgo (medido con el Factor Ocio/Diversión del IGI-J).

La Tabla 9.70 refleja el modelo predictivo concerniente a las variables relacionadas con comportamientos disruptivos del menor en el contexto escolar. Éste quedó conformado por la inclusión de dos variables, peleas con compañeros e insultos a adultos ($R^2= 0,10$ y R^2 Corregida= 0,09).

Concretamente, la presencia de manera aislada de peleas con compañeros presentó un poder predictivo bajo, del 8%, en relación al ocio de riesgo del menor. Del mismo modo, aun añadiendo al modelo la variable insultos a adultos, éste explica un 9% de la variabilidad encontrada en el ocio de riesgo de los menores (cambio en $R^2= 0,01$; Cambio en $F= 6,80$, $p<0,01$).

Por último, los signos positivos de los coeficientes β de ambas variables incluidas en el modelo, peleas con compañeros e insultos a adultos ($\beta=0,24$ y $\beta=0,13$, respectivamente) sugieren que a mayor presencia de ambas variables mayor ocio de riesgo en los menores infractores (véase Tabla 9.70).

Tabla 9.70. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con el tipo de comportamientos disruptivos del menor en el contexto escolar, del área Datos escolares/formativos del HCS-J

Pasos sucesivos	Modelo de regresión	β	R^2	R^2 Corregida	Cambio de R^2	Cambio en F	F
1	Peleas compañeros	0,24	0,08	0,08	0,08	39,18***	39,18***
2	Insultos adultos	0,13	0,10	0,09	0,01	6,80**	23,26***

* $p<,05$; ** $p<,01$; *** $p<,001$

9.4.5. Análisis de regresión: predicción del ocio de riesgo en función de los ítems que valoran Datos laborales en el HCS-J

Las variables predictoras introducidas en el siguiente análisis de regresión están recogidas en el área Laboral del HCS-J: el menor se ha incorporado al mercado laboral, el motivo de la finalización de los trabajos y el uso que hace el menor con los ingresos percibidos. La variable dependiente o variable criterio es el ocio de riesgo (medido con el Factor Ocio/Diversión del IGI-J).

El modelo relativo al área laboral ha comprendido una única variable relativa al motivo de finalización de los trabajos ($R^2= 0,18$ y R^2 Corregida= 0,15) (véase Tabla 9.71).

Como se observa, dicha variable permitió explicar el 15% de la variabilidad encontrada en el del ocio de riesgo del menor (cambio en $R^2= 0,18$; Cambio en $F= 7,56$, $p<0,01$).

El signo positivo del coeficiente β de la variable incluida en el modelo Motivo de la finalización de los trabajos (va desde finaliza por finalización de contrato, por no tener el rendimiento exigido, por problemas de conducta, lo deja voluntariamente o por el internamiento), indica que a mayor tendencia de dejar los trabajos por diversas problemáticas en contraposición a la finalización natural del contrato, mayor ocio de riesgo en los menores infractores (véase Tabla 9.71.).

Tabla 9.71. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con la situación laboral del menor, del área Datos laborales del HCS-J

Pasos sucesivos	Modelo de regresión	β	R^2	R^2 Corregida	Cambio de R^2	Cambio en F	F
1	Motivo de finalización de los trabajos	0,42	0,18	0,15	0,18	7,56**	7,56**

* $p<,05$; ** $p<,01$; *** $p<,001$

9.4.6. Análisis de regresión: predicción del ocio de riesgo en función de los ítems que valoran Conductas adictivas en el HCS-J

En este apartado se incluyen como predictoras variables relacionadas con Conductas adictivas, consumo de drogas/alcohol del menor, medidas con el cuestionario HCS-J. Las variables predictoras introducidas en el siguiente análisis de regresión fueron: si el menor consume o ha consumido drogas o alcohol alguna vez en su vida, si hay evidencia (controles, centros de tratamiento, etc.) de que el menor sigue consumiendo drogas y si ha habido tratamiento previo al cumplimiento de la medida por consumo de sustancias. La variable dependiente o variable criterio es el ocio de riesgo (medido con el Factor Ocio/Diversión del IGI-J).

El modelo predictivo relativo a las conductas adictivas incluyó como una variable el Tratamiento previo al cumplimiento de la medida por consumo de sustancias ($R^2= 0,01$ y R^2 Corregida= 0,01) (véase Tabla 9.72).

Tal y como puede observarse, dicha variable únicamente permitió explicar el 1% de la variabilidad del ocio de riesgo en menores infractores, siendo también escasa la información aportada al modelo (cambio en $R^2= 0,01$; Cambio en $F= 5,80$ $p<0,05$). Sin embargo, en base a su signo positivo del coeficiente β ($\beta=0,12$), indica que haber recibido tratamiento previo por consumo de sustancias, pronostica mayor ocio de riesgo en los menores (véase Tabla 9.72).

Tabla 9.72. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con conductas adictivas del menor, del área Conductas adictivas y consumo de drogas/alcohol del HCS

Pasos sucesivos	Modelo de regresión	β	R^2	R^2 Corregida	Cambio de R^2	Cambio en F	F
1	Tratamiento previo al cumplimiento de la medida por consumo de sustancias	0,12	0,01	0,01	0,01	5,80*	5,80*

* $p<,05$; ** $p<,01$; *** $p<,001$

9.4.7. Análisis de regresión: predicción del ocio de riesgo en función de los ítems que valoran Personalidad y conducta en el HCS-J

Por último, aquí se incluyen como predictoras variables relacionadas con Personalidad/Conducta del menor, medidas con el cuestionario HCS-J. Así, las variables introducidas en el siguiente análisis de regresión fueron: si el menor ha presentado conductas violentas en los últimos 12 meses incluidos los hechos motivo del expediente, si el motivo del expediente conllevó empleo de violencia física o amenazas y si el menor presenta en su personalidad: dificultad grande para ponerse en el lugar de otro, frialdad emocional, manipulación frecuente de los otros, falta de remordimientos, insensibilidad, mentira frecuente, afecto superficial, simulación emocional, problemas tempranos de conducta y conducta sexual impersonal. La variable dependiente o variable criterio continúa siendo el ocio de riesgo (medido con el Factor Ocio/Diversión del IGI-J).

Respecto al modelo predictivo del ocio de riesgo del menor contemplando las variables que hacen referencia a su Personalidad y conducta, cabría destacar la inclusión de tres variables relativas a que los hechos del expediente han conllevado violencia física o amenazas, presenta manipulación de los otros e insensibilidad ($R^2= 0,17$ y R^2 Corregida= $0,16$) (véase Tabla 9.73).

Precisamente, es la presencia de violencia en los hechos .motivos del expediente judicial la que explicaría una mayor proporción en el ocio de riesgo del menor, en concreto el 12%, frente al 16% al contemplar todas las variables de manera conjunta. En este sentido, la presencia de conducta violenta añadiría mayor información al modelo (cambio en $R^2= 0,12$; Cambio en $F=59,99$ $p<0,001$), frente a (cambio en $R^2= 0,10$; Cambio en $F= 6,22$ $p<0,05$), si tomamos en cuenta la inclusión de la última variable.

Por último, el signo positivo de los coeficientes β de las tres variables incluidas en el modelo, indican que la presencia de violencia física o amenazas en los hechos motivos del expediente, así como la presencia de manipulación e insensibilidad, pronostica mayor ocio de riesgo en los menores (véase Tabla 9.73).

Tabla 9.73. Predicción del ocio de riesgo en función de las variables relacionadas con la personalidad y la conducta del menor, del área Personalidad/conducta del HCS

Pasos sucesivos	Modelo de regresión	β	R^2	R^2 Corregida	Cambio de R^2	Cambio en F	F
1	Los hechos del expediente ha conllevado violencia física o amenazas	0,24	0,12	0,12	0,12	59,99***	59,99***
2	Presenta manipulación de los otros	0,17	0,16	0,15	0,03	15,81***	38,95***
3	Presenta insensibilidad	0,12	0,17	0,16	0,10	6,22*	28,36***

* $p < ,05$; ** $p < ,01$; *** $p < ,001$

Capítulo X:

Discusión

10.1. Introducción

Tal y como se ha referido a lo largo de toda la revisión teórica que se ha expuesto en los primeros capítulos del presente trabajo, la literatura científica ofrece un amplio conocimiento acerca de las características y variables influyentes sobre la conducta delictiva en menores infractores, así como su reincidencia. Si bien, no es así cuando hablamos de cómo influyen las actividades realizadas en el ocio y tiempo libre de éstos menores acerca de su conducta desviada, ya que hasta el momento, las diversas investigaciones se han centrado en variables relacionadas como el consumo de drogas, las relaciones con un grupo de pares antisocial, conductas absentistas en el plano educativo, que dan lugar a ociosidad y/o un estilo de vida desajustado de la norma social, pero no de manera específica en el tema que nos ocupa.

Por ello, en la presente tesis doctoral se plantea la necesidad de ampliar dicho conocimiento, es decir, conocer qué variables de éstos menores están relacionadas o determinan un ocio de riesgo. Para ello, tal y como ha podido observarse en el capítulo anterior, se trató de especificar las variables sociodemográficas que describen a los menores infractores que estaban cumpliendo una medida judicial, bien fuese de internamiento o Libertad Vigilada, la reincidencia delictiva general, reincidencia delictiva, no reincidencia y reincidencia violenta y, por último, analizar qué variables sociodemográficas, delictivas y clínicas resultan predictoras del ocio de riesgo. Este último apartado, se elabora con el objetivo especialmente de promover un Programa Educativo y Terapéutico basado en datos empíricos que favorezcan una solución eficaz sobre este factor de riesgo de cara a prevenir la reincidencia de la conducta delictiva.

10.2. Características sociodemográficas, delictivas y clínicas de los menores infractores

En la investigación científica sobre este aspecto, parece existir cierto acuerdo acerca de las características sociodemográficas que definen a los menores que infringen la Ley, aun así es posible encontrar ciertas discrepancias en los estudios que tratan dichas características.

Si bien, en este apartado se realizará una revisión fundamentada en la comparación de estas variables con otros estudios. Cabe destacar en primer lugar que el 82% de los menores

estaban cumpliendo medida judicial con sentencia firme. Y por otro lado, en el presente estudio, los análisis efectuados se han realizado atendiendo a dos tipologías en las medidas judiciales, internamiento (I+L.V.) y Libertad Vigilada. El internamiento conlleva Libertad Vigilada, aun contabilizándose como la misma medida, es decir, dentro de la medida restrictiva de internamiento, de manera general en las sentencias los últimos meses son de Libertad Vigilada, por lo que a lo largo de este punto a la hora de explicar los resultados cualitativamente, a las medidas de internamiento seguidas de Libertad Vigilada, se les nombrará como I+L.V.

Así, en relación al género de los menores infractores, el presente estudio encontró como el 83,3% eran varones, frente al 11,7% de chicas, siguiendo por tipologías de medidas la misma distribución que los datos globales, mostrándose estos datos congruentes con el amplio número de investigaciones que consideran que el número de menores varones es predominantes al de menores femeninas en cuanto a la emisión de conductas infractoras (Cerón, 2013; Capdevilla, Díez, Pérez y García, 2008; Contreras y Cano, 2012; Graña y Rodríguez, 2010; Graña et al., 2007; Loeber et al., 1998; Peña, 2005; Rechea, 2008; Redondo, et al., 2011). Más concretamente, el INE (2014), publica el 81,3% de los menores condenados fueron varones, mientras que el 18,7% eran mujeres, cifras que resultan muy próximas a las obtenidas en el presente estudio.

Otras de las variables demográficas más estudiadas y que más controversia y polémica a nivel legal ha generado, es la edad. En el presente estudio se encontró que la media de edad de los menores fue de 16,8 años, constituyendo el grupo más amplio el rango etario de 16 a 18 años, constituyendo el 76,4% de la muestra, siguiendo los grupos en cuanto a tipologías de medida judicial, la misma distribución, siendo estas cifras similares a las obtenidas generalmente en las investigaciones, tanto a nivel nacional, como internacional (Farrington, 1992, 2008; Garrido et al., 2006; Rechea, 2008; Sampson y Laub, 2005). De igual manera, atendiendo a los datos oficiales del INE (2014), señala que por edad, el grupo de 17 años fue el más numeroso, constituyendo un 32,5% del total de menores condenados, seguido del grupo de los 16 años con un 28,6%, nuevamente, los datos son similares a los del presente estudio, datos similares al año 2011, donde el grupo de 17 años fue el más numeroso (32,1% del total), seguido del grupo de 16 años (29,7%) (INE, 2014).

En esta línea, y como se ha hecho mención a lo largo de la revisión teórica, todos los estudios sobre menores infractores engloban a adolescentes de 14 años o más, debido a que

los menores de esa edad, son inimputables desde el punto de vista penal, actuando en esas situaciones los Servicios de Protección de la Comunidad Autónoma correspondiente. Si bien, cabe destacar en este aspecto un fenómeno que cada vez cobra más auge en la actualidad, y es que, las conductas delictivas de menores de menos de 14 años corresponden fundamentalmente a conductas violentas, pero más específicamente, el grueso importante de las mismas se da en el entorno familiar, en manifestación de robos, amenazas, y agresiones, que aunque predominantemente se da hacia los progenitores, se constata también la extensión a otros miembros de la familia (Bernuz, Fernández y Pérez, 2007; Contreras y Cano, 2012; Crespo, Perles y San Martín, 2006).

Otra característica importante en relación a la edad, es que según la mayoría de las investigaciones empíricas, a menor edad del infractor, peor pronóstico delincuencial. Es decir, esta variable actúa como un importante factor de riesgo, aumentando la probabilidad de presentar conductas delictivas más graves en el futuro (Cerón, 2013; Contreras y Cano, 2012; Gendreau, et. al., 1996), así como que impliquen violencia dentro de los actos delictivos, y una mayor persistencia de la conducta delictiva, pudiendo llegar hasta principios de la edad adulta (Peña y Graña, 2006).

En cuanto a la nacionalidad, de la muestra objeto de estudio, el 54,4% eran españoles, seguidos de latinoamericanos que representan el 29%. En cuanto a la tipología de medida, no se daban diferencias significativas, siguiendo la misma distribución de los datos globales. Si bien, en los datos nacionales, la cifra de españoles aumenta considerablemente, tanto en el INE (2014), como en otros estudios. Así, Garrido (2009), en un estudio sobre menores infractores realizado en Cantabria, la muestra se compuso de un 85,6% de menores de nacionalidad española, frente a un 7,5% los de origen latinoamericano. Por otro lado, según los datos del INE (2012, 2013), la mayoría de los menores condenados eran de nacionalidad española (76%), si atendemos a los años 2011 y 2010, dado que nuestra muestra recoge menores que cumplían medidas en esos años, sigue la misma distribución, la mayoría de los condenados en 2011 fueron de nacionalidad española (72,7% frente al 72,2% del año anterior). Entre los extranjeros, los de países de América constituyeron la mayoría (36,8% del total), datos que superan en cuanto a la nacionalidad española a los del presente estudio.

En relación al ámbito formativo, los resultados globales del presente estudio apuntan a que un 47,9% de los menores no estaban escolarizados al inicio de la medida judicial, frente a un 47,2% que sí lo estaban. Por otro lado, teniendo en cuenta a los mayores de 16 años, un

63,3% no estaba incorporado al mercado laboral, en comparación con un 18,2% que sí lo estaba. Si bien, especificando por el tipo de medida en los menores de I+LV, el 59,2% no estaba escolarizado, frente al 36,9% de los menores de Libertad Vigilada. En cuanto a la incorporación al mundo laboral, ambos grupos obtienen porcentajes similares, 64% de los I+LV no se había incorporado y un 63,1% de los de Libertad Vigilada. Por otro lado, del total de la muestra, el nivel formativo con un mayor porcentaje fue el de primera etapa de la Educación Secundaria Obligatoria con un 38,8%, y atendiendo al tipo de medida, un 44,7% en los menores con Libertad Vigilada, mientras que las medidas de internamiento más Libertad Vigilada correspondía un 32,7%.

No obstante, en cuanto al absentismo escolar, cabe destacar que los menores presentan una elevada frecuencia del mismo, siendo más elevado el absentismo frecuente, que el ocasional en ambos tipos de medidas. Más concretamente, el 57,7% de los menores presentaba frecuente absentismo escolar, frente al 17,1% que representa el ocasional y no realiza conductas absentistas. Asimismo, si atendemos al tipo de medida, un dato importante es que un 23,5 % de los menores con Libertad Vigilada no presentaban estas conductas, frente al 10,4% de los de I+LV. Aquí también cabría especificar que dichos datos en los menores internados podrían explicarse por la propia situación de internamiento.

Si atendemos al rendimiento escolar, las mayores frecuencias se dan entre bajo y muy bajo, con un 24,6% y 26,1%, respectivamente en los menores de I+LV, frente a un 23% y 11,1% respectivamente en los de Libertad Vigilada. Asimismo, un 63,6% de los menores ha repetido curso, siendo muy parecidos al total los porcentajes en los menores con ambos tipos de medidas, y apuntado como se mencionaba con anterioridad el elevado porcentaje de no escolarizados.

Por otro lado, en cuanto al abandono escolar se vuelve a repetir una elevada proporción total, con un 47,4%, siendo igualmente más elevada en los menores internados, frente a los de medio abierto, con un 57,8% y 37,3%, respectivamente.

Todos estos resultados en cuanto al nivel formativo de los menores, corresponden con los de otros estudios que coinciden en un elevado absentismo, con un déficit académico importante, así como con el correspondiente fracaso escolar (Beccaria, 1994; Farrington, 1989, 1992, 1997; Graña y Rodríguez, 2010; Huizinga, Loeber, Terence, Thornberry y Cothorn, 2000; Ménendez, Rodríguez, Becédoniz y Bernardo, 2008). Asimismo, en la investigación se refleja como el fracaso escolar está ligado a la aparición de la conducta

antisocial, así como a la persistencia y reincidencia de la misma (Garaigorbil, 2005, Rechea y Cuervo, 2009; Sobral et al., 2000). Del mismo modo, la literatura especializada sugiere que la gran mayoría de los menores con conductas antisociales y delictivas presentan una historia de acusado fracaso escolar, siendo muy habitual el absentismo tras mostrar una escasa motivación hacia actividades de corte formativo, así como bajo rendimiento (Contreras y Cano, 2012; Uceda y Maza, 2006). Por otro lado, una variable que pueden estar relacionada con el fracaso escolar se encuentra en el tipo y la gratificación que el rendimiento escolar ofrece, el cual es a largo plazo e intrínseco, no material, y según las investigaciones sobre características de personalidad en menores infractores, se recoge su impulsividad, así como dificultad para demorar gratificaciones (López y López, 2003) lo que podría proporcionar una alta desmotivación, al no obtener resultados materiales a corto plazo cuando realizan actividades académicas, lo que propicia el fracaso escolar y absentismo (Contreras y Cano, 2012).

Atendiendo a las características que tienen que ver con la carrera delictiva, destacar que de los menores de la muestra, a nivel global, el 60,3% comenzaron a cumplir la medida judicial en el 2010, siendo del 30,6% en el 2009. Si desglosamos los datos atendiendo al tipo de medida, el 48,3% de los menores de I+LV, empezó a cumplirla en 2009 y 79,3% de los de L.V. en 2010. Esto puede deberse a la duración de las medias, siendo más largas las de internamiento, si bien, del global de menores, se observa que 0-6 meses es lo más predominante en cuanto a duración de las mismas. Una vez más si especificamos por el tipo de medida, el 57,8% corresponde a medidas de I+LV de 6 a 12 meses de duración, mientras que sólo con LV es predominante los 6 meses como máximo de duración, con un 98,6%.

Ahora bien, si atendemos a los tipos de delitos cometidos por los menores clasificándolos según las medidas, se observa que de los delitos que han cometido en el pasado, los menores que en el momento de la evaluación se encuentran internados obtienen una mayor frecuencia de delitos violentos con afectación del patrimonio con un 41%, seguidos de delitos contra el patrimonio menos violentos con un 35,2%. Si bien, a la inversa ocurre con los menores que en cumplen Libertad Vigilada en el momento de la evaluación, su delito predominante sería el delito contra el patrimonio menos violento, con un 46,4%, seguido de delitos violentos con afectación del patrimonio, 36,2%, hechos esperables ya que según la legislación, a mayor gravedad de los delitos, así como factores de riesgo en el menor, mayor restricción de las medidas judiciales.

Por otro lado, atendiendo a los delitos que los menores cumplían en el momento de ser evaluados, los resultados ofrecen las mismas frecuencias en los menores de I+LV que cuando se ha analizado los delitos pasados. Así, en los menores internados volvían a ser los delitos violentos con afectación del patrimonio los más predominantes, con un 37,2%, seguidos de los delitos contra el patrimonio menos violentos. Por otra parte, cabe destacar que los menores que cumplían Libertad Vigilada, en el momento de la evaluación, ofrecían frecuencias similares a los internados, con un 35% de delitos violentos con afectación del patrimonio, seguidos de delitos contra el patrimonio menos violentos.

Estos resultados se muestran congruentes con la literatura especializada que afirma que los delitos más frecuentes entre menores infractores son delitos contra el patrimonio (Centro Reina Sofía, 2006; Contreras y Cano, 2012; Crespo et al., 2006; García, Díez, Pérez y García, 2008; INE, 2014; Rechea, 2008; Rechea y Fernández, 2000; Redondo et al., 2011).

Por otro lado, atendiendo a las medidas judiciales impuestas a los menores en el momento de la evaluación, destacar que, en los menores de I+LV, era más frecuente el régimen semiabierto, con un 43,8%, seguido de medidas en Libertad Vigilada (que se refiere a medidas pendientes dado que es incompatible con la situación de internamiento), con un 21,9% y régimen cerrado, con un 18,5%. En comparación con los menores que cumplían en el momento de la evaluación Libertad Vigilada, cabe destacar que la medida predominante era esa misma en un 92%, seguida de Prestaciones en Beneficio de la Comunidad, con un 4,3%.

Ahora bien, atendiendo a las medidas que esos menores habían tenido en el pasado, en los menores internados, un 32,4% correspondía a Libertad Vigilada, seguido de otras medidas de internamiento en régimen semiabierto, 26,9% y en cerrado 13,9%. Por otro lado, en los menores de Libertad Vigilada, habían tenido en el pasado, también corresponde a Libertad Vigilada la mayor frecuencia, con un 43,5%, seguida de Prestaciones en Beneficio de la Comunidad, con un 26,1% y un dato curioso es que mostraban iguales frecuencias en medias anteriores en ambos regímenes, cerrado y semiabierto, 10,1%.

Los resultados encontrados en el estudio acerca del tipo de medidas se corresponderían con las investigaciones empíricas que afirman que las medidas en medio abierto son más frecuentes en los menores infractores, utilizándose las medidas con mayor restricción, es decir, internamiento en régimen cerrado, en casos de delitos de mayor gravedad, o intimidación en las personas o se haya generado grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas, o por último, hechos tipificados como delito se cometan en grupo o el

menor pertenezca o actúe al servicio de una banda, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades (Alcázar, Bouso y Verdejo, 2015; Caballero, 2014; Morillas, 2013). Así, en el estudio de este último autor, sus resultados serían parecidos si atendemos a los delitos que las medidas en el pasado de los menores. Así, obtiene un 37,7% de medidas de Libertad Vigilada, seguidas de Prestaciones en Beneficio de la Comunidad, con un 19,3% e internamiento en régimen semiabierto con un 12% del total de su muestra donde recoge los datos de las distintas Comunidades Autónomas (Morillas, 2013).

Respecto a la composición familiar, en el presente estudio, se observa que un 35,9% de los menores de I+LV, provienen de familias nucleares y monoparentales, mientras que los de Libertad Vigilada, aun siendo también predominante la familia nuclear, 44,3%, es elevado el porcentaje de menores, 35,8% que al igual que en el grupo de I+LV, provienen de familias monoparentales. Atendiendo al tipo de familia, los resultados ofrecen una mayor disfuncionalidad entre los menores de I+LV, en comparación con los menores en LV, con un 57,8% y 35% respectivamente. Más concretamente, haciendo alusión al tipo específico de problemática familiar disfuncional, nos encontramos con que los menores de I+LV, puntúan muy alto en todos los tipos de disfunción, siendo la más elevada el maltrato físico (84,8%) y psíquico (84,2%) de padres a hijos, seguida de problemática delincriminal en los padres (67,6%) y consumo de sustancias (67,3%). Por otro lado, los menores en LV presentan como disfunciones familiares más frecuentes la multi-problemática familiar, con un 43,8%, problemas relacionales, con un 40,2%, enfermedad, con un 37,8% seguido de factores económicos en un 34,9%.

Si bien, al analizar los datos en conjunto, los problemas relacionales intrafamiliares y los económicos, resultan en general más predominantes. Al realizar una comparación de los datos obtenidos con estudios, la literatura hace mayor hincapié en que los menores infractores provienen de familias desestructuradas (Cerón, 2013; Hetherington y Henderon, 1997), así como el pertenecer a una familia monoparental aumentaba la comisión de conductas antisociales (Cano, 2006; Cantón, Cortes y Justicia, 2002; Cuervo, 2011; Henry, Caspi, Moffitt y Silva, 1996; Pevalin, Wade, y Brannigan, 2003; Rodríguez y Torrente, 2003; Torrente y Merlos, 1999; Torrente y Rodríguez, 2004).

En cuanto a la disfuncionalidad familiar, la literatura tiene en cuenta a esta variable como una de las causas de la delincuencia juvenil, siendo característico de estas familias la

falta de cohesión, comunicación, afecto, pertenencia, así como compartir actividades (Ovalles, 2007; Pacheco y Hutz, 2009). Así, tanto la violencia, como conductas desviadas de los padres y consumo de sustancias, se consideran en la literatura científica como fuertes factores de riesgo para la conducta delictiva de los menores (Benítez y Justicia, 2006; Contreras y Cano, 2012; García et al., 2008; Moral, Ovejero y Pastor, 2004). Por otro lado, diferentes estudios muestran que un nivel socioeconómico familiar bajo predice la emisión de conductas delictivas de sus miembros (Crespo et al., 2006), en contraposición, otras investigaciones sugieren que dicha relación no es tan evidente, sino que el conflicto resultante de esta situación al igual que otra problemática familiar cualquiera, es la que predeciría la conducta antisocial (García et al., 2008; Grossi, Paíno, Fernández, Rodríguez y Herrero, 2000; Sobral et al, 2000).

En lo que se refiere al grupo de iguales, los resultados del presente estudio apuntan que teniendo en cuenta el total de los menores, éstos manifiestan un grupo de relación disocial. Ahora bien, se observa que los menores en Libertad Vigilada en mayor medida poseen un grupo normalizado, 67,5%, en comparación con los menores de I+LV, ofreciendo además estos últimos puntuaciones elevadas en grupo violento-disocial y banda organizada, con 76,7% y 68,9%, respectivamente. En ambos grupos, el papel era intermedio con porcentajes, del 59,7% y 51,6% entre menores de I+LV y en LV, respectivamente, y de sumisión con valores del 27% en ambos. Estos resultados son compartidos por la investigación tanto nacional, como internacional, así, la literatura científica relaciona el grupo de iguales como uno de los predictores más significativos y estables del comportamiento delictivo, tanto en la adolescencia, como en etapas evolutivas posteriores (Elliot y Menard, 1996; Farrington, 1991; Hawkins et al, 1998; Herrenkohl, 2001; Herrenkohl et al, 2000), pudiendo actuar como principales factores de dicha conducta, aún más que otras variables sociales como la carencia de relaciones estables, o clínicas, como sintomatología depresiva (Brendgen et al., 2000; Muñoz-Rivas y Graña, 2005).

Por otro lado, en relación a las bandas organizadas, la literatura sugiere que éstas influyen en mayor medida hacia comportamientos delincuenciales, que la relación con grupos disociales, aunque éstos también sean violentos (Bennet y Halloway, 2004; Craig, 2002; Huff, 1998a; Thornberry et al., 2003). Así, en el estudio de Sharp et al. (2006), sobre su investigación sobre la conducta criminal de jóvenes en Inglaterra y Gales encuentran que de todos los jóvenes entre 10 y 19 años que habían cometidos delitos tanto contra la propiedad, como contra las personas y delitos de drogas, el 6% lo constituían miembros de bandas.

Así, cabe destacar en resumen, que la literatura científica recoge la influencia del grupo de iguales durante la adolescencia como principal agente, debido al modelo para la transmisión de valores tanto positivos, como negativos, ya que actuaría como grupo de socialización secundario (Contreras y Cano, 2012; Llinares y Benedito, 2007; Muñoz, 2004; Rechea, Fernández y Cuervo, 2008; Sobral et al., 2000).

En lo que se refiere al ocio y tiempo libre, observamos puntuaciones muy elevadas en ambos grupos en todas las variables que se han evaluado, siendo aun así más predominantes en el grupo I+LV. Más concretamente, en cuanto a las actividades que se consideran de ocio de riesgo, nuevamente los internados han puntuado más alto que los de Libertad Vigilada, siendo predominante en ambos grupos estar en la calle, plazas o parques durante su ocio (97,6% y 88,5%, respectivamente), seguido de ir a pubs, bares o discotecas (97,6% y 88,5% respectivamente), y estar bebiendo en la calle o fumando (96,2% y 84,3%, respectivamente). Como se señalaba al inicio de este apartado, la literatura científica que ha estudiado a los menores infractores, no ha profundizado como es en el caso de otros factores de riesgo, en el tema del ocio y tiempo libre en esta población, aun así, se hace alusión a una investigación de Navarro et al. (2013), que estudió la construcción del ocio en el adolescente y su influencia en el desarrollo de trayectorias delictivas. Estos autores agruparon la muestra según tres trayectorias delictivas diferencias, inicial, moderada y consolidada, por otro lado, clasifican el ocio como “de callejeo”, “programado” o “solitario”, obteniendo resultados que van en la misma línea de la presente investigación. Más concretamente, Navarro et al. (2013), obtuvieron un ocio desestructurado o de callejeo en los menores con trayectorias delictivas iniciales, fue de un 47,9 %, mientras que en los menores con trayectorias delictivas moderadas fue de un 72,1% y en los de trayectorias consolidadas, un 92,2%, concluyendo que la variable ocio ocupaba pues un espacio significativo, debido a que conforme el menor infractor profundiza y desarrolla la carrera delictiva, aumenta de forma importante el ocio desestructurado y disminuye el ocio programado.

En cuanto al estudio de Giorgi (2012), apunta de manera general también en esta línea, concluyendo que las actividades estructuradas reducen el grado de participación en la delincuencia, mientras que se da también a la inversa, es decir, las actividades no estructuradas en el tiempo de ocio representan un importante factor de riesgo para los adolescentes. Por otra parte, Sánchez (2013), concluye sobre su investigación acerca de los modelos de identificación y actividades de ocio relacionados con la inadaptación juvenil, que el tipo de actividad de ocio que realiza el menor puede conducir a un razonamiento moral

poco desarrollado, o a una falta de perspectiva social. Más concretamente, esta autora expone la existencia de un claro vínculo entre el razonamiento moral y el comportamiento antisocial, al menos en el caso de ciertas conductas, existiendo un vínculo entre el ocio y el comportamiento antisocial a través de la perspectiva social/razonamiento moral alcanzado por el adolescente, dado que algunas actividades de ocio en la práctica disminuyen la esfera moral del entorno en el que se desarrolla el menor.

Centrando la atención en las variables clínicas, en relación al consumo de sustancias, todos los menores de I+LV han afirmado haber consumido drogas o alcohol alguna vez en su vida, y el 99,5% de los de LV. En cuanto a la frecuencia y continuidad del consumo, el grupo de internamiento afirma en un 26,1% haber consumido durante los últimos 12 meses, frente al 6,5% de los de Libertad Vigilada, aunque un dato curioso se representa en relación a la continuidad del consumo, ya que el 91,5% de los menores con internamiento afirma haber abandonado dicho hábito, en comparación con un 84,3% de los de Libertad Vigilada. Estos elevados porcentajes pueden responder bien a la propia intervención psicosocial que conlleva la medida judicial, o bien, por otra parte, lo significativo del porcentaje de los menores en I+LV, podría explicarse además de la intervención, por la propia contención que representa la institución, es decir, el internamiento propiamente dicho.

Si bien, al revisar la investigación prácticamente en todas las muestras se repite este factor, por ejemplo, en el estudio de Garrido (2009), cuya muestra se seleccionó por menores y jóvenes infractores que estaban dentro del sistema judicial de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el año 2007, el 80,9% afirmaban haber consumido cannabis, y el 97,7% haber consumido alcohol, aunque al valorar los consumos en la actualidad, también en esta muestra los porcentajes disminuyen significativamente, a un 37,5% en el cannabis y 23,3% en la frecuente habitualmente. Asimismo, en el estudio de Domínguez y Luzón (2014) con menores infractores de la Comunidad Valenciana, sugieren que el 32,05% de los menores informaban haber consumido alcohol, mientras que, 95,18% de ellos afirmaba haber consumido y mantener el consumo de cannabis.

Por otro lado, en la investigación de Peña (2005) con adolescentes entre 14 y 17 años de Centros Escolares pertenecientes al Municipio de Majadahonda (Madrid), obtiene resultados que el 52,2% de los adolescentes con altos niveles de conducta antisocial, consumían cannabis, siendo ésta la sustancia más consumida por los adolescentes, asemejándose su consumo a las prevalencias de sustancias legales, como el alcohol, que

también obtenía porcentajes muy elevados, sobre todo en las chicas de la muestra, que al resto de sustancias ilegales. Cabe destacar, que al comparar estos datos con los del presente estudio, en primer lugar, hay diferencias en la muestra dado que los sujetos del estudio de Peña (2005), no están sumergidos en el sistema de justicia, pero nos aporta una clara representatividad de la conducta antisocial en adolescentes en general, así como la relación entre ambas variables. Así, aunque difieren en cuanto los datos, ambos resultados resultan significativos.

Por otro lado, Cerón (2013) obtenía resultados más parecidos a los de Peña (2005), con una muestra de menores infractores internados en diversos C.E.M.J. de la Comunidad de Madrid, en donde un 53,17% de los menores consumían cannabis y un 50,34% alcohol.

De este modo, droga y delincuencia aparecen frecuentemente asociados en la literatura científica, donde ha probado en multitud de ocasiones la relación entre el consumo habitual de drogas y la comisión de conductas delictivas por parte de los menores (Crespo et al., 2006; Dembo et al., 1997; Ellickson y McGuigan, 2000; Greenwood, 1992; Huizinga et al., 2000; Lipsey y Derzon, 1998; Loeber y Farrington, 2000; Muñoz-Rivas, Graña, Peña y Andreu, 2002; Olivan, 2002; Peña, 2005; Tubman et al., 2004).

Si bien, es muy amplia la literatura científica que recoge este hecho, también se realiza una diferenciación en cuanto a la relación drogas y delincuencia, diferenciándose entre una delincuencia funcional e inducida en cuanto al consumo de drogas (Contreras y Cano, 2012). Tomando como ejemplo de esta diferenciación los últimos autores citados, señalan que en la delincuencia funcional el delito no es el objetivo, sino un medio de obtención de la droga, señalando así una importante diferenciación de cara a la intervención de este hábito en los menores infractores. Y, por otro lado, apuntan a una delincuencia inducida, donde la sustancia puede actuar como un potenciador de la conducta delictiva, provocando la desinhibición de la conducta y la alteración de la capacidad de juicio del sujeto, en este sentido, podrían darse dos circunstancias; el menor infractor podría haber actuado bajo los efectos de las drogas habiendo mermado su capacidad cognitiva (por un consumo ocasional/puntual o por un consumo habitual), de manera que la motivación hacia el delito, no caracteriza a estos menores. O puede darse la situación de que el menor haya consumido drogas para realizar dicha conducta delictiva, ya que sin el efecto desinhibitorio le resultaría más complicado, también esta circunstancia sería muy importante de cara a la intervención.

Al hilo de lo anterior, en el presente estudio, al comparar si los menores infractores habían tenido tratamiento por drogas previo a la medida judicial, los resultados reflejan que el 13,1% del total afirmaban haber recibido una intervención al respecto. En comparación con ambos grupos, los menores de I+LV aportaban un 16,1% de menores, siendo inferior, 10,1% los de LV.

Prosiguiendo con las variables clínicas, al analizar la presencia de conductas violentas en los menores de la muestra, éstos reportan porcentajes muy elevados en ambos grupos, 97,6% en los I+LV, frente a 95,4% en los de LV, concluyendo que prácticamente todos los menores habían emitido estas conductas. Asimismo, examinando si esa violencia estaba recogida en los hechos imputados en ambas medidas judiciales, los resultados, como era de esperar, apuntan a mayores porcentajes en los internados 55,9%, y 25,8% en los de Libertad Vigilada. En comparación con los datos del estudio de Graña et al. (2007), en sus resultados estos autores afirman que la variable nivel de violencia de los delitos cometidos por menores infractores en la Comunidad de Madrid, también son concluyentes, explicando este hecho dado que el robo con violencia o intimidación es el delito más frecuente.

Si bien, estos resultados se apoyan en la investigación sobre menores, que en primer lugar ha concluido en múltiples ocasiones la estrecha relación entre violencia y delincuencia. Así, cabe destacar que dicha relación se basa en que los jóvenes delincuentes en general, poseen un menor repertorio de habilidades sociales, sobre todo en cuanto a la resolución de problemas, en comparación con otros adolescentes de su edad no infractores, así como una mayor rigidez cognitiva, es decir, una mayor tendencia a mantener el mismo pensamiento, en general distorsionado de interpretar la realidad que le rodea, lo que podría facilitar el uso reiterado de la violencia como única vía de resolución de conflictos, al no poseer otras habilidades alternativas (Contreras y Cano, 2012). En este sentido, Garaigordobil (2005) apunta que los menores infractores suelen mostrar pocas conductas de consideración con los demás, es decir una baja empatía, así como una baja asertividad y conductas prosociales.

Por último, haciendo alusión a las características de personalidad, a nivel global, los menores infractores han ofrecido los siguientes resultados; en primer lugar la característica que ha prevalecido ha sido la insensibilidad, seguida de manipulación frecuente de los otros, simulación emocional y dificultad para ponerse en lugar del otro. Así, atendiendo a los índices numéricos, a pesar de prevalecer dichas características en ambos grupos, en las cuatro características han seguido el mismo patrón, es decir, el grupo de I+LV ha doblado el

porcentaje al grupo de Libertad Vigilada. Más concretamente, el grupo de I+L.V. ha obtenido un 67,3% en insensibilidad, mientras que los de L.V. un 32,7%, en la variable manipulación frente a los otros, obtuvieron un 70,3% y 29,7%, respectivamente, mientras que un 66,4% y 33,6% correspondientemente obtuvieron en simulación, así como 69,9% y 30,1%, respectivamente en dificultad en ponerse en el lugar del otro.

Estos resultados concuerdan con lo que las diversas investigaciones sugieren sobre las características de personalidad de los menores, sobre todo en cuanto a que se observa en los menores infractores una sensibilidad social o preocupación por los otros inferior a la detectada en jóvenes normativos (Arce et al., 2011; Fariña, Arce y Novo, 2008; Livacic-Rajas, Espinoza y Ugalde, 2004; Redondo, 2008a; Silva y Martorell, 1989), así como deficiencias en torno a una socialización positiva (Vilariño, Amado y Alves, 2013), aunque como en otras variables, éstas no están exentas de controversia. Así, algunos autores respaldan que no existe un apoyo sistemático de la relación entre comportamiento antisocial y carencia de competencias sociales (Arce et al., 2005).

Por último, en cuanto a las variables de simulación emocional y dificultad para ponerse en el lugar del otro, también los resultados obtenidos son congruentes con investigaciones que concluyen una relación entre comportamiento desviado y déficits en inteligencia emocional (Arce, Novo, Fariña y Vázquez, 2009; Brackett, Mayer, y Warner, 2004; Garaigordobil y Oñederra, 2010; Mestre, Guil y Mestre, 2005). De este modo, considerando literatura precedente, se observa como las carencias en inteligencia emocional pueden derivar en dificultades para neutralizar y controlar emociones negativas, incrementándose de este modo la emisión de comportamientos antinormativos (Arce, Seijo, Fariña y Mohamed-Mohand, 2010; Fernández-Berrocal y Extremera, 2005; Vilariño et al., 2013), considerando estos autores importante y recomendable incluir entre los programas educativos a menores infractores objetivos relacionados con el aumento de habilidades sociales que fomenten la inteligencia emocional. De este modo, en el Programa que se propone al final de este trabajo, se trabajan dichas habilidades a lo largo de las diferentes sesiones.

10.3. Análisis de la relación entre las variables sociodemográficas, delictivas y clínica en la reincidencia delictiva general y reincidencia delictiva violenta y no reincidencia

10.3.1. Análisis de la relación entre variables sociodemográficas, delictivas y clínica en la reincidencia delictiva general, reincidencia delictiva y no reincidencia.

En primer lugar, especificar que la reincidencia delictiva general está compuesta por las cuatro combinaciones utilizadas para definir la reincidencia y reiteración delictiva; reincidencia y reiteración, reincidencia y no reiteración, no reincidencia y no reiteración, y no reincidencia y no reiteración. En cambio, la reincidencia delictiva, se compone de las tres combinaciones primeras, es decir, reincidencia y reiteración, reincidencia y no reiteración, y no reincidencia y reiteración.

Al analizar la reincidencia delictiva general, se observa una mayor frecuencia de no reincidente y no reiteración, seguido de reincidente y no reiteración, reincidente y reiteración y, por último, no reincidente y reiteración. Si bien, al desglosar los resultados en ambos grupos I+LV y LV, vemos que sigue la misma distribución que los datos globales. Más concretamente, el grupo de reincidencia con mayor frecuencia, fue el de no reincidencia y no reiteración, el cual alcanzó un 39,3% en I+LV y un 58,5% en LV. Mientras que en el polo opuesto, reincidencia y reiteración el grupo I+LV, alcanzó un 19,9% y los de LV un 10,1%.

Estos resultados se apoyan en los estudios sobre el nivel de reincidencia y las medidas judiciales ejecutadas que concluyen que la menor tasa de reincidencia es para los menores con medidas de mediación y reparación, seguidas de las medidas en medio abierto, mientras que la mayor tasa de reincidencia se encuentra en las medidas de internamiento, (Capdevilla et al., 2005; Cuervo, 2011; Morales y Da Agra, 2015; San Juan y Ocariz, 2009). Este hecho puede explicarse también porque los menores cuyos hechos delictivos han conllevado internamiento, hayan sido más graves y/o que en la exploración psicosocial el Equipo Técnico haya aconsejado el internamiento por superior interés del menor al contemplar en la evaluación un elevado riesgo delictivo, así como la posesión por parte de éste de múltiples factores de riesgo.

En función de las variables sociodemográficas, atendiendo al género, en la reincidencia delictiva general sólo se producen diferencias estadísticamente significativas entre varones y mujeres en el grupo de I+LV ($\chi^2=8,05$; $p<0,05$). Así, en cuanto al grupo no

reincidente y reiteración los varones puntuaron un 100%, mientras que ninguna de las mujeres fue incluida en este grupo. Por otro lado, cabe destacar también la diferencia importante entre el grupo reincidente y reiteración, así los varones obtienen un 92,9%, mientras que las mujeres un 7,1%.

Al analizar la reincidencia delictiva y no reincidencia, se observan resultados similares. Así, éstos apuntan a diferencias estadísticamente no significativas ($\chi^2=0,03$; n.s.), aunque se da un porcentaje mayor de varones que de mujeres en ambos grupos reincidentes y no reincidentes, 88,1% y 11,9% respectivamente.

Estos resultados irían en la línea de los encontrados por Cerón (2013), que concluyó que el número de varones que reiteran, es bastante superior al número de mujeres, así los varones en su estudio alcanzaron un porcentaje del 92%. De la misma manera, otras investigaciones consideran la variable sexo masculino como un factor de riesgo de la reincidencia delictiva (Capdevilla et al., 2005; Cerón, 2013; Kazdin, Kraemer, Kessler, Kupfer y Offord, 1997; Zamble y Quinse, 1997).

En relación a la edad, en los análisis de la reincidencia delictiva general, las diferencias son estadísticamente significativas en ambos grupos. En el grupo I+L.V. ($\chi^2=18,18$; $p<0,001$), y en el grupo LV ($\chi^2=22,32$; $p<0,001$). Si bien, puede observarse que para el grupo I+L.V., el mayor porcentaje en cuanto a reincidencia y reiteración, lo obtiene la franja etaria de 16-17 años, con un 54,8%, mientras que los de LV obtienen un porcentaje más elevado entre los 18-21 años, con un 68,2%.

Mientras que en los análisis de reincidencia delictiva y no reincidencia, se observan diferencias estadísticamente significativas entre reincidentes y no reincidentes ($\chi^2=11,68$; $p<0,005$). En el grupo de menor edad, 14-15 años, se daba una menor frecuencia de reincidencia con un 11,9% siendo mayor en la franja de 16-17 años, con un 51,8%, volviendo a bajar, aunque con un porcentaje significativo de 36,2% en los de 18 a 21 años.

Estos resultados concuerdan el grueso de las investigaciones que señalan que a mayor edad, mayor reincidencia delictiva (Bravo, Sierra y del Valle, 2007; Capdevilla et al., 2005; Graña et al., 2007; Ortega, García, y De la Fuente, 2009; San Juan, Ocariz y De la Cuesta, 2007). Otros estudios señalan que la edad constituiría un factor de predicción estático en cuanto a la reincidencia delictiva (Bringas, Rodríguez, Gutiérrez y Pérez, 2010; Bringas,

Rodríguez, López-Cepero, Rodríguez y Estrada, 2010; Gendreau et al., 1996; Rodríguez et al., 2011).

En cuanto al tipo de medidas, en los análisis de reincidencia delictiva general, no se producen diferencias estadísticamente significativas en el grupo I+LV ($\chi^2=23,48$; n.s.), aunque sí en el grupo de LV ($\chi^2=23,95$; $p<0,05$), obteniendo este grupo en la medida de L.V. los mayores porcentajes. Así, el grupo de LV, en la medida de LV obtuvo un porcentaje de 100% en el grupo de no reincidencia y reiteración, seguido del grupo de no reincidencia y no reiteración, con un 99,2%, reincidencia y no reiteración con un 97,2% y reincidencia y reiteración con un 86,4%. Estos resultados se ajustan parcialmente a lo que la literatura especializada sugiere con respecto a las medidas en medio abierto.

Por otro lado, en los análisis de reincidencia delictiva y no reincidencia, sí se encuentran diferencias estadísticamente ($\chi^2=29,95$; $p<0,001$), siendo predominante la Libertad Vigilada para los no reincidentes, 63,3%, y en comparación con los reincidentes también es la Libertad Vigilada la que ofrece una mayor puntuación con un 43,6%. Por otro lado, atendiendo a la duración de las medidas, los reincidentes puntúan más alto a partir de los 6-12 meses hasta los 18-24 meses.

Más concretamente, la literatura indica que las medidas que se proponen en mayor proporción son las de medio abierto, siendo la Libertad Vigilada la más frecuente de todas, respondiendo así a la filosofía y principios educativos de la Ley 5/2000 (Bravo et. al., 2009; Capdevilla et al, 2005; Cuervo, 2011). Por otro lado, la mayoría de los estudios coinciden en que a medida que aumenta la restricción de la medida educativa propuesta, el menor reincide con un mayor número de expedientes (Capdevilla et al., 2005; San Juan y Ocariz, 2009; Betchell et al., 2007; William y Piquero, 2012).

Cabe destacar ante esta cuestión que en los resultados de las distintas investigaciones un factor importante a tener en cuenta cuando se evalúa a un menor con bajo nivel de reiteración y que no obtiene un alto nivel de compromiso de riesgo de reincidencia futura, la decisión judicial, por ende, es asignarle una medida en medio abierto (Graña et al., 2008).

De la misma manera, si tras la valoración de un menor se obtiene un nivel elevado de riesgo de reincidencia delictiva (presumible por el tipo de delito cometido o por el bien jurídico que ha vulnerado) le correspondería una medida de internamiento cuya supervisión o restricción sería nuevamente valorada en función de sus necesidades criminógenas. Por lo

tanto, es metodológicamente muy complejo establecer comparaciones entre ambas medidas judiciales (medio abierto o internamiento) para determinar cuál es más efectiva en términos de reincidencia, ya que se parte de distintos niveles de riesgo al adoptar la medida judicial (Morales y Da Agra, 2015).

Atendiendo al tipo de familia, en los análisis de la reincidencia delictiva general, el resultado, ($\chi^2=5,7$; n.s.) no se producen diferencias estadísticamente significativas entre los cuatro grupos de reincidencia, lo mismo que ocurre en el nivel cultural, ($\chi^2=15,25$; $p=0,08$), (aunque el resultado se encuentra muy próximo de ser significativo). Si bien, los niveles culturales medio y bajo obtienen porcentajes de 31,3% y 43,8% para la reincidencia y reiteración respectivamente. Por otro lado, en cuanto al nivel socioeconómico, si se obtienen diferencias estadísticamente significativas ($\chi^2=18,27$; $p<0,05$), donde un nivel bajo de esta variable, obtiene porcentajes más elevados en los cuatro grupos de reincidencia, siendo el más alto, el porcentaje de reincidencia con reiteración, con un 46,9%.

De la misma manera, en los análisis de reincidencia delictiva y no reincidencia, no se dan diferencias estadísticamente significativas en relación al tipo de familia entre reincidentes y no reincidentes ($\chi^2=3,15$; n.s.), aunque cabe destacar como los no reincidentes ofrecen un porcentaje algo mayor en la familia funcional, 58,1%, frente a la disfuncional, 50,5%. En cuanto al nivel socioeconómico, tampoco se dan diferencias estadísticamente significativas ($\chi^2=6,69$; n.s.). Si bien, los reincidentes cuanto éste es muy bajo, doblan el porcentaje a los no reincidentes, 14,7% y 7,1%, respectivamente. Tampoco es significativo aquí el nivel cultural ($\chi^2=8,78$; n.s.), aunque como en el caso del nivel socioeconómico, los reincidentes también doblan el porcentaje a los no reincidentes, 16,5% y 8,6%, respectivamente.

En relación al tipo de familia, los resultados no se apoyan en lo que la mayoría de las investigaciones apuntan, dado que un tipo de familia disfuncional se representa como un factor de riesgo para la reincidencia y reiteración delictiva (Andrews y Bonta, 2006; Molinet, Velasquez y Estrada, 2007). En cuanto al nivel socioeconómico, las diversas investigaciones coinciden en afirmar la frecuencia con que se relacionan los problemas económicos familiares con la delincuencia. Así, en el estudio de García-España, García, Benítez, Pérez (2011), refieren entre sus resultados, existe relación estadísticamente significativa entre ambas variables, aunque exponen que entre su muestra los menores sin problemas económicos familiares que no reinciden obtuvieron un 65,1%, frente al 34,9% de los que sí habían reincidido. No obstante, estos autores señalan que del total de la muestra, el 42% de los

reincidentes tenían dificultades económicas en sus casas frente al 29,9% de los no reincidentes.

En cuanto al consumo de alcohol y drogas, en los análisis de la reincidencia delictiva general, el haber consumido dichas sustancias alguna vez no resultó estadísticamente significativo, aunque el valor de significación fue muy cercano ($\chi^2=1,04$; $p<0,08$), pero sí resultó significativa la diferencia estadística en consumo frecuente en el último año ($\chi^2=7,06$; $p<0,05$), siendo el grupo de reincidencia y reiteración el que obtuvo un mayor porcentaje, 23,4%, seguido del no reincidente y reiteración 22,5%.

Del mismo modo, en los análisis de la reincidencia delictiva y no reincidencia, en cuanto al consumo de drogas, ésta no es estadísticamente significativa en ambos grupos en la modalidad de han consumido alguna vez ($\chi^2=1,04$; n.s.), pero sí lo es en cuanto al consumo en los últimos 12 meses ($\chi^2=6,72$; $p<0,05$), obteniendo como era de esperar que los reincidentes obtengan un mayor porcentaje, 20,6%, frente a los no reincidentes 11,4%.

Estos resultados coinciden con lo que la literatura científica muestra sobre esta variable, posicionando el consumo de drogas como un fuerte predictor de la reincidencia (Bravo et al., 2007, 2009; Capdevilla et al., 2005; Graña et al., 2007; Ortega et al., 2009) y reiteración delictiva (Andrews y Bonta, 2006).

Si bien, atendiendo al grupo de referencia, en los análisis de reincidencia delictiva general, los grupos de relación disocial obtuvieron un mayor porcentaje en todos los grupos de reincidencia, con un valor de 65,1%, seguidos de los violentos-disociales, 20,6%. Por último, en los análisis de la reincidencia delictiva y no reincidencia, en el grupo de referencia se observa igualmente que los reincidentes puntúan más alto en grupos disociales, violentos-disociales y bandas, que los no reincidentes.

Estos resultados se apoyan en los referidos en otras investigaciones, así Ortega, García y Frías (2014), encontraron que entre las variables más relacionadas con la probabilidad de reincidencia de los menores, se encontraba una mayor asociación con la variable relacionarse con otros iguales disociales. Estos resultados conducen al hilo de otras investigaciones que también coinciden en que el menor tenga entre su grupo amigos a otros menores considerados disociales (Cottle et al., 2001; Simourd y Andrews, 1994).

10.3.2. Análisis de la relación entre variables sociodemográficas, delictivas y clínicas en la reincidencia violenta.

En cuanto al género, no hubo diferencias estadísticamente significativas ($\chi^2=2,68$; n.s.), aunque como en los otros tipos de reincidencias, los varones obtenían puntuaciones más altas, 96,2%, frente a las mujeres, 3,8%. Estos datos son parcialmente congruentes a otros estudios sobre reincidencia violenta, donde señalan que el género constituye, junto a la edad, el principal correlato de la conducta antisocial y violenta (Bartolomé, Montañes, Rechea y Montañes, 2009; Chapple, McQuillan y Berdahl, 2005; Rutter et al., 2000).

En relación a la edad, sí que se observan diferencias estadísticamente significativas ($\chi^2=12,63$; $p<0,005$), siendo más reincidentes violentos a partir de los 16 años, con un porcentaje de 50%, seguido de la franja de edad de los 18-21 años, con un 44,2%. Estos resultados se apoyan en lo que la literatura científica aporta en relación a los reincidentes violentos. Peña y Graña (2006) afirman que la conducta antisocial de inicio temprano, tiende a persistir en los últimos años de la adolescencia y principios de la edad adulta, estando asociada a un incremento de la probabilidad de que los delitos cometidos impliquen violencia, ya que estos menores no cuentan con alternativas a la conducta agresiva durante los primeros años de la adolescencia, lo que puede desencadenar en dificultades de adaptación social.

No obstante, en otros estudios donde relacionan la edad con la reincidencia, señalan que la temprana edad de inicio de la delincuencia, especialmente si ésta es violenta, predicen no sólo un mayor número de reincidencias, sino que estos comportamientos entrañarán una mayor violencia, así como cronicidad de la actividad delictiva (Farrington, 1995; Garrido, Farrington y Welsh, 2006; López, Alba y Garrido, 2007; Roesch, 2007; Thornberry, 2004; Torrente y Merlos; 1999).

Así mismo, Graña et al. (2007), concluyen en la muestra estudiada, que existe una relación entre mayor edad, reincidencia y violencia, puestos los delincuentes más mayores presentan un mayor número de delitos, medidas y de duración de las mismas, además de ser más reincidentes.

Sí se produjeron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las medidas judiciales impuestas ($\chi^2=27,4$; $p<0,001$), siendo predominante en las reincidencias violentas, medidas de internamiento en régimen semiabierto, con un 32,7%, seguidas de régimen cerrado, con un 25%. En el grupo de no reincidentes, la LV, ha sido la que ha contado con

mayor proporción, siendo de 63,3%, seguida, aunque con una diferencia considerable, del régimen semiabierto, con un 19,5%. Estos resultados concuerdan con lo que diversas investigaciones señalan con respecto a la reincidencia y el tipo de medidas. Así, el grueso de las investigaciones apuntan a que a medida que va aumentando en restricción la medida educativa inicialmente propuesta, el menor reincide con un mayor número de expedientes (Cuervo, 2011).

Este fenómeno puede deberse como ya se ha mencionado con anterioridad a la relación que existe entre el nivel de riesgo delictivo y de reincidencia del menor, con el tipo de medida judicial que se le asigna dentro del catálogo de medidas que contempla la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Pero, por otro lado, también puede tener que ver con el orden cronológico con el que se asignan esas medidas. Así, se comprueba en diferentes estudios que las medidas propuestas al inicio del seguimiento de las carreras delictivas, contemplan una menor intervención y restricción, contando a su vez con porcentajes de reincidencia menores, es decir, la tendencia apunta a que las medidas de mediación obtienen tasas menores de reincidencia, en comparación con la Libertad Vigilada y el internamiento (Betchell et al., 2007; Capdevilla et al., 2005; Cuervo, 2011; San Juan y Ocáriz, 2009). Más concretamente, atendiendo al orden cronológico, las medidas propuestas a los menores reincidentes, a lo largo de todas sus trayectorias, se observa que en la primera propuesta de medida, el mayor porcentaje se encuentra entre Prestaciones en Beneficio de la Comunidad y Libertad Vigilada, así a medida que van aumentando los expedientes, así como la gravedad del delito y/o la presencia o aumento de violencia, como es de esperar, la tendencia se propaga más hacia medidas de internamiento (Cuervo, 2011).

De este modo, se observa que las medidas menos restrictivas se encuentran más presentes en los inicios del historial delictivo del menor y a medida que aumentan los expedientes, los porcentajes se centran progresivamente en medidas de mayor restricción, lo que podría explicar que la mayor reincidencia y reiteración se de en las medidas judiciales de mayor restricción (Betchel et al., 2007; Bravo et al., 2009; Capdevilla et al., 2005). Así, como se puede ver en la parte teórica del presente trabajo, las medidas no privativas de libertad, continúan siendo de utilización preferente según las memorias de la Fiscalía General del Estado.

En cuanto al tipo de familia, no se producen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los reincidentes violentos y los no reincidentes ($\chi^2=1,1$; n.s.), pudiendo

solamente señalar que para los no reincidentes la familia funcional obtiene también aquí un mayor porcentaje, 58,1%, aunque con poca diferencia de los reincidentes violentos, que ha obtenido un 50%, tanto para la funcional, como para la disfuncional.

Por otro lado, el nivel cultural familiar no produjo diferencias estadísticamente significativas ($\chi^2=9,95$; n.s.), aunque obtiene mayor puntuación 42,3% en los reincidentes violentos. Cabe destacar, que sí se produjeron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al nivel socio-económico y la reincidencia violenta ($\chi^2=11,1$; $p<0,05$), obteniendo un 53,8% los menores reincidentes violentos en el nivel socio-económico bajo. Estos resultados coinciden parcialmente con lo que establece la literatura científica, así, en cuanto a los problemas económicos parece haber cierto consenso en cuanto a su relación estadísticamente significativa con la reincidencia ya sea violenta o delictiva (García-España et al., 2011). En cambio, diversos estudios señalan una familia disfuncional como factor de riesgo en la reincidencia (Cerón, 2013; Cottle et al., 2001; Molinet et al., 2007).

En cuanto al consumo de drogas/alcohol en la frecuencia alguna vez, no obtuvo diferencias significativas ($\chi^2=0,24$; n.s.), prácticamente todos los reincidentes violentos y no reincidentes habían consumido. Estas diferencias vinieron cuando se atendía a un consumo frecuente en los últimos 12 meses ($\chi^2=8,07$; $p<0,01$), donde los reincidentes violentos puntuaban con mayor frecuencia 26,9% que los no reincidentes. Estos resultados se apoyan en los resultados de diversas investigaciones, así, Graña et al. (2007) señala que los reincidentes consumen más sustancias tóxicas que los no reincidentes, y los jóvenes violentos más alcohol que los no violentos.

Si bien, también se produjeron diferencias significativas entre los grupos de reincidencia violenta y no reincidencia en cuanto a sus grupos de iguales de referencia, obteniéndose las mayores puntuaciones en el grupo disocial, con un 80,4%, en el violento/disocial, con un 45,1%, y por último, banda organizada, con un 19,6%. Estos resultados coinciden con la literatura científica, que refuerza la relación entre el grupo de pares disocial y la reincidencia (Bravo et al., 2009; Cottle et al., 2001; Ortega et al., 2014; Simourd y Andrews, 1994).

Por último, cabe destacar que en el estudio de Graña et al. (2007), los resultados sobre la variable nivel de violencia de los delitos cometidos (en comparación con los violentos y no violentos) también se dieron diferencias estadísticamente significativas. No obstante, dado que el robo con violencia e intimidación es el delito más frecuente de los delincuentes

juveniles, de acuerdo a la clasificación de reincidencia violenta, la mayoría de la muestra fue codificada bajo la categoría de delincuencia violenta. Debido a ello, entre sus resultados se observa que los menores reincidentes y violentos son los que presentan un mayor número de delitos, siendo este grupo sentenciado a un mayor número de medidas, así como con una mayor duración de las mismas. Por lo que estos autores concluyen que los menores cuya reincidencia es violenta, cometen delitos más frecuentes y más graves, siendo por consiguiente, los más reincidentes.

Tabla 10.1. Resumen de los análisis de relación entre las variables sociodemográficas, delictivas y clínicas en la reincidencia delictiva general y reincidencia violenta

	REINCIDENCIA DELICTIVA GENERAL Reincidencia con reiteración, Reincidencia sin reiteración, No reincidencia y Reiteración y No reincidencia y no Reiteración	REINCIDENCIA DELICTIVA: Reindidencia y Reiteración, Reincidencia y No reiteración y No reincidencia y reiteración	REINCIDENCIA VIOLENTA/ NO REINCIDENCIA
GÉNERO	Diferencias estadísticamente significativas si se atiende al grupo I+L.V.	Diferencias no son estadísticamente significativas	Diferencias no son estadísticamente significativas
EDAD	Diferencias significativas en ambos grupos I+L.V. y L.V.	Diferencias estadísticamente significativas	Diferencias estadísticamente significativas
TIPOS DE MEDIDAS	Diferencias estadísticamente significativas en el grupo L.V.	Diferencias estadísticamente significativas	Diferencias estadísticamente significativas
TIPO DE FAMILIA	Diferencias no estadísticamente significativas	Diferencias no estadísticamente significativas. También se encuentran en la duración de las medidas	Diferencias no estadísticamente significativas
NIVEL SOCIO-ECONÓMICO	Diferencias estadísticamente significativas	Diferencias no estadísticamente significativas	Diferencias estadísticamente significativas
NIVEL CULTURAL	Diferencias no estadísticamente significativas	Diferencias no estadísticamente significativas	Diferencias no estadísticamente significativas
CONSUMO DE DROGAS ALGUNA VEZ	Diferencias no estadísticamente significativas	Diferencias no estadísticamente significativas	Diferencias no estadísticamente significativas
CONSUMO DE DROGAS FRECUENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	Diferencias estadísticamente significativas	Diferencias estadísticamente significativas	Diferencias estadísticamente significativas
GRUPO DE IGUALES DE REFERENCIA	Mayor porcentaje el grupo disocial	Mayor porcentaje en disocial, violento-disocial y bandas	Mayor porcentaje en disocial, violento-disocial, grupo de mayor edad y bandas.

10.3.3. Análisis de la reincidencia delictiva general y violenta en función del IGI-J.

En primer lugar, ambos tipos de reincidencia correlacionan de manera estadísticamente significativa tanto con la Escala Total, como con los 8 factores que componen el IGI-J. Cabe destacar que la reincidencia delictiva general obtiene una mayor correlación con la Escala en total ($r=.33$; $p<0,001$), que la reincidencia violenta ($r=.25$; $p<0,001$).

Estos resultados coinciden con la literatura científica, donde se ha encontrado atendiendo a las áreas del Inventario, que los 8 factores que componen el IGI-J correlacionan con la reincidencia (Lipsey y Derzon, 1998; Loeber y Dishion, 1983).

Por otro lado, en el análisis de la reincidencia delictiva general, las correlaciones más elevadas entre los factores se dieron entre: Historial Delictivo ($r=.45$; $p<0,001$), Grupo de iguales ($r=.30$; $p<0,001$), Consumo de sustancias ($r=.25$; $p<0,001$) y Actitudes/Creencias ($r=.24$; $p<0,01$).

Así mismo, al analizar la reincidencia violenta se obtiene que las correlaciones más elevadas fueron Historial Delictivo ($r=.39$; $p<0,001$), Grupo de iguales ($r=.25$; $p<0,001$) y Consumo de drogas ($r=.22$; $p<0,001$).

A continuación, se especifica, por la importancia que tiene para el presente trabajo el Factor Ocio/Diversión, así, en el análisis de la reincidencia delictiva general, obtuvo también una correlación importante ($r=.20$, $p<0,001$). Mientras que en la reincidencia violenta obtuvo una correlación que aunque destacable, es más baja que las correlaciones que se obtuvieron en los otros factores ($r=.11$; $p<0,001$). Así, atendiendo al Factor Ocio/Diversión, otras investigación han obtenido una elevada correlación con la reincidencia (Cuervo et al., 2009), obteniendo una correlación de 0,81 (*coeficiente Alpha de Conbrach*), siendo la más alta de los 8 factores con respecto a la reincidencia.

Los resultados del presente trabajo, concuerdan con la mayoría de los resultados de otras investigaciones, donde los 8 factores, han resultado predictores de la reincidencia. Si bien, Cuervo (2011), obtiene en su estudio longitudinal de reincidencia que los mayores predictores en relación con el tiempo donde perdería fuerza dicha predicción son: Personalidad/Conducta (desde los 6 hasta los 24 meses), Relación con el grupo de iguales (de los 6 hasta los 18 meses), Educación formal/ Empleo (de los 18 a los 24 meses) y Ocio/Diversión (a los 24 meses). Por otra parte, Flores et al. (2004), señalan el factor Delitos

y medidas anteriores y actuales, seguido con gran diferencia del factor de consumo de sustancias y Actitudes, valores y creencias, como los que más han correlacionado en su investigación con la reincidencia.

Por otro lado, Graña et al. (2007) obtuvo puntuaciones más elevadas en los reincidentes, correlacionando en mayor medida en los siguientes factores: Delitos y medidas judiciales pasadas y actuales, Personalidad/conducta y Consumo de sustancias, a excepción de la escala de Ocio/diversión que no resultó significativa en este estudio entre reincidentes y no reincidentes. Si bien, en el estudio posterior de Graña et al. (2008) en la reincidencia delictiva general, obtuvo mayor correlación en: Delitos y medidas judiciales pasadas y actuales, seguido de Ocio/Diversión, Consumo de sustancias y Personalidad/Conducta. Mientras que los resultados de ese estudio en la reincidencia violenta obtuvieron una mayor correlación en: Pautas educativas, Grupo de iguales, Consumo de sustancias y Ocio/Diversión.

De este modo, el presente trabajo, como las investigaciones mencionadas, coinciden parcialmente con los factores predictores que la teoría señala como los más potentes en cuanto a conducta delictiva y reincidencia. Así, el Modelo General, Psicológico, Social y de Personalidad de la Conducta Criminal (Andrews y Bonta, 2006). Estos autores llaman a dichos factores predictores *The Big Four*, contemplando entre ellos: Delitos y medidas judiciales pasadas y actuales, Grupo de iguales, Actitudes, valores y Creencias y Personalidad/Conducta.

Por último, al comparar la reincidencia delictiva general con la no reincidencia en los factores del IGI-J, las diferencias son estadísticamente significativas en cuanto a la media que puntúan en los 8 factores, puntuando más alto en todos los factores los reincidentes delictivos generales, que los no reincidentes. Del mismo modo, en la reincidencia violenta en comparación con la no reincidencia, atendiendo a las puntuaciones medias, los reincidentes violentos también puntúan más alto tanto en la Escala Total como en los 8 factores. Estos resultados son similares a los de Cuervo et al. (2009).

Cabe destacar que al analizar ambos tipos de reincidencia en función del IGI-J, la reincidencia delictiva general, ha obtenido mayores correlaciones que la reincidencia violenta, tanto en la Escala total, como en cada uno de los 8 factores. Estos resultados coinciden con los estudios de Graña et al. (2007) y Cuervo (2011), donde los reincidentes puntúan significativamente más que los no reincidentes, y delincuentes violentos versus no violentos. También en el estudio de Garrido et al. (2006), encontró, en su estudio que existían

diferencias significativas entre reincidentes y no reincidentes en seis de las ocho áreas del Inventario, resultando como no significativas en este estudio la Educación formal/empleo y el Ocio/Diversión.

10.4. Variables sociodemográficas, delictivas y clínicas predictoras del ocio de riesgo.

Hasta aquí se han presentado los factores descriptivos tanto de los menores infractores, como de los tipos de reincidencia que éstos pueden desarrollar. Así mismo, para completar el análisis, puesto el presente trabajo se realiza desde un planteamiento dirigido a la intervención educativa y terapéutica, es imprescindible desarrollar un conocimiento preciso sobre los determinantes que explican el área sobre el que se va a intervenir. En este sentido, los resultados obtenidos permiten reflejar información sobre la relación establecida entre el ocio de riesgo del menor y un conjunto de diversas variables psicosociales, delictivas y clínicas.

Desde un punto de vista general, los datos obtenidos validan muchos de los puntos de partida de la presente investigación, debido a que algunas de las variables contempladas, permiten predecir, en mayor o menor medida, un ocio de riesgo en el menor. Por ello, podría afirmarse que todas las hipótesis planteadas al inicio de la parte empírica fueron contrastadas parcialmente al demostrarse el poder predictivo de sus componentes.

Más concretamente, aspectos como un grupo de iguales disocial, consumo de sustancias tóxicas, baja implicación y motivación por actividades de corte formativo, escaso rendimiento escolar, absentismo y abandono de actividades académicas, mantener comportamientos disruptivos tanto con iguales, como con figuras de autoridad, escasa supervisión parental durante el tiempo de ocio, llevar a cabo actividades rutinarias con escaso nivel de organización y estructuración, el contexto donde se desarrolle el ocio, es decir, en la calle, discotecas, etc., que el menor disponga de una baja empatía, insensibilidad, muestran una importante relación con el ocio de riesgo, configurándose así como correlatos significativos de la implicación de este estilo de conductas en el ocio.

A pesar de que estas dimensiones han mostrado un valor significativo como pronosticadores del ocio de riesgo, su valor explicativo varía dependiendo de cada una de las variables contempladas. Para exponer de forma resumida los principales factores predictores se presenta la Tabla 10.2.

Tabla 10.2 Resumen de los factores de riesgo para la emisión de ocio de riesgo en los menores infractores

FACTORES DE RIESGO
Factores de riesgo contemplados como predictores de la conducta y reincidencia delictiva
<ul style="list-style-type: none">- Pautas educativas- Consumo de sustancias- Educación/empleo- Grupo de iguales- Actitudes/creencias
Número de amigos y tipo de relación con sus iguales y familiares
<ul style="list-style-type: none">- Mala relación con los padres
Características del grupo de iguales de referencia
<ul style="list-style-type: none">- Grupo de iguales poco normalizado- Grupo de relación disocial- Grupos violentos- Grupos de mayor edad- Aislamiento social
Uso del ocio y tiempo libre
<ul style="list-style-type: none">- Estar en la calle, plaza o parque haciendo botellón o fumando porros
Mantenimiento del tipo de ocio anterior al cumplimiento de la medida judicial, el tanto el delito como el consumo se realiza con su grupo de iguales de referencia
<ul style="list-style-type: none">- Coincide el ocio actual con el anterior a la medida judicial- Consumo acompañado de su grupo de relación
Composición familiar
<ul style="list-style-type: none">- Escasa presencia en el menor de una composición familiar nuclear
Familia disfuncional
<ul style="list-style-type: none">- Familia disfuncional por factores económicos- Disfuncional delincuencial- Disfuncional por violencia ascendente- Disfuncional por maltrato físico de los padres a los hijos

Estilo educativo de la madre, nivel socioeconómico y nivel cultural

- Estilo educativo de la madre inadecuado
- Nivel socioeconómico familiar bajo

Adherencia al proceso formativo

- Presencia de absentismo escolar
- Rendimiento escolar bajo

Empleo de comportamientos disruptivos

- Peleas con los iguales
- Faltas de respeto a las figuras de autoridad

Motivación por el mundo laboral

- Tendencia a abandonar voluntariamente un trabajo

Conductas adictivas

- Tratamiento previo por consumo de sustancias psicoactivas

Personalidad y conducta desadaptada

- Empleo de conducta violenta en los delitos
- Presencia de manipulación de los otros
- Insensibilidad

De forma pormenorizada, en cuanto a los factores de riesgo contemplados como predictores de la conducta y reincidencia delictiva, cabe señalar que la variable que predice un mayor ocio de riesgo por parte del menor es el tipo de educación parental que el menor recibe de sus progenitores. Entre las pautas educativas se encontraría una supervisión inadecuada, dificultad de los progenitores en controlar el comportamiento del menor, disciplina inapropiada, pautas educativas inconsistentes, malas relaciones parentales con el menor. En concreto, esta variable por sí sola permite explicar el 34% de la variabilidad del ocio de riesgo del menor. Pero además, la inclusión del consumo de sustancias por parte del menor, poca adherencia a la educación formal/empleo, grupo de iguales disocial y actitudes/creencias antisociales, permitió explicar el 44% del ocio de riesgo del menor. Estos datos permiten confirmar parcialmente la hipótesis de que los factores de riesgo de la conducta delictiva, serán también factores que predispongan al menor a llevar a cabo un ocio de riesgo.

Con respecto al número de amigos y tipo de relación con sus iguales y familiares, es importante destacar que únicamente aparece incluida como variable relevante de riesgo la presencia de mala relación con los padres, aunque explica un bajo porcentaje del ocio de riesgo del menor (2%). En primer lugar, este resultado es interesante ya que no apoya de manera definitiva la especial importancia que se atribuye al grupo de iguales en el ocio de riesgo del menor. Estos resultados coinciden con otros estudios específicos sobre clima familiar y delincuencia juvenil, donde concluyen que un alto grado de conflictividad familiar y escasa supervisión del menor, favorecen la aparición de conductas desviadas socialmente (Barnes y O’Gorman, 1995; Farrington, 1978; Hoeve et al., 2009; Loeber y Stouthamer-Loeber, 1986; Patterson et al., 1991; Thornberry, 2004).

En tercer lugar, y al hilo de lo anterior, es importante destacar las variables predictoras relacionadas con las características del grupo de iguales de referencia. En este caso, la presencia de grupo de iguales normalizado, presentó un nivel de $\beta = -0,15$, permitiendo predecir así un mayor ocio de riesgo cuanto menos normalizado sea el grupo de iguales, mostrando esta variable un valor predictivo del 13%. Pero, además, la inclusión de la presencia de un grupo de relación disocial, un grupo violento y un grupo de mayor edad, así como el aislamiento social o carencia de relaciones estables, permitió explicar un 24% del ocio de riesgo del menor. Estos datos permiten confirmar la hipótesis de que un grupo de relación con creencias antisociales predicen un ocio de riesgo en los menores infractores. A su vez, estos resultados coinciden con los aportados por la literatura científica, así el mantenimiento y exhibición de conductas desviadas de la norma social, así como de riesgo por parte del grupo de iguales es uno de los predictores más significativos y estables de este mismo tipo de comportamientos (Elliot y Menard, 1996; Farrington, 1991; Hawkins et. al. 1998; Herrenkohl, 2001, Muñoz-Rivas y Graña, 2005).

En relación al uso del ocio y tiempo libre anterior al cumplimiento de la medida judicial, únicamente una variable mostró valor predictivo. Dicha variable tiene que ver con estar en la calle, en una plaza o parque haciendo botellón o fumando porros que, pese a su significatividad, mostró sólo un valor predictivo del 4%. Si bien, como se comentó en el Capítulo V de ocio y tiempo libre como factor de riesgo, el tiempo dedicado a practicar actividades no estructuradas correlaciona positivamente con la conducta delictiva (Giorgi, 2012; Navarro et. al. 2013). Asimismo, el botellón se podría caracterizar como una actividad de ocio desestructurada, caracterizada por desarrollarse en un contexto grupal compuesto por jóvenes, donde la supervisión adulta es inexistente y donde las limitaciones impuestas a las

conductas son mínimas (Osgood, Anderson y Shaffer, 2005), permitiendo estos datos confirmar la hipótesis de que las actividades desorganizadas y desestructuradas, predicen un ocio de riesgo en el menor infractor. A esto habría que añadir que este uso del ocio y tiempo libre lleva implícito el consumo de sustancias, así como la presencia de un grupo de iguales con actitudes favorables hacia dicho consumo, así como de desviación social.

Son muchas las investigaciones que han relacionado ambas variables con la aparición de conductas antisociales en los adolescentes (Luengo et al., 1995). Por otro lado, las drogas se usan mayoritariamente en el tiempo libre, como recurso de ocio, o a veces como elemento central del mismo (Martín y Moncada, 2003). Asimismo, el consumo crónico de alcohol es la forma que tiene más consecuencias negativas a lo largo del tiempo, afectando la esfera fisiológica, conductual y cognitiva del adolescente (Montero, 2007), siendo a su vez una de las principales sustancias adictivas que han estado involucradas tanto en el ocio de riesgo como en la comisión de delitos, relacionándose así, con violencia, comportamiento sexual desviado, vandalismo, asaltos, robos, daños a la propiedad, muertes de jóvenes ocurridas en accidentes de tráfico (Donovan, 1993; Espada et al., 2003; González, 2005; Shope et al., 2003; Tubman et al., 2004; Villatoro et al., 2002; Zhang, Welte y Wieczorek, 2002). Al igual que ocurre con el cannabis, en el estudio de Villatoro et al. (2002), con una muestra de 3.271 menores infractores, el 37% usaban marihuana, y el 34,4% de las infracciones fueron reportadas bajo el efecto de cannabis, donde el 50% eran robos.

Con respecto al mantenimiento del tipo de ocio anterior al cumplimiento de la medida judicial, así como tanto el delito, como el consumo de sustancias se realiza junto con su grupo de iguales de referencia, que el ocio actual coincida con el anterior a la medida judicial permite explicar el 7% del riesgo de ocio, mientras que la inclusión del consumo se realiza en compañía de su grupo de relación, aumentó dicho porcentaje al 10%. En este sentido, tal y como refieren Giorgi (2012) y Navarro et al. (2013) el ocio desestructurado o de callejeo resulta significativo en los menores en conflicto con la Ley, siendo más predominante a medida que avanza la trayectoria delictiva. Así, el uso de sustancias en el ocio y la conducta delictiva mantienen una asociación positiva con la delincuencia (Bui et al., 2000; Brook et al., 1995; Giancola et al., 1998; Loeber, Green, Lahey, Frick y McBurnett, 2000; Redondo et al., 2011; Tubman et al., 2004; Wagner y Kassel, 1995; Watts y Wrights, 1990). Así mismo, tal y como lo define Peñafiel (2009), la variable más significativa en el mantenimiento del consumo de sustancias tóxicas, es la relacionada con que éste hábito se desarrolle con el grupo de iguales, así como con la relación de actividades grupales que se desarrollan en el

ocio ligadas a bares y discotecas especialmente (Barriuso, 2003; Calafat et al., 2007; Gómez-Fraguela et al., 2008). En este caso, como señalaba Bandura (1984), cobra especial importancia la identificación con el modelo (Aburto et al., 2007).

En relación a la composición familiar, exclusivamente la variable composición familiar nuclear mostró valor predictivo, aunque este sólo explicó el 1% de la variabilidad de la variable dependiente.

Con respecto a la familia disfuncional, cabe destacar que la dimensión que predice un mayor riesgo para llevar a cabo un ocio de riesgo es que esta disfuncionalidad sea debida a factores económicos, aunque llegando a explicar un bajo porcentaje de éste tipo de riesgo (6%). Si bien, considerando la presencia de otros tipos de disfuncionalidades, como la delincuencia, por violencia ascendente y por maltrato físico de padres a hijos, el modelo permitió aumentar el poder explicativo, que aunque no es muy elevado, explica el 10% de la variabilidad del ocio de riesgo del menor. Estos datos permiten confirmar la hipótesis de que la procedencia del menor de un núcleo familiar disfuncional predice un ocio de riesgo en el menor infractor. Estos resultados coinciden con otras investigaciones sobre delincuencia parental y posterior relación con la conducta desadaptada de los menores, así se extrae una relación positiva entre comportamientos desviados paternos y posterior estilo de vida antisocial de los hijos (Farrington, 1989; Lipsey y Derzon, 1998; McCord, 1997).

En cuanto al estilo educativo de la madre, nivel socioeconómico y cultural familiar, cabe señalar el poder explicativo que han demostrado tener dos dimensiones relacionadas con éstas variables familiares, siendo la que más poder predictivo ha presentado el estilo educativo de la madre, el cual presentó un $\beta = -0,30$, lo que indica que un estilo educativo por parte de la madre poco adecuado, relacionado con negligente, ausente, podría explicar el 10% de la variabilidad del ocio de riesgo, que considerando la otra dimensión, nivel socioeconómico bajo, aumentaría su poder predictivo a un 11%.

En relación a la adherencia del proceso formativo, las variables que resultaron de mayor predicción del ocio de riesgo del menor fue la presencia de absentismo escolar, que permite explicar por sí sola el 21% de la variabilidad. Pero, además, la inclusión de la variable rendimiento escolar en los últimos meses, permitió aumentar el poder predictivo al 26% en cuanto al riesgo en el ocio del menor. De hecho, la literatura científica señala que el pobre rendimiento académico, está relacionado con conductas antisociales (Del Barrio, 2004a; Farrington, 1989; Swain, 1991), así como la inasistencia escolar, la cual contribuye a facilitar

el paso a la delincuencia debido a que proporciona tiempo y oportunidades adicionales de conductas inadecuadas, sobre todo cuando el adolescente presenta una elevada ociosidad (Farrington, 1995).

Respecto al empleo de comportamientos disruptivos por parte del menor, cabe señalar el poder explicativo que han demostrado tener dos variables relacionadas con dicho constructo, peleas con compañeros e insultos a los adultos, que consideradas de forma conjunta han permitido explicar el 9% de la variabilidad del ocio de riesgo. Más concretamente, la variable peleas con compañeros obtuvo una fuerza predictiva del 8%.

Con respecto a la motivación por el mundo laboral, una única variable mostró poder predictivo, la tendencia a abandonar voluntariamente un trabajo, ayudando a explicar el 15% del ocio de riesgo de los menores. Este hecho podría deberse a la escasa tolerancia a frustración que muestran los menores infractores, bajo control de impulsos y dificultades para demorar la gratificación (Graña y Rodríguez, 2010), lo que podría llevarles a una escasa perseverancia y cumplimiento de obligaciones. Si bien, Farrington (1986) que menores con conductas delictivas previas que estaban desempleados aumentaba su factor de riesgo hacia actividades poco estructuradas y que llevara a cabo nuevas conductas delictivas, ya que cuanto más tiempo pasa el joven en situación de falta de ocupación laboral, menores son sus apoyos sociales, así como disminuye también las expectativas del mismo para cambiar la situación. Tanto estos datos, como los anteriores que hacían alusión al ámbito escolar, permiten confirmar la hipótesis de que una escasa motivación por llevar a cabo un proceso formativo reglado, así como por introducirse en el mundo laboral predice el ocio de riesgo en el menor infractor.

En relación a las conductas adictivas de los menores, sólo una variable mostró valor predictivo, el haber tenido tratamiento previo por consumo de sustancias psicoactivas, aunque a pesar de su significatividad, sólo mostró un poder predictivo del 1%. Este hecho se debe, muy probablemente, a que un menor haya tenido un tratamiento previo por el consumo, sugiere una mayor problemática con respecto al mismo, es decir el consumo presenta un riesgo mucho mayor de interferir en el desarrollo de una vida adaptada, o ya ha presentado consecuencias negativas del mismo. Si bien, estos datos permiten confirmar la hipótesis de que los problemas relativos con el consumo de drogas o alcohol serán pronosticadores significativos del ocio de riesgo de los menores infractores.

Por último, en cuanto a la personalidad y conducta desadaptada del menor, cabe destacar el poder predictivo que han mostrado tener tres variables relacionadas con ambos conceptos, el empleo de conducta violenta en los delitos, presencia de manipulación de los otros e insensibilidad. En concreto, el empleo de la conducta violenta permite explicar por sí sola el 12% de la variabilidad en el ocio de riesgo. Además, al incluir la presencia de manipulación de los otros y la insensibilidad del menor, permitió explicar el 16% del riesgo en el ocio del menor. Estos datos parecen confirmar parcialmente la hipótesis de que los déficits en habilidades sociales para relacionarse y resolver conflictos interpersonales de manera adaptativa, serán pronosticadores del ocio de riesgo de los menores infractores.

10.5. Limitaciones del estudio y líneas futuras de investigación

El presente estudio se ha centrado en la investigación de los menores infractores, aunque no está exento de algunas limitaciones, las cuales deben ser tenidas en cuenta con el fin de guiar nuevas investigaciones que se deriven de la presente tesis doctoral.

En primer lugar, aunque el tamaño de la muestra no es reducido, no resultaría representativo de la población general, debido a que todos los menores infractores son internos en los diversos Centros de Ejecución de Medidas Judiciales (C.E.M.J.) de la Comunidad Autónoma de Madrid, pudiendo influir las características diferencias de las diversas comunidades en variables a analizar en futuras investigaciones.

Por otro lado, el no haber contado para el presente trabajo con población adolescente no institucionalizada, no permite comparar a estos menores con población comunitaria adolescente no institucionalizada. Por lo que sería interesante para futuras investigaciones aplicar el Programa Educativo y Terapéutico para Menores Infractores realizando una evaluación pre y post-tratamiento, así como un seguimiento que permita verificar si los resultados se mantienen, contando con un grupo de control que permita evaluar correctamente la eficacia del Programa

Otra cuestión a tener en cuenta es que la presente investigación, se ha marcado como objetivo la propuesta de un programa educativo y terapéutico en ocio y tiempo libre para menores infractores, que de forma complementaria a los programas específicos permitan

responder desde la intervención que se realiza en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales, y que respondan al nivel de riesgo que presentan los menores en cada área.

Si bien, no se han encontrado programas de éstas características para ésta población en concreto, siendo predominantes en el grueso de las publicaciones en materia de ocio los programas alternativos o de prevención, y algunos más específicos, lo son en población dependiente, por lo que no se han podido establecer estudios de eficacia previos.

Otra limitación importante es la escasa literatura científica acerca del ocio de riesgo en menores infractores, así como del propio concepto de ocio de riesgo. En la literatura específica, la mayoría de las definiciones de este concepto vienen formuladas desde campos afines a la psicología. Por lo que sería necesario no sólo definirlo, dada la transcendencia que esta variable tiene para los menores infractores, sino adaptar instrumentos con los que poder evaluarlo, para poder adecuar la intervención de los mismos de una manera individualizada y eficaz.

Por último, cabe destacar las limitaciones propias de los análisis de datos empleados, debido a que los análisis predictivos realizados a partir de regresión no permiten la obtención de relaciones de causalidad. Por otro lado, los análisis predictivos se realizaron de manera independiente en función de los diversos grupos de variables, lo que de cara a nuevas investigaciones, podría resultar interesante la elaboración de modelos predictivos conjuntos, con el objetivo de controlar el poder explicativo de cada una de las variables que se incluyan. De manera adicional, se propone el uso de metodologías basadas en ecuaciones estructurales que permitieran obtener modelos que contribuyan a establecer las variables predictoras y moduladoras del ocio de riesgo del menor.

En cuanto a las propuestas para líneas futuras de investigación, además de subsanar las limitaciones del presente estudio y replicar los resultados obtenidos, existe un amplio campo de estudio relativo a este factor de riesgo de la conducta delictiva. Como se ha comentado con anterioridad, la ausencia de estudios específicos es significativa, por lo que estudios relativos a variables psicosociales y clínicas que caracterizan a los menores, centradas en las características de su ocio y tiempo libre, así como estudios epidemiológicos de la conducta delictiva asociada al mismo, teniendo en cuenta tanto la reincidencia delictiva y general, como la reiteración, parecen ser líneas de investigación futuras recomendables y necesarias con el fin de dar una respuesta efectiva a las lagunas que persisten en la actualidad. Asimismo, se ha llevado a cabo un estudio piloto desde el año 2011 hasta la actualidad con el Programa

Educativo y Terapéutico de Ocio y Tiempo Libre para Menores Infractores de la Comunidad de Madrid que se presenta en éste trabajo, habiéndose aplicado a menores y jóvenes internados en los C.E.M.J. El Lavadero y El Laurel. Si bien, en El Lavadero se ha aplicado a 12 menores y jóvenes en régimen semiabierto, y en el Laurel se ha llevado a cabo con 32 menores y jóvenes de ambos sexos, que cumplían medidas judiciales de internamiento en régimen semiabierto, cerrado y terapéutico por salud mental y drogas. Por lo que uno los cauces que quedan abiertos a partir del presente trabajo, como ya se ha mencionado, sería contar con un grupo control en su aplicación que permita realizar estudios de eficacia del Programa Educativo y Terapéutico de Ocio y Tiempo Libre para Menores Infractores.

De este modo, en base al amplio camino que aún queda por recorrer, de cara a desarrollar intervenciones eficaces y complementarias a los programas específicos en relación a los menores infractores, se espera que la presente tesis doctoral haya cumplido el objetivo fundamental de poder suponer una fuente de hipótesis para estudios posteriores y que el diseño de un Programa Educativo y Terapéutico de Ocio y Tiempo Libre para Menores Infractores que se propone a continuación, resulte una intervención eficaz en la materia.

Capítulo XI:

Conclusiones

La presente tesis doctoral, surge prioritariamente desde el campo de la intervención, con el objeto de proponer un abordaje educativo y terapéutico para cubrir las necesidades, déficit y carencias de los menores infractores que mantienen un ocio de riesgo. Debido a ello, se planteó en primer lugar conocer las características sociodemográficas, delictivas y clínicas de los menores, así como la relación de éstas en la reincidencia delictiva general, reincidencia delictiva, no reincidencia y reincidencia violenta para, posteriormente, poder analizar el valor predictivo de las variables mencionadas implicadas en el ocio de riesgo. El objetivo último que se persigue, por tanto, es conocer las variables susceptibles de intervención responsables del ocio de riesgo en los menores infractores, para así guiar una intervención delimitada y complementaria de los mismos que ya mantienen o han tenido intervenciones específicas según su tipología delictiva, que permita una mayor eficacia y maximización de los resultados. En base a ello, se presentan a continuación las principales conclusiones que se derivan de los diversos análisis realizados.

En relación al perfil sociodemográfico que se puede establecer en base a los datos descriptivos obtenidos, habría que destacar los siguientes puntos:

- Los menores infractores son, de manera mayoritaria, varones.
- La edad media de los menores es de 16,8 años.
- El país de origen predominante de la muestra es España.
- La mitad de los menores de la muestra no estaban escolarizados, habiendo abandonado el ámbito formativo, aun cuando por edad les correspondía, presentan un absentismo escolar frecuente y un rendimiento escolar bajo y muy bajo, así como más de la mitad han repetido algún curso, encontrándose en la primera etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, entre los menores de un rango de edad superior, la mayoría tampoco se habían incorporado al mundo laboral.
- La tipología delictiva más frecuente se da en delitos con afectación del patrimonio con mayor y menor grado de violencia.
- En cuanto a las medidas judiciales impuestas a éstos menores, la medida predominante de manera general es la Libertad Vigilada. Aunque atendiendo al grado de restricción, entre las que han conllevado internamiento, son más frecuentes el régimen semiabierto, seguido aunque con una importante diferencia del régimen cerrado. Mientras que en las medidas de medio abierto, la más

frecuente es la Libertad Vigilada, seguida de Prestaciones en Beneficio de la Comunidad.

- El tipo de familia característico de la muestra han sido familias nucleares y monoparentales. Así mismo, la mayoría proceden de familias disfuncionales, siendo más predominantes los problemas relacionales y económicos.
- En lo que se refiere al grupo de iguales, la mayoría manifiestan un grupo de relación disocial, manteniendo un papel intermedio en su relación.
- En cuanto al uso del ocio y tiempo libre, los menores suelen emplearlo en estar en la calle, plazas o parques, practicar deportes, así como en ir a pubs, bares o discotecas.
- La amplia mayoría de los menores reconocen haber consumido drogas alguna vez en la vida, aunque la frecuencia del consumo baja significativamente a mayor restricción de la medida judicial, lo mismo que ocurre con la continuidad de dicho hábito, siendo escaso el porcentaje de menores que hayan recibido tratamiento por consumo previo a la medida judicial.
- Casi la totalidad de los menores reconocen haber empleado conductas violentas en el año anterior a la evaluación y un amplio porcentaje, empleó violencia en los hechos expedientados por los que cumple la medida judicial.
- Además, en cuanto a las características de personalidad, los menores manifiestan una mayor insensibilidad, manipulación frecuente de los otros, simulación emocional y dificultad para ponerse en el lugar de los demás.

En cuanto a las variables sociodemográficas, delictivas y clínica que se relacionan con la reincidencia delictiva general, se podrían destacar los aspectos que se enumeran a continuación:

- En relación a la prevalencia de la reincidencia, existe una mayor frecuencia de no reincidencia y no reiteración, seguido de reincidencia y no reiteración, reincidencia y reiteración y, por último, no reincidencia y reiteración.
- Sólo se producen diferencias estadísticamente significativas en relación al género, cuando los menores cumplen medidas de I+LV.
- Atendiendo a la edad de los menores, son más frecuentes en cuanto a reincidencia y reiteración a los 16-17 años en las medidas de I+LV y en la franja etaria de 18-21 años en las medidas de LV.

- En relación al tipo de medida judicial que obtiene más frecuencia en cuanto a la reincidencia y reiteración, entre los menores que cumplían I+LV es la medida de régimen semiabierto, mientras que en los menores en LV es más frecuente una mayor tasa de reincidencia y reiteración en la medida de medio abierto de LV.
- Atendiendo al tipo de familia, en los menores con mayor reincidencia y reiteración, ésta es disfuncional, obteniendo la familia funcional un mayor porcentaje en los menores no reincidentes y que sí muestran reiteración.
- Los menores procedentes de una familia con nivel socioeconómico bajo, presentan una mayor reincidencia y reiteración, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes tipos de reincidencia y el nivel cultural.
- En cuanto al consumo de alcohol y drogas resultó estadísticamente significativo el consumo frecuente en el año anterior a la evaluación, siendo los menores del grupo de reincidencia y reiteración los que exhibieron mayores porcentajes.

En lo que se refiere a las variables sociodemográficas, delictivas y clínicas en la reincidencia delictiva y no reincidencia, apuntar que:

- En relación al género, no se dan diferencias estadísticamente significativas.
- En cuanto a la edad, la franja etaria de 16-17 años presenta una mayor tasa de reincidencia.
- La Libertad Vigilada es la medida con una mayor tasa de reincidencia, seguida del régimen semiabierto y por último, el cerrado. En cuanto a la duración de las medidas de internamiento, la mayor tasa de reincidencia la ofrecen menores cuyas medidas de internamiento estaban comprendidas entre los 6 y los doce meses, así, en los menores no reincidentes sus medidas tenían una duración máxima de 6 meses.
- No se producen diferencias estadísticamente significativas entre el tipo de familia, nivel socio-económico y nivel cultural entre los menores reincidentes y no reincidentes, si bien cabe destacar que los reincidentes obtienen un mayor porcentaje de familia disfuncional, nivel socioeconómico bajo y nivel cultural medio y bajo.
- Los menores reincidentes informaban de un mayor consumo de alcohol y drogas en los últimos 12 meses previos a la evaluación, que los no reincidentes.

En cuanto a la relación entre las variables sociodemográficas, delictivas y clínica en la reincidencia violenta, señalar que:

- No hubo diferencias significativas en cuanto al género, aunque como en los otros análisis sobre reincidencia, los menores varones reincidían en porcentajes mucho más elevados que las mujeres.
- En relación a la edad, los menores de 16-17 años ofrecen mayores porcentajes de reincidencia violenta, seguidos de los menores de entre 18 y 21 años.
- Los menores cuya medida judicial corresponde con internamiento en régimen semiabierto ofrecen mayores porcentajes de reincidencia violenta, seguidos de los menores con internamiento en régimen cerrado.
- No se dan diferencias estadísticamente significativas en el tipo de familia, pudiendo solamente señalar que la familia funcional es predominante en menores no reincidentes.
- Los reincidentes violentos proceden de familias con nivel socioeconómico bajo, no siendo significativo el nivel cultural.
- Los menores con reincidencia violenta manifiestan en mayor medida consumo de alcohol y drogas en el último año previo a la evaluación.
- Los grupos de relación de los menores con reincidencia violenta, se corresponden con un grupo de iguales de referencia mayoritariamente disocial, seguido de grupos de carácter violento/disocial.

En relación a la reincidencia delictiva general y violenta en función del IGI-J, cabe destacar que:

- Ambos tipos de reincidencia correlacionan de manera estadísticamente significativa tanto con la Escala total, como con los 8 factores que componen el IGI-J, obteniendo mayor correlación la reincidencia delictiva general que la reincidencia violenta tanto con la Escala Total, como en cada uno de los 8 factores.
- En la reincidencia delictiva general, las correlaciones más elevadas se da entre: Historial Delictivo, Grupo de Iguales, Consumo de sustancias y Actitudes/Creencias.

- En la reincidencia violenta, las correlaciones más elevadas se obtuvieron en: Historial Delictivo, Grupo de iguales y Consumo de drogas.
- El Factor Ocio/Diversión, también correlaciona en mayor medida con la reincidencia delictiva general, que con la violenta, aunque con ésta última también es destacable.
- Al comparar la reincidencia delictiva general y la no reincidencia con los factores del IGI-J, se obtienen diferencias estadísticamente significativas, puntuando una media más alta en los 8 factores los reincidentes delictivos generales que los no reincidentes.

Por último, en cuanto a los resultados relativos a las variables de riesgo en relación al ocio de riesgo de los menores, sería importante destacar que, aquellas variables que demostraron tener un poder predictivo dentro de las categorías analizadas (factores de riesgo contemplados como predictores de la conducta y reincidencia delictiva, número de amigos y tipo de relación con sus iguales y familiares, características del grupo de iguales de referencia, uso del ocio y tiempo libre, mantenimiento del tipo de ocio antes y después de la medida judicial, tanto el delito como el consumo se realiza con su grupo de iguales de referencia, composición familiar, familia disfuncional, estilo educativo de la madre, nivel socioeconómico y nivel cultural familiar, adherencia al proceso formativo, empleo de comportamientos disruptivos, motivación por el mundo laboral, conductas adictivas y personalidad y conducta desadaptada), fueron las siguientes:

- Los factores de riesgo relativos a pautas educativas parentales desadaptadas, consumo de sustancias tóxicas por parte del menor, poca adherencia a la educación/empleo, grupo de iguales delincuentes y modelos negativos, actitudes, valores y creencias antisociales.
- Mala relación entre el menor y los progenitores.
- El menor se relaciona con un grupo de iguales poco normalizado.
- El carácter disocial del grupo de relación del menor.
- El menor se relaciona con un grupo de iguales violento.
- El grupo de iguales del menor es de una edad superior a la suya.
- El menor carece de relaciones estables, se encuentra aislado socialmente.
- El menor ocupa su ocio y tiempo libre estando en la calle, en una plaza o parque haciendo botellón o fumando porros.

- El tipo de ocio actual coincide con el anterior a la medida judicial.
- El menor consume acompañado de su grupo de relación.
- El menor posee una escasa presencia de una composición familiar nuclear.
- El menor procede de una familia disfuncional caracterizada por factores económicos.
- La familia del menor se caracteriza por su disfuncionalidad delincencial.
- El menor está inmerso en una familia disfuncional por violencia ascendente.
- El menor proviene de un núcleo familiar disfuncional por maltrato físico por parte de los progenitores hacia los descendientes.
- El estilo educativo inadecuado por parte de la progenitora.
- El nivel socioeconómico familiar es bajo.
- El menor presenta absentismo escolar
- El rendimiento escolar del menor es bajo.
- El menor presenta peleas con los iguales.
- El menor manifiesta faltas de respeto a los adultos.
- El menor muestra tendencia a abandonar voluntariamente un trabajo.
- El menor ha recibido tratamiento previo por consumo de sustancias tóxicas.
- El menor ha empleado violencia física o amenazas en los hechos motivo del expediente judicial.
- El menor muestra manipulación de los otros en sus relaciones con los demás.
- El menor revela insensibilidad entre sus características de personalidad.

Por tanto, es fundamental considerar algunas de las implicaciones que se derivan de las conclusiones señaladas.

En primer lugar, el presente trabajo pone de manifiesto la idoneidad de elaborar programas educativos y terapéuticos multicomponentes en los que se consideren diversas áreas de intervención, que como se ha comprobado, explican el ocio de riesgo de los menores.

En este sentido, la inclusión en los programas educativos y terapéuticos de factores cognitivos, emocionales y conductuales, así como la posibilidad de contemplar, evaluar e intervenir, si se considera necesario, en áreas como el consumo de sustancias tóxicas, importancia de la adherencia al proceso formativo, habilidades sociales de relación, es decir, estrategias de relación tanto intrafamiliares, como sociales, en lo referente al grupo de iguales y a las figuras de autoridad, así como aumentar el nivel de consciencia acerca de lo que

implica el grupo de relación dentro del estilo de vida personal. En definitiva, en cuanto al ocio y tiempo libre de riesgo, aumentar la percepción de las consecuencias del mismo, centrándonos en el contexto y tipo de actividades que se desarrollan, así como el nivel de estructuración y organización de las mismas, parecen ser cuestiones fundamentales.

Además, como resulta congruente, los resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar un abordaje integral del problema, incluyendo no sólo aspectos que tienen que ver con la organización y estructuración de las actividades que se desarrollan en el ocio, sino con carencias en cuanto a competencia social y habilidades del menor, así como aumentando el nivel de conciencia acerca de las influencias de los otros en sus acciones, así como sus propias emociones, pueden determinar la implicación en ciertas conductas de riesgo dentro del ocio y tiempo libre.

Más concretamente, parece esencial, por la influencia que cada variable ha demostrado en el desarrollo del ocio de riesgo, la intervención en diversas áreas, como son la cognitiva, donde se analizarían los pensamientos asociados tanto a un ocio de riesgo como protector, analizando la justificación que se da de determinadas actividades desestructuradas y desorganizadas, antisociales o no y que conllevan un ocio de riesgo; en el área emocional, en las que se considerarían cuáles de ellas están asociadas a un ocio de riesgo y cómo conseguir las mismas emociones positivas con un ocio protector; y el área conductual, en la que se intervendría acerca de aportar habilidades de autocontrol e impulsividad, así como poner en práctica actividades que tengan que ver con una prevención del riesgo, tanto delictivo, como de conductas que conlleven consecuencias negativas en su desarrollo personal.

De forma complementaria, y en base a los análisis realizados en relación a la reincidencia delictiva general, reincidencia delictiva y no reincidencia, así como reincidencia violenta, durante todo el programa, se interviene acerca de las variables que han resultado estadísticamente significativas, como son del consumo de drogas, la influencia que el grupo de iguales y las personas del entorno tienen en las actividades que se eligen y llevan a cabo en el ocio y tiempo libre, el empleo de la violencia sus consecuencias, así como el aumento de la empatía acerca de las consecuencias que conlleva afectar el patrimonio de los demás.

Por todo ello, a continuación se presenta de manera resumida una propuesta de un Programa Educativo y Terapéutico de Ocio y Tiempo Libre para Menores Infractores realizado por José Luis Graña Gómez y la autora de la presente tesis doctoral, en el que se trata de contemplar todas las variables delictivas y clínicas que han demostrado su relevancia

en la presente investigación (véase Tabla 11.1). La propuesta que se plantea toma como referencia los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, así como otros aspectos relevantes que la literatura científica señala y que enriquecen el contenido educativo y terapéutico a desarrollar con este tipo de población.

A continuación, se presentan las líneas más importantes en relación a la intervención e individualización en la implementación del programa de ocio y tiempo libre para menores infractores:

- Tipología de las actividades y clasificación en ocio de riesgo y ocio protector.
- Nivel de riesgo derivado de dichas actividades para el menor, teniendo en cuenta tanto el carácter delictivo, como para su desarrollo personal y competencia social.
- Componentes cognitivos relacionados con la justificación de las actividades que conllevan riesgo, así como si hay empleo de violencia en las mismas y analizar las consecuencias que se podrían derivar tanto para él mismo, como para los demás.
- Componentes emocionales relacionados con las actividades de riesgo, fomentando el nivel de conciencia acerca de reemplazar dichas actividades por otras protectoras que conlleven esas mismas emociones.
- Componentes conductuales relacionados con habilidades de relación, solución de problemas y empleo de la conducta violenta como única vía de resolución de conflictos y dominancia dentro de las relaciones interpersonales.
- Consumo de sustancias tóxicas como vía de uso del ocio y tiempo libre.
- Contexto donde se desarrollan actividades desorganizadas y desestructuradas y que fomenta ociosidad y estilo de vida de bajo coste personal.
- Fomentar la importancia de adherirse al proceso formativo reglado o al mundo laboral, como vía para llevar a cabo un estilo de vida prosocial.
- Aumentar el nivel de conciencia acerca de la influencia que el grupo de iguales puede tener en las conductas y actividades que se llevan a cabo en el ocio y tiempo libre.
- Evaluación e intervención de creencias antisociales arraigadas en el ocio y tiempo libre.

Una vez obtenida la información sobre las variables enumeradas, se recomienda la adaptación individualizada de la misma a la siguiente propuesta de intervención (véase Tabla 11.1).

Tabla 11.1. Propuesta de un Programa Educativo y Terapéutico de Ocio y Tiempo libre para menores infractores

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA MENORES INFRACTORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
MÓDULO 1: MI EXPERIENCIA PERSONAL EN EL USO DEL OCIO Y DEL TIEMPO LIBRE	
Objetivo general	- Toma de conciencia sobre cómo se distribuye y a qué se dedica el tiempo libre y de ocio, estableciéndose un perfil o idea general sobre el ocio de los participantes
Sesión 1: ¿Cómo utilizo el ocio en mi vida habitual?	
Objetivos específicos	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer a qué dedican el tiempo libre los participantes, qué actividades realizan y cuáles son las posibilidades de las que disponen. • Establecer cuáles son sus preferencias a la hora de elegir actividades y lugares donde desarrollarlas y pasar el tiempo de ocio. • Presentación del programa.
Sesión 2: Pensamientos y emociones asociados al uso del ocio	
Objetivos específicos	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar pensamientos y emociones asociadas a la realización de actividades de ocio, ya sean de riesgo o protector. • Tomar conciencia de la existencia de actividades de riesgo frente a otras alternativas más saludables. • Analizar consecuencias tanto a corto como a largo plazo.

MÓDULO 2: OCIO DE RIESGO Y PROTECTOR

Objetivos generales

- **Analizar el perfil general de ocio en función de la tipología riesgo/protección, con el fin de tomar conciencia sobre el tipo de actividades de ocio que se realizan, así como sus consecuencias.**
- **Favorecer el interés por actividades de ocio saludables alternativas a cualquier tipo de actividad de riesgo.**

Sesión 1: Mis perfiles de ocio de riesgo y ocio protector

Objetivos específicos

- Ser conscientes de aquellas actividades de ocio que se relacionan con el desarrollo de comportamientos delictivos o de riesgo.
- Al mismo tiempo, conocer que existen otras actividades de ocio alternativas saludables.
- Elaborar un perfil de ocio de riesgo y de ocio protector, para que los participantes conozcan detalladamente cómo son las actividades que ocio que realizan y, en consecuencia, cuál es el riesgo que sufren al realizar las mismas.

Sesión 2: Ocio de riesgo

Objetivos específicos

- Aprender a identificar aquellos estímulos que pueden propiciar conductas relacionadas con el ocio de riesgo.
- Detectar los estados emocionales y pensamientos implicados en la realización de este tipo de conductas de riesgo.
- Concienciar a los participantes de los elementos implicados en el ocio de riesgo y cómo se encadenan para dar lugar a comportamientos peligrosos o perjudiciales.

Sesión 3: Ocio protector

Objetivos específicos

- Aprender a identificar aquellos estímulos que pueden propiciar actividades de ocio más saludables.
- Detectar las emociones y pensamientos implicados en la realización de este tipo de actividades.
- Concienciar a los participantes de los elementos implicados en el ocio protector y de la obtención de sensaciones parecidas a las obtenidas con el ocio de riesgo.

MÓDULO 3: PLANIFICACIÓN DE UN OCIO SALUDABLE

Objetivos generales	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar estrategias de planificación del tiempo libre para afrontar el día a día de forma óptima y adaptativa, intentando prevenir posibles recaídas. - Fomentar un ocio no relacionado con el consumo de alcohol, drogas, con actividades antisociales o situación peligrosa o perjudicial para la salud.
----------------------------	---

Sesión 1: Planificación de una semana de ocio saludable

Objetivos específicos	<ul style="list-style-type: none"> • Conseguir que los participantes se interesen por actividades de ocio saludables, que no realizan pero les gustaría realizar. • Evitar la realización de actividades relacionadas con el ocio de riesgo, fomentando actividades saludables y atractivas. • Identificar actividades de ocio saludable por parte de los participantes. • Tomar conciencia de una buena planificación del tiempo, de su ocio y tiempo libre. • Desarrollar las habilidades y recursos necesarios para llevar a cabo un ocio atractivo y compatible con la norma social, alejado de espacios que se fomentan o facilitan actividades de riesgo.
------------------------------	--

Sesión 2: Desarrollo de emociones positivas asociadas a un ocio protector

Objetivos específicos	<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar el interés por actividades de ocio saludables. • Tomar conciencia sobre la posibilidad de experimentar emociones positivas mediante la realización de un ocio protector. • Conseguir que las actividades saludables comiencen a formar parte de la cotidianidad de los participantes.
------------------------------	--

Sesión 3: Consolidación del hábito de ocio protector

Objetivos específicos	<ul style="list-style-type: none"> • Reafirmar las emociones positivas asociadas al nuevo hábito de ocio desarrolladas en la sesión anterior. • Dotar a los participantes de un repertorio de estrategias que potencien la ejecución del nuevo hábito de ocio. • Reforzar la ocurrencia del nuevo hábito mediante pensamientos alternativos asociados al mismo.
------------------------------	--

Sesión 4: Generalización y prevención de recaídas

Objetivos específicos

- Consolidar los hábitos de ocio saludables adquiridos durante el programa.
- Aprender cómo aplicar dichos hábitos a diversas situaciones de la vida cotidiana.
- Aprender estrategias de afrontamiento ante el deseo o pensamientos de una nueva recaída.
- Aprender estrategias de superación si se ha producido una recaída.

Por tanto, se pretende guiar el abordaje de una intervención en el ocio de riesgo que suelen llevar a cabo la mayoría de menores que cometen actos delictivos, siendo el objetivo último de esta guía de intervención resaltar especialmente la necesidad de considerar factores de riesgo dinámicos asociados y que conllevan un mayor peso ya no sólo en el ocio de riesgo, sino en las conductas delictivas del menor, considerando así que la intervención debe ajustarse a las necesidades del menor. Por lo que el Programa también permite intervenir con menores que aun habiendo cometido actos delictivos, sino llevan a cabo un ocio de riesgo, se pueda reforzar un ocio protector.

Referencias

Bibliográficas

- Abel, M. (2002). Las medidas del nuevo Derecho penal juvenil (Consideraciones en torno al artículo 7 de la Ley penal del Menor). *Actualidad penal*, 6, 105-164.
- Abel, M. (2003). Los menores, el principio acusatorio y la proporcionalidad penal en la Ley Orgánica 5/2000. *Actualidad Penal*, 43, 1071-1099.
- Abel, M. (2004). La reforma de 25 de noviembre de 2003 en materia de principio acusatorio y la proporcionalidad garantizada por la Ley penal del menor. *Estudios penales y criminológicos*, 24, 7-57.
- Aburto, M., Esteban C., Quintana, J. M., Bilbao, A., Moraza, F. J. y Capelastegui, A. (2007). Prevalencia del consumo de tabaco en adolescentes. Influencia del entorno familiar. *Anales de Pediatría*, 66, (Supl. 4), 357-366.
- Achenbach, T. M. y McConaughy, S. (1997). *Empirically based assessment of child and adolescent psychopathology: Practical applications* (2nd ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Achenbach, T. M. y Rescorla, L. A. (2001). *Manual for the ASEBA school age forms and profiles*. Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for Children, Youth & Families.
- Achenbach, T. M. (1991). Comorbidity in child and adolescence psychiatry: Categorical and quantitative perspectives. *Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology*, 1, 272-278.
- Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor (2014). Memoria 2013. Doi: <http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM018086.pdf>
- Agnew, R. (1990). The origins of delinquent events: An examination of offender accounts. *Journal of Research in Crime and delinquency*, 27, 267-294.
- Agnew, R. y Petersen, D. M. (1989). Leisure and delinquency. *Social problems*, 36, 332-350.
- Aguinaga, R., y Comas, D. R. (1997). *Cambio de hábitos en el uso del tiempo: Trayectorias temporales de los jóvenes españoles*. Madrid: Instituto de la Juventud.
- Akers, R. L. (1977). *Deviant behavior: A social learning approach*. Belmont, California: Wadsworth.
- Akers, R. L. (2006). Aplicaciones de los principios del aprendizaje social. Algunos programas de prevención y tratamiento de la delincuencia. En J. L. Guzmán Dálbora y A. Serrano Maíllo (Eds.), *Derecho penal y criminología como fundamento de la política criminal: estudios en homenaje al profesor Alfonso Serrano Gómez* (pp. 1117-1138). Madrid: Dykinson.
- Akers, R. L. y Sellers, C. S. (2004). *Criminological theories: Introduction, evaluation and application*. Los Ángeles (Estados Unidos): Roxbury Publishing Company.

- Akers, R. L. (1997). *Criminological theories*. Los Ángeles (Estados Unidos): Roxbury Publishing Company.
- Alasteuy, M. C. (2002b). Alternativas al procedimiento y a la ejecución de las medidas en la Ley Orgánica 5/2000, en M. A. Boldova (Ed.), *El Nuevo Derecho Penal juvenil española*, (pp. 199-217). Zaragoza: Revista Aragonesa de Administración Pública.
- Alcázar, M. I., Bouso, J. C. y Verdejo, A. (2015). Análisis descriptivo de la actividad del Equipo Técnico de Fiscalía de Menores de Toledo. Años 2001 al 2012. *Anuario de Psicología Jurídica*, 25, 97-106.
- Allen, M., Donolwe, W., Griffin, A., Ryan, D., y Turner, M. (2003). Comparing the influence of parents and peer son choice to use drugs. *Criminal Justice and Behavior*, 30, 163-186.
- Alonso, A. (2005). La minoría de edad penal, *La Ley penal*, Núm. 18. Madrid: Editorial La Ley.
- Alonso, C. y Del Barrio, V. (1994). Empleo del tiempo libre y consumo de drogas en escolares. *Revista de Psicología Social*, 9, 71-93.
- Álvarez, F. y Hidalgo, M. (1997). Desarrollo moral y justicia de menores: pautas educativas para favorecer el razonamiento moral desde la justicia. En *Zerbitzuan Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria*. *Revista de Servicios Sociales*, 31, 63-69.
- Álvarez-Monteserín, M. A., Martínez Arias, R., González, M., Chacón, F., Rojo, C., Rubio, A.,... Delgado P. (1999). Risk factors in adolescence. *Psychology in Spain*, 3, 98-103.
- Andrés-Pueyo, A. y Echeburúa, E. (2010). Valoración del riesgo de violencia: instrumentos disponibles e indicaciones de aplicación. *Psicothema*, 22, 403-409.
- Andrews, D. A. (1982). *A personal, interpersonal and community-reinforcement perspective on deviant behaviour (PIC-R)*. Toronto: Ministry of Correctional Services.
- Andrews, D. A. y Bonta, J. (1994). *The psychology of criminal conduct*. Anderson (1ª ed.). Cincinnati: Anderson.
- Andrews, D. A. y Bonta, J. (1995). *The Level of Service Inventory-Revised*. Toronto: Multi Health Systems.
- Andrews, D. A. y Bonta, J. (2003). *The Psychology of Criminal Conduct* (3ª ed.). Cincinnati: Anderson
- Andrews, D. A. y Bonta, J. (2003). *The psychopathy checklist: Youth version-manual*. Toronto: Multi-Health Systems.
- Andrews, D. A. y Bonta, J. (2006). *The psychology of criminal conduct* (4ª ed.). Cincinnati: Anderson.

- Andrews, D. A., Bonta, J., y Wormith, J. S. (2004). *Level of Service/Case Management Inventory (LS/CMI): An offender assessment system. User's manual*. Toronto, Ontario: Multi-Health Systems.
- Andrews, D. A., Bonta, J., y Wormith, J. S. (2006). The recent past and near future of risk and/ or need assessment. *Crime and Delinquency*, 52, 7-27.
- Andrews, D. A., Kiessling, J. J., Mikus, S. y Robinson, D. (1986). The construct validity of interview-based risk assessment in corrections. *Canadian Journal of Behavioural Science*, 18, 460-470.
- Andrews, D. A., Wormith, J. S. y Kiessling, J. J. (1985). *Self reported crime propensity and crime behavior threats to the validity of assesments and personality*. Ottawa, Canada: Ministry of the Solicitor General of Canada.
- Andrews, D., Zinger, I., Hoge, R. D., Bonta, J., Gendreau, P. y Cullen, F. T. (1990). Does correctional treatment work? A clinically relevant and psychologically informed meta-analysis. *Criminology*, 28 (Supl. 3), 369-404.
- Andrews, J. A., Tildesley, E., Hops, H., y Li, F. (2002). The influence of peers on young adult substance use. *Health Psychology*, 21, 349-357.
- Aparicio, P. (2000). Diligencias de instrucción restrictivas de derechos fundamentales, competencia del Juez de menores en el ámbito de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores. *Revista del Poder Judicial*, 137-158.
- Apter, M. J. (1992). *The dangerous edge: The psychology of excitement*. New York: The Free Press.
- Arce, R. y Fariña, F. (2007). Teorías de riesgo de la delincuencia. Una propuesta integradora. En F. J. Rodríguez y C. Becedóniz (Coords.), *El menor infractor. Posicionamientos y realidades* (pp. 37-46). Oviedo: Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias.
- Arce, R., Fariña, F. y Vázquez, M. J. (2011). Grado de competencia social y comportamiento antisociales, delictivos y no delictivos en adolescentes. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 43, 473-486.
- Arce, R., Fariña, F., Seijo, D., Novo, M. y Vázquez, M. (2005). Contrastando los factores de riesgo y protectores del comportamiento inadaptado en menores: Implicaciones para la prevención. En Centro de Investigación y Documentación Educativa (Ed.), *Premios nacionales de investigación educativa 2004* (pp. 17-50). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
- Arce, R., Novo, M., Fariña, F. y Vázquez, M. J. (2009). ¿Media la inteligencia emocional en el comportamiento antisocial de los menores? Un estudio de campo. En P. Fernández-Berrocal, N. Extremera, R. Palomera, D. Ruíz, J. M. Salguero y R. Caballero (Eds.), *Avances en el estudio de la inteligencia emocional* (pp. 421-425). Santander: Fundación Marcelino Botín.

- Arce, R., Seijo, D., Fariña, F. y Mohamed-Mohand, L. (2010). Comportamiento antisocial en menores: Riesgo social y trayectoria natural de desarrollo. *Revista Mexicana de Psicología*, 27, 127-142.
- Arenas, C., Legaza, A. I. y Muñoz, J. (2007). *Informe de evaluación del impacto social del programa Abierto Hasta el Amanecer*. Gijón: Instituto Asturiano de la Juventud. Disponible en: www.abiertohastaelamanecer.com.
- Bailey, S. L., Flewelling, R. L. y Rachal, J. V. (1992). Predicting continued use of marijuana among adolescents: The relative influence of drug-specific and social context factors. *Journal of Health and Social Behavior*, 33, 51-56.
- Ballesteros, J. C., De Asís, J. F., Rodríguez, M. A. y Megías, E. (2009). *Ocio (y riesgos) de los jóvenes madrileños*. Madrid: Fundación de Ayuda contra la Drogadicción/ Obra Social Caja Madrid.
- Bandura, A. (1969). Social learning theory of identificatory processes. En D. A. Goslin y D. C. Glass (Eds.), *Handbook of socialization theory and research* (pp. 213-262). Nueva Jersey: Prentice Halls.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84, 191-215.
- Bandura, A. (1982). *Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad*. Madrid: Alianza.
- Bandura, A. (1984). *Teoría del aprendizaje social*. Madrid: Espasa-Calpe.
- Bandura, A. y Walters, R. (1983). *Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad* (7ª ed.) Madrid: Alianza Universidad (original de 1963).
- Bandura, A., Barbarelli, C., Caprara, V., y Pastorelli, C. (1996). Mechanism of moral disengagement in the exercise of agency. *Journal of Personality and Social Psychology*, 2, 364-374.
- Barbaree, H. E. y Marshall, W. L. (2006). An introduction to the Juvenile Sex Offenders. En H. E. Barbaree y W. L. Marshall, *The Juvenile Sex Offenders* (2ª Ed.) (pp. 1-18). Nueva York: The Guilford Press.
- Barlow, D. H. y Durand, V. M. (2001). *Psicología anormal: Un enfoque integral* (2ª ed.). México: Thomson Learning.
- Barnes, J. y O’Gorman, N. (1995). A descriptive study of juvenile delinquents. *Irish Journal of Psychological Medicine*, 12, 53-56.
- Barrenechea, J. J. (1972). Actuación Internacional contra la Delincuencia Juvenil, en VV.AA.: *Delincuencia Juvenil, Estudio de su problemática en España*. Colección Estudios Número 14, Madrid: Ministerio de la Gobernación.

- Barriga, A. Q., Gibbs, J. C., Potter, G. y Liao, A. K. (2001). *How I Think (HIT) Questionnaire Manual*. Champaign, IL: Research Press.
- Barriga, A. Q., Landau, J. R., Stinson, B. L., Liao, A. K. y Gibbs, J. C. (2000). Cognitive distortion and problema behaviors in adolescents. *Criminal Justice and Behavior*, 27, 36-56.
- Barriga, A. Q., Morrison, E. M., Liao, A. K. y Gibbs, J. C. (2001). Moral cognition: Explaining gender differences in antisocial behavior. *Merrill-Palmer Quarterly* 47, 532-562.
- Barriuso, M. (2003). *Drogas ilícitas, vida recreativa y gestión de riesgos. Estudio-diagnóstico de necesidades de intervención en prevención de riesgos en ámbitos lúdico-festivos de la CAPV*. Vitoria-Gasteiz: Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco.
- Bartolome, R., Montañes, M., Rechea, C y Montañés, J. (2009). Los factores de protección frente a la conducta antisocial. ¿Explican las diferencias en violencia entre chicas y chicos?. *Revista Española de Investigación Criminológica*, 3 (7), 1-15.
- Batson, C. D., Fultz, J. y Schoenrade, P. A. (1987). Distress and empathy: Two qualitatively distinct vicarious emotions with different motivational consequences. *Journal of Personality*, 55, 19-39.
- Battin, S. R., Hill, K. G., Abbott, R. D., Catalano, R. F. y Hawkins, J. D. (1998). The contribution of gang membership to delinquency beyond delinquent friends. *Criminology*, 36, (Supl. 8), 93-115.
- Bauman, K. E., Carver, K. y Gleiter, K. (2001). Trends in parent and friend influence during adolescent: The case of adolescent cigarette smoking. *Addictive Behaviors*, 26, 349-361.
- Baumeister, R. F., Bushman, B. J. y Campbell, W. K. (2000). Self- esteem, narcissism, and aggression: Does violence result from low self. Esteem or for threatened egotism?. *Current Directions in Psychological Science*, 9, 26-29.
- Beccaria, C. (1994). *De los delitos y de las penas*. Barcelona: Altaya.
- Bechtel, K., Lowenkamp, C. T. y Latessa, E. (2007). Assessing the risk of re-offending for juvenile offenders using the youth level of service/case management inventory. *Journal of Offender Rehabilitation*, 45 (Supl. 3), 85-108.
- Becker, J. V. y Johnson, R. (2001). Treating juvenile sex offenders. En J. B. Ashford, B. D. Sales y W. H. Reid, *Treating adult and juvenile offenders with special needs* (pp. 273-289). Washington, D.C: American Psychological Association.
- Becoña, E. (2000). *Los adolescentes y el consumo de drogas*. Papeles del Psicólogo, 77, 25-32.

- Bellis, M. A., Hale, G., Bennet, A., Chaudry, M., y Kilfoyle, M. (2000). Ibiza al descubierto: cambios en el consume de drogas y en el comportamiento sexual de los jóvenes que pasan sus vacaciones en lugares conocidos internacionalmente por su vida nocturna. *Adicciones*, 12, 571-578.
- Benítez, L. y Justicia, F. (2006). El maltrato entre iguales: descripción y análisis del fenómeno. *Revista electrónica de Investigación Psicoeducativa*, 4, 151-170.
- Bennett, T. y Hallowaty, K. (2004). Gang membership, drugs and crime in the UK. *Journal of Criminology*, 44 (3), 305-323.
- Berga, A. (2005). Adolescència femenina i risc social. *Revista d'intervenció socioeducativa*, 29, 61-76.
- Berkowitz, L. (1996). *Agresión: Causas, consecuencias y control*. Bilbao: Desclée de Brouwer.
- Bernuz, M. J. (2005). Justicia de menores española y nuevas tendencias penales. La regulación del núcleo duro de la delincuencia. *Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 7, (12), 1-23. Doi: <http://criminnet.ugr.es/recpc/07/recpc07-12.pdf>
- Bernuz, M. J., Fernández, E. y Pérez, F. (2007). Menores de 14 años que cometen delitos. *Boletín Criminológico del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología*, 97, 1-4.
- Bertalanffy, L. (1993). *Teoría General de los Sistemas*. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
- Betchel, K., Lowenkamp, C. y Latessa, E. (2007). Assessing the predictive validity of the youth level of service/case management inventory. *Journal of Offender Rehabilitation*, 45, 58-108.
- Binder, A. (1988). Juvenile delinquency. *Annual Review of Psychology*, 39, 253-282.
- Bjerregaard, B. y Lizotte, A. (1995). Gun Owner Ship and gang membership. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 86, 37-58.
- Bjerregaard, B. y Smith, C. (1993). Gender differences in gang participation. Delinquency and substance use. *Journal of Quantitative Criminology*, 9, 329-355.
- Blackburn, R. (1994). *The psychology of criminal conduct: Theory, research and practice*. Chichester, Reino Unido: Wiley.
- Blackburn, R. (1994). *The psychology of criminal conduct: Theory, research and practice*. Chichester, Reino Unido: Wiley.
- Blair, J., Sellars, C., Strickland, I., Clark, F., Williams, A. y Smith, M. (1996). Theory of mind in the psychopath. *The Journal of Forensic Psychiatry*, 7, 15-25.

- Blanco, J. A. (2008). Responsabilidad Penal del Menor: Principios y Medidas Judiciales Aplicables en El Derecho Penal Español. *Revista de Estudios Jurídicos*, Núm. 8.
- Blumstein, A., Cohen, J., Rohen, J. A., y Visser, C. A. (1986). *Criminal careers and 'career criminals'*. Washington, DC, National Academy Press.
- Blumstein, A., Farrington, D. P. y Moitra, S. (1985). Delinquency careers: Innocents, desisters and persisters. En M. Tonry y N. Morris (Eds.), *Crime and justice* (pp. 187-219). Chicago: University of Chicago Press.
- Boden, J. M., Fergusson, D. M. y Horwood, L. J. (2007). Self. Esteem and violence: testing links between adolescent self-esteem and later hostility and violent behavior. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 42, 881-891.
- Boldova, M. A. (2002). Principales aspectos sustantivos del nuevo Derecho Penal Juvenil español, en *La Ciencia del Derecho Penal ante el nuevo siglo* (pp.1553-1574). Libro Homenaje al Profesor Doctor Don José Cerezo Mir, Madrid.
- BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, Número 11, 13 de enero de 2000. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero de responsabilidad penal de los menores.
- BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, Número 290, 5 de diciembre de 2006. Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre de responsabilidad penal de los menores.
- Bonta, J., Law, M. y Hanson, K. (1998) The prediction of Criminal and Violent Recidivism among mentally disordered offenders: a meta analysis. *Psychological Bulletin*, 123, (Supl. 2), 123-142.
- Bootzin, R., Acocella, J. y Alloy, L. (1993). *Abnormal psychology: Current perspectives*. New York: McGraw Hill.
- Borden, L. M., Donnermeyer, J. F. y Scheer, S. D. (2001). The influence of extra-curricular activities and peer influence on substance use. *Adolescent and Family Health*, 2, 12-19.
- Borum, R., Bartel, P. y Forth, A. (2003). *Structured Assessment of Violence Risk in Youth. Professional Manual*. Oxford: Pearson.
- Borum, R., Bartel, P. y Forth, A. (2004). *Manual for the Structured Assessment of Violence Risk in Youth* (SAVRY). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
- Bothamley, J. (2002). *Dictionary of Theories*. Kewstoke, Avon (Estados Unidos): Visible Ink Press.
- Botija, M. M. (2011). Herramientas útiles en Trabajo Social: Instrumentos de valoración del riesgo en menores y jóvenes con medidas judiciales. *Documentos de Trabajo Social*, 49, 2173-8246.

- Bourgon, G. y Armstrong, B. (2005). Transferring the principles of effective treatment into a “Real World” prison setting. *Criminal Justice and Behavior*, 32, 3-25.
- Brackett, M., Mayer, J. D. y Warner, R. M. (2004). Emotional intelligence and the prediction of behavior. *Personality and Individual Differences*, 36, 1387-1402.
- Bravo, A., Sierra, M. J. y del Valle, J. (2007). *Evaluación de resultados de las medidas de responsabilidad penal juvenil en Asturias*. Asturias: Gobierno del principado de Asturias.
- Bravo, A., Sierra, M. J. y Del Valle, J. (2009). Evaluación de resultados de la ley de responsabilidad penal de menores. Reincidencia y factores asociados. *Psicothema*, 21, 615-521.
- Brendgen, M., Vitaro, F. y Bukowski, W. M. (2000). Deviant Friends and early adolescents’ emotional and behavioral adjustment. *Journal of Research on Adolescence*, 10, 173-189.
- Brendgen, M., Vitaro, F., Turgeon, L. y Poulin, F. (2002). Assessing aggressive and depressed children’s social relations with classmates and Friends: A matter of perspective. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 30, 609-624.
- Brendgen, M., Vitaro, F., Turgeon, L., Poulin, F. y Wanner, B. (2004). Is there a dark side of positive illusions? Overestimation of social competence and subsequent adjustment in aggressive and nonaggressive children. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 32 (Supl. 3), 305-320.
- Bringas, C., Rodríguez, F. J., Gutiérrez, E. y Pérez, B. (2010). Socialización e historia penitenciaria. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 1, 101-116.
- Bringas, C., Rodríguez, L., López-Cepero, J., Rodríguez, F. J. y Estrada, C. (2012). Consumo de drogas y conducta delictiva: Análisis diferencial de la heroína y la cocaína en la trayectoria infractora. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 3, 39-54.
- Brody, G. H. y Forehand, R. (1993). Prospective associations among family form, family processes, and adolescents’ alcohol and drug use. *Behaviour research and therapy*, 31, (Supl. 6), 587-593.
- Brook J. S., Brook D. W., Gordon A. S., Whiteman M. y Cohen, P. (1990). The psychosocial etiology of adolescence drug use: A family interactional approach. *Genetic, Social and general Psychology Monographs*, 116, 111-267.
- Brook, J. S., Whiteman, M., Finch, S. y Cohen, P. (1995). Aggression, intrapsychic distress, and drug use: Antecedent and intervening processes. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 34, 1076-1084.
- Brown, B. B., Dolcini, M. M. y Leventhal, A. (1997). Transformations in peer relationships at adolescence: implications for health-related behavior. En J. Schulenberg, J. L.

- Maggs y K. Hurrelmann (Eds.), *Health Risks and Developmental Transitions during Adolescence* (pp. 161-189). Nueva York: Cambridge University Press.
- Bueno, F. (2001). "Aspectos sustantivos de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores", *Icade*, 53, 61-75.
- Bui, K. V. T., Ellickson, P. L. y Bell, R. M. (2000). Cross-lagged relationships between adolescent problem drug use, delinquent behavior, and emotional distress. *Journal of Drug Issues*, 30, 283-303.
- Burguess, E. W. (1928). Factors determining success or failure on parole. En A. A. Bruce, A. J. Harno, E. W. Burgess y A. J. Landesco (Eds.), *The workings of the indeterminate sentence law and the parole system in Illinois*, (pp. 221-234). Springfield, IL: State Board of Parole.
- Burguess, R. L. y Akers, R. L. (1966). *A differential association-reinforcement theory of criminal behavior*. *Social problems*, 14, 128-147.
- Burman, M., Bradshaw, P., Hutton, N., McNeil, F. y Munro, M. (2006). The End of an Era? – Youth Justice in Scotland. En J. Junger-Tas, S. H. Decker (Eds.), *International Handbook of Juvenile Justice*. New York: Springer.
- Caballero, M. A. (2014). Menores infractores y medidas judiciales. *Educación y Futuro Digital*, 10, 26-44.
- Caballo, M. B., Caride, J. A. y Meira, P. A. (2011). El tiempo como contexto y pretexto educativo en la sociedad red. *Intervención Socioeducativa*, 47, 11-24.
- Cain, M. (2000). *An Analysis of Juvenile Recidivism*. Doi: <http://www.aic.gov.au/publications/rpp/ch2.pdf>
- Cairns, R. B., Cadwallader, T. W., Estell, D. y Neckerman, H. J. (1997). Groups to gangs: Developmental and criminological perspectives and relevance for prevention. En D. Stoff, J. Breiling y J. Maser (eds.), *Handbook of antisocial behavior* (pp.194-205). Nueva York: Wiley.
- Cairns, R. B., Leung, M. y Cairns, B. D. (1995). Social networks over time and space in adolescence. En L. J. Crockett y A. C. Crouter (Eds.), *Pathways through adolescence: Individual development in relation to social contexts* (pp. 35-36). Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Calafat, A., Fernández, C. Juan, M. y Becoña, E. (2007) Vida recreativa nocturna de los jóvenes españoles como factor de riesgo frente a otros más tradicionales. *Adicciones*, 19 (2), 125-132.
- Calafat, A., Juan, M., Becoña, E., Fernández, C., Gil, E., Palmer, A.,... Torres, M. A. (2000). *Salir de marcha y consumo de drogas*. Madrid: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

- Caldwell, L. L. y Darling, N. (1999). Leisure context, parental control, and resistance to peer pressure as predictors of adolescent partying and substance use: an ecological perspective. *Journal of Leisure Research*, 36, 697-710.
- Calvo, A., González, R., y Martorell, M. C. (2001). Variables relacionadas con la conducta prosocial en la infancia y adolescencia: personalidad, autoconcepto y género. *Infancia y Aprendizaje*, 24, 95-111.
- Cámara, S. (2011). *Derecho penal de menores y centros de internamiento. Una perspectiva penitenciaria*. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad de Alcalá de Henares.
- Cano, M. C. (2006). Factores psicosociales relacionados con la conducta antisocial en menores. En Y. M. De la Fuente y M. P. Martín (coords.). *Menores en riesgo. Reflexiones teóricas y ámbitos de intervención desde la perspectiva de género* (pp. 191-208). Jaén: Editorial Blanca.
- Cantarero, R. (1988). *Delincuencia juvenil y sociedad en transformación. Derecho Penal y Procesal de Menores*. Madrid: Montecorvo.
- Cantón, J., Cortés, M. R. y Justicia, M. D. (2002). Las consecuencias del divorcio en los hijos. *Psicopatología Clínica, Legal y Forense*, 2, 47-66.
- Capdevilla, M., Ferrer, M. y Blanch, M. (2013). *El tiempo en la justicia de menores*. Barcelona: Área de investigación y Formación Social y Criminológica, Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, Generalitat de Catalunya.
- Capdevilla, M., Ferrer, M. y Luque, E. (2005). *La reincidencia en el delito en la justicia de menores. Centre d'estudis Jurídics i formació especializada*. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
- Capdevilla, M., Ferrer, M. y Luque, E. (2008). Evolució del perfil dels joves infractors ingressats en centres educatius i taxa de reincidencia. *Justidata*, 48, 1-16.
- Caprara, G. V., Barbaranelli, C. y Zimbardo, P. G. (1996). Understanding the complexity of human aggression: Affective, cognitive, and social dimensions of individual differences in propensity toward aggression. *European Journal of Personality*, 10 (Supl. 2), 133-155.
- Carcach, C. y Leverest, S. (1999). Recidivism among juvenile offenders: An analysis of Times to Reappearance. *Research and Public Policy Series*, 17, 1-25.
- Caron, C. y Rutter, M. (1991). Comorbidity in child psychopathology: Concepts, issues and Researchstrategies. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 32, 1036-1080.
- Carrancá Trujillo, R. y Carrancá Rivas, R. (1995). *Derecho penal mexicano, parte general*. Porrúa: México.
- Carrasco, M. A., Del Barrio, M. V. y Rodríguez, J. F. (2001). *Autoeficacia y agresividad en población infantil adolescente*. Simposio sobre Psicología Clínica Infantil, Granada.

- Caspi, A., Moffitt, T. E., Silva, P. A., Stouthamer-Loeber, M., Krueger, R. F. y Schmutte, P.S. (1994). Are some people crime-prone? Replications of the personality-crime relationship across countries, genders, races, and methods. *Criminology*, 32, 163-195.
- Castel, R. 1997. *La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del asalariado*. Barcelona: Paidós.
- Catalano, R. F. y Hawkins, J. D. (1996). The social development model: A theory of antisocial behaviour. En J. D. Hawkins (Ed.), *Delinquency and crime: Current theories* (pp. 149-197). New York: Cambridge.
- Catalano, R. F., Kosterman, R., Hawkins, J. D., Newcomb, M. D., y Abbott, R. D. (1996). Modeling the etiology of adolescent substance use: A test of the social development model. *Journal of Drug Issues*, 26, 429-455.
- Catchpole, R., y Gretton, H. (2003). The predictive validity of risk assessment with violent young offenders. *Criminal Justice and Behaviour*, 30, 688-708.
- Cava, M. L. y Musitu, G. (2001). *La potenciación de la autoestima en la escuela*. Barcelona: Paidós.
- Centro Reina Sofía (2006). *Estadística de Delincuencia Juvenil*. Disponible en: <http://www.centroreinasofia.es/paneldecontrol/est/pdf/EST004-3266.pdf>
- Cerón, S. (2013). Factores individuales relacionados con la reincidencia delictiva en menores infractores de la Comunidad de Madrid. Tesis doctoral. Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.
- Cervelló, V. y Colás, A. (2002). *La responsabilidad penal del menor de edad*, Madrid: Tecnos.
- Chandler, M., Boyes, M. y Ball, L. (1990). "Relativism and stations of epistemic doubt". *Journal of Experimental Child Psychology*, 50 (3), 370-395.
- Chapple, C. L., McQuillan, J. A. y Berdahl, T. A. (2005). Gender, social and delinquency: a comparison of boys' and girls'. *Models Social Science Research*, 34, 357-383.
- Chassin, L., Curran, P., Hussong, A., y Colder, C. (1996). The relation of parent alcoholism to adolescent substance use: A longitudinal follow-up study. *Journal of Abnormal Psychology*, 105, 70-80.
- Chico, E. (2000). Búsqueda de sensaciones. *Psicothema*, 12, 229-235.
- Christiaens, J., Dumortier, E. y Nuijens, A. (2010). Bélgica. En F. Dunkel, J. Grzywa, P. Horsfield, e I. Pruin (Eds.), *Juvenile Justice Systems in Europe Current Situation and Reform Developments*. Vol.II, Forum Verlag Godesberg, Alemania: Mönchengladback.

- Cohen, A. K. (1965). The sociology of the deviant act: Anomie theory and beyond, American sociological review. *American Sociological Review*, 30, 5-15.
- Cohen, A. K., Williams, K., Bekelman, A. M. y Crosse, S. (1994). Evaluation of the National Youth Gang Drug Prevention Program. En M. W. Klein, C. Max-son y J. Miller (Eds.), *The Modern gang reader*, (pp. 266- 282). Los Ángeles: Roxbury.
- Cohen, L. E. y Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends. A routine activities approach. *American Sociological Review*, 44 (Supl. 4), 558-608.
- Coie, J. D. (1990). Towards a theory of peer rejection. En S.R. Asher y J.D. Coie (Eds.), *Peer rejection in childhood* (pp. 365-402). Cambridge; Cambridge University Press.
- Colegio Oficial de Psicólogos (1998). El perfil del psicólogo clínico y de la salud. *Papeles del Psicólogo*, 69, 4-23. Doi: <http://www.cop.es/perfiles/contenido/clinica.htm>.
- Columbu, L., Martínez, A. y Redondo, S. (2012). La percepción de los adolescentes sobre las motivaciones que llevan a un joven a cometer un delito. *Boletín Criminológico*, 137, 1-4.
- Comité Económico y Social Europeo (2006). La prevención de la delincuencia juvenil, los modos de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia del menor en la Unión Europea. *Diario Oficial de la Unión Europea*.
- Connors, D. F., Steingard, R. J., Abderson, J. J. y Melloni, R. H. (2003). Gender differences in reactive and proactive aggression. *Child Psychiatry and Human Development*, 33, 279-294.
- Conseur, A., Rivara, F. P., Barnowski, R. y Emmanuel, I. (1997). Maternal and perinatal risk factors for later delinquency. *Pediatrics*, 99, 785-790.
- Contreras, L. y Cano, M. C. (2012). El menor infractor en la sociedad actual: Una aproximación a los principales factores psicosociales vinculados a la conducta delictiva juvenil. *Revista de Psicología Social Aplicada (2ª etapa)*, 1(1), 39-54.
- Cook, R. F., Lawrence, H., Morse, C. y Roehl, J. (1984). An evaluation of the alternatives approach to drug abuse prevention. *International Journal of Addictions*, 19, 767-787.
- Cooke, D. J. y Philip, L. (2001). To treat or not to treat? An empirical perspective. En C. R. Hollin (Ed.), *Offender assessment and treatment* (pp. 17-34). Chichester (Reino Unido): Wiley.
- Cooke, D. J. y Philip, L. (2001). To treat or not to treat? An empirical perspective. En C. R. Hollin (Ed.), *Offender Assessment and Treatment*. Chichester, Wiley.
- Cottle, C., Lee, R., Heilbrun, K. (2001). The prediction of criminal recidivism in juveniles: A meta-analysis. *Criminal Justice and Behavior*, 28, 367-394.

- Coumarelos, C. (1994). *Juvenile offending: Predicting persistence and determining the cost-effectiveness of interventions*. Sydney: NSW Bureau of Crime Statistics and Research (BOSCAR).
- Coy, E. y Torrente, G. (1997). Intervención con menores infractores: Su evolución en España. *Anales de Psicología*, 13 (1), 39-49.
- Craig, W. M. (2002). The road to gang membership: characteristics of male gang and nongang members from ages 10 to 14, *Social Development*, 11 (1), 53-68.
- Crespo, M., Perles, F. y San Martín, J. (2006, noviembre). *Análisis psicosocial de los menores infractores en un centro de reforma*. Comunicación presentada en el I Congreso Europeo sobre Programas de Cumplimiento de Medidas Judiciales para Menores, Sevilla.
- Crick, N. R. y Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social-information-processing mechanisms in children's social adjustment. *Psychological Bulletin*, 115, 74-101.
- Cronbach, L. J. (1955). Process Affecting Scores or "Understanding of Others and Assumed Similarity". *Psychological Bull*, 52, 177-193
- Crosnoe, R., Glasgow, K. y Dornbusch, S. M. (2002). Protective functions of family relationship and school factors on the deviant behavior of adolescent boys and girls. Reducing the impact of risky friendships. *Youth & Society*, 33, 515-544.
- Cruise, K., Marsee, M., Dandreaux, D. y DePatro, D. (2007). Mental Health screening of female juvenile offenders: Replication of a sub typing strategy. *Journal of Child and Family Studies*, 16, 615-625.
- Cruz, A. (2010). *Los menores de edad infractores de la ley penal*. Tesis doctoral. Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.
- Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The psychology of optimal experience*. Nueva York: Harper & Row Publishers.
- Cuello, J. (2000). *El nuevo derecho penal de menores*, Madrid: Civitas.
- Cuello, J. (2001). El nuevo derecho penal español de menores a la luz de las modernas tendencias del derecho penal y de la criminología, *Modernas tendencias en la ciencia del derecho penal y en la criminología*, 205-217.
- Cuenca, M. (1995). *Temas de la pedagogía del ocio*. Bilbao: Universidad de Deusto.
- Cuenca, M. (2004). *Pedagogía del Ocio: Modelos y Propuestas*. Bilbao: Universidad de Deusto.
- Cuervo, K. (2011). *Perfil y predicción de la reincidencia delictiva*. Tesis Doctoral. Universitar Jaume I, Castellón.

- Cuervo, K., Andrés, C., Gorriz, A. B., Villanueva, L., Carrión, C. y Busquets, P. (2009). Predicción de la reincidencia delictiva en menores infractores. *International Journal of Developmental and Education Psychology*, 2, 529-538.
- Cullen, F. T. y Gendreau, P. (2006). Evaluación de la rehabilitación correccional: política, práctica y perspectivas. En R. Barberet y J. Barquín, *Justicia penal siglo XXI: Una selección de Criminal Justice 2000* (pp. 275-348). Granada: Editorial Comares.
- Curry, G. D., y Spergel, I. A. (1992). Gang Involvement and delinquency among Hispanic and African-American adolescent males. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 29, 279-291.
- Damasio, A. (2004). *El error de Descartes*. Barcelona: Ed. Crítica.
- De la Cuesta, J. L. (2001b). The Position of Victims y Victim Support in the New Spanish Juvenile Criminal Law, en E. Fattah, S. Parmentier (Eds.). *Victim policies y criminal justice on the road to restaurative justice* (pp: 59-82). Leuven: Essays in Honour of Tony Peters.
- De la Cuesta, J. L. (2001c). Capítulo VII. La ejecución de las medidas, en E. Giménez-Salinas (coord.), *Justicia de menores: una justicia mayor. Comentarios a la Ley reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores* (pp. 225-282). Madrid: Consejo General del Poder Judicial.
- De la Cuesta, J. L. y Blanco, I. (2006). El enjuiciamiento de menores y jóvenes infractores en España. *Revista electrónica de la Asociación Internacional de Derecho Penal*, 3, pp. 1-24.
- Deci, E. L. (1975). *Intrinsic motivation*. Nueva York: Plenum Press.
- Decker, S. H. y Van Winkle, B. (1994). Slingshot dope: the role of gangs and gang members in drugs sales, *Justice Quarterly*, 11 (4), 583-604.
- Del Barrio, M. V. (2004a). El joven violento. En J. Sanmartín (coord.). *El laberinto de la violencia*. Barcelona: Ariel.
- Dembo, R., Schmeidler, J., Pacheco, K., Cooper, S. y Williams, L. W. (1997). The relationships between youths' identified substance use, mental health or other problems at a juvenile assessment center and their referrals to needed services. *Journal of Child and Adolescent Substance Abuse*, 6, 23-54.
- Dembo, R., Wareham, J. y Schmeidler, J. (2007). A longitudinal study of cocaine use among juvenile arrestees. *Journal of Child and Adolescent Substance use*, 17 (1), 83-109.
- Deschamps, J. P. (1999). El derecho francés de los menores. El menor y el Juez de menores. En I. Giménez, y E. Colomer, (Dir.), *Legislación de Menores en el Siglo XXI: análisis del derecho comparado, Estudios de Derecho Judicial*, 18, Madrid: Consejo General del Poder Judicial.

- Díaz, M. (2003). *La instrucción en el proceso penal de menores*, Madrid: Colex.
- Díaz, O. y Elícegui, M. (2001). Desarrollo moral en menores infractores: Una aproximación empírica a partir de Kohlberg. En: *Libro de Actas IV Congreso Iberoamericano de Psicología jurídica* (pp. 139-164). Madrid: : Universidad Autónoma de Madrid.
- Díaz, O. y Sanabria, M. A. (1993). Variables relacionadas con el inicio del consumo de tabaco. *Adicciones*, 5, 287-304.
- Díaz-Aguado, M. J. (1996). *Programas de educación para la tolerancia y prevención de la violencia en los jóvenes*. Madrid: Instituto de la Juventud. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Dishion, T. J., French, D. C. y Patterson, G. P. (1995). The development and ecology of antisocial behavior. En D. Cicchetti y D. C. Cohen (Eds.), *Developmental psychopathology: Risk, disorder, and adaptation*, (Vol. 2, pp. 421-471). New York: Wiley.
- Dodge, K. A. (1991). The structure and function of reactive and reactive aggression. En D. J. Pepler y K. H. Rubin (Eds.): *The development and treatment of childhood aggression* (pp. 201-218). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Dodge, K. A. y Coie, J. D. (1987). Social-information-processing factors in reactive and proactive aggression in children's peer groups. *Journal of Personality and Social Psychology*, 53, 1146-1158.
- Dolz, M. J. (2001). Labor y funciones del equipo técnico. *Estudios Jurídicos. Ministerio Fiscal*, 1, 129-149.
- Dominguez, J. y Luzón, A. (2014). El menor infractor que comete su primer delito. *Revista sobre infancia y adolescencia*, 7, 40-57.
- Donnellan, B., Trzesniewski, K., Robins, R., Moffitt, T. y Caspi, A. (2005). Low self-esteem is related to aggression, antisocial behavior, and delinquency. *Psychological Science*, 16, 328-335.
- Donovan, J. E. (1993). Young adult drinking-driving: Behavioral and psychosocial correlates. *Journal of Studies of Alcohol*, 54, 600-613.
- Düinkel, F. (2006). Juvenile Justice in Germany: between welfare and Justice, en J. Jungert y S. H. Decker, S.H. (Eds.), *International Handbook of Juvenile Justice*. New York: Springer.
- Duncan, T. E., Tildesley, E., Duncan, S.C. y Hops, H. (1995). The consistency of family and peer influences on the development of substance use in adolescence. *Addiction*, 90, 1647-1660.

- Echeburúa, E. y De Corral, P. (1998a). Técnicas de exposición en psicología clínica. En M.A. Vallejo y M.A. Ruiz (eds.), *Manual práctico de modificación de conducta 2* (pp. 673-747). Madrid: Fundación Universidad-Empresa.
- Echeburúa, E., y Guerricaechevarría, C. (2000). *Abuso sexual en la infancia: víctimas y agresores. Un enfoque clínico*. Barcelona: Ariel.
- Echeburúa, E., y Guerricaechevarría, C. (2006). Abuso sexual de menores. En E. Baca, E. Echeburúa y J.M. Tamarit (Eds.), *Manual de victimología* (pp. 129-147). Violencia: Tirant to Blanch.
- Edens, J. F., Campbell, J. S. y Weir, J. M. (2007). Youth psychopathy and criminal recidivism. *Law and Human Behavior*, 31, 53-75.
- Einslerberg, N. (2000). Emotion, regulation, and moral development. *Annual Review of Psychology*, 51, 665-697.
- Eisenberg, N., Fabes, R. A., Murphy, B. B., Karbon, M., Smith, M., y Maszk, P. (1996). The relations of childrens dispositional empathyrelated responding to their emotionality regulation, and social functioning. *Developmental Psychology*, 32, 195-209.
- Elkind, D. (1967). Egocentrismo en la adolescencia. *Child Development*, 38, 1025-34.
- Ellickson, P. L. y McGuigan, K. A. (2000). Early predictors of adolescent violence. *American Journal of Public Health*, 90, 566-572.
- Elliot, D. S y Voss, H. L. (1974). *Delinquency and Dropout*. Lexington, MA: Heath.
- Elliot, D. S. y Menard, S. (1996). Delinquent friends and delinquent behavior: Temporal and developmental patterns. En D. J. Hawkins (Ed.), *Delinquency and Crime: Current theories* (pp. 28-67). New York: Cambridge University Press.
- Elliot, D. S., Hamburgo, B. y Williams, K. R. (1998). *Violence in American School*. New York: Cambridge University Press.
- Ellis, P. L. (1982). Empathy: A factor in antisocial behavior. *Journal of Abnormal ChildPsychology*, 10 (1), 123-134.
- Elzo, J., Comas, D., Laespada, M. T., Salazar, L. y Vielva, I. (2000). *Las culturas de las drogas en los jóvenes: Ritos y fiestas*. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
- Errasti, J. M., Vallejo, G., Fernández, J. R. y Secades, R. (2002). *Guía de referencia para la evaluación de programas de prevención familiares*. Madrid: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y Colegio Oficial de Psicólogos. Disponible en: <http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/GuiaEvaluacionProgPrevFamiliar.pdf>.
- Esbensen, F. A. y Huizinga, D. (1993). Gangs, drugs, and delinquency in a survey of urban youth. *Criminology*, 31 (4), 565-589.

- Esbensen, F. y Huizinga, D. (1993). Gang, drugs, and delinquency in a survey of urban youth. *Criminology*, 31, 565-589.
- Escofet, J. y Pérez, A. (1994). *Anàlisi de la integració social dels menors desinternats del Centre Oriol Badia*. Barcelona: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
- Espada, J. P., Méndez, F. X., Griffin, K. W. y Botvin, G. J. (2003). Adolescencia: consumo de alcohol y otras drogas. *Papeles del Psicólogo*, 84, 9-17.
- Etxebarria, X. (2003), *Sistemas de Responsabilidad Penal de Adolescentes*, Seminario Internacional. UNICEF, Comité País Vasco, España.
- European Economic and Social Committee (2006). *Opinion on the Prevention of Juvenile Delinquency', Ways of Dealing with Juvenile Delinquency and the Role of the Juvenile Justice System in the European Union*. Brussels: Official Journal of the European Union.
- Eysenck, H. J. (1964). *Crime and personality*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Eysenck, S. B. y Eysenck, H. J. (1978). Impulsiveness and venturesomeness: their position in a dimensional system of personality description. *Psychological Reports*, 43, 1247-1255.
- Eysenck, H.J. y Schoenthaler, S. J. (1997). Raising IQ level by vitamin and mineral supplementation. En R. J. Sternberg y E. L. Grigorenko (Eds.). *Intelligence, heredity and environment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fabián, J. M. (2001). Adult criminal behavior and morality: Analysis of moral reasoning in offenders and nonoffenders. *Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences*, 61, (8-A): 3360.
- Fariña, F., Arce, R. y Novo, M. (2008). Neighbourhood and community factors. Effects on deviant behavior and social competence. *The Spanish Journal of Psychology*, 11, 78-84.
- Fariña, F., García, P. y Vilariño, M. (2010). Autoconcepto y procesos de atribución: estudio de los efectos de protección/riesgo frente al comportamiento antisocial y delictivo, en la reincidencia delictiva y en el tramo de responsabilidad penal de los menores. *Revista de Investigación en Educación*, 7, 113-121.
- Farrington, D. P. (1978). The family background of aggressive youths. En L. A. Hersov, M. Berger y D. Shaffer (Eds.), *Aggression and antisocial behavior in childhood and adolescence*. Oxford: Pergamon.
- Farrington, C. (2008). *Integrated developmental and life-course theories of offending*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Farrington, D. (1986). Age and exploration of crime. *Crime and justice*, 7, 198-250.

- Farrington, D. P. (1987). Early precursors of frequent offending. En J. Q. Wilson y G.C. Loury (Eds.): *From Children to Citizens (vol. III). Families, Schools and Delinquency Prevention* (pp. 27-50). Nueva York: Springer-Verlag.
- Farrington, D. P. (1989). Later adult life aoutcomes of offenders and nonoffenders. En M. Branbring, F. Lösel, y H. Skowronek (Eds.), *Children at risk; Assessment, Longitudinal Reearch, and Intervention* (pp. 220-244). Berlín: De Gruyter.
- Farrington, D. P. (1989a). Early predictors of adolescent aggressions and adult violence. *Violence and victims*, 4, 79-100.
- Farrington, D. P. (1991). Chilhood aggression and adult violence: Early precursors and later-life outcomes. En D. J. Pepler y K. H. Rubin (Eds.), *The development and treatment of childhood aggression* (pp. 5-29). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Farrington, D. P. (1992). Criminal career research in the United Kingdom. *British Journal of Criminology*, 32, 521-526.
- Farrington, D. P. (1995). The Twelfth Jack Tizard Lecture. The development of offending and antisocial behavior from childhood: Key findings from the Cambridge study in delinquent developmental. *Journal of child and Psichology and Psychiatry*, 360, 929-964.
- Farrington, D. P. (1996). The childhood origins of crime: The Cambridge Study, 1961-96. *The Magazine of the Cambridge Society*, 38, 15-18.
- Farrington, D. P. (1997). Early prediction of violent and non-violent youthful offending European. *Journal on Criminal Policy and Research*, 5, 51-66.
- Farrington, D. P., Loeber, R. y Van Kammen, W. B. (1990). Long - term criminal outcomes ohyperactivity – impulsivity – attention – deficit and conduct problems in childhood. En L. N. Robins, y M. R. Rutter, (Eds.) *Straight and devious pathways from childhood to adulthood*. New York: Cambridge University Press.
- Fergusson, D. M. y Horwood, L. J. (2002). Male and female offending trajectories. *Development and Psychopathology*, 14, 159-177.
- Fergusson, D. M., Lynskey, M. T. y Horwood, L. J. (1995). The role of peer affiliations, social, family and individual factors in continuities in cigarette smoking between childhood and adolescence. *Addiction*, 90, 647-659.
- Fergusson, D. M. y Horwood, L. J. (1996). The role of adolescent peer affiliations in the continuity between childhood behavioral adjustment and juvenile offending. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 24, 205-221.
- Fernández, E. (2008). *Entre la educación y el castigo: un análisis de la justicia de menores en España*. Valencia: Tirant lo Blanch.

- Fernández, E. (2012). El internamiento de menores: Una mirada hacia la realidad de su aplicación en España. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 18, 1-20. Doi: <http://criminnet.ugr.es/recpc/14/recpc14-18.pdf>
- Fernández, E., Bartolomé, R., Rechea, C. y Megías, A. (2009). Evolución y tendencias de la delincuencia juvenil en España. *Revista española de Investigación Criminológica*, 7, 1-29.
- Fernández, J. (2009). Los niños y las niñas: ¿ciudadanos de hoy o de mañana?. *Alternativas: Cuadernos de Trabajo Social*, 16, 111-126.
- Fernández M. E. y Tarancón G. P. (2010a). Populismo punitivo y delincuencia juvenil: mito o realidad. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Crimonología*, 12, 1-25.
- Fernández, M. y Tarancón, P. (2010b). Conocimiento y actitud pública hacia la delincuencia juvenil. *Boletín Criminológico del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología*, 123, 1-4.
- Fernández-Berrocal, P. y Extremera, N. (2005). La inteligencia emocional y la educación de las emociones desde el Modelo de Mayer y Salovey. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 19, 63-93.
- Feshbach, N. D. (1975). Empathy in children. Some Theoretical and empirical considerations. *Counseling Psychologist*, 5, 25-30.
- Fierro, A. (2006). La Ley del menor: crónica de una reforma anunciada. *Diario de la Ley*, N° 6496.
- Fiscalía General del Estado (2008). Memoria 2007. Recuperado el 26 de octubre de 2008 en: http://www.fiscal.es/cs/Satellite?cid=124051781467&language=es&pagename=PFiscal%2FPage%2FFGE_buscadorArchivoDocument
- Fiscalía General del Estado (2009). Memoria 2008. Recuperado el 26 de octubre de 2008 en: http://www.fiscal.es/cs/Satellite?cid=1240560251763&language=es&pagename=PFiscal%2FPage%2FFGE_buscadorArchivoDocument
- Fiscalía General del Estado (2014). *Memoria 2013*, pp. 433-461. Doi: https://www.fiscal.es/memorias/memoria2014/FISCALIA_SITE/recursos/pdf/MEMFI S14.pdf
- Flay, B. R., Hu, F. B., Siddiqui, O., Day, L. E., Hedeker, D., Petraitirs, J.,... Sussman, S. (1994). Differential influence of parental smoking and friend's smoking on adolescent initiation and escalation of smoking. *Journal of Health Social Behavior*, 35, 248-268.
- Fleisser, M. S. (1995). *Beggars and thieves: lives of urban street criminals*. Madison: the University of Wisconsin Press.

- Flores, A. W., Travis, L. F. y Latessa, E. J. (2004). *Case classification for juvenile corrections: An assessment of the Youth Level of Service /Case Management Inventory (YLS/CMI)*. Washington, DC: U.S. Department of Justice.
- Fombone, E., Wostear, G., Cooper, V., Harrington, R. y Rutter, M. (2001). The Maudsley long-term follow-up of child and adolescent depression. 2. Suicidality, criminality and social dysfunction in adulthood. *British Journal of Psychiatry*, 179 (3), 218-223.
- Fontán, C. (1980). *Tratado de Derecho Penal* (2ª ed.). Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- Forcadell, A., Camps, C., Rivarola, P. y Pérez, J. (2004). *Avaluació de la reincidencia dels menors desinternats del Centre Educatiu Lálzina*. Recuperado de <http://www.20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.6a30b1b2421bb1bb1b6bd6b6410b0c0e1a0/?vgnextoid=d3abb3a5b1303110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d3abb3a5b1303110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default>.
- Forth, A. E., Kosson, D. S. y Hare, R. D. (2003). *The psychopathy checklist: Youth version-manual*. Toronto: Multi-Health Systems.
- Forth, A. E., Kosson, D. S. y Hare, R. D. (2003). *The Hare PCL: Youth Version*. Toronto, ON: Multi-Health Systems. .
- Frankl, V. E. (1988). Logos, paradoja y búsqueda de significado. En M.J. Mahoney y A. Freeman (eds.), *Cognición y psicoterapia* (pp. 283-300). Barcelona: Paidós.
- Frías, M., Corral, V., López, A., Díaz, S. y Peña, E. (2001). Predictores familiares y conductuales de la problemática escolar en alumnos de secundaria y preparatoria. *Revista de Psicología de la PUCP*, 19, 237-256.
- Frick, P. J., Barry, C. y Bodin, D. (2000). Applying the concept of psychopathy to children: Implications for the assessment of antisocial youth. En C. B. Gacono (Ed.). *The clinical and forensic assessment of psychopathy: A practitioner's guide* (pp. 3-24). Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Frick, P. J., Bodin, D. y Barrin, C. (2000). Psychopathic traits and conduct problems in community and clinic-referred samples of children: Further development of the Psychopathy Screening Device. *Psychological Assessment*, 12, 382-393.
- Frick, P. J., y Hare, R. D. (2001). *The Antisocial Process Screening Device-Technical manual*. Toronto: Multi-Health Systems.
- Friedman, C. J., Mann, F. y Friedman, A. S. (1975). A Profile of juvenile street gang members. *Adolescence*, 10, 563-607.
- Fuertes, M. (1996). Redefinición sexual y de género. En J. Fernández (Ed.), *Varones y mujeres: Desarrollo de la doble realidad de género a lo largo del ciclo vital*. Madrid: Pirámide.

- Funes, J. (1998). "Adolescentes y conflicto social. Algunas reflexiones sobre la respuesta social". *Harlax*, 25, 70-87.
- Funes, J. (2005). El mundo de los adolescentes: propuestas para observar y comprender. *Intervención socioeducativa*, 29, 78-102.
- Gabinete de Estudios de Seguridad Interior de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior (2006). *La criminalidad en España en 2006*. Recuperado de http://www.iom.int/seguridad-fronteriza/lit/land/balance_criminalidad_2006.pdf
- Garaigordobil, M. (2000). *Intervención psicológica con adolescentes. Un programa para el desarrollo de la personalidad y la educación en derechos humanos*. Madrid: Pirámide.
- Garaigordobil, M. y Oñederra, J. A. (2010). Inteligencia emocional en las víctimas de acoso escolar y en los agresores. *European Journal of Education and Psychology*, 3, 243-256.
- Garaigordobil, M., Álvarez, Z. y Carralero, V. (2004). Conducta antisocial en niños de 10 a 12 años; factores de personalidad asociados y variables predictoras. *Análisis y Modificación de Conducta*, 130, 241-271.
- Garaigobil, M. (2005). Conducta antisocial durante la adolescencia: correlatos socio-emocionales, predictores y diferencias de género. *Psicología Conductual*, 13, 197-215.
- García, J., Ortega, E. y De la Fuente, L. (2010). Juvenile offenders recidivism in Spain. A quantitative revisión. En M. Frias y V. Corral (Eds). *Bio-psycho-social Perspectives on Interpersonal Violence*. Hauppauge, NY (USA): Nova Science Publishers.
- García, M. D., Martín, E., Torbay, A. y Rodríguez, C. (2010). La valoración social de la Ley de Responsabilidad Penal de los menores. *Psicothema*, 22, 865-871.
- García, O., Díez, J. L., Pérez, F. y García, S. (2008). *La delincuencia juvenil ante los Juzgados de Menores*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- García, O., Díez, J. L., Pérez, F. y García S. (2008). *La delincuencia juvenil ante los Juzgados de Menores*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- García-España, E., García, O., Benítez, M. J., Pérez, F. (2011). Menores reincidentes y no reincidentes en el sistema de justicia juvenil andaluz. *Alternativas*, 18, 35-55.
- García-Pintado, G. (1993). La influencia del grupo de iguales en el consume adolescente de droga. *Psiquis*, 14, 39-45.
- Gardner, H. (1993). *Mentes creativas*. Barcelona: Paidós.
- Garrido, V. (2009). La predicción y la intervención con los menores infractores: un estudio en Cantabria. (Estadísticas, instrumentos, protocolos y evaluación). *Colección Estudios Sociales* Nº 9. Santander: Gobierno de Cantabria, Consejería de Empleo y Bienestar Social.

Doi:

- <http://www.serviciosocialescantabria.org/uploads/documentos%20e%20informes/La%20prediccion%20y%20la%20intervencion%20con%20los%20menores%20infractores.pdf>
- Garrido, V., Stangeland, P. y Redondo, S. (2006). *Principios de la Criminología* (3ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Garrido, V. (1987). *Delincuencia juvenil. Orígenes, prevención y tratamiento*. Madrid: Ed. Alhambra.
- Garrido, V. (1993). *Técnicas de tratamiento para delincuentes*. Madrid: Fundación Ramón Areces.
- Garrido, V. (2003). *Psicópata y otros delincuentes violentos*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Garrido, V. y López-Latorre, M. J. (1995). *La prevención de la delincuencia: el enfoque de la competencia social*. Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Garrido, V. (2004). *Psicópatas y otros delincuentes violentos*. Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Garrido, V., Farrington, D. P. y Welsh, B. C. (2006). The importance of an evidence based approach in the current Spanish policy for crime prevention. *Psicothema*, 18, 591-595.
- Garrido, V., López, E., Silva, T., López, M. J. y Molina, P. (2006). *El modelo de la competencia social de la ley de menores*. Valencia: Tirant Lo Blanc.
- Garwood-Gowers, A. y Wheat, K. (2005). Aspectos básicos de la capacidad de responsabilidad en el Derecho civil y criminal inglés. En I. Ruiz-Gallardón, y A. García (Eds.), *Los menores ante el Derecho (responsabilidad, capacidad y autonomía de los menores de edad. Estudio de Derecho comparado)*. Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- Gatti, U. (1999). Sistema italiano de justicia para menores de edad. En I. Giménez, y E. Colomer (Dir.), *Legislación de Menores en el Siglo XXI: análisis de derecho comparado, Estudios de Derecho Judicial 18*, Madrid: Consejo General del Poder Judicial.
- Gendreau, P., Little, T. y Goggin, C. (1996). A meta-analysis of the predictors of adult offender recidivism: What works? *Criminology*, 34, 575-607.
- Giancola, P. R., Mezzich, A. C. y Tarter, R. E. (1998). Disruptive, delinquent and aggressive behavior in female adolescents with a psychoactive substance use disorder: relation to executive cognitive functioning. *Stud Alcohol*, 59 (5), 560-567.
- Gibbs, J. C. (1991). Sociomoral developmental delay and cognitive distortion: Implications for the treatment of antisocial youth. In W.M. Kurtines & J.L. Gerwitz (Eds.), *Handbook of Moral Behavior and Development: Vol.3. Application* (pp. 95-110). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

- Gibbs, J. C. (1993). *Moral Development and Reality: Beyond the Theories of Kohlberg and Hoffman*. Boston: Pearson Allyn & Bacon.
- Gibbs, J. C. (2010). *Moral Development and Reality: Beyond the Theories of Kohlberg and Hoffman*. Boston: Pearson Allyn & Bacon.
- Gibbs, J. C., Potter, G. B. y Goldstein, A. P. (1995). *The EQUIP Program: Teaching youth to think and act responsibly through a peer-helping approach*. Champaign, IL: Research Press.
- Gibbs, J. C., Potter, G. B., Barriga, A. Q. y Liau, A. K. (1996). Developing the helping skills and prosocial motivation of aggressive adolescents in peer group programs. *Aggression and Violent Behavior*, 1 (3), 283-305(23).
- Giménez-Salinas, E. (2000). Características principales de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor. *Revista del Poder Judicial*, pp. 137-158.
- Gimeno, V. (1988). Los procedimientos penales simplificados (principio de oportunidad y proceso penal monitorio. *Revista Poder Judicial*, 2, 31-52.
- Giorgi, M. (2012). Actividades estructuradas/desestructuradas y delincuencia juvenil. Análisis de datos del ISRD-2. *Justicia Juris*, 8 (2), 11-26.
- Glasser, W. (1975). *Reality therapy: A new approach to psychiatry*. Nueva York: Harper and Row.
- Glover, A. J. J., Nicholson, D. E., Hemmati, T., Bernfeld G. A. y Quinsey, V. L. (2002). A comparison of predictors of general and violent recidivism among high-risk federal offenders. *Criminal Justice and Behavior*, 29, 235-249.
- Glueck, S. y Glueck, E. (1950). *Unraveling juvenile delinquency*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Gluek, S., Glueck, E. (1950). *Unraveling juvenile delinquency*. New York: Commonwealth Fund (d'après Killias, 2001).
- Goldweber, A., Dmitrieva, J., Cauffman, E., Piquero, A. R. y Steinberg, L. (2011). The development of criminal style in adolescence and young adulthood: Separating the lemmings from the loners. *Journal of Youth and Adolescence*, 40, 332-346.
- Gómez, J.L. (2002). Tuición procesal penal de menores y jóvenes, en J. L. González, J. M. Tamarit, J. L. Gómez (coords.), *Justicia penal de menores y jóvenes. Análisis sustantivo y procesal de la nueva regulación* (pp. 155-193). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Gómez-Fraguela, J. A., Fernández, N., Romero, E. y Luengo, A. (2008). El botellón y el consumo de alcohol y otras drogas en la juventud. *Psicothema*, 20 (2), 211-217.
- González, D. (2005). Alcohol y Cocaína: Tipología delictiva y diferencias de género. *México: Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense*, 11-35.

- González, E. (2000). Desarrollo de la adolescencia. Problemática del desarrollo en esta etapa. *Revista de Orientación Psicopedagógica*, 464, 45-54.
- González, J. L. y Cuerda, M. L. (2002). “Derecho Penal de menores: criterios generales de aplicación de las medidas”, en J.L. González, J.M. Tamarit y J.L. Gómez (coords.), *Justicia penal de menores y jóvenes. Análisis sustantivo y procesal de la nueva regulación* (79-130). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Gordon, R. A., Lahey, B. B., Kawai, E., Loeber, R., Stouthamer-Loeber, M. y Farrington, D. P. (2004). Antisocial behavior and youth gang membership: Selection and socialization. *Criminology*, 42 (1), 55-88.
- Gottfredson, D. C. (1986). An empirical test of school-based environmental and individual interventions to reduce the risk of delinquent behavior. *Criminology*, 24, 705-731.
- Gottfredson, D. C., Gottfredson, G. D. y Hybl, L. G. (1993). Managing Adolescent Behavior: A Multi-year, Multi-school Experiment. *American Educational Research Journal*, 30 (1), 179-216.
- Gottfredson, G. D. y Gottfredson, D. C. (1985). *Victimization in schools*. New York: Plenum.
- Graham, J. y Moore, C. (2006). Beyond Welfare Versus Justice: Juvenile Justice in England and Wales. En J. Junger-Tas, y S. H. Decker (Eds.), *International Handbook of Juvenile Justice*. New York: Springer.
- Graña, J. L., Andreu, J. M. y Peña, M. L. (2001). Tipología del comportamiento agresivo en jóvenes y adolescentes. *Psicología conductual*, 9 (2), 361-371.
- Graña, J. L. Garrido, V., y González, L. (2007). Evaluación de las características delictivas de menores infractores de la Comunidad de Madrid y su influencia en la planificación del tratamiento. *Psicopatología Clínica, Legal y Forense*, 7, 7-18.
- Graña, J. L. y Muñoz-Rivas, M. J. (2000). Factores de riesgo relacionados con la influencia del grupo de iguales para el consumo de drogas en adolescentes. *Psicología Conductual*, 8, 19-32.
- Graña, J. L. y Rodríguez, M. J. (2010). *Programa Central de Tratamiento Educativo y Terapéutico para menores infractores*. Madrid: Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor.
- Graña, J. L., Garrido, V. y González, L. (2006). *Reincidencia delictiva en menores infractores de la Comunidad de Madrid: Evaluación, características y propuestas de intervención*. Madrid: Agencia para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI).
- Graña, J. L., Garrido, V., y González L. (2008). *Reincidencia delictiva en menores infractores de la Comunidad de Madrid: Evaluación, Características delictivas y Modelos de Predicción*. Madrid: Agencia para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor.

- Graña, J. L., Muñoz-Rivas, M. y Delgado, S. (2000). *Investigación sobre el consumo de drogas en adolescentes de Majadahonda*. Madrid: Excmo. Ayuntamiento de Majadahonda.
- Greenwood, P. W. (1992). Substance abuse problems among high-risk youth and potential intervention. *Crime & Delinquency*, 38, 444-458.
- Gretton, H., Hare, R. y Catchpole, R. (2004). Psychopathy and offending from adolescence to adulthood: A ten years follow-up. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 72, 636-645.
- Griffin, K., Botwin, G. J., Sheier, L. M. y Nichols, T. R. (2002). Factors associated with regular marijuana use among high school students; A long-term follow-up study. *Substance Use and Misuse*, 37, 225-238.
- Grossi, F. J., Paíno, S. G, Fernández, F. J., Rodríguez, F. J. y Herrero, F. J. (2000). Conducta delictiva y ámbito familiar. *Revista Electrónica Iberoamericana de Psicología Social*, 1 (1), 8.
- Grove, W. M. y Meehl, P. E. (1996). Comparative efficiency of informal (subjective, impressionistic) and formal (mechanical, algorithmic) prediction procedures: The clinical-statistical controversy. *Psychology, Public Policy, and Law*, 2 (2), 293-323.
- Guindon, M. H. (2010). *Self-Esteem Across the Lifespan: Issues and Interventions*. New York: Routledge.
- Hagedorn, J. M. (1998). *People and Folks* (2ª ed). Chicago: Lake View Press.
- Hallyday, C. A. y Graham, S. (2000). "If I get locked up, I get locked up": Secondary control and ajustment among juvenile offenders. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 26, 548-559.
- Hansen, W. (1992). School based substance abuse prevention a review of two state of the arte in curriculum 1890-1890. *Health education research*, 7 (3), 403-430.
- Hanson, C. L., Henggeler, S. W., Haefele, W. F. y Rodick, J. D. (1984). Demographic, individual and family relationship correlates of serious and repeated crime among adolescents and their siblings. *Journal of consulting and Clinical Psychology*, 52, 528-538.
- Hanson, R. K. y Bussière, M. (1998). Predicting Relapse: A Meta-Analysis of Sexual Offender Recidivism Studies. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 66, 348-362.
- Hare, R. D. (1991). *The Hare Psychopathy Checklist-Revised Manual*. Toronto: Multi-Health Systems.

- Hawkins, J. D., Catalano, R. F. y Miller, J. Y. (1992). Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse prevention. *Psychological Bulletin*, 112, 64-105.
- Hawkins, J. D., Graham, J. W., Maguin, E., Abbott, R. D., Hill, K. G., y Catalano, R. F. (1997). Exploring the effects of age of alcohol use initiation and psychosocial risk factors on subsequent alcohol misuse. *Journal of Studies on Alcohol*, 58, 280-290.
- Hawkins, J. D., Herrenkohl, T., Farrington, D. P., Brewer, D., Catalano, R. F. y Harachi, T. W. (1998). A review of predictors of youth violence. En R. Loeber y D. P. Farrington (Eds.), *Serious and violent juvenile offenders: Risk factors and successful interventions* (pp. 106-146). Thousand Oaks CA: Sage.
- Hayes, S. C., Stroschal, K. D. y Wilson, K. G. (1999). Acceptance and Commitment Therapy. *An experiential approach to behavior change*. Nueva York: Gildford.
- Hemmelstein, N. (1995). Adolescent marijuana use and perception of risk. *Journal of Alcohol and Drug Education*, 41, 1-15.
- Hemphill, J. y Hare, R. D. (2004). Some misconceptions about the Hare PCL-R and risk assessment. *Criminal Justice and Behaviour*, 31, 203-243.
- Hengeler, S. W. (1989). *Delinquency in Adolescence*. Newbury Park (EEUU): Sage.
- Henry, B., Caspi, A., Moffitt, T. E. y Silva, P. A. (1996). Temperamental and familial predictors of violent and non-violent criminal convictions: From age 3 to age 18. *Developmental Psychology*, 32, 614-623.
- Herrenkohl, T. (2001). Early adolescent predictors of youth violence as mediators of childhood risks. *Journal of Early Adolescence*, 21, 447-469.
- Herrenkohl, T. L., Maguin, E., Hill, K. G., Hawkins, J. D. y Abott, R. D. (2000). Developmental risk factors for youth violence. *Journal of Adolescent Health*, 26, 176-186.
- Herrero, C. (1997). *Criminología (parte general y especial)*. Madrid: Dykinson.
- Hetherington, E. M. y Henderson, S. H. (1997). Fathers in step families. En M. E. Lamb (Ed.), *The role of the father in child development* (pp. 212-226). New York: Wiley and Sons.
- Higgins, P. C. y Butler, R. (1982). *Understanding desviance*. New York: McGraw Hill.
- Higuera, J. F. (2003). *Derecho Penal Juvenil*. Barcelona: Bosch.
- Hill, K. G., Howell, J. C., Hawkins, J. D. y Battin, S. R. (1996). *Risk factors in childhood for adolescent gang membership: Results from de Seattle Social Developmental Project*. Seattle, WA: University of Washington, School of Social Work.

- Hilterman, E. y Vallés, D. (2007). *SAVRY. Guía para la valoración del riesgo de violencia en jóvenes*. Barcelona: Ed. Centre d'Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya.
- Hindeland, M. J. (1973). Causes of delinquency. A partial replication and extension. *Social Problems*, 20 (Supl. 4), 471- 487.
- Hindelang, M.J., Gottfredson, M.R. y Garofalo, J. (1978). *Victims of personal crime: An empirical foundation for a theory of personal victimization*. Cambridge, MA: Ballinger (d'après Killias, 2001).
- Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. Berkeley, California: University of California Press.
- Hirschi, T. (1971). *Causes of delinquency*. Berkeley, CA: University of California Press (version originale, 1969).
- Hochstetler, A. (2001). Opportunities and decisions: Interactional dynamics in robbery and burglary groups. *Criminology*, 39, 737-764.
- Hochstetler, A. (2002). Differential association in group and solo offending. *Journal of Criminal Justice*, 30, 559-566.
- Hoeve, M., Dubas, J. S., Eichelseim, V. I., Van der Laan, P. H., Smeenk, W. y Gerris, J. R. (2009). The relationship between parenting and delinquency: A meta-analysis. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 37 (6), 749-775.
- Hoffman, M.L. (1987). The contribution of empathy to justice and moral judgment. En N. Eisenberg and J. Strayer (Eds.), *Empathy and its development* (pp. 47-80). New York: Cambridge University Press.
- Hoffman, M. L. (1990). Empathy and Justice Motivation. *Motivation and Emotion*, 14 (2), 151-172.
- Hoffman, M. L. (2000). *Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice*. New York: Cambridge University Press.
- Hoge, R. D. (2001). *The Juvenile offender: Theory, research, and applications*. Boston, M.A.: Kluwer Academic Press.
- Hoge, R. D. y Andrews, D. (2010). *Evaluation for risk of violence in juveniles*. New York: Oxford University Press.
- Hoge, R. D. y Andrews, D. A. (2002). *Youth Level of Service/Case Management Inventory*. Toronto, Canada: Multi Health Services.
- Hoge, R. D. y Andrews, D. A. (2006). *Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI)*. Toronto, ON: Multi-Health Systems.

- Hollin, C. R. y Palmer, E. J. (2006). *Offending behaviour programmes: history and development*. En C.R. Hollin y E.J. Palmer (Ed.), *Offending behavior programmes* (pp. 1-32). Chichester (Reino Unido): Wiley.
- Hops, H., Davis, B., y Lewin, M. (1999). The development of alcohol and other substance use: A gender study of family and peer context. *Journal of Studies of Alcohol*, 13, 22-31.
- Howell, J. C. (2003). *Preventing and reducing juveniles delinquency*. Thousand Oaks (Estados Unidos): Sage Publications.
- Howell, J. C. (2009). *Preventing and reducing juvenile delinquency*. California: Sage.
- Huang, B., White, H. R., Kosterman, R., Catalano, R. F., y Hawkins, J. D. (2001). Developmental associations between alcohol and interpersonal aggression during Adolescence. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 38, 64-83.
- Huang, J. Z., Deen, W., Tollenaar, M., Shrestha, A., Rahimian, H. y Swanton, C. J. (2001). Effect of temperature and photoperiod on the phonological development of *Chenopodium album*. *Weed Sci.*, submitted for publication.
- Huff, R. C. (1998a). Comparing criminal behavior of youth gangs and at-risk youths. *Research in Brief*. Washington, DC: National Institute of Justice.
- Huizinga, D. (1997). *Gangs and the volume of crime*. Paper presented at the annual meeting of the Western Society of Criminology, Honolulu, HI.
- Huizinga, D., Loeber, R., Terence, P., Thornberry, T. P., Cothorn, L. (2000). Co-occurrence of Delinquency and Other Problem Behaviors. *Juvenile Justice Bulletin* (pp. 1-8). Washington, DC: Office of Juvenile Justice Delinquency Prevention.
- Hundleby, J. D. (1986). Personality and the prediction of delinquency and drug use: A follow-up study of training school boys. *British Journal of Criminology*, 26, 129-146.
- Iborra, I., Rodríguez, A., Serrano, A. y Martínez, P. (2011). *Situación del menor en la Comunitat Valenciana: víctima e infractor. Serie 18 documentos*. VIU (Valencian International University), Centro Reina Sofía y Generalitat Valenciana.
- Instituto Nacional de Estadística (2012). Estadística de delincuencia de menores. *Notas de prensa*, pp. 5-7. Disponible en: <http://www.ine.es>
- Instituto Nacional de Estadística (2013). Estadística de delincuencia de menores. *Notas de prensa*, pp. 6-9. Disponible en: <http://www.ine.es>
- Instituto Nacional de Estadística (2014). Estadística de condenados menores. *Notas de prensa*, pp. 6-10. Disponible en: <http://www.ine.es>

- Iso-Ahola, S. E. (1980). *The social psychology of leisure and recreation*. Dubuque, IA: Wm C. Brown Company Publishers.
- Israel, M. y Hong, W. (2006). If “something works” is the answer, what is the question? Supporting pluralist evaluation in community corrections in the United Kingdom. *European Journal of Criminology*, 3 (2), 181-200.
- Jarjoura, G. (1993). Dropping out of school enhance delinquent involvement? Results from a large-scale national probability sample. *Criminology*, 31, 149-172.
- Jenkins, J. E. (1996). The influence of peer affiliation and student activities on adolescent drug involvement. *Adolescence*, 31, 297-306.
- Jennings, D. (2002). *One Year Juvenile Reconviction Rates. July 2000 cohort*. UK, London: Home Office National Statistics.
- Jesionek, U. (1999). Jurisdicción de menores en Austria. En I. Giménez-Salinas y E. Colomer (Dir.), *Legislación de Menores en el Siglo XXI: análisis de derecho comparado. Estudios de Derecho Judicial*, 18, Madrid: Consejo General del Poder Judicial.
- Jessor, R. (1992). “Risk behavior in adolescence: a psychological framework for understanding and action”. *Developmental Review*, 12, 374-390.
- Jolliffe, D. y Farrington, D. (2009). A systematic review of the relationship between childhood impulsiveness and later violence. *Personality, Personality Disorder and Violence: An Evidence Based Approach* (pp. 41-61). Chichester: Wiley-Blackwell.
- Juan, A. y López, E. (2001). El interés del menor como columna vertebral de la Ley 5/2000 de 12 de enero, *Justicia de menores e intervención socioeducativa*, 107-139.
- Jung, S. y Rawana, E. P. (1999). Risk and need assessment of juvenile offenders. *Criminal Justice and Behavior*, 26, 69-89.
- Junger-Tas, J. Block, R. L. (1988). *Juvenile delinquency in the Netherlands*. Amstelveen, AM: Kugler.
- Kafry, D. (1982). Sensation seeking of young children. *Personality and Individual Differences*, 3, 161-166.
- Kandel, D. B., Davies, M., y Baydar, N. (1990). The creation of interpersonal contexts,: Homophily in dyadic relationships in adolescence and Young adulthood. En I. Robins y M. Rutter (Eds.), *Stright and devious pathways from childhood to adulthood* (pp. 221-241). Cambridge: Cambridge University Press.
- Kandel, D. B., Yamaguchi, K. y Chen, K. (1992). Stages of progresión in drug involvement from adolescent to adulthood: Further evidence for the Gateway theory. *Journal of Studies on Alcohol*, 53, 447-457.

- Kaplan, H. B. (1972). Toward a general theory of psychosocial deviance: The case of aggressive behavior. *Social Science and Medicine*, 6, 539-617.
- Kaufmann, H. (1983). *Delincuentes Juveniles. Diagnósis y juzgamiento*, traducción castellana de J. Bustos. Buenos Aires: Depalma.
- Kazdin, A. E. (1988). *Tratamiento de la conducta social en la infancia y en la adolescencia*. Madrid: Martínez Roca.
- Kazdin, A. E. y Buela-Casal, G. (2002). *Conducta antisocial. Evaluación, tratamiento y prevención en la infancia y adolescencia*. Madrid: Pirámide.
- Kazdin, A. E., Kraemer, H. C., Kessler, R. C., Kupfer, D. J. y Offord, D. R. (1997). Contributions of risk-factor research to developmental psychopathology. *Clin Psychol Rev*, 17 (4), 375-406.
- Kazyrytski, L. (2008). *Consideraciones criminológicas en torno a las bandas callejeras de origen latinoamericano en Cataluña*. Tesis doctoral. Departamento de Derecho Público de la Universidad de Girona.
- Keenan, K., Loeber, R., Zhang, Q., Stouthamer-Loeber, M., y Van Kammen, W. B. (1995). The influence of deviant peers on the development of boys' disruptive and delinquent behavior: A temporal analysis. *Development and Psychopathology*, 7, 715-726.
- Kelly, G. A. (1969). *Clinical psychology and personality: the selected papers of George Kelly*. Nueva York: Wiley.
- Kelly, J. R. (1990). *Leisure* (2ª ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Killias, M. (2001). *Précis d criminologie*. Berne: Staempfli.
- Killias, M. y Abei, M. F. (2000). Crime trends in Europe from 1990 to 1996: How Europe illustrates the limits of the American experience. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 8, 43-63.
- Klein, M. W. (1995). *The American street gang: Its nature, prevalence, and control*. New York: Oxford University Press.
- Kleinke C. L. (1998). *Principios comunes en psicoterapia*. Bilbao: Descleé de Brouwer (original en inglés de 1994).
- Kobus, K. (2003). Peers and adolescent smoking. *Addiction*, 98, 37-55.
- Kolvin, I., Miller, F.J., Scott, D.M., Gatzains, S.R. y Fleeting, M. (1990). *Continuities of Depravations?. The Newcastle Thousand-Family Survey*. Aldershot, Avebury.
- Krauskopf, D. (2000). *Participación y Desarrollo Social en la Adolescencia*. Costa Rica: Fondo de Población de Naciones Unidas.

- Krueger, R.F., Caspi, A., Moffitt, T. E. y White, J. (1996). Delay of gratifications psychopathology and personality: Is low self-control specific to externalizing problems?. *Journal of Personality*, 64, 107-129.
- Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A. y Zwi, A. B. (2002). *World Report on violence and health*. Ginebra: World Health Organization.
- Kupersmidt, J. B., Coie, J. D., y Dodge, K. A. (1990). The role of poor peer relationship in the development of disorder. En S. A. Asher y J. D. Coie (Eds.), *Peers rejection in childhood* (pp. 274-305). Cambridge: Cambridge University Press.
- Kury, H., Obergfell-Fuchs, J. y Würger, M. (1994). La distribución regional del delito: Alemania, España y Francia. *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 4.
- Laespada, T., Iraurgi, I y Aróstegi, E. (2004). *Factores de Riesgo y Protección frente al Consumo de Drogas: Hacia un Modelo Explicativo del Consumo de Drogas en Jóvenes de la CAPV*. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
- Lahey, B. B. y McBurnett, K. (1992). Behavioral and biological correlates of aggressive conduct disorder: Temporal stability. En D. Routh (Chair), *The Psychobiology of disruptive behavior disorders in children: Tribute to Herbert Quay*. Symposiums conducted at the annual meeting of the Society for Research in Child and Adolescent Psychopathology, Sarasota, F.L.
- Laird, R., Petit, G., Doge, K. y Bates, J. (2003). Change in parent's monitoring knowledge: links with parenting, relationship quality, adolescent beliefs and antisocial behavior. *Social Development*, 12, 3, 401-419.
- Landrove, G. (2007). *Introducción al Derecho penal de menores*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Larson, R. y Verma, S. (1999). How children and adolescent spend time across the world: Work, play and developmental opportunities. *Psychological Bulletin*, 125 (6), 701-736.
- Lau, S. y Leung, K. (1992). Self-concept, delinquency, relations with parents and school and Chinese adolescents perceptions of personal control. *Personality and Individual Differences*, 13 (Supl. 5), 615-622.
- Le Blanc, M. (1999). Consequences of research on maladjusted adolescents. *FORUM on Corrections Research*, 11, 1-15.
- Le Blanc, M. y Bouthillier, C. (2003). A developmental test of the general deviance syndrome with adjudicated girls and boys using hierarchical confirmatory factor analysis. *Criminal Behavior and Mental Health*, 13, 81-105.
- Le Blanc, M., y Loeber, R. (1998). Developmental criminology updated. En M. Tonry (Ed.), *Crime and justice* (Vol. 23, pp. 115-197). Chicago IL: Chicago University Press.

- LeBlanc, M. y Lanctot, N. (1999). Social and Psychological characteristics of gang members according to the gang structure and its subcultural and ethnic makeup. *Journal of Gang Research*, 5 (3), 15-28.
- Lázaro, M. C. (2001). Análisis de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal del menor. *Anuario de Psicología Jurídica*, 11, 99-117.
- LeDoux, J. (1999). *El cerebro emocional*. Barcelona: Ariel.
- Lee, L. L. y Mobily, K. E. (1988). The NTRS philosophical position statement and a concept of three freedoms. *Journal of Expanding Horizons in Therapeutic Recreation*, 3, 41-46.
- Leitenberg, H., Yost, L. W. y Carroll-Wilson, M. (1986). Negative cognitive errors in children: Questionnaire development, normative data, and comparisons between children with and without self-reported symptoms of depression, low self-esteem, 226 and evaluation anxiety. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 54, 528-536.
- Levenson, M. R., Kiehl, K. E. y Fiszpatrick, C. M. (1995). Assessing psychopathic attributes in a noninstitutionalized population. *Journal of Personality and Social Psychology*, 68, 151-158.
- Lévesque, M. y Robert, M. (2008). Youth's social networks: influence on their running away behaviours. *Portularia*, 8, (1). 41-60. Doi: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2797194>.
- Levy, K. S. C. (1997). The contribution of self-concept in the etiology of adolescent delinquency. *Adolescence*, 32 (127), 671-686.
- Ley de bases sobre organización y atribuciones de Tribunales para niños, 15 de agosto de 1918.
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Boletín Oficial del Estado, 17 de enero, núm. 15, 9.1225.
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- Ley Orgánica 3/2004, de 10 de diciembre, de creación de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor. (BOCM de 14 de diciembre de 2004).
- Ley Orgánica 3/2004, de 10 de diciembre, de creación de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor. (BOCM de 14 de diciembre de 2004).

- Ley Orgánica 4/1992 de 4 de junio, reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de menores.
- Ley Orgánica 5/2000, 12 de enero, reguladora de la responsabilidad Penal de los menores.
- Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en relación con los delitos de terrorismo.
- Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (BOE N° 290, de 5 de diciembre de 2006).
- Lipsey, M. W. (1999a). Can intervention rehabilitate serious delinquents?. *Annals of the American Academy of Political & Social Science*, 564, 142-166.
- Lipsey, M. W. (1999b). Can rehabilitative programs reduce the recidivism of juvenile offenders? An inquiry into the effectiveness of practical programs. *Virginia Journal of Social Policy & the Law*, 6 (3), 611-641.
- Lipsey, M. W. (2009). The primary factors that characterize effective interventions with juvenile offenders: A meta-analytic overview. *Victims & Offenders*, 4 (2) 124-147.
- Lipsey, M.W. y Derzon, J.H. (1998). Predictors of violent or serious delinquency in adolescence and early adulthood: A synthesis of longitudinal research. En R. Loeber y D. P. Farrington (Eds.), *Serious and violent juvenile offenders: Risk factors and successful interventions* (pp. 86-105). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Livacic-Rajas, P. Y., Espinoza, M. y Ugalde, F. (2004). Intervención psicológica basada en la evidencia para la prevención de la delincuencia juvenil. *Un programa de habilidades sociales en ambientes educativos. Terapia Psicológica*, 22, 83-91.
- Llinares, L. y Benedito, M. A. (2007). El grupo de iguales como contexto de inadaptación. *Acciones e investigaciones sociales*, 24, 65-99.
- Lo, C. C. y Globetti, G. (1995). The effects of internal and external control factors on college students' marijuana use and cessation of use. *Journal of Drug Education*, 25, 357-377.
- Loeber, R. (1990). Development and risk factors of juvenile antisocial behavior and delinquency. *Clinical Psychology Review*, 10, 1-41.
- Loeber, R. y Dishion, T. (1983). Early predictors of male delinquency: A review. *Psychological Bulletin*, 94, 68-99.
- Loeber, R. y Farrington, D. P. (2000). Young children who commit crime: epidemiology, developmental origins, risk factors, early interventions, and policy implications. *Developmental and Psychopathology*, 12, 737-762.

- Loeber, R. y Hay, D. F. (1996). Key issues in the development of aggression and violence from childhood to early adulthood. *Annual review of Psychology*, 48, 371-410.
- Loeber, R. y Stouthamer-Loeber, M. (1986). Towards a developmental criminology. En M. Tonry y N. Morris (Eds.), *Crime and justice. A review of research* (Vol. 12, pp. 375-475). Chicago: University of Chicago Press.
- Loeber, R., Farrington, D. P. y Waschbusch, D. A. (1998). Serious and violent juvenile offenders. En R. Loeber y D. P. Farrington (Eds.), *Serious and violent juvenile offenders* (pp. 313-345), Thousand Oaks, CA: Sage.
- Loeber, R., Farrington, D. P., Stouthamer-Loeber, M. y White, H. R. (2008). *Violence and serious theft: Development and prediction from childhood to adulthood*. New York: Routledge.
- Loeber, R., Green, S. M., Lahey, B. B., Frick, P. y McBurnett, K. (2000). Findings on disruptive behavior disorders from the first decade of the Developmental Trends Study. *Clinical Child & Family Psychology Review*, 3, 37-60.
- Loeber, R., y Le Blanc, M. (1990). Toward a developmental criminology. En M. Tonry y N. Morris (Eds.), *Crime and justice* (Vol. 12, pp. 375-473). Chicago IL: University of Chicago Press.
- López, C. y López, J. R. (2003). Rasgos de personalidad y conducta antisocial y delictiva. *Psicopatología Clínica, Legal y Forense*, 3, 5-19.
- López, E. y Dolera, M. (2008). La evaluación del riesgo en el contexto de la ley penal juvenil. *Revista de intervención psicosocioeducativa en la desadaptación social*, 1, 41-56.
- López, F., Carpintero, E., Del Campo, A., Lázaro, S. y Soriano, S. (2011). *Intervención educativa y terapéutica: Programa menores infractores*. Madrid: Pirámide.
- López, F., Hernández, A. y Carpintero, E. (1994). *Los abusos sexuales de menores: lo que recuerdan los adultos*. Madrid: Ministerio de Asuntos sociales.
- López, M. J., Alba, J. L. y Garrido, V. (2007). Concreción del “superior interés del menor” en la intervención con menores en conflicto social. En F. J. Roríguez y C. Becedóniz (Eds.), *El menor infractor. Posicionamiento y realidades* (pp. 47-80). Oviedo: Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.
- Lorca, J. (2001). Las medidas de protección de menores y la intervención de la entidad pública en la L.O.R.P.M. 5/2000 de Responsabilidad Penal de los Menores. *Estudios Jurídicos. Ministerio Fiscal*, 1, 79-100.
- Lösel, F. (2000). ¿Existe un tratamiento eficaz para la psicopatía?: Qué sabemos y qué deberíamos saber. En A. Raine y J. Sanmartín, *Violencia y psicopatía* (pp. 235-272). Barcelona: Ariel.

- Lotz, R. y Lee, L. (1999). Sociability, school experience and delinquency. *Youth and Society*, 31, 351-370.
- Lowenkamp, C. T. Latessa, E. J. y Holsinger, A. M. (2006). The risk principle in action: What have we learn from 13.676 offenders and 97 correctional programs?. *Crime and Delinquency*, 52, 77-93.
- Luciano, C. (2001a). *Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT): Libro de casos*. Valencia: Promolibro.
- Luengo, A., Otero, J. M., Mirón, L. y Romero, E. (1992). *Análisis psicosocial del consumo de drogas en los adolescentes gallegos*. Junta de Galicia: Comisionado del Plan Autonómico sobre Drogodependencias.
- Luengo, M. A., Otero-López, J. M., Mirón, L. y Romero, E. (1995). *Análisis psicosocial del consumo de drogas en los adolescentes gallegos*. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.
- Luengo, M. A., Romero, E., Gómez-Fraguela, J., Guerra, A. y Lence, M. (2002). *La prevención del consumo de drogas y la conducta antisocial en la escuela: análisis y evaluación de un programa*. Madrid: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
- Luhmann, N. (1998). *Sociología del riesgo*. Triana, México: Universidad Iberoamericana.
- Lund, J. y Merrell, J. (2001). Social and antisocial behavior of children with learning and behavioural disorders: Construct validity of the Horne and Community Social Behavior Scales. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 19 (2), 112-122.
- Lykken, D. T. (1995). *The antisocial personalities*. New Jersey: LEA.
- Maguin, E. y Loeber, R. (1996). Academic performance and delinquency. En M. Tonry and D. P. Farrington (Eds.), *Crime and Justice* (pp. 145-264). Chicago: University of Chicago Press,.
- Maguin, E., Hawkins, J. D., Catalano, R. F., Hill, K., Abbott, R. y Herrenkohl, T. (1995). *Risk factors measured at three ages for violence at age 17-18*. Paper presented at the American Society of criminology, Boston, MA.
- Mahoney, J. L., Stattin, H. (2000). Leisure activities and adolescent antisocial behavior: The role of structure and social context. *Psychological Bulletin*, 125 (6), 701-736.
- Marmonstein, N. y Iacono, W.G. (2003). Major depression and conduct disorder in a twin sample: Gender, functioning, and risk for the future psychopathology. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 42 (2), 225-233.
- Marshall, J., Egan, V., English, M. y Jones, R. M. (2006). The relative validity of psychopathology versus risk/needs-based assessments in the prediction of adolescent offending behavior. *Legal and Criminological psychology*, 11, 197-210.

- Martín, A. (1995). La minoría de edad penal, en Del Rio, L. (Dir.). *Circunstancias modificativas de la Responsabilidad criminal*. CGPJ, Madrid.
- Martín, E. y Moncada, S. (2003). Programas de prevención de ocio alternativo. *Adicciones*, 15 (2), 327-346.
- Martín, M. T. (2001). Modelos de justicia juvenil: análisis de derecho comparado. *La Responsabilidad penal de los menores*. Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca.
- Martín, M. y Velarde, O. (2001). *Informe Juventud en España 2000*. Madrid: INJUVE.
- Martínez, M. I. (1983). La minoría de edad penal, *Cuadernos de Política Criminal*, Núm. 20.
- Martínez, E. (1989). ¿Tratamiento penal para menores? En *Cáritas Española* (p.18). Madrid, España.
- Martínez, A. y Redondo, S. (2013). Carreras delictivas juveniles y tratamiento. *Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria*, 54, 171-183.
- Martorell, J. L. (1996). *Psicoterapias: Escuelas y conceptos básicos*. Madrid: Pirámide.
- Matsueda, R. L. y Anderson, K. (1998). The dynamics of delinquent peers and delinquent behavior. *Criminology*, 36, 269-308.
- Maynard, R. A. (1997). *Kids having kids: Economic costs and social consequences of teen pregnancy*. Washington DC: Urban Institute Press.
- McCord, J. (1978). A 30-year follow-up of treatment effects. *American Psychologist*, 33 (3), 284-289.
- McCord, J. (1982). A longitudinal view of the relationship between paternal absence and crime. McCord, J. (1982). En J. Gunn and D. P. Farrington (Eds.), *Abnormal Offenders, Delinquency, and the Criminal Justice System*. Chichester, UK: John Wiley and Sons.
- McCord, J. (1997). On Discipline. *Psychological Inquiry*, 8 (3), 215-217.
- McCord, J., y Conway, K. P. (2002). Patterns of juvenile delinquency and co-offending. En R. Waring, y D. Weisburd (Eds.), *Crime and social organization* (pp. 15-30). New Brunswick, NJ: Transaction.
- McCown, W. y DeSimone, P. A. (1993). Impulses, impulsivity, and impulsive behaviors: A historical review of a contemporary issue. En W. McCown, J. L. Johnson y M. B. Shure (Eds.), *The impulsive client. Theory, research, and treatment*. Washington: American Psychological Association.
- McGloin, J. M. y Piquero, A. R. (2009). 'I wasn't alone': Collective behaviour and violent delinquency. *Australian and New Zealand Journal of Criminology*, 42, 336-353.

- McGuire, J. (2001c). Defining correccional programs. En L. Motiuk y R.C. Serin (eds.), *Compendium 2000 on Effective Correccional Programming* (cap 1). Ottawa (Canadá): Correccinal Service of Canada.
- McGuire, J. (2004). Commentary: promising answers, and the next generation of questions. *Psychology, Crime & Law*, 10 (3), 335-345.
- McGuire, J. (2006). General offending behavior programs: concept, theory, and practice. En C. R. Hollin y E. J. Palmer (Ed.), *Offending behavior programmes* (pp. 69-111). Chichester (Reino Unido): Wiley.
- McKee, M. (1999). Sex and drugs and rock and roll. *British Medical Journal*, 318, 1300-1301.
- McKenney, A. y Dattilo, J. (2001). Effects of an intervention within a sport context on the prosocial behavior and antisocial behavior of adolescents with disruptive behavior disorders. *Therapeutic Recreation Journal*, 35 (2), 123-140.
- McLaren, K. L. (2000). *Tough is not enough – Getting smart about youth crime. A review of research on what works to reduce offending by young people*. Wellington, New Zealand: Ministry of Youth Affairs.
- McMurran, M. (2001a). Offenders with drug problems. En C. R. Hollin (Ed.), *Offender assessment and treatment* (pp. 481-493). Chichester (Reino Unido): Wiley.
- McMurran, M. (2001b). Offenders with personality disorders. En C. R. Hollin (ed.), *Offender assessment and treatment* (pp. 467-479). Chichester (Reino Unido): Wiley.
- McMurran, M. y Hollin, C. (1993). *Young offenders and alcohol-related crime: A practitioner's guidebook*. Oxford England: John Wiley y Sons.
- McNeal, R. (1995). Extracurricular activities and high school dropouts. *Sociology of Education*, 68, 62-81.
- Megías, E. y Elzo, J. (2006). *Jóvenes, valores y drogas*. Madrid: FAD/Caja Madrid.
- Mendizábal, L. (1977). *Derecho de Menores. Teoría General*. Madrid: Ediciones Pirámide.
- Menéndez, B., Rodríguez, M., Becedóniz, C., Herrero, F. J. y Bernardo, A. (2008). Influjo del contexto escolar y grupo de iguales en el comportamiento reincidente de menores infractores. En F. J. Rodríguez, C. Bringas, F. Fariña, R. Arce y A. Bernardo (Eds.). *Psicología Jurídica. Entorno Judicial y Delincuencia* (pp.202-212). Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo.
- Mestre, J. M., Guil, R. y Mestre, R. (2005). Inteligencia emocional: resultados preliminares sobre su naturaleza y capacidad predictiva a partir de un estudio correlacional en muestras de estudiantes de secundaria. *Revista Española de Orientación y Psicopedagógica*, 16, 269-281.

- Mestre, V., Samper, P. y Frías, M. D. (2002). Procesos cognitivos predictores de la conducta prosocial y agresiva: La empatía como factor modulador. *Psicothema*, 2, 227-232.
- Miller, J. D. y Lynam, D. R. (2006). Reactive and proactive aggression: Similarities and differences. *Personality and Individual Differences*, 41, 1469-1480.
- Miller, P. A. y Einserberg, N. (1988). The relation of empathy to aggressive and externalizing/antisocial behavior. *Psychological Bulletin*, 10 (3), 324-344.
- Ministerio de Sanidad y Política Social. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. (Junio 2009). *Informe de la encuesta estatal sobre uso de drogas en estudiantes de enseñanzas secundarias*. (ESTUDES) 2008. Extraído de <http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/observa/pd/Estudes2008Web.pdf>
- Ministerio de sanidad y Política Social. Dirección general de Política Social, de las Familias y de la Infancia (2008). *Estadística básica de medidas impuestas a los menores infractores*.
- Mir, S. (2006). *Derecho penal*. Parte General (8ª ed.). Barcelona: Reppertor.
- Mirón, L., Luengo, M. A., Sobral, J. y Otero-López, J. M. (1988). Un análisis de la relación entre ambiente familiar y delincuencia juvenil. *Revista de Psicología Social*, 3, 165-180.
- Mirón, L., Serrano, G., Godás, A., y Rodríguez, D. (1997). Conducta antisocial y consumo de drogas en adolescentes españoles. *Análisis y Modificación de Conducta*, 23, 255-282.
- Mischel, W. (1980). *Personalidad y evaluación*. Trillas, Méjico.
- Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. *Psychology Review*, 100, 674-701.
- Moffitt, T. E. y Caspi, A. (1998). Annotation: Implications of violence between intimate partners for child psychologists and psychiatrists. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 39 (2), 137-144.
- Molinet, E., Velasquez, D. y Estrada, C. (2007). Teorías implícitas sobre la estabilidad de la naturaleza humana y del entorno social, y su relación con la reincidencia delictiva en internos reclusos en el centro de cumplimiento penitenciario de la comuna de Punta Arenas Magallania. *Magallania*, 35 (2), 151-157.
- Montero, M. G. (2007). Alcohol y Salud Pública en las Américas: un caso para la acción. *México: Organización Panamericana de Salud*, 3-14.
- Montero, T. (2009). *La justicia juvenil en España: comentarios y reflexiones*. Madrid: La Ley.
- Montero, T. (2014). La criminalidad juvenil en España (2007-2012). *Revista Criminalidad*, 56 (2), 247-261.

- Moore, J. W. (1991). *Going down to the barrio: homeboys in change*. Philadelphia: Temple University Press.
- Moral, M. V., Ovejero, A. y Pastor, J. (2004). Modelado familiar y del grupo de iguales sobre la experimentación juvenil con sustancias psicoactivas. *Boletín de Psicología*, 81, 33-68.
- Morales, H. y Da Agra, C. (2015). Efectividad de las medidas socioeducativas impuestas por la Administración de Justicia Juvenil en la reintegración social de adolescentes infractores: una revisión crítica. *Revista Anales Internacionales de Criminología*, 51 (1-2), 133-155.
- Morillas, D. L. (2013). Análisis de las principales variables de la delincuencia juvenil en España. *Revista de Derecho, Empresa y Sociedad*, 3, 173-210.
- Morris, E. K. y Braukmann, C. J. (1987). The dimensions of applied behavior analysis for crime and delinquency. En E. K. Morris y C. J. Braukmann (Eds.), *Behavioral Approaches to Crime and Delinquency*. Nueva York: Plenum Press.
- Mossman, D. (1994). Assessing predictions of violence: Being accurate about accuracy. *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 62 (4), 783-792.
- Munsch, J. y Blyth, D. (1993). An analysis of the functional nature of adolescents supportive relationships. *Journal of Early Adolescence*, 13, 132-153.
- Muñoz, J. J. (2004). Factores de riesgo y protección de la conducta antisocial en adolescentes. *Revista de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barna*, 31, 21-37. Doi: http://www.nexusediciones.com/pdf/psiqui2004_1/ps-31-1-004.pdf
- Muñoz-Rivas, M. J., De Lucas, G. y Graña, J. L. (2007). *Estudio exploratorio de los factores de riesgo y de protección psicosociales asociados al consumo de drogas en la población infanto-juvenil de la red de centros de protección de menores de la comunidad de Madrid*. Madrid: Consejería de Sanidad y Consumo.
- Muñoz-Rivas, M. J., Graña, J. L., Peña, M. E. y Andreu, J. M. (2002). Influencia de la conducta antisocial en el consumo de drogas ilegales en población adolescente. *Adicciones*, 14, 313-320.
- Muñoz-Rivas, M. J., Graña, J. L., y Cruzado, J. A. (2000). *Factores de riesgo en drogodependencias: Consumo de drogas en adolescentes*. Madrid: Sociedad Española de Psicología Clínica, Legal y Forense.
- Muñoz-Rivas, M. y Graña, J. L. (2005). Influencia del grupo de iguales y satisfacción con la ocupación del tiempo libre. En L. Ezpeleta Ascaso. Factores de riesgo en psicopatología del desarrollo (pp. 389-409). Barcelona: Masson.

- Muñoz-Rivas, M.J., Graña, J. L., Andreu, J.M. y Peña, M.E. (2000). Variables psicológicas relacionadas con el consumo de drogas en adolescentes: depresión y autoconcepto. *Revista Española de Drogodependencias*, 25 (2), 170-181.
- Musitu, G., Jiménez, T. I. y Murgui, S. (2007). Funcionamiento familiar, autoestima y consumo de sustancias: un modelo de mediación. *Revista de Salud Pública de México*, 49 (1), 3-10.
- Naciones Unidas. (2008, octubre). Convención sobre los Derechos del Niño. Disponible en: CRC/C/GBR/CO/4
- Nagin, D. S. y Paternoster, R. (2000). Population heterogeneity and state dependence: State of the evidence and directions for future research. *Journal of Quantitative Criminology*, 16, 117-144.
- Nagin, D. S., y Paternoster, R. (1991). On the relationship of past to future participation in delinquency. *Criminology*, 29, 163-189.
- Nárvaez, D. y Rest, J. (1995). The four components of acting morally. In Kurtines WM, Gewirtz JL (Eds) *Moral Development: An Introduction*. pp. 385-400. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
- Navarro, J. J., Uceda, F. X. y Pérez, J. V. (2013). La construcción del ocio en adolescentes y su influencia en el desarrollo de trayectorias delictivas. *Cuadernos de Trabajo Social*, 26 (2), 455-465.
- Nicholson, R. C. (1970). Transactional analysis: A new method for helping offenders. *Federal Probation*, 34, 29-39.
- Nogueira, S. (2003). Observaciones críticas al proceso penal de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad de Menores. *Anuario de Justicia de Menores*, N° 3.
- Nottelman, E. E. y Jensen, P. S. (1995). Comorbidity of disorders in children and adolescent: Development perspectives. En T. H. Ollendick y R. J. Prinz (Eds.). *Advances in clinical psychology*, New York: Plenum, 17, 109-155.
- Novo, M., Seijo, D. y Vilariño, M. (2008). Competencia social en menores en riesgo de desviación social y familiar. En F. J. Rodríguez, C. Bringas, F. Fariña, R. Arce y A. Bernardo (Eds.), *Psicología Jurídica. Familia y Victimología* (pp. 193-198). Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo.
- O'Donnell, J. J., Hawkins, D. y Abbott, R. D. (1995). Predicting serious delinquency and substance use among aggressive boys. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 63, 529-537.
- O'Moore, M. y Kirkham (2001). Self-esteem and its relationship to bullying behavior. *Aggressive Behavior*, 27, 269-283.

- O'Neill, R. E., Horner, R. H., Albin, R. W., Storey, K. y Sprague, J. R. (1990). *Functional analysis of problem behavior*. Sycamore, IL: Sycamore Publications.
- Ogloff, J. R. P. (2002). Identifying and accommodating the needs of mentally ill people in gaols and prisons. *Psychiatry, Psychology & Law*, 9, 1-13.
- Ogloff, J. R. P. y Davis, M. R. (2004). Advances in offender assessment and rehabilitation. *Psychology, Crime & Law*, 10 (3), 229-242.
- Oliva, J. M. y Acevedo J. A. (2005). La importancia de la enseñanza de las ciencias en Primaria y Secundaria hoy. Algunas propuestas de futuro. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 2 (2), 241-250.
- Olivan, G. (2002). Estado de salud de jóvenes varones delincuentes. *Aten Primaria*, 29, 421-424.
- Olver, M. E., Stockdale, K. C. y Wormith, J. S. (2009). Risk assessment with young offenders: A metaanalysis of three assessment measures. *Criminal Justice and Behavior*, 36 (4), 329-353.
- Olweus, D. (1979). Stability of aggressive reaction patterns in males: A review. *Psychological Bulletin*, 86, 852-875.
- Onifade, E., Davidson, W., Campbell, C., Turke, G., Malinowski, J. y Turner, K. (2008). Predicting the who, what and when of delinquency with the Youth Level of Service Case Management Inventory. *Criminal Justice and Behavior*, 35, 474-483.
- Orejudo, S., Mígueles, E. y Arévalo, R. (1997). *Evaluación de perfiles de riesgo en una población rural*. II Jornadas sobre Prevención Municipal de las Drogodependencias, Madrid.
- Organización de Naciones Unidas. (1998). *Informe sobre Utilización y aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas en Materia de prevención del delito y justicia penal*. Doi: E/CN.15/1998/8/Add.1)
- Organización de Naciones Unidas. (2003). *Informe sobre la Juventud Mundial*. Consejo Económico y Social. Doi: E/CN.5/2003/1.
- Ortega, E., García, J. y De la Fuente, L. (2009). *Estudio meta-analítico de la Reincidencia de los Menores infractores*. Comunicación presentada en el XI Congreso de Metodología de las ciencias Sociales y de la Salud, Málaga.
- Ortega, E., García, J. y Frías M. (2014). Meta-análisis de la reincidencia criminal en menores: Estudio de la investigación española. *Revista mexicana de Psicología*, 31 (2), 111-123.
- Osgood, D. W., Anderson, A. L. y Shaffer, J. N. (2005). Unstructured leisure in the after-school hours. En J. L. Mahone, R. W. Larson, y J. S. Eccles (Eds.), *Organized activities as contexts of development: Extracurricular activities, after-school and community programs* (pp.45-64). New Jersey: Lawrence Erlbaum.

- Osgood, D.W., Wilson, J. K., O'Malley, P. M., Bachman, J. G. y Johnson, L. D. (1996). Routine activities and individual behavior. *American Sociological Review*, 61 (4), 635-655.
- Otero, J. M., Mirón, I., y Luengo, A. (1989). Influence of family and peer group on the use of drugs by adolescents. *The Internacional Journal of the Addictions*, 24, 1065-1082.
- Otero, J. M., Romero, E. y Luengo, M. A. (1994). Identificación de factores de riesgo de la conducta delictiva: Hacia un modelo integrador. *Análisis y Modificación de Conducta*, 20, 675-709.
- Ovalles, A. (2007). Incidencia de la disfunción familiar asociada a la delincuencia juvenil. *Capítulo Criminológico*, 35, 85-107.
- Pacheco, J. T. y Hutz, C. S. (2009). Family variables that predict antisocial behavior in adolescent who committed criminal transgressions. *Psicología: Teoría e Pesquisa*, 25, 213-219.
- Palacio, J. R. (2000). "El principio del superior interés del menor". *Surgam*, 466-467.
- Palmer, E. (2003). *Offending Behavior: Moral Reasoning, Criminal Conduct and the Rehabilitation of Offenders*. Cullompton: Willian Publising.
- Panak, W. F., y Garber, J. (1992). Role of aggression, rejection and attributions in the prediction of depression in children. *Development and Psychopathology*, 4, 145-165.
- Parker, J. G., y Asher, S. R. (1987). Peer relations and later personal adjustment: Are low-accepted children at risk? *Psychological Bulletin*, 102, 357-389.
- Parsloe, P. (1978). *Juvenile justice in Britain and the United States: the balance of needs and Rights*. Londres: Routledge & Kenan.
- Patterson, G. R. (1992). Developmental changes in Antisocial Behavior. En P. Ray (Eds.), *Aggression and violence throughout life span* (pp. 52-82). Newbury Park: Sage Publications.
- Patterson, G. R., Capaldi, D. M. y Bank, L. (1991). An starter model for predicting delinquency. En D. J. Pepler y K. H. Rubin (Eds.), *The development and treatment of childhood aggression* (pp. 139-168). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Peña, M. E. (2005). *Conducta antisocial en adolescentes: Factores de riesgo y de protección*. Tesis doctoral. Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.
- Peña, M. E. y Graña, J. L. (2006). Agresión y conducta antisocial en la adolescencia: una integración conceptual. *Psicopatología Clínica, Legal y Forense*, 6, 9-23.
- Peñafiel, E. (2009). Factores de riesgo y de protección en grupos de adolescentes policonsumidores. *Psicopatología Clínica, Legal y Forense*, 9, 63-84.

- Pereda, N. y Forns, M. (2007). Prevalencia y características del abuso sexual infantil en estudiantes universitarios españoles. *Child Abuse & Neglect*, 31, 417-426.
- Pérez, F. (2006). *Menores infractores: Estudio empírico de la respuesta penal*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Pérez, A. I. (2007). *El Tratamiento jurídico-penal de los menores infractores –LO 8/2006- aspectos de derecho comparado y especial consideración del menor infractor inmigrante*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Pérez, J. V. y Uceda, F. X. (2009). Aproximación teórica a los adolescentes en conflicto con la ley: paradigma y modelos. *Servicios Sociales y Política Social*, 87, 87-92.
- Pérez, J. y Torrubia,, R. (1985). Sensation seeking and antisocial behavior in a student sample. *Personality and Individual Differences*, 6, 401-403.
- Peterson, C. A. (1981). *Leisure lifestyle and disabled individuals*. Comunicación presentada en Horizons West Therapeutic Recreation Symposium, San Francisco State University, San Francisco.
- Peterson, C. A. (1989). The dilemma of philosophy. En D. Compton (Ed.), *Issues in therapeutic recreation: A profession in transition* (pp. 21-34). Champaign, IL: Sagamore Publishing Company.
- Peterson, C. A. y Gunn, S. L. (1984). *Therapeutic recreation program design: Principles and practices*. (2ª ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Petrila, J. y Skeem, J. (2003). An introduction to the special issues on juvenile psychopathy and some reflections on the current debate. *Behavioral Sciences and the Law*, 21, 689-694.
- Pevalin, D. J., Wade, T. J. y Brannigan, A. (2003). Precursors, consequences and implications for stability and change in pre-adolescent antisocial behaviors. *PrevsCi*, 4 (2):123-36.
- Pfeiffer, C. (2004). *Violencia juvenil: concepto, tipos e incidencia*. VII Reunión Internacional sobre Biología y Sociología de la Violencia. Valencia: Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia.
- Piquero, A. R., Farrington, D. P. y Blumstein, A. (2007). *Key issues in criminal career research: New analyses of the Cambridge study in delinquent development*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Piquero, A. R., Hawkins, J. D., Kazemian, L., Petechuk, D. y Redondo, S. (2013). Serie especial: Transición desde la delincuencia juvenil a la delincuencia adulta. *Revista Española de Investigación Criminológica*, 1 (11).
- Piquero, A. R., Jennings, W. G., y Farrington, D. P. (2009). *Effectiveness of Programs Designed to Improve Self-Control*, Estocolmo: Brottsförebyggande radet.

- Piquero, A. R., Paternoster, R., Brame, R., Mazerolle, P., y Dean, C. W. (1999). Onset age and specialization in offending behavior. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 36, 275-299.
- Pitch, T. (1980). *Teoría de la desviación social*. (Nueva Imagen. Ed.). México.
- Plan Nacional sobre Drogas (2000). *Estrategia Nacional sobre Drogas (2000-2008)*. Madrid: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
- Plan Nacional sobre Drogas (2000). *Memoria 2000*. Madrid:Ministerio del Interior. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
- Plan Nacional sobre Drogas (2007). *Encuesta sobre drogas a la población escolar 2006 (ESTUDES)*. Madrid: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
- Planchadell, A. (2002). La intervención de la víctima en la instrucción del proceso penal de menores, en J. L. González, J. M. Tamarit, y J. L. Gómez, (coords.). *Justicia penal de menores y jóvenes. Análisis sustantivo y procesal de la nueva regulación* (pp. 195-210). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Platt, A. M. (1988). *Los salvadores del niño o la invención de la delincuencia* (2ª ed.). México: Siglo XXI Editores.
- Polaino, M. (1985). *Minoría de edad penal (art. 8.2º, del Código Penal)”. Comentarios a la Legislación Penal. La reforma del Código Penal de 1983*. Madrid: Editorial Revista de Derecho privado.
- Polaschek, D. L. L. y Reynolds, N. (2001). Assessment and treatment: violent offenders. En C. R. Hollin (Ed.), *Offender assessment and treatment* (pp. 416-431). Chichester (Reino Unido): Wiley.
- Poliano-Orts, M. (2007). La irrupción del Derecho Penal del enemigo en la legislación penal de menores. *Crónica Jurídica Hispalense*, 5. Sevilla: Tirant lo Blanch.
- Pons, J., Berjano, E., y García, F. (1996). Variables psicosociales que discriminan el consumo abusivo de alcohol en la adolescencia. *Adicciones*, 8, 177-191.
- Pons, J. y Picazo, S. (1998). Revisión de variables psicológicas y psicosociales implicadas en la etiología del abuso de alcohol en adolescents. *Revista de Psicología Aplicada*, 8, 53-87.
- Pozuelo, L. (2009). El futuro del Derecho Penal Juvenil: de un Derecho Penal de Menores a un Derecho Penal de adultos. *Revista para el Análisis del Derecho*, Barcelona. Doi: <http://www.indret.com/pdf/596.pdf>
- Prinstein, M. J., Boergers, J., y Spirito, A. (2001). Adolescents' and their friends' health-risk behavior: Factors that alter or add to peer influence. *Journal of Pediatric Psychology*, 26, 287-298.

- Prochaska, J. O. y DiClemente, C. C. (1992). Stages of change in the modification of problema behaviors. En M. Hersen, R. M. Eisler y P. M. Miller (Eds.), *Progress in behavior modification* (pp. 184-214). Sycamore, IL: Sycamore Press.
- Prochaska, J. O. y Prochaska, J. M. (1993). Modelo transteórico de cambio para conductas adictivas. En M. Casas y M. Gossop (Eds.), *Tratamientos psicológicos en drogodependencias: recaída y prevención de recaídas* (pp. 85-136). Barcelona: Ediciones Neurociencias.
- Prochaska, J. O., DiClemente, C. C. y Norcross, J. C. (1992). En search of how people change. Applications to addictive behaviors. *American Psychologist*, 47, 1102-1114.
- Puig, J. M. y Trilla, J. (1996). *La pedagogía del ocio*. Barcelona: Laertes.
- Pulkkinen, L. (1996). Proactive and Reactive aggression in early adolescence as precursors to anti and prosocial behaviors in young adults. *Aggressive Behaviour*, 22, 241-257.
- Quinsey, V. L., Book, A. y Lalumiere, M. L. (2001). A factor analysis of traits related to individual differences in antisocial behavior. *Criminal Justice and Behavior*, 28, 522-536.
- Quinton, D., Pickles, A., Maughan, B. y Rutter, M. (1993). Patterns, peers and pathways: Assortative pairing and continuities in conduct disorders. *Development and Psychopathology*, 5, 763- 783.
- Raine, A. (2000). Psicopatía, violencia y neuroimagen. En A. Raine y J. Sanmartín (Eds.), *Violencia y psicopatía* (pp. 59-88). Barcelona: Ariel.
- Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Boletín Oficial del Estado, 30 de agosto de 2004, núm. 209, p. 30127.
- Real Decreto 232/2002, de 1 de marzo, por el que se regula el registro de sentencias sobre responsabilidad penal de los menores (BOE núm. 65, de 16 de marzo de 2002, pp. 11078-11080).
- Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (BOE núm. 33, de 7 de febrero de 2009, pp. 12994-13007).
- Rechea, C. y Fernández, E. (2006). Continuity and change in the Spanish Juvenile Justice System. En J. Junger-Tass, y S. Decker (Eds.). *Handbook of Juvenile Justice* (pp. 325-350). Holland: Kluwer/Springer.
- Rechea, C. (1999). Delincuencia juvenil femenina: una aproximación a su realidad en España a través de autoinforme. En Montañés, J. Rechea, C. y L. Arroyo, (Coords), *Estudios de Criminología II* (pp. 323-342). Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

- Rechea, C. (2008). Conductas antisociales y delictivas de los jóvenes de España. *Informe para el Consejo de Poder Judicial*. Doi: http://www.uclm.es/Criminología/pdf/16_2008.pdf
- Rechea, C. y Cuervo, A. L. (2009). Menores agresores en el ámbito familiar. Estudio de casos. *Centro de Investigación en Criminología*, 17. Doi: <http://www.uclm.es/criminologia/pdf/17-209.pdf>
- Rechea, C. y Fernández, E. (2000). Impacto de la nueva Ley penal juvenil en Castilla-La Mancha. *Centro de Investigación en Criminología*, 7, 1-60. Doi: http://www.uclm.es/Criminologia/pdf/07_2000.pdf
- Rechea, C. y Fernández, E. (2001). Panorama actual de la delincuencia juvenil. En E. Giménez-Salinas (Dir.). *Justicia de Menores: una justicia mayor* (pp. 345-374). Madrid: Consejo General del Poder Judicial.
- Rechea, C., Barberet, R., Montañés, J. y Arroyo, L. (1995). La delincuencia juvenil en España: autoinforme de los jóvenes. Madrid: Universidad de Castilla-La Mancha/Ministerio de Justicia e Interior.
- Rechea, C., Fernández, E. y Cuervo, A. L. (2008). Menores agresores en el ámbito familiar. *Centro de Investigación en Criminología*, 15. Disponible en: http://www.uclm.es/Criminologia/pdf/15_2008.pdf
- Reckles, W. C. (1961). A new theory of delinquency and crime. *Federal Probation*, 25, 42-46.
- Redondo, A., Martínez, A. y Andrés-Pueyo, A. (2011). *Factores de éxito asociados a los programas de intervención con menores infractores*. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
- Redondo, S. (1993). Evaluar e Intervenir en las Prisiones. *Análisis de conducta aplicado*. Barcelona:PPU.
- Redondo, S. (2008a). *Manual para el tratamiento psicológico de los delincuentes*. Madrid: Pirámide.
- Redondo, S. (2008b). Individuos, sociedades y oportunidades en la explicación y prevención del delito: Modelo del Triple Riesgo Delictivo (TRD). *Revista Española de Investigación Criminológica*, 7 (6). Disponible en: www.criminologia.net.
- Redondo, S. y Garrido, V. (2001). *Violencia y delincuencia juvenil*. Mendoza (Argentina): Ediciones Jurídicas Cuyo.
- Redondo, S., Funes, J. y Luque, E. (1993). *Justicia penal i reincidencia*. Barcelona: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

- Redondo, S., Martínez, A. y Andrés, .A. (2011). *Factores de éxito asociados a los programas de intervención con menores infractores*. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
- Redondo, S., Sánchez-Meca, J. y Garrido, V. (2002a). Los programas psicológicos con delincuentes y su efectividad: La situación europea. *Psicothema*, 14, 164-173.
- Redondo, S., Sánchez-Meca, J. y Garrido, V. (2002b). Crimem treatment in Europe: A review of outcome studies. En J. McGuire, (Ed.), *Offender Rehabilitation and Treatment: Effective Programmes and Policies to Reduce Re-offending* (pp. 113-141). Wiley: Sussex.
- Redondo, S., Sánchez-Meca, J., y Garrido, V. (1999a). The influence of treatment programmes on the recidivism of juvenile and adult offenders: An European meta-analytic review. *Psychology, Crime, & Law*, 5, (3), 251-278.
- Redondo, S., Sánchez-Meca, J., y Garrido, V. (1999b). Tratamiento de los delincuentes y reincidencia: una evaluación de la efectividad de los programas aplicados en Europa. *Anuario de Psicología Jurídica*, Vol. 9, 11-37.
- Redondo, S. y Garrido, V. (2013). *Principios de Criminología* (4ª Ed.). Valencia: Ed. Tirant lo Blanch.
- Regnerus, M. D. (2001). Adolescent socialization and avoiding trouble: A perspective on religious influences. *Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences*, 61, (11-A): 4556.
- Reiss, A. J. y Farrington, D. P. (1991). Advancing knowledge about co-offending: Results from a prospective longitudinal survey of London males. *Journal of Criminal Law and Crimilogy*, 82, 360-395.
- Rennie, C. y Dolan, M. (2010). Predictive validity of the Youth Level of Service/Case management. *Journal of Forensic Psychiatry and Psychology*, 1, 1-19.
- Ríos, C. (1998). Grupos vulnerables y derecho penal: el caso de los menores infractores. *Bien común y gobierno*, 4 (47).
- Ríos, J. C. (2001). La Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, cambio de paradigma: del niño en peligro al niño peligroso. *Icade*, 53, 203-241.
- Robins, L. N. (1978). Sturdy childhood predictors of adult antisocial behaviour: Replications from longitudinal studies. *Psychological Medicine*, 8, 611-622.
- Robins, L. N. (1995). Sociocultural trend affecting the prevalence of adolescent problems. En M. Rutter (Ed.), *Psychological disturbances in young people: Challenges for prevention* (pp. 367-384). Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Rodríguez, A. (2013). Menores infractores y responsabilidad penal. En Rodriguez, A. (coord.) *Investigación policial y sus consecuencias jurídicas* (pp. 425-457). Madrid: Dykinson.

- Rodríguez, A. y Torrente, G. (2003). Interacción familiar y conducta antisocial. *Boletín de Psicología*, 78, 7-19.
- Rodríguez, C. (2001). La explicación psicodinámica del delito. Algunas consideraciones psicoanalíticas sobre la personalidad del delincuente. En M. Clemente y P. Espinosa. *La mente criminal* (pp. 61-78). Madrid: Dykinson.
- Rodríguez, F. J., Bringas, C., Rodríguez, L., López-Cepero, J., Pérez, B. y Estrada, C. (2011). Drug abuse and criminal family records in the criminal history of prisoners. *The European Journal of Psychology Applied to Legal Context*, 3, 89-105.
- Rodríguez. (2005). *Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores. Especial análisis de la reparación del daño*. Madrid: Difusa Editorial.
- Roesch, R. (2007). Delincuencia juvenil: riesgo y prevención. En J. M. Sabucedo y J. Sanmartín (Eds.), *Los escenarios de la violencia* (pp. 215-232). Barcelona: Ariel.
- Romero, E. (1996). *La predicción de la conducta antisocial: Un análisis de las variables de personalidad*. Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela.
- Romero, E., Luengo, M. A., Carrillo, M. T. y Otero, J. M. (1994c). The Act Frequency Approach to the study of impulsivity. *European Journal of Personality*, 8, 119-133.
- Romero, E., Luengo, M. A., Gómez-Fraguela, J. A. y Otero, J. M. (1998). *Familia, igual y conducta antisocial: Examen de un modelo interaccional*. Comunicación presentado en el Congreso Crimes Ibéricos. Braga, Portugal.
- Romero, E., Sobral, J. y Luengo, M. A. (1999). *Personalidad y delincuencia. Entre la biología y la sociedad*. Granada: Grupo Editorial Universitario.
- Rössner, D. (1999). El Derecho Penal de menores en Alemania, en I. Giménez-Salinas y E. Colomer, (Dir.): *Legislación de Menores en el Siglo XXI: análisis de derecho comparado, Estudios de Derecho Judicial 18*. Madrid: Consejo General del Poder Judicial.
- Rotella, I. (2000). Abierto hasta el amanecer. Un programa de intervención juvenil. En D. Comas (coord.). *Ocio y tiempo libre: identidades y alternativas. Revista de estudios de juventud*, 50, 89-97.
- Rothbaum, F. y Weisz, J. R. (1994). Parental caregiving and child externalizing behavior in nonclinical samples: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 16, 55-74.
- Ruiz, L. R. y Navarro J. I. (2004). *Menores. Responsabilidad penal y atención psicosocial*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Ruiz-Lázaro, P. J. (2004). *Promoviendo la adaptación saludable de nuestros adolescentes*. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo.

- Ruiz-Lázaro, P. J., Puebla, R., Cano, J. y Ruiz, P. M. (2000). Proyecto de educación para la salud “Promoviendo la adaptación saludable de nuestros adolescentes”. *Atención Primaria*, 26, 51-57.
- Rutter, M. (2005). Commentary: What is the meaning and utility of the psychopathy concept? *Journal of Abnormal Child Psychology*, 33, 499-503.
- Rutter, M., Giller, H. y Hagell, A. (2000). *La conducta antisocial de los jóvenes*. Madrid: Cambridge University Press.
- Rutter, M. (1990). Psychological resilience and protective mechanisms. En J. Rolf, A. S. Masten, D. Cicchetti, K. H. Nuechterlein y S. Weintraub (Eds.), *Risk and protective factors in the development of psychopathology* (pp. 181-214). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Saez, J. (2001). La imparcialidad y situaciones de contaminación en la nueva Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor. *Anuario de Justicia de Menores*, 1, 55-79.
- Salekin, R. (2002). Psychopathy and therapeutic pessimism. *Clinical Psychology review*, 22, 79-112.
- Salekin, R., Rogers, R. y Machin, D. (2001). Psychopathy in youth: Pursuing diagnostic clarity. *Journal of Youth and Adolescence*, 30, 179-195.
- Salmivalli, C. (1998). Intelligent, attractive, well-behaving, unhappy: the structure of adolescents' self-concept and it's relations to their social behavior. *Journal of Research on Adolescence*, 8, 333-354.
- Samaniego, J. L.(1996). La legislación penal juvenil en Alemania, en J. J. Martínez-Pereda, *Menores Privados de Libertad*, Madrid: Consejo General del Poder Judicial.
- Sampson, R. J. y Laub, J. (1993). *Crime in the Making. Pathways and Turning Points Through Life*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sampson, R., y Laub, J. (2005). A Life-Course View of the Development of Crime. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 602, 12-45.
- San Juan, C. y Ocáriz, E. (2009). *Evaluación de la intervención educativa y análisis de la reincidencia en la Justicia de Menores en la CAPV*. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de publicaciones del Gobierno Vasco.
- San Juan, C., Ocáriz, E., y de la Cuesta, J. L. (2007). Evaluación de las medidas en medio abierto del plan de justicia juvenil de la comunidad autónoma del País Vasco. *Boletín Criminológico*, 96.
- Sancha, V. (1994). Alternativas al internamiento en prisión. En M. Clemente (coord.), *Fundamentos de la Psicología Jurídica* (pp. 407-429). Madrid: Pirámide.

- Sánchez, F. A. (1996). *La jurisdicción de menores en España (Pasado, presente y futuro)*. Tesis doctoral, S/E, Barcelona.
- Sánchez, F. A. (1999). *Antecedentes y nuevo enjuiciamiento de menores* LO 4/1992. Barcelona: Marcial Pons.
- Sánchez, L. (2002). El ocio y el tiempo libre como espacio de riesgo y sus posibilidades de prevención. En F. J. de Antonio, M. P. González y F. Munín (Coord.), *La prevención de las drogodependencias en el tiempo libre* (pp. 9-23). Madrid: Asociación Deporte y Vida.
- Sánchez, M. C. y Cantón, E. (2001). La práctica de actividad físico-deportiva de riesgo como herramienta preventiva de conductas desajustadas psicosocialmente. *Revista de Psicología del Deporte*, 10 (2), 225-236.
- Sánchez, M. I. (1998). *Minoría de edad penal y Derecho penal juvenil*. Granada: Comares.
- Sánchez, M. T. (2013). *Modelos de identificación y actividades de ocio relacionados con la inadaptación juvenil*. Tesis doctoral. Facultad de Biología de la Universidad de Murcia.
- Sánchez-Meca, J. (1996). *Avaluació internacional de la reincidencia*. Barcelona: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especializada.
- Sánchez-Meca, J. y Redondo, S. (2002). Meta-análisis de la eficacia de los programas de rehabilitación de delincuentes juveniles en Europa para la reducción de la reincidencia en el delito. Documento no publicado. Departamento de Psicología Básica y Metodología, Universidad de Murcia.
- Sarnecki, J. (2009). Delinquent Networks. Youth Co-Offending. En H. J. Schneider, (Ed.), *Internationales Handbuch der Kriminologie Band 2*. Berlin: De Gruyter Recht.
- Savater, F. (1997). Educar es universalizar. *Cuadernos de Alzate: revista vasca de cultura y de las ideas*, 16, 7-18.
- Schaps, E., DiBartolo, R., Moskowitz, J., Palley, C. S. y Churgin, S. (1981). A review of 127 drug abuse prevention evaluations. *Journal of Drug Abuse*, 11, 17-3.
- Schinke, S., Botvin, G. y Orlando, M. (1991). *Substance abuse in children and adolescents. Evaluation and intervention*. Newbury, California: Sage.
- Schmeck, K. y Poutska, F. (2001). Temperament and disruptive behavior disorders. *Psychopathology*, 34, 159-163.
- Schmidt, F., Campbell, M. A. y Houlding, C. (2011). Comparative analyses of the YLS/CMI, SAVRY, and PCL:YV in adolescent offenders: A 10-year follow-up into adulthood. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 9 (1), 23-42.

- Schmidt, F., Hoge, R. D. y Gomes, L. (2005). Reliability and validity analyses of the Youth Level of Service/Case Management Inventory. *Criminal Justice and Behavior*, 32, 329-334.
- Schwalbe, C. S. (2007). Risk assessment for juvenile justice: A meta-analysis. *Law and Human Behavior*, 31, 449-462.
- Schwalbe, C. S. (2008). A meta-analysis of juvenile justice risk assessment instruments. *Criminal Justice and Behavior*, 35, 1367-1381.
- Schweizer, K. (2002). Does Impulsivity Influence Performance in Reasoning?. *Personality and Individuals Differences*, 33, 1031-1043.
- Seagrave, D. y Grisso, T. (2002). Adolescent development and the measurement of juvenile psychopathy. *Law and Human Behavior*, 26, 219-239.
- Sealock, M. D., Gottfredson, D. C. y Gallagher, C. A. (1997). Drug treatment for juvenile offenders: Some good and bad news. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 34, 210-236.
- Sebastián, L. (1996). *La solidaridad: Guardián de mi hermano*. Barcelona: Ariel.
- Secades, R. y Fernández, J. R. (2002). Factores de riesgo familiares para el uso de drogas: Un estudio empírico español. En J. R. Fernández y R. Secades (coord.), *Intervención familiar en la prevención de las drogodependencias*, 99, 57-111. Madrid: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
- Seligman, M. E. P. (1975). *Helplessness: On depression, development and health*. San Francisco: W.F. Freeman and Company.
- Serrano, M. (2007). *Los menores en protección*. Madrid: Difusión Jurídica.
- Serrano, M.D. (2009). Evolución de la delincuencia juvenil en España (2000-2007). *Revista de Derecho Penal y Criminología* (3ª Época, núm. 2).
- Sharp, C., Aldridge, J., Medina, J., (2006). *Delinquent youth groups and offending behavior: findings from the 2004 Offending, Crime and Justice Survey*. Londres: Home Office. Recuperado de <http://www.homeoffice.gov.uk/rds/onlinepubs1.html>
- Sharp, J. G. y Bugental, J. F. T. (2001). Existencial-humanistic psychotherapy. En R.J. Corsini (ed.), *Handbook of innovative therapy* (2ª ed.) (pp. 206-217). Nueva York: John Wiley.
- Shaw, D. S. y Bell, R. Q. (1993). Developmental theories of parental contributors to antisocial behavior. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 21, 493-518.
- Shope, J., Raghunathan, T., y Patil, S. (2003). Examining trajectories of adolescent risk factors as predictors of subsequent high-risk driving behavior. *Journal of Adolescent Health*, 32, 214-224.

- Sigurdsson, J. F., Gudjonsson, G., Asgeirsdottir, B. B. y Sigfusdottir, I. D. (2010). Sexually abusive youth: what are the background factors that distinguish them from other youth? *Psychology, Crime & Law*, 16 (4), 289-303.
- Silbereisen, R. K., Noack, P., y Eygerth, K. (1986). Place for development: Adolescents, leisure setting, and developmental tasks. En R. K. Silbereisen, K. Eyferth, G. Rudlinger (Eds.), *Development as action in context: Problem behavior and normal youth development* (pp. 87-107). New York: Springer-Verlag.
- Silva, F. y Martorell, M. C. (1989). *BAS-3. Bateria de Socialización (autoevaluación)*. Madrid: TEA Ediciones.
- Simó, S. y Pérez, J. (1991). Sensation seeking and antisocial behavior in a junior high school sample. *Personality and Individual Differences*, 12, 965-966.
- Simonoff, E., Pickles, A., Meyer, J., Silberg, J. L., Maes, H. H., Loeber, R.,... Eaves, L. J. (1997). The Virginia Twin Study of Adolescent Behavioral Development: Influences of age, gender and impairment on rates of disorders. *Archives of General Psychiatry*, 54, 801- 808.
- Simourd, L. y Andrews, D. A. (1994). Correlates of delinquency: A look at gender differences. *Forum on Correctional Research*, 6 (1), 26-31.
- Sipe, R., Jensen, E. L., Everett, R. S. (1998). Adolescent sexual offenders grown up: recidivism in young adulthood. *Criminal Justice and Behavior*, 25, 109-124.
- Skinner, B. F. (1971). *Science and human behavior*. Nueva York: McMillan.
- Skinner, B. F. (1977). *Ciencia y conducta humana* (4.^a ed.). Barcelona: Fontanella (original en inglés de 1983).
- Smith, D. K. (2002). Gender differences in behavior change during treatment with chronically delinquent youths. Dissertation Abstracts International., Section B. *The Sciences and Engineering*, 63 (3-B), 1575.
- Snyder, H. y Sickmund, M. (2006). *Juvenile offenders and victims: 2006 national report*. Washington, DC: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.
- Sobral, J., Gómez-Fraguela, J. A., Romero, E. y Luengo, A. (2000). Impulsividad, género y contextos: Su Interacción en la conducta antisocial. *Anuario de Psicología Jurídica*, 11, 79-91.
- Sobral, J., Romero, E. y Luengo, M. A. (1998). Personalidad y delincuencia: La relevancia de lo temperamental. *Boletín de Psicología*, 58, 19-30.
- Sobral, J., Romero, E., Luengo, A. y Marzoa, J. (2000). Personalidad y conducta antisocial: amplificadores individuales de los efectos contextuales. *Psicothema*, 12, 661-670.
- Solís, H. (1986). *Justicia de menores* (2^a ed.). México: Porrúa.

- Sproott, J. B. y Doob, A. N. (2000). Bad, sad, and rejected: The lives of aggressive children. *Canadian Journal of Criminology*, 42, 123-133.
- Standford, M. S., Greve, K. W. y Dickens, T. J. (1995). Irritability and impulsiveness: Relationship to self-reported impulsive aggression. *Personality and Individual Differences*, 19, 757-760.
- Stangeland, P. (1995a). ¿Es España un país violento?. *Cuadernos de política criminal*, 55, 219-237.
- Stangeland, P. (1995b). La delincuencia en España. Un análisis crítico de las estadísticas judiciales y policiales. *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 5.
- Stangeland, P. (1996c). *The Crime Puzzle. Crime Patterns and Crime Displacement in Southern Spain*. Málaga: Miguel Gómez Publicaciones.
- Staub, E. (1995). The roots of prosocial and antisocial behavior in persons and groups: Environmental influence, personality, culture, and socialization. En W. M. Kurtines y J. L. Gewirtz (Eds.), *Moral Development: An Introduction* (pp. 385-400). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
- Stefuerak, T., Calhoum, G. B. y Glaser, B. A. (2004). Personality Typologies of Male Juvenile Offenders Using a Cluster Analysis of the Millon Adolescent Clinical Inventory Introduction. *International Journal of Offenders Therapy and Comparative Criminology*, 48, 96-110.
- Storgaard, A. (2010). Denmark. En F. Gunkel, J. Grzywa, P. Horsfield y I. Pruin (Eds.), *Juvenile Justice Systems in Europe Current Situation and Reform Developments*. Vol. II, Forum Verlag Godesber. Alemania: Mönchengladbach.
- Stuewig, J. (2001). Factors related to the desistance of crime in a longitudinal sample. Dissertation Abstracts International. Section B. *The Sciences and Engineering*, 61 (-B), 442.
- Stumbo, N. J. y Peterson, C. A. (2000). El modelo de habilidad de ocio. En S. Gorbeña (Ed.), *Modelos de intervención en ocio terapéutico. Documentos de Estudios de Ocio*, 11. Bilbao: Universidad de Deusto.
- Sussman, S., Unger, J. B. y Dent, C. W. (2004). Peer group self-identification among alternative high school youth. A predictor of heir psychosocial functioning five year later. *International Journal of Clinical and Health psychology*, 4, 9-25.
- Sutherland, F. H., Cressey, D. R. (1966). *Principes de criminology*. Version francaise établie sur le texte de la sixième. *Principles of Criminology*. Paris: Cujas (versión originale, 1947).

- Svensson, R., Pauwels, L. (2008). Is a risky lifestyle always “risky”? The interaction between individual propensity and lifestyle risk in adolescent offending. *Crime and Delinquency*, 20 (10), 1-19.
- Swain, R. C. (1991). Factores de riesgo y abuso de alcohol y drogas en la adolescencia. *Revista de Psicología Educativa* 3, 363-398.
- Thornberry, T. P. (1996). Empirican support for interactional theory: A review of the literarutre. En J. D. Hawkins (Eds.), *Delinquency and crime. Current theories*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Thornberry, T. P. (1999). Membership I Youth Gangs and Involvement in serious and Violent Offending. En R. Loeber y D. P. Farrington (Eds.). *Serious and Violent Juvenile Offenders*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Thornberry, T. P. (2001). Membership in youth gangs and involvement in serious and violent offending, en Miller, J., Maxson, C. L. y Klein, M. W. (Eds.), *The Modern Gang Reader, Roxbury*, 2ª ed., Los Ángeles, California.
- Thornberry, T. P. (2001). Risk factors for gang membership. En J. Miller, C. L. Maxson y M. W. Klein (Eds.), *The Modern Gang Reader, Roxbury*, (2ª ed) (32-43). Los Ángeles, CA: Roxbury Publications.
- Thornberry, T. P. (2004). *Delincuentes juveniles: Características y consecuencias*. VIII reunión internacional sobre biología y sociología de la violencia. Valencia: Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia.
- Thornberry, T. P. y Krohn, M. D. (1997). Peers, drug use, and delinquency. En D. Stoff, J. Breiling y J. D. Maser (Eds.), *Handbook of antisocial behavior* (pp. 218-233). Nueva York: Wiley.
- Thornberry, T. P., Krohn, M. D., Lizotte, A. J., Chard-Wierschem, D. (1993). The role juvenile gangs in facilitating delinquent behavior. *Journal of research in Crime and Delinquency*, 30 (1), 55-87.
- Thornberry, T. P., Krohn, M. D., Lizotte, A. J., Smith, C. A. y Tobin, K. (2003). *Gans and delinquency in development perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Thornberry, T. P., Moore, M. y Christensen, R. L. (1985). The effect of dropping out of school on subsequent criminal behavior. *Criminology*, 26, 3-18.
- Tittle, C. (2006). Desarrollos teóricos de la criminología. En R. Barberet y J. Barquín (Eds.), *Justicia penal siglo XXI* (pp. 1-54). Granada: Editorial Comares.
- Tobler, N. S. (1986). Meta-analysis of 143 adolescent drug prevention programs: Quantitative outcome results of program participants compared a control or comparison group. *Journal of Drug Issues*, 16, 537-567.

- Tobler, N. S., Roona, M. R., Ochhorn, P., Marshall, D. G., Streke, A.V. y Stackpole, K. M. (2000). School base adolescent drug prevention programs: 1998, Meta-analysis. *Journal of primary Prevention*, 20, 275-336.
- Tollet, C. L. y Benda, B. B. (1999). Predicting “survival” in the community among persistent and serious juvenile offenders: A 12-month follow-up study. *Journal of Offender Rehabilitation*, 28, 49-76.
- Torrente, G. y Merlos, F. (1999). Aproximación a las características psicosociales de la delincuencia de menores en Murcia. *Anuario de Psicología Jurídica*, 9, 39-63.
- Torrente, G. y Rodríguez, A. (2004). Características sociales y familiares vinculadas al desarrollo de la conducta delictiva en pre-adolescentes y adolescentes. *Cuadernos de Trabajo Social*, 17, 95-115.
- Towberman, D. B. y McDonalds, R. M. (1993). Dimensions of adolescent drug-avoidant attitude. *Journal of Substance Abuse Treatment*, 10, 45-52.
- Tracy, J. L. y Robins, R. W. (2003). “Death of a (narcisistc) salesman”: An integrative model of fragile self-esteem. *Psychological Inquiry*, 14, 57-62.
- Trembay, R. E. (2001). The development of the physical aggression during childhood and the predictions of later dangerousness. En G. Pinard, L. Pagani (Eds.). *Clinical Assessment of Dangerousness: Empirical Contriburions*. New York: Cambridge University Press.
- Tremblay, R. E, Pihl, R. O., Vitaro, F. y Dobkin, P. L. (1994). Predicting early onset of male antisocial behavior from preschool behavior. *Archives of General Psychiatry*, 51, 732-739.
- Tremblay, R. E., Kurtz, L., Masse, L., Vitaro, F. y Phil, R. O. (1995). A bimodal preventive intervention for disruptive kindergarten boys: It’s impact through adolescence. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 63 (4), 560-568.
- Trianes, M. (2000). *La convivencia en contextos escolares*. Málaga: Aljibe.
- Trianes, M. V., y Gallardo, J. A. (1998). *Psicología de la educación y del desarrollo*. Madrid: Pirámide.
- Trilla, J. (1989). Instituciones de educación en el tiempo libre, en *Pedagogía social y educación no escolar*, (pp.273-286). San Sebastián: Universidad del País Vasco.
- Tubman, J. G., Gil, A. G. y Wagner, E. F. (2004). Co-occurring substance use and delinquent behavior during early adolescence: Emerging relations and implications for intervention strategies. *Criminal Justice and Behavior*, 31, 463-488.
- Úcar, X. (2001). Cultura y educación social en el marco de la globalización. *Pedagogía social: revista interuniversitaria*, 6 (7), 331-363.

- Uceda, F. X. y Maza, F. J. (2006). Menores infractores. Construyendo un perfil e investigando la aplicación de la Ley de Responsabilidad del Menor en el municipio de Burjassot. *Acciones e Investigaciones Sociales*, 1, 465-470.
- Urbano, E. y De la Rosa, J. M. (2007). *La responsabilidad penal de los menores*. Navarra: Thomson Arazandi.
- Vaello, E. (2006). Análisis comparativo sobre la regulación de la responsabilidad penal de los menores en Italia y España. *Diario La Ley*, Núm. 6530. Editorial La Ley.
- Van den Akker, O. B., y Lees, S. (2001). Leisure activities and adolescent sexual behavior. *Sex Education*, 1, 137-147.
- Van Mastrigt, S. B., y Farrington, D. P. (2009). Co-offending, age, gender, and crime type: Implications for criminal justice policy. *British Journal of Criminology*, 49, 552-573.
- Van, C., Dumortier, E. y Eliaerts, C. (2006). *Survival of the Protection Model? Competing Goal in Belgian Juvenile Justice. International Handbook of Juvenile Justice*. New York: Springer.
- Vargas, C. y Trujillo, H. M. (2006). Secuencia, asociación y riesgo de consumo de drogas legales e ilegales en alumnado universitario. *Psicología Conductual*, 14, 41-62.
- Varona G., D. (2008). Ciudadanos y actitudes punitivas: un estudio piloto de población universitaria española (Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC), Ed.). *Revista Española de Investigación Criminológica*, 6. Doi: <http://www.criminologia.net/reic.html>
- Varona, D. (2009). ¿Somos los españoles punitivos?: actitudes punitivas y reforma (U.P. Fabra, Ed.). *InDret, Revista para el Análisis del Derecho*, 1, 1-31.
- Vázquez, C. (2003). Predicción y prevención de la delincuencia juvenil según las teorías del desarrollo social. *Revista de Derecho*, 14, 135-158.
- Vázquez, C. (2006). La influencia de la alarma social en el nuevo rumbo de la justicia penal juvenil en occidente. En Bueno, F., Gúzman, J. L. y A. Serrano, A. (Eds.). *Derecho penal y criminología como fundamento de la política criminal. Estudios en homenaje al Profesor Alfonso Serrano Gómez*. Madrid: Dykinson.
- Vázquez, C. (2006). *Derecho penal juvenil europeo*. Madrid: Dykinson.
- Vázquez, C. (2007). La delincuencia juvenil. En J. M. Díaz, J. M. Lacruz, A. I. Luaces, M. D. Serrano, y C. Vázquez, *Derecho Penal Juvenil*. Madrid: Dykinson.
- Vázquez, C. (2008). *La responsabilidad penal de los menores en Europa*. (pp. 95-104). I Congreso Internacional de responsabilidad penal de menores: Hacia un modelo compartido de reeducación y reinserción en el ámbito europeo, Madrid.

- Vázquez, G. y Serrano, M. D. (2004). La opinión pública ante la delincuencia juvenil. El tratamiento informativo de los medios de comunicación sobre la delincuencia juvenil y su influencia en la política criminal española. *Anuario de Justicia de Menores*, 4, 145-170.
- Vázquez, M. J., Mohamed, L. y Vilariño, M. (2008). Autoconcepto y comportamiento antisocial: menores infractores vs. menores normativos. *Revista Gallega de Cooperación Científica Iberoamericana*, 16, 25-30.
- Velázquez, H. A., Cabrera, F. P., Chaine, S. M., Caso-López, A. C. y Torres, N. B. (2002). Risk and proactive factors for aggressive behavior, and its generalization in a sample of Mexican school children. *Salud Mental*, 25 (3), 27-40.
- Vermeiren, R., Deboutte, D., Ruchkin, V. y Schwab-Stone, M. (2002). Antisocial Behavior and Mental Health: Findings from three communities. *European Child and Adolescent Psychiatry*, 11 (4), 168-175.
- Vermeiren, R., Jones, S., Ruchkin, V., Deboutte, D., y Schwab-Stone, M. (2004). Juvenile arrest: A cross-cultural comparison. *Journal of Child Psychology*, 45, 567-576.
- Vilariño, M., Amado, B. y Alves, C. (2013). Menores infractores: un estudio de campo de los factores de riesgo. *Anuario de Psicología Jurídica*, 13, 39-45.
- Villar, O., Luengo, M. A., Gómez, J. A. y Romero, E. (2003). Una propuesta de evaluación de variables familiares en la prevención de la conducta problema en la adolescencia. *Psicothema*, 15 (4), 581-588.
- Villareal, M. J. (1986). *Fundamentos de entrevista conductual: revisión teórica*. México: Trillas.
- Villatoro, J., Medina-Mora, M. E., Cravioto, P., Fleis, C., Galvan, F., Rojas, E., ... García, A. (2002). *Encuesta Nacional de Adicciones 2002*. México: Secretaría de Salud.
- Vincent, G. M. y Hart, S. D. (2002). Psychopathy in childhood and adolescence: Implications for the assessment and management of multi-problem youths. En R. R. Corrado, R. Roesch, S. D. Hart y J. K. Gierowski (Ed.), *Multi-problem violent youth* (pp. 150-163). Washington, DC: IOS Press.
- Viñas, R. H. (1983). *Delincuencia juvenil y derecho penal de menores*. Ediar, Buenos Aires, Argentina.
- Vitaro, F., Brendgen, M. y Tremblay, R. E. (2002). Reactively and proactively aggressive children: antecedent and subsequent characteristics. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 43 (4), 495-505.
- Vité, S. J. (2008). *Juvenile Justice Reform at Europe's Doorstep: Trends, Challenges and Achievements in Central and Eastern Europe*, Ponencia presentada en la III

- Conferencia Internacional de Justicia Juvenil, Sistemas de Justicia Juvenil en Europa: Situación actual, tendencias de modelos aplicables y buenas prácticas, Valencia.
- Wagner, E. F. y Kassel, J. D. (1995). Substance use and abuse. En R. T. Ammerman y M. Hersen (Eds.). *Handbook of child behavior therapy in the psychiatric setting* (pp. 367-388). New York: John Wiley and Sons.
- Walker-Barnes, C. J. y Mason, C. A. (2001). Ethnic differences in the effect of parenting on gang involvement and gang delinquency: a longitudinal, hierarchical linear modelling perspective. *Child Development*, 2 (6), 1814-1831.
- Wang, M., Eddy, J. y Fitzhugh, E. (2000). Smoking acquisition: Peer influence and self-selection. *Psychological Reports*, 86, 1241-1246.
- Ward, T. (2002). Good lives and the rehabilitation of offenders: promises and problems. *Aggression and Violent Behavior*, 7, 513-528.
- Ward, T. y Brown, M. (2004). The Good Lives Model and conceptual issues in offender rehabilitation. *Psychology, Crime & Law*, 10 (3), 223-257.
- Ward, T. y Eccleston, L. (2004). Risk, responsivity, and the treatment of offenders: introduction to the special issue. *Psychology, Crime & Law*, 10 (3), 223-227.
- Warr, M. (1996). Organization and instigation in delinquent groups. *Criminology*, 34, 11-37.
- Warr, M., y Stafford, M. (1991). The influence of delinquent peers: What they think or what they do?. *Criminology*, 29, 851-866.
- Watts, W. D. y Wrights, L. S. (1990). The relationship of alcohol, tobacco, marijuana and other illegal drug use to delinquency among Mexican-american, black, and white adolescent males. *Adolescence*, 25 (97), 171-181.
- Webster, R. A., Hunter, M. y Keats, J. A. (1994). Peer and parental influences on adolescent's substance use: A path analysis. *International Journal of the Addictions*, 29, 647-657.
- Wels, J. L., Schmidt, F., Mckinnon, L., Chatta H. K. y Meyers, J. R. (2008). A comparative study of adolescent risk assessment instruments: predictive and incremental validity. *SafetyLit Assessment*, 5, 104-115.
- West, D. J. y Farrington, D. P. (1973). *Who becomes delinquent?*. Londres: Heinemann Educational Books, Ltd.
- White, J. R. (2000). Introduction. En J. R. White y A. S. Freeman (Eds.), *Cognitive-behavioral group therapy for specific problems and populations*. Washington, DC: American psychological Association.
- White, J., Moffit, T. E., Caspi, A., Bartusch, D. J., Needles, D. J. y Stouthamer-Loeber, M. (1994). Measuring Impulsivity and examining its relation to delinquency. *Journal of Abnormal Psychology*, 103, 192-205.

- Whiteside, S. P. y Lynam, D. R. (2001). The five-factor model and personality disorder empirical literature: A Meta-analytic review. *Clinical Psychology Review*, 23, 1005-1085.
- Wiebush, R. G., Baird, C., Krisberg, B. y Onek, D. (1995). Risk assessment and classification for serious, violent, and chronic juvenile offenders. En J. C. Howell, B. Krisberg, D. Hawkins y J. J. Wilson (Ed.), *A sourcebook: Serious, violent, and chronic juvenile offenders* (pp. 171-212). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Wiener, R. (2002). Adversarial forum: Issues concerning the assessment of juvenile psychopathy. *Law and Human Behavior*, 26, 217-218.
- Wikström, P. O. H. (2004). Crime as alternative: Towards a cross-level situational action theory of crime causation. En J. McCord (Ed.), *Beyond empiricism: Institutions and intentions in the study of crime* (pp. 1-37). New Brunswick, NJ: Transaction.
- Wikström, P. O. H. (2008). Why are English youths more violent than Swedish youths? A comparative study of the role of crime propensity, lifestyles and their interaction in two cities. *European Journal of Criminology*, 5 (3), 309-330.
- Wilde, J. (1996). *Treating Anger, anxiety and depression in Children and Adolescents*. Washington: Accelerated Development.
- William, D. B. y Piquero, A. R. (2012). Assessing the impact of imprisonment on recidivism. *Journal of Experimental Criminology*, 8, 71-101.
- Williams, J. H. (1994). *Understanding substance use, delinquency involvement, and juvenile justice system involvement among African-American and European-American adolescents*. Seattle: Unpublished dissertation, University of Washington.
- Winner, L., Lanza-Kaduce, L. Bishop, D. y Frazier, D. (1997). The transfer of juveniles to criminal court: Reexamining recidivism over the long term. *Crime and Delinquency*, 43, 548-563.
- Wispe, L. (1986). The distinction between sympathy and empathy: To call for a concept a word is needed. *Journal of Personality and Social Psychology*, 50, 314- 321.
- Woodward, L. J., y Fergusson, D. M. (1999). Childhood peer relationship problems and psychosocial adjustment in late adolescence. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 27, 87-104.
- Wyvekens, A. (2006). The French Juvenile Justice System. En J. Junger-Tas, y S. H. Decker (Eds.), *International Handbook of Juvenile Justice*. New York: Springer.
- Younoszai, T. M., Lohrman, D. K., Seefeldt, C. A. y Greene, R. (1999). Trends from 1987 of 1991 in alcohol, tobacco, and other drug (ATOD) use among adolescents exposed to a school district-wide prevention intervention. *Journal of Drug Education*, 29, 77-94.

- Youth Justice Board (2014). *Justice Statistics 2012/2013*. England and Gales: Ministry of Justice.
- Zahn-Waxler, C. y Radke-Yarrow, M. (1990). The Origins of Empathic concern. *Motivation and Emotion*, 2, 107-130.
- Zalkind, P. y Simon, R. (2004). *Global perspectives on social issues: juvenile justice systems*. Maryland: Lexington Books.
- Zamble, E. y Quinsey, V. (1997). *The Criminal Recidivism Process*. Cambridge: University Press.
- Zarzuri, R. (2000). Notas para una aproximación teórica a las nuevas culturas juveniles: las tribus urbanas. *Última Década*, 13, 81-96.
- Zhang, L., Welte, J. W., & Wieczorek, W. W. (2002). The Role of Aggresion-Related Alcohol Expectancies In Explaining The Link Between Alcohol And Violent Behavior. *Substance Use & Misuse*, 37 (4), 457-471.
- Zill, N., Nord, C. W. y Loomis, L. S. (1995). *Adolescent time use, risky behavior, and outcomes: An analysis of national data*. Washington, DC: Government Printing Office.
- Zuckerman, M. (1979). *Sensation seeking: Beyond the optimal level of arousal*. Hillsdale: Erlbaum.
- Zuckerman, M. (1994). *Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking*. Cambridge: Cambridge University Press.

Anexos

Anexo 1: Plantilla de la PCL-YV

Hare PCL: YV

Adelle E. FORTH, Ph.D., David S. KossON, Ph.D., & Robert D. HARE, Ph.D.

Nombre: _____ Edad: _____ Sexo: M F

Evaluador: _____ Fecha: ____ / ____ / ____
 dd mm aa

Para puntuar correctamente debe revisar los criterios de clasificación expuestos en el Manual Técnico. Señale con un círculo la puntuación adecuada para cada ítem. En el capítulo 3 del Manual encontrará, descrito paso a paso, el procedimiento correcto.

No	A veces	Sí	Omisión	
0	1	2	X	1. Imagen personal falsa
0	1	2	X	2. Grandioso sentido de valía personal
0	1	2	X	3. Búsqueda de estimulación
0	1	2	X	4. Mentira patológica
0	1	2	X	5. Manipulación para obtener una ganancia personal
0	1	2	X	6. Falta de remordimientos
0	1	2	X	7. Afecto superficial
0	1	2	X	8. Insensibilidad y falta de empatía
0	1	2	X	9. Orientación parasita
0	1	2	X	10. Pobre control de la ira
0	1	2	X	11. Conducta sexual impersonal
0	1	2	X	12. Problemas tempranos de conducta
0	1	2	X	13. Falta de metas
0	1	2	X	14. Impulsividad
0	1	2	X	15. Irresponsabilidad
0	1	2	X	16. Fracaso para aceptar la responsabilidad
0	1	2	X	17. Relaciones interpersonales inestables
0	1	2	X	18. Conducta delictiva graves
0	1	2	X	19. Violación grave de la liberación condicional
0	1	2	X	20. Versatilidad delictiva

Anexo 2: Escala de Diagnóstico de Desarrollo Antisocial, APSD de Frick y Hare

ESCALA DE DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO ANTISOCIAL
(ANTISOCIAL PROCESS SCREENING DEVICE)
Paul FRICK y Robert HARE

A RELLENAR POR LOS PADRES

Nombre del/de la joven _____
Sexo: Varón ☐ Mujer ☐
Fecha de nacimiento ____/____/____
Grado de escolaridad _____
Fecha de cumplimentación ____/____/____
Nombre del padre/ de la madre _____

Instrucciones: Por favor rellene la información solicitada en el cuadro de arriba. Después lea cada frase y decida como de bien describe al joven. Marque su respuesta dibujando un círculo alrededor de la letra apropiada (TF, AV, SV) en cada frase.

Adaptado al Castellano por Teresa Silva, Enrique López y Vicente Garrido

	Totalmente falso	Algunas veces verdadero	Siempre verdadero
1. Culpabiliza a los otros de sus errores	TF	AV	SV
2. Participa en actividades ilegales	TF	AV	SV
3. Se preocupa por los resultados que obtiene en la escuela	TF	AV	SV
4. Actúa sin pensar en las consecuencias	TF	AV	SV
5. Sus emociones parecen superficiales y poco verdaderas	TF	AV	SV
6. Miente fácilmente y con habilidad	TF	AV	SV
7. Mantiene las promesas que hace	TF	AV	SV
8. Alardea excesivamente sobre sus habilidades, proezas o posesiones	TF	AV	SV
9. Se aburre fácilmente	TF	AV	SV
10. Utiliza o manipula a las personas para conseguir lo que quiere	TF	AV	SV
11. Provoca a otras personas o se ríe de ellas	TF	AV	SV
12. Se siente mal o culpable cuando hace algo que no debería haber hecho	TF	AV	SV
13. Participa en actividades que entrañan riesgo o son peligrosas	TF	AV	SV
14. A veces puede ser encantador, pero de forma que parece poco sincero o superficial	TF	AV	SV
15. Se enfada en caso de corregirsele o ser castigado	TF	AV	SV
16. Piensa que es mejor que nadie	TF	AV	SV
17. No planifica lo que va a hacer o deja las cosas para el último minuto	TF	AV	SV
18. Se preocupa por los sentimientos de los demás	TF	AV	SV
19. No demuestra tener sentimientos o emociones	TF	AV	SV
20. Le gusta mantener los mismos amigos	TF	AV	SV

APSD – Padres. Página de puntuaciones

Nombre del/de la joven _____

Sexo: Varón ☐ Mujer ☐

Fecha de nacimiento ____/____/____

Grado de escolaridad _____

Fecha de cumplimentación ____/____/____

Nombre del padre/ de la madre _____

Instrucciones: Copie el número que ha sido redondeado en cada ítem, dentro de las cajas en blanco y también en la columna de TOTAL en la misma fila. Por ejemplo, la puntuación para el ítem 1 será copiada en la columna de impulsividad y de TOTAL. Después de rellenar todas las cajas en blanco, sume los números de cada columna y escríbalos en las cajas de totales de la última fila, correspondientes. Proceda de la misma forma para la columna de TOTAL.

Insensibilidad emocional	Narcisismo	Impulsividad	TOTAL	Totalmente falso	Algunas veces verdadero	Siempre verdadero	Item #
				0	1	2	1
				0	1	2	2
				2	1	0	3
				0	1	2	4
				0	1	2	5
				0	1	2	6
				2	1	0	7
				0	1	2	8
				0	1	2	9
				0	1	2	10
				0	1	2	11
				2	1	0	12
				0	1	2	13
				0	1	2	14
				0	1	2	15
				0	1	2	16
				0	1	2	17
				2	1	0	18
				0	1	2	19
				2	1	0	20
				TOTALES			

Anote las puntuaciones TOTALES obtenidas en la página siguiente para obtener el perfil

ESCALA DE DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO ANTISOCIAL
(ANTISOCIAL PROCESS SCREENING DEVICE)
Paul FRICK y Robert HARE

A RELLENAR POR EL PROFESOR

Nombre del/de la joven _____
Sexo: Varón <input type="checkbox"/> Mujer <input type="checkbox"/>
Fecha de nacimiento ____/____/____
Grado de escolaridad _____
Fecha de cumplimentación ____/____/____
Nombre del profesor _____
¿Cuánto tiempo hace que el/la joven está en su clase? _____ (en meses)

Instrucciones: Por favor rellene la información solicitada en el cuadro de arriba. Después lea cada frase y decida como de bien describe al joven. Marque su respuesta dibujando un círculo alrededor de la letra apropiada (TF, AV, SV) en cada frase.

Adaptado al Castellano por Teresa Silva, Enrique López y Vicente Garrido

	Totalmente falso	Algunas veces verdadero	Siempre verdadero
1. Culpabiliza a los otros de sus errores	TF	AV	SV
2. Participa en actividades ilegales	TF	AV	SV
3. Se preocupa por los resultados que obtiene en la escuela	TF	AV	SV
4. Actúa sin pensar en las consecuencias	TF	AV	SV
5. Sus emociones parecen superficiales y poco verdaderas	TF	AV	SV
6. Miente fácilmente y con habilidad	TF	AV	SV
7. Mantiene las promesas que hace	TF	AV	SV
8. Alardea excesivamente sobre sus habilidades, proezas o posesiones	TF	AV	SV
9. Se aburre fácilmente	TF	AV	SV
10. Utiliza o manipula a las personas para conseguir lo que quiere	TF	AV	SV
11. Provoca a otras personas o se ríe de ellas	TF	AV	SV
12. Se siente mal o culpable cuando hace algo que no debería haber hecho	TF	AV	SV
13. Participa en actividades que entrañan riesgo o son peligrosas	TF	AV	SV
14. A veces puede ser encantador, pero de forma que parece poco sincero o superficial	TF	AV	SV
15. Se enfada en caso de corregirsele o ser castigado	TF	AV	SV
16. Piensa que es mejor que nadie	TF	AV	SV
17. No planifica lo que va a hacer o deja las cosas para el último minuto	TF	AV	SV
18. Se preocupa por los sentimientos de los demás	TF	AV	SV
19. No demuestra tener sentimientos o emociones	TF	AV	SV
20. Le gusta mantener los mismos amigos	TF	AV	SV

APSD – Profesor. Página de puntuaciones

Nombre del/la joven _____
 Sexo: Varón ☐ Mujer ☐
 Fecha de nacimiento ____/____/____
 Grado de escolaridad _____
 Fecha de cumplimentación ____/____/____
 Nombre del profesor _____
 ¿Cuánto tiempo hace que el/la joven está en su clase? _____ (en meses)

Instrucciones: Copie el número que ha sido redondeado en cada ítem, dentro de las cajas en blanco y también en la columna de TOTAL en la misma fila. Por ejemplo, la puntuación para el ítem 1 será copiada en la columna de impulsividad y de TOTAL. Después de rellenar todas las cajas en blanco, sume los números de cada columna y escríbalos en las cajas de totales de la última fila, correspondientes. Proceda de la misma forma para la columna de TOTAL.

Insensibilidad emocional	Narcisismo	Impulsividad	TOTAL	Totalmente falso	Algunas veces verdadero	Siempre verdadero	Ítem #
				0	1	2	1
				0	1	2	2
				2	1	0	3
				0	1	2	4
				0	1	2	5
				0	1	2	6
				2	1	0	7
				0	1	2	8
				0	1	2	9
				0	1	2	10
				0	1	2	11
				2	1	0	12
				0	1	2	13
				0	1	2	14
				0	1	2	15
				0	1	2	16
				0	1	2	17
				2	1	0	18
				0	1	2	19
				2	1	0	20
				TOTALES			

Anote las puntuaciones TOTALES obtenidas en la página siguiente para obtener el perfil

ESCALA DE DIAGNÓSTICO DE DESARROLLO ANTISOCIAL

(ANTISOCIAL PROCESS SCREENING DEVICE)

Paul FRICK y Robert HARE

FORMULARIO COMBINADO

Nombre del/de la joven _____
Sexo: Varón <input type="checkbox"/> Mujer <input type="checkbox"/>
Fecha de nacimiento ____/____/____
Grado de escolaridad _____
Fecha de cumplimentación por los padres ____/____/____
Fecha de cumplimentación por el profesor ____/____/____

Instrucciones: Por favor rellene la información solicitada en el cuadro de arriba. Después transfiera las puntuaciones desde los formularios de los padres y del profesor a este formulario, a las columnas apropiadas. Después apunte la puntuación más alta de las dos en la tercera columna.

Adaptado al Castellano por Teresa Silva, Enrique López y Vicente Garrido

	Puntuación de los padres	Puntuación del profesor	Puntuación más alta
1. Culpabiliza a los otros de sus errores			
2. Participa en actividades ilegales			
3. Se preocupa por los resultados que obtiene en la escuela			
4. Actúa sin pensar en las consecuencias			
5. Sus emociones parecen superficiales y poco Verdaderas			
6. Miente fácilmente y con habilidad			
7. Mantiene las promesas que hace			
8. Alardea excesivamente sobre sus habilidades, proezas o posesiones			
9. Se aburre fácilmente			
10. Utiliza o manipula a las personas para conseguir lo que quiere			
11. Provoca a otras personas o se ríe de ellas			
12. Se siente mal o culpable cuando hace algo que no debería haber hecho			
13. Participa en actividades que entrañan riesgo o son peligrosas			
14. A veces puede ser encantador, pero de forma que parece poco sincero o superficial			
15. Se enfada en caso de corregirse o ser castigado			
16. Piensa que es mejor que nadie			
18. No planifica lo que va a hacer o deja las cosas para el último minuto			
18. Se preocupa por los sentimientos de los demás			
19. No demuestra tener sentimientos o emociones			
20. Le gusta mantener los mismos amigos			

APSD – Combinado. Página de puntuaciones

Nombre del/de la joven _____

Sexo: Varón ☐ Mujer ☐

Fecha de nacimiento ____/____/____

Grado de escolaridad _____

Fecha de cumplimentación por los padres ____/____/____

Fecha de cumplimentación por el profesor ____/____/____

Instrucciones: Copie el número que ha sido redondeado en cada ítem, dentro de las cajas en blanco y también en la columna de TOTAL en la misma fila. Por ejemplo, la puntuación para el ítem 1 será copiada en la columna de impulsividad y de TOTAL. Después de rellenar todas las cajas, sume los números de cada columna y escríbalos en las cajas de totales de la última fila, correspondientes. Proceda de la misma forma para la columna de TOTAL.

Insensibilidad emocional	Narcisismo	Impulsividad	TOTAL		Puntuación más alta	Item #
				← ←		1
				← ←		2
				← ←		3
				← ←		4
				← ←		5
				← ←		6
				← ←		7
				← ←		8
				← ←		9
				← ←		10
				← ←		11
				← ←		12
				← ←		13
				← ←		14
				← ←		15
				← ←		16
				← ←		17
				← ←		18
				← ←		19
				← ←		20
				TOTALES		

Anote las puntuaciones TOTALES obtenidas en la página siguiente para obtener el perfil

Anexo 3: Historial Criminológico y Social: Versión Juvenil (HCS-J)**HISTORIAL CRIMINOLÓGICO Y SOCIAL: VERSIÓN JUVENIL (HCS – J)****DATOS DEL MENOR**

Codigo Codigo de menor

Sexo:

Edad

Fecha de nacimiento Dia: Mes: Año:

Fecha de la evaluación Dia Mes Año

Centro:

Fecha en la que empezó a cumplir la medida actual Dia Mes Año: 2010

Tipo de medida que cumple actualmente ☐ Firme ☐ Cautelar

Nacionalidad

DATOS DEL EVALUADOR

E. T. Comisión de Orientación Fecha

Educador

Trabajador Social

Psicólogo

A) DATOS JUDICIALES/ADMINISTRATIVOS

A.1. Medida judicial firme ACTUAL Y PENDIENTES DE CUMPLIR (A rellenar por el ARRM)

Tipo de delito	Medida Judicial	T.M.I.	T.L.V.	Medida actualmente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

A.2. Medidas judiciales anteriores y características de los hechos (A rellenar en el ARRM)

Tipo de delito	Tipo de medida Firme/Cautelar	Medida Judicial	T.M.I.	T.L.V.	Medida Cumplida (Si/No)

A.3. Ingresos en centros de internamiento: Si son más de cuatro, señalar los cuatros últimos. (A rellenar en el ARRM)

Tipo de centro	Fecha de ingreso	Fecha de baja en el centro

B) DATOS FAMILIARES y SOCIOECONÓMICOS**B.1. Composición familiar**

- ☐ Nuclear
☐ Monoparental
☐ Reconstituida
☐ Protección
☐ No consta

B.1.1. En caso de haber marcado la casilla Protección en el apartado B.1. rellene este desplegable

 ▼

B.1.2. En caso de haber marcado la casilla Protección en el apartado B.1. y el anterior desplegable, rellene este desplegable

 ▼
B.2. Tipo de familia
 ▼

B.2.1. En caso de haber marcado la opción Disfuncional del apartado B.2. marque las opciones que correspondan

- ☐ Multiproblemática
☐ Delincuencial
☐ Factores económicos
☐ Consumos de sustancias
☐ Enfermedad
☐ Problemas relacionales
☐ Maltrato físico padres a hijo/a
☐ Maltrato psíquico padres a hijo/a
☐ Maltrato por abuso sexual
☐ Violencia ascendiente
☐ Violencia de género

B.2.2. En caso de haber marcado la casilla Enfermedad del apartado B.2.1. marque las opciones que correspondan

- ☐ Crónica
☐ Salud mental
☐ Discapacidad

B.3. Parentalidad
 ▼

B.4. Problemática familiar asociada					
	Padre		Madre		Hermano(s) Otro
Drogadiccion		▼		▼	▼
Alcoholismo		▼		▼	▼
Delincuencia		▼		▼	▼
Enfermedad común grave		▼		▼	▼
Enfermedad mental		▼		▼	▼

B.5. Actividad económica familiar (indique la actividad que mas se aproxime)

Padre		▼
Madre		▼
Hermano(s)		▼
Otro		▼

B.6. Número total de hermanos

B.7. Lugar que ocupa el menor entre los hermanos

B.8. Lugar de origen de los padres

Padre

Madre

B.9. Estilo Educativo Familiar

Padre

Madre

B.10. Hubo intervenciones sociales anteriormente con la familia:

☐ Padre

☐ Madre

☐ Ambos progenitores

☐ Hermano(s)

☐ Otros familiares

B.11. Tipo de vivienda donde residía antes de cumplir la medida judicial

B.12. Régimen de la vivienda donde residía antes de cumplir la medida judicial

B.13. ¿Presentaba la zona residencial algún problema social significativo? (*Chabolismo, marginalidad, déficit grave de recursos sociales, etc*)

B.14. Número de cambios de domicilio de la familia en los últimos cinco años (*Contar los cinco años anteriores a la fecha de evaluación del menor*)

B.15. Motivos del ultimo cambio

B.16. Nivel socioeconómico y cultural (*Puntúe en función de los datos familiares y de las variables anteriores consideradas en este apartado*):

B.16.1. Nivel socioeconómico

B.16.2. Nivel cultural

C) ESCOLARES/FORMATIVOS

C.1. ¿Estaba el menor escolarizado en el momento de ser denunciado?

C.2. Nivel real formativo aproximado.

C.3. ¿Presenta en su historial educativo situaciones de absentismo escolar?

C.4. ¿Presenta en su historial educativo alguna situación de abandono escolar? *(Se considera abandono cuando el menor ha faltado a clase en un periodo superior a tres meses seguidos)*

C.5. Repitió curso alguna vez?

C.5.1. En caso afirmativo ¿Cuántas veces?

C.6. Su rendimiento escolar en los últimos meses puede considerarse:

C.7. Ha presentado en el contexto escolar comportamientos disruptivos que han supuesto expulsiones reiteradas? (dos o mas en un curso)

C.7.1. En caso afirmativo indique el motivo

C.7.2. En caso de un motivo distinto indique cual ha sido. *(Puede indicar si no se sabe o no consta)*

C.7.3. Tipo de comportamientos disruptivos presentados

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Desobediencia | <input type="checkbox"/> Insultos compañeros |
| <input type="checkbox"/> Insultos adultos | <input type="checkbox"/> Hurtos o daños |
| <input type="checkbox"/> Peleas con compañeros | <input type="checkbox"/> Acoso escolar. |
| <input type="checkbox"/> Enfrentamiento grave con adultos | |

C.7.4. ¿Los comportamientos anteriores eran frecuentemente de tipo violento o agresivo?

D) LABORALES (sólo mayores de 16 años).

D.1. ¿El menor se ha incorporado al mercado laboral?

 ▼

D.2. La Finalización de el(los trabajo/s se produce por:

 ▼

D.2.1. En caso de que la respuesta D.2. se conteste con la opción otros indique cual ha sido el motivo de la finalización

D.3. ¿Qué hace el menor con los ingresos percibidos?

 ▼

E) GRUPO DE RELACIÓN. OCIO Y TIEMPO LIBRE

E.1. Características del grupo de referencia antes de cumplir la medida *(Puede consignarse más de un tipo de relaciones si son estables y continuadas)*

- ☐ Carencia de relación/es estable, aislamiento social.
- ☐ Normalizados, sin una problemática destacable.
- ☐ Grupo de relación disocial.
- ☐ Grupos violentos-disociales.
- ☐ Banda o grupo con cierta organización (latina, skins...)
- ☐ Grupo de relación de edad mayor que él

E.2. El papel del menor en su relación con el grupo puede definirse como:

 ▼

E.3. *(Preguntar directamente al menor)* ¿Cuántos amigos íntimos(as) tienes? No incluyas a tus hermanos (as)

 ▼

E.4. *(Preguntar directamente al menor)* En comparación con jóvenes de tu misma edad:

E.4.1. ¿Cómo te llevas con tus hermanos?

 ▼

E.4.2. ¿Cómo te llevas con otros jóvenes?

 ▼

E.4.3. ¿Cómo te comportas con tus padres?

 ▼

E.4.4. ¿Cómo haces las cosas por ti mismo?

 ▼

E.5. Uso del ocio y del tiempo libre antes cumplir la medida (rellene la tabla de frecuencias que se presenta a continuación señalando la opción más correcta del desplegable de la derecha):

1. Ir a pubs, bares, discotecas	<input type="text"/> ▼
2. Estar en la calle, en una plaza o parque con amigos charlando, pasando el rato	<input type="text"/> ▼
3. Estar en la calle, en una plaza o parque haciendo el "botellón" y fumando "porros"	<input type="text"/> ▼
4. Ir al cine o al teatro	<input type="text"/> ▼
5. Practicar deportes habituales en grupo/individual (Fútbol, baloncesto, tenis, ciclismo, footing...)	<input type="text"/> ▼
6. Practicar deportes de riesgo (puenting, carrera de coches, escalada...)	<input type="text"/> ▼
7. Ir a conciertos, a eventos deportivos	<input type="text"/> ▼
8. Ir a casa de un amigo/familiar (fiesta, cenar, jugar a la play...)	<input type="text"/> ▼
9. Participar en una asociación o grupo	<input type="text"/> ▼
10. Ir de excursión (campo, montaña, a una ciudad...)	<input type="text"/> ▼
11. Salir al campo de acampada, hacer senderismo, ir de pesca...	<input type="text"/> ▼
12. Realizar actividades culturales como ir a un parque temático, planetario, museo...	<input type="text"/> ▼
13. Estar en la calle sin ningún objetivo	<input type="text"/> ▼
14. Pasar el tiempo ociosamente en centros comerciales	<input type="text"/> ▼

E.6. ¿Coincide el tipo de ocio actual (aquel que realiza, en su caso, durante el disfrute de salidas) con el ocio anterior al cumplimiento de la medida?

 ▼

E.7. ¿La comisión del delito motivo del expediente la realizó en compañía de miembros de alguno de sus grupos de relación?

 ▼

E.8. Cuando consume drogas ¿lo hace en compañía de miembros de alguno de sus grupos de relación?

 ▼

F) CONDUCTAS ADICTIVAS. CONSUMO DE DROGAS/ALCOHOL

F.1. ¿Consumes o ha consumido drogas o alcohol alguna vez en su vida? ¿En caso negativo continúe la evaluación en el apartado G - Salud Mental

F.2. Caracterice los hábitos de consumo en los últimos 12 meses (Valore la información sobre consumo durante los permisos, los controles de consumo, sanciones relacionadas con el tráfico de drogas, etc.)

Sustancia de consumo	Duración del consumo (meses)	Frecuencia de consumo
Alcohol	12	<input type="text"/>
Cannabis		<input type="text"/>
Cocaína		<input type="text"/>
Heroína		<input type="text"/>
Drogas sintéticas		<input type="text"/>
Anfetaminas		<input type="text"/>
Benzodiacepinas		<input type="text"/>
Otras		<input type="text"/>

F.3. ¿Hay evidencia (controles, centros de tratamiento, etc.) de que el menor sigue consumiendo drogas?

F.3.1. ¿Cuál(es) ha(n) sido la(s) principal(es) sustancia(s) de consumo por la(s) que existe esa evidencia? Responda solo en caso de haber contestado afirmativamente la casilla F.3.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Alcohol | <input type="checkbox"/> Drogas sintéticas |
| <input type="checkbox"/> Cannabis | <input type="checkbox"/> Anfetaminas |
| <input type="checkbox"/> Cocaína | <input type="checkbox"/> Benzodiacepinas |
| <input type="checkbox"/> Heroína | <input type="checkbox"/> Otras |

F.4. Tratamiento, PREVIO al cumplimiento de la medida por consumo de sustancias

F.4.1. Rellene esta casilla solo en caso de responder afirmativamente a la anterior casilla. ¿Como fue el tratamiento?

F.4.2. ¿Cuál(es) ha(n) sido la(s) principal(es) sustancia(s) de consumo por la(s) que ha estado en tratamiento? Responda solo en caso de haber contestado afirmativamente la casilla F.4.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Alcohol | <input type="checkbox"/> Drogas sintéticas |
| <input type="checkbox"/> Cannabis | <input type="checkbox"/> Anfetaminas |
| <input type="checkbox"/> Cocaína | <input type="checkbox"/> Benzodiacepinas |
| <input type="checkbox"/> Heroína | <input type="checkbox"/> Otras |

F.4.3. ¿Qué tipo/s de tratamiento/s ha seguido? Responda solo en caso de haber contestado afirmativamente la casilla F.4.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mantenimiento con metadona | <input type="checkbox"/> Apoyo psicofarmacológico |
| <input type="checkbox"/> Libre de drogas/intervención psicosocial | <input type="checkbox"/> Hábitos de salud/educación para la salud |
| <input type="checkbox"/> Programa de reducción de daños | |

Este documento es confidencial. Los datos contenidos son de carácter reservado y sujetos a especial protección por la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y sus normas de desarrollo

G) SALUD MENTAL

G.1. ¿Consta en el expediente/protocolo (actual o pasado) algún tipo de informe psicológico y/o diagnóstico?

 ▼

G.1.1. En caso afirmativo indicar el problema psicológico y/o diagnóstico

G.1.2. ¿Lo considera correcto?

 ▼

G.1.3. ¿Se han producido intervenciones terapéuticas como consecuencia del/de los problemas psicológicos y/o diagnósticos identificados anteriormente?

 ▼

G.1.4. En caso de que se hayan producido intervenciones indique cual o cuales

G.2. ¿Ha habido intentos de suicidio en el pasado y/o actualidad?

 ▼

G.2.1. En caso afirmativo ¿cuantos?

G.3. ¿Consta en el expediente (actual o pasado) algún tipo de diagnóstico de psicosis?

 ▼

G.3.1. En caso afirmativo, ¿la patología puede haber sido inducida por consumo de drogas?

 ▼

G.4. ¿Considera que el menor presenta algún tipo de trastorno aunque no haya sido diagnosticado? ¿De qué tipo?

H) PERSONALIDAD/CONDUCTA

H.1. ¿El menor ha presentado conductas violentas en los últimos 12 meses incluidos los hechos motivo del expediente (peleas, agresiones, golpes...)?

H.2. ¿Los hechos motivo del expediente han conllevado empleo de violencia física o amenazas?

H.3. ¿El menor presenta alguna de las siguientes características en su personalidad?

- ☐ Dificultad grande para ponerse en el lugar del otro
- ☐ Frialidad emocional
- ☐ Manipulación frecuente de los otros
- ☐ Falta de remordimientos
- ☐ Insensibilidad
- ☐ Mentira frecuente
- ☐ Afecto superficial
- ☐ Simulación emocional (p.ej., conducta de arrepentimiento fingida)
- ☐ Problemas tempranos de conducta
- ☐ Conducta sexual impersonal

YOUTH SELF REPORT

Instrucciones: A continuación hay una lista de frases que describen a los/as jóvenes. Para cada frase que te describe **ahora o durante los últimos seis meses** marca la opción que mejor te describa.

1	Me comporto como si fuera más pequeño.		▼
2	Bebo alcohol sin permiso de mis padres.		▼
3	Discuto mucho.		▼
4	No termino las cosas que empiezo.		▼
5	Hay muy pocas cosas que me hacen disfrutar.		▼
6	Me gustan los animales.		▼
7	Soy presumido/a, engreído/a, fanfarrón/a.		▼
8	No puedo concentrarme o prestar atención durante mucho tiempo.		▼
9	No puedo quitarme de la mente ciertos pensamientos		▼
Describe estos pensamientos			
10	Me cuesta estar quieto/a.		▼
11	Dependo demasiado de personas mayores.		▼
12	Me siento solo/a.		▼
13	Estoy distraído o en las nubes.		▼
14	Lloro mucho.		▼
15	Soy bastante honesto/a.		▼
16	Soy malo/a con los demás.		▼
17	Sueño despierto/a a menudo.		▼
18	He intentado suicidarme o hacerme daño deliberadamente.		▼
19	Intento llamar mucho la atención.		▼
20	Rompo mis cosas.		▼
21	Rompo las cosas de otras personas.		▼
22	Desobedezco a mis padres.		▼
23	Desobedezco en la escuela.		▼
24	No como tan bien como debiera.		▼
25	No me llevo bien con otros niños/as o jóvenes.		▼
26	No me siento culpable después de portarme mal.		▼
27	Tengo celos de otras personas.		▼
28	Me salto las normas en casa, en la escuela y en otros lugares.		▼
29	Tengo miedo a ciertas situaciones, animales o lugares diferentes de la escuela.		▼
Describe este miedo.			
30	Tengo miedo de ir a la escuela.		▼

31	Tengo miedo de pensar o hacer algo malo.		▼
32	Creo que tengo que ser perfecto/a.		▼
33	Creo que nadie me quiere.		▼
34	Creo que los demás me quieren perjudicar.		▼
35	Me siento inferior a los demás o creo que no valgo nada.		▼
36	Me hago daño accidentalmente con mucha frecuencia.		▼
37	Me meto en muchas peleas.		▼
38	Los demás se burlan de mí a menudo.		▼
39	Voy con niños/as o chicos/as que se meten en problemas.		▼
40	Oigo sonidos o voces que otros creen que no existen.		▼
Describe estos sonidos o voces.			
41	Hago cosas sin pensar.		▼
42	Prefiero estar solo/a.		▼
43	Digo mentiras o engaño.		▼
44	Me muerdo las uñas.		▼
45	Soy nervioso/a, estoy tenso/a.		▼
46	Tengo tics o hago movimientos sin querer.		▼
Describe estos tics o movimientos.			
47	Tengo pesadillas.		▼
48	No caigo bien a todos los niños/as o chicos/as.		▼
49	Puedo hacer cosas mejor que la mayoría de los chicos.		▼
50	Soy demasiado ansioso/a o miedoso/a.		▼
51	Me siento mareado/a.		▼
52	Me siento demasiado culpable.		▼
53	Como demasiado.		▼
54	Me siento demasiado cansado.		▼
55	Peso más de lo que debería.		▼
56	Problemas físicos, sin causa médica.		
56a	Dolores o molestias (no incluyas dolor de estómago o de cabeza)		▼
56b	Dolores de cabeza.		▼
56c	Náuseas, me siento mal.		▼
56d	Problemas con los ojos (valórelo como no es cierto si usa gafas)		▼
Describe estos problemas.			
56e	Erupciones u otros problemas en la piel.		▼

56f	Dolores de estómago o retortijones.		▼
56g	Vómitos.		▼
56h	Otros		▼
Describe si existen otros problemas físicos.			
57	Pego a otras personas.		▼
58	Me meto el dedo en la nariz, me arañó la piel u otras partes del cuerpo		▼
Describe estos actos.			
59	Puedo ser bastante amable.		▼
60	Me gusta probar cosas nuevas.		▼
61	Mi rendimiento escolar es bajo.		▼
62	Mala coordinación o torpeza.		▼
63	Prefiero estar con niños/as o chicos/as mayores que yo.		▼
64	Prefiero estar con niños/as o chicos/as menores que yo		▼
65	Me niego a hablar.		▼
66	Repito ciertas acciones una y otra vez, compulsiones.		▼
Describe estas acciones.			
67	Me escapo de casa.		▼
68	Grito mucho.		▼
69	Soy muy reservado/a, me callo todo.		▼
70	Veó cosas que otros no creen que existen.		▼
71	Me avergüenzo con facilidad; tengo mucho sentido del ridículo.		▼
72	Prendo fuegos.		▼
73	Soy habilidoso.		▼
74	Me gusta llamar la atención o hacerme el/la gracioso/a.		▼
75	Soy tímido/a.		▼
76	Duermo menos que la mayoría de los chicos/as.		▼
77	Duermo más que la mayoría de los chicos/as durante el día y/o noche.		▼
78	Soy desatento/a, me distraigo con facilidad.		▼
79	Problemas para hablar.		▼
Describe estas problemas.			
80	Defiendo mis derechos.		▼
81	Robo en casa.		▼
82	Robo fuera de casa.		▼

83	Almaceno cosas que no necesito.		▼
Describe que cosas.			
84	Hago cosas que otras personas piensan que son extrañas.		▼
Describe que cosas.			
85	Tengo ideas que otras personas pensarían que son extrañas.		▼
Describe que ideas.			
86	Soy tozudo/a.		▼
87	Cambios repentinos de humor o sentimientos de repente.		▼
88	Me gusta estar con otras personas.		▼
89	Desconfiado/a, receloso/a.		▼
90	Digo groserías o palabrotas.		▼
91	Pienso en matarme.		▼
92	Me gustaría hacer reír a los demás.		▼
93	Hablo demasiado.		▼
94	Me burlo de los demás.		▼
95	Me enfado con facilidad.		▼
96	Pienso demasiado en el sexo.		▼
97	Amenazo con hacer daño a otros.		▼
98	Me gustaría ayudar a otras personas.		▼
99	Fumo tabaco.		▼
100	No duermo bien.		▼
Describe porque.			
101	Hago novillos, falto a la escuela sin motivo.		▼
102	Tengo poca energía.		▼
103	Me siento infeliz, triste o deprimido.		▼
104	Soy más ruidoso de lo común.		▼
105	Tomo alcohol o drogas.		▼
Describe.			
106	Trato de ser justo con los demás.		▼
107	Me gusta un buen chiste.		▼
108	Me gusta tomarme las cosas con calma.		▼
109	Trato de ayudar a los demás cuando puedo.		▼
110	Desearía ser del sexo opuesto.		▼
111	Evito relacionarme con los demás.		▼
112	Me preocupo a menudo.		▼

© Achenbach 2001

Anexo 4: Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes IGI-J (Adaptada de Hoge, R.D y Andrews, D.A.,2002; Garrido, 2004)

I.G.I.-J

Garrido Genovés, V.; López Martín, E. y Silva do Rosario, T. (2004)

INVENTARIO DE GESTIÓN E INTERVENCIÓN PARA JÓVENES (I.G.I.-J)

(Garrido Genovés, V.; López Martín, E. y Silva do Rosario, T., 2004)

Nombre del joven: _____	Sexo: V M	Edad: _____
Fecha de nacimiento: ____/____/____	Fecha de la evaluación: ____/____/____	

1ª Parte: Evaluación de riesgos y necesidades

El IGI-J es una forma de evaluación cuantitativa para el cribado de los atributos de los delincuentes juveniles y de las situaciones relevantes que puede ayudar a decidir sobre el nivel de intervención, supervisión y el tipo de programa más adecuado al caso. Dentro de cada subescala, marque con una "X" todos los ítems que considere estar presentes en la persona evaluada. Si se considera que la subescala contiene elementos que pueden ayudar a la reinserción del joven, indíquelo marcando el cuadrado "Factor Protector" con una "√". Podrá encontrar explicaciones detalladas sobre el significado de cada ítem en el cuadernillo anexo.

1. Delitos y medidas judiciales pasadas y actuales:

- a. Tres o más medidas judiciales anteriores ☐
- b. Incumplimientos y quebrantamientos de medidas judiciales ☐
- c. Medidas en medio abierto ☐
- d. Internamiento en centro de reforma ☐
- e. En el expediente actual tres o más delitos ☐

2. Pautas educativas:

- a. Supervisión inadecuada ☐
- b. Dificultad en controlar el comportamiento ☐
- c. Disciplina inapropiada ☐
- d. Pautas educativas inconsistentes ☐
- e. Malas relaciones (padre-joven) ☐
- f. Malas relaciones (madre-joven) ☐

Factor protector ☐

3. Educación formal/Empleo:

- a. Comportamiento disruptivo en clase/trabajo ☐
- b. Daños en la propiedad de la escuela/trabajo ☐
- c. Bajo regimiento académico/laboral ☐
- d. Problemas con el grupo de iguales ☐
- e. Problemas con los profesores/superiores ☐
- f. Absentismo escolar/laboral ☐
- g. Desempleo /No busca empleo ☐

Factor Protector ☐

Comentarios:

Fuente(s) de información:

Comentarios:

Fuente(s) de información:

Comentarios:

Fuente(s) de información:

I.G.I—J

Garrido Genovés, V.; López Martín, E. y Silva do Rosario, T. (2004)

4. Relación con el grupo de iguales

- a. Algunos de sus conocidos son delincuentes ☐
 - b. Algún amigo suyo es delincuente ☐
 - c. Pocos conocidos son modelos positivos ☐
 - d. Ninguno/pocos amigos modelos positivos ☐
- Factor Protector** ☐

5. Consumo de sustancias:

- a. Consumo ocasional de drogas ☐
 - b. Consumo habitual de drogas ☐
 - c. Consumo habitual de alcohol ☐
 - d. El consumo de drogas interfiere en su vida ☐
 - e. Delitos relacionados con el consumo de drogas ☐
- Factor Protector** ☐

6. Ocio/ Diversión:

- a. Pocas actividades organizadas ☐
 - b. Malgasta claramente su tiempo de ocio ☐
 - c. No demuestra intereses personales ☐
- Factor Protector** ☐

7. Personalidad/ Conducta:

- a. Autoestima inflada ☐
 - b. Agresividad física ☐
 - c. Ataques de cólera ☐
 - d. Incapacidad para mantener la atención ☐
 - e. Baja tolerancia a la frustración ☐
 - f. Sentimientos de culpa inadecuados ☐
 - g. Insolente/ agresivo verbalmente ☐
- Factor Protector** ☐

8. Actitudes, valores, creencias:

- a. Actitudes procriminales/ antisociales ☐
 - b. No busca ayuda ☐
 - c. Rechaza activamente la ayuda ☐
 - d. Desafía a la autoridad ☐
 - e. Insensible, poco preocupado por los otros ☐
- Factor Protector** ☐

Comentarios:**Fuente(s) de información:****Comentarios:****Fuente(s) de información:****Comentarios:****Fuente(s) de información:****Comentarios:****Fuente(s) de información:****Comentarios:****Fuente(s) de información:**

I.G.I—J

Garido Genovés, V.; López Martín, E. y Silva do Rosario, T. (2004)

2ª Parte: Resumen de riesgos y necesidades

Suma el número total de ítems marcados con una "X" dentro de cada subescala y marque el nivel de riesgo obtenido en cada una de ellas. Después suma el número de "X" en la columna A y columna B. Use el total de ambas columnas para completar el Nivel de Riesgo Total Global, en la parte inferior de la página. La marca en las casillas "FP" indica un Factor de Protección. La tabla de abajo puede ser usada como resumen de puntuaciones.

Puntuaciones	Delitos pasados y actuales	Familia	Educación	Grupo de iguales	Consumo de drogas	Ocio/ diversión	Personalidad/ conducta	Actitudes/ orientación
Bajo								
Moderado								
Alto								
Factor Protector								

Columna A Columna B**1. Delitos/ medidas judiciales pasados y actuales:**

Nivel de riesgo

Bajo (0) ☐

Moderado (1-2) ☐

Alto (3-5) ☐

2. Pautas educativas:

Nivel de riesgo

Bajo (0-2) ☐

Moderado (3-4) ☐

Alto (5-6) ☐

3. Educación Formal/Empleo:

Nivel de riesgo:

Bajo (0) ☐

Moderado (1-3) ☐

Alto (4-8) ☐

4. Relación con el grupo de iguales:

Nivel de riesgo:

Bajo (0-1) ☐

Moderado (2-3) ☐

Alto (4) ☐

5. Consumo de sustancias

Nivel de riesgo

Bajo (0) ☐

Moderado (1-2) ☐

Alto (3-5) ☐

6. Ocio/ Diversión:

Nivel de riesgo

Bajo (0) ☐

Moderado (1) ☐

Alto (2-3) ☐

7. Personalidad/ Conducta:

Nivel de riesgo

Bajo (0) ☐

Moderado (1-4) ☐

Alto (5-7) ☐

8. Actitudes, valores creencias:

Nivel de riesgo

Bajo (0) ☐

Moderado (1-3) ☐

Alto (4-5) ☐

Columna A
Total

Columna B
Total

Nivel de Riesgo Total Global:

Suma de totales de las Columnas A y B=

Bajo: (0-8) ☐ Moderado: (9-22) ☐

Alto: (23-34) ☐ Muy alto: (35-43) ☐

3ª Parte: Evaluación de otras necesidades y consideraciones especiales

1. Familia/ Padres

- ☐ Historia de delincuencia habitual
- ☐ Problemas emocionales/ psiquiátricos
- ☐ Abuso de alcohol y drogas
- ☐ Conflicto marital
- ☐ Problemas financieros/ de vivienda
- ☐ Padres poco colaboradores
- ☐ Dificultades étnicas/ culturales
- ☐ Padre maltratador
- ☐ Madre maltratadora
- ☐ Trauma familiar significativo (especificar): _____
- ☐ Otros (especificar): _____

Comentarios:

2. Joven

- ☐ Problemas de salud
- ☐ Minusvalía física (especificar): _____
- ☐ Baja inteligencia / Retraso del desarrollo
- ☐ Incapacidad para el aprendizaje
- ☐ Rendimiento escolar por debajo de la edad cronológica
- ☐ Poca habilidad para resolver problemas
- ☐ Víctima de abuso físico/ sexual
- ☐ Víctima de negligencia
- ☐ Timidez/ Retraído(a)
- ☐ Grupo de iguales fuera del rango de edad
- ☐ Deprimido(a)
- ☐ Baja autoestima
- ☐ Actividad sexual inapropiada
- ☐ Actitudes racistas/ sexistas
- ☐ Pocas habilidades sociales
- ☐ Niega la responsabilidad de sus actos
- ☐ Intentos de suicidio
- ☐ Diagnóstico de psicosis
- ☐ Amenazado(a) por otros
- ☐ Historia de agresión física/ sexual
- ☐ Historia de agresión a las figuras de autoridad
- ☐ Antecedentes de uso de armas
- ☐ Antecedentes de piromanía (provocó algún incendio)
- ☐ Historia de huidas
- ☐ Ha estado bajo la tutela/ cuidados de los servicios sociales de protección
- ☐ Condiciones de vida adversas
- ☐ Otros (especificar): _____

I.G.I—J

Garrido Genovés, V.; López Martín, E. y Silva do Rosario, T. (2004)

Comentarios: (Anotar cualquier consideración relativa al principio de las necesidades incluyendo la necesidad de servicios específicos).

4ª Parte: Evaluación cualitativa del nivel general de riesgo/necesidades del joven

Considerando toda la información disponible, proporcione su estimación del nivel de riesgo para este caso. Si su estimación del riesgo difiere de la del inventario, por favor explique por qué.

Nivel de riesgo:

Motivo: _____

Bajo ☐Moderado ☐Alto ☐Muy alto ☐

5ª Parte: Nivel de intervención

Administrativo/ burocrático ☐ _____Supervisión mínima ☐ _____Supervisión media ☐ _____Supervisión máxima ☐ _____

HIPOTESIS EXPLICATIVA (breve explicación del porqué el joven mantiene un comportamiento delictivo):

6ª Parte: Programa de intervención

Expediente de Reforma:

Medida:

Tiempo:

1º Objetivo	Educador / responsable	Lugar de realización	Que actividad	Tiempo que se dedica
2º Objetivo	Educador / responsable	Lugar de realización	Que actividad	Tiempo que se dedica
3º Objetivo	Educador / responsable	Lugar de realización	Que actividad	Tiempo que se dedica
4º Objetivo	Educador / responsable	Lugar de realización	Que actividad	Tiempo que se dedica

I.G.I—J

Garrido Genoves, V.; López Martín, E. y Silva do Rosario, T. (2004)

7ª Parte: Revisión de la gestión de la intervenciónPuntuación previa de riesgo
Fecha de evaluación: _____Cambios en el nivel del riesgo
Fecha de reevaluación: _____

A. Nivel de riesgo	Bajo	Moderado	Alto	Muy alto		Bajo	Moderado	Alto	Muy alto
Delitos y medidas judiciales									
Pautas educativas									
Educación y empleo									
Relación con grupo de iguales									
Consumo de drogas									
Ocio/ Diversión									
Personalidad/ Conducta									
Actitudes, valores, creencias									

Puntuación global	
Previa	Actual
<input type="checkbox"/> Bajo	<input type="checkbox"/> Bajo
<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Moderado
<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Alto
<input type="checkbox"/> Muy Alto	<input type="checkbox"/> Muy Alto

☐ **Finaliza la intervención.** No hay ulterior derivación ni continua un nuevo programa.

☐ **Nivel de intervención que se estima** (al derivar el caso o finalizar la intervención)

<input type="checkbox"/> Administrativo	<input type="checkbox"/> Mínimo	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Máximo
---	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

B. Otros cambios

Indicar cualquier otro cambio en las circunstancias, incluyendo nuevas medidas, comparencias ante el juez u otros contactos, desde la última revisión

C. Incumplimientos / incidencias significativas (acciones desarrolladas/ comentarios)

I.G.I.—J

Garrido Genovés, V.; López Martín, E. y Silva do Rosario, T. (2004)

D. Evaluación del programa de intervención (objetivos de la parte 6º)

Revisar los objetivos actuales de la intervención del caso y cualquier progreso/ revisión del programa

1º Objetivo:	<input type="checkbox"/> Logrado	<input type="checkbox"/> Parcialmente logrado	<input type="checkbox"/> No logrado
--------------	----------------------------------	---	-------------------------------------

Comentarios:

2º Objetivo:	<input type="checkbox"/> Logrado	<input type="checkbox"/> Parcialmente logrado	<input type="checkbox"/> No logrado
--------------	----------------------------------	---	-------------------------------------

Comentarios:

3º Objetivo:	<input type="checkbox"/> Logrado	<input type="checkbox"/> Parcialmente logrado	<input type="checkbox"/> No logrado
--------------	----------------------------------	---	-------------------------------------

Comentarios:

4º Objetivo:	<input type="checkbox"/> Logrado	<input type="checkbox"/> Parcialmente logrado	<input type="checkbox"/> No logrado
--------------	----------------------------------	---	-------------------------------------

Comentarios:

Firma del responsable de la medida

Fecha: _____

Fdo.: _____

Anexo 5: Programa Educativo y Terapéutico de Ocio y Tiempo Libre para menores infractores



**Agencia
para la Reeducción
y Reinserción
del Menor Infractor**

**PROGRAMA educAtivo y teRAPéuticO de
OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA MENORES
INFRACTORES**

**José Luis Graña Gómez
M^a Benita Moya Villaseñor**



*Facultad de Psicología
Universidad Complutense*

Este manual es el resultado del Convenio de Colaboración establecido entre la Universidad Complutense de Madrid y la Agencia para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, siendo Consejero Excmo. Sr. D. Francisco Granados Lerena.

Director: José Luis Graña Gómez

Dirección Técnica: Regina Otaola Muguerza, Luis González Cieza, Asela López Millán.

Equipo de Investigación: M^a Paz García Vera, José Manuel Andreu Rodríguez, M^a Elena Peña Fernández, Marina Muñoz Rivas, Jesús Sanz Fernández, José Ignacio Robles Sánchez, M^a Benita Moya Villaseñor, Natalia Redondo Rodríguez, Carlos Benedicto Duque, Eduardo Atarés Pinilla.

INTRODUCCIÓN

Durante el año 2008, la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) elaboró un amplio estudio con el que pretendía conocer de forma precisa los factores que se relacionan de forma significativa con el riesgo de reincidencia delictiva. De este interés deriva, en consecuencia, el esfuerzo por desarrollar una prevención más eficaz de la carrera delictiva de los menores. Al observar los resultados de su estudio, de hecho, se puede constatar la asociación positiva que se produce entre el riesgo de reincidencia y diversos factores, en el sentido de que, a mayor presencia de determinados factores en el menor (por ejemplo, consumo de drogas, déficits personales, etc.), existe una mayor probabilidad de que el menor vuelva a delinquir. Junto a todos estos hallazgos, destaca también la presencia de una asociación negativa que es la que se produce con el desarrollo de hábitos de ocio saludable. Es decir, que aquellos menores que tengan instauradas en su día a día conductas de ocio protector, presentarán una menor probabilidad de volver a realizar conductas antisociales (Graña, Garrido y González, 2008).

El abordaje del ocio y del tiempo libre en menores infractores presenta unas características especiales ya que la propia adolescencia tiene sus propias singularidades por lo que hay que tener en cuenta diversos aspectos dentro del ámbito de la psicología.

En primer lugar, hay que entender la adolescencia como una etapa de transición a la edad adulta en la que no solo se producen cambios puramente físicos sino también psicológicos que afectan a aspectos tanto intelectuales como emocionales. La adolescencia es un periodo sumamente importante en la vida ya que marca el tránsito de la niñez a la etapa adulta. Los logros que consigamos en la vida adulta van a depender en parte de lo que suceda durante este periodo de la vida. La búsqueda de identidad personal, la incertidumbre ante el futuro y la falta de planificación, pueden llevar al adolescente a explorar gratificaciones más inmediatas, sin tener en cuenta otras consecuencias, favoreciendo el incremento de conductas de riesgo (Gardner, 1993). Esto se refiere tanto al estilo de vida adquirido como a los hábitos que se han ido estableciendo. Así por ejemplo, a la hora de intervenir en la modificación de conductas desadaptadas, en muchas ocasiones es más sencillo hacerlo en la adolescencia temprana ya que todavía se están consolidando muchos hábitos.

Para el establecimiento de un estilo de vida basado en la delincuencia, se considera que la adolescencia es el periodo crítico para el desarrollo de un individuo, y en estos menores suele estar asociada al consumo de alcohol y drogas. Es importante comprender bien este periodo para poder determinar los factores influyentes en el establecimiento de conductas delictivas. Y es especialmente relevante preguntarse qué hace a esta etapa crítica para el desarrollo de conductas antisociales. La rebeldía es lo que más ha caracterizado la concepción del adolescente, que muchas veces la utilizan para lograr su autonomía e independencia, pasando a ser la figura del adulto, y todo lo que con ella se relaciona, su principal enemigo a enfrentar. La ambivalencia y la contradicción son rasgos característicos de las relaciones en esta etapa de desarrollo. Sentirse incomprendidos también es una característica fundamental que aparece con mucha frecuencia en el periodo de la adolescencia. Por ello se vuelven más reservados y celosos de su intimidad con respecto a los adultos y tienden a desarrollar una mayor adherencia a su grupo de iguales, con los que pasan la mayor parte del tiempo.

1.1. El ocio y tiempo libre en los jóvenes

Debido al objetivo de este programa, se hace obligatorio analizar la cultura del ocio de los jóvenes. Uno de los aspectos claves y que además se señala como modificable en la determinación de que el joven delinca o no es que se dé una ociosidad no adaptativa, pues se ha observado que la presencia de un ocio no desviado disminuye la probabilidad de reincidencia delictiva (Graña et al., 2008). La falta de conocimiento del menor de otras alternativas a sus hábitos de ocio lleva al establecimiento de pautas comportamentales dañinas para la comunidad y para el propio menor que suele concluir con la penalización por parte del sistema judicial.

La forma en que distribuyen su tiempo libre los jóvenes es uno de los mejores indicadores para estudiar los grandes cambios sufridos por nuestra sociedad en las últimas décadas. En algunas ocasiones el ocio y el tiempo libre puede ser uno de los factores de riesgo más importantes que predicen conductas antisociales o vandálicas en los jóvenes actuales. Los jóvenes dividen su ocio y tiempo libre en dos modalidades básicas (Acero, Moreno, Moreno y Sánchez, 2002):

a) Un ocio centrado en los medios de comunicación e informática (televisión, radio, música, Internet, etc.) caracterizándose principalmente por desarrollarse de forma individual, en espacio privados y familiares y con mayor intensidad los días laborables.

b) Un ocio de carácter colectivo o social que se caracteriza por desarrollarse con el grupo de iguales, en espacios públicos y durante los fines de semana.

El tiempo de ocio los fines de semana es mucho mayor y el joven suele buscar su ocio fuera del hogar, siendo la búsqueda de nuevas relaciones el mayor de los fines (Martínez, Fernández-Alba y Salgado, 2004). El consumo de ocio festivo intenso e inmediato de los fines de semana supone para los jóvenes una sensación de estar creando una comunidad diferenciada por el mero hecho de compartir un espacio o música. La mayoría de los jóvenes actuales dedican gran parte de su tiempo y su presupuesto al consumo de ocio, lo que hace que éste influya de forma significativa en su vida, fomentando e instaurando en su repertorio de conductas unas que son adaptativas y otras menos. Por ello, cada vez son mayores las actividades en las que el joven puede adquirir comportamientos negativos para su desarrollo óptimo. Los jóvenes tienen cada vez mayor disponibilidad para el ocio, convirtiéndose en “depredadores” del mismo.

Como promedio, la población joven dispone de aproximadamente veinticinco horas a la semana para su ocio y diversión, si bien más de una tercera parte superan este promedio. Ciertamente, tanto tiempo libre es un privilegio juvenil, propio de personas sin cargas familiares. De hecho, cuanto más joven es una persona, más tiempo dedicará a entretenerse y a divertirse. Por ejemplo, quienes aún no han cumplido los 18 años tienen tres horas y cuarto más de tiempo libre a la semana que quienes ya han llegado a los 25 años, lo que supone un 12% más de descanso y ocio (Martínez et al., 2004).

Generalmente, las actividades de ocio ligadas a una disminución de las conductas antisociales suelen tener un alto nivel de estructuración y enfatizan la adquisición de habilidades y competencias, por ejemplo, practicar algún deporte o aprender a tocar algún instrumento musical (Mahoney, 2000; Mahoney y Stattin, 2000). Por el contrario, el ocio asociado a comportamientos desviados en general, tiende a incluir, o a centrarse exclusivamente, en actividades que o bien no están estructuradas, o se realizan en solitario o bien no son convencionales, o se dan varios de estos factores conjuntamente. Por tanto, entre las actividades de ocio propias de la adolescencia, hay algunas que por sus características y/o por el contexto en el que se realizan tienen mayor probabilidad de convertirse en problemáticas o asociarse con conductas desadaptadas (uso inadecuado de tecnologías, juegos de azar, consumo de drogas, etc.) (Martínez et al., 2004).

Las conductas de riesgo más relacionadas con el ocio y el tiempo libre son las siguientes:

- *Consumo de alcohol (botellón) y otras drogas:* los lugares donde se desarrollan estas conductas suelen ser discotecas, bares y parques. El alcohol y los estimulantes producen un estado de euforia, desinhibición, impulsividad y visión reducida de la realidad que se asocia con graves consecuencias. Aunque el verdadero problema es que para algunos jóvenes el ocio y el consumo de alcohol están asociados.
- *Vandalismo:* se caracteriza por conductas destructivas del mobiliario urbano como puede ser quema de contenedores, rotura de retrovisores, artefactos explosivos, etc. Muchas de las conductas infractoras cometidas por los adolescentes tienen que ver con la necesidad de ocupar la gran cantidad de tiempo que pasan en la calle. Con frecuencia son los mismos adolescentes “aburridos” que están subidos encima del banco del parque los que en otros momentos lo destrozan. Han de rellenar su tiempo y se han de apropiar de los espacios; y viven el mobiliario urbano como algo ajeno, de otros, que nada tienen que ver con sus vidas. Agrediéndolo pueden actuar, moverse, reducir el aburrimiento y provocar a la ciudadanía adulta que *pasa* totalmente de ellos.
- *Violencia:* rivalidad entre bandas, maltrato hacia animales, maltrato a indigentes, violencia verbal, en el deporte, etc. Hay pandillas o grupos extremistas en los que la utilización de la violencia es causa de justificación de su misma existencia. Piensan que la forma de buscar la cohesión del grupo es poniendo a prueba a sus integrantes. Así conocen con certeza quién merece formar parte del mismo y tiene posibilidades de ejercer el control del grupo.

En conclusión, podemos considerar que el tiempo libre puede ser considerado como un arma de doble filo. Por un lado, en ausencia de supervisión, o de encuadramiento el adolescente dejado a sí mismo, corre un riesgo mayor de tener problemas de comportamiento, incluida la delincuencia. De otro lado, si hay un esfuerzo conjunto para hacer que la recreación tenga un propósito constructivo para el individuo, el tiempo libre podría convertirse en un factor decisivo y favorecer el desarrollo en el adolescente de actitudes y valores compartidos por la sociedad civil (Giorgi, 2012). Por tanto, la forma en que los jóvenes administran y planifican su tiempo es de vital importancia, no sólo para la realización

de las actividades que deseen llevar a cabo, sino también para la adquisición hábitos saludables que se mantendrán a lo largo de la vida adulta. En este sentido, constituye un factor de protección la adecuada planificación del tiempo, unida a la satisfacción percibida con la realización de actividades saludables y lejos del ocio relacionado con el consumo de drogas y otras situaciones peligrosas o perjudiciales para la salud o que podrían conllevar consecuencias negativas para su desarrollo psicosocial.

1.3.Programa de intervención

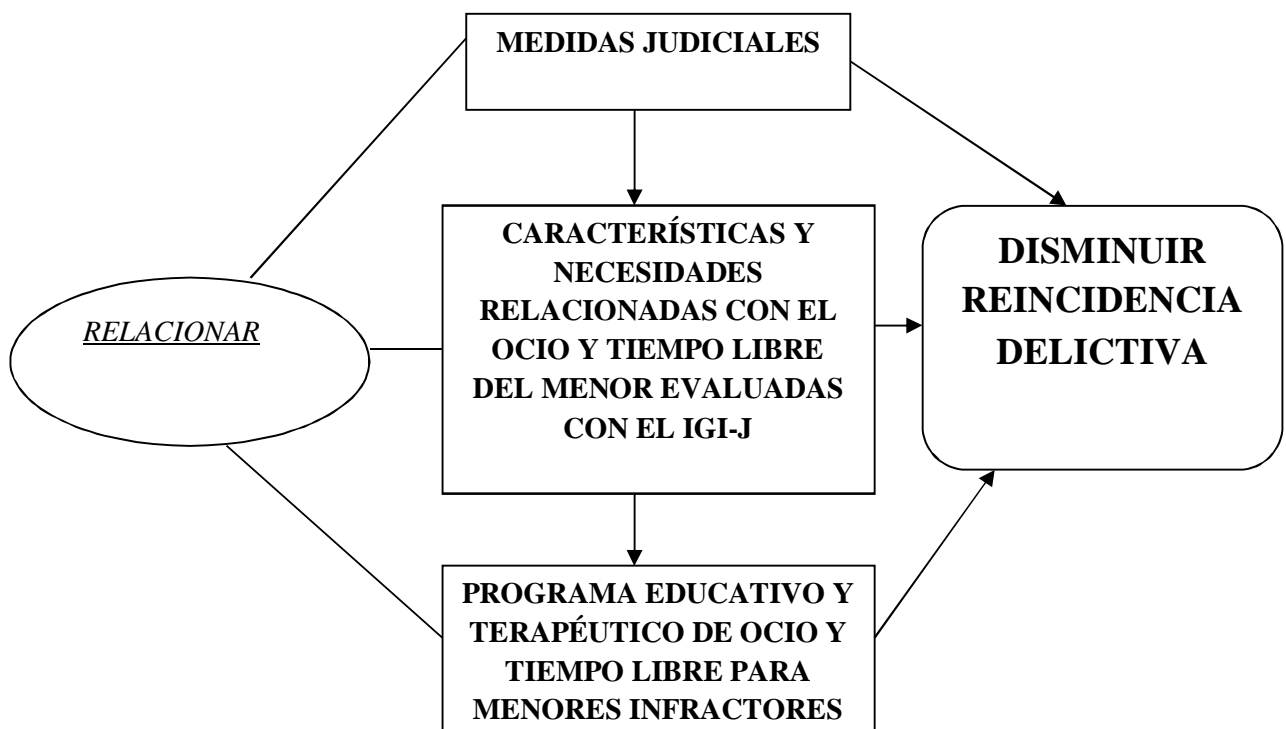
Teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas previamente, se hace evidente que con este programa se pretende, en primer lugar, que los jóvenes sean conscientes de a qué dedican su tiempo libre y cómo lo distribuyen, analizando su influencia en la conducta delictiva, para que el cambio hacia el que se dirige el programa pueda producirse.

El programa Educativo y Terapéutico de Ocio y Tiempo Libre para menores infractores se enmarca entre los programas de prevención secundaria y terciaria, ya que las actuaciones que se proponen intentan solucionar un problema ya existente en ésta población. Así como prevención selectiva, ya que los adolescentes a los que va dirigido poseen un mayor riesgo que el promedio de la población.

Pretende entrenar a los menores/jóvenes en habilidades que les permitan llevar un estilo de vida saludable, por ejemplo aprendiendo a rechazar el consumo de drogas asociado al tiempo de ocio. Aspectos como la publicidad, la importancia de las relaciones personales con las que compartimos nuestro ocio y cómo nos influyen, el saber plantear soluciones alternativas a conductas de riesgo cuando se tiene un problema relacionado con el fin de semana, romper la relación entre diversión y el consumo de drogas, así como que la persona sea capaz de adquirir un adecuado autocontrol tanto emocional, como conductual, constituyen los elementos más importantes que se van desarrollando a lo largo de las distintas sesiones.

La modalidad terapéutica de este programa de intervención recoge las principales características y necesidades relacionadas con el ocio y tiempo libre de los menores infractores, todo ello trabajado mediante el empleo de múltiples técnicas y procedimientos y a la luz de un programa estructurado de naturaleza cognitivo-conductual. Así, este

planteamiento deriva de una concepción de la delincuencia juvenil como un fenómeno complejo y multidimensional que se debe a la influencia de diversos factores etiológicos que se encuentran interrelacionados entre sí.



El Inventario de Gestión en Intervención para Jóvenes (IGI-J) es un instrumento que evalúa los factores de riesgo y protección de menores infractores, examinando las necesidades de intervención individual más apropiadas a las características del menor. Entre el listado de factores de esta prueba, el cual permite evaluar todas las áreas que se consideran como más relevantes para explicar el delito en la vida de estos menores, se encuentra el área de ocio y diversión, de ahí la importancia de elaborar un tratamiento específico, con el objetivo primordial de reducir así la reincidencia delictiva.

La Tabla 1 que se presenta a continuación refleja la estructura global del programa y, en la Tabla 2, se enumeran y especifican los objetivos generales de intervención para cada una de las sesiones.

Tabla 1. Módulos y sesiones del programa de intervención

MÓDULO 1. MI EXPERIENCIA PERSONAL EN EL USO DEL OCIO Y DEL TIEMPO LIBRE

Sesión 1: ¿Cómo utilizo el ocio en mi vida habitual?

Sesión 2: Pensamientos y emociones asociados al uso del ocio

Módulo 2. Ocio de riesgo y protector

Sesión 1: Mis perfiles de ocio de riesgo y ocio protector

Sesión 2: Ocio de riesgo

Sesión 3: Ocio protector

Módulo 3. Planificación de un ocio saludable

Sesión 1: Planificación de una semana de ocio saludable

Sesión 2: Desarrollo de emociones positivas asociadas a un ocio protector

Sesión 3: Consolidación del hábito de ocio protector

Sesión 4: Generalización y prevención de recaídas

Tabla 2. Objetivos generales del programa de intervención

MÓDULOS	OBJETIVOS GENERALES
Módulo 1. Mi experiencia personal en el uso del ocio y del tiempo libre	Toma de conciencia sobre cómo se distribuye y a qué se dedica el tiempo libre y de ocio, estableciéndose un perfil o idea general sobre el ocio de los participantes
Módulo 2. Ocio de riesgo y protector	<ul style="list-style-type: none"> - Analizar el perfil general de ocio en función de la tipología riesgo/protección, con el fin de tomar conciencia sobre el tipo de actividades de ocio que se realizan, así como sus consecuencias. - Favorecer el interés por actividades de ocio saludables alternativas a cualquier tipo de actividad de riesgo
Módulo 3. Planificación de un ocio saludable	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar estrategias de planificación del tiempo libre para afrontar el día a día de forma óptima, intentando prevenir posibles recaídas. - Fomentar el ocio no relacionado con el consumo de drogas, alcohol o cualquier tipo de situación peligrosa o perjudicial para la salud

1.3. Guía de uso del programa

En este apartado se van a especificar varios aspectos que son fundamentales para realizar una adecuada aplicación del programa de intervención. Estos aspectos son las instrucciones necesarias para la aplicación del programa, las habilidades terapéuticas más convenientes y, en último lugar, la ficha de evaluación para valorar el progreso educativo y terapéutico de cada menor.

1.3.1. Instrucciones para la aplicación del programa

Para que psicólogos, trabajadores sociales y educadores puedan aplicar este programa de forma eficaz, es necesario considerar que, siempre que sea posible, el mismo deberá aplicarse de forma completa. Y, para ello, es fundamental proceder de forma secuencial, ya que los contenidos del programa están encadenados de un módulo al siguiente hasta el final del mismo. De este hecho deriva la importancia que tiene que los responsables del programa de tratamiento hagan los ajustes necesarios en función de la duración de las medidas judiciales.

El programa de intervención propuesto consta de 9 sesiones, con una duración aproximada de una hora y media cada una y con una periodicidad semanal. El criterio establecido para avanzar dentro del programa consiste en la asimilación y comprensión por parte de los menores de los objetivos de la sesión. En ningún caso se pasará a la siguiente sesión hasta que la anterior no se haya completado de forma adecuada, considerando que cada menor y cada grupo tiene su propio ritmo terapéutico.

El programa se ha diseñado para aplicarse en formato grupal, siendo aconsejable que los grupos tengan una composición aproximada de entre 5 u 8 miembros como máximo. Además, la estructuración de los contenidos permitirá reforzarlos en sesiones individuales de intervención. Este hecho también favorecerá el trabajo individual de aspectos importantes que impidan a un determinado menor seguir el ritmo del grupo.

Con respecto a los profesionales encargados de la aplicación del programa, éstos pueden ser psicólogos, trabajadores sociales o educadores; trabajadores habituales del centro o recurso en el que se vaya a desarrollar el programa ya que se considera un aspecto crucial la

continuidad del personal que lo aplique para, así, poder constituir una figura de referencia para el grupo de intervención.

Otro aspecto fundamental para la correcta aplicación del programa es que el Equipo Educativo, principalmente, el educador-tutor, realicen funciones de apoyo y reforzamiento en la aplicación del mismo, orientando a los menores en las tareas individuales que deban realizar entre sesiones y reforzando su esfuerzo para conseguir una mayor implicación y asimilación de contenidos. Por otro lado, además, el Equipo Educativo deberá ser informado semanalmente por los terapeutas sobre la evolución del grupo de tratamiento, tanto de forma grupal como individual.

Para el desarrollo del programa, se ha diseñado un manual para el terapeuta/monitor que recoge tanto el contenido como las actividades a tratar en cada una de las sesiones de trabajo, así como las hojas de actividades a completar por el menor a lo largo de la aplicación del programa. El manual se compone de módulos y cada uno de éstos tiene varias sesiones, iniciándose cada uno de ellos con una justificación teórica y con el planteamiento de una serie de objetivos generales y terminándose cada una de las sesiones con una actividad complementaria que sirva de refuerzo y apoyo a los contenidos abordados durante la misma. Así, en las actividades complementarias se incluye de manera general el visionado de películas, cuyo objetivo es utilizar la cotidianeidad del medio audiovisual como herramienta de intervención educativa, a la par que se intenta favorecer en los participantes la afición por el cine como fórmula positiva de utilización de ocio y tiempo libre.

Cada una de las sesiones de las que consta el programa tiene una estructura similar para facilitar su utilización y comprensión. Los apartados que las constituyen son los siguientes:

- ✓ **Objetivos específicos:** en este apartado se presentan de forma esquemática y concisa las metas concretas que se pretenden conseguir con el trabajo desarrollado a lo largo de la sesión.
- ✓ **Procedimiento y contenidos:** en este apartado se explica muy brevemente y de forma general la metodología a seguir de cara al logro de los objetivos propuestos, especificándose una serie de observaciones sobre la forma en la que debe desarrollarse la sesión de trabajo y la relación entre las actividades que se van a desarrollar.

- ✓ **Conceptos clave:** se definen o explican aquellos conceptos que se consideran fundamentales dentro de cada una de las sesiones del programa, o aquellos que puedan aclarar el sentido o proporcionar información relevante sobre algún contenido específico de la sesión.
- ✓ **Material:** consiste en un listado de los diversos recursos y materiales didácticos que facilitarán o se necesitarán durante el desarrollo de la sesión para una adecuada realización de la misma.
- ✓ **Actividades:** se presenta una enumeración de las dinámicas y ejercicios que se llevarán a cabo dentro de la sesión.
- ✓ **Desarrollo de la sesión:** en este apartado se expone de forma detallada y minuciosa la forma mediante la cual el terapeuta/monitor dirigirá la sesión de intervención.

Además, en cada una de las sesiones se incluye el material necesario para completar las actividades de papel y lápiz que se incluyan, así como la información relevante para su correcta aplicación. Cuando lo considere oportuno, el terapeuta/monitor podrá cambiar las actividades propuestas por otras complementarias o diferentes (por ejemplo, cuando existan problemas de expresión verbal o escrita). También se podrá cambiar la manera de llevar a cabo alguna actividad, por ejemplo, sustituyendo una actividad de papel y lápiz por un role-playing o escenificación, siempre y cuando este cambio se realice para conseguir un mejor ajuste del grupo al trabajo por realizar.

En resumen, las recomendaciones generales para la aplicación del programa son las siguientes:

1. Las actividades complementarias incluidas en las sesiones son opcionales, realizándose cuando el terapeuta/monitor lo considere oportuno. Si bien, se incluyen varias películas y dinámicas incorporadas con las que poder reforzar los contenidos trabajados durante las sesiones con el objetivo de estimular su uso como actividad de ocio de carácter protector, a la vez que se impulsa la reflexión y la capacidad analítica, así como el desarrollo de sus competencias sociales. De las películas sugeridas en cada actividad complementaria, el monitor podrá elegir cuál se adapta más a las necesidades de los participantes en función de su criterio, así como de la disponibilidad de la película, por lo que podrá sustituirla por otra de contenido similar o anularla en función de su criterio educativo.

2. Los ejemplos utilizados en el manual se podrán sustituir por otros más adecuados para el grupo y, cuando se consiga la comprensión de los conceptos con un determinado ejemplo, no será necesario utilizar el resto.
3. La información teórica aportada para el trabajo de las sesiones podrá ser reducida o ampliada cuando se considere necesario. La teoría que se incluye en cada sesión es facilitada al terapeuta/monitor, siendo éste quien adapte los contenidos a las características y habilidades de los participantes.
4. Es recomendable que, al comienzo de cada sesión, se realice un breve resumen de lo trabajado en la sesión previa, facilitándose el mismo mediante las preguntas de evaluación incluidas al final de cada sesión.
5. Las sesiones propuestas podrán dividirse en varias sesiones y, así se considera oportuno, con el objetivo de poder dedicar más tiempo a su realización y si así lo requiere el ritmo del grupo de tratamiento. También podrán agruparse varias sesiones en una y encadenar adecuadamente las actividades propuestas en las mismas.

1.3.2. Habilidades terapéuticas para la aplicación del programa

El éxito que se pueda alcanzar con la aplicación de este programa de intervención se relaciona de forma directa con el modo en que se aplique dicho programa. En primer lugar, es fundamental que el terapeuta/monitor establezca un clima adecuado de colaboración con los menores, mediante la adopción de una posición motivacional que permita la consecución gradual de los objetivos planteados en el programa de intervención. En este sentido, se podrían establecer las siguientes recomendaciones:

1.- En ningún caso, el terapeuta/monitor impondrá al menor la motivación para el cambio, sino que pretenderá que esta motivación sea generada en el propio menor, identificando y movilizándolo sus propios objetivos de cambio y compatibilizándolos con los objetivos que plantea el programa.

2.- Es muy importante que el terapeuta/monitor tenga en cuenta que el cambio es un proceso gradual y que, con frecuencia, se suelen producir altos y bajos en el proceso de cambio de cada menor. Por lo tanto, el terapeuta/monitor deberá ayudar a cada uno de los menores a resolver y superar las posibles ambivalencias que surjan durante la aplicación del

programa, favoreciendo la aceptación e interiorización de las mismas como un aspecto positivo ante el cambio, dentro de un ambiente terapéutico de respeto.

3.- Un procedimiento muy recomendable para fomentar la motivación al cambio de los menores es el análisis de costes y beneficios. Establecer una metodología de cambio altamente directiva no suele beneficiar en nada el proceso de cambio.

4.- En consecuencia, tampoco es muy recomendable utilizar la persuasión directa, la confrontación agresiva ni la argumentación con el menor. Las estrategias más agresivas y de confrontación de la negación pueden presionar a los menores a realizar cambios para los que todavía no están psicológicamente preparados. Es mucho más conveniente utilizar un estilo terapéutico socrático que ayude al menor a generar el cambio mediante el uso de estrategias de búsqueda de información, escucha activa y mediante el planteamiento eficaz de preguntas relevantes encaminadas a centrar los pensamientos del menor sobre los objetivos que se analicen en cada momento.

5.- Cada menor y cada grupo tiene su propio ritmo terapéutico en la aplicación del programa. En ningún caso se debe forzar el progreso de los contenidos de una sesión a la siguiente si se observan señales de resistencia. La preparación para el cambio es fruto de la interacción entre el propio menor, el grupo de tratamiento y el terapeuta/monitor. Si el terapeuta/monitor asume que el menor está preparado para trabajar los contenidos de una determinada sesión cuando, de hecho, no lo está, se producirá una gran resistencia al cambio en el menor. Se deberá dedicar el tiempo que sea necesario para asimilar los contenidos concretos que se están trabajando en una determinada sesión.

1.3.3. Ficha para la evaluación del programa de intervención

Para poder evaluar la participación de cada menor en el programa de intervención, es importante que el terapeuta/monitor valore, después de la aplicación de cada sesión, la manera en que cada uno de los participantes han trabajado los contenidos terapéuticos que se incluyen en cada una de las sesiones, además de evaluar el modo en que se han asimilado e interiorizado los contenidos trabajados en las mismas.

De esta manera, al realizar un seguimiento individualizado de la asimilación de los contenidos trabajados en el programa de intervención, se está realizando también una valoración sobre la implicación de cada menor en el programa. De este hecho deriva un aspecto muy importante que es la posibilidad de poder realizar sesiones de refuerzo a nivel individual para conseguir que el ritmo terapéutico del grupo sea el más adecuado posible y, en ningún caso, quede entorpecido por el comportamiento concreto de uno de sus miembros.

En la Tabla 3 se presenta la ficha de evaluación del progreso que cada menor va realizando durante la aplicación del programa de intervención. En la columna de observaciones, el terapeuta/monitor especificará los aspectos que podrían trabajarse con el menor en sesiones de refuerzo, ya que la asimilación de esos contenidos específicos no ha sido adecuada.

Tabla 3. Ficha de evaluación del progreso que cada menor va realizando durante la aplicación del programa de intervención

NOMBRE O CÓDIGO DEL MENOR					
MÓDULOS	SESIONES	Fecha de la sesión	Trabajo realizado [0-10]	Asimilación de contenidos [0-10]	Observaciones
Módulo 1. Mi experiencia personal en el uso del ocio y del tiempo libre	<i>Sesión 1: ¿Cómo utilizo el ocio en mi vida habitual?</i>				
	<i>Sesión 2: Pensamientos y emociones asociados al uso del ocio</i>				
Módulo 2. Ocio de riesgo y protector	<i>Sesión 1: Mis perfiles de ocio de riesgo y ocio protector</i>				
	<i>Sesión 2: Ocio de riesgo</i>				
	<i>Sesión 3: Ocio protector</i>				
Módulo 3. Planificación de un ocio saludable	<i>Sesión 1: Planificación de una semana de ocio saludable</i>				
	<i>Sesión 2: Desarrollo de emociones positivas asociadas a un ocio protector</i>				
	<i>Sesión 3: Consolidación del hábito de ocio protector</i>				
	<i>Sesión 4: Generalización y prevención de recaídas</i>				
PUNTUACIÓN FINAL					

MÓDULO I.
MI EXPERIENCIA PERSONAL
EN EL USO
DEL OCIO Y
DEL TIEMPO LIBRE

1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

1.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN

El nivel económico alcanzado en la sociedad durante las últimas décadas ha facilitado ciertos cambios sociales y culturales en todos los sectores de la población, especialmente, entre los jóvenes. Así, se ha favorecido la igualdad entre los géneros, un mejor y más fácil acceso a la educación en sus diferentes niveles y a la sanidad y un mayor acceso a los bienes de consumo. Todo ello ha traído parejo un incremento del poder adquisitivo en todas las capas sociales, lo que se traduce no sólo en una mayor compra de bienes materiales y acceso a bienes culturales y de ocio, sino también en la generación, entre los jóvenes (y no tan jóvenes), de nuevas necesidades que deben ser cubiertas, y que nada tienen que ver ya con las necesidades básicas de alimento, vestido, hogar, etc. (Martínez et al., 2004).

Por otro lado, en los últimos años, este estado de bienestar (unido a las altas tasas de paro) ha favorecido la creación de una juventud muy dependiente de la economía familiar: los jóvenes convierten la categoría de estudiantes no en una situación de paso, sino en un estado cuasi-permanente y sinónimo de juventud (Laespada y Salazar, 1999). La mayoría de los jóvenes españoles entre 15 y 24 años vive satisfactoriamente en el hogar familiar y afirma que sólo se independizaría si encontrara trabajo estable y una casa a precio asequible, lo que suele resultar difícil para la mayoría de los casos antes de los primeros años de la edad adulta.

Entonces, ¿cuál es el espacio en el que los jóvenes escogen, deciden y se diferencian? Podría decirse que aquel en que consideran que deben (y pueden) decidir por sí mismos. Este espacio lo conforma prioritariamente el ocio y tiempo libre, sobre todo, el que sucede durante el fin de semana. En palabras de Comas (1996): *“durante el fin de semana aparece una oferta casi ilimitada y muy fragmentada de prácticas, tanto de ocio como de estudio o trabajo, en lo doméstico y en lo extradoméstico, de tipos de relación con la información mediada, más prácticas de vinculación grupal, más espacios para la intimidad y la individualización, pero también para los riesgos y, en fin, una serie de posibilidades que vienen a depender de una decisión personal, que a su vez es resultado no tanto de factores de preferencia o valía personal sino de mecanismos para recrear estereotipos que se vinculan con la diferenciación social”*.

La psicología evolutiva ha prestado una atención especial a algunas características de gran relevancia, con objeto de comprender qué función desempeñan las conductas de riesgo en esta edad, subrayando especialmente dos: reducir la incertidumbre y construir la propia identidad. Una manifestación específica de estas necesidades funcionales es la convicción de que los adolescentes y jóvenes son invulnerables (Schinke, Botvin y Orlandi, 1991), especialmente frecuente en la adolescencia temprana y que surge como consecuencia de una cierta forma de egocentrismo que aparece en dicha edad y que origina lo que se ha denominado como “auditorio imaginario y fábula personal” (Elkind, 1967).

La “fábula personal” se basa en la inclinación adolescente a centrarse en uno mismo, a buscar la diferenciación y la coherencia interna en esa diferencia, lo que lleva con frecuencia al convencimiento de que la experiencia personal es algo especial y único; una distorsión cognitiva que puede estar en la base de las graves conductas de riesgo en que eventualmente se implican algunos adolescentes, creyendo que las consecuencias más probables de dichas conductas no pueden sucederles a ellos porque son especiales. A todo ello hay que añadir que, algunos estudios sociológicos realizados en nuestro país (Martín y Velarde, 2001) destacan como una característica actual de la identidad adolescente la escasa orientación hacia el futuro y la dificultad para apropiarse de lo que se va a ser y para construir un proyecto propio, un fenómeno al que suele denominarse presentismo; esta característica se incorpora como un elemento más a esos rasgos adolescentes que incrementan la orientación a las conductas de riesgo. Obviamente, no tener en cuenta lo anterior puede restar eficacia a los programas de prevención que se limitan a dar información sobre las posibles consecuencias de las conductas (Díaz-Aguado, 1996).

Por ende, el espacio de ocio para los jóvenes se convierte en el espacio de tiempo para las actividades compartidas con el grupo de iguales, de la complicidad festiva sin adultos, de la reciprocidad clandestina. Es el espacio que se reserva para los amigos, la diversión, la fiesta, a veces mediatizadas también por el alcohol, las drogas, la violencia o el sexo (Gil, 1996). Aunque al hablar de ocio, cabe destacar que es un término polisémico y que puede ser interpretado de forma subjetiva por cada individuo o grupo, pese a ser algo universalmente reconocido en la sociedad. Esa diversidad de significados obliga a una reflexión sobre de qué ocio hablamos, cómo lo vive quien lo disfruta y en qué contexto se desarrolla (Ballesteros, De Asís, Rodríguez y Megías, 2009).

Si bien, el ocio nace bajo el paraguas del tiempo libre, el cual se define como el tiempo que resta una vez realizadas las obligaciones (trabajo, estudio, tareas domésticas, etc.), y cubiertas las necesidades básicas (sueño, alimentación, higiene, etc.). Es durante ese tiempo cuando se realizan las actividades libremente elegidas, pudiendo tener o no un carácter lúdico o de divertimento. Se podría decir que el tiempo libre es el continente en el que el ocio surge como uno de sus contenidos (Ballesteros et al., 2009). Por tanto, la delimitación del concepto de ocio incluye diferentes dimensiones: la autonomía (el sujeto debe percibirse como libre para elegir lo que quiera hacer), la finalidad (el ocio se busca por sí mismo, no hay otro objetivo) y la actividad (el ocio debe ser grato y placentero). Por tanto, para adolescentes y jóvenes, el tiempo libre y en concreto el ocio, se convierten en un espacio para ser ellos mismos, sin los condicionamientos de los contextos adultos. Sus protagonistas hacen de esos microespacios temporales un lugar de desarrollo y de búsqueda de identidad. Esa exploración se manifiesta en el ensayo de conductas a través de actividades y de nuevas vivencias, en un ejercicio consciente o no, pero siempre activo y predispuesto. Es un espacio para dejarse llevar, por el grupo, la oferta o la moda, e incorporarse al mismo de una forma pasiva; un único ejercicio es obligado, elegir entre lo que el contexto ofrece (Ballesteros et al., 2009).

Por tanto, con este primer módulo se pretende que los menores sean conscientes de forma real de lo que es el ocio y de cómo son sus actividades al respecto, para poder analizarlas detenidamente a nivel personal.

1.2. OBJETIVOS GENERALES

1. Tomar conciencia sobre cómo se distribuye y a qué se dedica el tiempo de ocio.
2. Establecer un perfil de ocio general en cada uno de los participantes.
3. Analizar las actividades de ocio descritas en términos de pensamientos, emociones y consecuencias.

2. SESIÓN 1: ¿CÓMO UTILIZO EL OCIO EN MI VIDA HABITUAL?

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer a qué dedican el tiempo libre los participantes, qué actividades realizan y cuáles son las posibilidades de las que disponen.
2. Establecer cuáles son sus preferencias a la hora de elegir actividades y lugares donde desarrollarlas y pasar el tiempo de ocio.
3. Presentar el programa.

2.2. PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

De acuerdo con estos objetivos, se han desarrollado una serie de actividades, la mayoría consistentes en tareas de papel y lápiz. Con ello se pretende que los participantes sean conscientes de a qué dedican su tiempo libre y descubran que existen otras formas de divertirse. El hecho de que existan actividades en las que tienen que encontrar puntos fuertes y débiles a las tareas propuestas, les lleva a contemplar formas diferentes y placenteras de pasar su tiempo que probablemente habrían rechazado anteriormente.

Con el role-playing se intenta dar una visión más práctica de lo expuesto para que puedan poner en marcha lo adquirido en anteriores actividades.

Con la tarea complementaria se pretende, poner en práctica lo aprendido y hacer que experimenten nuevas formas de pasar el tiempo libre.

2.3. CONCEPTOS CLAVE

- ✓ **Ocio:** tiempo o espacio de nuestra vida que dedicamos a realizar actividades que nos gustan y resultan agradables, principalmente, por placer o diversión.
- ✓ **Tiempo libre:** tiempo que dedicamos a realizar actividades no obligatorias como el trabajo o la educación.

2.4. ACTIVIDADES

Actividad 1. Presentación del Programa.

Actividad 2. Entrevista Personal.

Actividad 3. Cuestionario sobre Frecuencia de mis actividades de Ocio y Tiempo Libre. Actividad 4. Ociografía.

Actividad 5. Valorando mis actividades de ocio.

Actividad 6. Defendiendo mi actividad de ocio.

Actividad 7. Actividad complementaria.

2.5. MATERIAL

Pizarra y tizas

Folios en blanco

Hoja 1.1.1. Entrevista Personal

Hoja 1.1.2. Analizando mis actividades de Ocio y Tiempo Libre.

Hoja 1.1.3. Definiendo mi Tiempo Libre

Hoja 1.1.4. Ociografía

Hoja 1.1.5. Valorando mis actividades de Ocio.

Hoja 1.1.6. Plan de fin de semana.

2.6. DESARROLLO DE LA SESIÓN

2.6.1. Actividad 1: Presentación

Con esta primera actividad se pretende instaurar un contexto apropiado de intervención que permita desarrollar el programa de tratamiento de manera adecuada, así como fomentar la cohesión del grupo con el fin de mejorar la implicación y colaboración de los participantes. Cabe destacar que si el programa de tratamiento se va a desarrollar con un grupo de menores/jóvenes en situación de internamiento, no será necesaria en principio la presentación de los integrantes del grupo, aunque sí de las características del programa. El monitor puede sintetizar las particularidades del programa de la siguiente manera: *“el objetivo principal de este programa consiste en analizar la forma en la que ocupáis vuestro tiempo libre, así como las actividades de ocio que realizáis, especificando las consecuencias inherentes a las mismas tanto para vosotros como para los demás, especialmente las que*

conlleven problemas con la ley, a la vez que se intentará proporcionaros otras alternativas compatibles con un estilo de vida prosocial. La información que expongáis en el contexto del programa y desarrollo de su aplicación es confidencial. Por lo que si os involucráis de manera responsable podréis adquirir destrezas, actitudes y valores sociales importantes para llevar a cabo un estilo de vida normalizada". Posteriormente, el monitor propondrá una dinámica en la que cada miembro del grupo debe expresar la característica o atributo que mejor defina su tiempo de ocio y lo que creen que pueden conseguir con su participación en el programa.

A continuación, el monitor preguntará a los participantes, ¿sabéis lo que es el ocio y el tiempo libre?. Se deja un tiempo para que los participantes respondan y, seguidamente, el monitor explica: *"el ocio y tiempo libre son el tiempo o espacio que dedicamos a realizar actividades que nos gustan, que son agradables para nosotros porque nos producen placer o diversión. Son actividades que no son las obligatorias como el trabajo o los estudios"*. Para comprobar la asimilación de conceptos, el monitor pide que den ejemplos de actividades de ocio y tiempo libre. Se van apuntando en la pizarra, reforzando o corrigiendo aquellas que se ajusten o no al contenido explicado anteriormente.

Una vez introducida la sesión, el monitor pasará a la siguiente actividad, para lo cual se les hará entrega de la Hoja 1.1.1. "Entrevista Personal"

2.6.2. Actividad 2: Entrevista Personal

Es importante que la entrevista personal se realice por escrito y de manera individual, ya que nos aportará información de las características personales y sociales de los participantes que componen el grupo, lo que nos servirá de base a la hora de desarrollar el trabajo terapéutico.

A cada participante se le entrega la Hoja 1.1.1 *"Entrevista personal"*.

NOMBRE: _____

1. ¿Cuál es tu sexo? V M

2. Edad: _____

3. ¿En qué ciudad o pueblo vives? _____

4. ¿Cuál es tu nacionalidad? _____

Si es diferente a la española, ¿podrías decirme en qué año llegaste a España? _____

5. ¿En tu casa con quién vives habitualmente? Marca **TODOS** los recuadros de las personas con las que convivas.

VIVO SOLO	
Convivo con uno o más amigos de mi grupo de relación social	
Padre	
Madre	
Pareja de mi padre	
Pareja de mi madre	
Hermanos nº _____ ¿Qué lugar ocupas tú?	
Abuelo	
Abuela	
Otros parientes. ESPECIFICAR:	
Personas no emparentadas. ESPECIFICAR:	

6. ¿Cuál es tu nivel de estudios finalizado?

PRIMARIA	
1º E.S.O	
2º E.S.O	
1º Bachillerato	
2º Bachillerato	
Módulos F.P.	
P.C.P.I.	

7. ¿Estás estudiando actualmente? SI NO

PRIMARIA	
1º E.S.O	
2º E.S.O	
1º Bachillerato	

2° Bachillerato	
Módulos F.P.	
P.C.P.I.	

8. En relación con cada uno de los aspectos de tu vida personal, nos gustaría que nos dijeras si estás SATISFECHO/A o INSATISFECHO/A.

	SATISFECHO/A	INSATISFECHO/A
Tu familia		
Tus amigos		
Tus estudios		
La manera de disfrutar el tiempo libre		
El dinero que dispones para disfrutar el tiempo libre		
Consumición de alcohol en el tiempo de ocio		
Consumición de cannabis en el tiempo de ocio		
El tiempo que dedicas a divertirte		

9. De las siguientes actividades que se realizan en el tiempo libre, señala para cada una de ellas si TE GUSTA o NO TE GUSTA, y también SI LO HACES o NO LO HACES habitualmente?.

	SI ME GUSTA	NO ME GUSTA	SI LO HAGO	NO LO HAGO
Beber, ir de copas				
Ir de discotecas, bailar				
Salir con amigos				
Hacer deporte				
Asistir a competiciones deportivas				
Ir de excursión				
Hacer viajes fuera de mi excursión o pueblo				
Ir al cine				
Ir a teatros				
Ir a conciertos				
Emborracharse				
Escuchar música.				
Ir a museos, exposiciones				
Asistir a conferencias, debates				
Leer libros				
Leer periódicos				

Leer revistas				
Ver la televisión				
Ir a un botellón				
Oír la radio				
Usar el ordenador				
Jugar con videojuegos,, consolas				
Estar en parques con mis amigos				
Descansar, no hacer nada				
Estar en la calle, sin hacer nada				
Estar en un locutorio				
Estar en un bar				
Estar en una sala de juegos				

10. De las siguientes actividades, ¿podrías decir si puedes realizarlas en casa de tus padres o no?

	SI PUEDO HACERLO	NO PUEDO HACERLO
Levantarme LOS FINES DE SEMANA cuando me apetezca		
Levantarme LOS DÍAS DE DIARIO cuando me apetezca		
Reunirme en casa con un grupo de amigos		
Organizar fiestas con mis amigos/as en casa		
Llegar por la noche a la hora que me apetezca		
Estar solo en casa con mi novio/a		
Pasar la noche en casa de un amigo/a		
Pasar la noche fuera de casa		
Beber alcohol en casa		
Fumar cannabis en casa		
Llegar a casa con síntomas de haber consumido sustancias tóxicas		
Pasar la noche fuera de casa		
Pasar el fin de semana fuera de casa		

11. A la hora de aprovechar tu TIEMPO LIBRE, ¿cuál es la principal dificultad que encuentras?

TIEMPO	
Dinero	
Permiso de mis padres	
Lo que piensan de mí los demás	
Distancia a los lugares de ocio favoritos	
Otros (ESCRIBE CUÁL):	

12. Más o menos, ¿cuánto dinero gastas EN UNA SEMANA en actividades que realizas en tu tiempo libre? _____ Euros.

13. Más o menos, ¿cuánto tiempo dedicas entre semana a realizar actividades de ocio? _____ horas, ¿y el fin de semana? _____ horas.

14. De los aparatos que se citan a continuación, indica si utilizas alguno de ellos en tu tiempo libre. Si es así indica el tiempo que inviertes en su uso.

	USO	HORAS
Una videoconsola		
Un ordenador, PC		
Conexión a Internet		
Redes sociales		
Teléfono móvil		
Televisión		

15. ¿Dónde predominan tus momentos de tiempo libre?

EN LA CALLE	
En un parque	
En casa	
En mi habitación	
En un bar	
En una discoteca	
En el campo	
En una asociación	
En un centro deportivo	

16. Si alguna vez has consumido alguna de las siguientes sustancias en tu tiempo de ocio, señala que edad tenías LA PRIMERA VEZ que las probaste?

	11 AÑOS O MENOS	12 AÑOS	13 AÑOS	14 AÑOS	15 AÑOS	16 AÑOS	MÁS DE 16 AÑOS	NUNCA
Cerveza								
Vino								
Bebida alcohólica (whisky, ginebra, ron...)								
Te has emborrachado								

Fumar un cigarro								
Fumar cigarros diariamente								
Fumar cannabis (marihuana o hachis)								
Cocaína								
Anfetaminas								
LSD u otros alucinógenos								
Éxtasis								
Heroína								
Inhalar pegamento o disolvente								
Perder el control por el consumo de sustancias tóxicas								

17. Si has marcado la casilla que hace alusión al consumo de cannabis en el tiempo de ocio, ¿recuerdas cuál fue el motivo por el que comenzaste a fumar?

PARA INTEGRARME EN UN GRUPO EN EL QUE TODOS LOS CHICOS/AS FUMABAN	
Por probar cosas nuevas	
Por curiosidad, novedad	
Para hacerme mayor	
Porque lo hacía gente de mi familia (padres, hermanos, primos...)	
Porque lo hacía todo el mundo	
Porque tenía problemas (en casa, con mi pareja, amigos, con los estudios...)	
Por estar de fiesta y pasarlo bien	
Otros motivos diferentes	

18. ¿Qué sientes cuando has consumido alcohol? Marca las razones con las que estés de acuerdo.

ME VUELVO DIVERTIDO/A	
Me vuelvo más charlatán, hablador, gracioso	
Me deprimó	
Me vuelvo torpe	

Me irrito, me pongo violento	
Me vuelvo sociable	
Ligo más fácilmente	
Me pongo muy pesado/a	
No me causa efecto	
Me lo paso mejor	

19. En tus momentos de ocio, ¿cuántas veces te has emborrachado?

	NÚMERO DE VECES						
	0	1-2	3-5	6-9	10-19	20-39	40 O MÁS
Desde que comencé a salir							
En los últimos 12 meses							
En los últimos 6 meses							
En el último mes							
Has tenido que acudir al hospital debido al consumo de alcohol							
Cuando te has emborrachado se han enterado tus padres							

20. ¿Cuántas veces has fumado cannabis en tu tiempo de ocio?

	NÚMERO DE VECES						
	0	1-2	3-5	6-9	10-19	20-39	40 O MÁS
Desde que comencé a salir							
En los últimos 12 meses							

En los últimos 6 meses							
En el último mes							
Has tenido mal debido al abuso de cannabis							
Cuando has fumado cannabis se han enterado tus padres							

21. ¿Realizas algún deporte en tu tiempo de ocio? SI NO
En caso afirmativo, ¿podrías especificar cual/cuales y con que frecuencia?

22. ¿Lees como actividad de ocio y tiempo libre?

23. ¿Actividades de ocio dentro o fuera de casa?

24. ¿Ir de compras sería una actividad que realizases en tu tiempo de ocio?

NUNCA ALGUNA VEZ MUCHAS VECES SIEMPRE

En caso afirmativo, señala de los siguientes elementos cuáles añadirías a tu pauta de consumo en momentos de ocio.

Ropa	
Películas	
Juegos/videojuegos	
Accesorios	
Aparatos electrónicos	
Tóxicos/sustancias psicoactivas	
Libros	

25. ¿Sientes aburrimiento en tu tiempo de ocio?

NUNCA ALGUNA VEZ BASTANTE CASI SIEMPRE

En caso afirmativo, ¿a qué crees que es debido?

26. ¿Has realizado comportamientos antisociales o delictivos en tus momentos de ocio?
Especifica cuál.

27. ¿Tienes alguna causa previa o pendientes por un hecho delictivo cometido durante el tiempo de ocio? SI NO
En caso afirmativo, especifica cuál:

28. ¿Alguna vez has sido detenido en momentos de ocio? SI NO
En caso afirmativo, describe el número de ocasiones, motivo y situación.

29. De cada una de las siguientes asociaciones y organizaciones, ¿puedes señalar si te gustaría participar o no te gustaría, o si ya participas actualmente en alguno/s de ellos?

Asociaciones y grupos deportivos			
Sociedades locales o regionales (Peñas de fiestas)			
Grupos de música (Bandas, orquestas...)			
Grupos religiosos			
Asociaciones y grupos artísticos y culturales (teatro, pintura, baile, escritura...)			
Organizaciones y grupos juveniles (scouts, clubes...)			
Asociaciones de ayuda humanitaria (Manos Unidas, UNICEF...)			
Asociaciones y grupos ecologistas (

Greenpeace, Ecologistas en acción...)			
Partidos políticos			
Asociaciones de agrupación ilícita			

30. ¿Conoces los PROGRAMAS DE OCIO ALTERNATIVO para los jóvenes que se celebran en algunas ciudades o institutos, principalmente por las noches los fines de semana?

SI	
NO	

31. ¿Y has participado en alguno de ellos?

NO	
No, pero me gustaría participar	
No, y no me gustaría participar	
Sí, ESCRIBE EL NOMBRE:	

2.6.3. Actividad 3: Cuestionario sobre frecuencia de mis actividades de ocio y tiempo libre

Con esta actividad se pretende hallar la frecuencia con la que cada participante realiza cada actividad, para finalmente, definir su tipo de ocio en función de las actividades que realiza.

El monitor hace entrega de la Hoja 1.1.2. “Cuestionario”, que plantea una serie de preguntas que van a servir para caracterizar el tipo de ocio de los menores. Se puede iniciar la actividad con la siguiente explicación: “A continuación se os entregará un cuestionario que tenéis que rellenar en silencio, de forma individual y con la mayor sinceridad posible. De esta manera vamos a evaluar las características de vuestro tiempo de ocio, analizando la frecuencia con la que lleváis a cabo actividades de riesgo y de protección. A continuación, el monitor pregunta a los menores, ¿sabéis en que consiste el ocio de riesgo y ocio protector?. Se deja que los participantes aporten ideas y, seguidamente se les da la siguiente explicación:

✓ **Ocio de riesgo:** aquellas actividades de ocio que realizamos y que son peligrosas o implican riesgos para nuestra salud, así como para nuestro desarrollo personal y competencia social o la de los demás.

✓ **Ocio protector:** aquellas actividades de ocio que realizamos y que son saludables, no conllevan ningún tipo de peligro o riesgo.

Tras la explicación, se resuelven posibles dudas y comprobamos que hayan entendido las definiciones aportadas.

Hoja 1.1.2. Analizando mis actividades de ocio y tiempo libre

Nunca 0	Menos de 1 x semana 1	1 x al mes 2	1 x por semana 3	2 a 6 x por semana 4	Diariamente 5
-------------------	------------------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

Instrucciones: indica la frecuencia con la que realizas cada una de estas actividades de ocio						
1. Ir a pubs, bares, discotecas	0	1	2	3	4	5
2. Estar en la calle, en una plaza o parque con amigos charlando, pasando el rato	0	1	2	3	4	5
3. Estar en la calle, en una plaza o parque haciendo el “botellón” y fumando “porros”	0	1	2	3	4	5
4. Ir al cine o al teatro	0	1	2	3	4	5
5. Practicar deportes habituales en grupo/individual (Fútbol, baloncesto, tenis, ciclismo, footing...)	0	1	2	3	4	5
6. Practicar deportes de riesgo (puenting, carrera legal de coches, escalada...)	0	1	2	3	4	5
7. Ir a conciertos, a eventos deportivos...	0	1	2	3	4	5
8. Ir a casa de un amigo/familiar (fiesta, cenar, jugar a la play...)	0	1	2	3	4	5
9. Participar en una asociación o grupo prosocial como voluntario.	0	1	2	3	4	5
10. Ir de excursión (campo, montaña, a una ciudad...)	0	1	2	3	4	5
11. Salir al campo de acampada, hacer senderismo, ir de pesca...	0	1	2	3	4	5
11. Realizar actividades culturales como ir a un parque temático, planetario, museo...	0	1	2	3	4	5

12. Probar o consumir habitualmente diferentes tipos de drogas y hacer a la vez alguna actividad de ocio de las propuestas en los puntos anteriores	0	1	2	3	4	5
13. Conductas vandálicas como romper farolas, quemar contenedores, hacer grafitos, etc.	0	1	2	3	4	5
14. Conductas de robo a personas y/o en centros comerciales	0	1	2	3	4	5
15. Disfrutar haciendo sufrir animales	0	1	2	3	4	5
16. Mantenimiento de relaciones sexuales sin medidas preventivas	0	1	2	3	4	5
17. Conducción de vehículos sin carnet de conducir	0	1	2	3	4	5
18. Ser miembro o participar en grupos de asociación ilícita.	0	1	2	3	4	5
19. Conducción de vehículos bajo efectos de alcohol y drogas.	0	1	2	3	4	5
20. Utilización de redes sociales	0	1	2	3	4	5
21. Utilización nociva de Internet	0	1	2	3	4	5
22. Juegos de azar	0	1	2	3	4	5
23. Portar armas durante el ocio por si tengo que defenderme	0	1	2	3	4	5
24. Aprender una habilidad o conocimiento como tocar un instrumento, bailar, pintar...	0	1	2	3	4	5

Hoja 1.1.3. Definiendo mi tiempo libre

Instrucciones: teniendo en cuenta los resultados del cuestionario que acabas de completar, realiza un perfil de tu tiempo de ocio

- Las actividades de ocio que realizo me definen como una persona:

- Mi perfil de ocio incluye actividades como:

2.6.2. Actividad 4: Ociografía

Con esta actividad se pretende conocer la historia respecto al ocio de cada uno de los participantes de manera retrospectiva, donde ellos mismos deben realizar una introspección de cómo ha evolucionado su ocio, personas que han influido en el mismo, así como fluctuaciones, autopercepciones vividas y diferentes contextos en los que se ha venido aconteciendo. El monitor explica lo siguiente: “Al igual que la biografía es la historia de la

vida de una persona desde el nacimiento hasta su muerte, nosotros vamos a representar nuestra historia en lo referente a cómo administramos, qué hacemos, cómo, cuándo, dónde y con quién hemos compartido nuestro tiempo libre. Para ello vamos a realizar por escrito un relato expositivo y narrativo en tercera persona figurando nuestro ocio como si se tratase del protagonista de una novela”.

Hoja 1.1.4. Ociografía

OCIOGRAFÍA

2.6.5. Actividad 5: Valorando actividades de ocio

Con esta actividad se pretende desglosar la historia que hayan contado en la actividad anterior, dando a conocer el grado de satisfacción que los participantes obtienen con las actividades de ocio que realizan. Para ello, los participantes deben recopilar actividades de su Ociografía y, en una escala del 0 al 10 (donde 0 significa que no disfrutaban nada, pero esporádicamente la sigue realizando y 10 que disfrutaban al máximo), cómo disfrutaban con cada una de las actividades señaladas, así como explicando los motivos por los que abandonaron o dejaron de disfrutar con otras actividades (-10 deje de disfrutar completamente con esa actividad y por consiguiente deje de realizarla íntegramente). El monitor reparte la hoja 1.1.5. explica lo siguiente: *“Ahora que todos hemos elaborado nuestra ociografía, tenéis que especificar cuál es el grado de disfrute que alcanzáis con ellas, así como los motivos que os han llevado a abandonar otras actividades.. Poned un 0 si con esa actividad no disfrutáis nada, pero podríais seguir realizándola y un 10 si disfrutáis mucho y por consiguiente la realizáis siempre que podéis y -10 si dejaste de disfrutar y en consecuencia abandonaste por completo esa actividad”* .

Hoja 1.1.5. Valorando actividades de ocio

Instrucciones: para cada una de las actividades que has señalado en la actividad llamada Ociografía, indica el grado de satisfacción o insatisfacción que te produce en el momento actual, así como con signo negativo si por consiguiente dejaste de realizarla.

ACTIVIDAD	SATISFACCIÓN	FRECUENCIA CON QUE LA REALIZO
	[-10 - 0 - 10]	[-10 - 0 - 0]

2.6.4. Actividad 4: Defendiendo mi actividad de ocio

Tras realizar el sondeo de la actividad anterior, en esta actividad se procura que los participantes comiencen a analizar las actividades descritas. Se debate sobre las actividades que les son satisfactorias pero que pudieran conllevar un ocio de riesgo, así como las que para ellos resultan en principio menos satisfactorias por lo que aunque las realizaban fueron abandonadas aún comportándoles un ocio protector, y el monitor las apunta en la pizarra. Posteriormente, se hacen dos grupos (o se elige a dos participantes si el número del grupo no

es muy amplio). A uno se le informa que tiene que defender la actividad de riesgo señalada como más satisfactoria y frecuente, frente al otro que tiene que defender la de ocio protector. Deberán intentar convencer al resto del grupo sobre la conveniencia de realizar ese tipo de actividad en su tiempo libre. El resto de participantes podrán realizar todas aquellas preguntas o argumentaciones que consideren oportunas.

2.6.5. Actividad 5: Actividad complementaria

Con el objetivo de seguir profundizando en las actividades de ocio y tiempo libre de los participantes, el monitor les entrega la Hoja 1.1.4. “*Plan de fin de semana*” y les pide que realicen el planning de los fines de semana del último mes antes de su ingreso en el centro. Deben incluir el nivel de placer (de 0 a 10) en el recuadro de la derecha que aparece en cada casilla, qué factores han influido, con qué personas se encontraban, en qué situaciones, qué actividades pudieron hacer y no hicieron, etc.

Hoja 1.1.6. Plan de fin de semana

Instrucciones: rellena este plan de fin de semana tal y como te ha explicado el monitor						
ACTIVIDADES	VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	

2.6.6. Síntesis de la sesión

Para finalizar la sesión, el terapeuta/monitor resaltará los aspectos más relevantes que se han tratado, relacionándolos con los objetivos propuestos para así poder dar a los menores un sentido de integración de todos los contenidos abordados. El terapeuta/monitor debe dar una puntuación a cada menor de “0” a “10”, considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado, y b) asimilación e interiorización de los conceptos tratados.

3. SESIÓN 2: PENSAMIENTOS Y EMOCIONES ASOCIADOS AL USO DEL OCIO

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar pensamientos y emociones asociadas a la realización de actividades de ocio, ya sean de riesgo o protector.
2. Tomar conciencia de la existencia de actividades de riesgo frente a otras alternativas más saludables.
3. Analizar consecuencias tanto a corto como a largo plazo.

3.2. PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

Con el objetivo de que los participantes analicen los pensamientos y emociones asociados a la realización de actividades de ocio, así como las posibles consecuencias de las mismas, se realizarán de manera grupal diversas actividades de lápiz y papel, para proporcionar una visión clara, rápida y concisa de las emociones y pensamientos que dirigen y mantienen este tipo de conductas. Tras ello realizaremos una puesta en común y una reflexión grupal.

Además se trabajarán algunos casos ficticios para favorecer la identificación de emociones, pensamientos y consecuencias de otros sujetos de características y en situaciones similares.

Mediante una técnica de role playing, intentaremos que identifiquen, vivencien y manifiesten todos estos procesos de un forma más individualizada, precisamente por su mayor implicación en la tarea.

3.3. CONCEPTOS CLAVE

- ✓ **Pensamiento:** idea, creencia que surge ante una determinada situación o hecho.
- ✓ **Emoción:** reacción afectiva que suele producirse tras una determinada situación o hecho.
- ✓ **Consecuencia:** hecho, conducta, acción o situación que se produce en respuesta a un determinado comportamiento, ya sea de forma inmediata o a más largo plazo.
- ✓ **Ocio:** tiempo o espacio de nuestra vida que dedicamos a realizar actividades que nos gustan y resultan agradables, principalmente, por placer o diversión.

✓ **Motivación para el cambio:** es un estado de disponibilidad o deseo de cambiar, el cual puede fluctuar de un momento a otro o de una situación a otra.

✓ **Empatía:** La empatía es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otro y compartir sus pensamientos, sentimientos y emociones.

3.4. ACTIVIDADES

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria

Actividad 2. El ocio de Marcos y Ana

Actividad 3. Analizando las emociones de mi ocio

Actividad 4. Los resultados del ocio, utilizando la empatía.

Actividad 5. Las consecuencias de mi ocio.

Actividad 6. ¿Cómo me sentiría yo si....?

Actividad 7: Escenificando todo lo aprendido

Actividad 8: Motivación al cambio

Actividad 9: Actividad Complementaria

3.5. MATERIAL

Pizarra

Hojas, papel y lápiz

Película “Sueños Rotos” u otra de contenido aplicable a los contenidos

Hoja 1.2.1. El ocio de Marcos y Ana

Hoja 1.2.2. Emociones desencadenadas del ocio

Hoja 1.2.3. Consecuencias del ocio, utilizando la empatía.

Hoja 1.2.4. Consecuencias de mis actividades de ocio

Hoja 1.2.5. Mi listado de pertenencias

Hoja 1.2.6. El valor de mis pertenencias

Hoja 1.2.7. Analizando cómo me siento

Hoja 1.2.8. La rueda del cambio

Hoja 1.2.9. Nuestro camino hacia el cambio

1.2.10. Película “SUEÑOS ROTOS”

3.6. DESARROLLO DE LA SESIÓN

3.6.1. Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria

Se revisa el plan de fin de semana elaborado en el periodo intersesiones, describiendo detalladamente las actividades indicadas por los participantes, así como el resto de elementos indicados.

3.6.2. Actividad 2: El ocio de Marcos y Ana

Con esta actividad (adaptada de López, Carpintero, Del Campo, Lázaro y Soriano, 2011) se inicia el contenido sobre análisis de pensamientos y emociones asociadas a actividades de ocio, utilizando un caso ficticio que los participantes deberán analizar.

El monitor puede introducir la tarea de la siguiente manera: *“En la primera sesión del programa se ha analizado lo que es el ocio y el tiempo libre y cuáles eran las actividades que más y que menos os gustaban. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar con esas actividades que describisteis analizando lo que pensáis y sentís cuando las realizáis. Pero primero debemos dejar claro lo que es un pensamiento y una emoción. ¿Sabéis lo que es un pensamiento y una emoción? ¿Y una consecuencia?”*.

Se deja un tiempo para que los participantes se expliquen y, seguidamente, el monitor les definiría los conceptos clave, enfatizando las ideas de la existencia de pensamientos y emociones positivas y negativas, consecuencias a corto y largo plazo, tanto personales, como familiares y sociales, además de aportar algún ejemplo. A continuación, el monitor les comenta que van a empezar el análisis con un caso ficticio, y les lee el siguiente caso:

“Marcos y Ana son amigos desde muy pequeños, pues son vecinos de toda la vida. De niños jugaban todos los días en su portal pero, desde que empezaron el instituto, están un poco distanciados. Marcos se ha relacionado con unos chicos que Ana considera “unos gamberros”, por lo que se ven menos que antes aunque de vez en cuando recuerdan viejos tiempos. A Ana le gusta leer, practicar deporte y va por las tardes a un centro juvenil que hay en el barrio. Marcos no comparte sus aficiones, se pasa la tarde en el parque fumando y bebiendo cerveza, además de hacer alguna gamberrada cuando se entonan con el alcohol. De vez en cuando, Marcos y Ana quedan una tarde para hablar un rato y Marcos sólo insiste en que Ana lo acompañe al parque, con sus amigos, pues se niega en rotundo a acudir al “centro ese al que vas tú con los niñatos”, “menuda diversión, eso es para niños más

pequeños”. Un día, Ana decidió acompañarle al parque y, por no escuchar a todos insistiéndola, se tomó una cerveza. Se encontraba algo mareada, extraña, oía los comentarios de Marcos y sus amigos como si estuvieran muy lejos, y se sentó en la esquina del banco en el que estaban todos. Al rato, pasó por delante del banco en el que estaban sentados una pandilla con la que Marcos y sus amigos habían tenido algunos conflictos y se empezaron a insultar unos a otros, pasando rápidamente a pelearse. Varios chicos cayeron encima de Ana, tirándola al suelo y haciéndose varias rozaduras. Los chicos empezaron a tirarse de todo: piedras, cristales y todo lo que encontraban a su alcance y, finalmente, rompieron el banco en el que estaban sentados. Al momento, llegó la policía y todos fueron a comisaría, incluida Ana. Entre todos han tenido que reponer el dinero para arreglar el banco que rompieron, y a Ana la han castigado sin salir 1 mes y sin practicar sus actividades preferidas, “del instituto a casa”, dijo su padre. No volverá a confiar en ella en mucho tiempo”.

Una vez leído el caso, el monitor entrega a los participantes la Hoja 1.2.1. “El ocio de Marcos y Ana” y les pide que contesten a las preguntas reflejadas.

Hoja 1.2.1. El ocio de Marcos y Ana

“Marcos y Ana son amigos desde muy pequeños, pues son vecinos de toda la vida. De niños jugaban todos los días en su portal pero, desde que empezaron el instituto, están un poco distanciados. Marcos se ha relacionado con unos chicos que Ana considera “unos gamberros”, por lo que se ven menos que antes aunque de vez en cuando recuerdan viejos tiempos. A Ana le gusta leer, practicar tenis y va por las tardes a un centro juvenil que hay en el barrio. Marcos no comparte sus aficiones, se pasa la tarde en el parque fumando y bebiendo cerveza, además de hacer alguna gamberrada cuando se entonan con el alcohol. De vez en cuando, Marcos y Ana quedan una tarde para hablar un rato y Marcos sólo insiste en que Ana lo acompañe al parque, con sus amigos, pues se niega en rotundo a acudir al “centro ese al que vas tú con los niñatos”, “menuda diversión, eso es para niños más pequeños”. Un día, Ana decidió acompañarle al parque y, por no escuchar a todos insistiéndola, se tomó una cerveza. Se encontraba algo mareada, extraña, oía los comentarios de Marcos y sus amigos como si estuvieran muy lejos, y se sentó en la esquina del banco en el que estaban todos. Al rato, pasó por delante del banco en el que estaban sentados una pandilla con la que Marcos y sus amigos habían tenido algunos conflictos y se empezaron a insultar unos a otros, pasando rápidamente a pelearse. Varios chicos cayeron encima de Ana, tirándola al suelo y haciéndose varias rozaduras. Los chicos empezaron a tirarse de todo: piedras, cristales y todo lo que encontraban a su alcance y, finalmente, rompieron el banco

en el que estaban sentados. Al momento, llegó la policía y todos fueron a comisaría, incluida Ana. Entre todos han tenido que reponer el dinero para arreglar el banco que rompieron, y a Ana la han castigado sin salir 1 mes y sin practicar sus actividades preferidas, “del instituto a casa”, dijo su padre. No volverá a confiar en ella en mucho tiempo”.

Instrucciones: tras haber escuchado la historia de Marcos y Ana, contesta a las siguientes preguntas sobre sus actividades de ocio y tiempo libre

¿Qué actividades realiza Ana en su tiempo libre?

¿Y Marcos?

¿Qué diferencia hay entre las de Ana y las de Marcos?

¿Qué puede pensar Ana mientras realiza sus actividades de ocio? ¿Y qué puede sentir?

Y Marcos, ¿qué puede pensar y sentir mientras realiza sus actividades de ocio?

¿Qué piensa Ana sobre las actividades de ocio de Marcos?

¿Qué piensa Marcos sobre las actividades de ocio de Ana?

¿Qué consecuencias inmediatas ha tenido para cada uno lo que ocurrió en el parque?

¿Y a más largo plazo, quién ha sufrido consecuencias? ¿Cuáles?

¿Qué crees que ayudó a que Marcos y sus amigos se comportaran así?

¿Qué consecuencias tenían para Ana sus actividades de ocio?

Finalmente, se ponen en común todas las ideas aportadas por los participantes y se debate al respecto, enfatizando la idea de los tipos de pensamientos o emociones que se asocian con actividades de riesgo y los que se asocian con actividades protectoras, así como las consecuencias de cada una de ellas. También deberá comentarse sobre la existencia de consecuencias no sólo a nivel personal, sino también familiar, y social, haciendo alusión también al grupo de iguales.

3.6.3. Actividad 3: Analizando las emociones de mi ocio

Con esta actividad se pretende que los participantes comprendan e interioricen el papel que juegan las emociones en las actividades de ocio que realizan. Para ello, el monitor comienza la actividad explicando: “la emoción es un estado complejo del organismo, generado habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno, caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada”. Para lograr una mejor comprensión de la definición, el monitor refleja en la pizarra el siguiente esquema:

EVENTO	VALORACIÓN	CAMBIOS FISIOLÓGICOS	PREDISPOSICIÓN A LA ACCIÓN
--------	------------	----------------------	----------------------------

Así, el monitor continúa la sesión exponiendo: “Cada emoción consta de tres componentes: el fisiológico (taquicardia, forma de respirar, rubor, sudoración, presión sanguínea), el conductual (agredir, reír, llorar, expresiones faciales y movimientos corporales, así como tono, volumen y ritmo de la voz) y cognitivo (vivencia subjetiva, que se caracteriza por las justificaciones que damos a nuestra conducta). Por lo tanto, las funciones que se atribuyen a las emociones serían:

- *Función motivadora de la conducta.*
- *Función adaptativa y de supervivencia.: informan al individuo de la situación ambiental.*
- *Función social: las emociones sirven para comunicar a los demás cómo nos sentimos así como para influir en los demás. Por lo tanto, tienen un papel importante en el desarrollo personal, ya que tienen efectos sobre otros procesos mentales, de forma que pueden afectar a como percibimos, atendemos, memorizamos razonamos y creamos la realidad”.*

A continuación se les entrega la Hoja 1.2.2. *Emociones desencadenadas del ocio*

EMOCIÓN	ACTIVIDAD DE OCIO QUE LA PROVOCA	INDIVIDUAL/ COLECTIVA
<i>Alegría</i>		
<i>Tristeza</i>		
<i>Desesperanza</i>		
<i>Incertidumbre</i>		
<i>Indefensión</i>		
<i>Sensación de fuerza y energía</i>		
<i>Orgullo</i>		
<i>Excitación</i>		
<i>Ira</i>		
<i>Sorpresa</i>		

A continuación se pone en común el análisis realizado de manera grupal. Se enfatizará la relación de actividades de ocio con emociones tanto de valencia positiva como negativa,

intentando hacer conscientes a los participantes de la asociación establecida, con el objetivo de potenciar la prevención de conductas antisociales.

3.6.4. Actividad 4: Los resultados del ocio, utilizando la empatía

Con esta actividad se intenta facilitar el proceso de toma de conciencia de las consecuencias de la violencia en el contexto de ocio, tanto para las personas implicadas como para la sociedad en general. Para ello se intenta fomentar la habilidad para ponerse en el lugar del otro, ya que no sólo se trata de que aprendan a identificar las consecuencias, sino también que éstas adquieran la importancia merecida. Así mismo, se insta a que reflexionen y cuestionen sobre el uso de la violencia como elemento de identidad.

Hoja 1.2.3. Consecuencias del ocio, utilizando la empatía

En una discoteca de Madrid, Luis se piensa que Adrián le está mirando mal y le dice: “tú que miras niño”, y empiezan a discutir. Se vuelven a encontrar en la puerta de la discoteca y Luis le dice a Adrián que no quiere volver a verlo por allí nunca. Adrián le contesta que él no es nadie para decirle dónde tiene que ir. La situación se ha ido calentando progresivamente hasta que Luis ha sacado una navaja y, sin pensárselo dos veces, se la ha clavado a Adrián.

- Escena del Hospital: tras la pelea en la puerta de la discoteca, Adrián ha recibido una puñalada en el estómago. Se encuentra en la UCI. Sus padres, su novia y su hermano están en la puerta llorando, con múltiples signos de ansiedad y preocupación.
- Escena del Centro de Menores: Luis pasa la noche en el GRUME, y el Juez dictamina que va a cumplir una medida judicial en un centro de menores. Van a verle sus padres, su novia y su hermano. Se pasan la visita llorando, con síntomas de ansiedad y preguntando constantemente a Luis por qué lo ha hecho.
- ¿Qué emociones creéis que han sentido Luis y Adrián?
- ¿Qué creéis que han sentido y pensado los familiares y amigos de Luis? ¿Y de Adrián?
- ¿Quién es el responsable de esta situación? ¿Qué se podría haber hecho para evitarla?
- ¿Qué consecuencia común sufren las dos familias de los dos menores?

Cuando todos los participantes hayan contestado de manera individual, se exponen las respuestas, realizando un debate grupal en el que se analice que puede hacer Luis para reparar el daño que ha causado.

3.6.5. Actividad 5: Las consecuencias de mi ocio

Con esta actividad se pretende continuar analizando las actividades de ocio de los participantes en cuanto a posibles consecuencias de las mismas. El monitor explica: *“ahora lo que vamos a hacer es analizar de forma más detallada las posibles consecuencias que podrían tener las actividades de ocio que nos producen cierto grado de satisfacción como las que habéis abandonado por que dejaron de ser de vuestro agrado, considerando las consecuencias tanto para vosotros mismos, como para vuestra familia y la sociedad.*

El monitor les entrega la Hoja 1.2.4. *“Consecuencias de mis actividades de ocio”* y les pide que la rellenen con las cuatro situaciones utilizadas previamente en la Hoja 1.1.5..

Hoja 1.2.4. Consecuencias de mis actividades de ocio

Instrucciones: analiza las posibles consecuencias a corto y largo plazo de las cuatro actividades que has analizado en la actividad previa

ACTIVIDAD

CONSECUENCIAS A CORTO PLAZO

CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO

- Para mí:

- Para mí:

- Para mi familia y amigos:

- Para mi familia y amigos:

- Para la sociedad:

- Para la sociedad:

- Para mí:

- Para mí:

- Para mi familia y amigos:

- Para mi familia y amigos:

- Para la sociedad:

- Para la sociedad:

- Para mí:

- Para mí:

- Para mi familia y amigos:

- Para mi familia y amigos:

- Para la sociedad:

- Para la sociedad:

Se exponen todos los casos y se debate al respecto, haciendo hincapié en la existencia, en cuanto a actividades de ocio poco adecuadas o no protectoras, de unas consecuencias a corto plazo, positivas, y una mayor probabilidad de existencia de consecuencias negativas a un mayor largo plazo.

3.6.6. Actividad 6: ¿Cómo me sentiría yo si....?

Con esta actividad (adaptada de López et al., 2011) se pretende que los participantes tomen conciencia sobre lo que las consecuencias y los sentimientos que padece una persona a la cual le han sustraído algo de su propiedad. Para ello, el monitor explica lo siguiente: *“Ahora vais a realizar una lista con pertenencias y enseres que poseáis en el centro, a las cuales les tenéis cierto aprecio (sino tuviesen aún pertenencias en el centro por cualquier motivo, se puede instar a que lo rellenen con las que posean en la habitación de su domicilio)”*. Se les entrega la Hoja 1.2.5. para que la rellenen.

Hoja 1.2.5. Mi listado de pertenencias

Instrucciones: realiza un listado de pertenencias o enseres que sean de tu propiedad y a las que les otorgues especial valor o aprecio.

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Una vez rellenado, el monitor proporciona la Hoja 1.2.5. en la que deben especificar el por qué le otorgan valor o aprecio a estas pertenencias.

Hoja 1.2.6. El valor de mis pertenencias

<i>Instrucciones: especifica por qué le otorgas valor a las pertenencias que has apuntado en la hoja anterior</i>	
PERTENENCIAS	EL MOTIVO DEL VALOR ADQUIRIDO

Una vez que los participantes han rellenado ambas hojas, el monitor pide a los participantes que intercambien la **Hoja 1.2.4.** entre sí, y se les indica que subrayen aquellas pertenencias que les gustaría tener. Posteriormente, los participantes se devuelven las hojas y se imaginan que cada pertenencia que tienen subrayada les ha sido sustraída sin ningún motivo por otro de sus compañeros. A continuación, se les proporciona la **Hoja 1.2.6.** donde deben detallar qué piensan, cómo se sienten y las consecuencias que tiene para ellos esa apropiación.

Hoja 1.2.7. Analizando cómo me siento

<i>Instrucciones: define qué piensas, cómo te sientes y las consecuencias que tiene para ti la sustracción de tus pertenencias.</i>			
PERTENENCIAS	PENSAMIENTO	EMOCIÓN	CONSECUENCIAS

3.6.7. Actividad 7: Escenificando todo lo aprendido

Esta actividad (adaptada de López et al., 2011) pretende reforzar los conceptos de consecuencia y empatía que se han trabajado en las actividades anteriores de este módulo. Para ello, se un role-playing, a cada participante se le da una tarjeta con el rol que debe desarrollar, debiendo defender la situación que se propone como propia. Los participantes deben seguir unas reglas básicas para el debate, deberán respetar el turno de palabra, así como las opiniones de los demás miembros. Los personajes son: un vecino del parque donde se realiza el botellón, un miembro de la policía, dos jóvenes de los menores que realizan botellón, dueño de un bar, madre de un de los menores que está preocupada debido a que hace dos horas que éste debía haber vuelto a casa, y un miembro del personal de limpieza del barrio donde se está haciendo botellón. El monitor dirigirá el debate hasta encontrar una solución en la que todos los participantes se encuentren satisfechos.

3.6.8. Actividad 8: Motivación al cambio

La “Rueda del Cambio” que surge del Modelo de Prochaska y DiClemente admite el dibujo de hasta seis etapas. El hecho de que la rueda sea un círculo refleja la realidad de que en cualquier proceso de cambio la persona gira alrededor del proceso varias veces antes de alcanzar un cambio estable. Este modelo también considera que un terapeuta debe utilizar diferentes tácticas con cada participante, dependiendo del momento del proceso de cambio en que éste se encuentre.

Una estrategia básica para promover la motivación y estimular hacia al cambio sería:

- 1) Identificar *claramente* el problema o el área problemática.
- 2) Explicar por qué el cambio es importante, y en qué áreas o aspectos de la vida de la persona mejoraría.
- 3) Recomendar un cambio específico. Promover estrategias y alternativas concretas para cambiar, ayudará a los menores/jóvenes a seguir el curso del cambio recomendado.

Hoja 1.2.8. La rueda del cambio

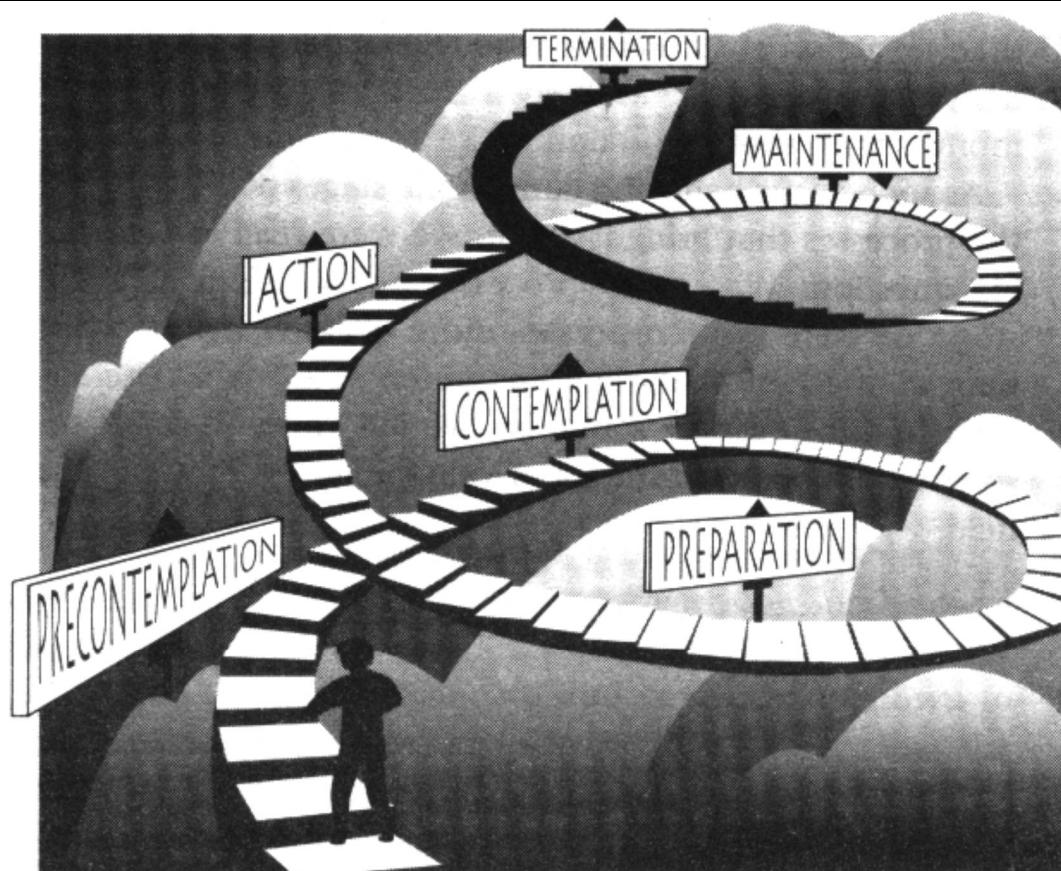


FIGURE 1. The Spiral of Change

A continuación, se detallan los procesos que guían cada etapa:

PRECONTEMPLACIÓN	La persona no considera necesario el cambio, pues no ve un problema que lo haga necesario, o aún sabiéndolo no es consciente de él.
CONTEMPLACIÓN	Aquí ya se percibe la necesidad de cambiar aunque todavía no se ha realizado nada objetivo al respecto. Una vez que aparece una toma de conciencia del problema, la persona entra en un período caracterizado por la ambivalencia, esto es, considera y rechaza el cambio a la vez.
PREPARACIÓN PARA EL CAMBIO	La persona toma la decisión de ponerse en acción en un futuro próximo. Es consciente de que está preparado para realizar conductas de cambio. Puede no estar preparado para iniciar una acción efectiva, pero es posible que muestre pequeños cambios de comportamiento, actitudes o hábitos.
ACCIÓN	Se hacen patentes significativos esfuerzos de cambio que le suponen al individuo un considerable gasto de tiempo y energía. Esta etapa implica modificar comportamientos

	no deseados, realizando los pasos necesarios que requiere el cambio, manteniéndolos durante un tiempo considerable.	
MANTENIMIENTO	La persona trabaja para prevenir su recaída y consolidar los resultados logrados durante la acción. No significa que el cambio haya terminado sino que continúa, alejándose del comportamiento problemático y comprometiéndose en sus nuevos hábitos de conducta.	
RECAÍDA	Ocurre cuando las estrategias de estabilización y mantenimiento de la abstinencia fallan. En este sentido, puede producirse tanto en el estadio de acción como en el de mantenimiento. Así, al pasar por este estadio, siempre y cuando no sea una decisión conscientemente adoptada, pueden experimentar sentimientos de fracaso y desesperanza, así como también de culpa y frustración, ya se puede verse afectado su sentido de autoeficacia. La persona regresaría a la conducta anterior al cambio, es decir, al estadio de contemplación y preparación para el cambio.	

Hoja 1.2.9. Nuestro camino hacia el cambio

Instrucciones: se trata de que los participantes sean conscientes de la motivación que presentan con respecto a cambiar los hábitos o conductas de riesgo mantenidas durante su ocio. Para ello, se facilitarán una serie de preguntas que deberán responder, así permitirán al monitor que implemente el programa conocer en qué estadio se encuentran, y qué tipo de estrategias a seguir para consolidar ese estadio y promover la motivación hacia el siguiente, aumentando la su autoconfianza personal al cambio.

PRECONTEMPLACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Crees que algún hábito o conductas que realizas en tu tiempo de ocio pueden conllevar consecuencias negativas, como por ejemplo problemas con la ley?_____ ¿Por qué? - ¿Qué conductas llevabas a cabo antes de iniciar conductas de riesgo en tu tiempo libre? - ¿Crees que no tienes un problema porque todo el mundo realiza ese tipo de conductas? - ¿Alguna vez has realizado actividades de ocio saludable que no entrañaran un riesgo y además potenciaran tu desarrollo personal?_____ ¿Te interesaría realizarlas?
CONTEMPLACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Crees que deberías cambiar las conductas que realizas en tu tiempo de ocio debido a que entraña riesgos para ti o para los demás? - ¿Te encuentras preparado/a para iniciar un proceso de cambio? - ¿Alguna vez has realizado actividades de ocio saludable que no entrañaran un riesgo y además potenciaran tu desarrollo personal?_____ ¿Te interesaría realizarlas?

PREPARACIÓN PARA EL CAMBIO	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Qué crees que debes cambiar con respecto a las conductas realizadas en tu ocio? - ¿Incorporarías de vez en cuando actividades de ocio saludable o protector a tu ocio?
ACCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Cómo puedes iniciar un cambio en las conductas que crees que debes cambiar en tu ocio y tiempo libre? - ¿Por dónde puedes empezar el proceso de cambio? - ¿Estarías dispuesto/a a adquirir hábitos de ocio saludables a tus actividades de ocio, dejando de lado actividades de ocio de riesgo?
MANTENIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Crees que las conductas que cambies harán que se sientas mejor y evites consecuencias negativas? - ¿Crees que conseguirías mantener actividades de carácter protector en tu ocio?
RECAÍDA	<ul style="list-style-type: none"> - Una vez que hayas adquirido hábitos de ocio saludable, si en alguna ocasión volvieras a realizar una actividad de riesgo, ¿estarías dispuesto a seguir esforzándote por consolidar los hábitos protectores? -
<p>Una vez que los participantes contestan a las preguntas, deben situarse en uno de los estadios.</p> <p>TU ESTADIO ES:_____. A continuación, se exponen razones por las que cree que se situaría en este estadio.</p>	

3.6.6. Actividad 6: Actividad complementaria

Para seguir profundizando en el análisis de los contenidos trabajados durante el módulo, los participantes podrán ver la película “SUEÑOS ROTOS”, así como la actividad que se ha programado para la reflexión, aunque el monitor podrá elegir otra película si lo considera oportuno usando o no la actividad sugerida para el forum. Posteriormente al visionado, se les entregará a los participantes la **Hoja 1.2.10. Película “SUEÑOS ROTOS”**.

Hoja 1.2.10. Película “SUEÑOS ROTOS”.

Instrucciones: El monitor comienza explicando los conceptos que se trabajarán esta hoja, posteriormente los participantes deberán especificar en qué momentos de la película ven reflejado por exceso o defecto esa capacidad o emoción, a la vez que exponen ejemplos propios de dichos contenidos.



SINOPSIS: "Sueños rotos" cuenta el viaje exótico que emprenden a Tailandia dos amigas, Alice Marano (Claire Danes) y Darlene Davis (Kate Beckinsale), para celebrar su graduación en la universidad. En el Bangkok exótico, ambas jóvenes conocen a un seductor y guapo australiano Nick Parks (Daniel Lapaine), quien dará un nuevo rumbo a sus vacaciones. Las dos chicas se enamoran de Nick, aunque Darlene será la que viva un idilio con el australiano, ante el resentimiento y la ira de Alice por la conquista de su mejor amiga. Nick propone a Darlene un viaje a Hong Kong. La joven quiere que Alice le acompañe. Todo cambia cuando en el aeropuerto de Bangkok, para sorpresa de las chicas, los gendarmes encuentran un alijo de heroína en su mochila. Histeria, pánico y confusión pero ante todo, un sentimiento mutuo de traición se apodera de ambas, que serán condenadas a cumplir una condena de 33 años en una inhóspita cárcel tailandesa. Cuando la impotencia y la desesperación conforman la rutina de sus vidas, un abogado americano afincado en el país puede aportar la solución a sus casos.

- **Asertividad:** capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular y sin manipular a los demás.
- **Ira:** emoción caracterizada por una sensación de indignación, furia o deseo de venganza. Generalmente se produce contra los demás se manifiesta en forma de agresión física y verbal.
- **Empatía:** capacidad para ponerse en el lugar de otra persona comprendiendo cómo piensa, siente y por tanto actúa, así como llegar a sentir de modo paralelo a como siente el otro.
- **Celos:** respuesta emocional compleja y perturbadora, que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera como propio.
- **Frustración:** sentimiento de imposibilidad de satisfacer una necesidad, un deseo o expectativa.
- **Miedo:** una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable provocado por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente,

<p>futuro o incluso pasado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Resentimiento: sentimiento de hostilidad o enemistad hacia una persona motivado por una ofensa, daño o perjuicio sufridos. ○ Agresividad: cualquier conducta que tiene como finalidad causar daño a la persona a la que se dirige. Puede ser física, verbal, sexual, institucional... ○ Altruismo: Actitud o característica de la persona que pretende conseguir el bien de los demás de manera desinteresada, generalmente realizando una labor social o humanitaria. ○ Autocontrol: capacidad consciente de regular los impulsos de manera voluntaria, con el objetivo de alcanzar un mayor equilibrio personal y relacional. Una persona con autocontrol puede manejar sus emociones y regular su comportamiento ○ Ansiedad: es una emoción que se reconoce por el aumento de las facultades perceptivas ante el aviso del organismo por una necesidad fisiológica que se encuentra por debajo de su nivel adecuado, está ciertamente relacionada con la lucha del ser humano por su supervivencia y la del resto que lo rodea. 			
CONCEPTO	EN LA PELÍCULA.....	EN EL DESARROLLO DE NUESTRO OCIO.....	
ASERTIVIDAD			
IRA			
EMPATÍA			
CELOS			
FRUSTRACIÓN			
MIEDO			
RESENTIMIENTO			
AGRESIVIDAD			
ALTRUISMO			
AUTOCONTROL			

ANSIEDAD		

Por último, el monitor elige los conceptos que desee y se anotan en la pizarra para que los participantes opinen sobre si son conductas que se podrían encuadrar en ocio de riesgo o protector.

3.6.7. Síntesis de la sesión

Para finalizar la sesión, el terapeuta/monitor resaltará los aspectos más relevantes que se han tratado, relacionándolos con los objetivos propuestos para así poder dar a los menores un sentido de integración de todos los contenidos abordados. El terapeuta/monitor debe dar una puntuación a cada menor de “0” a “10”, considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado, y b) asimilación e interiorización de los conceptos tratados.

MÓDULO II. OCIO DE RIESGO Y PROTECTOR

1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

1.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN

El ocio se ha convertido en el espacio temporal preferente en el cual los adolescentes intentan satisfacer necesidades como son las de relacionarse con sus iguales, el establecimiento de su propia identidad personal y grupal (la vinculación con el grupo), la escenificación del "alejamiento" de los padres y su protección, la trasgresión social de las normas de los adultos o el establecimiento de relaciones afectivas y sexuales. Mientras que en los años preescolares la familia es el entorno dominante y el colegio pasa a serlo en la posterior infancia y preadolescencia, en la adolescencia, los amigos constituyen la principal fuente de influencia (Catalano y Hawkins, 1996). Así, el grupo de iguales va siendo cada vez más importante a la hora de desarrollar y establecer sus actitudes y normas sociales. Esto es así, tanto en lo positivo (red de apoyo social) como en lo negativo, favoreciendo la delincuencia (Fuchs, Lamnek y Luedtke, 1996; Tillmann, Holler-Nowitzky, Holtappels, Meier y Popp, 1999).

El tiempo de ocio, compartido con otros jóvenes y dedicado a sus actividades favoritas, es un espacio de socialización informal, en principio, neutro. En su contexto se consolidan ideas, valores, formas de relacionarse, hábitos, etc., cuyo contenido variará de un grupo a otro. En el mejor de los casos, es el tiempo más apropiado para la creatividad, el desarrollo de los gustos y preferencias personales, para el disfrute en lo que se está haciendo, para la liberación de ataduras temporales y de obligaciones. En otras ocasiones, la práctica descontrolada de ciertas aficiones también puede convertir el ocio en espacio temporal de riesgo, donde interactúan determinados factores que pueden favorecer la aparición de comportamientos adictivos, antisociales o desadaptativos.

Ya Sutherland (1939, cit. en Luengo et al., 2002), partiendo de su teoría de la asociación diferencial decía que las conductas desviadas se adquieren en la relación con los grupos más próximos al sujeto, donde se expone a conductas y actitudes de carácter desviado, lo que dará lugar a que interiorice más “definiciones” favorables a la transgresión que “definiciones” favorables a lo convencional. Parece que los individuos que cometen actos delictivos tienden a tener amigos delincuentes y muchas actividades consideradas antisociales

se emprenden junto con otras personas (Reiss, 1988). Así, Otero et al. (1994) constatan que la desviación de los amigos suele ser uno de los factores de riesgo con mayor capacidad de determinación de la conducta antisocial del adolescente. Asimismo, el aumento de la probabilidad de ejercer dichas conductas no sería tanto por la observación directa de las mismas sino por la falta de habilidades sociales. Por otra parte, Patterson y Yoerger, en 2002 señalan que el tener compañeros o amigos antisociales podría estar mediado por una ausencia de supervisión parental, lo que le permitiría al joven permanecer más tiempo bajo su influencia, apareciendo así la relación con la delincuencia futura.

Thornberry (2004) ha encontrado que los delincuentes infantiles o de inicio temprano tienden más asociarse con iguales delincuentes y a formar parte de bandas, que los que inician su comportamiento antisocial en la adolescencia o los jóvenes no antisociales.

Numerosos estudios con adolescentes han encontrado claras evidencias de la relación que existe entre la manifestación de comportamientos antisociales o desviados y el ser miembro de una banda. Por ejemplo, el pertenecer a una banda se ha relacionado con presentar mayor promiscuidad sexual (Bjerregaard y Smith, 1993; Le Blanc y Lanctot, 1999), mayor consumo de alcohol y drogas (Bjerregaard y Smith, 1993; Cohen, Williamns, Bekelman y Crosse, 1994; Thornberry, Krohn, Lizotte y Chard-Wierschem, 1993), mayor violencia (Le Blanc y Lanctot, 1999), pertenencia de un arma (Bjerregaard y Lizotte, 1995) y más delincuencia general (Curry y Spengel, 1992; Esbensen y Huizinga, 1993; Le Blanc y Lanctot, 1999).

Cairns, Cadwallader, Estell y Neckerman (1997) postularon tres vías fundamentales para referirse a la importancia de las bandas en la comisión de las conductas antisociales: a) representan la reunión de individuos agresivos y dominantes que tienen un papel de control de las redes sociales en las que operan; b) muchos individuos que ingresan en bandas son jóvenes desarraigados y alienados que se escapan de casa y se convierten en personas sin techo; c) algunas bandas operan como prósperos negocios que están edificados sobre el tráfico de drogas ilegales o al menos participan intensamente en él.

Otros estudios sugieren que el pertenecer a una banda contribuye a la delincuencia más allá de la mera influencia de tener pares delincuentes (Battin, Hill, Abbott, Catalano, y Hawkins, 1997). La investigación también sugiere que está asociado con delitos más serios y

violentos en la juventud (Thornberry, 1999). Como se demostró a través de los datos de Seattle, el pertenecer a una banda a los 14 y 16 años predecía comportamientos violentos a los 18 años (Maguin et al., 1995).

Por ello, desde un punto de vista práctico, las actividades de ocio pueden clasificarse u organizarse en función de tres factores principales (Mahoney y Stattin, 2000): a) la estructura, b) el contexto social, integrado por los agentes sociales presentes durante la actividad lúdica y las personas que inducen a la participación, y c) la convencionalidad. Tales dimensiones pueden considerarse un continuo, lo que permite situar las ocupaciones de ocio de los jóvenes entre los rangos de un ocio “*no estructurado-altamente organizado*”, “*solitario/no-cooperativo-colaboración de grupo*”, y un ocio que varía desde la “*condena social*” hasta el “*apoyo económico y público de la comunidad*” o de la unidad de influencia cultural correspondiente.

Entre las características que definen una actividad altamente estructurada se incluyen las siguientes: la participación regular y programada, un entretenimiento guiado por reglas, dirigido por uno o más adultos que guían la actividad, énfasis en el desarrollo de habilidades lo que conlleva el continuo incremento en complejidad y en los retos planteados, la ejecución de la actividad requiere una atención activa y sostenida, y el feedback sobre la actuación. La realización reglada de deporte o el aprendizaje de algún instrumento musical son un ejemplo de actividades altamente estructuradas, por el contrario ver la televisión o salir con amigos son actividades espontáneas no-estructuradas.

Generalmente, las actividades de ocio ligadas a una disminución de las conductas antisociales suelen tener un alto nivel de estructuración y enfatizan la adquisición de habilidades y competencias (Mahoney, 2000; Mahoney y Stattin, 2000); mientras que el ocio asociado a una ausencia de beneficios o a resultados negativos por parte de los participantes tienden a incluir, o a centrarse exclusivamente, en actividades que no están estructuradas, se realizan en solitario o no son convencionales; o se dan varios de estos factores conjuntamente. Por tanto, entre las actividades de ocio propias de la adolescencia, hay algunas que por sus características y/o por el contexto en el que se realizan tienen mayor probabilidad de convertirse en problemáticas o asociarse con conductas desadaptadas. Desde las actividades de ocio que se basan en el uso de la tecnología, avance tecnológico al que en muchos casos se le han otorgado cualidades casi exclusivamente negativas, pasando por el

uso de los juegos de azar, especialmente de las máquinas tragaperras cuya ubicación en salas recreativas y bares facilita el acceso a las mismas, hasta el consumo de drogas, legales e ilegales, asociado a un ocio no estructurado. Todas estas actividades configuran el abanico prototipo de actividades y conductas de riesgo enmarcadas en el contexto de ocio y tiempo libre de los adolescentes.

Por todo lo expuesto anteriormente, se intentará por medio de las actividades propuestas fomentar en los menores procesos de socialización que les permitan fortalecer determinados valores, además de potenciar recursos y capacidades propias que hagan posible a los jóvenes que participan de las mismas mantener conductas y estilos de vida saludables, aspecto que dependerá en gran medida de la capacidad de los profesionales que trabajan en el campo de la prevención, así como de las instituciones socializadoras formales (la familia o la escuela), tengan para orientar o influir en ese proceso educativo.

En resumen, lo que se pretende con este módulo es concienciar a los participantes sobre las características y el riesgo que conlleva algunas de las actividades de ocio que realizan, así como enseñarles que existen otras alternativas más saludables con las cuales también puedan satisfacer sus motivaciones personales.

1.2. OBJETIVOS GENERALES

1. Tomar conciencia sobre las actividades de ocio que se asocian con el desarrollo de comportamientos delictivos.
2. Tomar conciencia sobre la existencia de actividades de ocio alternativas saludables con las cuales poder conseguir los mismos objetivos a nivel personal, social, etc.
3. Obtener un perfil de ocio de riesgo y de ocio protector, analizando funcionalmente las actividades descritas por los participantes.

2. SESIÓN 1: MIS PERFILES DE OCIO DE RIESGO Y OCIO PROTECTOR

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Ser conscientes de aquellas actividades de ocio que se relacionan con el desarrollo de comportamientos delictivos o de riesgo.
2. Al mismo tiempo, conocer que existen otras actividades de ocio alternativas saludables.
3. Elaborar un perfil de ocio de riesgo y de ocio protector, para que los participantes conozcan detalladamente cómo son las actividades de ocio que realizan y, en consecuencia, cuál es el riesgo que sufren al realizar las mismas.

2.2. PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

Para poder obtener los objetivos destacados, en primer lugar, el monitor dará una explicación teórica de los diferentes tipos y estilos de ocio, también referida a las actividades de ocio que están asociadas a la delincuencia (ocio riesgo), frente a las que no están asociadas (ocio protector), aportando los participantes diversos ejemplos al respecto. Seguidamente, trabajaremos de nuevo con el cuestionario inicial utilizado en la primera sesión, con el fin de que los participantes clasifiquen las actividades que en él se reflejan en los dos tipos mencionados.

A continuación, los participantes elaborarán su perfil de ocio de riesgo y de ocio protector para profundizar aún más en los conceptos trabajados, perfiles que se utilizarán en las sesiones posteriores de este módulo.

2.3. CONCEPTOS CLAVE

- ✓ **Ocio de riesgo:** aquellas actividades de ocio que realizamos y que son peligrosas o implican riesgos para nuestra salud o la de los demás.
- ✓ **Ocio protector:** aquellas actividades de ocio que realizamos y que son saludables, no conllevan ningún tipo de peligro o riesgo.
- ✓ **Ociosidad:** es el estado en el cual se está voluntariamente sin realizar ninguna actividad, no realizándose actividades de tiempo libre, así como tampoco de carácter académico o laboral.

- ✓ **Ocio nocturno:** Se trata de todo el ocio asociado a la noche y actividades que en ella se desarrollan: bares, discotecas, y demás lugares en los que la música y la bebida son los pilares centrales.

Utilizando como criterio la participación de las personas en el ocio, podemos distinguir dos tipos de ocio:

- ✓ **Ocio activo:** Ocio en el que el participante es receptor y emisor de estímulos
- ✓ **Ocio pasivo:** Ocio en el que el participante es únicamente receptor de estímulos.

2.4. ACTIVIDADES

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria

Actividad 2. Calculando el riesgo

Actividad 3. Mis perfiles de riesgo y protección

Actividad 4. Analizando el fin de semana

Actividad 5. Mi apariencia en el ocio

Actividad 6. Lo que la letra nos dice...

Actividad 7. Mi realidad ante el ocio

Actividad 8. Actividad complementaria

2.5. MATERIAL

Pizarra y tizas

Película “Thirteen” u otra de contenido similar

Hoja 2.1.1. Calculando el riesgo

Hoja 2.1.2. Mis perfiles de ocio de riesgo y de ocio protector

Hoja 2.1.3. Mis prácticas de ocio de riesgo y protección.

Hoja 2.1.4. Mi apariencia en el ocio

Hoja 2.1.5. 16 añitos tiene...

Hoja 2.1.6. Mi realidad ante el ocio

Hoja 2.1.7. Cómo influye...

Hoja 2.1.8. Película “THIRTEEN”.

2.6. DESARROLLO DE LA SESIÓN

2.6.1. Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria

Se hace un breve recordatorio de la actividad complementaria revisando y reforzando los contenidos trabajados en la misma.

2.6.2. Actividad 2: Calculando el riesgo

Con esta actividad se pretende que los participantes conozcan de forma concisa lo que los estudios indican sobre la asociación entre ocio y delincuencia. Para ello, el monitor puede comenzar preguntando lo siguiente: *“Hoy continuaremos hablando del ocio y tiempo libre. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿podrías definirme lo que es el ocio de riesgo y el ocio protector?”*.

Se deja un tiempo para que los participantes aporten ideas que se van apuntando en la pizarra de forma resumida. Al terminar, el monitor explica: *“Podemos decir, de forma muy breve, que el ocio de riesgo son aquellas actividades que realizamos en nuestro tiempo libre y que conllevan riesgo para nuestra salud o son peligrosas para nosotros. Por el contrario, el ocio protector son aquellas actividades de ocio que son saludables, es decir, que no conllevan riesgo o peligro. ¿Podrías ponerme ejemplos de estos dos tipos?”*.

El monitor hace dos columnas en la pizarra y va apuntando los ejemplos que aporten los participantes. El monitor sigue explicando: *“Los profesionales que estudian estos tipos de ocio indican que, en el ocio de riesgo, las conductas/actividades más frecuentes son las que se denominan transgresoras de las normas como, por ejemplo, faltar a clase, el consumo de alcohol, vandalismo, entre otras. Así, se dice que el ocio de riesgo más frecuente en los jóvenes es escuchar cierto tipo de música que incita a la violencia, al igual que ver ciertas películas. Formar parte de algunos grupos de ideología, jóvenes que están involucrados en continuas peleas, o que incitan a la violencia. El consumo de alcohol y otras drogas. También se ha comprobado que el uso de algunos videojuegos está asociado a la delincuencia en los jóvenes. Por el contrario, se consideran actividades de ocio protector, positivas, aquellas en las que se fomente la cooperación, el compañerismo, en las que puedan llegar a desarrollar su autoestima, autoeficacia y autoconcepto. Las que son saludables y no conllevan ningún peligro o riesgo. De esta manera podrán constituirse como personas autónomas, capaces de construir su propio estilo de vida y conseguir un equilibrio que le*

proporcione bienestar. Ejemplo de estas actividades son: grupos de deporte, grupos artísticos, recreativos, culturales, lectura, pintura, etc.”.

El monitor va apuntando en las dos columnas los ejemplos que va exponiendo para que, de forma visual, los participantes dispongan de un esquema de ambos conceptos.

A continuación, se entrega a los participantes la Hoja 2.1.1. “Calculando el riesgo” y se les pide que clasifiquen las actividades de ocio que se incluyen en la hoja en los dos tipos de ocio comentados, argumentando brevemente cada uno de los casos. Las actividades que en principio serían consideradas como ocio de riesgo son: **3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 23**. Aunque en ocasiones como el ítem **1, 2 y 8** podrían considerarse como actividad de riesgo si su duración, frecuencia e intensidad son elevadas. Al igual, se hace mención al ítem **6** explicando que los deportes considerados como de riesgo, serían actividades de ocio protector siempre y cuando se realicen en condiciones óptimas de seguridad y precaución.

Una vez que los participantes hayan terminado, se ponen en común todos los resultados, se analizan los argumentos aportados, corrigiéndose posibles errores y apuntándose los ítems del cuestionario en la columna correspondiente (ocio de riesgo, ocio protector).

Hoja 2.1.1. Calculando el riesgo

Instrucciones: clasifica cada una de las actividades de ocio en ocio de riesgo o protector. Argumenta tus respuestas		
	¿OCIO DE RIESGO O PROTECTOR?	¿POR QUÉ?
1. Ir a pubs, bares, discotecas		
2. Estar en la calle, en una plaza o parque con amigos charlando, pasando el rato		
3. Estar en la calle, en una plaza o parque haciendo el “botellón” y fumando “porros”		
4. Ir al cine o al teatro		
5. Practicar deportes habituales en grupo/individual (Fútbol, baloncesto, tenis, ciclismo, footing...)		

6. Practicar deportes de riesgo (puenting, carrera legal de coches, escalada...)		
7. Ir a conciertos, a eventos deportivos...		
8. Ir a casa de un amigo/familiar (fiesta, cenar, jugar a la play...)		
9. Participar en una asociación o grupo prosocial como voluntario.		
10. Ir de excursión (campo, montaña, a una ciudad...)		
11. Salir al campo de acampada, hacer senderismo, ir de pesca...		
11. Realizar actividades culturales como ir a un parque temático, planetario, museo...		
12. Probar o consumir habitualmente diferentes tipos de drogas y hacer a la vez alguna actividad de ocio de las propuestas en los puntos anteriores		
13. Conductas vandálicas como romper farolas, quemar contenedores, hacer grafitos, etc.		
14. Conductas de robo a personas y/o en centros comerciales		
15. Disfrutar haciendo sufrir animales		
16. Mantenimiento de relaciones sexuales sin medidas preventivas		
17. Conducción de vehículos sin carnet de conducir		
18. Ser miembro o participar en grupos de asociación ilícita.		
19. Conducción de vehículos bajo efectos de alcohol y drogas.		
20. Utilización de redes sociales		
21. Utilización nociva de Internet		
22. Juegos de azar		
23. Portar armas durante el ocio por si tengo que defenderme		
24. Aprender una habilidad o conocimiento como tocar un instrumento, bailar, pintar...		

2.6.3. Actividad 3: Mis perfiles de riesgo y protección

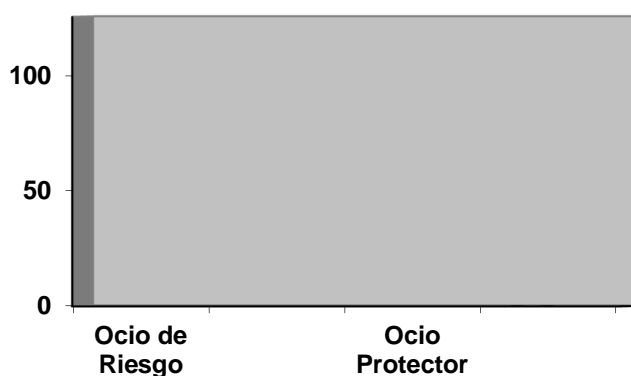
Para consolidar los conceptos trabajados previamente, así como facilitar un mejor y mayor conocimiento por parte de los participantes de sus actividades de ocio, en esta actividad se pretende que los participantes elaboren su propio perfil de ocio de riesgo y de ocio protector, perfiles con los que trabajaremos en las siguientes sesiones.

El monitor explica lo siguiente: *“Una vez que hemos definido lo que es el ocio de riesgo y el ocio protector y hemos visto varios ejemplos, lo que vamos a hacer es nuestro propio perfil de cada uno de los dos tipos”*. Para ello, se utilizará la clasificación que hemos realizado en la Hoja 2.1.1. y las puntuaciones que se otorgaron a cada ítem en la Hoja 1.1.2. Las claves de corrección del cuestionario son las siguientes:

- Ocio de riesgo: suma de las puntuaciones de los ítems que se han considerado de riesgo.
- Ocio protector: suma de las puntuaciones de los ítems que se han considerado como protectores.

Una vez que los participantes hayan sumado los ítems y hayan obtenido una puntuación tanto del ocio de riesgo como del protector, se extrapolan dichas puntuaciones a la Hoja 2.1.2., de tal manera que ellos mismos pueden visualizar su perfil de los dos tipos de ocio trabajados.

Hoja 2.1.2. Mi perfil de ocio de riesgo y ocio protector.



2.6.3. Actividad 4: Analizando el fin de semana

Ahora se analizará su tipo de ocio en base a las actividades sugeridas por ellos mismos, así, se pide a los participantes que rellenen la Hoja 2.1.3. en base al planning de fin de semana que realizaron en la Hoja 1.1.6., incluyendo si es posible actividades que hayan hecho en permisos ordinarios de fin de semana durante su estancia en el centro. Cuando hayan terminado, se revisan todos los perfiles, corrigiendo posibles errores y debatiendo sobre aquellos aspectos que se consideren oportunos.

Hoja 2.1.3. Mis prácticas de ocio de riesgo y de ocio protector

Instrucciones: crea tu perfil de ocio de riesgo y de ocio protector indicando las 6 actividades de cada tipo de ocio que más realizas o que más te gustan. Luego, contesta a las preguntas que aparecen a continuación

OCIO DE RIESGO	OCIO PROTECTOR
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.

- Mi perfil de ocio de riesgo se caracteriza por actividades que implican:

- Mi perfil de ocio protector se caracteriza por actividades que implican:

- En resumen, me puedo definir como una persona:

- Redondea: Mi nivel de riesgo en mi tiempo libre es:

BAJO - MODERADO - ALTO

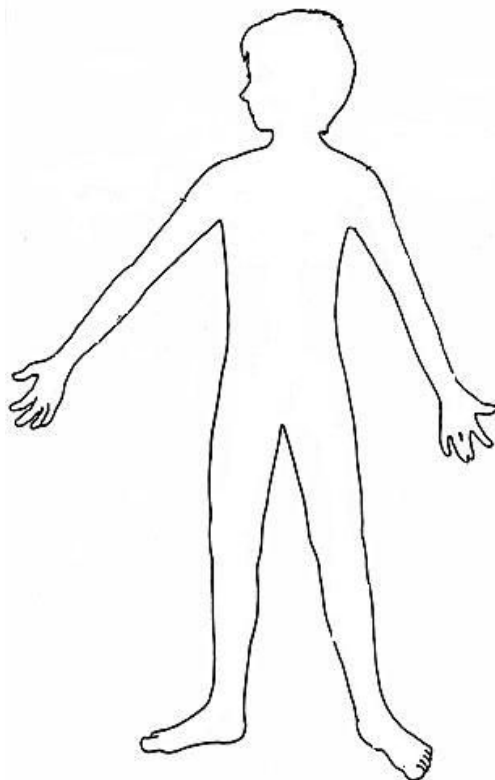
2.6.3. Actividad 5: Mi apariencia en el ocio

En esta actividad se intentará abordar con los participantes la manera en que los adolescentes utilizan la apariencia física externa como un sistema de signos para comunicarse con sus iguales, con quienes comparten un mismo código alejado de los adultos, buscando así su diferenciación. Para ello, el monitor comienza explicando lo siguiente: *“La adolescencia es una etapa de cambios personales caracterizada por nuevas formas de pensar y sentir. Así, los adolescentes para adaptarse a su nueva imagen, la comparan con los que le rodean, intentando transmitir ante los demás sus pensamientos ante la sociedad y ante uno mismo. Por tanto, utilizan la ropa, los peinados y accesorios que reafirmen su propia identidad, intentando reflejar una personalidad única y original; aunque proyectando la integración en*

un grupo en el que cada elemento del vestuario es un signo de pertenencia. Se les pide que rellenen la Hoja 2.1.3. en la que se trabajará la identidad personal con respecto al grupo.

Hoja 2.1.4 Mi apariencia en el ocio

Instrucciones: se pide a los participantes que dibujen en esta silueta de un adolescente cómo ellos mismos irían vestidos en sus momentos de ocio, detallando la ropa, accesorios, pelo, e identificación con determinadas marcas o grupos musicales. A continuación, deberán contestar las preguntas que se incluyen.



- ¿A qué ideales hace referencia esta forma de vestir?

- ¿Se podría relacionar con algún tipo de música?

- ¿Esta vestimenta hace alusión a la pertenencia de algún grupo? ¿Cuál?

- ¿Con qué lugares y sitios de ocio se podría relacionar esta estética?
- ¿Con qué emociones relacionáis esta forma de vestir?

Por último, se debate con los participantes las respuestas a las preguntas, poniéndolas en común e intentando que ellos mismos den un significado a esa determinada estética y qué influencia en ella nuestro ocio.

2.6.4. Actividad 6: Lo que la letra nos dice....

En esta actividad (adaptada de López et al., 2011) vamos a seguir trabajando la importancia para nosotros mismos de pertenecer a un grupo, así como buscar una identidad personal acorde a él. El monitor explica lo siguiente: *“Para los adolescentes y jóvenes, el tiempo libre y en concreto el ocio, se convierten en un espacio para ser ellos mismos, sin los condicionamientos de los contextos adultos. Sus protagonistas hacen de esos espacios temporales un lugar de desarrollo y búsqueda de identidad. Esta exploración se manifiesta en el ensayo de conductas a través de actividades y nuevas experiencias, en un ejercicio consciente o no, pero siempre activo y predispuesto. Es un espacio para dejarse llevar por el grupo de iguales, así, no en pocas ocasiones el ocio sirve como área para la magnificación de la ruptura con el mundo adulto. Y es aquí donde a veces se producen deslizamientos hacia comportamientos disruptivos: en el afán de cambio,, en la búsqueda de una libertad absoluta,, se disparan las conductas de riesgo, a través de la legitimación del no control”*.

Hoja 2.1.5. 16 añitos tiene....

<p style="text-align: center;"><u>CANCION 16 AÑITOS DEL CANTO DEL LOCO</u></p> <p style="text-align: center;">16 añitos fiero me creía el rey del mundo con mi lema por bandera lo que digan yo no escucho</p> <p style="text-align: center;">No había nadie que pudiera lograr que cambiara un poco el rumbo con mi idea la primera y que no agobiaran mucho</p>
--

Y así fue
me revele contra todo hasta el sol
viviendo entonces una distorsión
y me enfadé con el mundo
malditos complejos que siempre sacan lo peor!

Pensé “en la fuerza estará lo mejor”
me disfrace de uno que no era yo
buscando esa firmeza
llegué a un lugar negro
pensé que eso era el valor

Y sufrí de tal manera
por dejar de ser quien era
por pensar que ser cobarde
era ser lo que creyera

Los valientes son los que son de verdad
y los fuertes ni sus guerras
los valientes los que saben llorar
con la cara descubierta

Y así fue
me revele contra todo hasta el sol
viviendo entonces una distorsión
y me enfadé con el mundo
malditos complejos que siempre sacan lo peor!

Pensé “en la fuerza estará lo mejor”
me disfrace de uno que no era yo
buscando esa firmeza
llegué a un lugar negro
pensé que eso era el valor..el valor...

y es mirarme ahora a la cara
y ser quien soy!

Y así fue
me revele contra todo hasta el sol
viviendo entonces una distorsión
y me enfadé con el mundo
malditos complejos que siempre sacan lo peor!

Pensé “en la fuerza estará lo mejor”
me disfrace de uno que no era yo
buscando esa firmeza
llegué a un lugar negro
pensé que eso era el valor.

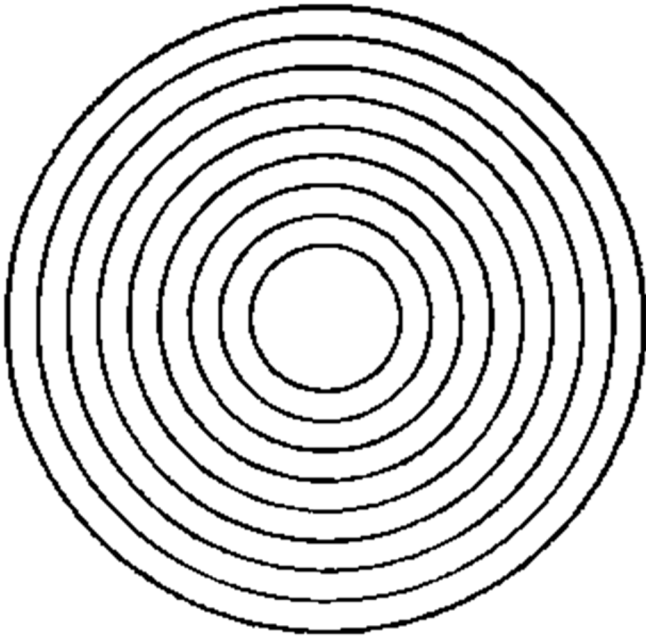
Posteriormente, el monitor abre un debate con los participantes, donde ellos deben expresar su opinión con respecto a si ha cambiado su forma de pensar el hecho de pertenecer a un grupo de pares, cómo han intentado evadir el control por parte de los adultos y si alguna vez han hecho algo para impresionar a los demás.

2.6.5. Actividad 7: Mi realidad ante el ocio.

En esta actividad se pretende hacer consciente a los participantes de la contribución de su grupo de pares en las conductas antisociales y delictivas que pueda llevar a cabo en el contexto de ocio. Para ello, el monitor proporciona a los menores la Hoja 2.1.4. y explica lo siguiente: *“Nnumerosos estudios corroboran la hipótesis que afirma que los individuos que cometen actos antisociales y delictivos los emprenden junto con personas de su grupo de relación, siendo uno de los factores de riesgo con mayor capacidad de determinación de la conducta antisocial del adolescente. Por lo que vamos a indagar sobre con qué personas compartís actividades de ocio, tanto las consideradas de riesgo como de protector. En primer lugar, debéis imaginaros que vosotros sois el círculo del centro, y tenéis que situar alrededor vuestro las personas con las que os relacionáis y con las que compartís actividades de ocio, posicionando las personas que pudieran influir a realizar actividades de riesgo a la izquierda y aquellas cuya influencia la relacionaríais con actividades de ocio protector a la derecha”*.

Hoja 2.1.6. Mi realidad ante el ocio

Instrucciones: debéis imaginaros que vosotros sois el círculo del centro, y tenéis que situar alrededor vuestro las personas con las que os relacionáis y con las que compartís actividades de ocio, posicionando las personas que pudieran influir a realizar actividades de riesgo a la izquierda y aquellas cuya influencia la relacionaríais con actividades de ocio protector a la derecha

OCIO DE RIESGO	OCIO PROTECTOR
	

Una vez rellenado el círculo, se les entrega la Hoja 2.1.5., donde deben especificar la influencia que ejercen esas personas tanto para su ocio de riesgo como protector.

Hoja 2.1.7. Cómo me influye....

Instrucciones: debéis especificar la influencia unilateral o recíproca de las personas que habéis nombrado en el círculo.		
	PERSONA	INFLUENCIA
OCIO DE RIESGO		
OCIOPROTECTOR		

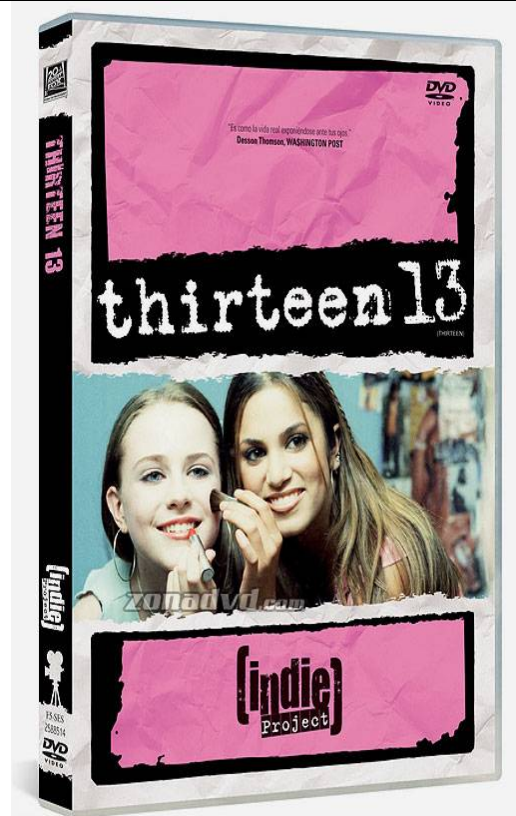
Una vez completada la Hoja 2.1.7. se debate sobre la influencia de las personas que hayan seleccionado, intentando dotar a los participantes de habilidades sociales potenciar la asertividad, así como concienciar de las consecuencias positivas inherentes de un estilo de vida prosocial.

2.6.4. Actividad 8: Actividad complementaria con PELÍCULA

Para seguir profundizando en el análisis de los contenidos trabajados durante el Programa, los participantes podrán ver la película “THIRTEEN”, así como la actividad que se ha programado para la reflexión, aunque el monitor podrá elegir otra película si lo considera oportuno usando o no la actividad sugerida o adaptarla a otra película o documental. Posteriormente al visionado, se les entregará a los participantes la **Hoja 2.1.8. Película “THIRTEEN”**.

Hoja 2.1.8. Película “THIRTEEN”.

Instrucciones: El monitor previamente al visionado pide a los participantes que se fijen en los cambios que va a experimentar la protagonista, y como el desarrollo de nuevas actividades de ocio van a influir en su vida cotidiana y en su bienestar.



SINOPSIS: La película nos presenta a Tracy, una joven de trece años que dedica su vida a lo que considera normal para su edad, estudia y sus momentos de ocio los dedica a jugar con las muñecas que tiene en su cuarto, unido a una apariencia externa caracterizada por tendencias y calcetines infantiles. Su vida comienza a cambiar el día que inicia el penúltimo curso en el instituto, precisamente cuando una bella y explosiva compañera llamada Evie Zamora se cruza en su camino, Evie tiene fama de ser atractiva socialmente, la más bella y popular, en resumen una chica de "éxito" ...justo todo lo contrario que Tracy que no pasa de ser una niña normal, que se encuentra buscando su identidad en el período de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social que transcurre en la adolescencia.

Tracy no tarda mucho en darse cuenta que quiere ser como Evie, por ello decide seguir sus pasos, vestirse como ella e imitar sus conductas y su ocio, por lo que los muñecos de su habitación acaban en la basura dejando atrás su niñez, está ansiosa por convertirse en una idolatrada adolescente. No le resulta muy sencillo conseguir la amistad de la otra menor e integrarse en su grupo de relación, pero con los cambios pertinentes finalmente lo consigue.

Tracy sufre un giro brusco en su vida, pasa de ser inocente e infantil para convertirse en todo lo contrario, la influencia de Evie la lleva a delinquir, robar, consumir drogas, mantener conductas sexuales inapropiadas, dejar a sus verdaderas amistades de lado, ponerse piercings, iniciar conflictos familiares sobretodo con su madre y en resumen unas costumbres totalmente opuestas a las que tenía anteriormente...

"Thirteen" es un claro reflejo de los cambios que se producen en el desarrollo de la

adolescencia, señalando problemas de identidad y cambios en todas las áreas de la vida.

- ¿Podrías identificar cambios en tu forma de vestir, de relacionarte, de grupo de iguales que hayan sucedido en tu adolescencia?

<i>ACTIVIDAD DE RIESGO</i>	<i>CORTO PLAZO</i>	<i>LARGO PLAZO</i>
	- Para ella/s:	- Para ella/s:
	-Para los demás:	-Para los demás:
	- Para ella/s:	- Para ella/s:
	-Para los demás:	-Para los demás:

	- Para ella/s:	- Para ella/s:
	-Para los demás:	-Para los demás:
	- Para ella/s:	- Para ella/s:
	-Para los demás:	-Para los demás:

Finalmente, se realizará un debate con los participantes sobre cómo va cambiando su actitud, ideales y formas de vestir la protagonista para ser aceptada por los demás, así como las consecuencias que se podrían haber evitado y las que podrían suceder a largo plazo para las menores.

2.6.5. Síntesis de la sesión

Para finalizar la sesión, el terapeuta/monitor resaltaré los aspectos más relevantes que se han tratado, relacionándolos con los objetivos propuestos para así poder dar a los menores un sentido de integración de todos los contenidos abordados. El terapeuta/monitor debe dar una puntuación a cada menor de “0” a “10”, considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado, y b) asimilación e interiorización de los conceptos tratados.

3. SESIÓN 2: OCIO DE RIESGO

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aprender a identificar aquellos estímulos que pueden propiciar conductas relacionadas con el ocio de riesgo.
2. Detectar los estados emocionales y pensamientos implicados en la realización de este tipo de conductas de riesgo.
3. Concienciar a los participantes de los elementos implicados en el ocio de riesgo y cómo se encadenan para dar lugar a comportamientos peligrosos o perjudiciales.

3.2. PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

Para analizar en profundidad las actividades de ocio de los participantes que conlleven peligro o se consideren perjudiciales, en esta sesión y tras un breve recordatorio de los principales conceptos trabajados hasta el momento, se desglosarán dichas actividades en pensamientos, emociones y consecuencias de las mismas, así como en los contextos donde se producen y las alternativas que podrían llevar a cabo para su prevención.

Los participantes elegirán las actividades de riesgo que más les gustan o que realizan más frecuentemente (4 ó 5) y se analizarán funcionalmente los pensamientos y emociones presentes durante su realización, así como lo que ocurriría previamente y las consecuencias que dichas actividades tuvieron o podrían tener, ya sea tanto a corto como largo plazo, a nivel personal o para los demás.

Por tanto, lo que se pretende es que los participantes sean conscientes de los elementos que suelen estar implicados en la realización de conductas de ocio perjudiciales para así poder detenerlas e, incluso, prevenirlas.

3.3. CONCEPTOS CLAVE

- ✓ **Ocio de riesgo:** son aquellas actividades que se realizan en el tiempo libre del que dispone la persona y que pueden afectar negativamente al desarrollo óptimo de la misma.
- ✓ **Ocio protector:** conjunto de actividades que la persona realiza durante su tiempo libre y que no afectan negativamente al desarrollo óptimo de la persona, sólo lo fomentan.

3.4. ACTIVIDADES

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria

Actividad 2. Recordando lo aprendido

Actividad 3. El riesgo...

Actividad 4. Proyectando mi ocio de riesgo

Actividad 5. Analizando mi proyección

Actividad 6. Las consecuencias de mi ocio de riesgo

Actividad 7. Síntesis sobre mi ocio de riesgo

Actividad 8. Actividad complementaria

Actividad 9. Actividad complementaria

3.5. MATERIAL

Pizarra y tizas

Películas: “Ciudad de Dios” y “Ladrones” u otras de contenido similar.

Hoja 2.2.1. Repasando lo que he aprendido sobre ocio de riesgo y ocio protector

Hoja 2.2.2. Alternativas a mis escenarios de riesgo

Hoja 2.2.3. Proyectando mi ocio de riesgo

Hoja 2.2.4. Analizando mis conductas de ocio de riesgo

Hoja 2.2.5. Analizando las consecuencias de mi ocio de riesgo

Hoja 2.2.6. Resumiendo el análisis sobre mi ocio de riesgo

Hoja 2.2.7. Película “Ladrones”

Hoja 2.2.8. Película “Ciudad de Dios”

3.6. DESARROLLO DE LA SESIÓN

3.6.1. Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria

Se revisan los perfiles de ocio de riesgo de las protagonistas, así como la vulnerabilidad que presenta la protagonista principal en cuanto a la presión grupal ejercida por su grupo de iguales, analizando el cambio que se produce en cuanto a su imagen y actitud, realizándose un especial hincapié en las consecuencias que conllevan las actividades de riesgo realizadas.

3.6.2. Actividad 2: Recordando lo aprendido

Con el fin de repasar y resumir brevemente todo lo aprendido hasta el momento y los principales conceptos trabajados, en esta actividad los participantes contestarán a una serie de preguntas relacionadas con los contenidos analizados. El monitor puede introducir la sesión de la siguiente manera: *“Hoy, de nuevo, seguiremos hablando del ocio pero nos vamos a centrar en el ocio de riesgo. El otro día vimos lo que es y pusimos varios ejemplos. Bueno, para recordar un poco lo que hemos ido viendo vais a contestar a una serie de preguntas”*. El monitor les entrega la Hoja 2.2.1. *“Repasando lo que he aprendido sobre ocio de riesgo y ocio protector”* y les da el tiempo necesario para que las contesten.

Hoja 2.2.1. Repasando lo que he aprendido sobre ocio de riesgo y ocio protector

Instrucciones: vamos a comprobar lo que has aprendido sobre el ocio y tiempo libre. Contesta a las preguntas que aparecen a continuación

- ¿Qué diferencias claras hay entre ocio de riesgo y ocio de protección?
- Enumera 3 conductas que para ti sean consideradas como ocio de riesgo.
- ¿Piensas que sólo las personas que cometen delitos son las únicas que también participan en el ocio de riesgo?
- Enumera 3 conductas que para ti sean consideradas como ocio de protección.
- ¿Crees que el tiempo libre está ligado al ocio de protección normalmente?
- ¿Piensas que la práctica de ocio de protección es más aburrida que la práctica del ocio de riesgo?
- ¿Piensas que los temas tratados son de importancia en la actualidad?

Una vez que han contestado, se leen una a una las preguntas y los participantes van respondiendo de uno en uno, debatiéndose finalmente sobre la importancia del tema en cuestión.

3.6.3. Actividad 3: El riesgo....

En esta actividad el monitor comienza dando una definición del riesgo que hace alusión a características de una determinada etapa vital, la adolescencia. Así, continúa describiendo el riesgo como: *“la probabilidad de que ocurra algo no deseado a partir de una situación que se busca intencionadamente. De tal forma, el riesgo incluiría situaciones y emociones como la incertidumbre ante el futuro y la falta de planificación, preferencia por las gratificaciones inmediatas sin que se tengan en cuenta las consecuencias. Por lo tanto,*

podemos afirmar que la elección y resolución de situaciones de riesgo implican en los sujetos cinco dimensiones básicas: la asunción consciente de las consecuencias que conlleva la exposición, la eventualidad del suceso que provoca el riesgo, la posibilidad de realizar una toma de decisiones sobre aventurarse o no, el conocimiento y la adopción de comportamientos alternativos y un entorno facilitador de dichas conductas alternativas”. Posteriormente, el monitor pide a los participantes que en la Hoja 2.2.2. piensen sobre sus escenarios de riesgo, cumplimentando sólo y exclusivamente los la columna de Escenario, ya que más adelante en la siguiente sesión se contemplarán las posibles alternativas válidas que les dificultase la realización de conductas transgresoras.

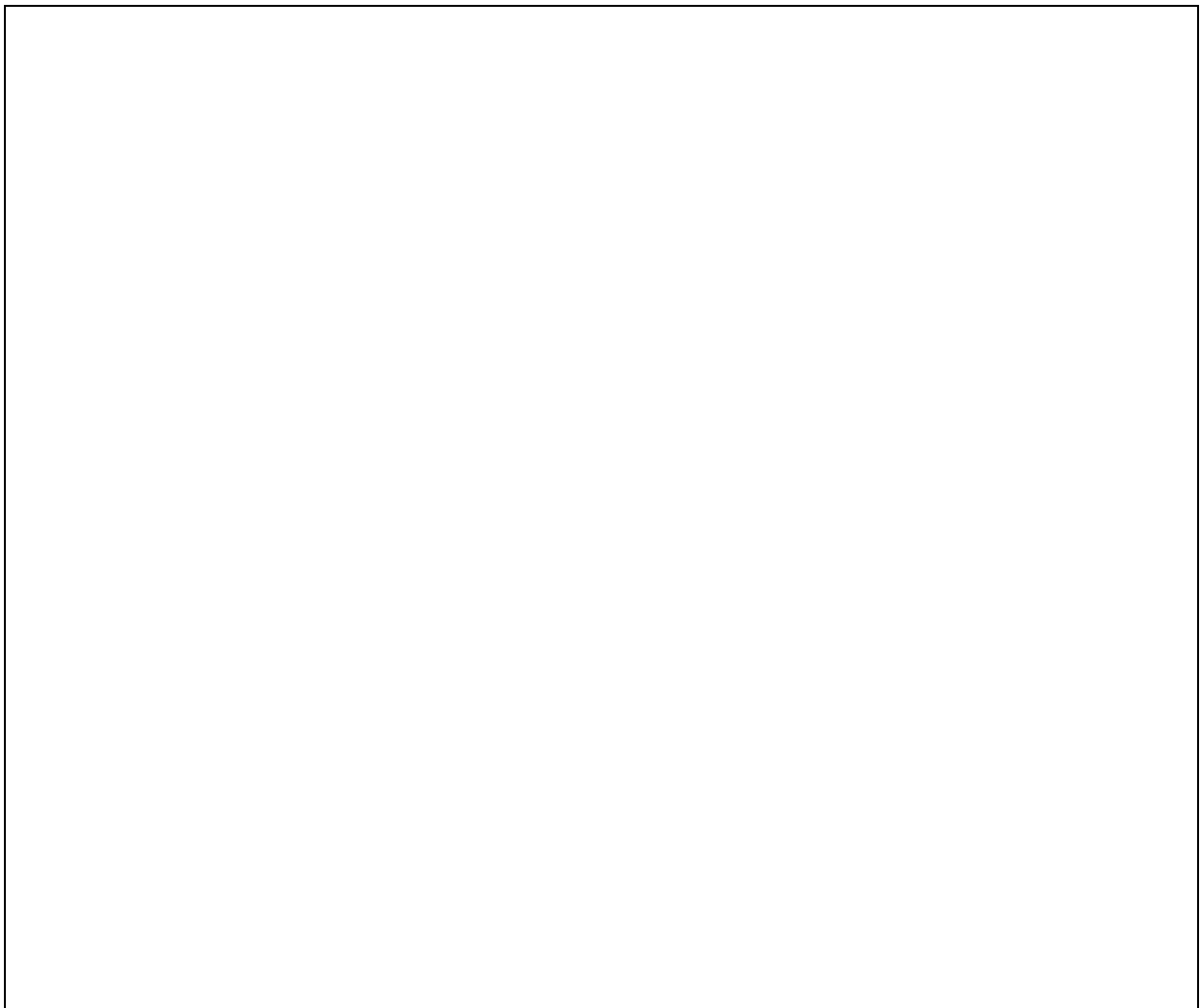
Hoja 2.2.2. Alternativas a mis escenarios de Riesgo.

ESCENARIO	ALTERNATIVA

3.6.3. Actividad 4: Proyectando mi ocio de riesgo

Para seguir analizando las conductas de ocio de riesgo de los participantes, se les pide que en la Hoja 2.2.3 realicen uno o varios dibujos que representen las actividades que llevan a cabo en su tiempo de ocio, haciendo especial hincapié en las que puedan ser consideradas como de riesgo.

Hoja 2.2.3 Proyectando mi ocio de riesgo

A large empty rectangular box with a thin black border, intended for participants to draw activities they engage in during their leisure time, specifically focusing on risk-taking activities.

Una vez que hayan terminado, se realiza un role-playing donde cada uno de ellos debe exponer en voz alta, situado enfrente del resto de compañeros, qué significado le otorga a los dibujos realizados aludiendo sobre todo a su ocio de riesgo.

3.6.4. Actividad 5: Analizando mi proyección

Para profundizar en las conductas de ocio de riesgo de los participantes han dibujado, se procede a analizar tanto los elementos previos a la realización de las mismas como los pensamientos y emociones presentes en el momento de dicha realización. Para ello, pueden utilizar las actividades que han proyectado en los dibujos de la actividad anterior o pueden usar la Hoja 2.1.3. Mis prácticas de ocio de riesgo y protector, se les explica lo siguiente: *“ahora lo que vamos a hacer es analizar vuestras conductas de ocio de riesgo, vamos a ver qué es lo que ocurría, pensabais o sentíais antes de realizarlas y mientras que las realizabais. Estos son los elementos que tenéis que completar en el cuadro con las 6 actividades de riesgo que más os gusten o que más hayáis realizado”*.

Hoja 2.2.4 Analizando mis conductas de ocio de riesgo

Instrucciones: analiza las actividades de ocio de riesgo que has dibujado indicando lo que ocurría antes de hacerlas y lo que pensabas y sentías al realizarlas

ACTIVIDAD DE RIESGO	SITUACIÓN (¿Qué pasaba, qué sentías, qué pensabas?)	PENSAMIENTOS DURANTE LA ACTIVIDAD	EMOCIONES DURANTE LA ACTIVIDAD
------------------------	---	---	--------------------------------------

Una vez lo hayan completado, se exponen los casos uno a uno y se comenta sobre las motivaciones previas, los pensamientos y emociones que se suelen asociar con el ocio de riesgo, etc.

3.6.4. Actividad 6: Las consecuencias de mi ocio de riesgo

Para completar el análisis de las actividades de riesgo, se pretende que los participantes valoren las consecuencias de las mismas a diversos niveles. Para ello, el monitor les entrega la Hoja 2.2.4. *“Analizando las consecuencias de mi ocio de riesgo”* y les explica que ahora, con esas mismas actividades que han analizado en la actividad anterior, van a valorar las consecuencias que esas actividades tuvieron o que podrían tener (en el caso de que una de esas actividades no se haya realizado).

Hoja 2.2.5 Analizando las consecuencias de mi ocio de riesgo

Instrucciones: analiza las consecuencias que han tenido o que pueden tener las actividades de tu perfil de ocio de riesgo

ACTIVIDAD DE RIESGO	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO
	- Para mí:	- Para mí:
	- Para los demás:	- Para los demás:
	- Para mí:	- Para mí:
	- Para los demás:	- Para los demás:
	- Para mí:	- Para mí:
	- Para los demás:	- Para los demás:
	- Para mí:	- Para mí:
	- Para los demás:	- Para los demás:
	- Para mí:	- Para mí:
	- Para los demás:	- Para los demás:
	- Para mí:	- Para mí:
	- Para los demás:	- Para los demás:

Una vez que lo hayan completado, se analizan una a una las consecuencias establecidas por los participantes y se debate al respecto, enfatizándose la idea de la existencia de unas consecuencias positivas a más corto plazo, pero unas consecuencias negativas a más largo plazo y, sobre todo, para los demás.

3.6.5. Actividad 7: Síntesis sobre mi ocio de riesgo

Para favorecer una mayor interiorización y consolidación de los elementos trabajados, en esta actividad los participantes deberán unificar toda la información trabajada en la sesión de hoy rellenando un esquema. El monitor les entrega la Hoja 2.2.6. “*Resumiendo el análisis sobre mi ocio de riesgo*” y les explica que deben rellenar los espacios indicados en la misma.

Hoja 2.2.6. Resumiendo el análisis sobre mi ocio de riesgo

Instrucciones: integra todo lo que has analizado sobre tu ocio de riesgo contestando a las siguientes preguntas

- Antes de realizar una actividad de ocio de riesgo suelo pensar, sentir u ocurrir cosas como:
- Los pensamientos que suelo tener mientras realizo esa actividad son del tipo:
- Las emociones que suelo sentir durante la actividad son del tipo:
- Las consecuencias que suelen tener mis actividades de ocio de riesgo suelen ser:
- Elige una actividad de ocio de riesgo y rellena el siguiente esquema.

Actividad de riesgo:

Situación (antes de realizar la actividad):

PENSAMIENTOS	EMOCIONES	CONSECUENCIAS
--------------	-----------	---------------

Finalmente, se debate sobre lo expuesto por los participantes, enfatizándose las siguientes ideas:

- Que los pensamientos que se asocian con dichas actividades suelen ser negativos, por ejemplo, minimizar el riesgo, justificación, etc.

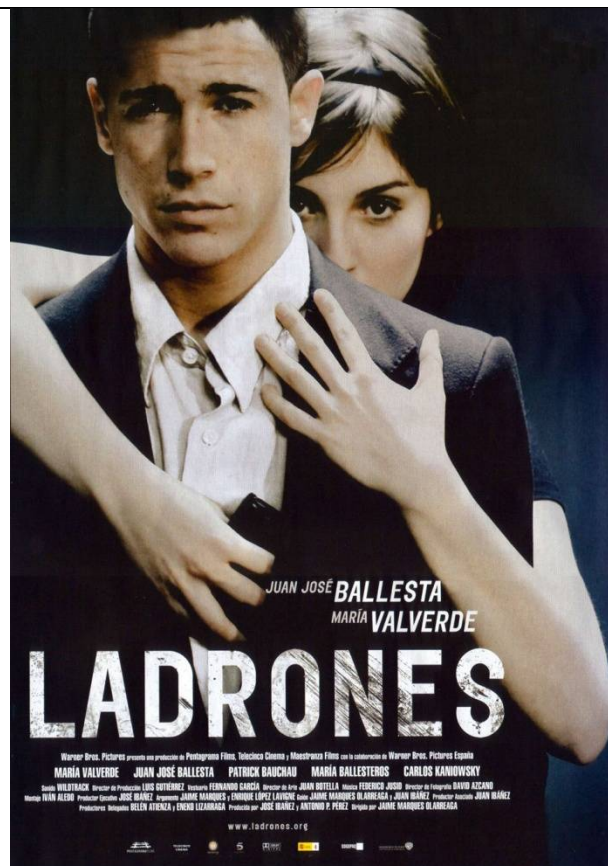
- b) Que las emociones asociadas suelen ser positivas (alegría, placer, etc.), hecho que no implica que esté justificada la realización de dichas actividades.
- c) Que las consecuencias que derivan de las mismas, a corto plazo, suelen ser positivas pero no tanto a largo plazo o para los demás.

3.6.6. Actividad 8: Actividad complementaria

Seguiremos analizando conceptos relacionados con el ocio de riesgo, los participantes podrán ver la película “LADRONES”, así como la actividad que se ha programado para la reflexión, aunque el monitor podrá elegir otra película si lo considera oportuno usando o no la actividad sugerida o adaptarla a otra película o documental. Posteriormente al visionado, se les entregará a los participantes la **Hoja 2.2.7. Película “LADRONES”**.

Hoja 2.2.7. Película “LADRONES”

Instrucciones: Una vez que el grupo de participantes han visionado la película, se les indicará que contesten individualmente al cuestionario que aparece a continuación, generando un posterior debate que dirigirá el monitor con el objetivo de concienciar sobre las consecuencias negativas asociadas a las conductas de robo, intentando relacionarlas con razones para no llevar a cabo tales conductas.



SINOPSIS: Álex es un joven que lo único que sabe hacer en la vida es robar, actividad que le enseñó su madre antes de ser detenida por la policía en el andén de una estación de metro cuando él sólo tenía 7 años.

Tras dejar el centro tutelar de menores, intenta buscar un hueco en la sociedad. Sus esfuerzos son vanos, ya que al poco tiempo regresa a la calle para hacer lo que mejor sabe: robar. Su vida cambia cuando conoce a Sara, una “niña bien” cuyas únicas preocupaciones son los exámenes trimestrales y la elección de su vestuario.

CUESTIONARIO DE CREENCIAS SOBRE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD DE LOS DEMÁS (adaptado de López, et al., 2011)

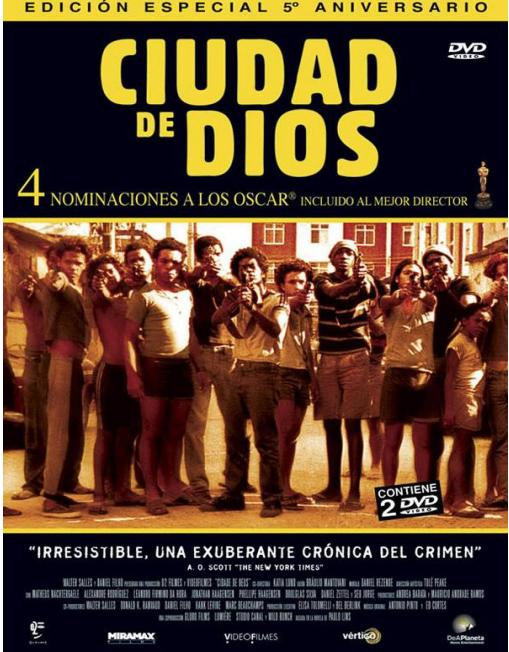
	ACUERDO	NO SÉ	DESACUERDO
1. Puedo robar y conseguir que no me pillen.			
2. No pasa nada si le robas a alguien con mucho dinero.			
3. Si te pillan no pasa nada cuando eres menor de edad.			
4. Si sólo robas una o dos veces no entras a un centro.			
5. Si no sabes robar, te terminan pillando.			
6. Todo el mundo roba alguna vez.			
7. Si la gente supiera que no les van a coger, seguro que robaría.			

8. Robar no soluciona la economía.			
9. Si no tengo o no me dan dinero suficiente, tengo que robarlo.			
10. Esta bien robar en los grandes almacenes, ya que ellos suben los precios.			
11. Si me robaran me sentiría muy mal, pero yo robo a gente que tiene dinero y no le importa.			
12. Tendría muy mala suerte si me pillaran robando.			
13. Si necesito dinero, me da igual a quien robar, incluso a una mujer mayor.			
14. Todo el mundo roba en los grandes almacenes.			
15. No estaría bien que todo el mundo robara.			
16. Hay gente que parece que quiere que le roben, no tienen cuidado con el bolso.			
17. Robar al que tiene menos dinero que yo no está bien.			
18. Me da igual romper las cosas de los demás.			
19. Todo el mundo no puede robar, sólo los que saben.			
20. Si alguien se deja la puerta del coche abierta, es porque no le importa que le roben.			
21. Los alucinajes son divertidos y es difícil que te pillen.			
22. Voy a seguir robando porque es lo único que se hacer bien.			
23. La ley del menor no castiga el robo, ni el hurto.			
24. Si sólo realizas un hurto no pasa.			
25. No me pongo nervioso cuando robo.			
<p>A continuación, se ponen en común las respuestas de los participantes y el monitor realiza un debate intentando desmontar las falsas creencias y justificaciones que presentan ante este acto antisocial y delictivo, haciendo hincapié en si es una actividad que realizan en su tiempo de ocio y que consecuencias negativas les puede acarrear, según las que refiere además se exponen en la película.</p>			

3.6.7 Actividad 9: Actividad complementaria

Hoja 2.2.8. Película “Ciudad de Dios”

Instrucciones: Una vez que el grupo de participantes han visionado la película, se les indicará que contesten individualmente al cuestionario que aparece a continuación, generando un posterior debate que dirigirá el monitor con el objetivo de concienciar sobre las consecuencias negativas asociadas a conductas de ocio de riesgo y protector.

	<p>SINOPSIS: Buscapé tiene 11 años y vive en Ciudad de Dios, un suburbio de Río de Janeiro. A pesar de que la vida en este barrio está dominada por robos, peleas y enfrentamientos diarios con la policía, Buscapé prefiere quedarse al margen. Él sueña con ser fotógrafo. Dadinho tiene su misma edad y también tiene claro su futuro, aunque muy distinto. Ambiciona convertirse en el criminal más famoso de Río de Janeiro. Con el paso del tiempo ambos conseguirán que sus sueños se hagan realidad. Buscapé entrará a trabajar en un periódico y Dadinho, que cambia su nombre por el de Zé Pequeno, se convertirá en el narcotraficante de cocaína más temido y respetado de Río de Janeiro.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Identifica conductas de ocio de riesgo en cada uno de los personajes.
	<ul style="list-style-type: none"> • Identifica conductas de ocio de riesgo en cada uno de los personajes.
	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué diferencia a Buscapé y Dadinho?

<ul style="list-style-type: none">• ¿El ambiente determina el uso y la justificación de la violencia? ¿Y de las drogas?
<ul style="list-style-type: none">• ¿Qué consecuencias tendrá la conducta de uno y otro?

3.6.7. Síntesis de la sesión

Para finalizar la sesión, el terapeuta/monitor resaltaré los aspectos más relevantes que se han tratado, relacionándolos con los objetivos propuestos para así poder dar a los menores un sentido de integración de todos los contenidos abordados. El terapeuta/monitor debe dar una puntuación a cada menor de “0” a “10”, considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado, y b) asimilación e interiorización de los conceptos tratados.

4. SESIÓN 3: OCIO PROTECTOR

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aprender a identificar aquellos estímulos que pueden propiciar actividades de ocio más saludables.
2. Detectar las emociones y pensamientos implicados en la realización de este tipo de actividades.
3. Concienciar a los participantes de los elementos implicados en el ocio protector y de la obtención de sensaciones parecidas a las obtenidas con el ocio de riesgo.

4.2. PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

Para conseguir los objetivos planteados y tras un breve recordatorio de los conceptos implicados, los participantes analizarán sus actividades de ocio protector en términos de pensamientos, emociones y consecuencias derivadas, siguiendo el mismo procedimiento que en la sesión previa con el ocio de riesgo. Finalmente, se realizará una comparación entre los elementos implicados en el ocio de riesgo y los implicados en el ocio protector, con el fin de obtener un mayor interés hacia el último.

4.3. CONCEPTOS CLAVE

- ✓ **Ocio de riesgo:** aquellas actividades que se realizan en el tiempo libre del que dispone la persona y que pueden afectar negativamente al desarrollo óptimo de la misma.
- ✓ **Ocio protector:** actividades que la persona realiza durante su tiempo libre y que no afectan negativamente al desarrollo óptimo de la persona, sólo lo fomentan.
- ✓ **Ocio espectáculo:** Todo el ocio relacionado con los espectáculos, entre los que podemos distinguir los culturales (teatro, zarzuela, ópera, cine, danza, música instrumental) y los deportivos.
- ✓ **Ocio deportivo:** se refiere a la práctica de algún deporte en forma no profesional.
- ✓ **Ocio alternativo:** Se llama así a los programas que proporcionan actividades libres del consumo de sustancias tóxicas o psicoactivas, bajo la idea de ofrecer actividades saludables y constructivas que satisfagan las necesidades habitualmente satisfechas por éstas sustancias, así como buscar la incompatibilidad con el referido consumo. Los programas de alternativas de ocio saludable se suelen incluir dentro del marco de la

prevención comunitaria. El ocio alternativo tiene dos vertientes, una que se refiere al ocio alternativo nocturno, que en la mayoría de los casos va dirigido a jóvenes desde los ayuntamientos o los gobiernos provinciales, para proporcionar una alternativa más sana a sus salidas nocturnas. Mientras que una nueva rama del ocio alternativo, se refiere a un tipo de ocio no convencional, no deportivo, y no de espectáculo, en la que el participante es actor principal de su ocio. Este tipo de ocio también se conoce como ocio experiencial.

4.4. ACTIVIDADES

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria

Actividad 2. Analizando mi ocio protector

Actividad 3. Consecuencias de mi ocio protector

Actividad 4. El protector...

Actividad 5. Comparando....

Actividad 6. Gestionando el riesgo

Actividad 7. Reemplazando el riesgo

Actividad 8. Actividad complementaria

4.5. MATERIAL

Pizarra y tizas

Película “Diarios de la Calle” u otra de contenido aplicable a los conceptos que se trabajen en la sesión

Hoja 2.3.1. Analizando mis actividades de ocio protector

Hoja 2.3.2. Analizando las consecuencias de mi ocio protector

Hoja 2.3.3. Comparando mi ocio de riesgo y mi ocio protector

Hoja 2.3.4. Gestión del riesgo

Hoja 2.3.5. Fin de semana de ocio protector

Hoja 2.3.6. Película “Diarios de la Calle”

4.6. DESARROLLO DE LA SESIÓN

4.6.1. Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria

Se revisan los contenidos trabajados y se hace especial hincapié en las consecuencias que nuestros perfiles de ocio llevan inherentes.

4.6.2. Actividad 2: Analizando mi ocio protector

Seguidamente, para profundizar en las conductas de ocio protector de los participantes, se procede a analizar tanto los elementos previos a la realización de las mismas como los pensamientos y emociones presentes en el momento de dicha realización, tal y como se hizo con las actividades de ocio de riesgo en la sesión previa. Para ello, el monitor les entrega la Hoja 2.3.1. “*Analizando mis actividades de ocio protector*” y les explica lo siguiente: “*ahora lo que vamos a hacer es analizar vuestras conductas de ocio protector, vamos a ver qué es lo que ocurría, pensabais o sentíais antes de realizarlas y mientras que las realizabais. Estos son los elementos que tenéis que completar en el cuadro con las 6 actividades que incluisteis en vuestro perfil de ocio protector en la primera sesión de este módulo (Hoja 2.1.2. “Mis perfiles de ocio de riesgo y de ocio protector”)*”.

Hoja 2.3.1. Analizando mis actividades de ocio protector

Instrucciones: analiza las actividades de tu perfil de ocio protector indicando lo que ocurría antes de hacerlas y lo que pensabas y sentías al realizarlas

ACTIVIDAD DE OCIO PROTECTOR	SITUACIÓN (¿Qué pasaba, qué sentías, qué pensabas?)	PENSAMIENTOS DURANTE LA ACTIVIDAD	EMOCIONES DURANTE LA ACTIVIDAD
-----------------------------------	---	---	--------------------------------------

Una vez lo hayan completado, se exponen los casos uno a uno y se comenta sobre las motivaciones previas, los pensamientos y emociones que se suelen asociar con el ocio protector, etc

4.6.3. Actividad 3: Consecuencias de mi ocio protector

Para completar el análisis de las actividades protectoras, se pretende que los participantes valoren las consecuencias de las mismas a diversos niveles. Para ello, el monitor les entrega la Hoja 2.3.2. “*Analizando las consecuencias de mi ocio protector*” y les explica que ahora, con esas mismas actividades que han analizado en la actividad anterior, van a valorar las consecuencias que esas actividades tuvieron o que podrían tener (en el caso de que una de esas actividades no se haya realizado).

Hoja 2.3.2. Analizando las consecuencias de mi ocio protector

Instrucciones: analiza las consecuencias que han tenido o que pueden tener las actividades de tu perfil de ocio protector

ACTIVIDAD DE OCIO PROTECTOR	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO
	- Para mí:	- Para mí:
	- Para los demás:	- Para los demás:
	- Para mí:	- Para mí:
	- Para los demás:	- Para los demás:
	- Para mí:	- Para mí:
	- Para los demás:	- Para los demás:
	- Para mí:	- Para los demás:
	- Para los demás:	- Para los demás:
	- Para mí:	- Para los demás:
	- Para los demás:	- Para los demás:
	- Para mí:	- Para los demás:
	- Para los demás:	- Para los demás:

Una vez que lo hayan completado, se analizan una a una las consecuencias establecidas por los participantes y se debate al respecto.

Actividad 4: El protector...

El monitor explica que se va a comenzar una nueva sesión de este módulo, llamada ocio protector. Se les empieza hablando del ocio protector de la siguiente manera: *“en la sesión anterior analizasteis el ocio de riesgo. En esta ocasión nos vamos a centrar en el ocio protector y en sus consecuencias. El ocio protector consiste en una serie de actividades de ocio que previenen la realización de otras actividades que están asociadas con el comportamiento antisocial. Por ejemplo, realizar deporte, ir al cine, etc.... ¿lo habéis entendido?, pues, ahora, decidme alguna actividad más de este tipo que se os ocurra, o que hayáis realizado...”*.

Posteriormente se les puede preguntar acerca de los motivos por los que creen que las actividades propuestas serían un ejemplo de ocio protector. Se les anima a que intercambien ideas acerca de este tema y seguidamente, se les pide que en la anterior Hoja 2.2.2. cumplimenten la columna denominada *Alternativa*, donde deben pensar en otros contextos a los expuestos en la columna *Escenario* que les faciliten posibles alternativas válidas que les dificultase la realización de conductas transgresoras, además, una vez realizado, se debate con ellos la disposición y viabilidad de los nuevos entornos o ambientes que hayan señalado.

Hoja 2.2.2. Alternativas a mis escenarios de Riesgo.

ESCENARIO	ALTERNATIVA

4.6.4. Actividad 5: Comparando...

Para obtener un mayor interés de los participantes hacia la realización de actividades de ocio protector, en esta actividad se pretende comparar los elementos asociados a cada uno de los tipos de ocio. En primer lugar, tal y como se hizo en la sesión previa, los participantes unificarán toda la información trabajada en la sesión de hoy rellenando el esquema recogido en la Hoja 2.3.3. *“Resumiendo el análisis sobre mi ocio protector”*.

Hoja 2.3.3. Resumiendo el análisis sobre mi ocio protector

<p>Instrucciones: integra todo lo que has analizado sobre tu ocio protector contestando a las siguientes preguntas</p>
<p>- Antes de realizar una actividad de ocio protector suelo pensar, sentir u ocurrir cosas como:</p>

- Los pensamientos que suelo tener mientras realizo esa actividad son del tipo:		
- Las emociones que suelo sentir durante la actividad son del tipo:		
- Las consecuencias que suelen tener mis actividades de ocio protector suelen ser:		
- Elige una actividad de ocio protector y rellena el siguiente esquema. Actividad: Situación (antes de realizar la actividad):		
PENSAMIENTOS	EMOCIONES	CONSECUENCIAS

Finalmente, se debate sobre lo expuesto por los participantes, enfatizándose las siguientes ideas:

- Que los pensamientos que se asocian con dichas actividades suelen ser positivos.
- Que las emociones asociadas suelen ser positivas (alegría, placer, etc.).
- Que las consecuencias que derivan de las mismas, tanto a corto como a largo plazo, suelen ser positivas, así como también para uno mismo y para los demás.

A continuación, para establecer una comparación entre ambos tipos de ocio, el monitor les entrega la Hoja 2.3.4. “*Comparando mi ocio de riesgo y mi ocio protector*” y les pide que rellenen el cuadro con los elementos correspondientes a cada una de las actividades de ocio que se recogen. Entre todos eligen una actividad de riesgo y una protectora, intentando que se trate de actividades similares. Después, deberán contestar a las preguntas del final.

Hoja 2.3.4. Comparando mi ocio de riesgo y mi ocio protector

Instrucciones: describe los elementos que se indican para la actividad de ocio de riesgo y ocio protector elegidas. Luego, contesta a las preguntas que siguen a continuación

OCIO DE RIESGO

ELEMENTOS

OCIO PROTECTOR

Actividad
Pensamientos
Emociones
Consecuencias

- ¿Qué diferencias hay entre los pensamientos asociados a un ocio de riesgo y a un ocio protector?
- ¿Y en las emociones?
- ¿Y en las consecuencias?
- Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre ocio de riesgo y protector?

Una vez completada la hoja, se exponen todos los casos y se van apuntando los resultados en la pizarra en un cuadro similar. Se contesta a todas las preguntas y se debate al respecto, teniéndose que trabajar las siguientes ideas:

- a) Los pensamientos del ocio protector suelen ser positivos, mientras que los del ocio de riesgo, aunque puedan ser positivos, sobre todo implican la justificación y minimización del riesgo, etc.
- b) Las emociones suelen ser similares, incluso, pueden ser las mismas.
- c) En las consecuencias es donde se aprecian las mayores diferencias.

Finalmente, el monitor planteará el siguiente debate: si mi objetivo es, por ejemplo, divertirme y con una actividad de riesgo estoy pensando de forma distorsionada y voy a tener unas consecuencias negativas, ¿por qué no me divierto con una actividad saludable, que conlleva las mismas emociones y mejores consecuencias?

4.6.5. Actividad 6: Gestionando el riesgo

En esta actividad el monitor comienza realizando la siguiente reflexión a los participantes: *“La gestión del riesgo es una capacidad natural que tienen las personas, por ejemplo: la seguridad en uno mismo, la asertividad, la reflexión en la toma de decisiones, así como tener en cuenta las consecuencias de las mismas. Por lo tanto, es evidente que es preciso desarrollar alternativas que sustituyan o hagan innecesarias las conductas generadoras de riesgo”*. Posteriormente, se facilita la Hoja 2.3.4. Gestión del riesgo.

Hoja 2.3.4. Gestión del riesgo.

CAMBIOS QUE DEBERÍA REALIZAR.....
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.6.6. Actividad 7: Reemplazando el riesgo

Para que los participantes vayan preparándose para la planificación de actividades de ocio saludable, se les entrega la Hoja 2.3.5. “*Fin de semana de ocio protector*” para que registren las actividades de riesgo que podrían realizar en un permiso de fin de semana, pudiendo incluir actividades de salidas programadas o por el contrario, imaginando la planificación que podrían llevar a cabo cuando el régimen o su situación en el cumplimiento de la medida judicial se lo permita. A continuación, las sustituirán las actividades de riesgo por otras actividades protectoras con las que consigan los mismos objetivos y las pondrán en práctica siempre que sea posible, indicando las dificultades encontradas y los cambios producidos (en pensamientos, emociones, consecuencias, en el objetivo, en el comportamiento de los demás).

Hoja 2.3.5. Fin de semana de ocio protector

Instrucciones: planifica un fin de semana de ocio protector. Indica las actividades de riesgo que podrías realizar y sustitúyelas por actividades de ocio protector con las que puedas conseguir los mismos objetivos. Prácticalas e indica las dificultades que has tenido para realizarlas y los cambios producidos

**ACTIVIDAD
DE RIESGO**

**ACTIVIDAD
PROTECTORA**

DIFICULTADES

CAMBIO

4.6.7. Actividad 8: Actividad Complementaria

Se intentará que mediante el visionado de esta película, los participantes interioricen los contenidos trabajados, así como reforzar su motivación hacia el cambio.

Hoja 2.3.6. Película “DIARIOS DE LA CALLE”

Instrucciones: se visiona la película y posteriormente se trabaja la sesión con el material aportado a continuación.



SINOPSIS: A sus 23 años, todavía con aspecto de estudiante, la idealista Erin Gruwell parece dispuesta a comerse el mundo el día que entra en el high school Wilson para estrenarse como profesora. Pero su clase lo único que espera es sobrevivir un día más; son un grupo multiétnico de adolescentes de los más variados orígenes, afroamericanos, latinos, asiáticos, delincuentes juveniles, pandilleros y estudiantes de barrios pobres. Lo único que parecen tener en común es el odio que se profesan entre sí y la intuición de que el sistema educativo se está limitando a almacenarlos en cualquier lugar antes de que tengan edad para desaparecer. Erin se empeña día tras día en ganarse a sus estudiantes pese a su obstinado rechazo a toda forma de participación en las clases. Pero la realidad del ghetto no tarda en imponerse. Una pandillera latina de su clase presencia un tiroteo originado por cuestiones raciales; otro día la profesora intercepta una desagradable caricatura racista. Erin aprovecha esos incidentes y los convierte en dinámicos elementos de aprendizaje. Así se produce una transformación en el aula: los alumnos empiezan a escuchar y Erin se libera de sus idealistas prejuicios y acepta oír las historias

que le cuentan los chicos sobre las malas calles en las que deben sobrevivir a una guerra no declarada. Erin empieza a conectar con los miembros de su clase..



Una vez que hemos visionado la película, se insta a los participantes a que reflexionen sobre la diversidad social y cultural que existen en la sociedad, analizando sus diferencias y similitudes. Para ello, se tratará la influencia de la cultura, religión y formas de vivir en el empleo del ocio y tiempo libre. Para ello se rellenará el siguiente cuadro donde se detallarán las actividades de ocio de riesgo y protector que ellos creen que realizan o atribuyen a las diferentes nacionalidades:

DIFERENCIAS CULTURALES EN EL OCIO		
	OCIO DE RIESGO	OCIO PROTECTOR
Marroquíes		
Espanoles		
Espanoles de etnia gitana		
Latinos		
Rumanos		
Ecuatorianos		
Dominicanos		
Uruguayos		
Hondureños		
Búlgaros		
Otros....		

A continuación se debate el monitor debate sobre el tema con los participantes.



A través de las protagonizadas por el personaje de Marcus, se intenta que los participantes tomen conciencia de **la necesidad de ayuda mutua para crecer e identificar a aquellas personas relevantes que nos pueden ayudar en los momentos de cambio.**

Frente a la prepotencia de pertenecer a una banda o a un grupo de presión, aparece, en el paso siguiente a la escena 6, la capacidad de Marcus de pedir ayuda:

Marcus: *¡Mamá, mamá!*

Madre de Marcus: *¿Qué estás haciendo tú aquí?*

Marcus: *Quiero volver a casa. No quiero seguir en la calle. Lo siento. Quiero cambiar y no puedo hacerlo solo. Te necesito mamá, te necesito.*

Marcus, deja de considerarse una persona autosuficiente para confesarse a sí mismo que necesita el apoyo de las personas cercanas si quiere mejorar su vida.

A continuación proponemos un cambio donde se pueden especificar los cambios que Marcus ha realizado en su vida:

CAMBIOS QUE SE PRODUCEN EN MARCUS	
ANTES	DESPUÉS
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Creer en la ideología de una banda urbana y pertenecer a ella. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Concienciarse de las consecuencias negativas que le acarrea pertenecer a la banda, como por ejemplo alejarse de la sociedad.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enfrentamientos y conflictos continuados con sus compañeros. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comienza a dejarse ayudar por sus compañeros, considerándolos como apoyo para consolidar los cambios que ha realizado en su vida.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ No muestra interés ni motivación por los estudios, ignorando lo que le pueden aportar en un futuro. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contempla la importancia de estudiar y formarse como proyecto de futuro.

▪ Sentimientos de inseguridad y baja autoestima.	▪ Aumenta su autoestima y su autoconcepto, descubriendo sus habilidades y capacidades personales.
▪ Los integrantes de su banda es su único grupo de relación.	▪ Entabla amistad y compañerismo con gente diferente a él.
▪ Alejado de su familia.	▪ Intenta recuperar la relación con su madre.

La profesora Erin decide comenzar el nuevo curso lanzando un reto a sus alumnos:
Cada uno hará un brindis por el cambio. Y eso significa que a partir de este momento, todas las voces que os han dicho que no a algo, quedan silenciadas, todas las razones que dicen que las cosas nunca cambiarán, desaparecen. Y a partir de este momento las personas que eraís, esas personas ya no cuentan. Ahora os toca a vosotros.

Con este pequeño discurso se propone generar interés y motivación por un estilo de vida prosocial, así como impulsar al grupo a exteriorizar su necesidad y su determinación por generar un cambio. Por lo que se plantea a los participantes que al igual que los personajes de la película, piensen en los cambios que deberían realizar para obtener un estilo de vida prosocial, en el que se evitaran las consecuencias negativas que acarrea la realización de conductas antisociales, haciendo especial hincapié en las derivadas del ocio y tiempo libre.

CAMBIOS QUE SE PRODUCEN EN.....
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.6.7. Síntesis de la sesión

Para finalizar la sesión, el terapeuta/monitor resaltará los aspectos más relevantes que se han tratado, relacionándolos con los objetivos propuestos para así poder dar a los menores un sentido de integración de todos los contenidos abordados. El terapeuta/monitor debe dar una puntuación a cada menor de “0” a “10”, considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado, y b) asimilación e interiorización de los conceptos tratados.

MÓDULO III.

PLANIFICACIÓN DE UN OCIO SALUDABLE

1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

1.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN

Las teorías del control social, basándose en la constatación de que cuanto menores son los lazos emocionales con personas socialmente integradas, mayor es la implicación de un sujeto en actividades delictivas, postulan que existe una serie de contextos principales en los que los jóvenes se unen a la sociedad: la familia, la escuela, el grupo de amigos y las pautas de acción convencionales, tales como las actividades recreativas o deportivas (Redondo, 2008). Tal y como expone la clásica Teoría de los Vínculos Sociales (Hirschi, 1969), el enraizamiento a estos ámbitos se produce mediante cuatro mecanismos complementarios: a) el apego (lazos emocionales de admiración e identificación con otras personas), b) el compromiso (grado de asunción de los objetivos sociales), c) la participación (amplitud de la implicación del individuo en actividades sociales positivas: escolares, familiares, laborales, etc.), y d) las creencias (conjunto de convicciones favorables a los valores establecidos y contrarias al delito).

Dentro de esta perspectiva, la etiología de la conducta antisocial reside, precisamente, en la ruptura de los anteriores mecanismos de vinculación en uno o más de los contextos sociales aludidos, no modificándose estas conductas hasta no ser reemplazadas por otras. Por lo que cualquier programa debe proporcionar las herramientas necesarias para que los menores infractores sean competentes en satisfacer sus necesidades básicas de modo prosocial; sus viejos hábitos (integrarse en una banda y delinquir) sólo desaparecerán si, en el momento evolutivo en que se hallan, pueden dar respuesta a sus necesidades de pertenencia y competencia de modo que les resulte más satisfactorio.

Y esta es una de las razones de por qué es tan difícil cambiar esas conductas: la mayoría de los adolescentes que comparten conductas antisociales y delictivas con su grupo de iguales lo hacen debido a que perciben estas opciones como su mejor salida a la hora de sentirse competentes y vinculados. Cualquier alternativa debe considerar estas necesidades. Tampoco debemos infravalorar la fuerza de esos vínculos. Los menores/jóvenes desafiantes

son comprensiblemente escépticos sobre cualquier nuevo cambio hacia un estilo de vida prosocial.

La manera en la que los adolescentes planifican y administran su tiempo libre es de suma importancia no sólo para la realización de actividades que deben llevar a cabo, sino también para la adquisición de un hábito que se consolidará y mantendrá durante la vida adulta. Por este motivo, se considera un factor de protección la adecuada planificación del tiempo de ocio, unida ésta a la satisfacción percibida con la distribución del tiempo, así como con el empleo del tiempo libre en actividades saludables, lejos del ocio relacionado con actividades de riesgo como el consumo de alcohol y otras drogas, el vandalismo, etc.

Hasta el momento hemos pretendido que los participantes sean conscientes de a qué dedican su tiempo libre y qué elementos implica las actividades de ocio que realizan. En consecuencia, en este módulo lo que se persigue es que los participantes aprendan a distribuir y planificar su tiempo libre de una forma adecuada, desarrollándose y consolidándose un hábito de ocio protector en los diversos ámbitos de su vida y con las personas que constituyen un punto de referencia en sus vidas.

1.2. OBJETIVOS GENERALES

1. Fomentar el ocio no relacionado con actividades de riesgo.
2. Aprender estrategias de planificación del tiempo para afrontar el día a día.
3. Consolidar, generalizar y prevenir recaídas.

2. SESIÓN 1: UNA SEMANA DE OCIO SALUDABLE

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conseguir que los participantes se interesen por actividades de ocio saludables, que no realizan pero les gustaría realizar.
2. Evitar la realización de actividades relacionadas con el ocio de riesgo, fomentando actividades saludables y atractivas.
3. Identificar actividades de ocio saludable por parte de los participantes.
4. Tomar conciencia de una buena planificación del tiempo, de su ocio y tiempo libre.
5. Desarrollar las habilidades y recursos necesarios para llevar a cabo un ocio atractivo y compatible con la norma social, alejado de espacios que se fomentan o facilitan actividades de riesgo.

2.2. PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

Para conseguir los objetivos planteados, utilizaremos tareas de papel y lápiz para que los participantes obtengan una imagen visual de todo el proceso de planificación del tiempo libre, facilitándose así el descubrimiento y toma de conciencia de la distribución que realizan de su tiempo y de la que podrían realizar.

Además de un caso ficticio, se realiza un registro de las actividades realizadas durante el fin de semana, señalándose los objetivos que se pretenden, clasificándolos en función de su importancia y estableciendo el tiempo que requiere cada uno. Todo ello referido a la realización de actividades de ocio saludables.

2.3. CONCEPTOS CLAVE

- ✓ **Ocio saludable:** conjunto de actividades que la persona realiza durante su tiempo libre y que no afectan negativamente al desarrollo óptimo de la persona, sólo lo fomentan.
- ✓ **Planificación del tiempo libre:** proyecto de la distribución del tiempo que se desea ejecutar.

2.4. ACTIVIDADES

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria

Actividad 2. Asertividad en el ocio

Actividad 3. Aprendiendo a planificar

Actividad 4. Ayudamos a Pedro y Joaquín a planificarse

Actividad 5. Ocio y reinserción social

Actividad 6. Planificando una semana de ocio saludable

Actividad 7. Actividad complementaria

2.5. MATERIAL

Pizarra y tizas

Película sugerida: “Coach Carter”

Hoja 3.1.1. ¿Qué esperan de nosotros?

Hoja 3.1.2. Aprendiendo a planificar mi tiempo

Hoja 3.1.3. Ayudamos a Pedro a planificarse

Hoja 3.1.4. Aconsejamos a Joaquín para que se decida

Hoja 3.1.5. Analizando el papel del ocio en mi reinserción.

Hoja 3.1.6. Mi semana de ocio saludable

Hoja 3.1.7. Película Coach Carter

2.6. DESARROLLO DE LA SESIÓN

2.6.1. Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria

Se revisan los conceptos trabajados en la última sesión, prestando especial atención a las actividades saludables que se propongan como alternativas a las de riesgo, así como a las dificultades encontradas en su realización y los posibles cambios prosociales ocurridos.

2.6.2. Actividad 2: Asertividad en el ocio

En esta actividad se persigue que los participantes hagan conscientes sus creencias subjetivas sobre cómo debe ser el ocio de los adolescentes. Para ello, el monitor comienza la actividad explicando: *“Las creencias normativas (“norma subjetiva”) están determinadas por dos componentes: por un lado la percepción de que otras personas importantes para nosotros aprueben, deseen o esperen ciertas conductas que realizamos. Y por otro lado, la motivación que tenemos para acomodarnos a estas ciertas expectativas o deseos de esas personas. Así, si el adolescente percibe que sus amigos (u otros grupos de referencia a quienes desea agradar) esperan por ejemplo que consuma, su decisión tenderá a inclinarse hacia el consumo. En relación con esto, la creencia (acertada o equivocada) de que el consumo está ampliamente extendido y aceptado en sus grupos de referencia, ejercerá influencia sobre la intención de consumir, lo que hará que se sobreestime la prevalencia del consumo inducirá al uso de sustancias”*. Se les proporciona la **Hoja 3.1.1.** donde se evalúa lo que los demás esperan de ellos, tanto a nivel de ocio de riesgo como las actividades que hacen alusión al ocio protector. En algunos individuos, la decisión se ve más influida por costes, beneficios y actitudes; en otros, la decisión puede estar más afectada por las expectativas de los demás, por tanto, a la hora de tomar su decisión, la persona no necesariamente concede igual “peso” a estos dos componentes.

Hoja 3.1.1. ¿Qué esperan de nosotros?

Instrucciones: <i>se especifica qué esperan los demás de nosotros tanto en actividades que señalamos de ocio de riesgo como de ocio protector. Una vez rellenado la columna de actividades en las casillas de la izquierda se ordena otorgándoles valores de 1 a 10, donde el 10 lo ocupará aquello que nos afecta más en nuestras decisiones a la hora de realizar unas conductas u otras.</i>			
OCIO DE RIESGO		OCIO PROTECTOR	

Por último se debate sobre la realidad o no de las creencias expuestas, así como los costes y beneficios que aportan, así como qué tipo de decisiones de las que tomamos en nuestro tiempo de ocio podrían estar más afectadas, intentando dotar a los participantes de

estrategias asertivas que les permitan enfrentarse adaptativamente a las expectativas antisociales o antinormativas que las personas de su entorno pudieran tener en ellos.

2.6.3. Actividad 3: Aprendiendo a planificar

Con el objetivo de que los participantes aprendan unas pautas básicas a la hora de planificar su tiempo, el monitor explica lo siguiente: *“hasta el momento hemos visto lo que es el ocio, qué es lo que solemos hacer en nuestro tiempo libre y cómo pueden ser esas actividades de saludables o perjudiciales. Ahora lo que vamos a hacer es intentar aprender cómo podemos distribuir y organizar nuestro tiempo libre de una forma adecuada.*

El primer paso fundamental para hacer una buena planificación del tiempo es hacer una lista con las cosas que se tienen que hacer, que se deben hacer y que se desean hacer, clasificándolas después en actividades urgentes, imprescindibles, importantes, deseadas y otras. A continuación, estableceríamos el tiempo aproximado que nos puede llevar cada actividad. Debéis tener en cuenta que:

- *Las actividades urgentes deben hacerse lo antes posible.*
- *Las actividades imprescindibles deben ubicarse en función del tiempo y el esfuerzo que requieran, no dejándolas nunca para el final.*
- *A lo largo del día es obligatorio hacer algo que se desee.*
- *Siempre hay que dejar media hora para posibles imprevistos.*
- *Si hay varias actividades que se relacionan, ponerlas juntas facilita que ganemos tiempo (por ejemplo, si tengo que hacer la cama, arreglar mi habitación y sacar al perro, lo haré en este orden).*
- *Reglas útiles para ganar tiempo:*
 1. *Aprender a decir NO a los objetivos no prioritarios.*
 2. *Ignorar los objetivos secundarios de la lista hasta completar los objetivos prioritarios.*
 3. *Incluir en el listado el tiempo para imprevistos.*
 4. *Destinar distintos momentos del día a descansar.*
 5. *Delegar en otro las tareas no prioritarias.*
 6. *Evitar lo que pueda distraer el realizar las tareas prioritarias.*
 7. *Olvidar los perfeccionismos.*
 8. *Aprender a hacer dos cosas a la vez (tareas automáticas)”.*

De forma resumida, el monitor va apuntando en la pizarra todas estas ideas para que los participantes dispongan de ellas a la hora de hacer las actividades. Seguidamente, el monitor les entrega la Hoja 3.1.2. “Aprendiendo a planificar mi tiempo de ocio” y les pide que rellenen la tabla con las actividades para el próximo fin de semana, recordando todos los aspectos que se acaban de comentar y que, finalmente, establezcan un horario aproximado para el próximo fin de semana. En el caso de enfermedad o menores en centro por cumplimiento de medidas, se puede hacer con respecto al último fin de semana que se tuvo de forma normalizada.

Hoja 3.1.2. Aprendiendo a planificar mi tiempo de ocio

Instrucciones: rellena este planning con las actividades que vas a realizar el próximo fin de semana

COSAS QUE TENGO, DEBO Y DESEO HACER	TIPO DE ACTIVIDAD (Imprescindible, urgente, importante, deseada, etc.)	TIEMPO	HORARIO
---	--	--------	---------

Una vez se haya terminado, se exponen todos los casos y se debate al respecto. Se pide a los participantes que comparen el resultado obtenido con otros fines de semana previos que hicieran cosas parecidas, opinando sobre la organización y planificación de ambos.

Actividad 4: Ayudamos a Pedro y a Joaquín a planificarse

Con esta actividad se pretende que los participantes practiquen las pautas adquiridas con dos casos ficticios, con el cual también se irá fomentando el establecimiento de un hábito de ocio protector. El monitor les cuenta lo siguiente: “bueno, ya hemos visto cómo podemos hacer para planificar de forma adecuada nuestro tiempo. Si unimos esto a la realización de actividades de ocio saludables, obtendremos un afrontamiento de nuestro día a día mucho más óptimo. Ahora os voy a leer un texto de un chico que le cuesta mucho organizarse y decidirse y que quiere tener un fin de semana inolvidable, pero no sabe cómo hacerlo. El texto es el siguiente: Pedro es un desastre de mucho cuidado en cuanto a organización se refiere. Es de los que siempre dejan todo para el final: estudiar, organizar la habitación, ver

a la abuela a última hora,... Este fin de semana han invitado a Pedro a la sierra, a una casa que tiene un amigo de su amigo Juan. A Pedro le encanta la sierra, el aire libre, las alturas, y encima iría con su mejor amigo. Cuando se lo propusieron, Pedro aceptó encantado pero según iba yendo a casa se dio cuenta de que quizá sus padres no le dejaran.

Al llegar a casa, se lo plantea a su padre y le dice que la semana que viene tiene un examen y que no quiere que suspenda. “Como siempre lo dejas para última hora, el fin de semana te tocará estudiar, a no ser que para entonces ya te lo sepas”. Además, Pedro tenía que recoger su habitación desde hacía ya tres días, y aún no ha ido a comprar la chaqueta para el regalo de su madre.

Pedro cada vez está más desanimado con lo que le ha dicho su padre. Por las tardes tiene una hora de inglés, luego queda con Juan un rato para hablar, que al final son más de dos horas. Además, no puede perderse esa serie que echan en la tele mientras merienda (aunque primero ve la serie y luego merienda, claro). Enseguida es ya la hora de cenar y a la cama.

Por otro lado, se acordó de que los amigos de Juan van a ir a lo que van a ir: a beber alcohol, fumar porros y terminar por ahí en medio del monte rompiendo árboles y demás cosas. A Pedro le parece una pena, pues cerca hay un sitio en el que se puede montar a caballo y muchas rutas de senderismo.

Hoy es martes, y se irían el viernes por la tarde-noche”.

Después de leer el texto, el monitor entrega a los participantes la Hoja 3.1.2. “Ayudamos a Pedro a planificarse” y les pide que ayuden a Pedro a planificar el resto de la semana para que se pueda ir a la sierra, además de sustituir las actividades de riesgo que pueda realizar allí por otras que sean saludables.

Hoja 3.1.3. Ayudamos a Pedro a planificarse

Instrucciones: piensa y planifica el resto de la semana para que Pedro pueda ir a la sierra. Luego, identifica las actividades de riesgo que puede hacer Pedro allí y sustitúyelas por otras más saludables

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ACTIVIDADES DE RIESGO

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS

Una vez se haya terminado, se corrigen los horarios y se debate sobre las alternativas de ocio saludable propuestas. Posteriormente, se analizará el caso de Joaquín, el cual está relacionado con infracciones de la Ley y el cumplimiento de una medida judicial.

El monitor explica: *“ahora vamos a analizar otro caso que trata de la organización de un menor en el cumplimiento de una medida de Libertad Vigilada”*. Y se lee el siguiente caso: *Joaquín tiene 17 años, pertenece a una familia de clase media donde aunque no tienen grandes problemas económicos, tampoco les sobra nada. Cuando Joaquín contaba con 10 años, empezó a robar pequeñas cosas con sus amigos, refiere hacerlo por diversión, aunque más tarde, con 12-13 años lo vendía para sacar un poco de dinero para sus caprichos. Poco a poco fueron aumentando los robos, aunque la cuantía nunca era muy alta. Pero a medida que iba pasando el tiempo Joaquín asumía más riesgos, así que mediante la influencia de algunos de sus amigos que eran mayores que él, comenzó a vender sustancias psicoactivas a otros menores. Él se sentía muy bien, ya que podía permitirse lujos que no hubiera podido de otra manera, además no dependía de las normas de sus progenitores, ya que podía hacer lo que quisiera. Pero hace 3 meses lo pilló la policía vendiendo una pequeña cantidad de sustancias ilegales, ahora tiene que cumplir una medida judicial de Libertad Vigilada de 6 meses de duración. Para su cumplimiento, Joaquín debe acudir todas las tardes a un Centro de Día y participar en el Programa Educativo y Terapéutico para Menores Infractores desde las 17:00 hasta las 20:30 horas, además por las mañanas, de lunes a viernes a las 9:00 horas deberá acudir a una Escuela-Taller de Fabricación por Mecanizado, aunque hasta ahora ha acudido asiduamente ya se encuentra motivado y le gusta lo que está aprendiendo en éstos recursos. Pero Joaquín aunque se siente arrepentido, sobretudo por el disgusto que ha dado a su familia, no ha cambiado sus amigos, éstos han alquilado durante dos meses de verano un local para pasar allí todas las tardes, y le han propuesto que “vaya, ya que no pasa nada si incumple en asistencia a las actividades” . Ahora Joaquín está confundido, ya que quiere ir allí y estar con sus amigos y otras chicas, pero sabe que habrá alcohol y otras drogas, algunos colegas que le propondrán seguir trapicheando, y además siempre hay peleas cuando otros menores intentan propasarse con ellos. Como sus amigos se encuentran ociosos sólo acuden al local a partir de las 17:30- 18:00 horas, período en el cual él debe estar en el Centro de Día. Y aunque podría ir la salida, le apetece pasar disfrutar de sus amigos durante el verano, además sabe que se lo pasarán muy bien”*. Posteriormente, el monitor entrega a los participantes la Hoja 3.1.3. *“Ayudamos a Joaquín a planificarse”* y les pide que

ayuden a Joaquín a tomar decisiones y planificar su semana sin dejar de cumplir con sus obligaciones y evitando cometer nuevas infracciones. Para lo cual, deberá además de emplear estrategias asertivas y tener muy en cuenta las consecuencias negativas que le pudiesen acarrear, sustituir las actividades de riesgo que pueda realizar allí por otras que sean saludables.

Hoja 3.1.4. Aconsejamos a Joaquín para que decida

Instrucciones: piensa y planifica el resto de la semana para que Joaquín no incumpla con las actividades del Programa de Intervención inserto en el cumplimiento de su Libertad Vigilada. Posteriormente, identifica las actividades de riesgo que puede hacer Pedro allí y sustitúyelas por otras más saludables

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

ACTIVIDADES DE RIESGO

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS

2.6.5. Actividad 5: Ocio y reinserción social

Para favorecer una mayor consolidación del hábito de ocio protector, se pide a los participantes que empiecen a poner en práctica los conceptos trabajados. Para ello, los participantes que se encuentren cumpliendo una medida judicial, y el tipo de régimen o su evolución en la consecución de los objetivos planteados en su Programa de Intervención de Ejecución de medida judicial lo permita (tanto en esta parte del programa como en cualquier otra), realizarán una salida programada de carácter recreativo, con acompañamiento educativo, donde se desarrollará un ocio de carácter protector como ir al cine, montar en bici, visitar un museo.... También podrá realizarse esta actividad con otra salida programada que realicen durante su internamiento. Posteriormente, los participantes deberán analizar de manera funcional su experiencia de ocio, rellenando la Hoja 3.1.5.

Hoja 3.1.5. Analizando el papel del ocio en mi reinserción

Instrucciones: una vez realizada la salida programada, los participantes deberán analizar funcionalmente lo que han sentido y pensado durante el desarrollo de la misma.

ACTIVIDAD	PENSAMIENTO	EMOCIÓN	¿REALIZARÍAS ESTA ACTIVIDAD UNA VEZ PUESTO EN LIBERTAD?	¿POR QUÉ?
			SI NO	
			SI NO	

			SI	NO	
			SI	NO	
			SI	NO	
			SI	NO	
			SI	NO	
			SI	NO	

2.6.6. Actividad 6: Planificando una semana de ocio saludable

Con esta actividad se pretende que los participantes ejerciten y desarrollen el hábito de ocio protector, fomentado un mayor interés por este tipo de actividades saludables. Para ello, el monitor les entrega la Hoja 3.1.4. “*Mi semana de ocio saludable*” y les pide que deben realizar un planning semanal. Si los participantes se encuentran cumpliendo una medida judicial de internamiento, lo harán imaginándose una semana cuando éste acabe o si su régimen y evolución en el programa de salidas lo permite, en un permiso de salida ordinario durante períodos no lectivos. Si por el contrario, la medida judicial se desarrolla en el medio abierto, planificarán desde el día siguiente hasta el día previo a la siguiente sesión, estableciendo un horario aproximado día a día y, sobre todo, recogiendo las actividades de ocio saludables que van a sustituir a las de riesgo que existían previamente.

Hoja 3.1.6. Mi semana de ocio saludable

Instrucciones: realiza tu propio planning semanal de ocio saludable, indicando el horario aproximado en el que vas a realizar las actividades de ocio protector que van a las actividades de riesgo que antes realizabas

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

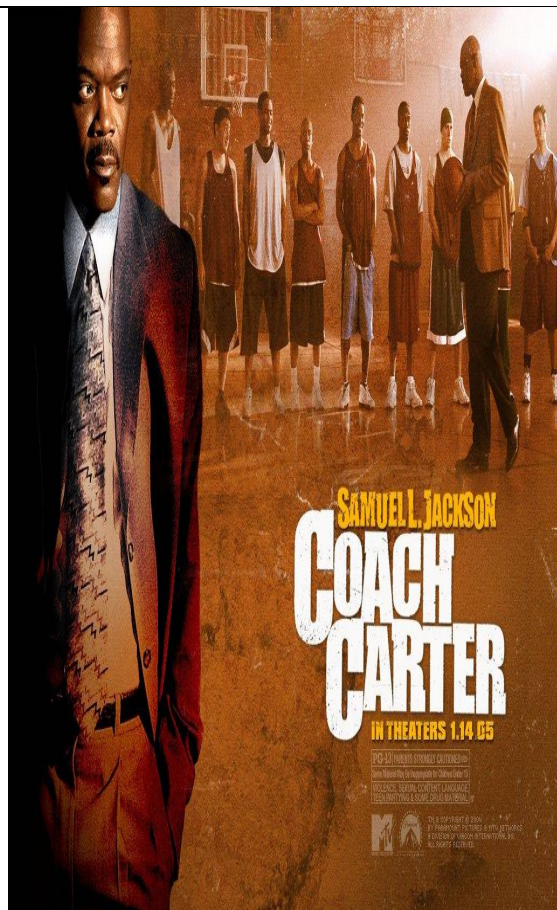
- Otras actividades de ocio saludables que podría incluir son:

2.3.7. Actividad 7: Actividad complementaria

De manera alternativa o adicional, se seguirá intentando reforzar los conceptos e ideas trabajadas mediante medios audiovisuales. Así, se proyectará la película “Coach Carter”.

Hoja 3.1.7. Película “Coach Carter”

Instrucciones: <i>tras el visionado de la película se realizarán las actividades que se exponen a continuación.</i>	
	SINOPSIS: Esta película cuenta la historia de un equipo estudiantil de baloncesto del Instituto Richmond en California que tiene varios problemas de desorden, descontrol y falta de actitud. Esto provoca que solo hayan ganado 4 partidos la temporada pasada. Sin embargo, esta nueva temporada el equipo tiene un nuevo entrenador llamado Carter que va a revolucionar el



equipo y la vida de sus jugadores.

Carter hace firmar a sus jugadores un contrato por el cual se comprometen a ser respetuosos y educados con el entrenador y a sacar buenas notas en clase. Al principio es difícil porque los jugadores buenos del equipo se marchan pero poco a poco el resto se dan cuenta de que con mucho sacrificio y esfuerzo están formando un equipo. Comienzan a ganar partidos y a hacerse famosos pero el entrenador se da cuenta de que sus jugadores no aprueban diversas asignaturas por lo que decide dejar de entrenar, cerrando la pista de baloncesto hasta que saquen buenas notas. Los jugadores acaban por darse cuenta de que el entrenador solo quiere lo mejor para ellos ya que viven en un barrio donde la carrera universitaria puede ser la mejor vía para salir del vandalismo que corroe dicho barrio. Al final todos los jugadores consiguen aprobar todo y vuelven a jugar, pero son derrotados en un partido clasificatorio por solo dos puntos. Pese a todo, sus familias se sienten orgullosas por el gran trabajo que han realizado.

✓ ¿Qué valores crees que transmite la película?

✓ ¿Con qué personaje te has sentido más identificado? ¿Por qué?

✓ Ponte en el lugar de los protagonistas, ¿cómo crees que te hubiese afectado la decisión que toma el entrenador? ¿qué hubieses hecho?

<p>✓ En tu vida, ¿qué lugar ocupa el deporte? ¿y los estudios?</p>																	
<p>✓ ¿Crees que el entrenador tiene razón cuando explica que el 80% de sus alumnos irán a la cárcel y sólo 1 estudiará? ¿Exagera o tiene razón? ¿Por qué?</p>																	
<p>✓ ¿Qué actividades realizan los protagonistas en su ocio que se pudiesen considerar de riesgo? ¿Y protector?</p>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">ACTIVIDADES OCIO DE RIESGO</th> <th style="width: 50%; padding: 5px;">ACTIVIDADES OCIO PROTECTOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td></tr> </tbody> </table>	ACTIVIDADES OCIO DE RIESGO	ACTIVIDADES OCIO PROTECTOR															
ACTIVIDADES OCIO DE RIESGO	ACTIVIDADES OCIO PROTECTOR																
<p>✓ ¿Cómo influye el hecho de realizar actividades de ocio protector, en este caso el deporte, en las vidas de los personajes?</p>																	
<p>✓ ¿Crees que la película refleja situaciones de jóvenes que ocurren en realidad? Pon ejemplos que aparezcan en la película y también en la realidad de los menores/jóvenes.</p>																	

2.6.6. Síntesis de la sesión

Para finalizar la sesión, el terapeuta/monitor resaltará los aspectos más relevantes que se han tratado, relacionándolos con los objetivos propuestos para así poder dar a los menores un sentido de integración de todos los contenidos abordados. El terapeuta/monitor debe dar una puntuación a cada menor de “0” a “10”, considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado, y b) asimilación e interiorización de los conceptos tratados.

3. SESIÓN 2: CONSECUENCIAS POSITIVAS ASOCIADAS AL OCIO PROTECTOR

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Fomentar el interés por actividades de ocio saludables.
2. Tomar conciencia sobre la posibilidad de experimentar emociones positivas mediante la realización de un ocio protector.
3. Conseguir que las actividades saludables comiencen a formar parte de la cotidianidad de los participantes.

3.2. PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

Para conseguir los objetivos planteados, en esta sesión se pretende que los participantes analicen en profundidad las emociones positivas que pueden derivarse de la realización de actividades de ocio saludables.

Para ello, se elaborará una lista amplia de actividades saludables que no sólo nos permitirá elegir aquellas que resulten atractivas para trabajar en la sesión, sino también fomentar el interés hacia un amplio abanico de las mismas. Mediante un caso ficticio, role-playing, actividades concretas, medios audiovisuales, ya que es algo que en los adolescentes ayuda a interiorizar lo que pretendemos transmitir y el planning semanal, los participantes analizarán las sensaciones y emociones experimentadas durante la realización de las actividades, con el fin último de hacerles comprender que este tipo de actividades también pueden resultar divertidas y que, con las mismas, pueden obtener sensaciones muy parecidas a las que obtenían con las actividades de riesgo.

3.3. CONCEPTOS CLAVE

- ✓ **Actividades de ocio protector:** son aquel tipo de actividades de ocio que respetan las normas cívicas que dicta la sociedad.
- ✓ **Actividades de ocio de riesgo:** son un tipo de actividades de ocio asociadas al riesgo, son situaciones límites que en la mayoría de las ocasiones conllevan actos delictivos o peligrosos.
- ✓ **Emociones positivas:** dentro de éstas están incluidas todas aquellas emociones que nos hacen experimentar sensaciones de agrado o placer.

3.4. ACTIVIDADES

Actividad 1. Revisión de los contenidos de la sesión anterior

Actividad 2. Elijo mis actividades de ocio

Actividad 3. Pongamos un ejemplo

Actividad 4. Una historia diferente

Actividad 5. Actividad complementaria

3.5. MATERIAL

Pizarra y tizas

Película sugerida: “Diario de un Rebelde”

Hoja 3.2.1. Analizando mis emociones

Hoja 3.2.2. Practicando el Planning

Hoja 3.2.3. Hoja 3.2.4. Película “Diario de un rebelde”

3.6. DESARROLLO DE LA SESIÓN

3.6.1. Actividad 1: Revisión de los contenidos de la sesión anterior

Se revisa los planning semanales de ocio protector, así como los beneficios que nos puede aportar a nivel personal y social, comprobándose la realización de las actividades propuestas así como comentando las dificultades o aspectos que se consideren relevantes al respecto. Se comenta la idea de que, posteriormente, se trabajará de nuevo con los planning.

3.6.2. Actividad 2: Elijo mis actividades de ocio

Trataremos de enseñar a los participantes la inmensa cantidad de actividades de ocio protectoras que se pueden realizar y con las que se pueden sentir especialmente bien si se involucran en cualquiera de ellas. Para ello, el monitor comenzará explicando lo siguiente: *“como ya hemos visto con las sesiones anteriores, existen multitud de actividades de ocio protector o saludable con las que podemos experimentar diferentes emociones positivas. A continuación, os voy a nombrar diferentes tipos de actividades de ocio de un gran abanico de posibilidades como serían ir al cine con los amigos, jugar a juegos de mesa o a las cartas en equipo, ver una peli en casa, salir a bailar, quedar a tomar un café, jugar a cualquier tipo de deporte (fútbol, baloncesto, correr, nadar...), etc.”.*

El monitor apunta en la pizarra las actividades que nombra, lista que después será completada por los participantes. A continuación, se pedirá la colaboración de los participantes para realizar un role-playing. La situación es la siguiente: *“Juan y Luís van a clase juntos desde hace varios años, al salir el viernes de clase, Juan dice estar tremendamente aburrido y propone a Luís ir al colegio de al lado a amenazar a los niños con pegarles si no les dan todo lo que ellos le pidan, a Juan le parece un plan excepcional mientras que a Luís no le gusta nada su idea, Luís propone ir a jugar un partido de fútbol con el resto de colegas de la clase y trata de convencer a Juan de que su plan no es bueno con diferentes argumentos”*.

Para esto, deben salir dos participantes para representar a Juan y Luís respectivamente, el que haga de Luís, deberá proponer diferentes planes a Juan hasta convencerle, al igual que deberá argumentarle las consecuencias negativas que tendrá su conducta en caso de llevarla a cabo. Si es necesario, deberán salir varios alumnos a representar a Luís. Todas las ideas que aporten se irán añadiendo a la lista de ocio protector para, finalmente, obtener un amplio abanico de actividades que se pueden realizar de forma saludable.

Con esta actividad, se pretende que finalmente, sean los mismos menores los que adviertan de las consecuencias negativas de las actividades de riesgo y que sean ellos mismos quienes propongan las diferentes alternativas asociadas al ocio protector.

3.6.3. Actividad 3: Pongamos un ejemplo

Con esta actividad se pretende que los participantes comiencen a analizar de forma más profunda las emociones que pueden derivarse de la realización de actividades de ocio protector, actuando sobre el entorno lúdico y comunitario de la adolescencia, de manera que se incremente la motivación e interés por las formas de ocio más positivas. Para ello, el monitor les propone que elijan entre todos una actividad saludable que podrían realizar allí mismo, de las que practican en el Ocio grupal Dirigido o en cualquier otra actividad que se desarrolle en el Centro, ya sea por ejemplo la Actividad Deportiva o Ludoteca. Se entrega la Hoja 3.2.1. *“Pongamos un ejemplo”* y se pide a los participantes que contesten a las preguntas reflejadas en la misma.

Hoja 3.2.1. Analizando mis emociones

Instrucciones: contesta a las siguientes preguntas referidas a la actividad de ocio saludable que acabas de practicar

- **Actividad realizada:**

- ¿Qué te ha parecido el juego?

- ¿Cómo te has sentido?

- Especifica las emociones y sensaciones que has sentido mientras realizabas el juego:

- ¿Realmente pensabas que con una actividad como la que hemos hecho podrías sentirte así?

- ¿Crees que sería viable que la practicases en el medio abierto, una vez finalizado el internamiento? _____ ¿Por qué?

Se ponen en común las preguntas y se debate sobre éstas, enfatizándose la idea de la existencia de emociones y sensaciones agradables en actividades saludables. Si bien, con el objetivo de generalizar lo máximo posible los objetivos, se realizará un análisis de las emociones que surgieron mientras realizaban la salida programada. Para ello, se utilizará la Hoja 3.1.5. Analizando el papel del ocio en mi reinserción, y se contestará a las preguntas siguientes. Si algún menor, no ha tenido este tipo de salidas, se hará con una actividad de ocio protector realizada por el mismo previo al internamiento y que el monitor considere oportuna.

Hoja 3.2.2. Practicando el planning

Instrucciones: contesta a estas preguntas en relación con las actividades que realices de tu planning semanal

- **Actividades realizadas:**

- ¿Cómo te has sentido?

- Especifica las emociones y sensaciones que has sentido mientras realizabas el juego:

- ¿Qué opinión te merecen las emociones y sensaciones que has experimentado? ¿Son positivas?

3.6.4. Actividad 4: Una historia diferente

Con esta actividad, los participantes deberán elaborar su historia del ocio contando cómo habría afectado a sus vivencias personales si hubiesen llevado a cabo actividades de ocio protector en sus espacios de ocio y tiempo libre. Así, harán alusión a consecuencias positivas que habrían acontecido, así como reflexionar sobre las consecuencias negativas inherentes a actividades de ocio de riesgo que pudieran haber llevado a cabo, de las cuales podrían haberse tenido que responsabilizar, concienciándoles acerca de cómo habría transcurrido su desarrollo sin tener que afrontar tales repercusiones negativas.

Hoja 3.2.3. Una Historia Diferente

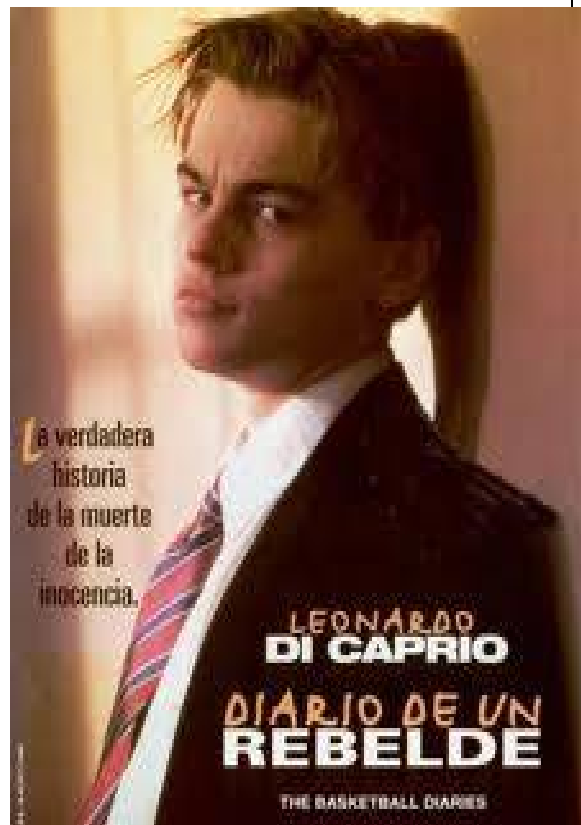
Instrucciones: *intenta imaginar qué consecuencias negativas podrías haber evitado si en lugar de un ocio de riesgo, hubieses llevado a cabo un ocio protector, así como qué cosas hubieran cambiado en tu historia de desarrollo vital.*

UNA HISTORIA DIFERENTE

3.6.5. Actividad 5: Actividad complementaria

Hoja 3.2.4. Película “DIARIO DE UN REBELDE”

Instrucciones: tras el visionado de la película se analizarán funcionalmente las conductas del protagonista.



SINOPSIS: Jim Carroll es un joven y talentoso adolescente que vive en Manhattan. Junto a sus amigos Mickey, Pedro, Neutron y Bobby, asisten a la escuela católica del barrio. Su gran pasión es el baloncesto, espera ser un gran jugador de básquet y entrar a la universidad por medio de una beca deportiva. Todos ellos comienzan a realizar actividades de riesgo en sus momentos de ocio, peleas, consumo de sustancias tóxicas, llevan a cabo hurtos, no mostrando ningún interés en arrepentirse de nada y sin ser conscientes del daño que hacen y de las consecuencias que les acarrearán su empleo del tiempo libre, que finalmente les lleva a formar parte de la marginalidad de la ciudad de New York.

Instrucciones: se realiza la siguiente tabla, dividiendo la película en tres partes. La primera parte hará alusión al comienzo de la película, cuando Jim a pesar de comenzar a realizar actividades de riesgo, las combina con otras protectoras, llevando un estilo de vida normalizado. La segunda parte corresponderá a las conductas antisociales, delictivas y adictivas que lleva a cabo el protagonista y su grupo de relación, lo que les llevaba a un estilo de vida marginal. Y por último, la tercera parte la rellenaremos con qué actividades creemos que realizará o le sugerimos al menor una vez de vuelta a casa, ya al final de la película, donde parece que ha asumido la responsabilidad de sus acciones, mostrándose así consciente con las consecuencias que se derivan de las mismas.

PRIMERA PARTE

	ACTIVIDAD	PENSAMIENTOS	EMOCIONES	CONSECUENCIAS
OCIO PROTECTOR				
	ACTIVIDAD	PENSAMIENTOS	EMOCIONES	CONSECUENCIAS

OCIO DE RIESGO				
SEGUNDA PARTE				
OCIO PROTECTOR	ACTIVIDAD	PENSAMIENTOS	EMOCIONES	CONSECUENCIAS
OCIO DE RIESGO	ACTIVIDAD	PENSAMIENTOS	EMOCIONES	CONSECUENCIAS
TERCERA PARTE				
OCIO PROTECTOR	ACTIVIDAD	PENSAMIENTOS	EMOCIONES	CONSECUENCIAS
OCIO DE RIESGO	ACTIVIDAD	PENSAMIENTOS	EMOCIONES	CONSECUENCIAS
i				
<p>¿Qué podría haber cambiado el protagonista con el fin de evitar las consecuencias negativas que le suceden?</p>				
<p>Por último, se pone en común y se realiza un debate. El monitor hace especial hincapié en la progresión con la que Jim va perdiendo el control de su vida, así como en la funcionalidad que le transfiere el protagonista a su diario para cambiar sus hábitos negativos y desadaptativos.</p>				

3.6.7. Síntesis de la sesión

Para finalizar la sesión, el terapeuta/monitor resaltaré los aspectos más relevantes que se han tratado, relacionándolos con los objetivos propuestos para así poder dar a los menores un sentido de integración de todos los contenidos abordados. El terapeuta/monitor debe dar una puntuación a cada menor de “0” a “10”, considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado, y b) asimilación e interiorización de los conceptos tratados.

4. SESIÓN 3: CONSOLIDACIÓN DEL HÁBITO DE OCIO PROTECTOR Y SUS EMOCIONES POSITIVAS

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Reafirmar las emociones positivas asociadas al nuevo hábito de ocio desarrolladas en la sesión anterior.
2. Dotar a los participantes de un repertorio de estrategias que potencien la ejecución del nuevo hábito de ocio.
3. Reforzar la ocurrencia del nuevo hábito mediante pensamientos alternativos asociados al mismo.

4.2. PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

La manera mediante la que se pretende alcanzar los objetivos, dirigidos a reafirmar el nuevo hábito de ocio que sustituirá progresivamente al ocio de riesgo, se resume en tres actividades. En la primera actividad, dirigida a la selección de aquellas actividades de ocio protector con las que más identificados se sienten y con las cuales tienen que relacionar emociones positivas trabajadas en la sesión anterior, se entregará a cada participante una hoja con 2 columnas, una en la que deben apuntar las actividades de ocio y otra en la que apuntarán emociones positivas vinculadas a estas.

En la segunda actividad se propone buscar frases o palabras positivas a situaciones aparentemente costosas, para lo que se proporciona a los participantes una ficha con viñetas que ilustran dichas situaciones y en las que deben plasmar la frase que según ellos más motive a continuar con la actividad. Posteriormente se hace una puesta en común de las frases aportadas por los participantes, para que cada uno de ellos escoja y apunte en un papel las que consideren que pueden serles de ayuda en un momento determinado, lo que implica una selección y valoración crítica.

La última actividad propuesta pretende que el participante interiorice el nuevo estilo de ocio para así ser capaz de transmitírselo al resto de sus compañeros y hacerles partícipes de ello. Para ello, el participante tendrá que identificar la actividad de ocio protector con la que se sienta más identificado y a través del análisis y la valoración crítica llegar a elaborar un

panel de autoinstrucciones y emociones positivas ligadas a ella, y así ser capaz de defenderla ante sus compañeros.

4.3. CONCEPTOS CLAVE

- ✓ **Interiorizar:** asimilar profundamente, especialmente los pensamientos y las creencias.
- ✓ **Autoinstrucciones:** instrucciones ó mandatos que la persona se da a sí misma para la consecución de un objetivo.
- ✓ **Actividades de ocio protector:** son aquel tipo de actividades de ocio que respetan las normas cívicas que dicta la sociedad.

4.4. ACTIVIDADES

Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria

Actividad 2. ¿Qué me gusta hacer y qué siento cuando lo hago?

Actividad 3. ¿Qué me diría yo?

Actividad 4. Convénceme

Actividad 5. Un poco de esfuerzo

Actividad 6. Actividad complementaria

4.5. MATERIAL

Pizarra y tizas

Película L.O.L. u otro contenido audiovisual de contenidos similares

Hoja 3.3.1. ¿Qué me gusta hacer y cómo me siento?

Hoja 3.3.2. ¿Qué me diría yo?

Hoja 3.3.3. Convénceme

Hoja 3.3.4. ¡No cuesta tanto!

Hoja 3.3.5. Película L.O.L.

4.6. DESARROLLO DE LA SESIÓN

4.6.1. Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria

Se revisan las emociones y sensaciones positivas unidas al ocio protector, enfatizando que no tiene porqué ser distintas al ocio de riesgo, aunque sí las consecuencias inherentes a una y otra.

4.6.2. Actividad 2: ¿Qué me gusta hacer y qué hago?

El monitor indica a los participantes que esta actividad sirve como recordatorio de la última sesión llevada a cabo en la que trabajaron actividades de ocio alternativo y emociones

positivas vinculadas a las mismas. Además, se intenta fomentar estrategias de asertividad que les permitan llevar a cabo actividades que potencien sus habilidades e intereses personales. Se reparte la Hoja 3.3.1. “*¿Qué me gusta hacer y cómo me siento?*” en la que figuran dos columnas, una en la que deben anotar las actividades para las cuales tienen habilidades como por ejemplo dibujar, pintar, correr, bailar, etc., y otra columna en la que deben anotar qué sienten realmente en el desempeño de estas actividades.

Hoja 3.3.1. ¿Qué me gusta hacer y cómo me siento?

Instrucciones: anota las actividades que podrías llevar a cabo en un ocio saludable y para las cuales tengas habilidad y por otro lado, cómo se sienten cuando desarrollan tus intereses personales.

QUÉ SE ME DA BIEN HACER Y ME GUSTA

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

CÓMO ME SIENTO REALMENTE

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Una vez las hayan completado, el monitor hará que cada participante lea dos ó tres actividades de las que hayan descrito como habilidades, haciendo especial hincapié en las emociones positivas ligadas a estas. Se van apuntando en la pizarra las actividades, las habilidades que fomentan y las emociones que conllevan, debatiendo que emociones y sentimientos conllevan las actividades que realmente realizan los participantes potencian habilidades constructivas para su desarrollo personal y competencia social.

4.6.3. Actividad 3: ¿Qué me diría yo?

Esta actividad consiste en buscar de una forma diferente frases positivas que nos ayuden o nos motiven a seguir haciendo una actividad en el momento en que ésta nos resulte costosa, nos dé pereza o no nos apetezca. El monitor explica que las nuevas propuestas de

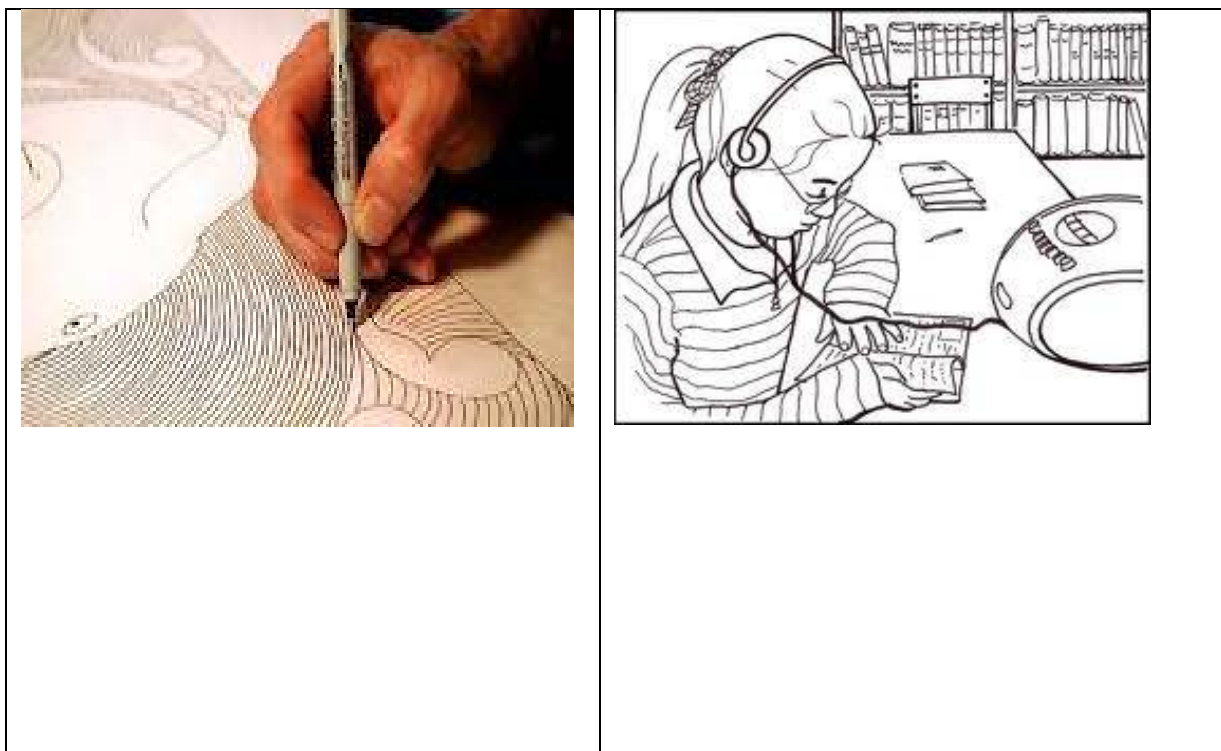
ocio no siempre les resultaran fáciles de llevar a cabo, por lo que es muy importante que piensen en frases que realmente les motiven ya que serán las que usen en esos momentos en los que les cueste un esfuerzo hacer las actividades alternativas.

El monitor repartirá la Hoja 3.3.2. “¿Qué me diría yo?”, indicándoles que deben rellenar los bocadillos de cada una de las viñetas que se recogen con frases que les motivarían a ellos mismos si estuvieran en esa situación ó en otra parecida.

Hoja 3.3.2. ¿Qué me diría yo?

Instrucciones: rellena los bocadillos de cada una de las viñetas que se recogen con frases que te motiven a ti mismo si estuvieses en esa situación ó en otra parecida.



Las actividades que recogen las viñetas son actividades de ocio protector como leer, escuchar música, bailar, hacer senderismo, tocar un instrumento y hacer algún deporte. Una vez que hayan terminado, el monitor preguntará sobre las frases que han puesto y las anotan en la pizarra para hacer una puesta en común. Se pedirá a los participantes que apunten en una hoja las frases que más les han gustado y que creen que podrán aplicar a sí mismos en los momentos en que les cueste realizar una actividad.

En el caso de que el monitor observe que las aportaciones de los participantes no son muy correctas o son algo escasas, podrá poner algunos ejemplos del tipo:

- - *“Adelante, lo estoy haciendo muy bien”*
- *“El deporte es muy sano, me gusta verme bien”*
- *“Si corro a menudo me sentiré genial”*
- *“Ayudar a los demás me hace sentirme útil”*
- *“Estoy cansado, pero me gusta lo que hago”*

4.6.4. Actividad 4: Convénceme

Con esta actividad se pretende que los participantes extraigan y tomen conciencia de sus propios argumentos para realizar actividades de ocio protector. Se comienza la actividad recordando las actividades de ocio protector con las que se trabajaron en las sesiones

anteriores, identificando aquellas que resulten más atractivas al grupo. Se van apuntando en la pizarra.

Se proporciona a cada participante la Hoja 3.3.3. “*Convénceme*” en la que deberán escribir la actividad de ocio protector con la que más identificados se sientan y elaborar en torno a ella un listado de emociones positivas y autoinstrucciones con las que defenderla ante sus compañeros. Seguidamente, se divide al grupo en subgrupos (en función del número total de participantes. Si no resulta adecuado, se hará de forma individual). El monitor les explica lo siguiente: “*cada uno de vosotros debéis convencer al resto de vuestros compañeros de que realicen la actividad que habéis elegido, reportando los beneficios que les pueden reportar*”.

Hoja 3.3.3. Convénceme

Instrucciones: escribe la actividad que más te ha gustado y defiéndela ante tus compañeros

Escribe aquí la actividad que has seleccionado

Escribe aquí las emociones e ideas positivas y autoinstrucciones que asocias a ella

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Una vez que la hayan rellenado tanto si se realiza de manera grupal como individual, se llevará a cabo un role-playing para que cada uno pueda defender la actividad elegida.

4.6.5. Actividad 5: Un poco de esfuerzo

Debido a que el cumplimiento de la medida judicial ofrece a los participantes experiencias de ocio protector, se intentará afianzar estos hábitos saludables en los participantes. El monitor les entregará la Hoja 3.3.4. “*¡No cuesta tanto!*”, en la que deben hacer un registro durante la semana de las actividades de ocio protector realizadas durante la misma. En este registro reflejarán si han terminado la actividad, qué autoinstrucciones han empleado para terminarla, así como el esfuerzo que les ha supuesto la realización de la actividad y las emociones positivas ó satisfacción que dicha actividad ha producido en ellos.

De ese modo, el participante podrá hacer un balance sobre la realización del nuevo ocio propuesto.

Hoja 3.3.4. ¡No cuesta tanto!

Instrucciones: continúa registrando las actividades de ocio protector durante esta semana. Indica la actividad que has realizado, si la has terminado, qué palabras te dijiste para terminarla, el esfuerzo que te supuso la actividad y, con una escala de 0 a 10 (donde 0 es nada satisfecho y 10 significa muy satisfecho), el grado de satisfacción obtenido con su realización

	L	M	X	J	V	S	D
Actividad protectora realizada							
¿Actividad terminada?	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No
Frases o palabras usadas							
Esfuerzo que supone la actividad							
Nivel de satisfacción (0 – 10)							

4.6.6. Actividad 6: Actividad complementaria

Hoja 3.3.5.Película “LOL”

Instrucciones: Tras el visionado de la película, se rellena el recuadro que aparece a continuación, analizando las conductas de ocio de riesgo y protector que llevan a cabo, así como las emociones, pensamientos y consecuencias asociadas a las mismas. Y por último, qué autoinstrucciones aportarías a los protagonistas para que realizasen actividades de ocio protector y cesasen las de ocio de riesgo.



SINOPSIS: LOL son las siglas de Laughing out loud' (muerto de risa) en la jerga de Internet. Y así llaman a Lola sus amigos. Sin embargo, el día de la vuelta al instituto después del verano, Lola (Miley Cyrus) no tiene ningunas ganas de reírse: Jeremy (Jean-Luc Bilodeau), su novio, la provoca diciéndole que la ha engañado durante las vacaciones. Y su pandilla tiene la virtud de complicarlo todo, como su madre, Anne (Demi Moore), con la que cada vez le resulta más difícil hablar de sus cosas, y no sólo porque no sabe lo que significa LOL... Todo se complica, Lola cree estar enamorada de su mejor amigo, su madre se ve en secreto con su ex marido mientras coquetea con un policía y el diario de Lola parece haber sido descubierto... y leído.

EL OCIO DE LOS PROTAGONISTAS

OCIO DE RIESGO

ACTIVIDAD	SITUACIÓN	PENSAMIENTOS	EMOCIONES	CONSECUENCIAS
				<ul style="list-style-type: none"> Para el/ella: Para los demás:

				<ul style="list-style-type: none"> • Para el/ella: • Para los demás:
				<ul style="list-style-type: none"> • Para el/ella: • Para los demás:
				<ul style="list-style-type: none"> • Para el/ella: • Para los demás:
				<ul style="list-style-type: none"> • Para el/ella: • Para los demás:

¿Qué autoinstrucciones darías a los protagonistas para que cesaran estas actividades?

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

<i>OCIO PROTECTOR</i>				
ACTIVIDAD	SITUACIÓN	PENSAMIENTOS	EMOCIONES	CONSECUENCIAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Para el/ella: • Para los demás:
				<ul style="list-style-type: none"> • Para el/ella: • Para los demás:
				<ul style="list-style-type: none"> • Para el/ella: • Para los demás:
				<ul style="list-style-type: none"> • Para el/ella: • Para los demás:
				<ul style="list-style-type: none"> • Para el/ella: • Para los demás:

¿Qué autoinstrucciones darías a los protagonistas para que realicen estas actividades de ocio protector?

- _____
- _____
- _____
- _____

○ _____

Una vez que hayan rellanado la tabla, los participantes expondrán sus opiniones, y se abrirá un debate que dirigirá el monitor, tratando de identificar qué suponen un ocio protector para los protagonistas, así como las consecuencias de las mismas.

4.6.6. Síntesis de la sesión

Para finalizar la sesión, el terapeuta/monitor resaltaré los aspectos más relevantes que se han tratado, relacionándolos con los objetivos propuestos para así poder dar a los menores un sentido de integración de todos los contenidos abordados. El terapeuta/monitor debe dar una puntuación a cada menor de “0” a “10”, considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado, y b) asimilación e interiorización de los conceptos tratados.

5. SESIÓN 4: GENERALIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE RECAÍDAS

5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Consolidar los hábitos de ocio saludables adquiridos durante el programa.
2. Aprender cómo aplicar dichos hábitos a diversas situaciones de la vida cotidiana.
3. Aprender estrategias de afrontamiento ante el deseo o pensamientos de una nueva recaída.
4. Aprender estrategias de superación si se ha producido dicha recaída.

5.2. PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

La consecución de los objetivos específicos del módulo se llevará a cabo en una sesión, de una hora de duración aproximada. La primera parte de la sesión se dedicará a la generalización de los hábitos de ocio saludables adquiridos a los diferentes contextos de su vida cotidiana (con su familia, amigos, compañeros de clase, de trabajo, etc.). La segunda parte de la sesión tendrá como contenido principal enseñarles a afrontar el deseo de recaer en actividades de un ocio de riesgo, a manejar sus pensamientos ante esta situación y de producirse dicha recaída, cómo debe afrontarla.

Por tanto, el objetivo principal de esta sesión es la prevención de recaídas. Por lo que el monitor explicará: “un aspecto importante para prevenir las recaídas es su verbalización, así como de la actitud que mostremos ante esa recaída, que va a depender entre otras circunstancias, del contexto, de la actitud de nuestro entorno ante esa recaída. La intervención que desarrolla el programa para prevenir la recaída es la siguiente:

- Asegurarnos de que los participantes identifican de las situaciones de alto riesgo: Enseñarles a identificar las situaciones de alto riesgo que aumentan la probabilidad de recaída y que son variables de una persona a otra.
- Respuestas de afrontamiento adecuadas a situaciones problemáticas: Conviene enseñar a los participantes habilidades necesarias para hacer frente a las situaciones de alto riesgo. Las posibles áreas de actuación incluyen autoafirmación, control de estrés, relajación, habilidades de comunicación y habilidades de solución de problemas.
- Cambio de expectativas sobre las consecuencias de llevar a cabo conductas de riesgo,

antisociales o delictivas: Informar sistemáticamente a los participantes sobre los efectos a medio y largo plazo de estas conductas, así como actuar sobre algunas creencias erróneas.

Si se ha producido una recaída, se trata de enseñar a que considere el fallo como un error aislado en el proceso de aprendizaje y contrarrestar la situación de malestar emocional generada por el desánimo.

- Exposición controlada a situaciones de riesgo. Aunque en este contexto no siempre es posible, debido a la situación de internamiento, aunque se intenta que los menores/jóvenes exterioricen los contenidos trabajados durante el programa al medio abierto. La exposición a los indicios de riesgo debe hacerse inicialmente en compañía de alguna persona de confianza o de un modelo prosocial.

Es fundamental proporcionar a los participantes nuevas metas y ofrecerle actividades alternativas a las que dedicar el tiempo que invertían en actividades de riesgo. Se trata de reestablecer su desarrollo personal mediante la dedicación de un tiempo diario a la práctica de actividades gratificantes y de crear unos nuevos hábitos sustitutivos de los anteriores.

5.3. CONCEPTOS CLAVE

- ✓ **Habilidades de afrontamiento:** estrategias cognitivas para poner en práctica en las situaciones de riesgo.
- ✓ **Ocio saludable:** alternativas al ocio de riesgo, que consisten en actividades saludables que se pongan en marcha ante el deseo de una posible recaída o en su tiempo libre (en los distintos contextos de su vida cotidiana).
- ✓ **Generalización:** proceso mediante el cual un determinado hábito o comportamiento se expande o extiende a todas las áreas de vida de una persona.
- ✓ **Recaída:** proceso mediante el cual se retrocede en el proceso de cambio o se vuelve a practicar un hábito o comportamiento que había sido sustituido por otro más adaptativo.

5.4. ACTIVIDADES

Actividad 1. Revisión de conceptos

Actividad 2. Generalización del ocio saludable

Actividad 3. Ámbitos y personas de mi vida

Actividad 4. Calendario

Actividad 5. Lo que no me ayuda

Actividad 6. ¿Y tú qué harías?

Actividad 7. Pirámide de actividades protectoras

5.5. MATERIAL

Pizarra y tizas

Hoja 3.4.1. Generalizando mi ocio saludable

Hoja 3.4.2. Generalizando mi ocio protector a diversos ámbitos y personas de mi vida

Hoja 3.4.3. Mi calendario anual de ocio saludable

Hoja 3.4.4. Lo que no me ayuda en mi ocio saludable

Hoja 3.4.5. ¿Y tú qué harías?

Hoja 3.4.6. Pirámide de actividades protectoras

5.6. DESARROLLO DE LA SESIÓN

5.6.1. Actividad 1: Revisión de conceptos

Se revisa la funcionalidad de las autoinstrucciones a la hora de motivarnos en nuestras actividades de ocio protector, así como las emociones y sensaciones experimentadas.

5.6.2. Actividad 2: Generalización del ocio saludable

Con esta actividad se pretende que los participantes comprendan que los nuevos hábitos de conducta adquiridos deben generalizarse a distintos ámbitos de su vida y con las diversas personas implicadas en los mismos. Para ello, el monitor explica lo siguiente: *“En la sesión de hoy lo que vamos a hacer, en primer lugar, es ver cómo podemos hacer para consolidar de forma definitiva las nuevas actividades de ocio que estamos aprendiendo a todos los ámbitos de nuestra vida. Esto es lo que se conoce como generalizar. Entonces, ¿qué pensáis que tenemos que hacer para generalizar vuestros nuevos hábitos de ocio saludable?”*.

Se deja un tiempo para que los participantes vayan contestando, comentándose sus respuestas y corrigiéndolas en sentido adecuado. El monitor sigue explicando: *“Bien, pues lo que hemos de tener en cuenta para generalizar los nuevos hábitos son los distintos ámbitos que existen en nuestra vida y las distintas personas con las que vamos a poder desarrollarlos. Pero, antes de organizar las actividades de ocio adquiridas en nuestra vida, tenemos que valorar la adecuación de las mismas. Es decir, tenemos que ver los costes y los beneficios, las ventajas y las desventajas que tienen pues, de esa manera, puede que alguna de las*

actividades propuestas la podamos sustituir por otra más adecuada. Vamos a poner esta idea en práctica”.

El monitor les entrega la **Hoja 3.4.1. “Generalizando mi ocio saludable”** y le pide que la rellenen con las actividades de ocio protector que han incluido en su planning semanal, así como con alguna otra que se les ocurra. Deberán valorar los costes y beneficios de cada una de ellas.

Hoja 3.4.1. Generalizando mi ocio saludable

Instrucciones: describe todas las actividades de ocio saludable que has realizado en tu planning semanal y todas aquellas que se te ocurran. Luego, analiza los costes y beneficios de cada una de ellas

ACTIVIDAD

COSTES

BENEFICIOS

Una vez que hayan terminado, se analizan los casos uno a uno y se debate al respecto. Finalmente, se debe enfatizar la idea de que un nuevo hábito adquirido se mantendrá por las consecuencias que conlleve.

5.6.3. Actividad 3: Ámbitos y personas de mi vida

Continuando con el argumento explicado en la actividad previa, en esta actividad los participantes realizarán un estudio pormenorizado de su situación personal, con el objetivo de obtener una mayor generalización de los nuevos hábitos de ocio protector. El monitor explica: *“ahora vamos a ver esos ámbitos de vuestras vidas y con qué personas podemos contar a la hora de poder seguir practicando estas actividades de ocio saludable”.*

El monitor les entrega la Hoja 3.4.2. *“Generalizando mi ocio protector a diversos ámbitos y personas de mi vida”* y les indica que deben indicar las actividades de ocio protector que pueden realizar en cada área de su vida, así como las personas concretas de cada ámbito con las que consideran que podrían llevar a cabo las actividades de ocio protector que se proponen en la columna de al lado. Finalmente, podrán comentar las dificultades o inconvenientes que ellos consideran que pueden tener en cada caso concreto (ámbito o persona concreta).

Hoja 3.4.2. Generalizando mi ocio protector a diversos ámbitos y personas de mi vida

Instrucciones: indica las actividades de ocio protector que puedes realizar en cada área de tu vida y especifica con qué personas puedes realizar cada una de esas actividades

ÁREA	ACTIVIDAD	PERSONAS
Familia		
Amigos		
Compañeros de estudio		
Compañeros de trabajo		
Vecinos del barrio		
Pareja		
Otros:		

Una vez se hayan completado ambos cuadros, se exponen uno a uno y se va comentando sobre la viabilidad de los mismos.

5.6.4. Actividad 4: Calendario

Para completar la generalización del ocio protector, se propone a los participantes que, en la Hoja 3.4.3. “*Mi calendario anual de ocio saludable*”, rellenen cada uno de los meses del año con fechas importantes para ellos, como cumpleaños, aniversarios, vacaciones, etc., haciendo un especial hincapié en las fechas donde haya probabilidad de cometer conductas de riesgo durante el ocio, proponiendo alternativas de prevención. Se les comenta que este aspecto también les ayudará a organizar mejor sus actividades de ocio saludable, pues realizarán una planificación del tiempo más adecuada. Junto a cada fecha importante, deberán proponer las actividades saludables que pueden realizar.

Hoja 3.4.3. Mi calendario anual de ocio saludable

Instrucciones: indica fechas que son importantes para ti en cada uno de los meses del año. Luego piensa y describe actividades de ocio protector que puedes realizar en esas fechas, señalando además en qué fechas habría probabilidad o mayor tentación de cometer conductas de riesgo durante el ocio y propón alternativas de prevención.

ENERO	FEBRERO	MARZO
ABRIL	MAYO	JUNIO
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

FECHAS CON PROBABILIDAD DE RIESGO

FECHAS DE RIESGO	ALTERNATIVAS A LAS CONDUCTAS DE RIESGO EN EL OCIO

Una vez hayan terminado, se exponen los calendarios y se va reforzando el inicio de la generalización de su ocio protector a un espacio temporal mayor (un año). Además, se corregirá la viabilidad de las actividades propuestas y el monitor instará a que se pongan de manifiesto las alternativas aportadas por los participantes.

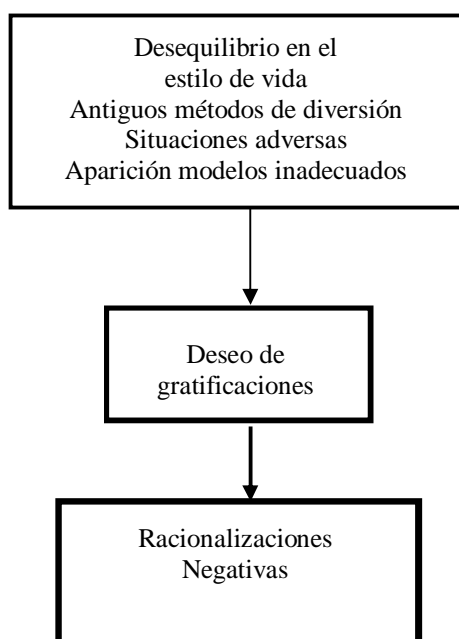
5.6.5. Actividad 5: Lo que no me ayuda

El monitor explica que, en las dos actividades que quedan, lo que van a hacer es analizar lo que pueden hacer para prevenir futuras recaídas, episodios en los que puedan volver a realizar actividades de riesgo. El monitor les entrega la Hoja 3.4.4. “*Lo que no me ayuda en mi ocio saludable*” y les explica el proceso de recaída que viene reflejado al inicio de la hoja. A continuación, el monitor pide a los participantes que rellenen los espacios que aparecen a continuación con los pensamientos, actividades u otros aspectos que les pueden hacer volver a un ocio de riesgo. Algunos ejemplos serían:

- a) Pensamientos: pueden aparecer ejemplos como “es más divertido”, “mola más”, “es lo que siempre he hecho”.
- b) Actividades distractoras: actividades que favorezcan la vuelta a un ocio de riesgo. Por ejemplo, jugar a un determinado juego y el que pierda se toma un chupito.
- c) Lugares, personas: parque en el que solía robar o beber, modelos no positivos.

Hoja 3.4.4. Lo que no me ayuda en mi ocio saludable

Instrucciones: escucha atentamente la explicación del monitor. Luego, piensa y describe ejemplos de los elementos que aparecen a continuación y que podrían hacerte volver a un ocio de riesgo





- Pensamientos:
- Actividades distractoras:
- Lugares, personas:
- Otros:

Una vez que lo hayan completado, se debate al respecto y se pide que cada uno de los participantes rellene el proceso de recaída con un ejemplo concreto personal (indicando los pensamientos, actividades, etc. que les llevarían a volver a recaer). Se exponen todos los ejemplos.

5.6.6. Actividad 6: ¿Y tú qué harías?

Con esta actividad se pretende que los participantes pongan en práctica estrategias que hayan aprendido y que puedan usar para la prevención de recaídas. Para ello, el monitor les propone el siguiente ejemplo: *“estás en tu casa, tirado en el sofá y te llaman los colegas para bajar al parque a tomar unas cervezas. ¿Qué harías?”*.

Se deja un tiempo para que los participantes vayan contestando, apuntándose en la pizarra las ideas adecuadas y preguntándose sobre verbalizaciones y conductas para prevenir la recaída.

Una vez que se haya expuesto el caso, cada uno de los participantes debe plantear un caso en la Hoja 3.4.5. *“¿Y tú qué harías?”* (puede servir el caso expuesto en la actividad previa), argumentado a continuación lo que harían para prevenir la recaída (verbalizaciones, actividades, conductas, etc.). Finalmente, se podría desarrollar una escenificación de algunas situaciones concretas para que se pongan en marcha algunas de las estrategias propuestas por los participantes.

Hoja 3.4.5. ¿Y tú qué harías?

Instrucciones: plantea una situaciones en las que te encontrarías en riesgo de realizar actividades no saludables de ocio y describe qué podrías hacer para prevenir una recaída

Situación

¿Y tú qué harías?

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Situación

¿Y tú qué harías?

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Situación

¿Y tú qué harías?

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Situación

¿Y tú qué harías?

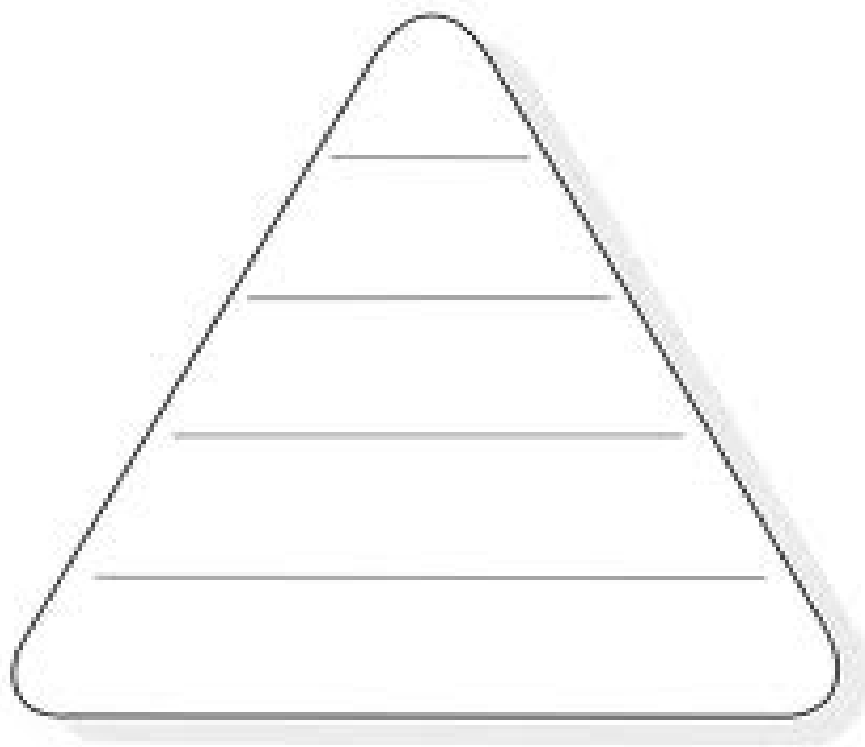
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

5.6.7. Pirámide de actividades

Con esta actividad y, para finalizar el programa, se pretende que los participantes pongan en práctica estrategias para la prevención de recaídas, concienciando de la frecuencia con la que sería beneficioso realizar actividades que les ayuden a la prevención. Para ello, han de rellenar una pirámide con la que concretarán que actividades de ocio realizarán frecuentemente, cuáles de 4 a 5 veces por semana, 2 ó 3 veces a la semana, al menos una hora al día y menos de una hora al día, completando en este orden las escalas de la pirámide. Se les hace entrega de la Hoja 3.4.6. Pirámide de Conductas Protectoras.

Hoja 3.4.6. Pirámide de actividades Protectoras.

Instrucciones: rellena la pirámide con las actividades que sería aconsejable que realizases en el medio abierto para consolidar lo aprendido durante el programa y así prevenir las recaídas hacia un ocio de riesgo. Así, en la última franja sitúa actividades que realizar de 4 a 5 veces, en el siguiente escalón las que realizarías de 2 a 3 veces por semana, en el siguiente las que realizarías un día a la semana, de una a dos horas al día y en el superior la que realizarías por lo una hora al día.



5.6.7. Síntesis de la sesión

Para finalizar la sesión, el terapeuta/monitor resaltaré los aspectos más relevantes que se han tratado, relacionándolos con los objetivos propuestos para así poder dar a los menores un sentido de integración de todos los contenidos abordados. El terapeuta/monitor debe dar una puntuación a cada menor de “0” a “10”, considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado, y b) asimilación e interiorización de los conceptos tratados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (DEL PROGRAMA EDUCATIVO Y TERAPÉUTICO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA MENORES INFRACTORES)

- Acero, A., Moreno, G., Moreno, J. y Sánchez, L. (2002). *La prevención de las drogodependencias en el tiempo de ocio. Manual de formación*. Madrid: Asociación Deporte y Vida.
- Ballesteros, J. C., De Asís, J. F., Rodríguez, M. A. y Megías, E. (2009). *Ocio (y riesgos) de los jóvenes madrileños*. Madrid: Fundación de Ayuda contra la Drogadicción/ Obra Social Caja Madrid..
- Battin, S. R., Hill, K. G., Abott, R. D., Catalano, R. F. y Hawkins, D. J. (1998). The contribution of gang membership to delinquency beyond delinquent friends, *Criminology*, 36 (1), 93-115.
- Bjerregaard, B. y Lizotte, A. J. (1995). Gun Owner Ship and gang membership. *Journal of Criminal law and Criminology*, 86, 37-58.
- Bjerregaard, B. y Smith, C. (1993). Gender differences in gang participation, Delinquency and substance use. *Journal of Quantitative Criminology*, 9, 329-355.
- Cairns, R. B., Cadwallader, T. W., Estell, D. y Neckerman, H. J. (1997). Groups to gangs: Developmental and criminological perspectives and relevance for prevention. En D. Stoff, J. Breiling y J. Maser (Eds.), *Handbook of antisocial behavior* (pp. 194-205). Nueva York: Wiley.
- Calafat, A., Fernández, C., Juan, M. y Becoña, E. (2007). Vida recreativa nocturna de los jóvenes españoles como factor de riesgo frente a otros más tradicionales. *Adicciones*, 19 (2), 125-132.
- Catalano, R. F., y Hawkins, J. D. (1996). The social development model: A theory of antisocial behavior. En J. D. Hawkins (Ed.), *Delinquency and crime: Current theories* (pp. 149-197). Nueva York: Cambridge University Press.
- Cohen, A. K., Williamns, K., Bekelman, A. M. y Crosse, S. (1994). Evaluation of the National Youth Gang Drug Prevention Program. En M. W. Klein, C. Max-son y J. Miller (Eds.), *The Modern gang reader* (pp. 266-282). Los Angeles: Roxbury.
- Comas, D. (1996). No es oro todo lo que reluce: ¿qué hace la juventud el fin de semana? *Revista de Estudios de Juventud*, 37, 11-19.
- Curry, G. D. y Spergel, I. A. (1992). Gang Involvement and delinquency among Hispanic and African-American adolescent males. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 29, 273-291.
- Díaz-Aguado, M.J. (1996). *Programas de educación para la tolerancia y prevención de la violencia en los jóvenes*. Madrid: Instituto de la Juventud. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

- Díaz-Aguado, M.J. (2003). “*Prevenir en Madrid*” Programa de Prevención de Drogodependencias en Contextos Educativos del Ayuntamiento de Madrid. Madrid: Instituto de Adicciones de Madrid Salud.
- Elkind, D., (1967). Egocentrismo en la adolescencia. *Child Development*, 38, 1025-34.
- Elliott, D.S., Huizinga, D. y Ageton, S.S. (1985). *Explaining delinquency and drug use*. Beverly Hills, California: Sage.
- Esbensen, F. y Huizinga, D.(1993). Gang, drugs, and delinquency in a survey of urban youth. *Criminology*, 31, 565-589.
- Fuchs, M., Lamnek, S., Luedtke, J. (1996). *Schule und Gewalt. Realität und Wahrnehmung eines sozialen Problems*. Opladen: Leske+Budrich.
- Gardner, H. (1993). *Mentes creativas*. Barcelona: Paidós.
- Gil, E. (1996). La complicidad festiva. Identidades grupales y cultos de fin de semana. *Revista de Juventud*, 37, 27-34.
- Giorgi, M. (2012). Actividades estructuradas/desestructuradas y delincuencia juvenil. Análisis de datos del ISRD-2. *Justicia Juris*, 8 (2), 11-26.
- Gómez-Fraguela, J. A., Fernández, N., Romero, E. y Luengo, A. (2008). El botellón y el consumo de alcohol y otras drogas en la juventud. *Psicothema*, 20 (2), 211-217.
- Graña, J. L. Garrido, V., y González, L. (2007). Evaluación de las características delictivas de menores infractores de la Comunidad de Madrid y su influencia en la planificación del tratamiento. *Psicopatología Clínica, Legal y Forense*, 7, 7-18.
- Graña, J. L., Garrido, V., y González L. (2008). *Reincidencia delictiva en menores infractores de la Comunidad de Madrid: Evaluación, Características delictivas y Modelos de Predicción*. Madrid: Agencia para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor.
- Graña, J. L. y Rodríguez, M. J. (2010). *Programa Central de Tratamiento Educativo y Terapéutico para menores infractores*. Madrid: Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor.
- Hidalgo, M.I. y Júdez, J. (2007). Adolescencia de alto riesgo. Consumo de drogas y conductas delictivas. *Pediatr Integral*, 9 (10), 895-910.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Laespada, M.T. y Salazar, L. (1999). Las actividades no formalizadas de los jóvenes. En J. Elzo, F. A. Orizo, J. González-Anleo, P. González-Blasco, M.T. Laespada y L. Salazar (Eds.), *Jóvenes españoles '99* (pp. 355 – 400). Madrid: Fundación Santamaría.

- LeBlanc, M. y Lanctot, N. (1999). Social and Psychological characteristics of gang members according to the gang structure and its subcultural and ethnic makeup. *Journal of Gang Research*, 5 (3), 15–28.
- López, F., Carpintero, E., Del Campo, A., Lázaro, S. y Soriano, S. (2011). *Intervención Educativa y Terapéutica*. Ediciones Pirámide.
- Luengo, M. A., Romero, E., Gómez-Fraguela, J., Guerra, A. y Lence, M. (2002). *La prevención del consumo de drogas y la conducta antisocial en la escuela: análisis y evaluación de un programa*. Madrid: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
- Maguin, E., Hawkins, J. D., Catalano, R. F., Hill, K., Abbott, R. y Herrenkohl, T. (1995). *Risk factors measured at three ages for violence at age 17-18*. Paper presented at the American Society of criminology, Boston.
- Mahoney, J.L. (2000). School extracurricular activity participation as a moderator in the development of antisocial patterns. *Child Development*, 71, 502-516.
- Mahoney, J.L. y Stattin, H. (2000). Leisure activities and adolescent antisocial behavior: The role of structure and social context. *Journal of Adolescence*, 23, 113 -127.
- Martín, M. y Velarde, O. (2001). *Informe Juventud en España 2000*. Madrid: INJUVE.
- Martínez, J.L., Fuentes, F., Ramos, M. y Hernández, A. (2003). Consumo de Drogas en la adolescencia: importancia del afecto y la supervisión parental. *Psicothema*, 15 (2). 161-166.
- Martínez, R., Fernández-Alba, A., y Salgado, A. (2004). *Patrones de ocio en los adolescentes de la Comunidad de Madrid. Conductas de riesgo: de Tomb Raider al botellón*. Madrid: Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid.
- Otero, J. M., Romero, E. y Luengo, M. A. (1994). Identificación de factores de riesgo de la conducta delictiva: Hacia un modelo integrador. *Análisis y Modificación de Conducta*, 20, 675-709.
- Patterson, G. y Yoerger, K. (2002). A developmental model for early- and late-onset delinquency. En J. Reid, G. Patterson y J. Snyder (Eds.), *Antisocial behavior in children and adolescents: A developmental analysis and model for intervention*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Redondo, S. (2008b). Individuos, sociedades y oportunidades en la explicación y prevención del delito: Modelo del Triple Riesgo Delictivo (TRD). *Revista Española de Investigación Criminológica*, 7 (6). (Disponible en: www.criminologia.net).
- Reiss, A. J. (1988). Co-offending and criminal careers. En M. Tonry y N. Morris (Eds.), *Crime and justice: A review of Research* (pp. 117-170). Chicago: University of Chicago Press.

- Schinke, S., Botvin, G. y Orlando. M. (1991). *Substance abuse in children and adolescents. Evaluation and intervention*. Newbury, California: Sae.
- Sütherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology*. Philadelphia: Lippincott.
- Thornberry, T. P. (1999). Membership i Youth Gangs and Involvement in serious and Violent Offending. En R. Loeber y D. P. Farrington (Eds.). *Serious and Violent Juvenile Offenders* Thousand Oaks, CA: Sage.
- Thornberry, T. P. (2004). *Delincuentes juveniles: Características y consecuencias*. VIII reunión internacional sobre biología y sociología de la violencia. Valencia: Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia.
- Thornberry, T. P., Krohn, M. D., Lizotte, A. J. y Chard-Wierschem, D. (1993). The role of juvenile gangs in facilitating delinquent behavior. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 30, 55-87.
- Tillmann, K. J., Holler-Nowitzky, B., Holtappels, G., Meier, U. y Popp, U. (1999). *Schülergewalt als schulproblem*. Weinheim, Juventa.
- Torres, M. A. (2000). *Salir de marcha y consumo de drogas*. Ministerio del Interior, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.